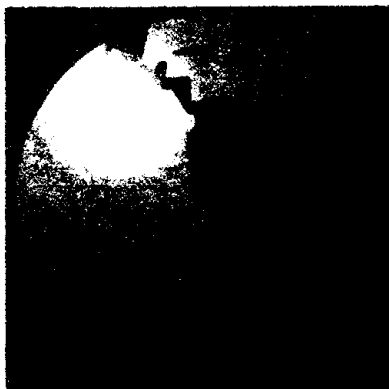


FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES



**Tesis para optar el grado de Doctor en Investigación
en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas**

III Promoción 2000 – 2003

**“Círculos viciosos de la democracia como antesala de la dictadura,
Constitución, dinámica y quiebre del régimen democrático en el Perú:
1895 – 1919”**

JUSTO JESUS TOVAR MENDOZA

Directora de Tesis: Dra. Ligia Tavera Fenollosa

FLACSO

SEDE ACADÉMICA DE MÉXICO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México

**Tesis para optar el grado de Doctor en Investigación
en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política***

III Promoción 2000 – 2003

“Círculos viciosos de la democracia como antesalas de la dictadura.
Constitución, dinámica y quiebre del régimen democrático en el Perú:
1895 – 1919”

JUSTO JESUS TOVAR MENDOZA

Directora de Tesis: Dra. Ligia Tavera Fenollosa

Sinodales:

Andreas Schedler (Coordinador del Seminario de Tesis)

Henio Millán

Francisco Valdés

Luis Salazar

Ciudad de México

Noviembre del 2003

* Esta tesis fue realizada gracias al apoyo de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa de Movilidad Universitaria de III Ciclo para iberoamericanos (MU-TIS)

Resumen

El tema de la presente investigación se enfoca en la constitución, dinámica y especialmente ruptura del régimen político peruano entre 1895 a 1919. Este estudio se enfoca en los siguientes aspectos: los antecedentes de la ruptura como son la transición e instalación del régimen democrático, el rol que jugaron los actores democráticos en dicho proceso y la dinámica misma del proceso político de la crisis y la quiebra democrática.

Consideramos que el quiebre democrático en el Perú a fines de la segunda década del siglo XX, estuvo más vinculado con los propios actores democráticos que con los actores “antisistémicos”, a quienes se les suele atribuir un rol protagónico en los golpes de Estado en la historia reciente del Perú (Manuel Odría en 1948, Juan Velasco en 1968, Alberto Fujimori en 1992), y en otros países de América Latina (Pinochet en Chile, Videla en Argentina). En este sentido, las razones que contribuyeron a la ruptura de esta temprana democracia latinoamericana se encuentran en un determinado tipo de estrategias que implementaron los actores de este régimen democrático, las cuales consisten básicamente en interacciones que salen fuera de la reglas de juego político, y por tal razón las consideramos como “trampas”.

Estas estrategias se retroalimentan mutuamente y se constituyen en “círculos viciosos” del proceso político, es decir se incrementan progresivamente y afectan el juego político a través de resultados de “suma cero” que impactan negativamente a los intereses de los actores, en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en la pérdida de la legitimidad del régimen político. Este proceso vicioso termina finalmente incentivando a que los actores se orienten a una mayor gravedad de las trampas, como es la eliminación (física o política) del adversario, por lo que la consecución exitosa de la misma implica el término del juego político, es decir la culminación del régimen democrático.

INDICE GENERAL

INTRODUCCION	1
Capítulo 1	
LA REPUBLICA ARISTOCRATICA: UNA RECONCEPTUALIZACION DEL REGIMEN POLITICO ENTRE 1895 A 1919.	9
1.1. La dimensión política de la República Aristocrática.....	9
1.2. ¿Fue la República Aristocrática una democracia?	23
1.3. Círculos viciosos de la democracia: un esquema analítico.....	48
Capítulo 2	
TRANSICIÓN E INSTALACION DEL REGIMEN DEMOCRATICO: LA CONSTRUCCION DE UN MODELO CONSENSUAL	63
2.1. El accidentado tránsito del militarismo a un régimen civil durante el siglo XIX.....	63
2.2. Gobiernos militares de Morales Bermúdez, Justiniano Borgoño y Andrés Cáceres (1890 - 1895): una transición no – cooperativa desde un autoritarismo liberal a una democracia.....	69
2.3. La Junta de Gobierno de la transición y el primer gobierno del régimen democrático, Nicolás de Piérola (1895-1899): Equilibrios entre el consenso y el conflicto.....	96
Capítulo 3	
LARVAMIENTO Y CRISIS DEL REGIMEN DEMOCRATICO: COEXISTENCIA DE LAS TRAMPAS DEL JUEGO POLITICO Y UNA INSTITUCIONALIDAD PARTIDARIA (1899 – 1912)	152
3.1. Una democracia inconclusa en la primera década del siglo XX.....	152
3.2. Eduardo López de Romaña (1899 – 1903): un político de transacción.....	155
3.3. Manuel Candamo y Serapio Calderón (1903 – 1904): una expectativa trunca...	181
3.4. José Pardo y Barreda (1904 – 1908): la tranquilidad que precede a la tormenta.....	191
3.5. Augusto Leguía (1908 – 1912): al tñlo de la navaja.....	199
Capitulo 4	
CRISIS Y RUPTURA DEL REGIMEN DEMOCRATICO: EL CÍRCULO VICIOSO DE LAS TRAMPAS EN UN CONTEXTO DE DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL (1912 - 1919)	226
1.4. Crisis y ruptura de la democracia en la segunda década del siglo XX.....	226
1.5. Guillermo Billinghurst (1912 – 1914): el ejecutivo versus el legislativo.....	230
1.6. Coronel Oscar Benavides (1914 - 1915): los vaivenes del consenso.....	260
1.7. José Pardo (1915 – 1919): el fracaso del consenso.....	279
CONCLUSIONES.....	317
BIBLIOGRAFIA.....	336
ANEXOS.....	348

INDICE DE CUADROS

páginas

Cuadro No. 1	
Democracias parciales: ejemplos de subtipos disminuidos	26
Cuadro No.2	
La estructura lógica del concepto “DEMOCRACIA” y sus dimensiones.	28
Cuadro No.3	
Año del primer régimen democrático en diversos países americanos según diferentes criterios de clasificación de diversos autores	31
Cuadro No. 4	
Reseña de Periódicos y Revistas de Oposición a los Gobiernos entre 1895 a 1919.	44
Cuadro No.5	
Índice de Intensidad de Violación de Reglas por los actores políticos según su tipo de verificación y nivel de gravedad	57
Cuadro No. 6	
Esquema de oposiciones en juego político en el periodo de junio de 1913 a febrero de 1914 (Gobierno de Guillermo Billinghurst).	259

INDICE DE FIGURAS

páginas\

Figura No. 1	
Ubicación de los Partidos Políticos en un eje de continuidad izquierda-derecha durante el régimen político entre 1895 a 1919.	42
Figura No. 2:	
Forma simplificada de una interacción estratégica el ejecutivo y la oposición en un proceso democrático viciado	61
Figura No 3	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Piérola a partir de 1897.	128
Figura No 4:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de López de Romaña a fines de 1902.	179
Figura No 5:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno provisional de Calderón en 1904.	190
Figura No 6:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Leguía en 1911.	222
Figura No 7:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Billinghurst en enero de 1914.	358
Figura No 8:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Benavides entre febrero y julio de 1914.	275
Figura No 9:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el segundo gobierno de Pardo en 1915.	281
Figura No 10:	
Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el segundo gobierno de Pardo en 1919.	301
Figura No 11:	
Índice de conflictividad según gobiernos entre 1895 a 1919 (Barras)	318
Figura No 12:	
Índice de incumplimiento de reglas según gobiernos entre 1895 a 1919 (Barras)	319

Figura No 13: Incumplimiento de reglas y conflictividad en Gobiernos de la República Aristocrática (1895 - 1919)	326
Figura No 14: Índice de incumplimiento de reglas según gobiernos entre 1895 a 1919 (Líneas)	328
Figura No 15: Trampas presuntas y trampas reales durante los gobiernos entre 1895 a 1919	329
Figura No 16 Trampas de primer y tercer nivel de gravedad durante los gobiernos entre 1895 a 1919	330
Figura No 17 Procesos, resultados y secuencias en el cambio democrático (Morlino, 1998: 22)	331
Figura No 18 Fases por la que atraviesa el régimen político peruano entre 1895 a 1919	331

INDICE DE ANEXOS	Páginas
Anexo No. 1 Presidentes del Perú Republicano entre 1868 y 1930	348
Anexo No.2 Relación de Presidentes de la Cámara de Diputados durante el régimen político entre 1895 a 1919	349
Anexo No.3 Relación de Presidentes de la Cámara de Senadores durante el régimen político entre 1895 a 1919	350
Anexo No.4 Relación de los Jefes de Gabinetes durante el régimen político entre 1895 a 1919	351
Anexo No.5 Lista del grupo de los “24 amigos” y Cargos Políticos Importantes durante el régimen político entre 1895 a 1919	352
Anexo No. 6 Consolidado de Gabinetes Ministeriales de los Gobiernos entre 1899 a 1919, indicando el Jefe de Gabinete, fecha, duración y promedio de gabinetes por Gobierno	353
Anexo No. 7 Levantamientos Armados durante el régimen político entre 1895 a 1919.	356
Anexo No. 8 Amnistías Políticas durante el régimen político de 1895 a 1919	358
Anexo No 9 Clasificación de conflictos y trampas.	359
Anexo 10 Síntesis de Conflictos y Trampas de Gobierno entre 1895 a 1919	421
Anexo 11 Cuadro Comparativo de las Trampas Presuntas y Reales en los gobiernos entre 1895 a 1919	422
Anexo 12 Cuadro Comparativo de la Gravedad de las Trampas durante los gobiernos entre 1895 a 1919	423

Agradecimientos.

El trabajo intelectual no es solitario, tal como puede ocurrirnos pensar en algunas oportunidades a quienes pasamos parte de nuestra vida en cubículos de estudio, creándonos a veces involuntariamente cubículos mentales y emocionales.

Por tal razón, deseo agradecer a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Sede México, por la hacer posible mi estancia de estudios de doctorado.

Asimismo, mis reconocimientos a mis lectores y críticos de mi trabajo intelectual: Ligia Tavera (lectora que combina la crítica constructiva con el apoyo necesario para llegar a buen puerto), Andreas Schedler, Francisco Valdez, Henio Millán, Luis Salazar y Javier Duque.

Mi estancia de investigación en la Universidad de Georgetown me permitió alcanzar nuevas perspectivas analíticas, en especial gracias a los comentarios de John Bailey y Mark Chernick. Por otra parte, mi visita en Washington no hubiese sido posible sin el apoyo generoso de mis benefactoras Aurora y Elsa Cervantes, así como de Juan Carlos Castro y la Sra. Rosario Aramburu. Una mención aparte es para mi amigo José Roberto Cabrera.

Mis amigos de ruta: Miguel López, Javier Duque y Carlos Rodríguez fueron una fuente inagotable de buenos momentos que contrarrestaban los inevitables desalientos de esta aventura académica. A ellos, mis agradecimientos y esperanzas de mantenernos en contacto.

Vivir en la metrópoli mexicana se me hizo más agradable gracias a la presencia y apoyo de Héctor y Vladimir, Vicky Somera y Benjamín Meneses, Elizabeth García y a mis compatriotas Martín de los Heros y Carmen Zamudio.

A pesar de la gran distancia, sentía el apoyo y las esperanzas de mis padres Carlos y Julia, y de mis hermanos Edward, Teresa, Gloria, César y Milagros. También el aliento de mis cuñadas Carmen, Alicia, Titi y Elena Caro y mis respectivos sobrinos. No menos agradezco los buenos deseos de Denis Sulmont y Rossana Rivas. Los lazos invisibles siguen siendo fuertes y determinantes.

Mi esposa Nelly Caro y mis hijos Bruno y Adriano son la razón última de todo sacrificio, a ellos mi reiteración de amor y agradecimiento.

A todos ellos: INFINITAMENTE.

INTRODUCCION

*"La condición del malvado es infinitamente más ventajosa que la del justo. (...)
Todavía no he oído a nadie que me demuestre como yo quisiera que
la justicia sea preferible a la injusticia (...)*

Así, Sócrates, parece que la injusticia es la llave para una vida exitosa"

Palabras de Glaucón

La República

PLATON (469 a 399 a de C)

El tema de la presente investigación es la ruptura del régimen democrático peruano en 1919. Siguiendo la sugerencia que hacen Linz y Stepan sobre los quiebres democráticos (1978: vii), este estudio se enfoca en tres aspectos: los antecedentes de la ruptura como son la transición e instalación del régimen democrático, el rol que jugaron los actores democráticos en dicho proceso y la dinámica misma del proceso político de la crisis y la quiebra democrática.

El problema de estudio que se propone en esta tesis es: el quiebre democrático en el Perú a fines de la segunda década del siglo XX, estuvo más vinculado con los propios actores democráticos que con los actores "antisistémicos" o "outsiders"¹, a quienes se les suele atribuir un rol protagónico en los golpes de Estado en la historia reciente del Perú (Manuel Odría en 1948, Juan Velasco en 1968, Alberto Fujimori en 1992), y en otros países de América Latina (Pinochet en Chile, Videla en Argentina). Por nuestra parte, consideramos que razones más relevantes para explicar el derrumbe democrático se encuentran en un determinado tipo de estrategias que implementan los jugadores en un régimen democrático, las cuales arrojan resultados de "suma cero" e impactan negativamente en los intereses de los actores, en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en la pérdida de la legitimidad del régimen político.

Es así, que la hipótesis de esta investigación apunta a considerar que la quiebra de la democracia en el Perú en el periodo mencionado estuvo asociada a las estrategias de acumulación de poder en el corto plazo que los actores privilegian en la competencia política. Estas estrategias consisten básicamente en la ruptura de las reglas de juego

¹ "Uso el término "outsider" para referirme a los políticos que han alcanzado cargos prominentes desde afuera del sistema de partidos" (Kenney: 1998:59, traducción mía).

(hacer trampas), las cuales tienden a generalizarse en tanto que el adversario se verá incentivado a usar estas mismas estrategias con el fin de no asumir permanentemente los resultados de derrota y la pérdida constante de poder; tal fenómeno de replicación de una estrategia ilegítima por otra similar la hemos denominado “círculo vicioso”.

Una hipótesis complementaria a la anterior es que los actores políticos asumieron estas estrategias ilegítimas en tanto que hubo incentivos institucionales que generaron distribuciones del poder muy desiguales. Asimismo, otro factor que estimuló el rompimiento de las reglas de juego por parte de los jugadores fue el tipo de conflicto político que predominó en este periodo, el cual se caracterizó por una confrontación bipolar permanente durante la primera década (demócrata versus civilista) y segunda década del siglo XX, (ejecutivo versus legislativo).

De las perspectivas teóricas que han abordado el tema de la consolidación o ruptura democrática, tenemos la corriente estructural que sugiere que la democracia es estable cuando las condiciones socio-económicas incrementan el poder político de la clase trabajadora y otros grupos dominados (Rueschemeyer et al; 1992). Esta línea de análisis trata de dar cuenta de la relación entre desarrollo capitalista y consolidación democrática², y tienen como categoría predominante a la clase social en tanto los conflictos clasistas ponen en tensión la estabilidad democrática. Otra de las variables claves es el nivel de amenaza que las elites dirigentes perciben de la presión de las clases subordinadas; siendo los partidos políticos un factor estratégico en la consolidación democrática, en tanto que canalizan estas presiones y reducen el nivel de tensión, así “*la democracia pudo consolidarse sólo cuando existían al menos dos o más partidos en competencia, siendo al menos uno de ellos representativo de los intereses de la clase dominante*” (1992: 9).

² Rueschemeyer et al (1992) pretende demostrar cómo diferentes tipos de economías de exportación conducen a diferentes formas de gobiernos democráticos luego de la consolidación del poder estatal en el siglo XIX. Sin embargo, una vez que las instituciones políticas se han formado “*asumen una vida propia y devienen en importantes determinantes de los regímenes resultantes*” (Ibid: 159, traducción mía)

La aplicación de esta perspectiva estructural al caso peruano enfatiza el peso que las variables socio históricas han tenido sobre la inestabilidad democrática, tales como la fragmentación de la sociedad, la debilidad de las instituciones, la violencia y la pobreza. Así, *“en la medida que los partidos mantuvieron incólumes las estructuras, las prácticas y los estilos patrimoniales y corporativos, la distribución segmentaria de los recursos públicos a manera de prebendas se sumó a la nuevas y apremiantes condiciones internacionales para agravar las exclusiones y los antagonismos entre las fragmentadas identidades políticas y sociales”* (Cotler; 1994: 176).

Las críticas a estos planteamientos de carácter estructural señalan que es un enfoque determinista y que más allá de establecer asociaciones entre componentes del sistema político (o respecto de otros elementos extrapolíticos), **no explican los procesos mismos** de la estabilidad y del cambio, los cuales no están dados ni son automáticos. Son aproximaciones del tipo “caja negra”, que ignoran los fundamentos micro, pierden de vista a los actores, y no especifican cómo ni quienes actúan en las dinámicas políticas (Kalyvas, 1996: 13-14). Asimismo, las explicaciones macro de los resultados siempre resultan predeterminados por el peso de sus variables independientes, es decir no se pueden explicar los casos en los que existiendo el mismo juego de condiciones previstas se produce un resultado diferente, a lo más se calificarán de casos excepcionales o desviados.

Sin embargo, los actores suelen sobrepasar las constricciones históricas a los que se ven sometidos, tal como podemos analizar de los casos comparados en América Latina, donde países que reproducen los mismos síntomas de crisis económica, pobreza, violencia política y fragmentación de la sociedad no terminan en dictaduras o golpes de Estado (ejemplos recientes pueden citarse los casos de Colombia y Argentina)³.

³ “... un resultado político como un cambio de régimen a favor de la democracia y su consolidación no está determinada por las estructuras económicas, sociales o culturales. Una sociedad con unas estructuras dadas e incluso con unas preferencias relativamente estables de los ciudadanos puede elegir diferentes alternativas políticas, como la democracia, la dictadura o la revolución, según el proceso de decisión.” (Colomer; 1998: 12).

Una segunda perspectiva de análisis está basada en una orientación micro o de prevalencia de los actores (teoría de la elección racional); en la cual la democracia es estable cuando satisface los intereses de todos los actores relevantes. Esta orientación analítica pretende establecer una teoría que explique a la democracia como un sistema donde los partidos aceptan sus derrotas, no tanto por miedo a la represión o a una adherencia idealista a las normas democráticas, sino por la misma acción interesada de los jugadores, así *“la democracia está consolidada cuando el acatamiento –la actuación en el marco institucional- constituye el punto de equilibrio de las estrategias descentralizadas de todas las fuerzas políticas involucradas”* (Przeworski; 1995: 43). De esta manera, los actores aceptan perder en el juego de la competencia política en tanto que las instituciones democráticas garantizan el “carácter intertemporal” de los triunfos, es decir que en el futuro tendrán razonables posibilidades de ser los ganadores⁴.

Para el caso peruano, tenemos el estudio de Lynch (1996), quien enfatiza las estrategias de los actores como una clave explicativa del colapso de los partidos políticos y del derrumbe democrático en 1992: *“Los partidos políticos fracasan, en el periodo que va de 1980 a 1992, por que no pueden consolidar la democracia como un régimen político estable. Este fracaso se expresa en la incapacidad para formar un sistema de interacción partidaria que les permita el desarrollo de políticas para hacer frente a los graves problemas por las que atravesaba el país (...). La incapacidad de los partidos se manifiesta, sobretudo, en su falta de eficacia para afrontar la crisis económica y la violencia política. Esta falta de eficacia se agudiza por las dificultades de los liderazgos partidarios para llegar a consensos respecto de los problemas fundamentales. Las rivalidades personales, el cálculo táctico de corto plazo y las diferencias ideológicas y programáticas, impiden el logro de estos consensos”* (Citado en Tanaka; 1998:27).

⁴ “El milagro de la democracia es que las fuerzas políticas contendientes obedecen al resultado de las votaciones. Las personas que tienen armas también las acatan pacíficamente. Las autoridades arriesgan el control de sus cargos mediante la realización de elecciones. Los perdedores esperan una siguiente oportunidad para ganar. Los conflictos son limitados, ya que resultas regulados y procesados mediante reglas. Esto no se trata de un consenso o de una mutilación. Es sólo un conflicto limitado, un conflicto sin asesinatos (...) los derramamientos de sangre son evitados por el mero hecho de que **las fuerzas políticas esperan su respectivo momento para poder gobernar**” (Przeworski; 1996: 22-4, traducción y negrillas mías).

En síntesis, esta perspectiva teórica de la elección racional focaliza su atención en la dimensión estratégica de los actores, y reta a los investigadores a reconstituir analíticamente las preferencias, estrategias y motivaciones de los actores en los determinados momentos en los que se vieron en el dilema de escoger un rumbo de acción, más allá de constreñimientos estructurales, históricos o institucionales, que influyen en estas decisiones, pero no las determinan.

La aproximación analítica que guía el desarrollo de esta investigación es la teoría de la elección racional, mediante la cual hicimos un esfuerzo por reconstituir los dilemas de decisión que enfrentaron los actores políticos durante el régimen político entre 1895 a 1919 y la lógica estratégica en la que se enmarcan estas decisiones; asimismo, examinamos el tipo de conflictos que originaron estas decisiones, y finalmente explicamos cómo estos conflictos y estrategias condujeron a la quiebra democrática. En este sentido, nuestro empeño de investigación fue la reconstrucción de una historia teóricamente orientada y deductivamente extraída respecto de la caída de este régimen democrático, haciendo hincapié en vínculos causales intuitivamente plausibles y poniendo a prueba su validez en confrontación con la evidencia empírica (Przeworski y Sprague; 1986:181). Por lo tanto, uno de nuestros principales retos en este proceso fue la comprensión de la interacción entre elección estratégica de los actores y su contexto institucional⁵.

Así, la perspectiva analítica desde los actores asume a la consolidación o ruptura democrática no como algo predeterminado, sino que viene a ser producto de una conjunción de determinadas condiciones estructurales que definen el marco de elecciones viables y de la interacción estratégica de los actores. Ello no implica negar el peso que tienen las condiciones estructurales para coadyuvar estos procesos de cambio, sino proponer que el análisis de una transición empieza por la configuración de las situaciones

⁵ “La perspectiva básica adoptada en este libro es la que las instituciones conforman las estrategias de los actores y éstas, en su interacción, producen resultados colectivos. Las instituciones proveen información, oportunidades, incentivos y restricciones tanto a los ciudadanos como a los líderes para la elección de ciertas estrategias y sólo cabe explicar los resultados colectivos a través de las decisiones estratégicas de los actores” (Colomer; 2001: 16)

globales y sigue con el posicionamiento de los actores en este escenario, según sus intereses y las estrategias que desplieguen.

Las contribuciones que la presente tesis puede aportar al estudio de las quiebras democráticas y al caso peruano de este periodo en particular son las siguientes. En primer lugar, desarrollamos un modelo de interacciones entre los actores basados en estrategias ilegítimas que nos permite explorar la dinámica interna de un proceso político de debilitamiento institucional, deslegitimización y derrumbe democrático. En segundo lugar, proponemos una clasificación de los conflictos políticos, por el cual podemos medir el nivel de intensidad de la conflictividad política de los gobiernos y a su vez el grado de incumplimiento de las reglas de juego de un régimen democrático por parte de los actores; ambos elementos nos ayudan a comprender el nivel de deterioro institucional y crisis política a la que conducen las estrategias ilegítimas de los actores, para finalmente desembocar en un quiebre de un régimen democrático. En tercer lugar, hacemos una revisión exhaustiva del periodo histórico en el Perú que transcurre entre 1895 a 1919, a partir de una relectura distinta a la adoptada por la bibliografía existente, ya sea por el énfasis específicamente político que se hace de tal periodo, el carácter analítico y explicativo de las interacciones de los actores y los resultados colectivos que ocurren a partir de los mismos, y finalmente por una redefinición del tipo de régimen político por el cual tradicionalmente se lo había clasificado: como una dictadura.

Esta tesis presenta la siguiente estructura de sus contenidos. El primer capítulo desarrolla una reconceptualización del periodo histórico que transcurre entre 1895 a 1919, de tal manera que exploramos específicamente su dimensión política y concluimos acerca del carácter democrático del mismo a partir de las categorías conceptuales sobre los “requisitos mínimos” de una democracia, y específicamente el aporte sobre la clasificación de regímenes políticos que hace Przeworski (2000). A continuación desarrollamos el marco conceptual y el modelo analítico que nos permite procesar las evidencias empíricas y probar nuestras hipótesis acerca del derrumbe de este régimen político.

El segundo capítulo presenta los antecedentes históricos que conducen al principal elivaje que enfrentan los actores previos a la transición e inicio del nuevo régimen político: militarismo versus civilismo. Ello nos remonta a la independencia peruana del dominio español y al predominio que tuvieron los militares en la configuración de un orden político y estatal durante la mayor parte del siglo XIX, así como al surgimiento de una nueva clase política civil y la constitución de los primeros partidos políticos en la historia peruana. Asimismo, hacemos un análisis más específico del quinquenio que antecedió a la transición política, el cual se caracterizó por una sangrienta guerra civil entre civiles y militares concluyó con la rendición de estos últimos y la instauración de un nuevo régimen en 1895.

Este mismo capítulo desarrolla el proceso de la construcción institucional (generación de las reglas de juego formales e informales) que se realizó durante la junta de transición y el primer gobierno elegido democráticamente, el cual influyó notablemente en el desarrollo posterior de este régimen político, ya sea en cuanto a sus fortalezas: una élite nacional unificada, legitimidad de la institucionalidad democrática, distribución equilibrada de poderes entre los actores políticos y reconstitución de los partidos políticos (que permitieron que este régimen político pueda tener una duración de un cuarto de siglo; el periodo más largo de vigencia de un régimen democrático en toda la historia peruana hasta la actualidad), o sus debilidades que lo condujeron finalmente al derrumbe institucional.

En el cuarto y quinto capítulo se realiza un reconocimiento empírico de los eventos políticos que acontecen durante los gobiernos entre 1899 a 1919; y se analiza el proceso de larvamiento y corrosión institucional que implicó un tipo de interacción de los actores políticos caracterizado por el predominio de las estrategias ilegítimas, es decir mediante la violación de las reglas de juego (trampas).

Finalmente, las conclusiones nos dan cuenta global del proceso de desinstitucionalización y deslegitimación de este régimen democrático, en la medida que las estrategias ilegítimas de los actores políticos se acentuaron, generándose círculos viciosos de

interacción estratégica, lo cual contribuyó a la exclusión de algunos actores políticos relevantes y al debilitamiento de los partidos políticos en general. Por lo tanto, la irrupción de los actores políticos desleales o golpistas se dio en un contexto que facilitó su propósito de dar término a este régimen político.

CAPITULO I

LA REPUBLICA ARISTOCRATICA: UNA RECONCEPTUALIZACION DEL REGIMEN POLITICO ENTRE 1895 A 1919.

1.1. La dimensión política de la República Aristocrática.

Las versiones académicas más conocidas de la República Aristocrática⁶, son aquellas que la definen a partir de su estructura económica⁷ y social; de tal manera que su atención se concentra en observar a los actores políticos como expresión de intereses económicos y derivados del entorno social al que pertenecen (hacendados, industriales, agroexportadores, comerciantes, banqueros).

Por ejemplo, Burga y Flores (1987: 7) señalan que el poder político en este régimen era ejercido directamente por una clase dominante, que tipifica como “*oligarquía terrateniente, comercial y financiera*”⁸; la cual formaba parte de un mismo contexto social y económico e incluso de una misma estructura de parentesco. Este grupo era claramente identificable por el entorno cotidiano en el cual se desenvolvían (Club Nacional, Lima Polo and Hunt Club, Jockey Club), así como los colegios donde se educaban sus hijos (Recoleta) e hijas (San Pedro); a ello se añadían naturalmente su permanencia en determinados barrios exclusivos, iglesias y lugares de veraneo (Gilbert; 1982: 37-8)⁹.

⁶ Esta categoría fue acuñada por Jorge Basadre para tipificar el periodo de la historia peruana que va de 1895 a 1919, en el cual el poder político estuvo bajo el predominio de la clase plutocrática aristocrática, que resulta de la alianza de los enriquecidos consignatarios del guano y la antigua nobleza genealógica de la colonia, “*comunidad de intereses comerciales y financieros, matrimonios de enriquecidos con mujeres aristocráticas, los ligan*” (Basadre: 1982: 72). Sin embargo, Gilbert (1982: 51-2) señala que de las 30 familias clave de la oligarquía, sólo 8 podían afirmar que sus raíces se remontaban a la élite colonial, y además que hay pocos indicios de una continua conservación de fortunas desde los tiempos coloniales, concluyendo que la oligarquía no ha estado, en general, compuesta por aristócratas de la colonia; por lo que Gilbert asume la denominación de República Oligárquica para este mismo periodo.

⁷ Un ejemplo típico de análisis de este periodo desde una perspectiva económica se encuentra en Yépez (1972: 183), quien señala: “*Así, vimos al promediar los siglos XIX y XX, las modificaciones en el nivel dominante de este sistema acentuaron en nuestra sociedad la heterogeneidad de sus estructuras de producción y de dominación al introducirse nuevas formas de organización productiva... (...) El modo en que se organizaron las relaciones de producción tuvo correlativos cambios en el orden político*”.

⁸ “*La oligarquía fue una clase social numéricamente reducida, compuesta por un conjunto de familias cuyo poder reposaba en la propiedad de la tierra, las propiedades mineras, el gran comercio de importación - exportación y la banca.*” (Ibid: 84)

⁹ Las imágenes de una élite que sobrepone el poder político y el poder económico es una tendencia recurrente en la bibliografía sobre los estudios de las oligarquías latinoamericanas, como son las “treinta

Por su parte, Cotler (1986: 128) especifica que un determinado sector de esta oligarquía es el que predominaba sobre los demás, el cual estaba compuesto por hacendados de la costa norte del país, quienes eran propietarios de grandes extensiones de terrenos dedicados al cultivo de productos de exportación como el algodón y el azúcar¹⁰. Las relaciones que este grupo mantiene con otros sectores de la oligarquía es un tema polémico; ya que mientras Madalengoitia (1979: 280-1, 285-6) señala la existencia de una alianza entre esta élite costeña y los terratenientes de la sierra, de tal manera que la primera estaba a cargo del poder ejecutivo y la segunda controlaba el Congreso; Stein (1980: 48) enfatiza que este periodo de la República Aristocrática estaba atravesado por fisuras internas al interior de esta oligarquía, la cual producía constantes crisis políticas.

Al margen de estas discrepancias, la literatura académica coincide en que el grupo que controlaba el poder político en el Perú entre 1895 y 1919, era una élite asentada en una economía de exportación primaria y vinculada políticamente con el Partido Civil, en la cual determinadas familias constituían su núcleo predominante: Pardos, Aspíllagas, Prados, Miró Quesadas¹¹.

Una versión afín a la anterior es la que sostiene Portocarrero (1995: 219) al definir a este régimen como oligárquico, en tanto que estaba “*basado en una participación muy*

familias” que controlaban la producción de las fibras textiles del henequén y a su vez el poder político local en Yucatán en el siglo XIX (Wells; 1982); el grupo Monterrey que dirigía la industria del noreste de México durante el Porfiriato (Saragoza, 1988); la oligarquía de Paraíba que manejaba la producción de algodón y el municipio local en el periodo de la antigua República del Brasil entre 1889 y 1930 (Lewin; 1979), la aristocracia terrateniente que gobernó Argentina durante 1912 a 1916 (Smith; 1974), y el clan Larraín Salas que dirigía la élite gobernante durante el siglo XIX en Chile (Felstiner; 1976).

¹⁰ A su vez, esta élite agroexportadora había diversificado sus inversiones en otros sectores de la economía como eran bancos, industrias textiles, compañías aseguradoras, minas y bienes raíces.

¹¹ “El núcleo básico de la élite gobernante de la República Oligárquica la constituía un grupo informal conocido como “Los 24 amigos” los cuales se reunían los jueves por la noche en el Club Nacional para discutir los asuntos públicos. Formaban parte de este grupo Francisco Rosas, Luis Carranza, Pedro Correa y Santiago, José Antonio Miró Quesada, Luis Dubois, Narciso de Aramburú, Ernesto Malinowsky, Armando Vélez, Manuel Candamo, Domingo Almenara, Estanislao Pardo Figueroa, Pedro Gallagher, Ezequiel Álvarez Calderón, Manuel Álvarez Calderón, Calixto Peiffer, Carlos Ferreyros, Enrique Ferreyros, Enrique Barrera, Antero Aspíllaga, Luis Bryce, Alejandro Garland y Leonidas Cárdenas. Conforme morían estos hombres, iban ingresando al grupo miembros más jóvenes de la élite. Entre ellos estaban Felipe de Osma, Augusto B. Leguía, Felipe Pardo, Francisco Tudela y Varela, Antonio Miró Quesada, José Pardo y Víctor Maúrtua.” (Gilbert; 1982: 37)

restringida, donde los dueños de la riqueza, controlando la esfera de lo público y la política del Estado, tienen un poder desproporcionado, que usan, desde luego, para perpetuar el orden que los fundamenta.” Así, la política se observa estrechamente entrelazada con la economía y la sociedad, de tal manera que el poder económico y el poder político llegan a ser uno solo, “como si el Estado fuera propiedad de un grupo social” (Ibid: 222)¹².

Una de las críticas que hace Miller a estas investigaciones (1982: 99) es que se han realizado sin haber considerado fuentes primarias disponibles respecto de la vida política de este periodo (con algunas pocas excepciones), por lo que este autor procede a hacer una relectura diferente de lo anteriormente afirmado, a partir de una revisión exhaustiva de documentos de la época (prensa, memorias, artículos de revistas, correspondencia privada), a partir de los cuales cuestiona estas interpretaciones de la política peruana que enfatizan el control del Estado por unas pocas familias asentadas en el Partido Civil, y de una supuesta cohesión interna de esta élite costeña agroexportadora.

En efecto, uno de los primeros aspectos sobre los que Miller (Ibid: 101, 105) llama la atención sobre este periodo es la gran cantidad de personalidades que juegan roles estratégicos en la política nacional (presidentes de las cámaras parlamentarias, jefes de gabinetes y de partidos políticos), lo cual nos permite observar que la mayor parte de ellos no son miembros del sector agroexportador de la costa norte, es decir aquella que forma parte del Club Nacional o de los “24 amigos”. Muchos de ellos son personajes provenientes de las élites provincianas (Guillermo Billinghurst, Nicolás de Piérola, López de Romaña, Rafael Villanueva, Augusto Durand) o de la clase media limeña (Bernardino Pérez, José Matías Manzanilla, Germán Arenas, Mariano Cornejo), a quienes volveremos con mayor detalle en los siguientes capítulos. Por otro lado, los personajes vinculados a esta élite agroexportadora costeña no sólo se ubican en el Partido Civil, sino que también los encontramos vinculados a otros partidos o líderes (muchas veces opuestos a los

¹² Portocarrero señala que la estabilidad de este régimen político se asienta sobre dos factores: la consolidación de un grupo social y “*el crecimiento de las exportaciones de azúcar y algodón, y el incipiente desarrollo del mercado interno*” (Ibid: 223); lo cual reafirma esta yuxtaposición de factores económicos, sociales y políticos.

intereses económicos de este sector), como Pedro de Osma y Ricardo Bentín en el Partido Demócrata, Aurelio Sousa con Billinghamurst y Víctor Larco en una posición independiente.

Otro de los cuestionamientos principales refiere a la influencia decisiva de esta élite costeña en las políticas gubernamentales. Sin negar la importancia de este grupo en las decisiones del gobierno y de sus vínculos estrechos con el Partido Civil, el cual se mantuvo en el poder durante la mayor cantidad de años en este periodo¹³; Miller (Ibid: 103) señala que la generalización de esta afirmación sería insuficiente para poder explicar el fracaso de la élite para lograr un consenso nacional, las pugnas internas al interior de este grupo de poder y finalmente no daría cuenta de su incapacidad de lograr un control político más allá de la capital y de las conflictivas relaciones con otras fracciones del poder.

Como veremos en la historia política del Perú en el periodo de 1895 a 1919, el retorno de los civilistas al poder fue posible gracias a su alianza con el Partido Demócrata liderado por Piérola en 1895, y sólo en 1901 lograron afirmar su primacía sobre sus coyunturales aliados; sin embargo, las fracciones al interior del Partido Civil empezaron a emerger al año siguiente (inicialmente en forma de un antagonismo intergeneracional) y se intensifican en 1908 a partir de la llegada del poder de Augusto Leguía, al punto de producirse una escisión partidaria en 1911 entre una facción “*leguista*” y un sector que se autodenominó Partido Civil Independiente, los cuales se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 1912 entre Antero Aspíllaga (apoyado por el Partido Civil “oficialista”) y Guillermo Billinghamurst (candidatura apoyada por un frente de partidos denominado “El Bloque”, entre los cuales se encuentran los disidentes civilistas). Los años subsiguientes

¹³ Haciendo un balance aproximado de la permanencia de los partidos en el poder, podemos estimar que de estos 24 años y 3 meses de duración de la “República Aristocrática”, 11 años corresponden a una predominancia del Partido Civil, otros 4 al Partido Demócrata, 7 años a presidentes no afiliados a ninguno de los anteriores y que gobiernan con alianzas diversas (López de Romaña, Calderón, Billinghamurst y Coronel Benavides) y 2 a Leguía, quién perteneciendo aún al civilismo, realiza una segunda parte de su gobierno (1910 – 1912) con personajes de su propio entorno familiar y político (“leguistas”), y por fuera del marco político del Partido Civil (Ver Anexo No.1: Presidentes del Perú Republicano entre 1868 y 1930).

(gobiernos de Benavides y Pardo) estuvieron marcados por un intenso conflicto político, en el cual surgieron varias tendencias civilistas: pardistas, pradistas, leguístas; hasta el golpe de Estado de Leguía en 1919 que cerró el espacio público de la política (deportaciones y encarcelamientos de los líderes de oposición, clausura de la prensa no adicta al nuevo régimen, elecciones sin competencia), y posteriormente al cual no sobrevivió ninguno de los partidos de este régimen.

Por tanto, esta breve reseña histórica nos remite a un escenario en el cual la predominancia del Partido Civil y de la élite costeña en la política peruana es relativa, y sobredimensionarla como una constante de todo este periodo subestima los conflictos al interior de este partido y dentro del mismo sector de los agroexportadores (personajes prominentes de esta élite costeña se encontraron en bandos opuestos en gran parte de estos conflictos) y finalmente “*no explica cómo el Perú fue gobernado en este tiempo por profundas divisiones al interior de esta élite*” (Miller;1982: 104, traducción mía).

Una aproximación más compleja es reconocer la existencia de varios tipos de fracciones al interior de una élite nacional. Por una parte, tenemos la composición regional económica que nos permite distinguir además de los agroexportadores norteños y de los terratenientes serranos, un poderoso sector comercial en el sur (el eje transversal Puno Cuzco, Arequipa) y una fracción comercial financiera propiamente capitalina, la cual no es dable asimilarla o subordinarla a la élite costeña del norte¹⁴ (destacan en ella el inmigrante cubano José Payán, experto financista y banquero; y los Miró Quesadas, propietarios del periódico más destacado desde mediados del siglo XIX y todo el siglo XX). Otro criterio relevante de divisionismo al interior de la élite son los antagonismos de origen familiar o personal, y del cual Miller hace una ilustrativa reseña de las oscilantes adversidades y alianzas entre las familias Miró Quesada, Aspíllaga y Prado; las

¹⁴ A pesar de los vínculos entre la comunidad comercial financiera limeña y los agroexportadores (los Aspíllagas eran accionistas del Banco Internacional, la Cía. de Seguros La Nacional y de la Cía. Peruana de Vapores, mientras que los Pardo eran socios mayoritarios del Banco Popular), ninguno de éstos formaba parte de la Cámara de Comercio de Lima; ni eran accionistas de la entidad financiera más importante del periodo: el Banco del Perú y Londres (Miller: 1982: 110-1).

cuales influyen en acontecimientos importantes en la política nacional¹⁵. Finalmente, tenemos las diferencias entre los miembros de la élite según el partido al cual pertenecían o al líder que apoyaban, el cual ya mencionamos anteriormente. Si cruzamos algunas de estas divisiones, nos encontraremos que ciertos actores que pertenecen a un mismo sector de intereses económicos e incluso de una misma familia resultan siendo antagonistas irreconciliables durante la mayor parte de la República Aristocrática (por ejemplo, el líder civilista José Pardo versus su primo hermano Pedro de Osma y Pardo, destacado dirigente demócrata); o viceversa, que actores de diferentes intereses económicos resultan aliados permanentes o circunstanciales (el minero sureño Guillermo Billinghurst con el gamonal serrano Augusto Durand, el comerciante Augusto Leguía y el general Andrés Cáceres).

Otro criterio que cuestiona la cohesión de esta élite y su influencia determinante en las decisiones gubernamentales está relacionado con los fallidos intentos de las instituciones representativas de los grupos de interés económico (Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional Agraria, Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional de Minería) para intervenir o modificar algunas de las políticas económicas del periodo. Así por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrial no logró que el Estado imponga tarifas arancelarias a las importaciones que favorezcan a determinados productos nacionales. Por otro lado, la Sociedad Nacional Agraria, que estaba profundamente dividida entre los algodóneros y azucareros, resultó bastante ineficaz para defender los intereses de ambos frente al gobierno de José Pardo (quien a su vez era un hacendado agroexportador) y no pudo evitar el incremento al precio de los fertilizantes y de los aranceles a las

¹⁵ “Hay innumerables ejemplos de las maneras cómo los antagonismos familiares y personales permeaban y exacerbaban los conflictos al interior de la élite. Los Miró Quesada odiaban a los Pardo aún en los 50’s y 60’s. Víctor Larco no sólo estaba distanciado de sus hermanos, sino que al mismo tiempo de todos los otros productores de azúcar de Trujillo. (...) En el último año de la presidencia de Leguía, las dos familias (los Aspillagas y los Prado durante el primer gobierno de Leguía entre 1908 y 1912, anotación nuestra) a pesar de estar distanciadas desde la época de la constitución del “bloque”, entre cuyos líderes se encontraban los Miró Quesadas, los Prado fueron el soporte de la candidatura de Antero Aspillaga en la campaña electoral de 1912, por lo cual se les podía considerar como aliados. (...) La ruptura final entre estas dos familias llegó cuando Antero Aspillaga fue invitado por Pardo para respaldar a Javier Prado en la dirección del Partido Civil en 1918, y por consiguiente los Prado apoyaron la candidatura presidencial de Leguía contra Aspillaga, y en consecuencia también el golpe de Estado en julio de 1919.” (Miller: 1982: 106, traducción mía).

exportaciones durante la primera guerra mundial. Otro ejemplo típico fue la adopción del patrón oro para la moneda peruana en vez de la plata en 1897, la cual generó una gran oposición de los representantes de los intereses agrarios y mineros en el parlamento, a pesar de lo cual no pudieron impedir que el gobierno tomase esta medida con el apoyo del sector financiero¹⁶; de igual manera sucedió con la emisión de papel moneda en 1914, durante la crisis monetaria suscitada por el inicio de la primera guerra mundial¹⁷.

Una fuente primaria de significativo valor lo constituye la correspondencia privada de los Aspíllaga, una de las familias más prominentes del periodo, en ella Antero (patriarca familiar y destacado líder civilista), reconocía la debilidad de los azucareros para asumir colectivamente la defensa de sus intereses económicos: *“Si los azucareros estuviésemos más unidos, podríamos ser capaces de obtener muchos beneficios, pero aquí todos actúan por su cuenta, con el resultado que terminamos devorándonos unos a otros”*¹⁸; por su parte su hermano Ramón se queja de su carencia de control del poder político: *“Los hacendados y hombres de la propiedad tendremos, por lo tanto, que tomar el control del Estado, y erradicar a los politiqueros, no sólo de la oposición, sino también de aquellos que forman parte del gobierno, quienes pierden su tiempo en asuntos políticos y personales”*¹⁹; a lo cual responde Antero con un ánimo de frustración: *“¿De cuántas barbaridades nos habríamos escapado o nos hubiéramos librado si el Congreso estuviese cerrado?. Si tan sólo volviesen a sus provincias y nos dejaran en paz”*²⁰. Es relevante anotar que Antero Aspíllaga, uno de los más típicos representantes de la élite

¹⁶ “Desde fines de los años ochenta, la plata entró en un proceso de depreciación en el mercado internacional; para entonces, la mayoría de las monedas “duras” habían trasladado su paridad al oro. El Perú, conjuntamente con México y la India, seguía basando su moneda en el patrón de plata; esto significaba que los exportadores –azucareros y algodóneros principalmente – lograban el pago en oro, reduciendo considerablemente sus costos de producción al desembolsar plata depreciada” (Cotler, 1986: 127).

¹⁷ El destacado líder civilista Antonio Miró Quesada señaló en un discurso parlamentario, que el país estaba bajo el control de una alianza de banqueros y comerciantes, y que los bancos no sólo habían infringido las leyes sobre las reservas, sino además se aprovechaban de la situación para su propio provecho. (Miller: 1982: 111).

¹⁸ Carta de Antero Aspíllaga a Ramón Aspíllaga, 8 de julio de 1914, Vol. 205, Archivo Cayaltí; citado en Miller: 1982: 109.

¹⁹ Carta de Ramón Aspíllaga a Antero Aspíllaga, 14 de febrero de 1914, Vol. 204, Archivo Cayaltí; citado en Miller: 1982: 112.

²⁰ Carta de Antero Aspíllaga a Ramón y Baldomero Aspíllaga, 25 de enero de 1915, Vol. 217, Archivo Cayaltí, citado en Miller: 1982: 120.

costeña agroexportadora y presidente del Partido Civil en varias ocasiones, nunca llegó a ganar la presidencia, a pesar de su empeño y tenacidad en dos campañas electorales.

Por otro lado, cabe hacer un balance de la influencia que esta élite agroexportadora tenía en otro de los poderes del Estado: el Congreso. Como veremos en los siguientes capítulos, uno de los conflictos políticos de mayor predominancia y continuidad fue el que protagonizaron el ejecutivo y el parlamento, lo cual trajo como consecuencia varias crisis políticas ocasionadas por constantes interpelaciones y censuras contra los gabinetes, y el rechazo legislativo de los presupuestos presentados por el ejecutivo (1901, 1903, 1911, 1914, 1917); lo cual fue incluso motivo de graves alteraciones del orden legal como ocurrió con la imposición fraudulenta de un tercio parlamentario por parte del Presidente Leguía en 1911, el golpe de Estado contra el Presidente Billinghurst en 1914 cuando éste pretendía clausurar el Congreso, o finalmente el quiebre democrático en 1919 cuando Leguía logró cerrar el parlamento y convocar a una renovación total del mismo que le permitiese alcanzar la mayoría legislativa. Las difíciles relaciones entre ambos poderes del Estado es un indicador relevante de la falta de control político del parlamento, tanto por parte del Gobierno²¹ como de la fracción agroexportadora civilista²², dada la significativa presencia de una representación congresal de los poderes regionales²³. Miller (Ibid: 115) anota que para 1915, sólo 7 miembros de las familias agroexportadoras integraban la cámara de baja de 105 diputados, mientras que en el cámara alta sólo 5 senadores eran parte de esta élite, de un total de 49.

²¹ "Los diputados en 1917 defendieron su derecho a debatir cualquier tema en las legislaturas extraordinarias, más allá de aquellas por las cuales hayan sido convocados. Pardo, el último presidente civilista, se quejaba de la numerosas ocasiones en que el Congreso había impuesto medidas al ejecutivo, las cuales eran totalmente ajenas a la agenda por la cual habían sido convocados, aún en materias de extrema gravedad." (Miller; 1982: 119, traducción mía).

²² "La fuerza de la plutocracia costeña, más que en el parlamento mismo, está fuera de él, es más económica que política; es más subterránea que visible." (Belaunde; 1987: 301).

²³ "El elemento de composición de nuestro parlamento es un producto sui generis de nuestra sociología política, se llama el cacique. El cacique parlamentario no es en la mayor parte de los casos el señor feudal, y por lo mismo no pertenece a la oligarquía agraria; (...) Su proceso es generalmente el siguiente: agente electoral, modesto abogado, escala a la suplencia de la diputación, de la suplencia pasa a la propiedad debido al apoyo gubernativo". (Ibid: 303).

El incisivo y puntilloso cuestionamiento de Miller a la existencia de una oligarquía homogénea que controlaba de manera indisputada el poder, el cual a su vez era usado como instrumento para favorecer sus intereses económicos, nos remite a una crítica de mayor alcance que nos permita reconceptualizar la visión de la República Aristocrática desde una dimensión específicamente política.

No se trata de negar la influencia de la fracción agroexportadora en la política peruana, menos aún de contravenir la existencia de una élite nacional a cargo del poder político; nuestro objetivo es explorar la dinámica de la interacción política de los actores de esa élite nacional como un ámbito autónomo de análisis, es decir un enfoque diferente de aquellos que observan *“a los actores sociales entendidos como expresión de las fuerzas económicas y de ahí exponer las ramificaciones de estos distintos representantes del poder económico en la escena política oficial. Como consecuencia natural de este esquema metodológico, que excluía otras posibilidades de actuación, la escena oficial quedaba minimizada en su autonomía y asumida como simple reflejo de intereses económicos en pugna.”* (Planas; 1994:16).

Es el propio Basadre (1968: 211), quien reconociendo el predominio de una determinada clase en poder, destaca la política monetaria de Piérola como un ejemplo de la autonomía política del Estado: *“La política monetaria de Piérola fue, en conjunto, ejemplar. El Presidente de la República actuó por sí mismo, en defensa del interés nacional, por encima de los distintos intereses privados o de grupo.”*

Asimismo, un reciente ensayo de Jacobsen (2002: 265-6) propone no sobreestimar el modelo exportador de la economía característico de la República Aristocrática que favorecía a la élite costeña, a los comerciantes y a inversionistas extranjeros, en tanto que coexistía con un pensamiento económico nacionalista que influyó decisivamente en las políticas proteccionistas que se iniciaron a partir del gobierno de Piérola (implantación de la patrón de oro en la moneda peruana, la creación de la Sociedad Nacional de Industrias y el Ministerio de Fomento, la promoción de la banca industrial) y que eran adversas a los intereses de la fracción exportadora. Por lo que Jacobsen asume también la crítica de

una visión tradicional de este periodo “*como uno en que los gobiernos oligárquicos perseguían cerradamente políticas beneficiosas para los intereses de una élite triunfante de los sectores agrícolas y mineros, crecientemente ligada a intereses extranjeros*” (Ibid: 250), señalando que tal análisis funcional no llega a explorar los conflictos que dividían a los civilistas y demócratas, ni el impacto del gobierno de Piérola en las políticas sociales y económicas de los siguientes 20 años, en el cual el Estado alcanza un alto grado de autonomía.

Tomando como referencia otros estudios sobre países latinoamericanos, Topik (1987: 1, 3,) en un análisis de la política económica del Brasil durante 1889 a 1930 (un periodo similar al nuestro), explica cómo las luchas políticas internas configuraron las políticas públicas de este país, y examina el grado en que el Estado brasileño actuaba independientemente de los grupos de interés. Este enfoque critica la teoría de la dependencia, cuando propone que las políticas económicas resultan siendo simples mandatos de la oligarquía (una alianza de agroexportadores, comerciantes, banqueros y capitalistas extranjeros), producto de lo cual el “*Estado no tenía autonomía y era un simple mensajero o capataz de la clase gobernante*”, de tal manera que los seguidores de esta corriente centraban su atención en el proceso de acumulación del capital y en los poderes económicos que subyacen en la escena política. Topik concluye que las autoridades estatales brasileñas se orientaban tanto por “razones de Estado” (entendido como el interés público) como por las demandas económicas de las élites, de la cual formaban parte; así por ejemplo, el crecimiento del rol económico del Estado en el Brasil era promovido tanto por nuevas clases sociales, como por una burocracia estatal nacionalista (Ibid.: 162-3)²⁴.

Incluso desde una perspectiva marxista, Friedman (1984), propone observar al Estado como un poder público, que busca satisfacer el interés del Estado mismo y no sólo los

²⁴ “*El gobierno central no era un simple títeres del triunvirato*” (la oligarquía exportadora de los tres estados principales: Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul). “*Un análisis del proceso por el cual el Estado llega a incrementar su participación en las finanzas, el café, los ferrocarriles y la industria, demuestra las paradójicas estructuras que configuraron el rol del Estado en la economía de exportación del Brasil*” (Ibid: 15, 26, traducción mía).

intereses, de las clases dominantes; este enfoque permite interpretar los impactos económicos de las políticas públicas como derivadas de la dinámica política del Estado²⁵. Así, las políticas estatales en Perú y Argentina hacia fines del siglo XIX buscaron el fortalecimiento del Estado, y en ese proceso de crear un orden social y político, sentaron las bases para el desarrollo de una economía exportadora.

Finalmente citamos un importante estudio acerca de los cambios rurales en América Latina, que explora las relaciones entre la expansión capitalista, el subdesarrollo y la pobreza en el sector rural (Grindle: 1986). En esta investigación, la autora desarrolla un marco analítico acerca de la autonomía del Estado, en el cual la toma de decisiones y su respectiva implementación no resultan un mero reflejo de las relaciones de clase que se dan en la sociedad. Si bien ciertas políticas estatales han beneficiado a una élite productora en el ámbito rural; sin embargo, las autoridades tienen un espacio propio para promover el interés público y el desarrollo nacional.

Desde esta perspectiva, el Estado no sólo tiene su propio margen de autonomía, sino que incluso es capaz de incrementarlo aún en oposición a ciertas clases sociales; por lo que determinadas agencias públicas descentralizadas o especializadas adquieren un directo control político sobre determinadas políticas, lo cual a su vez es aprovechado para retroalimentar sus bases institucionales y subordinar intereses económicos privados. Por otra parte, el Estado deviene en un mediador clave en situaciones de conflicto, realineamientos y cooptación de fuerzas, de tal manera de poder restablecer la estabilidad política y social (Ibid: 3,4).

Grindle señala que una explicación simplista de la dinámica del Estado²⁶ como derivada de la lucha de clases y subordinada a la dominación capitalista, no permitiría explicar las

²⁵ “Los Estados Absolutistas, por ejemplo, tuvieron el efecto de promover el desarrollo del capitalismo en Europa Occidental, no tanto por que lo buscasen conscientemente, sino por que promoviendo el desarrollo burgués los Estados se fortalecieron y así fueron capaces de alcanzar un mejor desempeño en su rol de manejar los conflictos de clase.” (Friedman; 1984: 167, traducción mía).

²⁶ “En la tradición del análisis marxista y de la teoría de la dependencia, el Estado es definido como una alianza para el control social, la cual refleja y reproduce las relaciones de clase en la sociedad. Esto toma la forma de instituciones que logran la legitimación y la coerción, su propósito es mantener la dominación

inconsistencias de las políticas públicas, ya que muchas veces favorecen a ciertos grupos, mientras que otras decisiones afectan negativamente a los intereses de estos mismos grupos; por otro lado, las políticas públicas suelen tener consecuencias no esperadas, o pueden ser adoptadas y no implementadas, o finalmente se enfrentan a muchos factores de incertidumbre, ineficiencia o incoherencia interna.

Una visión alternativa de la política proviene de la tradición weberiana, en la cual el Estado es definido como un aparato ejecutivo y administrativo permanente, que tiene el control soberano sobre un territorio y ejerce el monopolio legítimo de la violencia, por medio de los cuales implementa sus decisiones en forma de mandatos obligatorios. Este Estado no es *“meramente una arena de luchas socioeconómicas, sino más bien un conjunto coordinado de organizaciones administrativas, políticas y militares, encabezadas por una autoridad ejecutiva.”* (Skocpol; 1978: 28).

Nuestra perspectiva de análisis político es tributaria más de esta segunda línea de interpretación, de la cual asumimos dos de sus variantes, la primera es el planteamiento pluralista que identifica a las políticas del Estado como el resultado del conflicto de actores (partidos políticos y líderes), quienes compiten no sólo por satisfacer sus intereses mediante determinadas políticas públicas, sino además por el control del poder político en sí mismo²⁷. Por otro lado, incorporamos el marco teórico de la elección social, mediante la cual se produce una interacción entre las estrategias de los actores y el marco institucional que provee el Estado, de tal manera que la confrontación y/o cooperación entre los actores se adecua o restringe al conjunto de reglas estatuidas para regular dicho

de un determinado modo de producción y las relaciones de clase específica que esto implica. En una sociedad capitalista, el Estado reproduce las condiciones de la acumulación del capital, incluyendo el control de las clases subordinadas. (...) En términos del Estado en América Latina, se suele argumentar que el Estado y sus políticas representan no los intereses de una clase hegemónica específica, sino más bien la forma actual del compromiso y coalición de las clases dominantes y las fracciones de clase. (...) La cuestión empírica que se puede derivar de esta situación es, por lo tanto, ¿cómo las políticas públicas aseguran los intereses predominantes de la alianza de clases dominante?, o desde esa misma perspectiva, ¿cómo el Estado es absorbido por la sociedad?” (Grindle; 1986: 13, traducción mía)

²⁷ “El pluralismo suele referirse a la fragmentación y la dispersión del poder político (...) El pluralismo también alude a los grupos de base de la política y más específicamente a la idea de que la materia prima de la política consiste en las demandas de los grupos de interés, y lo que puede ser llamado una política pública es realmente un equilibrio alcanzado por la lucha de grupos en un momento determinado” (Miller: 1983: 735, traducción mía).

proceso de interacción. Sin embargo, el resultado que emerge de esta confrontación regulada de los actores no es necesariamente eficiente, entendiendo por ello la satisfacción del mayor número de individuos de una sociedad determinada; por lo que el eje de esta línea analítica consiste en la evaluación de *“las diferentes alternativas institucionales por sus diferentes grados de restricción de las estrategias de los actores y su eficacia en la producción de elecciones sociales.”* (Colomer, 2001: 17).

No es nuestro propósito recalar en una visión totalmente opuesta de la visión marxista o dependentista, en el sentido de pasar de una negación de la autonomía del Estado y por ende de la política, a un sesgo burocrático que niegue las influencias que las dimensiones social y económica tienen sobre las políticas públicas y la dinámica de la escena política, tal como propone Allison²⁸, quien señala que las políticas de Estado son el resultado exclusivo de la competencia entre las entidades propiamente burocráticas, por lo cual los vínculos con la sociedad no son tomados en cuenta o son considerados como meros apoyos de las agencias estatales para favorecer sus posiciones al interior de la pugna política intraestatal. En ese sentido, la propuesta burocrática de Allison resulta sobredimensionando la autonomía del Estado.

Desde una perspectiva específicamente política de la República Aristocrática, enfocamos nuestra atención en el rol que las élites juegan para configurar la escena política nacional, tanto para influir en la toma de decisiones del aparato estatal, como para perfilar la constitución de los propios actores políticos (alianzas, oposiciones, acumulación de poderes). Asimismo, estudiamos a los actores políticos insertados en un contexto histórico particular (1895 – 1919), y las estrategias, intereses, posibilidades y elecciones que tienen dentro de las restricciones institucionales en las que se ubican. A su vez, estos actores políticos tienen diversas preferencias, y escogen las vías más racionales para satisfacerlas (racional en el sentido “débil” del concepto, por el cual escogen la

²⁸ *“Las decisiones y las acciones de los gobiernos son resultados de la política interna: resultados en el sentido de que no son elegidos como una solución a un problema, sino como producto de un compromiso, conflicto y confusión de las autoridades con diversos intereses y desigual influencia; política en el sentido que la actividad de donde emergen las decisiones y las acciones están mejor caracterizadas como una negociación regulada entre individuos y miembros del gobierno”* (Allison: 1971: 162, traducción mía).

alternativa más probable para lograr el mejor resultado de acuerdo a sus preferencias), considerando lógicamente las restricciones del marco institucional del momento y las interacciones con las decisiones de otros actores; por lo cual el resultado obtenido se ubica en muchas oportunidades, por fuera del marco de preferencias y expectativas que los actores hayan tenido (resultados inesperados).

Una de las preferencias más relevantes de los actores políticos es su disposición a alcanzar o mantenerse en el poder. En este sentido, los actores buscan el apoyo de los ciudadanos mediante su voto cuando se trata de un régimen democrático. Para lograr este objetivo, los actores políticos tratan de canalizar y satisfacer los intereses de los grupos de presión y de los diversos sectores sociales²⁹. La representación política de los intereses sociales y económicos se plasma finalmente en la provisión de bienes públicos, los cuales son más eficientes en la medida que satisfagan a la mayor cantidad de individuos, quienes a su vez representan potencialmente una mayor cantidad de votos y por ende un mayor soporte político de los partidos.

Finalmente, este intercambio permanente de provisión de bienes públicos por votos entre actores políticos y ciudadanos (individuales o agrupados) permite romper el encasillamiento de la perspectiva burocrática del Estado, de tal manera que podemos vincular la política con la sociedad dentro de los propios marcos de la autonomía relativa de la primera, y así compatibilizar la existencia de intereses políticos amplios por lograr el “desarrollo nacional” o la “estabilidad económica” con intereses inmediatos de algún grupo en particular, al cual pertenezca la autoridad del gobierno o el actor político que se encuentra a cargo de la toma de decisiones en el Estado. Tales intereses pueden retroalimentarse mutuamente o estar en oposición, de tal manera que observaremos en muchas oportunidades que la elección de una política pública por parte de un actor no será necesariamente favorable al grupo social o económico con el cual se le identifica, lo cual nos remite a una crítica anterior a los planteamientos economistas o marxistas; según

²⁹ “La política siempre comporta intercambios en mutuo beneficio entre líderes y ciudadanos. El intercambio esencial es entre líderes que proveen bienes públicos y los ciudadanos que dan a los líderes su apoyo o sus votos.” (Colomer: 2001: 13).

el cual “*es difícil inferir el tipo de dominación del Estado respecto del contenido o impacto de la política en sí misma*” (Grindle; 1986: 18).

En síntesis, a diferencia de los enfoques económicos y sociales de la República Aristocrática de la bibliografía reseñada, nuestra perspectiva de análisis retoma una orientación específicamente política de este régimen, por el cual centramos nuestra atención en los actores (preferencias, estrategias e interacciones) y en las instituciones políticas (referentes a las reglas de juego vinculadas a lograr y mantener el poder político).

1.2. ¿Fue la República Aristocrática una democracia? El tránsito de una democracia a una dictadura o viceversa: la frontera difusa.

En tanto que la perspectiva marxista y dependentista asumían que el poder político era una herramienta al servicio exclusivo de los intereses económicos de la élite, deducían asimismo que el régimen político peruano existente entre 1895 y 1919 cumplía la función de reproducir las condiciones de dominación económica y social en las haciendas y fábricas. Si bien, el artículo 42 de la Constitución Política de 1860 (que regía legalmente a este periodo) definía la forma de gobierno como “*republicano, democrático y representativo*”; para Burga y Flores (1987:83) tales atribuciones eran sólo nominales y no se cumplían en la práctica; por lo contrario la “*exclusión de las mayorías y el monopolio de las minorías constituyen los rasgos centrales de un estado oligárquico cuyo funcionamiento se apoyó más en la dictadura que en el consenso*” (negritas nuestras).

Tal como evaluamos el supuesto carácter excluyente de la “República Aristocrática” y pusimos en tela de juicio la existencia de una élite homogénea que controlaba el poder político y económico; nos corresponde ahora analizar si el tipo de régimen de la denominada “República Aristocrática” correspondía a una dictadura o a una democracia. El contexto de referencia para abordar este tema no son las características económicas y sociales que se daban entre 1895 y 1919, sino básicamente las variables políticas, a saber: competencia entre partidos políticos para elegir autoridades ejecutivas y legislativas.

reglas y participación electoral, derechos civiles y políticos, equilibrio de poderes, entre otros.

El concepto de “democracia” ha sido largamente estudiado y enriquecido desde su aparición en la antigua Grecia hace aproximadamente 25 siglos; sin embargo, en esta larga trayectoria, el sentido originario y etimológico del “poder del pueblo” ha tenido un giro de 180 grados, de tal manera que actualmente se asume una perspectiva mucho menos directa de la ingerencia de la sociedad en el ámbito de las decisiones que la afectan³⁰. Lo que concebimos como democracia hoy en día, y lo que efectivamente rige en los Estados que podemos calificar como “democráticos” se ha forjado en el último siglo aproximadamente, es decir constituye un “*producto reciente en la historia de las instituciones políticas*” (Pasquino; 1999: 100), o como diría Touraine (2000: 15) es “*una idea nueva*”.

Lo que sabemos en la actualidad acerca de la democracia, se ha arraigado en el sentido común de la gente y se ha instalado en las preferencias como la mejor forma de organización política en casi todo Occidente y gran parte de los países del tercer mundo y Oriente; este asentamiento ha ocurrido con la proliferación de regímenes democráticos después de la segunda guerra mundial y sobretudo luego de la caída del Muro de Berlín, que representó el colapso del régimen político alternativo (el socialismo) durante el siglo XX; sin embargo, observamos que los contenidos del concepto ha experimentado un “vicio” conceptual que Collier y Levitsky (1997: 431) denominan “*estiramiento*”, en el sentido que la democracia se ha aplicado a casos, que para los estándares aceptados académicamente, no resultan apropiados.

³⁰ La democracia clásica en las ciudades – estado griegas tenía como principio rector a la igualdad política entre los ciudadanos, de tal modo que cualquiera de ellos pudiera acceder al gobierno. Esta igualdad implicaba la **participación directa de todos los ciudadanos en los asuntos públicos**, ya sean ejecutivos como legislativos, y una dinámica netamente asambleística. Sin embargo, determinadas condiciones históricas hicieron posible la realización de esta forma de gobierno: una población muy pequeña, un contexto agrícola, una economía de esclavitud, y una clara separación sexual del trabajo (las labores domésticas eran actividad exclusiva de las mujeres). Lógicamente, estas características también limitaban el alcance de la igualdad política, y por ende de la ciudadanía, a un conjunto muy pequeño de la población (Held; 2001: 29 - 54).

La concepción moderna del “régimen democrático” incorpora básicamente tres requisitos procedimentales³¹: competencia, participación y libertades civiles; de tal manera que una democracia resulta ser aquel régimen en el cual la competencia por el poder se realiza a través de elecciones, en las cuales los ciudadanos escogen libremente entre diversas alternativas (partidos políticos). La condición ciudadana de los participantes implica la existencia de derechos, por medio de los cuales los individuos están protegidos frente al Estado o a terceros. A nivel individual estos derechos son: habeas corpus, inviolabilidad de la vida privada, el debido proceso en caso de acusaciones judiciales, libertad de palabra y de movimiento, entre otros; a nivel social, estos derechos comprende a la libertad de asociación, libertad de expresión y de discrepancia respecto de la política oficial. La carencia de algunas de estas características implica, para algunos autores, la descalificación de un régimen como democrático y en consecuencia ser calificado como autoritarismo.

Sin embargo, otros autores no polarizan la categorización entre democracias y autoritarismos, sino que contemplan casos intermedios, es decir regímenes políticos que no llegan a cumplir algunos de estos requisitos, pero mantienen el resto; así se tiene un determinado nivel de competencia política y libertad pero hay restricciones a algunos partidos, o los resultados electorales no son auténticos reflejos de las preferencias ciudadanas, o las autoridades electas no tienen un mando efectivo, o hay limitaciones a las libertades civiles y políticas; Gasiorowski (1996: 471) denomina a estos regímenes como “semidemocracias”.

Por su parte, Collier y Levitsky (1997: 436-41) reúnen diversos de estos casos y los califican como “subtipos disminuidos”. El adjetivo que se suele añadir a estos casos (por ejemplo: democracia restringida o democracia limitada) resalta la ausencia de algunos de los requisitos de una democracia, y son asumidos como ejemplos de países que han

³¹ El concepto actual de la democracia desde una perspectiva procedimental se inicia con Joseph Schumpeter en *Capitalism, Socialism and Democracy* (1947), y se consolida Dahl en *Polyarchy: Participation and Opposition* (1971).

avanzado en su proceso de democratización, pero que aún no la han completado; o en el peor de los casos como dictaduras que han flexibilizado sus mecanismos represivos.

Cuadro No. 1: Democracias parciales: ejemplos de subtipos disminuidos.

Subtipos disminuidos de una definición procedimental democrática		
Ausencia del atributo: Participación electoral plena	Ausencia del atributo: Competitividad plena	Ausencia del atributo: Libertades civiles
Democracia Limitada	Democracia controlada	Democracia electoral
Democracia Masculina	Democracia de partido único	Democracia
Democracia Oligárquica	Democracia restringida	Democracia iliberal

Fuente: Collier y Levitsky (1997: 438).

Una de las dificultades teóricas que surgen de la creación de un área intermedia entre los regímenes democráticos y los regímenes autoritarios es que se generan un “*espacio categorial*” que no tiene sus propias coordenadas de análisis, ya que no son consideradas como parte del universo de países democráticos, y que tampoco se adscriben a la dinámica de un régimen dictatorial, ya sea de tipo autoritario o totalitario³².

Otro de los inconvenientes de un espacio intermedio entre democracia y dictadura, es que se coloca de manera conjunta a regímenes que tienen características más vinculadas a una dictadura, con otras que se acercan más al modelo de una democracia. Así, Schedler (2002: 36) señala que han surgido recientemente nuevas formas de autoritarismo, que permitiendo la realización de elecciones para determinadas autoridades y tolerando cierto pluralismo y competencia entre algunos actores políticos, violan sistemáticamente otras normas democráticas mínimas, de tal manera que carecería de sentido clasificarlos como regímenes democráticos; tal como sucedió recientemente con el régimen político peruano entre 1992 y 2000, durante el mandato del Presidente Alberto Fujimori. Mientras que,

³² Asumimos las definiciones de los diversos regímenes no democráticos apuntados por Linz. Un régimen autoritario es aquel en que el Estado es controlado sólo por un líder (o un pequeño grupo de líderes), carece de pluralismo político, no tiene una ideología elaborada, no permite una movilización política amplia y el ejercicio del poder no está institucionalizado, aunque en la práctica sea predecible (Linz: 1970: 255). Un régimen totalitario es aquel en que el Estado es guiado por una ideología “totalista”, y controlado por un partido único de masas, el cual es apoyado por una omnipresente policía secreta; a su vez existe un manejo monopólico de los medios de comunicación masivos, del aparato del Estado y de otras organizaciones sociales (Linz: 1975: 187-188).

otros regímenes son claramente democráticos (y así son clasificados por diversos autores), aún cuando han tenido severas limitaciones en el sufragio universal, como por ejemplo Suiza hasta antes que aprobaran el voto femenino, o los Estados Unidos hasta antes que eliminaran las restricciones civiles contra la minoría de raza negra.

Por lo tanto, la constitución de una categoría intermedia (semidemocracias o subtipos disminuidos) entre regímenes definitivamente democráticos y otros igualmente autoritarios, genera un “frontera difusa” que añade ambigüedad y relativismo al tratamiento de este tipo de casos³³. En todo caso, el intento de algunos autores por clasificar a este tipo de regímenes como una tercera alternativa, implica que no se tiene una regla de distinción lo suficientemente clara, o que no se dispone de la información empírica necesaria³⁴.

Por nuestra parte, asumimos la propuesta de Schedler (2002:36) de establecer una distinción entre un régimen democrático y uno que no lo sea, a pesar de las carencias y deficiencias que pudiese tener aquel, o del intento de dictaduras de “maquillar” su apariencia a través de la realización de elecciones no relevantes o abrir espacios de libertad restringida. Para ello nos proponemos revisar la idea de los tres requisitos democráticos propuestos anteriormente: participación, competencia y libertades, con el fin de evaluar su pertinencia, su consistencia con la aplicación a diversos casos, y la necesaria adecuación que debería tener para casos con circunstancias históricas más precisas, como es el caso del régimen político peruano entre los siglos XIX y XX.

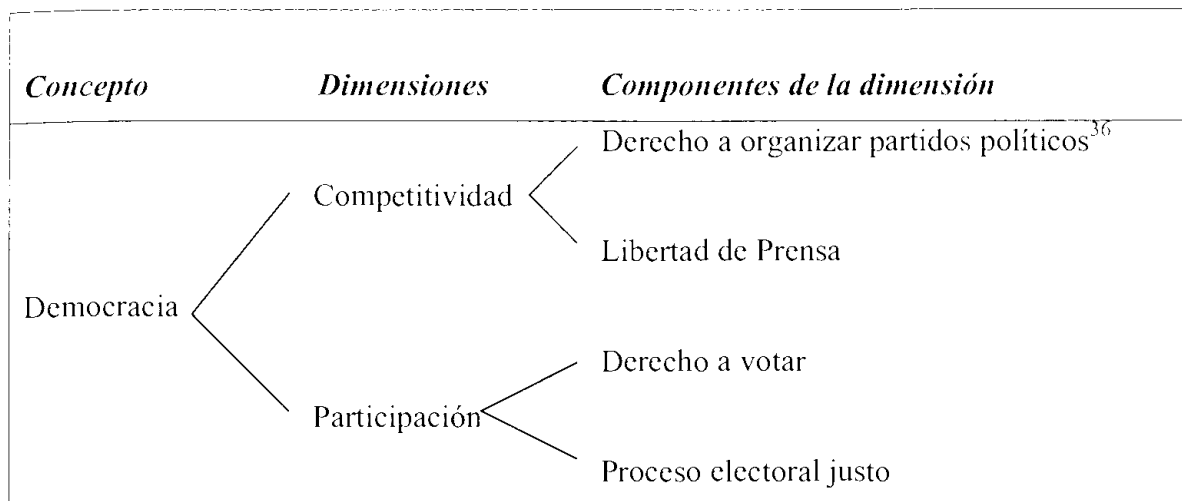
En primer lugar, Munck y Verkuilen (2000: 5-7) proponen considerar sólo dos dimensiones como parte del concepto de democracia (competencia y participación), en tanto que “las libertades civiles” son componentes de estas dimensiones, evitando lo que

³³ Diversas perspectivas han tratado la ambigüedad teórica en la que se encuentran el conjunto de estos casos intermedios, denominándolo como zona neblinosa (“foggy zone”, Schedler: 2002: 37-9) o gris (“gray zone”, Carothers: 2002: 9-11), o crepuscular (“twilight zone”, Diamond: 1999: 22).

³⁴ “La analogía con el embarazo es que la democracia en cualquier grado de avance en que se encuentre, no puede ser una democracia a medias: hay un punto de partida de inicio” (Przeworski; 2000: 57, traducción mía).

los autores denominan un problema de “redundancia”³⁵, tal como apreciamos en la estructura jerárquica conceptual, plasmado en el siguiente cuadro.

Cuadro No.2: La estructura lógica del concepto “DEMOCRACIA” y sus dimensiones.



Fuente: Munck y Verkuilen, 2000: 6.

Por su parte, Przeworski (1995: 15) señala que basta sólo un rasgo fundamental para identificar a una democracia: “*su carácter de competencia abierta a la participación*”, ya que una real competitividad entre intereses en conflicto, implica la existencia de derechos políticos suficientemente amplios, así como de una participación electoral, aunque ésta no llegue a ser universal. Asimismo, afirma que un enfoque conceptual de la democracia centrado en la participación electoral es relevante para análisis de países en Europa Occidental, ya que sus conflictos predominantes fueron en torno a la extensión del sufragio, más no así para los casos de los regímenes latinoamericanos.

³⁵ “... así, para asegurar la organización lógica del concepto, el primer error conceptual que el analista debe evitar es el error de la redundancia, el uso de dimensiones cu un mismo nivel o la desagregación que no es mutuamente exclusiva y así fracasar en introducir nuevas y claras distinciones.” (Munck y Verkuilen, 2000: 7, traducción mía).

³⁶ Sólo algunas de las libertades mencionadas anteriormente aparecen en esta estructura del concepto “democracia” (dado que es sólo un ejemplo para estructurar lógicamente el concepto de democracia), por lo que podemos incluir otros derechos en algunas de las dimensiones señaladas; así por ejemplo el habeas corpus o inviolabilidad de la vida privada se pueden incluir como componentes de la dimensión de “competitividad”, o como subcomponentes del “derecho a votar”.

En una obra posterior, Przeworski (2000: 34) critica que el umbral de la participación electoral propuesto por Dahl es tan alto que los Estados Unidos no podrían ser calificados como una democracia sino hasta después de 1950. Por otra parte, se señala que la evidencia empírica de Europa Occidental y América Latina indican que la distribución de los votos entre los partidos cambia muy poco luego de cada ampliación del sufragio, de lo cual se desprende que aún cuando el sufragio es altamente restrictivo, los diversos intereses están siendo representados.

Por su parte, Bollen (1980: 373) argumenta que el criterio de participación electoral (o también denominado de “*inclusividad*” en referencia al sufragio universal), es una característica que puede darse tanto en regímenes políticos democráticos como no democráticos. Así, los diez países con mayor participación electoral a principio de la década de los 70’s según Mayor y Hudson (1972: tabla 2.8, citado por Bollen, *Ibidem*) han sido Albania, Corea del Norte, Unión Soviética, Rumania, Bulgaria, Costa de Marfil, Guinea, Checoslovaquia, Gabón y Alemania Oriental, ninguno de los cuales eran considerados como democráticos para esa época.

En último término, Bobbio (2000a: 25) señala que el requisito de la participación electoral está sujeto a criterios históricos y comparativos, sin los cuales no se puede determinar “*el número de quienes tienen derecho al voto para que se pueda hablar de régimen democrático*”, es así que sólo se utiliza este criterio para señalar qué sociedad es más democrática que otra en función de cuánto se acerca al sufragio universal para un determinado período. Esta salvedad permite reconocer los procesos de democratización que se dieron en diversos países europeos y latinoamericanos durante el siglo XIX.

La disparidad de criterios que usan los autores para definir a una democracia no permite que coincidan en cuanto a qué países son regímenes democráticos, sobretodo de aquellos que iniciaron su democracia en el continente americano. Así por ejemplo, Gasiorowski (1996: 471) considera que un régimen político es democrático en tanto que cumpla con los tres requisitos: competencia efectiva y pacífica entre grupos organizados para acceder a las posiciones de poder, alto nivel de inclusividad para la participación política tal como

es el sufragio universal, y un nivel suficiente de libertades civiles y política como para que se pueda asegurar la integridad de la participación y competencia política. Bajo estos criterios, el régimen político peruano es una democracia a partir de 1980 (Ibid: 480-1).

Por su parte, Doorenspleet (2000: 389, 400) coincide en que el Perú sólo tuvo un régimen democrático a partir de 1980, y utiliza el criterio de “democracia mínima”³⁷, que implica los requisitos de sufragio universal y competitividad, aún cuando no pueda existir un nivel elevado de libertades cívicas.

Otro de los “rankings” más reconocidos es el que propone Huntington, y según el cual divide tres grandes grupos de países democráticos según un criterio cronológico, y que denomina “*ola de democratización*”³⁸. La primera ola de países democráticos transcurre entre 1826 y 1926, la segunda ola va de 1943 a 1962, y finalmente la tercera ola se inicia a partir de 1974 (el autor no indica un término de culminación de esta última ola). Perú sólo figura como régimen democrático a partir de la segunda ola, más precisamente desde 1945. Sin embargo, Huntington no usa un mismo criterio para identificar un régimen político como democrático según se ubique en la tercera ola o en la primera ola. El estándar para los países que se ubican en el siglo XX (segunda y tercera ola) son más exigentes, en el sentido que incluyen como requisito el sufragio universal además del criterio de la competitividad³⁹; mientras que para los países que se ubican en el periodo de la primera ola (siglo XIX a comienzos del XX), sólo se demanda que el 50 % de los hombres puedan votar, aunque manteniendo el requisito de la competitividad, es decir

³⁷ “Las democracias mínimas son aquellos regímenes con sufragio inclusivo y competitivo, pero no necesariamente con un alto nivel de libertades civiles.” (Doorenspleet; 2000: 389, traducción mía). Por nuestra parte, asumimos el concepto de democracia mínima no sólo frente a la carencia de este requisito, sino en aquellos regímenes que no teniendo sufragio universal, tienen las condiciones necesarias para asegurar elecciones competitivas entre fuerzas políticas relevantes para acceder a los principales cargos de autoridad; este argumento lo desarrollaremos a continuación.

³⁸ “Una ola de democratización es un grupo de transiciones de un régimen no democrático a uno democrático, que ocurren dentro de un periodo específico de tiempo y que superan cuantitativamente a las transiciones en la dirección opuesta durante ese mismo periodo de tiempo. Una ola también involucra liberalización o democratización parcial en el sistema político, aunque no llegue a ser plenamente democrático.” (Huntington; 1991: 15, traducción mía)

³⁹ “Al grado, que por ejemplo, un sistema político que deniega la participación electoral a una parte de la sociedad - ya sea Sudáfrica con el 70% de su población, que es negra; o Suiza con el 50% de su población, que es femenina, o los Estados Unidos con el 10% de su población, que es negra del sur, es considerada como no democrática.” (Ibid: 7, traducción mía).

que “la autoridad ejecutiva tenga el respaldo de una mayoría parlamentaria o que haya surgido de elecciones populares y periódicas” (Ibid: 16). Esta disminución del estándar que hace Huntington para calificar a los regímenes políticos le permite introducir a algunos países latinoamericanos en la primera ola (Argentina, Uruguay, Colombia y Chile). Por otro lado, Przeworski (2000:104-5) considera que Perú es una democracia sólo a partir de 1939, aún cuando sus requisitos para considerar a un régimen como democrático son menos exigentes: tan sólo la competitividad del proceso electoral (Ibid: 15).

Cuadro No.3: Año del primer régimen democrático en diversos países americanos según diferentes criterios de clasificación de diversos autores.

	Gasiorowski (1996)	Doorenspleet (2000)	Huntington (1991)*	Przeworski (2000)
No. de requisitos para considerar un régimen como democrático	3: competencia, sufragio universal, libertades civiles	2: competencia, sufragio universal	1.5: competencia, y al menos que más de 50% de los hombres que voten	1: competencia
Argentina	1983	1973	Un poco antes de la 1era Guerra Mundial (Primera Ola)	1912
Chile	1952	1955	Principios de 1930 (Primera Ola)	1891
Colombia	1958	1958	Entre 1826 -1926 (Primera Ola)	1910
Costa Rica	1949	1949	1949 (Segunda ola)	1919
Brasil	1946	1985	Fines de 1940's (Segunda ola)	1946
Bolivia	1982	1982	Entre 1943 – 1962 (Segunda ola)	1979
Ecuador	1984	1980	Entre 1943 – 1962 (Segunda ola)	1947
Estados Unidos		1920	1828 (Primera Ola)	1830
Perú	1980	1980	Entre 1943 – 1962 (Segunda ola)	1939
Uruguay	1918	1952	Entre 1826 -1926 (Primera Ola)	1942
Venezuela	1947	1963	1945-6 (Segunda ola)	1945

Fuente: Bibliografías citadas.

* Huntington no precisa las fechas exactas en que estos países iniciaron su primer régimen democrático, con excepción de unos pocos países. Los criterios que se menciona sólo son válidos para los países de la primera ola, para el resto de regímenes políticos Huntington retoma el requisito del sufragio universal.

Una de las características más notorias en esta tabla es la incongruencia respecto de los autores respecto al año en que estos países empiezan a ser democráticos; estas diferencias pueden ser explicadas por los diversos criterios mínimos que se consideran como requisitos para una democracia. Así, la tendencia general que reproduce este cuadro es que “*a menos criterios mínimos*” de un autor, “*mayor es la antigüedad*” en que califica a un régimen como democrático. Sin embargo, aún considerando estas discrepancias en cuanto a los criterios mínimos, existen muchas incongruencias en cuanto a esta tendencia, ya que por ejemplo en el caso de Uruguay, el autor que propone los requisitos más exigentes (Gasiórowski) identifica a este país como democrático con mucha más anticipación (1918) que aquellos que proponen el umbral menos exigente (1952 en Doorenspleet, 1942 en Przeworski). Por lo tanto, hemos de atribuir tales discrepancias a carencias de información empírica de estos países por parte de estos autores.

Por su parte, Huntington explica que es difícil y arbitrario señalar una fecha precisa para poder calificar a los países como democráticos durante el siglo XIX, por lo cual adopta el criterio de rebajar el requisito de al menos 50% de la participación electoral masculina, con el fin de tomar en cuenta el contexto de este siglo, en el cual apenas surgen las instituciones democráticas modernas. Sin embargo, no deja de ser arbitrario señalar una cifra determinada como umbral de calificación democrática para los regímenes políticos, ya que este 50% representa aproximadamente sólo la mitad del sufragio universal (25%), considerando que las mujeres no votaban en este siglo. Por otra parte, este autor coloca a Perú como régimen democrático en la “segunda ola” (es decir cuando sí considera pertinente ambos requisitos de participación y competitividad), cuando éste solo tiene sufragio universal a partir de 1980.

Todas estas inexactitudes, inconsistencias y divergencias de opinión nos permite retomar la crítica que Carothers hace al paradigma de la transición democrática (2002:20), como un producto intelectual para una determinada época y que, por tanto, necesita ser renovado en la medida que el tiempo ha pasado y se encuentran desajustes entre los

conceptos y la realidad empírica⁴⁰. Parafraseando tal postura, podemos decir que es necesario desarrollar un concepto más flexible (menos exigente) de régimen democrático, que nos permita incorporar el contexto del siglo XIX en los países de América Latina; algunos de los cuales (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Costa Rica) formaron parte de una corriente democratizadora liberal durante fines del siglo XIX y comienzos del XX (gobernantes electos, parlamento activo, prensa libre, partidos políticos), así como una significativa expansión del derecho al voto (sin necesariamente llegar al sufragio universal).

Tales procesos democratizadores difícilmente pueden ajustarse a un concepto de democracia que se construye a partir de la segunda mitad del siglo XX, momento histórico en el cual las estructuras de los Estados – Nación están ya sólidamente constituidas, y por tanto el proceso de institucionalización favorece la integración de los actores políticos a este marco jurídico y político. Mientras que en estos países latinoamericanos durante fines del siglo XIX, estas tempranas experiencias democratizadoras que abrían las puertas a la competencia electoral y al pluralismo se daban en un contexto de partidos altamente personalizados, con sociedades muy segmentadas y excluyentes, y con relaciones patrimoniales y clientelísticas muy arraigadas en la dinámica política.

En ese sentido, una alternativa de adaptación del concepto de régimen democrático es sugerida por O'Donnell (1993: 1355-61) para los países que se abren a procesos democratizadores pero con una dinámica política muy peculiar, la cual “mezcla” rasgos propios de una poliarquía (elecciones competitivas y algunas libertades civiles como la libertad de prensa, expresión y asociación) con otros claramente autoritarios (“circuitos de poder” privatizados en ciertas zonas del territorio y notorias carencias de ciudadanía para muchos grupos sociales). La propuesta específica de O'Donnell para estos casos es reconocer el carácter democrático del régimen político, pero a su vez enmarcarlo dentro

⁴⁰ “El uso frecuente del paradigma de la transición constituye un hábito peligroso al tratar de imponer un orden conceptual simplista y a menudo incorrecto acerca de un marco empírico considerablemente complejo” (Carothers; 2000: 15, traducción mía).

de un Estado que no es democrático (en la medida que no asume eficientemente la protección de los derechos ciudadanos ni garantiza el imperio de la legalidad en todo el territorio nacional). Hemos de anotar que para este autor el concepto de “Estado” es abarcador del concepto de “Régimen”⁴¹, ya que aquel implica el conjunto de relaciones sociales que constituyen un orden jurídico, social y político; por lo tanto trasciende el ámbito de las relaciones de poder (régimen) que este mismo orden ayuda a mantener y reproducir.

En suma, retomando la idea consensual de establecer un concepto mínimo y procedimental de un “régimen democrático”, aunque adaptándolo a un contexto histórico peculiar (fines del siglo XIX y comienzos del XX), asumimos el concepto de “democracia” que propone Przeworski (1995, 2000) y que se centra básicamente en el criterio de la competitividad para acceder al gobierno; en tanto que el requisito de la participación electoral inclusiva (sufragio universal) difícilmente podía considerarse como viable en América Latina en este periodo, cuando ningún país europeo ni Estados Unidos lo habían implementado en esas mismas fechas. Además, introducimos algunas de las formas específicas en que una democracia puede ser organizada, ya que como veremos Lijphart (1999: 1-3, 31-47) propone un “modelo consensual” de la democracia que genera algunas excepciones a este criterio de la competitividad.

La condición de competitividad en un régimen democrático implica dos aspectos principales: la incertidumbre en los resultados electorales, y el carácter transitorio de los conflictos (Przeworski; 1995: 18-22). La incertidumbre en un régimen democrático no implica infinitas posibilidades en el acontecer político futuro, lo cual imposibilitaría el cálculo de probabilidades de los actores sometidos a la competencia; es así que Przeworski señala que se trata de una “*incertidumbre organizada*”, en la medida que la indefinición de un resultado ocurre dentro de un margen de posibilidades calculable y

⁴¹ El concepto de “régimen” para O'Donnell es específicamente político y es definido como “*el conjunto de patrones, explícitos o no, que determinan los canales y las formas principales de acceso a los principales cargos de autoridad, las características de los actores que son admitidos o excluidos a tales accesos, y los recursos y estrategias que ellos pueden usar para ganar tales accesos*” (1993: 1360, traducción mía).

predeterminada por un conjunto de reglas de juego⁴². Por otra parte, el carácter transitorio de los conflictos remite a una de las características más relevantes de la democracia: la alternancia⁴³. Los resultados de un conflicto no son permanentes en una democracia, de tal manera que “el perdedor” tiene posibilidades de ser “el ganador” en la siguiente oportunidad, así las pérdidas y ganancias de los actores son rotativa; en consecuencia, los actores tienen incentivos para respetar un resultado desfavorable en el presente, en la perspectiva de que su triunfo futuro sea igualmente respetado. Por lo tanto, un indicador cualitativo para evaluar la existencia de una democracia es reconocer si se dan alternancias de gobierno al interior de un régimen político (Pasquino; 1999: 98-9).

En síntesis, la democracia es un sistema en el cual los actores compiten en un escenario regulado, donde ninguna fuerza controla el desenlace *a priori*, y tampoco puede modificarlo *a posteriori*; por ende, el mantenimiento y la transferencia de poder no resulta un privilegio personal, sino un mecanismo normado y aceptado por los contendientes.

Otro elemento “*sine qua non*” acerca de la competitividad en un régimen democrático es el rol protagónico que desempeñan los partidos políticos, tanto en la configuración de las instituciones que regulan la dinámica del proceso político, como en la orientación de ciertos resultados específicos. Por una parte, los partidos políticos representan los intereses de los grupos e individuos de la sociedad (de lo cual proviene el nombre de “democracia representativa”). Por otro lado, los partidos actúan orientados por una lógica estratégica, la cual los conduce a formular sus propios intereses (más allá de la mera agregación de los intereses económicos y sociales de sus representados) y seguidamente articulan estrategias para alcanzar objetivos que satisfagan estos intereses. Lógicamente, en un escenario en el cual los recursos políticos y económicos no son suficientes para

⁴² “Debe tenerse presente que “incertidumbre” puede significar que los actores no saben qué puede ocurrir, que saben lo que es posible pero no lo que es probable, o que saben lo que es posible y probable pero que no qué ocurrirá. La democracia sólo es incierta en este último sentido. En efecto, los actores saben lo que es posible, puesto que los desenlaces posibles vienen determinados por el marco institucional; saben lo que es probable que suceda, pues la probabilidad de un desenlace concreto depende de la combinación de un marco institucional y de los recursos con que intervengan las diferentes fuerzas en la competencia. Lo que no saben es cuál será el desenlace concreto.” (Przeworski; 1995: 19).

⁴³ “La democracia es un sistema en el cual algunos partidos pierden las elecciones.” (Ibid: 14).

satisfacer los intereses de todos los actores políticos relevantes, la consecuencia inmediata es la **competitividad**.

Un proceso alternativo a la competitividad entre partidos políticos es la **cooperación**, por medio de la cual se definen las reglas de juego de la competencia e incluso se logran acuerdos concretos sobre alguna política pública, que no pasan por mecanismos de consulta electoral y por tanto del principio de la mayoría, sino que son producto de negociaciones entre los dirigentes de los partidos políticos, que busca maximizar el tamaño de esas mayorías y alcanzar el consenso⁴⁴. Sin embargo, la cooperación no es necesariamente antagónica o contraria a la competitividad, ya sea por que ambos procesos se intercalan con mucha frecuencia (antes o después de las elecciones los partidos políticos negocian acuerdos y cursos de acción coordinados), y por que ambos procesos son consecuencia de la existencia de múltiples centros de poder, los cuales representan el pluralismo inherente de una democracia (Pasquino; 1999:93).

El carácter representativo de la democracia y los procesos de competencia-cooperación entre los dirigentes de los partidos, implica que gran parte de la dinámica política transcurre al margen de la influencia directa de la sociedad, y donde las votaciones son mecanismos últimos que vienen a ratificar intermitentemente los acuerdos logrados por esta élite política nacional⁴⁵. A su vez, estos mecanismos de cooperación de la élite política sirven para aminorar el costo de los contendientes que pierden en los procesos electorales, en la medida que una negociación implica una redistribución (no necesariamente equitativa) de los recursos para todos los actores relevantes y además genera un mayor compromiso de éstos, tanto en el acatamiento de los resultados

⁴⁴ "El modelo mayoritario concentra el poder político en manos de una simple mayoría, mientras que el modelo consensual trata de compartir, dispersar y limitar el poder en distintas formas. Otra diferencia es que el modelo mayoritario es excluyente, competitivo y con adversarios, mientras que el modelo consensual es incluyente, negociador y sujeto a arreglos; por esta razón, la democracia consensual puede también ser denominada como "democracia negociadora" (Lijphart; 1999:2, traducción mía)

⁴⁵ "En todas las democracias modernas, el proceso de deliberación y la supervisión cotidiana del gobierno están bien resguardadas de la influencia de las masas. La consulta directa a los votantes sobre cuestiones políticas concretas a menudo se describe, de hecho, como plebiscitarismo, término con connotaciones negativas. (Przeworski; 1995: 20).

sometidos a elección popular, como integralmente con el respeto a la reglas de funcionamiento de este régimen político⁴⁶.

En conclusión, la **democracia vista como un juego interactivo de élites en competencia**, no se aleja sustantivamente de las condiciones mínimas procedimentales propuestas por Dahl (1971): elecciones libres y abiertas, competencia política genuina, libertades civiles. Por lo tanto, consideraremos el criterio de la competitividad y las reglas operacionales que Przeworski propone (2000: 19-31), las cuales servirán de base para evaluar si el régimen político peruano entre 1895 a 1919 fue democrático. Estas reglas son:

- 1° El Poder Ejecutivo es elegido ya sea indirecta o directamente en comicios populares y multipartidarios, y debe dar cuenta sólo y exclusivamente a sus votantes o la legislatura que los elige.
- 2° El Poder Legislativo es elegido en comicios populares y multipartidarios (aunque sólo se considera a la Cámara de Diputados), además esta asamblea debe tener poderes efectivos para legislar.
- 3° Debe haber más de un partido; por partido se entiende una lista independiente de candidatos que postulan a una elección. Se descalifica como democrático a aquellos regímenes en los cuales los gobernantes usan su victoria electoral para establecer un régimen no partidista, o unipartidista (mediante la prohibición de otros partidos), o un dominio electoral permanente. También se descalifica a aquellos gobiernos que clausuran inconstitucionalmente una legislatura y reformulan las leyes electorales para su propia ventaja. Si un régimen cambia inconstitucionalmente las leyes a su favor pero a continuación cede el gobierno a la oposición, entonces éste régimen es considerado aún democrático. La

⁴⁶ “Esta combinación de consenso tácito sobre las reglas del juego y una integración comprensiva predispone a que los miembros de la élite visualicen los resultados decisionales como suma positiva o juego de “política como negociación”, más que un juego de suma cero o de juego de “política como guerra”. Con un acuerdo sobre las reglas del juego político y con los procesos de toma de decisión asegurados, los diversos jugadores aceptan incluso las decisiones que no le son gratas, ya que tienen la expectativa de conseguir resultados favorables en los temas que consideran vitales” (Higley y Burton: 1989: 19, traducción mía).

ausencia de una oposición legal es una razón muy frecuente para considerar a un régimen como una dictadura.

- 4° Alternancia, regla que se aplica cuando los regímenes han superado satisfactoriamente las tres anteriores. Si los gobernantes mantienen el poder continuamente por la vía electoral por más de dos periodos entonces no pasa el requisito exigido para un régimen democrático. Sin embargo, si este caso se da en el pasado y se tiene información que el partido gobernante eventualmente perdió una elección y permitió que la oposición asuma el gobierno, entonces se considera que todo el periodo por el cual estuvo este partido fue democrático.

Una excepción importante a considerar en la primera regla es la que refiere a la elección del ejecutivo mediante comicios multipartidarios, ya que en algunos casos consideramos que un régimen político es democrático aún cuando el poder ejecutivo ha sido electo en comicios donde ha participado una sola lista (es decir no ha habido posibilidad de elección para el electorado), con la condición de que haya sido producto de un acuerdo amplio de los partidos políticos relevantes, y por lo tanto éstos están representados en el nuevo gobierno, lo cual es considerado por Lijphart (1999: 34) como una de las primeras características de un modelo democrático consensual: gabinetes de coalición amplia que comparten el poder ejecutivo y que incluyen a todos los partidos, o a los más importantes.

El propio Przeworski no estaría en desacuerdo con esta excepción a la primera regla, ya que considera como régimen democrático a Colombia, que desde 1958 mantuvo un gobierno de coalición entre los Partidos Liberal y Conservador, el cual fue elegido en comicios populares de una sola lista durante 4 elecciones presidenciales consecutivas. Casos similares son reseñados por Lijphart para los regímenes políticos de Bélgica y Suiza durante el siglo XX, los cuales también son considerados como democráticos por Przeworski.

Esta excepción también se puede aplicar en el caso del régimen político peruano durante 1895 a 1919, en el cual hubo elecciones presidenciales con una sola lista (producto de un acuerdo multipartidario) en 1895, 1899, 1912, 1914 y 1915. Sin embargo, las elecciones

parlamentarias si tuvieron un carácter competitivo entre los partidos existentes (civil, demócrata, leguístas, constitucional, liberal, democrático nacional, unión cívica). Por otro lado, se constata la actividad de una vigorosa oposición aún durante los gobiernos electos con criterios consensuales. Por tanto, podemos decir que se mantuvo la condición de competitividad de los partidos en la arena política, más allá de los acuerdos a los que se sometieron estas agrupaciones políticas en determinados momentos.

Respecto de la primera regla de evaluación democrática propuesta por Przeworski (la elección del jefe de gobierno) aplicada a nuestro caso de investigación; podemos afirmar que hubo 5 presidentes elegidos por votación popular (Nicolás de Piérola, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo –durante dos periodos- y Augusto Leguía) y 2 presidentes elegidos por el Congreso, el cual asumió sus facultades constitucionales cuando las elecciones directas no fueron efectivas o cuando hubo de nombrar un presidente provisional (Guillermo Billinghurst y Oscar Benavides, respectivamente); y un presidente interino por fallecimiento del titular (Serapio Calderón).

De estos presidentes, tres pertenecieron al Partido Civil (Candamo, Pardo y Leguía), tres al Partido Demócrata (Piérola, López de Romaña y Billinghurst), uno al Partido Constitucional (Calderón⁴⁷), y finalmente uno fue de orientación política independiente (Coronel Benavides). Casi todos los presidentes electos terminaron su periodo constitucional, y el Presidente provisional e interino culminaron sus funciones hasta la elección de un nuevo mandatario; con las excepciones de Candamo (por fallecimiento en ejercicio de sus funciones), Billinghurst (por un derrocamiento militar avalado por el Congreso⁴⁸) y José Pardo (por un golpe Estado en julio de 1919, dos meses antes de su finalización legal), con quien se cierra este ciclo de competitividad política, el cual fue el periodo de mayor estabilidad en la historia política del Perú.

⁴⁷ Calderón asumió como Presidente interino a la muerte de Candamo en Abril de 1904, aquel desempeñaba las funciones de 2do Vicepresidente, y le correspondió asumir la primera magistratura por que el 1er Vicepresidente, Lino Alarco, también había fallecido 9 meses antes.

⁴⁸ “El golpe del 4 de febrero de 1914 contra Billinghurst fue, en rigor, un movimiento constitucional, es decir, un contragolpe del Congreso, ante el conocido intento de aquél por disolverlo y cuando ya había clausurado algunos diarios (como *La Prensa*) y suspendido por decreto, las garantías individuales.” (Planas: 1994: 98).

Un rasgo polémico, en este ciclo de presidentes elegidos, lo constituye la elección de los presidentes Candamo en 1903, Pardo en 1904 (en su primera elección) y Leguía en 1908, en tanto que participaron como listas únicas sin que medie un acuerdo pluripartidario, aunque tampoco sin ninguna exclusión de lista o prohibición de algún partido o candidatura. La razón que daba la oposición (Partido Demócrata y Partido Liberal) para no participar era que no existían las suficientes garantías de imparcialidad del órgano regulador de las elecciones (el Jurado Electoral Nacional) y por tanto de la integridad de los resultados. Sin embargo, como veremos más adelante, el líder de la oposición demócrata liberal (Nicolás de Piérola) ya había perdido una elección en 1901, cuando sus propios partidarios tenían la mayoría en esta misma Junta. Por otro lado, la alianza civil constitucional que respaldaba a estos candidatos oficialistas, tenía un amplio respaldo electoral a nivel nacional, como demostraban los resultados electorales a nivel parlamentario. Más allá de las argumentaciones de ambos grupos respecto de la legitimidad de aquella elección⁴⁹, el hecho de que no haya existido una elección entre dos partidos no permitió demostrar las acusaciones de un posible fraude, en tanto que los resultados sólo confirmaron al candidato único, por lo que no se puso a prueba la imparcialidad del Jurado Nacional Electoral.

Respecto de la segunda regla de evaluación democrática de un régimen político (la elección de los representantes legislativos), constatamos que durante el periodo de 1895 a 1919 se renovaron las curules parlamentarias por tercios (tanto en la cámara de diputados como en la de senadores) cada dos años con absoluta regularidad.

Una de las excepciones de esta trayectoria la constituyó la imposición de un tercio de los parlamentarios por el Presidente Leguía en 1911 y que le permitió alcanzar mayoría parlamentaria en ambas cámaras; sin embargo, este hecho que constituyó un grave

⁴⁹ Respecto de la elección de Manuel Candamo en 1902, si bien no hubo competidor, el líder opositor Nicolás de Piérola reconoció posteriormente la legitimidad de su victoria.

atentado contra el ordenamiento constitucional⁵⁰, no implicó la clausura del congreso, o la prohibición de algún partido político, o la modificación de alguna ley electoral que le diese mayor ventaja al partido gobernante; finalmente, el candidato oficialista (Antero Aspíllaga) perdió la elección presidencial en 1912; lo cual anula cualquier calificación autoritaria que se pudiese atribuir a este periodo, según una de las estipulaciones dadas por Przeworski (2000: 24): *“si el partido gobernante eventualmente sufre una derrota electoral y permite que la oposición asuma el poder, el régimen es clasificado como democrático por todo el periodo en que este partido estuvo en el gobierno bajo las mismas reglas (traducción mía).”*

Por otro lado, cabe destacar el rol estratégico y autónomo que tuvo el parlamento durante la “República Aristocrática”. Por una parte, se constituyó en una costumbre la defensa de proyectos de ley de los miembros del ejecutivo (ministros) ante las cámaras legislativas, las cuales no necesariamente recibían el apoyo de sus propios partidarios y no eran extrañas las censuras al conjunto del gabinete, el cual tenía que renunciar⁵¹, tal como veremos en los siguientes capítulos. Asimismo, la existencia de una escena política y de un debate abierto en asuntos de Estado, permitió la relevancia de políticos parlamentarios que tuvieron mucha influencia en la sociedad civil y en la toma de decisiones del poder ejecutivo, lo cual a su vez fue un factor que explica el destacado nivel de la polémica en los recintos legislativos durante este periodo.

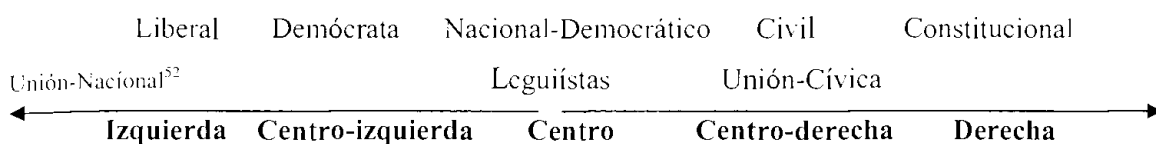
En cuanto a la tercera regla de evaluación democrática (pluripartidismo y oposición); ya se ha mencionado la existencia de un conglomerado de partidos políticos, los cuales

⁵⁰ Es importante añadir que este exceso de autoritarismo del Presidente Leguía, suscitó la constitución de un sólido frente opositor en el Parlamento que reunió a todo el espectro de partidos políticos, con excepción de los “leguístas” (incluso ocasionó la ruptura del partido oficialista mediante la formación de un ala opositora y otra tendencia gobiernista); asimismo los principales medios de comunicación escrita de la época: *El Comercio* y *La Prensa* se sumaron a este bloque de protestas y denuncias de esta irregularidad inconstitucional.

⁵¹ “Un Presidente del Congreso pertenecía de hecho y de derecho a la Trinidad de las potestades decisivas. Las interpelaciones parlamentarias tenían una fuerza extraordinaria. (...) Los Ministros de Estado acudían con temor, pero con honradez, a medirse con sus interpelantes del Congreso. Este se hallaba formado por un personal no más ilustrado, pero sí más independiente que sucesivos cuerpos legislativos.” (Sánchez: 1973: 127, citado en Planas: 1994: 115-6).

podemos ordenar en una línea de continuidad de izquierda – derecha en la siguiente forma:

Figura No. 1: Ubicación de los Partidos Políticos en un eje de continuidad izquierda-derecha durante el régimen político entre 1895 a 1919.



Fuente: Elaboración propia.

Tanto la composición de ambas cámaras del parlamento, la rotación de la presidencia de las mismas y de la presidencia de los gabinetes durante todo este periodo, condensó las tendencias predominantes de los principales partidos de este periodo (Civil, Demócrata, Leguístas, Constitucional y Liberal), y reflejó una democrática alternancia en aquellos cargos de alta relevancia política (ver Anexos 2, 3 y 4). Asimismo, este periodo reflejó una intensa dinámica política entre el ejecutivo y una beligerante oposición, la cual asentada en el parlamento y en muchos medios de comunicación escrita, significó un permanente contrapeso de poder a un régimen político presidencialista y con fuertes tendencias centralizadoras, como veremos en los siguientes capítulos.

Finalmente, la última regla de Przeworski se refiere a la alternancia en el gobierno. Si bien el Partido Civil (en alianza con su socio menor, el Partido Constitucional) estuvo en el poder durante tres periodos seguidos entre 1903 a 1912, antes fue gobierno el Partido Demócrata durante seis años (entre 1895 a 1901), y más tarde asumió la presidencia un destacado dirigente de la oposición, Guillermo Billinghurst.

⁵² La Unión Nacional estaba liderada por el ideólogo anarquista Manuel Gonzáles Prada, tuvo una influencia a nivel propagandístico y panfletario entre 1895 a 1901, pero no resulta un actor político relevante en tanto que nunca participó en alguna elección, ni por ende tuvo representantes parlamentarios. Su orientación ideológica antisistémica definió su estrategia política orientada a la denuncia radical y a una composición partidaria muy reducida. A pesar de todo ello, este partido nunca fue prohibido por el régimen político. A su auto-disolución, varios de sus integrantes emigraron a otros partidos (principalmente al partido liberal y a la corriente leguista dentro del partido civil).

La segunda década del siglo XX representó la constitución de alianzas más inclusivas en el gobierno, si bien ello no contribuyó a aminorar la intensidad de los conflictos políticos de ese periodo; es así que Billinghurst ganó la presidencia en 1912, apoyado por una amplia, pero efímera, alianza (civilistas, liberales, y una facción demócrata); y de modo similar, otra coalición multipartidaria (civilistas, liberales y constitucionales) colaboró en su destitución y en la conformación de un gobierno provisional encabezado por el Coronel Benavides (1914 – 1915). Finalmente, el último gobierno de este régimen resulta de una convención de todos los principales partidos del momento, en la cual compiten internamente el civilista José Pardo y el constitucionalista Pedro Muñiz, resultando triunfador el primero. Por tanto, y una vez más, en las elecciones presidenciales de 1915 hubo una sola lista presidencial que contó con el apoyo de los principales partidos; sin embargo, el consenso pronto se diluye dando origen a una oposición desleal, que aprovechando de la popularidad de su líder (Augusto Leguía) y de una reñida elección presidencial, asume el gobierno mediante un golpe de Estado el 4 de julio de 1919.

En síntesis, tomando en cuenta los cambios de partidos o coaliciones en el gobierno, podemos afirmar que en estos 25 años de régimen político, hubo cuatro alternancias: 1903 (cuando asume el poder el civilista Manuel Candamo), 1912 (cuando es elegido presidente el demócrata Guillermo Billinghurst, aunque sin el apoyo oficial del su partido), 1914 (cuando es nombrado presidente provisional el coronel Benavides), y 1915 (con la elección de José Pardo como candidato presidencial en una convención de partidos).

Por tanto, concluimos que el régimen político peruano cumplía los requisitos mínimos para ser considerado como una democracia, si tomamos en cuenta los criterios de evaluación que proporciona Przeworski, y las precisiones históricas de este periodo que resultan de nuestra presente investigación. Sin embargo, esta calificación proviene desde la perspectiva de una “democracia mínima”, es decir que no basta con estos requisitos para considerar que es una democracia consolidada, así constatamos irregularidades notorias (fraudes electorales para el caso de la renovación de los tercios, ausencia de voto

secreto, reacciones no legales de los perdedores en las elecciones y recurrencia constante a los intentos de golpes de Estado, elitismo y exclusión de grandes mayorías nacionales como la clase media y los sectores populares, entre otros), que afectaban seriamente la calidad de esta democracia, y que influyeron en su durabilidad y su posterior colapso.

A pesar de todo ello, podemos mencionar otras características de este periodo que reafirman el carácter competitivo y plural de la política peruana. Así, la tendencia principal que se mantuvo durante el régimen fue el respeto a la libertad de prensa. En el momento de constituirse el nuevo régimen en 1895, luego de una prolongada y sangrienta guerra civil, se restituye la plena vigencia de la Constitución de 1860, la cual prescribía la libertad de imprenta en su artículo 21º: *“Todos pueden hacer uso de la imprenta para publicar sus escritos sin censura previa, pero bajo la responsabilidad que determina la ley”*. Bajo tal precepto es que este periodo de la historia peruana se caracteriza por la publicación de numerosos periódicos y revistas de diversas tendencias políticas, tanto en Lima como en provincias. Hemos podido ubicar y rastrear algunas de estas publicaciones, y constatamos que cada gobierno tuvo un periódico de oposición que destacaba por su crítica y por la importancia que mantenía en la opinión pública, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 4: Reseña de Periódicos y Revistas de Oposición a los Gobiernos entre 1895 a 1919.

Gobierno	Periódicos y Revistas de Oposición
Nicolás de Piérola, 1895 – 1899	La Opinión Nacional (vocero del Partido Constitucional);
Eduardo López de Romaña, 1899 - 1903	El Tiempo (de orientación liberal), La Prensa (vocero del Partido Demócrata).
José Pardo, 1904 – 1908	La Prensa
Augusto Leguía, 1908 - 1912	La Prensa, El Comercio
Guillermo Billinghurst, 1912 - 1914	La Prensa, El Mosquito, La Crónica, Revista Variedades.
Augusto Benavides, 1914- 1915	La Prensa
José Pardo, 1915 – 1919	El Tiempo, El Mosquito (ambos voceros leguístas). Revistas: Variedades, La Razón, Nuestra Época, Germinal

Fuente: Elaboración propia utilizando las siguientes referencias: Miró Quesada (1961), Karno (1970), Garret (1973), Planas (1994).

Aún considerando la tendencia general de respeto a la libertad de expresión por parte del Estado, las relaciones entre el gobierno y la prensa no fueron fáciles, ya que hubieron incidentes de confrontación que vulneraron la libertad de imprenta, pero que se resolvieron mediante la instancia judicial o la intermediación del Congreso; referimos a continuación algunos de ellos:

- a) Durante el gobierno de Piérola y producto de la denuncia de un crimen atribuido a la policía desde las páginas de *La Opinión Nacional* (17 de abril de 1896), su director Andrés Avelino Aramburú (de orientación cacerista) fue encarcelado por negarse a revelar su fuente. Pudo ser liberado pagando una fianza, pero éste se negó y alegó que permanecía en prisión en defensa de la libertad de prensa. Este asunto concluyó cuando la Corte Suprema ordenó la libertad del periodista, dictamen que fue acatado por el Gobierno. Este hecho revela, según Basadre (1968: 198, v.X), no sólo la vigencia de las libertades civiles, sino la independencia del Poder Judicial.
- b) Las relaciones entre el Gobierno de Leguía y la prensa fueron particularmente conflictivas, especialmente después de la ruptura al interior del Partido Civil, que originó una corriente “leguista” y otra de orientación más institucional; a partir de ese momento, los dos principales diarios de la época: *El Comercio* y *La Prensa*, respaldaron a la oposición y criticaron acremente al gobierno. Un primer incidente sucede luego del intento del golpe de Estado el 29 de mayo de 1909 por parte de demócratas y liberales, y es cuando el Gobierno reacciona severamente y encarcela (además de los subversivos) al director del diario *La Prensa*, Alberto Ulloa y a sus principales redactadores: Leonidas Yerovi, Luis Fernán Cisneros y Julio Portal, a pesar de no estar comprometidos con este hecho. La misma noche de la detención, elementos gobiernistas saquearon la imprenta y destruyeron las maquinarias, asimismo el Gobierno clausuró este diario. Luego de más de un año de inactividad (marzo de 1910), el juez instructor Vega ordenó la devolución de la imprenta a sus dueños, quienes pudieron continuar así su labor periodística de oposición (Ibid: 63-4, v. XII; Miró Quesada, 1961: 394). Un segundo incidente

conflictivo durante este primer gobierno de Leguía sucedió cuando el joven catedrático José de la Riva Agüero publicó un artículo en el diario *El Comercio* (12 de setiembre de 1911) censurando la política del gobierno y demandando la libertad de políticos demócratas y liberales que habían participado en el intento de golpe de Estado de 1909. Riva Agüero fue apresado al día siguiente, pero casi inmediatamente los estudiantes protestaron en una gran manifestación pública. A propósito de la dura represión contra el mitin estudiantil, ese mismo día la oposición en la cámara de diputados presentó una moción de censura contra el Ministro de Gobierno Salazar, sin embargo la censura no pudo ser discutida, en tanto que llegó la noticia al recinto parlamentario de que en ese mismo momento el Ministro ya había ordenado la liberación de Riva Agüero, y presentado su renuncia, la cual fue prontamente aceptada (Basadre; 1968: 129-31, v. XII).

- c) El gobierno de Billinghurst también mantuvo relaciones conflictivas con la prensa, en la medida que era un gobierno de minoría parlamentaria, con muy pocos apoyos en los medios de comunicación, y dado que asumió una estrategia agresiva con el apoyo de sectores populares (obreros y estudiantes). Un primer incidente ocurrió el 19 de diciembre de 1912, y fue el ataque de una turba de elementos gobiernistas contra la imprenta Berrío, la cual editaba el periódico satírico de oposición *El Mosquito*, asimismo asaltaron el domicilio del director de este libelo, Florentino Alcorta (de filiación leguista). Este hecho fue motivo de que la bancada parlamentaria de oposición censurara al Ministro de Gobierno y Jefe de Gabinete, Elías Malpartida. Otro conflicto (más grave aún que el anterior) ocurrió el 10 de setiembre de 1913, cuando se atentó contra la imprenta de La Crónica, que asimismo editaba la revista de oposición *Variedades*, muriendo el portero de esta empresa producto de la explosión (Ibid: 232, v. XII). Aunque no se supo finalmente de los autores de dicho atentado, se sospechó de partidarios del gobierno con fines de intimidación, la cual era una estrategia que habían adoptado

en anteriores oportunidades contra políticos de oposición⁵³. Finalmente, el tercer incidente se sucedió durante las maniobras conspirativas de la oposición contra el gobierno, el cual a su vez pretendía clausurar inconstitucionalmente el Congreso; así se ordenó el arresto de varios diputados, entre los cuales estaba el director del diario de oposición *La Prensa*, Alberto Ulloa, y se dispuso el cierre de este periódico el 3 de febrero de 1914. Esta clausura no duró demasiado en la medida que al día siguiente se produjo el pronunciamiento constitucional del Ejército, respaldado por la declaratoria de vacancia de la presidencia por parte del Poder Legislativo (Planas; 1994: 137).

- d) Por último, hacia fines del segundo gobierno de Pardo (quien se había caracterizado por el respeto a la libertades civiles), se clausuró el diario *El Tiempo* (mayo de 1919) que había desempeñado una dura campaña contra el Partido Civil y especialmente contra el Presidente Pardo, quien señaló haber “*soportado durante tres años y medio durante los cuales mantuvo sistemáticamente sus ataques contra mi persona apelando a todas las injurias y calumnias imaginables*” (Basadre; 1968: 14, v. XIII). Los propietarios interpusieron un recurso de *habeas corpus* que fue resuelto a su favor por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo el gobierno apeló, durante la tramitación de esta apelación sobrevino el golpe de Estado de Leguía.

Otro de los rasgos destacados de este periodo fue la autonomía que demostró el Poder Judicial en gran parte de los eventos políticos que requirieron su intervención, lo cual implicó en muchas ocasiones enfrentamientos con el Poder Ejecutivo (como ocurrió en los casos ya vistos acerca de los fallos que ratificaron la libertad de imprenta contra los excesos del Gobierno). La destacada presencia del Poder Judicial en la escena política fue

⁵³ “El 13 de julio de 1913 un cartucho de dinamita fue colocado en el hogar del Presidente del Senado Rafael Villanueva y también se efectuó un asalto a la residencia del ex-Presidente de la República Augusto B. Leguía.” (Basadre; 1980: 81).

a raíz de la reforma electoral de 1912, la cual le otorgó la facultad de revisar la legalidad de los procesos (en casos de apelaciones de algún resultado electoral)⁵⁴.

1.3. Círculos viciosos de la democracia: un esquema analítico.

Como ya se mencionó anteriormente, nuestra clasificación del régimen político peruano durante 1895 – 1919 como una democracia mínima, alude al cumplimiento de las reglas del requisito de competitividad y pluralismo propuesto por Przeworski (2000: 28-9); sin embargo, no dejamos de constatar una serie de dificultades políticas que impidieron su consolidación y lo mantuvieron en una situación de crisis e inestabilidad permanente.

Por una parte, existen criterios más estructurales que no facilitan el asentamiento del nuevo régimen político, como es el hecho de la ausencia del Estado, ya sea en el sentido que propone de O'Donnell (1993: 1358-61) respecto de países donde el poder en ciertas regiones ha sido privatizado por grupos locales (hacendados), como es el caso de la sierra peruana o de la amazonia en Brasil; territorios en los cuales el imperio de la legalidad no llega a establecerse y los derechos ciudadanos de sus habitantes están severamente limitados. O carencia del Estado en el sentido de Mainwaring y Scully (1995:21-8), en referencia a sistemas de partidos incipientes y débilmente institucionalizados, en los cuales predomina el personalismo y carisma de los líderes antes que el interés colectivo del partido; asimismo, subsisten prácticas patrimoniales y clientelísticas por la ausencia de canales de representación e intermediación entre los intereses sociales y el gobierno; además no existen los suficientes mecanismos constitucionales o consuetudinarios para procesar y resolver los conflictos; y finalmente se experimenta un alto grado de incertidumbre en la relación entre líderes y sus seguidores, lo cual se manifiesta en *“inmovilismo, parálisis política, conflictos entre el ejecutivo y su propio partido”* (traducción mía, Ibid: 26).

⁵⁴ *“La Corte Suprema, que había objetado en un principio asumir responsabilidad sobre los procesos electorales, cumplió con ejemplar independencia las nuevas funciones que le encomendó la ley de 1912. Sus fallos en las elecciones de 1913, 1915, 1917 y 1919 (los procesos judiciales de este último año llegaron a ser truncados por el golpe de Estado del 4 de julio) ostentan características que honran a quienes lo firmaron. Gozaban entonces el más alto tribunal de justicia de un prestigio indiscutible. (...) Gracias a estos juristas ingresaron al Poder Legislativo provincianos notables, nombres populares en sus circunscripciones, pero ajenos al favor oficial”* (Basadre: 1980: 78-9).

Efectivamente, el Perú de finales del siglo XIX y comienzos del XX tenía un régimen político competitivo y pluralista, pero convivía con una sociedad fragmentada y excluyente, donde una minoría blanca y urbana predominaba sobre una masa indígena que habitaba en los predios rurales y que servía como mano de obra barata a la producción agrícola de las haciendas. Sin embargo, más que una simple dicotomía social, la segunda mitad del siglo XIX experimentó la gradual emergencia de actores intermedios (comerciantes, industriales, banqueros, abogados, médicos, catedráticos) que impulsaron una reforma liberal que se plasma en la Constitución de 1860, en la conformación del Partido Civil (1871) y en el triunfo electoral del primer gobierno civil de la historia republicana (1872 – 1876)⁵⁵.

Luego del retroceso institucional ocasionado por la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile (1879 – 1883), la reconstrucción socio-económica e institucional se realiza conjuntamente entre las élites oligárquicas y los nuevos ciudadanos que se afincaban tanto en las provincias, como en los nuevos sectores económicos de la capital. Es así que se constituyen los Partidos Demócrata y Constitucional en 1884, la Unión Nacional en 1891, la Unión Cívica en 1892, y posteriormente al triunfo de los civiles en la revolución de 1895, se organizan el resto de partidos que conformarían el sistema de partidos de este régimen político⁵⁶: el Liberal en 1901 y el Nacional Democrático en 1915.

Sin embargo, si evaluamos el vínculo inorgánico de estos partidos con la sociedad civil, la predominancia de los líderes sobre el colectivo, su composición organizativa

⁵⁵ El historiador latinoamericanista Marcello Carmagnani hace una revisión de sus propios planteamientos anteriores (1984) y sugiere reconsiderar el rol protagónico que jugaron los actores políticos no oligárquicos en la transformación liberal de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina: *“En efecto, los actores intermedios –artesanos, abogados, comerciantes, etcétera– juegan un papel muy importante tanto en su relación con los segmentos altos como con los bajos. Si quisiéramos seguir utilizando la noción de política clientelar, deberíamos partir de la existencia de tres conjuntos: el de ciudadanos – vecinos, ciudadanos – intermedios, ciudadanos – notables. La intersección de estos tres conjuntos en las elecciones y en la acción municipal da origen a un espacio, el político, que los acuerdos y pactos tienden a expandir en la acción práctica.”* (1998: 9).

⁵⁶ *“Definimos un sistema de partidos como un conjunto de patrones que regulan la interacción de la competencia entre partidos. Esta noción sugiere algunas reglas y regularidades en cómo los partidos son ampliamente observados...”* (Mainwaring y Scully; 1995: 4, traducción mía).

intermitente (solo en periodos electorales) y la indisciplina de sus militantes (como veremos en los siguientes capítulos), concluiremos que el grado de institucionalización de estos partidos y del sistema de partidos durante este periodo es débil e incipiente (la edad promedio de vida de los partidos relevantes al primer año del régimen democrático es de tan sólo 12 años)⁵⁷.

Mainwaring y Scully señalan que la falta de institucionalización del sistema de partidos puede inhibir la consolidación del régimen democrático, y subrayan además que la debilidad de las instituciones democráticas fue una razón para el quiebre democrático para el régimen político peruano un siglo más tarde, es decir cuando el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992 (Ibid: 28). Sin embargo, estos mismos autores reconocen que el grado de institucionalización del sistema de partidos no determina – per se – el éxito o fracaso de una democracia⁵⁸, en todo caso puede ser considerado tan sólo como una condición necesaria, pero no suficiente.

Más allá de un cierto contexto estructural que pueda ser más o menos favorable para la consolidación de un régimen democrático, la condición suficiente para la misma está determinada por las actitudes y estrategias que tienen los actores frente a las reglas de juego del sistema democrático. En este sentido, “*la consolidación democrática se alcanza*

⁵⁷ Mair construye una tipificación de partidos y la vincula con determinados periodos históricos. Así, el modelo de partido ubicado entre fines del siglo XIX y comienzos del XX es denominado como partidos de élite o partidos de cuadros, y se caracterizan por actuar en contextos con limitaciones para el sufragio (como es el caso del requisito de la alfabetización para poder votar), por una composición interna de personajes vinculados por lazos familiares e intereses económicos, y que por tanto tenía poca necesidad de una organización formal o altamente estructurada; asimismo la sociedad política de la época era relativamente pequeña, por lo que estos partidos no actúan como intermediarios de sectores sociales, sino como mecanismos directos de distribución de privilegios y de contactos personales de miembros de una élite (1997: 97-8, 110-1). Como veremos más adelante, en el contexto histórico peruano estos partidos tenían más vínculos con sectores sociales que lo que esta tipificación supone, además de encontrar rasgos meritocráticos en su interior y de capacidad representativa en sus integrantes, además de los exclusivamente adscritos que se les atribuye.

⁵⁸ La medición del grado de institucionalización del sistema de partidos en algunos países de América Latina que hacen Mainwaring y Scully (Ibid: 17, Tabla 1.6) confirma que el alto grado de institucionalización no necesariamente implica estabilidad y consolidación como sucede actualmente con el caso de Venezuela y Colombia, o viceversa que la poca institucionalidad sea un factor de desestabilización, tal como se da en los casos de Bolivia y Brasil hoy en día, que tienen regímenes democráticos consolidados. Según Linz y Stepan (1978: vii), aquellos que toman como referente principal para explicar un quiebre democrático sólo el factor estructural dejan la impresión de que la ruptura era inevitable.

cuando los actores se comprometen con la política de elecciones como el medio principal por el cual acceder al poder y configurar la agenda política" (traducción mía, Ibid: 27). Tal compromiso es definido por Palma (1990: 137-55), como el "*only game in town*" es decir, cuando ningún actor político relevante intenta derrocar el régimen democrático y por tanto la gran mayoría de la ciudadanía considera que cualquier cambio político debe emerger desde las propios mecanismos que la democracia dispone para este fin. Por su parte, Linz y Stepan (1996: 5) adoptan este mismo término, y consideran que la consolidación democrática se alcanza cuando "*todos los actores relevantes en la política se habitúan al hecho de que el conflicto político será resuelto de acuerdo a las normas establecidas, y que las violaciones de estas normas son a la vez que inefectivas, costosas*" (traducción mía).

En síntesis, consideramos que además de un contexto institucional, es preciso realizar un análisis de la lógica de los actores para poder entender la dinámica interna de un régimen democrático, es decir cómo los actores reaccionan frente a los incentivos para seguir o no las reglas de juego, especialmente en un régimen político con predominancia de líderes carismáticos (Nicolás de Piérola, Andrés Cáceres, Augusto Durán, Guillermo Billinghurst, Augusto Leguía). Asimismo, cómo las estrategias implementadas por estos actores contribuyen al fortalecimiento y estabilidad del régimen democrático o más bien socavan el mismo, y finalmente considerar las posibilidades alternativas que tuvieron los actores y que hubieran permitido alcanzar resultados diferentes a los que históricamente se dieron, de tal manera de evitar una explicación de índole determinista⁵⁹.

Es así que la propuesta analítica de la presente investigación se enmarca en la teoría de la elección racional, la cual focaliza su atención en la dimensión estratégica de los actores, y

⁵⁹ Existen dos tipos de críticas a los planteamientos de índole estructural; por una parte que son enfoques deterministas en el sentido que sobredimensionan el peso de sus variables independientes y no pueden explicar los casos en los que existiendo el mismo juego de condiciones previstas se produce un resultado diferente, a lo más son calificados como casos desviados o anómicos. Por otro lado, se señala que aunque establecen asociaciones entre componentes del sistema político, **no explican los procesos mismos de la estabilidad o del cambio**, los cuales no están dados ni son automáticos; es decir, son aproximaciones del tipo "caja negra", que ignoran los fundamentos micro, pierden de vista a los actores, y no especifican cómo ni quienes actúan en las dinámicas políticas (Kalyvas; 1996: 13-14).

en el estudio de sus preferencias y estrategias. Esta perspectiva pretende brindar explicaciones centradas en los individuos, donde sus acciones u omisiones son un factor decisivo para entender los resultados históricos a los que llegan, más allá de los constreñimientos estructurales o institucionales; aunque éstos son considerados como punto de partida, es decir como “conjuntos de oportunidades” o “incentivos” que orientan e influyen en los procesos de decisión de los actores.

Tratándose de la fase de transición y constitución de este régimen político (1895 a 1899), estudiamos las respuestas que los actores tienen frente a los rezagos de una dictadura derrotada militarmente, los vínculos que empiezan a constituir una élite política nacional como base de un régimen que duraría un cuarto de siglo, y el modo en que esta élite implementa nuevas formas de procesar el conflicto dentro de las reglas de juego que aún subsisten y de las nuevas reglas que se instituyen a partir de 1895. Además, no dejamos de considerar las históricas secuelas autoritarias que aún persistieron, como es el caso de las formas violentas y no institucionales para acceder al poder (rebeliones e intentos de golpes de Estado, ver anexo no.7: Levantamientos armados durante el régimen político entre 1895 a 1919), o los vicios electorales que se heredan de una práctica política asentada en el clientelismo y la manipulación de grupos sociales (fraudes, duplicidades, no reconocimientos del triunfo del adversario, intolerancia ante la contingencia de una derrota electoral).

A continuación, ya en plena fase de evolución y posterior quiebre de este régimen (1900 – 1919), evaluamos las consecuencias perversas e inesperadas de los cambios políticos que se dan en el nuevo régimen (por ejemplo, las sucesivas reformas electorales en 1896, 1908, 1912, 1915), y que teniendo la intención original de dar estabilidad política, no impiden que se reproduzcan, bajo nuevos estilos, estrategias de los actores políticos que buscan acumular poder en el corto plazo, a pesar de que ello genera interacciones de suma cero entre los adversarios, y por ende producen resultados negativos en el largo plazo para el conjunto de jugadores y para el propio régimen (deslegitimización, socavamiento de instituciones, emergencia de actores antisistémicos, ruptura).

Es así, que a partir de una propuesta analítica basada en una lógica que relaciona instituciones y actores, desarrollamos la hipótesis central de la presente investigación, la cual propone que la explicación del quiebre del régimen democrático en el Perú está asociada a estrategias de acumulación de poder en el corto plazo que los actores privilegian en la competencia política. Estas estrategias tienden a ser de competencia ilegítima (hacer trampas) y se intensifican en un proceso de “Círculos Viciosos”, que a la manera de un “*dilema del prisionero*”, conduce a que los actores políticos relevantes privilegien los intereses de corto plazo de cada uno, en desmedro de los intereses del largo plazo de todos ellos, vale decir de la continuidad del propio régimen⁶⁰.

La presente investigación hace un análisis de las “trampas” o acciones políticas que violan las reglas del juego político y que permite acumular poder en el corto plazo, pero sin llegar a producir necesariamente una ruptura del orden democrático. El ámbito de estas reglas tiene un carácter básicamente formal, es decir se sujeta al marco legal de un Estado que ha adoptado la democracia como régimen político. Sin embargo, también hacemos referencia a acuerdos entre actores políticos, y que revisten la formalidad necesaria para la revisión de su cumplimiento por un tercero o árbitro, que pueda dictaminar y resolver la sospecha o denuncia de la comisión de una trampa por parte de alguno de los actores.

El criterio fundamental por el que un juego político sigue siendo democrático, a pesar de la existencia de acciones ilegítimas, es que dichas trampas no constituyan el mecanismo principal, por el cual los actores acceden o logran mantenerse en el poder. De tal modo, los actores que resultan perjudicados por estas acciones ilegítimas tienen aún posibilidades de recurrir a instancias arbitrales que juzguen y decidan revertir las acumulaciones de poder logradas por sus oponentes, además de subsistir espacios públicos de denuncia (libertades de expresión y prensa) que se conviertan en contrapesos

⁶⁰ “Tal como O'Donnell argumenta, en el vicioso dilema del prisionero, en el cual todos los jugadores buscan satisfacer sus intereses de corto plazo aún a pesar de sus intereses de largo plazo, los costos organizacionales, personales o colectivos tienden a prevalecer cuando las instituciones democráticas son débiles. La democracia en sí misma puede ser amenazada si los actores de la élite temen que las incertidumbres que prevalecen en un contexto de instituciones débiles los puede llevar a la catástrofe.” (Mainwaring y Scully; 1995: 27, traducción mía).

de las ganancias obtenidas ilegítimamente. Asimismo, cualquiera de los jugadores tiene la opción de responder con estrategias igualmente ilegítimas y así lograr contrarrestar las ventajas del primero.

Esta última respuesta produce un círculo vicioso de trampas, ya que siguiendo la lógica del dilema del prisionero, el que juega “limpio” frente a un tramposo resulta con los peores resultados, lo cual explica los incentivos que generan las trampas para reproducirse en otros jugadores que inicialmente podríamos calificar de “honestos”. Así, cuando ambos tipos de actores ingresan a un proceso de implementación de estrategias ilegítimas, el resultado tiende a ser equilibrado para ambos jugadores (**equilibrio viciado de ganancias**), pero el resultado global (la sumatoria de las ganancias y las pérdidas de todos los jugadores) no es satisfactorio, ya que el régimen en sí mismo resulta deslegitimado y en consecuencia también los actores que forman parte del mismo.

Una lógica distributiva o de “suma cero” en las estrategias de los jugadores en un régimen democrático puede conducir a su ruptura. Esto sucede cuando alguno de los jugadores acentúa la tendencia viciosa del proceso y “*rompe la cadena de la elección democrática*”⁶¹, y emplea una estrategia tramposa que le permite acceder al poder (eliminar al adversario, hacer un golpe de Estado, impedir el proceso electoral o realizar un fraude por el cual se accede a la presidencia). Así, el paso de un régimen democrático a uno autoritario ocurre cuando las estrategias ilegítimas (conjuntos de trampas) devienen en el principal instrumento de acceso al poder.

Sin embargo, el escalamiento de trampas “definitivas” que genera un cambio de régimen puede no darse, y mantenerse una democracia “limitada”⁶² o electoral⁶³, y que

⁶¹ “Violaciones graves de cualquier condición invalidan el cumplimiento de cualquier otra. Si la cadena de la elección democrática es rota en algún lugar, las elecciones no implican que sean menos democráticas sino enteramente antidemocráticas.” (Schedler, 2002: 41, traducción mía).

⁶² “..... una vez iniciada la democratización, si sus defensores moderados temen la expansión excesiva de este proceso o quieren mantener las cuestiones polémicas fuera de la agenda de la deliberación colectiva, bien pueden auspiciar que se sigan imponiendo las antiguas restricciones a la libertad de los individuos o grupos a quienes estiman poco preparados para gozar del status de ciudadanos, o suficientemente peligrosos. Para estos casos hemos acuñado la expresión “democracia limitada” o “democradura”. (O’Donnell y Schmitter; 1994:23-4).

anteriormente hemos denominado como democracia mínima. Pero, como se muestra en los próximos capítulos de esta investigación, el proceso de deslegitimación de una “democracia con trampas” hace que este equilibrio sea precario y se aproxime peligrosamente a la frontera de posibilidades de una ruptura o quiebre.

Hacia una Tipología de las Trampas

La existencia de una democracia mínima o de un “equilibrio viciado de ganancias” implica una variedad de trampas que no sólo se dan durante los procesos electorales (tal como se enfoca en el artículo de Schedler; 2002: 39), sino también durante la rutina del funcionamiento de una democracia; así, un primer tipo de trampas son aquellas acciones ilegítimas que se cometen con el fin de acumular poder por parte de algunos de los actores en desmedro de sus adversarios (por ejemplo: el uso de recursos públicos para fines partidarios, o la exclusión ocasional de la oposición de las sesiones parlamentarias con motivo de alguna votación importante). Clasificamos a cualquier tipo de trampas con estas características como de “primer nivel”, según una escala de gravedad o intensidad.

El “segundo nivel” de trampas implica un escalamiento cualitativo respecto de las anteriores; es decir, una interferencia de poderes con el fin de evitar que ciertas autoridades (como el poder judicial o el poder legislativo) puedan invalidar las ganancias obtenidas por medio de estrategias ilegítimas. Este tipo de acciones pueden ser descritas como “trampas para evitar que se descubran o se sancionen otras trampas”. Estas acciones ilegítimas se ejecutan a partir de intervenir en organismos arbitrales (judiciales, electorales y constitucionales), mediante la colusión con los jueces (a través de incentivos económicos y políticos o por presiones indebidas como amenazas) o a través de la remoción de los mismos por nuevos miembros que favorezcan a determinadas orientaciones políticas. Este tipo de trampas agrava la situación de anormalidad de una democracia, en el sentido que la acerca al límite que la separa de un régimen autoritario.

⁶³ “La distinción entre democracia liberal y democracia electoral deriva de la idea común de que las elecciones son una condición necesaria pero no suficiente para una democracia moderna. (...) Las democracias electorales se las arreglan para conseguir procesos electorales justos, pero fracasan en institucionalizar otras distinciones vitales del constitucionalismo democrático, como son el Estado de Derecho, la transparencia política, la integridad burocrática y la deliberación pública.” (Schedler; 2002: 37, traducción mía)

Finalmente, tenemos el “tercer nivel” de trampas, y que refieren a los intentos directos de suprimir a la competencia, lo cual implica (por ejemplo), el intento de eliminar al adversario, ya sea físicamente como políticamente (prohibir o ilegalizar un partido), o la organización de un golpe de Estado o incursionar en un movimiento subversivo⁶⁴. Si bien, el éxito de este tipo de trampas significa la ruptura de un régimen democrático, los intentos fracasados son considerados en una sumatoria general de trampas, que nos permite construir un índice que nos indique la intensidad que alcanza la violación de las reglas del juego democrático durante un periodo determinado.

Un segundo eje de distinciones en las trampas la construimos en función del tipo de verificación que podemos hacer de ellas. Por lo tanto, si una trampa es ampliamente reconocida en las fuentes primarias y secundarias como efectivamente cierta, entonces la clasificamos como “trampa real”, mientras que si es tan sólo una denuncia que alguno de los actores realiza respecto de su adversario, entonces la denominamos como “trampa presunta” (una denuncia de trampa pueden provenir incluso de los medios de prensa y ser asumidas por otros actores políticos).

Las “trampas presuntas” son consideradas en nuestra construcción de un índice que refleje el grado de violación de las reglas de juego por tres razones: la primera es que la posibilidad de que no se haya podido comprobar la misma no la vuelve una acusación necesariamente falsa; en segundo lugar, la acusación refleja un desconocimiento de la legitimidad del triunfo adversario y genera una sospecha que enrarece el clima político, lo que representa un incentivo para respuestas igualmente tramposas. Finalmente, una denuncia puede ser una estrategia ilegítima para tratar de invalidar o restar legitimidad a un triunfo bien obtenido. Para el cómputo de nuestro índice de intensidad de violación de reglas, las trampas presuntas tienen un peso menor que las trampas reales.

⁶⁴ Nuestra atención se concentra sólo en las trampas de los diversos niveles de gravedad cometidas por actores relevantes de la escena política oficial. Por lo cual no cuantificamos los intentos subversivos de personajes locales que incursionan en levantamientos armados que no representan una amenaza seria para el régimen democrático.

El cruce de ambos criterios de clasificación de las trampas (el nivel de gravedad y el tipo de verificación), nos arroja un cuadro que pretende cuantificar el nivel de incumplimiento de las reglas de juego durante el periodo de un gobierno determinado⁶⁵, que a su vez nos permite apreciar el “clima” de interacción leal o desleal que existe al interior del régimen democrático⁶⁶.

Cuadro No.5: Índice de Intensidad de Violación de Reglas por los actores políticos según su tipo de verificación y nivel de gravedad

Tipo de Verificación de la trampa	Nivel de Gravedad de la trampa		
	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampa Presunta	1	2	3
Trampa Real	2	4	6

Un análisis dinámico de las trampas⁶⁷

Además de la clasificación de las trampas; nos interesa explorar una dimensión más dinámica de las mismas, por la cual explicar cómo un proceso de escalamiento de estrategias ilegítimas de acumulación de poder contribuye al paso de un régimen democrático a uno autoritario.

En primer lugar, pensamos que el eje explicativo de una transición política (un derrumbamiento democrático o la caída de una dictadura) está referido a un proceso que tiene lugar a partir del inicio de su régimen y a lo largo de su evolución. Es así que

⁶⁵ Las celdas de este cuadro contienen el valor por el que calificamos un determinado tipo de trampa; por tanto, este valor deberá ser multiplicado por el número de veces que se cometan este tipo de trampas en un lapso de tiempo. La sumatoria de los valores de todas las trampas (ponderadas según la calificación de este cuadro) nos arrojan un resultado por el cual podemos comparar el nivel de violación de las reglas de juego de cada uno de los gobiernos entre 1895 a 1919.

⁶⁶ “¿Cuál podría ser una prueba efectiva de «papel tornasol» para comprobar la lealtad a un régimen democrático? Una posibilidad obvia es un compromiso público a emplear medios legales para llegar al poder y rechazar el uso de la fuerza. La ambigüedad en estos compromisos públicos es evidencia prima facie de semilealtad, pero no siempre, como veremos, de deslealtad. (...) Nuestra opinión es que las condiciones que llevan a la semilealtad, o incluso a la sospecha de semilealtad, de participantes principales del juego político, tanto oposición como partidos de gobierno, explican el proceso de la quiebra, casi tanto como el papel de la oposición desleal.” (Liniz: 1987: 60, 72).

⁶⁷ “Son las características dinámicas las que explican el potencial para producir la caída en estos sistemas” (Ibid: 55).

enfocamos nuestra atención no sólo en la dinámica de los actores, sus interacciones y la respuesta que dan a los incentivos de su entorno institucional, sino que además ponemos nuestra atención en aquellos tipos de actores que jugaron un rol predominante en la constitución del régimen y que formaban parte de la élite política nacional. No se trata de diferenciar simplistamente entre actores políticos “buenos” y “malos”, los primeros de los cuales defenderían el bastión de la democracia, mientras que los otros estarían empeñados en tomar el poder por medios violentos. En nuestro caso específico de la quiebra del régimen político peruano entre 1895 a 1919, más que una mera diferenciación de actores leales, semileales y desleales, hemos de considerar la “mutación” de actores leales a semileales, y posteriormente a desleales, en la medida que la interacción de estrategias ilegítimas se hace más intensa.

En segundo lugar, nuestra perspectiva apunta a considerar que el orden resultante de un sistema democrático no es natural y definitivo, sino es un equilibrio artificial y contingente, de tal modo que la probabilidad de su consolidación o caída depende de la orientación estratégica que los actores tienen en su búsqueda del poder. Si la cooperación⁶⁸ o la competencia⁶⁹ coexisten como vías posibles para alcanzar estos fines; sin embargo, ciertos incentivos institucionales pueden hacer que la competencia desplace completamente a la cooperación en la opción estratégica de los actores, de tal manera que el juego tiende a ser distributivo o de “suma cero”, lo cual incrementa las posibilidades que las “trampas” sean el camino más directo y fácil para acumular poder.

En un escenario donde el juego tiende a estar “plagado” de trampas, las reglas del juego formal de la política democrática (que definen los medios legales para acceder al poder)

⁶⁸ El **elemento cooperativo** se deriva de la necesidad de los actores de llegar a acuerdos de conveniencia mutua, ya que por el mismo se obtienen determinadas satisfacciones de sus intereses; dicha interdependencia induce a generar un entendimiento respecto de determinadas reglas de juego que permitan la existencia y continuidad de un régimen político.

⁶⁹ El **elemento competitivo** resulta de la voluntad de cada una de las partes de lograr el mejor resultado para sus propios intereses, para lo cual requiere de interactuar con otros actores en un contexto de recursos limitados, y por lo tanto “*cada participante hace lo que juzga conveniente para él a la vista de lo que hacen (pueden hacer) los demás*” (Przeworski: 1995: 33).

son sustituidas por “meta reglas”⁷⁰ para asegurar el triunfo (lo que implica la no aceptación de la contingencia de los resultados posibles); por lo tanto se presentan las siguientes orientaciones estratégicas:

- 1era Meta Regla: **“el jugador tramposo nunca pierde”.**
- 2da Meta Regla: **“el jugador que se colude con el árbitro, nunca pierde”**
- 3era Meta Regla: **“en caso de conflicto agudo o guerra, el jugador más fuerte nunca pierde”.**

Estas “meta reglas” conducen a la constitución de un círculo vicioso en un juego político en donde prevalecen los rasgos competitivos, de tal manera que los jugadores que emplean métodos ilegítimos “arrastran” a sus adversarios a usar métodos similares con tal de contrarrestar sus pérdidas constantes e incluso de defender al propio régimen democrático; sin embargo *“una defensa de la democracia con métodos antidemocráticos es muy probable que no consiga equilibrarla de nuevo”* (Linz, 1987: 65).

En tercer lugar, nuestra búsqueda de corroboración o refutación de este modelo analítico nos conduce a investigar las interacciones políticas de los actores, y distinguir en ellas cuando se trata de eventos conflictivos o no – conflictivos, ; asimismo, reconocer el motivo de estos conflictos, cuál es el desenlace de cada uno de estos sucesos (quién gana, qué gana), cuál es la reacción de perdedor (si acepta o no el resultado), para finalmente evaluar si existió algún tipo de trampa en esta situación.

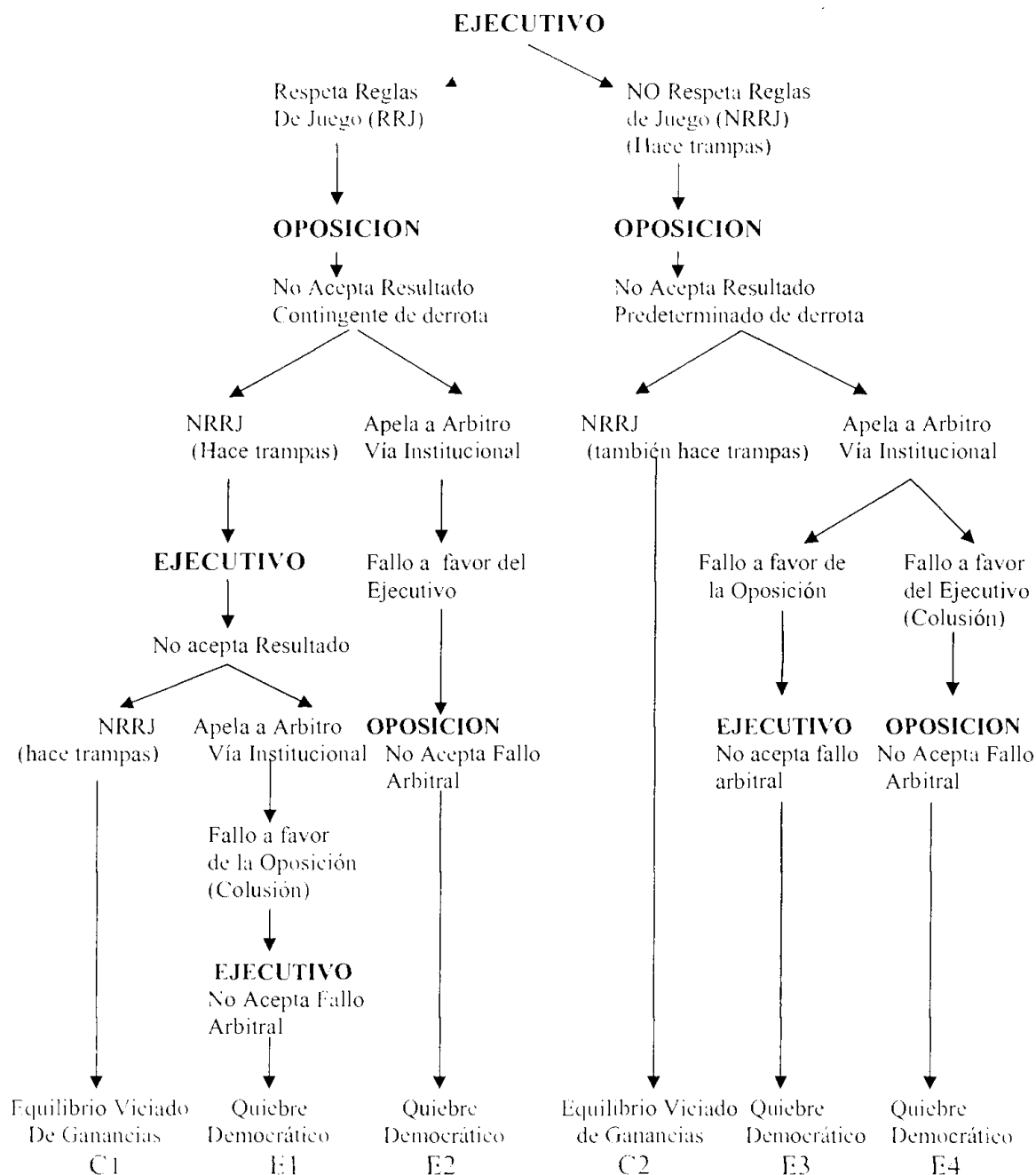
Una segunda fase de este recorrido empírico consiste en agrupar las observaciones de un conjunto de eventos políticos y trampas a lo largo de un período de gobierno, de tal modo de establecer si existe un escalamiento de estrategias ilegítimas en la medida que nos acercamos al quiebre del régimen político. Esta agregación de los eventos políticos nos permitirá visualizar en conjunto cómo y por qué terminan prevaleciendo los actores semileales y desleales (antes leales) en un régimen democrático, y por tanto la

⁷⁰ Entendemos por “meta reglas” a ciertas reglas que no se aplican a un juego en particular, sino que se refieren al objetivo que anima a todo jugador en cualquier tipo de competencia: ganar. De tal manera que sin importar las limitaciones normativas, prevalece un ordenamiento prescriptivo que apunta a conseguir exclusivamente la meta del triunfo.

intensificación de un proceso de interacción “vicioso” que afecte la legitimidad del régimen como tal. Finalmente, proponemos un esquema gráfico⁷¹ de las posibles formas de ruptura de un régimen democrático, a partir de la reconstrucción hipotética de una secuencia de interacciones estratégicas ilegítimas (conjuntos de trampas) entre dos actores (ejecutivo y oposición) inmersos en un proceso democrático viciado. Cada uno de los resultados de esta secuencia debe asumirse como un “tipo ideal” que ha de orientar los hallazgos que se encuentren en la exploración empírica.

⁷¹ Este esquema ha de interpretarse como parte de la segunda fase de la presente metodología analítica de un proceso de un derrumbe democrático, es decir que representa una síntesis de un conjunto de eventos políticos que se han caracterizado por interacciones ilegítimas.

Figura No. 2: Forma simplificada de una interacción estratégica el ejecutivo y la oposición en un proceso democrático viciado²



² La estructura "simplificada" de este modelo enfatiza las interacciones en las que predomina la presencia de trampas y resultados de "quiebre democrático" o "equilibrio viciado de ganancias". Sin embargo, un modelo ampliado considera una mayor cantidad de posibilidades, ya sea juegos que no tienen interacciones ilegítimas o que no afectan la legitimidad del juego; de tal forma que además se consideran resultados en los que un jugador acumula poder legítimamente, y por tanto no afecta la continuidad del juego (Ver Anexo No. 9: Modelo ampliado de interacciones estratégicas entre el ejecutivo y el legislativo en un régimen democrático).

Observamos en el esquema anterior, una proyección teórica de un proceso de intensificación de estrategias ilegítimas que conducen a resultados no deseados por la mayor parte de los jugadores. Estos son los “quiebres democráticos” (E1, E2, E3 y E4) y los “equilibrios viciados de ganancias” (C1 y C2).

Del trazado de estos procesos, la opción E2 no reproduce una orientación recíproca de trampas en todos los actores, reflejando sólo una oposición “desleal” o “antisistémica” en la medida que no acepta los resultados contingentes y desconoce los fallos arbitrales que no le favorecen, y en consecuencia abre las posibilidades de usar mecanismos no institucionales de conquista del poder. Esta oposición puede incluso obviar la apelación a tribunales arbitrales para proceder a intentar medios violentos en su estrategia política. Las demás opciones, más allá de las especificidades sobre quién empieza la comisión de trampas o se colude con los árbitros, reproducen trayectorias que conducen a un deterioro del régimen mediante una espiral ascendente de interacciones ilegítimas entre los actores.

Un “equilibrio viciado de ganancias” implica que ambos jugadores recurren a las trampas como medio para acumular poder, de tal manera que las ganancias se redistribuyen mejor que si uno sólo de ellos lo hiciera; sin embargo, si bien esta situación incentiva a que cualquiera de los jugadores (ya sea un actor antes leal que devino en semileal o desleal, o un actor plenamente desleal que quiere “sacar provecho” de este proceso degenerativo) pretenda cerrar este ciclo al ejecutar una trampa definitiva que le permita acceder en el poder, y por lo tanto elimine cualquier posibilidad de competencia que amenace esta conquista ilegítima.

En consecuencia, el analista puede comprobar la existencia de un tránsito degenerativo de una democracia hacia un régimen autoritario, cuando la reconstrucción empírica de los hechos configure un proceso que se muestre cercano a cualquiera de las opciones E1, E3 y E4, o alguna variante que combine algunas de las características de las mismas (intensificación de las estrategias ilegítimas por parte de todos los actores).

CAPITULO 2

TRANSICIÓN E INSTALACION DEL REGIMEN DEMOCRATICO: LA CONSTRUCCION INCONCLUSA DE UN MODELO CONSENSUAL.

“Sólo cuando hombres y partidos sepan bien que no hay otro medio de alcanzar el poder y de conservarlo que tener en su apoyo la mayoría nacional –y para tenerla es indispensable hacer mas o mejor que sus competidores en el público servicio– las cabalas de la intriga, y las torpezas de la fuerza, se habrán hecho imposibles como inútiles, ni habrá quien pretenda el poder sino defendiendo el bien común y trabajando por él.”

Nicolás de Piérola, Manifiesto de Julio de 1895

2.1. El accidentado tránsito del militarismo a un régimen civil durante el siglo XIX.

Como casi la mayoría de los países latinoamericanos durante el siglo XIX, el Perú se caracterizó por un gran desorden administrativo y político después que alcanzó la independencia de España en 1821. Como señala el historiador Jorge Guillermo Leguía: *“La anarquía fue el pecado original de nuestros libertadores. Obsesionado por la hegemonía de la Gran Colombia en América del Sur, Bolívar fue el primero que, para debilitar el poderío que la extensión y la riqueza era natural que dieran al Perú, estimuló las disensiones intestinas en el antiguo Virreinato”* (Citado en Miró Quesada; 1959: 9).

La historia política peruana estuvo marcada durante ese siglo por el caudillismo militar, por tanto se sucedieron unas a otras asonadas militares y rebeliones, que en caso de ser exitosas significaban que algún militar llegase a ser Presidente de la República, hasta la siguiente sublevación que encumbraba en el poder a otro militar. No había otra opción, ante la inexistencia de una sociedad civil y consecuentemente de una clase política, los militares se constituyeron en el actor protagónico de la incipiente política peruana⁷³.

Inicialmente fueron los vencedores de las guerras de independencia (Bolívar, La Mar, Santa Cruz, Orbegozo, Salaverry, Gamarra) los primeros que ejercieron el mando. Esta generación de militares que ganaron sus ascensos en las batallas o en la política, se les

⁷³ *“Los militares fueron el grupo social mas consistente en el país, dado que al terminar la guerra de independencia, otros sectores (la aristocracia sobreviviente, los comerciantes) se encontraban en crisis y empobrecidos.”* (Pease; 1995: 90)

puede clasificar dentro de la primera etapa anárquica, que culmina con la derrota y muerte del último de ellos, Agustín Gamarra, el 16 de agosto de 1842.

La segunda etapa anárquica se caracteriza por un esfuerzo (casi siempre infructuoso) de construir un orden, y “toman la posta” los militares más jóvenes que participaron en las guerras de la independencia: Vivanco, Castilla, Echenique, San Román, Diez Canseco, Prado y Balta. Ramón Castilla fue el que tuvo mayor estabilidad (si la medimos exclusivamente en años de permanencia en el poder) y gobernó de 1845 a 1851 y de 1855 a 1862. Sin embargo, el orden estuvo basado más en la fuerza de las armas que en el amparo de las leyes, por lo que fundar un partido político constituía una tarea titánica y sumamente arriesgada; mientras tanto, los civiles desempeñaban el rol de consejeros o ayudantes de los militares que se disputaban el poder, no atreviéndose a competir en un escenario, en el cual la hegemonía de la violencia era un requisito indispensable.

Basadre denomina a todo este periodo como el **primer militarismo**, que se inicia en la batalla de Ayacucho en 1824 y culmina con el asesinato del general José Balta en 1872. La reacción popular contra este atentado fue violenta, ya que capturó y colgó de las torres de la catedral a los asesinos: los coroneles Tomás y Silvestre Gutiérrez. El beneficiario directo de esta repulsa contra los militares fue Manuel Pardo, fundador del primer partido político en 1871 (el Partido Civil) y primer presidente civil en toda la historia de la república elegido en comicios populares y que además logra culminar su mandato (1872 – 1876), no sin mediar diversas sublevaciones y asonadas militares. La doctrina del Partido Civil fue sencilla, desplazar a los militares de la política y gobernar con dos criterios: la constitución y la eficiencia.

En este periodo surge una gran rivalidad política que tendría repercusiones en los siguientes 50 años: José Pardo versus Nicolás de Piérola. Este último, joven ministro de Hacienda del Presidente Balta, despertó el odio de los empresarios que tenían las concesiones del guano y que gracias a ello habían acumulado enormes fortunas. Piérola elimina dichos privilegios y lo entrega al mejor postor: el francés Dreyfus, gracias a lo

cual puede revertir la crisis fiscal por la que se atravesaba en 1869⁷⁴. Esos mismos empresarios forman con Pardo el Partido Civil y más tarde cuando éste asume la presidencia, impiden a Piérola asumir su cargo de diputado y le inician una serie de interpelaciones parlamentarias como ex – ministro, y que sólo la solvencia y habilidad política de Piérola puede salvar con honor. Sin embargo, el temperamento de Piérola también se carga de animosidad contra los civilistas y durante la década de 1870 organizaría hasta tres sublevaciones contra Pardo y su sucesor Prado. El antagonismo llegó a un punto culminante cuando Piérola es acusado del asesinato del ex – presidente Pardo en 1878. No hubo pruebas ni una sentencia judicial condenatoria, pero los pardistas (y especialmente la familia Pardo) no las necesitaban, la presunción les bastaría para asentar esta rivalidad.

La primavera democrática del primer gobierno del Partido Civil sólo duró un cuatrienio, no hubo un sucesor civil que pudiese continuar el trayecto iniciado, Pardo se inclinó por el general Mariano Ignacio Prado, quien asumió la presidencia en 1876; sin embargo la catástrofe de la guerra hundió nuevamente al Perú en el más profundo caos económico, político y social. La guerra del Pacífico (1879 – 1883) representó el momento más sombrío de la historia peruana, el país quedó devastado luego de 3 años de ocupación del ejército chileno.

En el momento más crítico de la guerra, cuando las defensas terrestres del sur y la armada peruana han sido avasalladas (dejando sólo la estela de los héroes Francisco Bolognesi y Miguel Grau) y el ejército chileno se preparaba para la invasión ante el estado de indefensión de su adversario, el Presidente Prado viajó al extranjero con la misión de comprar armamento. El vacío de poder es asumido prontamente por Piérola mediante un golpe de Estado, el cual recibe el apoyo masivo de la población y el ejército. Sin

⁷⁴ “El gobierno de Balta afrontó una crisis fiscal seria, generada por sus enormes gastos, los que incluían los servicios, una considerable deuda externa acumulada mediante préstamos contra ingresos anticipados del guano. Para hacer frente a la crisis nombró a Ministro de Hacienda a Nicolás de Piérola, el brillante y joven hijo descendiente de una aristocrática familia arequipeña. El programa de recuperación incluía la terminación del sistema de consignación local del guano. Negoció un contrato con una firma francesa, Hermanos Dreyfus, para que se hiciera cargo en forma exclusiva de la explotación y la venta del guano.” (Gilbert: 1982:19-20)

embargo, la superioridad militar chilena es el factor determinante del triunfo definitivo y de la ocupación de Lima el 16 de enero de 1881. El gobierno de Piérola se repliega a la sierra ayacuchana, y se inicia la resistencia contra el ejército invasor, en donde destaca la valentía y audacia del general Andrés Cáceres.

Varios gobiernos interinos y hasta paralelos (considerando un territorio vasto y desarticulado) se suceden durante la guerra (Francisco García Calderón, Lizardo Montero, Miguel Iglesias, Andrés Cáceres), pero finalmente se firma el tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883 entre el General Iglesias y el Contralmirante Patricio Lynch, por el cual el Perú perdía la provincia de Tarapacá, mientras que las provincias de Tacna y Arica pasaban a poder de Chile por diez años, al término de los cuales se acordó un plebiscito que determinaría la soberanía definitiva de las mismas.

La secuela de caos luego de la guerra del Pacífico fue el ambiente propicio para el surgimiento del **segundo militarismo** (1883 – 1895). El poder es disputado por los generales Cáceres e Iglesias y los resultados de esta guerra civil favorecieron al primero en la batalla de Huaripampa el 2 de diciembre de 1885; por lo que la tarea de la reconstrucción nacional le correspondió asumir al General Cáceres. En esta misión, recibe el apoyo de los civilistas, quienes a pesar de la desarticulación de su partido en 1879 y de los posteriores avatares militares se mantenían vinculados entre sí. Esta alianza civil – militar se consolida bajo la forma de una nueva agrupación política: el Partido Constitucional⁷⁵, nombre que anuncia la consigna del restablecimiento de la Constitución de 1860.

Son bajo estas condiciones en que se presentan el primer ensayo de una democracia consensual: el acuerdo de una reconstituida élite que apoya la candidatura presidencial del General Cáceres; la cual incluso no es disputada por la recientemente fundada

⁷⁵ El programa de dicho partido se orientaba en ese entonces, bajo principios liberales y democráticos. El estatuto del Partido aprobado en la ciudad de Arequipa en 1884 señalaba: “*El Partido Constitucional tiene por objeto sostener y desarrollar en la Política de la República, los principios democráticos, adoptando los consignados en la Constitución de 1860, y las leyes complementarias; pues considera el afianzamiento de esas instituciones, condición indispensable de orden y progreso.*” (Citado en Miro Quesada: 1961: 173)

agrupación política de Piérola, el Partido Demócrata (julio de 1884), la cual se abstiene de participar bajo el argumento de permitir la consolidación de un nuevo gobierno que afiance las instituciones y evitar nuevos derramamientos de sangre⁷⁶. El primer gobierno de Cáceres (1886 – 1890) tiene el mérito de restablecer el orden institucional y la dinámica de un régimen político con un marco de respeto a las libertades individuales y sociales; a su vez emprende la tarea de la reconstrucción nacional y del aparato del Estado⁷⁷.

Al término de su gobierno, Cáceres nombra como su sucesor a su primer vice – presidente Remigio Morales Bermúdez, quien participa en un proceso eleccionario en 1890 que excluyó al candidato de la oposición Nicolás de Piérola, y marginó “sutilmente” a su competidor civil al interior del Partido Constitucional mediante presiones militares; lo cual representó la ruptura del consenso que el gobierno de Cáceres había significado, y en la medida que se eliminaba el requisito de la competitividad en la elección presidencial (Przeworski; 2000: 19 – 22, 28 – 33), el régimen perdía la legitimidad de la condición democrática.

El continuismo militar no sólo sacrificaba el status democrático del régimen, sino también el alejamiento de gran parte de sus aliados civilistas, que al no tener expectativas fundadas de una alternancia, se ubicaron en la oposición desde su reducto más consolidado: el senado (en donde disponían de mayoría parlamentaria). Sin embargo, no todos los civiles optaron por situarse como adversarios de los militares, un grupo de ellos encabezados por Mariano Nicolás Valcárcel (quien encabezaba una fracción de diputados denominado el “Círculo Parlamentario) aún se mantuvieron como aliados y principales

⁷⁶ Ulloa reseña la posición de Piérola y el Partido Demócrata durante el inicio del primer gobierno de Cáceres en 1886: “El Partido Demócrata se mantuvo neutral. Triunfando Cáceres en aquella y habiendo asumido el poder, el Comité Demócrata deliberó sobre la situación. En sesión de 25 de Enero de 1886, Piérola hizo un fundamento público de su voto: “o no se disputa el círculo oficial la elección; o la campaña será, no de voto, sino de reto; lucha, no de sufragio sino de sangre (....) El ejercicio del Poder es demasiado duro sacrificio para ser soportable, si no ha de ser útil al país.... El Partido Demócrata no debe, pues, acudir a las elecciones” (1981: 298).

⁷⁷ Miró Quesada (1961: 176-7) opina que Piérola no podía oponerse a Cáceres en esos años, por la fuerza y popularidad que en ese momento tenía el llamado Brujo de los Andes, y por tanto optó por una estrategia de bajo perfil, de reorganización de su Partido y de espera que la alianza civil-militar fracasase.

“tecnócratas” del nuevo gobierno, al menos durante la primera fase (1890 -- 1892), hasta que comprobaron “*en carne propia*” que, ellos tampoco tendrían ninguna posibilidad de encabezar un futuro gobierno.

A pesar de que la transferencia del gobierno de Cáceres al de Morales Bermúdez significó el inicio de un régimen autoritario, éste aún conservó durante los primeros años la vigencia de ciertas libertades individuales y colectivas (garantías individuales que prescribía la constitución, libertad de prensa, mantenimiento del parlamento y tolerancia con ciertos sectores de la oposición). En suma, es lo que podríamos llamar una “dictablanda” o “autoritarismo liberal” (O’Donnell y Schmitter; 1994: 23, 30).

Estos espacios de liberalización se empezaron a cerrar aceleradamente a la muerte del Coronel Morales Bermúdez y cuando asumió *de facto* el coronel Justiniano Borgoño como nuevo presidente provisional (abril de 1894); sin embargo éste era sólo un preludio del verdadero poder “tras el trono”: el general Cáceres, quien asume el gobierno (en agosto de ese mismo año), no sin mediar una farsa de elecciones presidenciales: candidato único, prohibición de otros candidatos, manejo oficialista del proceso electoral, 99.9% de los votos emitidos a favor de Cáceres. Mientras tanto, la oposición civil se unificaba y radicalizaba su rechazo al régimen militar (Basadre; 1968: 96 – 101, v. X).

El desencadenamiento de la guerra civil (1894 – 1895) que enfrenta directamente a ambos bandos: civiles y militares, es el inicio del derrumbe autoritario y de la constitución de una nueva élite política nacional. Como veremos en el siguiente acápite, más allá de la superioridad militar de los caceristas, el apoyo que la insurrección civil recibe de la población, se constituye en uno de los baluartes centrales del triunfo de la misma y de la instauración de un gobierno de transición, el cual representa un nuevo régimen político y un prologando ciclo de gobierno civiles, que posterga el rol protagónico de los militares hasta la tercera década del siglo XX (“**tercer militarismo**”).

2.2. Gobiernos militares de Morales Bermúdez, Justiniano Borgoño y Andrés Cáceres (1890 – 1895): una transición no – cooperativa desde un autoritarismo liberal a una democracia.

La tarea de reconstrucción nacional a partir del término de la Guerra de Pacífico permitió la constitución de un consenso político nacional, en la cual participaron los tradicionales protagonistas durante el siglo XIX: los militares, y los emergentes actores políticos: los civiles.

Un antecedente importante en la conjunción de los intereses cívico – militares en el periodo 1886 – 1990 (primer gobierno del General Andrés Cáceres) son las reformas liberales plasmadas en la constitución de 1860, la cual tiene sólo unos pocos años de vigencia y es retomada como bandera programática por el Partido Constitucional, el cual si bien deviene como instrumento político de los militares en la década de los 90's, su fundación en 1884 y primer presidente (el civilista Manuel Candamo) reflejaba el acuerdo político de construir un Estado republicano basado en instituciones liberales: garantías individuales y colectivas, separación de poderes, autoridades ejecutivas y legislativas surgidas de elecciones, subordinación de la fuerza a la autoridad legal.

Otra tradición liberal que se asienta apenas se declara la independencia en 1821 y que configura la trayectoria política de la nueva república es el parlamento, el cual elige los primeros jefes de Estado y tiene un funcionamiento permanente a lo largo del siglo XIX, a pesar de la inestabilidad política del poder ejecutivo. No obstante que su elección era indirecta (colegios electorales) y eran ratificados por las propias cámaras, lo cual daba ocasión para el fraude electoral y para el uso de influencias políticas como instrumento principal para conseguir una curul, las diferentes fuerzas políticas del momento (conservadores y liberales) siempre estuvieron representados en el congreso; es así que el Congreso tuvo una marcada legitimidad política, se nutrió de una larga experiencia y tradición, y finalmente fue el punto de origen de la élite política nacional que dio lugar al nuevo régimen civil entre 1899 y 1919.

Esta continua presencia del parlamento incluso fue posible cuando las fuerzas militares chilenas ocupaban y controlaban el territorio nacional (1880 – 1883), y permaneció activa en pleno proceso de reconstrucción nacional, ya sea cuando el consenso político dominaba la escena política, como cuando la continuidad militar avasalla el ordenamiento institucional en 1890. Es significativo que la clausura inconstitucional del parlamento por el Coronel Borgoño en abril de 1894, fue uno de los detonantes que desencadenó la guerra civil.³⁸

El consenso político que enviste de legitimidad al gobierno de Cáceres (1886 – 1890) se fractura cuando los militares deciden continuar en el poder, a pesar de que ello también implicó la escisión del bloque oficial y el quiebre institucional; en consecuencia, el nuevo presidente, Coronel Remigio Morales Bermúdez, afrontaría una férrea oposición desde el Congreso y de la opinión pública, pero su subordinación a una institución corporativa (el ejército) y a su líder (Cáceres), a quien además le debe el cargo, le animó a reafirmar el carácter castrense de su gobierno (1890 – 1894) y de su posterior destino: un segundo mandato para el general Cáceres.

El sistema de partidos políticos en el Perú entre 1890 a 1895 estuvo integrado por el oficialista Partido Constitucional (de composición básicamente militar a partir de esta fecha), el partido de oposición Unión Cívica que tenía mayoría en ambas Cámaras del Congreso y que resultó de la alianza entre los civilistas y el Círculo Parlamentario, el Partido Demócrata en la oposición clandestina desde las elecciones presidenciales de 1890, cuando se le impidió participar y se le ilegalizó, y un pequeño partido de orientación anarquista y anticlerical, la Unión Nacional, o también conocido como Partido Radical (estos dos últimos sin representación parlamentaria).

El conflicto político que atraviesa este periodo se concentra claramente en dos polos: civiles y militares, clivaje que tiene pocos intermediarios y que alcanza su cenit en la guerra civil. Una vez que ya no hay un escenario de la política a partir de la clausura del Congreso en 1894 y la consecuente exclusión de la oposición, el teatro de los acontecimientos pasa a dos planos: el militar y el social. Ambos bandos despliegan sus

estrategias y armamentos, y buscan el apoyo de la población, la cual decidirá en última instancia al ganador de esta contienda.

Nos corresponde en este acápite, describir y analizar los gobiernos militares que se inician en 1890, sus estrategias para subsistir sin sus ex – aliados (los civilistas), el proyecto político que los distingue, la constitución de un frente único de la oposición, la guerra civil, el papel jugado por la población, y el desenlace final. Nos interesa explicar además cómo un tipo específico de régimen autoritario (“dictablanda” o “autoritarismo liberal”) se aísla políticamente, y el curso de los acontecimientos se dirige hacia una confrontación violenta; además de comprender el por qué del fracaso de los intentos de conciliación política, que pudieran haber conducido a que este cambio de régimen se diera a través de una solución negociada.

Gobierno del Coronel Remigio Morales Bermúdez (1890 – 1894).

Como ya hemos mencionado anteriormente, el proyecto de continuidad militar al término del primer gobierno del general Cáceres (1886 – 1890), rompe con la alianza que se mantenía con los civilistas desde 1884. Inicialmente, el coronel Morales Bermúdez era el candidato presidencial oficialista frente al civilista Francisco Rosas, ambos asumiendo el rótulo del Partido Constitucional. Unos meses antes del proceso electoral, el Presidente Cáceres se reunió con el candidato Rosas para pedirle que desista de sus aspiraciones y las postergue para el siguiente periodo (1894 – 1898), a lo cual éste se negó.

Otra candidatura presentada para estas elecciones presidenciales fue la Nicolás de Piérola. Ya un año antes, el Partido Demócrata se había reorganizado y presentado su Declaración de Principios, la cual reflejaba una clara y explícita ideología democrática: *“Proclama, sí, que los asociados son iguales ante la ley; que el manejo de los negocios públicos no es privilegio de una clase social determinada, sino que pertenece a todas”* (Partido Demócrata, 1912). El apoyo popular de este partido se demostró en un multitudinario desfile cívico que atravesó una gran parte de la ciudad (desde la Alameda de los Descalzos hasta la Plaza de la Inquisición) el 26 de enero de 1890. Sin embargo, el temor que suscitó esta candidatura en civilistas y caceristas, motivó el apresamiento de

piérola el 5 de abril de ese mismo año⁷⁸ y la clausura del diario "El País", vocero del Partido Demócrata, con lo cual quedaba eliminada esta opción de la competencia política.

Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 13 de abril de este agitado año. El método indirecto consistía en la elección de colegios electorales, los cuales eran a su vez aprobados por ambas cámaras parlamentarias; en las cuales Francisco Rosas tuvo el apoyo de la mayoría civilista de la cámara de senadores, mientras que Morales Bermúdez recibió el respaldo del Círculo Parlamentario encabezado por Mariano Nicolás Valcárcel⁷⁹, a su vez mayoría en la cámara de diputados. Sin embargo, el resultado final se resuelve por otros medios. *"Se trataba del mismo acto de sufragio, pero el criterio de una u otra rama del Legislativo era completamente opuesto al oficializar o al rechazar a los personeros de los partidos rivales. El Congreso proclamó sin escándalo a Morales Bermúdez después de que los Jefes de la guarnición de Lima firmaron unas actas y organizaron un desfile."* (Basadre, 1980: 42). A pesar de la felicitación que hizo Rosas a Morales Bermúdez, la lucha política desde el inicio mismo de este gobierno, estuvo centrada entre los caceristas y los civilistas.

Este primer cisma del Partido Constitucional en 1890, daba cuenta de que a pesar de que el Partido Civil se encontraba en receso desde los inicios de la guerra con Chile en 1879, sus principios ideológicos aún seguían vigentes y reagrupaba a sus ex miembros en torno a una de sus ideas fundadoras: una política conducida por civiles. Antes, estas banderas se arriaron para apoyar al General Cáceres en la lucha contra la dictadura de Iglesias⁸⁰, y

⁷⁸ Piérola fue acusado de usurpación de funciones públicas por el golpe de Estado de 1879; sin embargo Piérola pidió que se ampliase el juicio a todos los cómplices de tal hecho, entre los cuales se encontraban el General Cáceres (que secundó a Piérola en ese año) y otras destacadas personalidades del gobierno. Finalmente, Piérola protagonizó una anecdótica huida el 5 de octubre de 1890, que incrementó su ya legendaria fama de audacia y valor, y se exilió en Europa.

⁷⁹ Mariano Nicolás Valcárcel fue primer jefe de gabinete del Presidente Morales Bermúdez (del 28 de julio de 1890 al 24 de junio de 1891), y apoyó decididamente a éste en la rebelión militar del cuartel Santa Catalina el 3 de diciembre de 1890, ordenando el fusilamiento de todos los insurrectos. La esperanza de Valcárcel era ser el sucesor de Morales Bermúdez, pero ésta se desvanece cuando se perfila candidatura del general Cáceres y lo aleja de su alianza con los militares.

⁸⁰ Este general firmó el Tratado de Ancón con las fuerzas de ocupación chilenas el 20 de Octubre de 1893. Posteriormente al retiro del ejército chileno, se desata la guerra civil entre los generales que habían enfrentado al invasor: Miguel Iglesias y Andrés Cáceres, éste último vence definitivamente al primero en 1895.

luego para apoyarlo en su candidatura presidencial en 1886; sin embargo, su antimilitarismo ideológico renacía frente al continuismo de los militares en el poder en 1890, o como señala Basadre (1968: 208, v.IX): *“la plataforma de la Unión Cívica fue la oposición a la ingerencia de la fuerza armada en la política.”*

Esta ruptura entre el civilismo y el cacerismo se plasmará en una reorganización de la Junta Directiva del Partido Constitucional, en la cual ya no figurarían civilistas y por tanto se acentuará el cariz militar en toda la estructura partidaria, tal como se refleja en la reseña que se hace de uno de los mítines electorales del candidato militar en 1890: *“Se dijo que en el desfile de Morales Bermúdez, que no logró reunir masa ciudadana en cantidades apreciables, tomaron parte jefes y oficiales del Ejército en servicio activo y hasta algunos centenares de individuos de tropa a quienes se vistió de paisano.”* (Miró Quesada; 1961: 191).

Otra de las “víctimas” de continuismo militar en el poder, sería el líder del Círculo Parlamentario, Mariano Nicolás Valcárcel, quien devino en un baluarte importante del Partido Constitucional entre 1890 a 1892, luego del retiro de los civilistas. La candidatura presidencial de Valcárcel se empezó a perfilar hacia 1891; sin embargo, el regreso del General Cáceres de sus labores diplomáticas en Europa en mayo de 1892 y su voceada candidatura presidencial para el periodo 1894-1898, contrarió severamente las expectativas políticas de Valcárcel, ya que era previsible quien resultaría vencedor en una pugna interna entre ambos aspirantes para la nominación de la candidatura presidencial oficialista.

El fracaso de las expectativas presidenciales de Valcárcel fue un poderoso incentivo para la conformación de una alianza entre los civilistas de Francisco Rosas y el Círculo Parlamentario. Así, el 14 de Octubre de 1892 se constituye la Unión Cívica, con el propósito de ser un contrapeso político frente a la amenaza continuista del Partido Constitucional en el poder. Este grupo fusionó a ambas mayorías parlamentarias: los diputados del Círculo Parlamentario de Valcárcel y a los senadores civilistas. El senador

Francisco Rosas declaró que se agrupaban “*con el fin de hacer frente al incontrolable autoritarismo militar.*” (Citado en Mc Evoy, 1997: 318).

Por su parte, Manuel Candamo, civilista y ex Presidente de la Junta Directiva del Partido Constitucional decía en un discurso electoral para las complementarias legislativas de 1892: “*La fuerza armada debe obedecer y no mandar, no es poder deliberante sino poder de ejecución; si se hace poder político peligran las instituciones; si se convierte en poder electoral, se establece la oligarquía militar; el mando supremo no puede llegar a ser el más alto grado de la carrera....*” (Citado en Miro Quesada, 1961: 216). Ya desde esos momentos, Candamo se perfilaba como un candidato presidenciable de la oposición (tanto como Valcárcel y Rosas), a la vez que asumía la dirección de la novísima Unión Cívica en diciembre de ese mismo año.

La conformación de un bloque parlamentario de oposición con mayoría en ambas cámaras del parlamento⁸¹ representó un serio obstáculo para el Gobierno de Morales Bermúdez, ya que interpelaban constantemente a los Ministros y los obligaba a renunciar mediante el voto de censura (durante los cuatro años de este gobierno hubieron aproximadamente doce gabinetes, lo cual representa un promedio de 4 meses de duración por cada gabinete), y además promulgaron leyes electorales que restaban posibilidades de continuidad al Partido Constitucional, como el caso de la Ley de Municipalidades.

El gobierno militar, frente a una mayoría opositora en ambas cámaras del Congreso, optó por propiciar la disolución del mismo y promover la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para ello, el Partido Constitucional impulsó movilizaciones sociales que pedían la realización de un plebiscito y el cierre del parlamento⁸². A esta campaña se

⁸¹ La correlación de fuerzas en el Parlamento se expresa en las elecciones para la Junta Directiva de las Cámaras en julio de 1893: en las cuales fue elegido Francisco Rosas como Presidente del Senado por 32 votos, mientras que el candidato cacerista, Juan Revoredo, obtuvo sólo 7 votos. Para la Presidencia de la Cámara de Diputados fue electo Mariano Valcárcel con 71 votos, y el candidato del Partido Constitucional, Cesáreo Chacaltana, consiguió 23 votos.

⁸² Mc Evoy (1997: 321) refiere que fue un debate que repercutió incluso en provincias, así en Puno (sur del Perú, frontera con Bolivia) “*las autoridades gobiernistas convocaron a una reunión ciudadana en la que, luego de una procesión a lo largo de las principales calles de la ciudad, seguida de violentos discursos contra la “Representación Nacional”, un grupo de vecinos puneños firmaron una carta política dirigida al*

sumó los diarios “La Opinión Nacional” y “El Nacional” de tendencia cacerista, mientras que la causa civilista era defendida por “El Comercio”, “Ea Nación” y “El Callao”. El órgano de prensa pierolista “El Bien Público” también fue clausurado por el Gobierno, al igual que anteriormente sucedió con el “el País”.

Ea alta conflictividad política de 1893 (censuras a gabinetes⁸³, movilizaciones políticas, asaltos a los medios de prensa e imprentas⁸⁴); motivó que el Presidente convocará a los principales líderes de la oposición (Rosas, Candamo y Valcárcel) a reuniones en Palacio de Gobierno con el fin de llegar a un advenimiento⁸⁵. Sin embargo, esta solicitud de tregua no dio frutos, puesto que la exigencia principal de los dirigentes de la Unión Cívica era el desistimiento de la candidatura presidencial de Cáceres, la cual no fue aceptada por el gobernante de turno. Más allá de la alta investidura de Morales Bermúdez, éste aún se encontraba subordinado a los intereses principales de su jefe político, aunque tratando de favorecer opciones conciliadoras.

A pesar de todo ello, los preparativos electorales continuaron, y así mientras proseguían los mítines a favor del General Cáceres (incluso con participación de regimientos militares, lo cual infringía claramente la ley); los miembros de la Unión Cívica se reunieron el 18 de octubre para nominar a su candidato, resultando elegido Mariano Nicolás Valcárcel en contienda con Manuel Candamo⁸⁶.

Presidente de la República. En la misma se le urgió al primer mandatario a que disolviera el Congreso de la República. El ritual puneño fue repetido, intermitente, en otras ciudades del país.”

⁸³ Al juramentar el cargo de Ministro en enero de 1893, Ramón Ribeyro, señaló que representaba un “peligroso honor”, lo cual reflejaba tanto la inestabilidad de su puesto (en efecto sólo duró dos meses en el cargo), como el alto grado de conflictividad por el que atravesaba el gobierno de Morales Bermúdez en 1893.

⁸⁴ El 15 de abril fue asaltado por una turba la imprenta “La Vocece d'Italia” que editaba el periódico de oposición del mismo nombre y otro denominado la Tunda. En el mes de octubre también irrumpieron en el local de la imprenta del diario “El Comercio” grupos armados que vivaban al General Cáceres.

⁸⁵ Incluso fue llamado a Palacio, el presidente del Comité Directivo del Partido Demócrata, Federico Panizo, quien señaló que no tenía autorización de Piérola para dar una respuesta a los requerimientos de conciliación de la presidencia.

⁸⁶ “Realizada esta reunión (18 de octubre de 1893) resultó elegido por 74 votos Mariano Nicolás Valcárcel, habiendo tenido 21 Manuel Candamo. Valcárcel en el momento de votar dijo que lo hacía por “el eminente ciudadano señor Manuel Candamo”. La proclamación se efectuó inmediatamente. Presidia la Asamblea, Francisco Rosas, quien no fue candidato” (Miro Quesada: 1961: 223).

No obstante el fracaso de la iniciativa presidencial de conciliación, los esfuerzos en ese mismo sentido continuaron, pero esta vez directamente con el enemigo más encarnizado de régimen: Nicolás de Piérola, cuyo partido se encontraba en la clandestinidad y él mismo hallábase refugiado en Chile⁸⁷. En efecto, el Ministro de Hacienda y Comercio, Agustín de la Torre envió cartas a Piérola en diciembre de 1893, donde le propuso un arreglo que implicaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente que el mismo Piérola presidiría, y en el cual participarían paritariamente miembros de los Partidos Demócrata y Constitucional, y resultaba excluidos los ex – aliados civilistas. Dicha propuesta implicaría la asunción inmediata del General Cáceres como Presidente provisorio, aunque señalaba que en las siguientes elecciones los constitucionales no tendrían candidato. Piérola rechazó esta oferta, exigiendo el simple cumplimiento de la ley y la dación de garantías.

A principios de 1894 se hizo un nuevo intento de conciliación, bajo los auspicios del presidente del Consejo de Ministros, José Jiménez; y en el cual participaron por parte del Partido Constitucional, Cesáreo Chacaltana y Valcárcel por la Unión Cívica. Sin embargo, la oposición radical de intereses entre los candidatos presidenciales: Cáceres y Valcárcel desestimó cualquier arreglo. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a renunciar.

El endurecimiento del régimen, la cercanía de las elecciones presidenciales y el rechazo de las propuestas del gobierno por parte de Piérola y de los cívicos, ayudó a concretizar la constitución de un frente amplio de la oposición que integraron la Unión Cívica y el Partido Demócrata; así, el 30 de Marzo de 1894 se firma el **Pacto de la Coalición**⁸⁸, con las siguientes consideraciones:

⁸⁷ Nicolás de Piérola fue detenido el 5 de abril de 1890 en plena campaña presidencial. Por tales razones, el partido demócrata anunció que no participaría en dichas elecciones; por su parte, el Gobierno iniciaba el enjuiciamiento de Piérola por los actos ocurridos durante su gobierno dictatorial en 1880 (en plena guerra con Chile). El 10 de Agosto de ese mismo año, Piérola huye de la prisión y viaja al extranjero.

⁸⁸ Este pacto fue firmado por los cívicos Francisco Rosas y Nicolás Valcárcel, y los demócratas Manuel Pablo Olacoea y Carlos Gonzáles de Orbegozo.

“1°.- Mantener por todos los medios a su alcance la libertad electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, oponiéndose a toda coacción o adulteración de él, y trabajar de concierto por la fiel observancia de la ley;

2°.- Uno y otro partido son completamente libres para designar sus candidatos a la Presidencia de la República, a las senadurías y diputaciones, y a las funciones municipales, para celebrar los acuerdos electorales que estimen convenientes;

3°.- El Jefe de la coalición será el Jefe del Partido Demócrata;

4°.- La Coalición reclamará del Gobierno, como único medio legal en la actualidad, la adopción inmediata del procedimiento expresado enseguida:

a) El nombramiento de un Ministerio compuesto de representantes de los 3 partidos militantes, designados por éstos y constituidos para dar garantías de libertad de elección;

b) La convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias con el fin:

i) Dar una Ley de Registro Cívico,

ii) Expedir una Ley de Elecciones que simplifique el procedimiento y asegure la verdad del sufragio.

5°.- La Coalición invitará al Partido Constitucional a tomar parte en ella”.

Obsérvese como este manifiesto combinaba salidas políticas (lo cual puede interpretarse como una plataforma de negociación ya que consideraban explícitamente la inclusión del Partido Constitucional), con una justificación de la insurrección armada, la cual ya había sido iniciada por el Partido Demócrata meses antes, en forma de movimientos guerrilleros, denominados “montoneras”.

A pesar de la resistencia inicial de los civilistas⁸⁹, Piérola fue nombrado Jefe de la Coalición, no sólo por su carisma, sino sobretudo por las tareas que demandaba la

⁸⁹ Ulloa (1981: 326) señala que las negociaciones en torno a una coalición anti-Cacerista se remonta a 1892, luego de la constitución de la alianza parlamentaria Unión Cívica, para lo cual se reunieron Francisco Rosas y Nicolás Valcárcel con el representante demócrata Manuel Pablo Olacoechea, quien comunicaba sus acuerdos iniciales a Nicolás de Piérola, en ese entonces en París. Una de las principales dificultades de estas negociaciones fue el tema de la jefatura de la alianza, ya que la exigencia de los demócratas para que esta recaiga en su líder era opuesta a las aspiraciones presidenciales de Valcárcel, Candamo y Rosas, y a la

coyuntura: el inicio de una campaña revolucionaria, siendo muy conocido la larga trayectoria insurreccional de Piérola desde 1874⁹⁰.

A pesar de que inicialmente esta alianza no se proyectaba más allá de un mecanismo de presión para conseguir un escenario político con amplias garantías electorales, pronto superó las expectativas de la coyuntura de la crisis política, y fue el mecanismo político que derrocó al gobierno militar y el inicial soporte de un nuevo régimen que duraría 25 años. Así, esta Coalición que reunió a los políticos civiles más destacados de aquella época, pudo revertir la hegemonía política que los militares tuvieron durante la mayor parte del siglo XIX, y sobre todo a partir de la Guerra del Pacífico.

Unos días antes de la constitución del Pacto de la Coalición, el Presidente Morales Bermúdez enfermó gravemente, lo cual provocó la disputa acerca de quien debía asumir el mando interinamente, ya que aunque le correspondía legalmente al primer vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar, el gabinete presidido por José Mariano Jiménez no aceptó asumir la decisión de expedir un decreto con tal fin, argumentando que no tenía autoridad para ello y que debía hacerlo el Presidente enfermo o en su defecto el propio interesado. En el fondo de la situación, la verdadera causa del impasse lo constituía el hecho de que el primer vicepresidente no formaba parte del entorno de confianza del general Cáceres, precisamente Basadre relata que ambos se reunieron para resolver la situación, producto del lo cual Solar pudo darse cuenta de la verdadera razón que impedía su derecho a la presidencia interina: “...*el doctor del Solar manifestó al doctor Jiménez su desaliento por asumir el mando en vista de la disposición de ánimo del general Cáceres y de los elementos de fuerza con que este general contaba*” (1968: 95, v.X).

tradicional enemistad que existía entre Piérola y el civilismo; en tanto que en 1878, los civilistas acusaron a Piérola de ser uno de los conspiradores del asesinato del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo.

⁹⁰ El líder civilista, Francisco Rosas, hizo la siguiente pregunta a sus pares cuando decidieron emprender el camino insurreccional contra Cáceres en 1894: *¿Quién de nosotros monta a caballo?* Esta anécdota que cuenta Basadre (1982: 96) nos muestra la carencia de un liderazgo civilista apropiado para el propósito insurreccional al cual se empeñaban, y la consecuente subordinación a la dirección política y militar de Piérola.

El fallecimiento del Presidente acaeció el mismo día en que debían realizarse las elecciones presidenciales, en las cuales eran candidatos el general Cáceres por el Partido Constitucional y Mariano Nicolás Valcárcel por la Unión Cívica, sin embargo éstas fueron impedidas por partidarios del primero, y la presidencia fue entregada al 2do vicepresidente, coronel Justiniano Borgoño, quien sí era un subordinado directo del general Cáceres. Por su parte, Solar protestó enérgicamente mediante un manifiesto lo que consideraba un acto ilegal⁹¹, además de hacer constancia que desde la enfermedad del Presidente, “*el ejército estaba distribuido en el Palacio de Gobierno y en el fuerte Santa Catalina y en los lugares más convenientes de la población para evitar cualquier tentativa contraria al golpe de Estado*” (Ibid: 98).

Gobierno del Coronel Justiniano Borgoño (Marzo a Agosto de 1895)

A partir del golpe de Estado de Borgoño, connotados dirigentes cívicos pasan a la clandestinidad y otros marchan al exilio (el 11 de abril de 1894, el Vicepresidente Solar y el presidente de la Cámara de Diputados Nicolás Valcárcel huyen a Chile a reunirse con su nuevo aliado Nicolás de Piérola). A su vez, el nuevo gobierno clausuró el congreso y convocaron a elecciones generales (presidenciales y parlamentarias), a pesar que según la Constitución de 1860, la renovación parlamentaria se realizaba por tercios en ambas cámaras; a su vez estas elecciones serían controladas por las Juntas de Notables (que eran nombradas por el gobierno) antes que por las Municipalidades, según lo mandaba la Ley de Municipalidades aprobada en 1893⁹². Más allá del azaroso acontecimiento de la muerte de Morales Bermúdez, este golpe de Estado era una anticipación de un proceso

⁹¹ La usurpación se “*debió la intrigas realizadas en la misma casa del señor Morales Bermúdez*”, y si no está al frente del Gobierno como lo manda la Constitución “*no es porque lo he renunciado, ni me excusé de ejercerlo, sino (sic) por que la acción de la fuerza y de la violencia me lo impide*”. (...) “*La evolución política de que fue seguido el fallecimiento del Presidente de la República se ha realizado en provecho de los intereses políticos que representa el General Cáceres*.” (Manifiesto de Pedro Alejandrino del Solar, publicado en El Comercio, Lima, 7 de Abril de 1894; citado en Dulanto: 1947: 403.)

⁹² La ley de Municipalidades promulgada en 1893 por el Presidente del Congreso sin anuencia del Presidente Morales Bermúdez, tenía la intención por parte de los congresistas de oposición de disputar el control de las elecciones a los militares agrupados en el Partido Constitucional y que ejercían su influencia en provincias a través de las Juntas de Notables oficializadas por el Ejecutivo. Esta ley señalaba que era a través de las Municipalidades donde se formaban los registros electorales y se expedían las boletas de sufragio, lo cuales constituían los elementos sustanciales del proceso electoral.

que estaba destinado a asegurar de un modo u otro la continuidad en el poder de los militares a través de un segundo gobierno para el General Cáceres.

Mientras tanto Nicolás de Piérola se pronuncia políticamente desde Chile a través de una carta donde destaca la ilegitimidad del nuevo gobierno: *“Faltaría a mi deber callando ante la ignominiosa empresa del Coronel Borgoño. Se apodera del Gobierno despojando al Primer Vice-Presidente; desconociendo en seguida, al Congreso y lo hace a título de 2do Vice-Presidente Constitucional. El estado de cosas que ha traído, envileciendo al Ejército, se condena así mismo, es sólo oprobio y escándalo. El soldado, como todo funcionario que le preste obediencia, no tiene excusa alguna; hollando su propia dignidad se hacen reos del delito contra la patria.”* (Citado en Ulloa; 1981: 323). Declaración que pretendía justificar la insurrección armada contra un régimen que había infringido la Constitución.

Piérola, ya como jefe de la Coalición, redobló esfuerzos para fortalecer con apertrechamientos e instrucciones escritas a las montoneras⁹³, que su Partido había promovido desde que fuera proscrito por el Gobierno del Coronel Morales Bermúdez. Si bien esta forma de guerrillas incursionaron esporádicamente casi desde el inicio del gobierno del Coronel Morales Bermúdez, éstas se empiezan a generalizar a partir de 1894⁹⁴; es decir a partir de la constitución del Pacto de la Coalición y de la asunción del mando del coronel Borgoño.

Es así que el propio Nicolás de Piérola extendió cartas credenciales desde Chile y nombró jefaturas militares de las montoneras en diversas regiones del país, una de éstas fue dirigida (15 de mayo de 1894) al abogado y más tarde líder del Partido Eiberal, Augusto Durand, quién el 20 de agosto de este turbulento año logra el control político y militar de

⁹³ Las montoneras eran grupos de guerrilleros que atacaban por sorpresa para luego replegarse y desaparecer. Esta forma de lucha fue paradójicamente popularizada por el propio General Cáceres durante la resistencia del diezmado ejército peruano contra el Ejército Chileno, en el periodo de ocupación del territorio peruano durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Es a partir de 1893, que informes prefecturales en diversas partes de la república registran la presencia de estos grupos armados pierolistas.

⁹⁴ “El 23 de abril de 1894, a escasos días del fallecimiento del presidente Morales Bermúdez, el prefecto de Tacna, Rufino López-Torres solicitaba urgentemente armas al gobierno central” (Mc Evoy; 1997: 331).

la importante ciudad de Huanuco, donde constituyen un “Estado Mayor Revolucionario”, que funge como eje articulador de la resistencia armada de la coalición en la zona central del país. Me Evoy (1997: 337) señala que la resistencia montonera fue dividida en tres regiones: norte, sur y centro, el primero de los cuales se encontraba bajo liderazgo demócrata, mientras que el segundo era compartido entre demócratas y civilistas, y finalmente los allegados al círculo de Valcárcel tenían su influencia en la zona sur.

Por su parte, el gobierno de Borgoño constituyó un gabinete que permanecería durante todo el interinato y estuvo integrado por ministros civiles y militares; sin embargo, uno de ellos (José Agustín del Puente) renuncia alegando “*no contradecir su probidad*” (Basadre; 1968: 100); y similar actitud toma el ministro plenipotenciario en Chile, Ramón Ribeyro (Miró Quesada; 1961: 230); estas deserciones se fueron acentuando conforme la confrontación civil – militar se hizo más intensa. Asimismo, las garantías individuales fueron suspendidas y se concedió amnistía a los rebeldes que desertasen de las filas montoneras.

Las elecciones presidenciales se realizaron el 3 de julio de 1894 con la única participación del candidato del Partido Constitucional: el General Cáceres. La abstención de una buena parte del electorado es destacado por la prensa de la época. Además, los resultados electorales muestran la falta no sólo de condiciones de competitividad, sino además de credibilidad: de los 4,541 votos emitidos, 4,539 fueron a favor del candidato único (el proceso electoral para la presidencia era aún indirecto a través de Colegios Electorales). La toma de mando de Cáceres (10 de Agosto de 1894) y la instalación del nuevo Congreso ratificó el continuismo autoritario que se había instalado de 1890, pero esta vez sin alianzas, por el contrario con un frente unido en la oposición, la cual había optado decididamente por la vía armada.

Segundo Gobierno del General Cáceres (Agosto de 1894 a Marzo de 1895).

La llegada de Cáceres al poder implicó la intensificación del proceso de militarización del país, ya sea mediante el nombramiento de militares como autoridades prefecturales, como a través de reclutamientos obligatorios de jóvenes en diversas partes del país.

además de nuevos impuestos para subvencionar la guerra civil, saqueos y atropellos contra las poblaciones sospechosas de haber apoyado a los montoneros de Piérola. Asimismo, las medidas represivas se fueron acentuando, Basadre (1968:103, v.X) reporta fusilamientos de montoneros, además de detenciones cada vez más numerosas. Los presos políticos eran trasladados masivamente a las cárceles de Casa-Mata en el puerto del Callao y en la Isla de Taquile en el extremo sur del Perú.

Este agravamiento del conflicto generaba no sólo grandes pérdidas económicas (paralizaciones del comercio y abandono de trabajo agrícola) y ajustes fiscales por parte del gobierno⁹⁵, sino también un alto número de víctimas, es así que Obín (1901: 73) señala que para fines de 1894 la guerra civil había ocasionado aproximadamente 2,000 muertos. Este escenario devastador que refrescaban los recuerdos de la guerra con Chile apenas una década antes, incrementó significativamente el descontento de la población contra el régimen militar.

La opinión pública no sólo fue adversa al gobierno por estas graves dificultades, sino también gracias a los vínculos que los partidos políticos de la Coalición tenían con la población, tanto de Lima como de provincias. De tal modo que simultáneamente al frente militar, se desató una campaña política de intensa propaganda a favor de la coalición. Los propios informes prefecturales de la época indican que surgieron revueltas civiles en contra del abuso de las autoridades locales o de las medidas tributarias y fiscales en distintas ciudades, a ello contribuyeron tanto los partidos de la coalición, como miembros del clero⁹⁶, quienes utilizaban el púlpito para generar animadversión contra el gobierno cacerista (Mc Evoy; 1997: 339).

⁹⁵ En setiembre de 1894, el gobierno decretó la suspensión de pagos de la deuda interna, emitiendo a su vez nuevos bonos al portador con altísimos intereses, a la vez que se elevaban los intereses bancarios, todo lo cual afectaba directamente a los capitalistas nacionales. A su vez, el país experimentaba una elevada tasa inflacionaria y una aguda escasez de fondos públicos, de tal magnitud que la mayor parte de los empleados públicos e incluso la policía urbana se encontraba impaga.

⁹⁶ Como veremos más adelante, Nicolás de Piérola mantenía estrechas relaciones con la Iglesia Católica, las cuales se remontan desde sus padres y la estancia que durante sus años de juventud pasó como seminarista. Este vínculo se mantendrá vigente durante toda la vida del caudillo demócrata y le servirá como una de las bases de apoyo de su carrera política.

A pesar de todas las desventajas que la guerra civil acarrecaba al gobierno de Cáceres, es importante reconocer las fortalezas que aún tenía este régimen. Por una parte, estaba la aureola de heroísmo del propio Cáceres, forjada en la resistencia frente al ejército invasor chileno durante 1880-1883 y en la lucha contra la dictadura de Iglesias; asimismo, la figura de un estadista que durante su primer gobierno (1886-1890)⁹⁷ le cupo la tarea de la reconstrucción de un país devastado por la guerra y el saqueo de un ejército de ocupación extranjero.

Por otra parte, una de las prioridades del Presidente Cáceres en su primer gobierno fue la reorganización y unificación del ejército peruano, para lo cual se dieron diversas leyes como la creación de una Junta Calificadora de Servicios Militares, la anulación de todos los grados militares otorgados durante la guerra con Chile y la posterior confrontación civil (con el fin de desarticular agrupaciones militares fraccionales), la constitución de un nuevo escalafón militar y la reapertura de Colegio Militar conducente a la profesionalización del oficial y el soldado. Los propósitos de fondo de todas estas reformas fueron la rearticulación de la institucionalidad militar (que incluía un rol político estratégico) y la recuperación de una legitimidad perdida en la derrota de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Los resultados de este proceso de institucionalización fue una maquinaria militar fortalecida y articulada en todo el territorio peruano y con proyecciones políticas de permanencia en el poder mediante mecanismos políticos (el Partido Constitucional) y extra partidarios fundados en la fuerza de las armas.

Es así que para 1894, un ejército leal al Presidente Cáceres, con una moral alta, buena disciplina y constante apertrechamiento, era difícil de derrotar por un contingente variado, heterogéneo y mal armado como eran las montoneras de la Coalición. Más aún, a pesar de un esfuerzo de articulación nacional de las diversos focos guerrilleros

⁹⁷ Manrique (1987: 138-43) señala que el primer gobierno de Cáceres representó la hegemonía de los emergentes poderes regionales (básicamente terratenientes serranos) en desmedro del civilismo que representaba la crisis económica previa a la guerra con Chile. Sin embargo, Mac Evoy (1997: 262) responde que se trataba de una alianza liderada por Cáceres, que se sustentaba en una compleja red clientelar político militar forjada durante la resistencia al ejército chileno, y el civilismo que, aunque debilitado, proveía “*el discurso republicano-constitucional, (y)... el manto de legitimidad necesario para que la estructura política militar cacerista logrará cimentarse.*”

mediante jefaturas regionales articuladas a los partidos políticos de la oposición, era evidente la carencia de un comando unificado a nivel nacional, de tal modo que aún cuando la oposición armada *“tenía el ambiente público a su favor, los montoneros no llegaba a asestar golpes decisivos al gobierno. Carecían de unidad, de volumen y de armamento. Piérola era necesario.”* (Basadre, 1968: 103, v.X).

Todas estas consideraciones eran conocidas por la dirigencia de la Coalición, de tal modo que Nicolás de Piérola (quien se encontraba desterrado en Chile) en coordinación con sus aliados Valcárcel y del Solar, prepararon el retorno clandestino del jefe de la Coalición para encabezar las montoneras en el Perú. Así, el denominado “Regenerador del Perú”⁹⁸ desembarcó en las costas peruanas de Puerto Caballas el 24 de Octubre de 1894. De inmediato encabezó las guerrillas del lugar y tomaron la ciudad de Chíncha el 3 de Noviembre de aquel año.

Piérola anuncia en una proclama al día siguiente en esta misma ciudad: *“Es la nación entera, de un lado; del otro, un soldado que nada respeta, adueñado del ejército y de los recursos nacionales, en el loco empeño de imponerse. Solemnísima es la hora por la que está atravesando el Perú. Ella va a fijar irrevocablemente su destino. Vencido, se abriría sin término ante él el periodo oscurísimo de los motines de cuartel. Soberanía de la nación, derechos, garantías, imperio del orden y de la ley, bienestar dentro y respeto fuera, todos los bienes a que pueda aspirar un pueblo quedarían sepultados”* (Basadre, 1968: 104-5, v. X). Tales términos además de hacer énfasis en la polarización cívico militar por la que atravesaba el país en esos críticos momentos, destacaban la voluntad democratizante, republicana y legalista que animaba el movimiento montonero y las fuerzas de la Coalición. Asimismo, Piérola declara que se desconocería todo tipo de contratos entre el gobierno y terceros, a la vez que desautorizaba la emisión de bonos

⁹⁸ *“A las nueve de la noche del 19 de octubre salió Piérola de Iquique en una chalupa de 21 pies de eslora, 4 de manga y una y media de puntal, hecha para navegar en puerto, sin quilla, con sólo dos remos y un palo de vela latina. (...) Se cuenta que, cuando Billinghurst consiguió tan peregrino medio de transporte, que no era susceptible de llamar la atención del espionaje profusamente desarrollado por el gobierno peruano, Piérola le preguntó: “Usted se embarcaría allí”. “Yo no, repuso Billinghurst, pero yo no quiero ser el regenerador del Perú. Fue aquella una travesía increíble a lo largo de la costa de un recorrido de trescientas millas marinas”* (Basadre, 1968: 103, v.X).

fiscales, con el fin estratégico de mermar los recursos económicos del aparato gubernamental cacerista. Finalmente se erige como el representante legítimo del pueblo peruano, pero con un título provisorio: “delegado nacional” es decir que era válido hasta la reconstitución de los poderes legítimos mediante la Constitución y las leyes; además constituye un gobierno interino a través del nombramiento de tres Secretarías: Guerra, Gobierno y Hacienda.

Ante el anuncio que los diarios El Comercio y El Callao hacen de la llegada clandestina de Piérola al Perú, el gobierno reacciona severamente e impuso multas y prohibió la venta de las ediciones del primero de ellos el 5 de noviembre de 1894⁹⁹. El ministro de Gobierno y jefe de gabinete, Cesáreo Chacaltana, renunció a su cargo por no estar de acuerdo con estas medidas. Este caso de deserción civil en la burocracia del régimen no fue un hecho aislado, puesto que ya se *“había iniciado un proceso de deserción en masa a las filas coalicionistas (.....) El oficio del 22 de Agosto de 1894, cursado por el gobierno a todos los prefectos y subprefectos del país, para que señalaran claramente el nombre de los empleados públicos, que se habían plegado al movimiento coalicionista, nos puede permitir observar el grado de deterioro político que exhibió el régimen presidido por Cáceres....”* (Me Evoy; 1997: 333).

Desde la llegada de Piérola al Perú, la guerra civil entre las montoneras de la oposición y el ejército del gobierno se acentuó en distintas partes del país, pero sobretudo se dio inicio al cercamiento de la capital. Para fines de 1894, las guerrillas montoneras llegaban a 3,000 combatientes. Sin embargo, las fuerzas militares gobiernistas resistían fieramente y mantenían ordenadas sus filas, aunque empezando un proceso de concentración en torno a Lima; lo cual facilitó que los montoneros conquisten una de las ciudades más importantes del sur en enero de 1895: Arequipa; así como grandes ciudades en el norte como Tumbes, Piura y Cajamarca que cayeron en manos rebeldes al mes siguiente, mientras mantenían cercada Chiclayo y Trujillo. En el centro del país, los coalicionistas

⁹⁹ Es importante destacar el margen de libertad de prensa que aún se mantenía en plena guerra civil, así como que el diario oficialista “La Opinión Nacional” criticó las medidas represivas del gobierno contra estos medios de comunicación.

tomaron Huaraz, Huánuco, Huancayo y Huancavelica; mientras que en el sur se posicionaron en Ica, Moquegua, Puno, Ayacucho, Apurímac, y la mayor parte del Cuzco. Finalmente, en este balance estratégico los montoneros se apoderaron de las provincias circundantes a Lima: Chancay, Cañete, Yauyos, Matucana, Huarochirí y Canta. A estas alturas, a las fuerzas de Cáceres sólo les quedó reunirse en Lima, como bastión principal de la defensa de su régimen (Ulloa; 1981:339).

La agudización de la guerra civil agravó seriamente las condiciones de vida de la población civil, ya sea por el encarecimiento de las subsistencias debido a la clausura de puertos y la paralización de transporte, además de los continuos saqueos y abusos por parte de ambos bandos militares; y a su vez por las restricciones o bloqueos de las operaciones bancarias y financieras. Todo lo cual implicaba, además de una severa agudización de la pobreza, un gran desorden social dado el descontento y la desconfianza frente a las autoridades militares.

Este marasmo social y económico motivó que a principios de 1895 algunas personalidades se agrupasen como “Los Amigos de la Paz”, entre ellos se encontraban políticos civilistas que habían apoyado el gobierno de Cáceres, profesores universitarios y hombres de negocios (entre ellos el joven comerciante y futuro presidente de la República, Augusto Leguía). Este selecto grupo estaba preocupado por el desorden social que implicaba el mantenimiento del régimen militar, pero a la vez querían evitar que nuevos intereses regionales tomaran el poder, en síntesis tenían el objetivo de “*remover el gobierno de Cáceres, evitando que Lima perdiera su poder hegemónico en el camino*” (Mc Evoy; 1997: 345).

Sin embargo, las primeras conversaciones sostenidas entre el Presidente Cáceres y su ex-ministro de Gobierno (durante su primer gobierno) Carlos Elías, que encabezaba este grupo de iniciativa para convencerlo de una salida negociada que implicara su renuncia a la vez que su inmunidad, no convencieron al general. Más allá de esta frustrada negociación, la misma refleja que el entorno civil del Presidente Cáceres, los

comerciantes y banqueros independientes ya no aceptaban al régimen militar como una opción que favoreciese sus intereses.

El 16 de Marzo de 1895, Piérola dio la orden de partir hacia la capital, para tal efecto se habían preparado dos mil cuatrocientos hombres heterogéneamente armados¹⁰⁰ y que se encontraban concentrados en Cieneguilla, un amplio fundo al sureste de la ciudad de Lima. Por su parte, las fuerzas gobiernistas se componían de un ejército disciplinado de cuatro mil quinientos hombres, con mejor apertrechamiento y bien posicionados en cuarteles y torres de las iglesias limeñas¹⁰¹.

El ataque se inició en la madrugada del día 17, la vanguardia de los montoneros estaba comandada por el joven e impetuoso guerrillero Augusto Durand, mientras que el propio Piérola encabezaba la columna central de su irregular ejército, finalmente había una retaguardia dirigida por el experimentado guerrillero Felipe Oré. Luego de muchas horas de ardoroso y sangriento combate, las fuerzas coalicionistas se posicionaron en la céntrica Plaza del Teatro, mientras que a pocas cuadras de allí se concentraba el ejército cacerista en la Plaza de Armas.

Dos días de duros enfrentamientos entre las montoneras de Piérola y el ejército de Cáceres dejaron dos mil muertos esparcidos en las calles céntricas de Lima y otros tantos heridos en los hospitales o auxiliados en casas particulares. Un balance militar de estos enfrentamientos arrojó un saldo favorable para las fuerzas gobiernistas, que estaban mejor aprovisionadas, mientras que los guerrilleros acusaban falta de municiones¹⁰². Sin

¹⁰⁰ “Desgraciadamente el armamento reunido en esta forma era desigual, no sólo en cuanto a las marcas sino en cuanto a los sistemas. Se dio el caso, cuando el asalto a la capital, de que varias cajas de tiros fueron inservibles y de que otras se confundieran asignándose a brigadas que no llevaban las armas correspondientes” (Ulloa: 1981: 341).

¹⁰¹ Cáceres se encontraba convencido de que la superioridad de sus fuerzas militares le daría la victoria frente a las montoneras coalicionistas, así en una carta que escribe el general años después dice: “Yo tenía concentrado en Lima un ejército de cinco mil hombres más o menos, número algo superior al de las tropas enemigas, y que por su organización, disciplina y elementos materiales, era una segura garantía de triunfo sobre aquellas...” (Citado en Miro Quesada: 1961: 264).

¹⁰² En esta misma correspondencia de Cáceres, se hace un balance militar luego de la batalla de Lima: “Un día mas de combate habría acabado de aniquilar las fuerzas revolucionarias cuyo número estaba ya

embargo, los revolucionarios recibieron el apoyo de la población a través de refugios, alimentos y otras muestras de simpatías, así Basadre refiere que “*en algunos barrios el pueblo se unió a los montoneros y disparó desde los techos, ventanas y balcones.*” (1968: 109, v.X.).

Una comisión de embajadores intervino ante la gravedad de los acontecimientos, la cual estaba dirigida por el Delegado Apostólico José Macchi y compuesto por representantes de Chile, Francia, Italia y Gran Bretaña. En un primer momento, este grupo logró el establecimiento de una tregua de 24 horas para recoger a los muertos y asistir a los heridos (a partir de las 2 de la tarde del 19 de marzo), que luego se prolongó por otro día más. Este periodo sirvió además para que se inicien las negociaciones políticas con el fin de lograr una solución al enfrentamiento armado.

Cuenta Basadre que en una entrevista entre el Monseñor Macchi¹⁰³ y el General Cáceres en aquellos aciagos días, aquel solicitó la rendición del gobierno, a lo que éste replicó que ello no era posible dado que se encontraban en mejor situación militar, entonces Macchi respondió: “*General, a usted hoy le odian hasta las piedras. No vale la pena que derrame más sangre. Aunque venza, ya usted no podrá gobernar*” (1968: 110, v.X.). Cáceres señaló apesadumbrado que no sospechaba que hubiese tanto odio en contra suya. Ante tales circunstancias, el General convocó a una persona fuera de su entorno de ministros y allegados para hacerse asesorar: Luis Felipe Villarán, quien terminó de convencerlo acerca de la necesidad de ceder el poder mediante una negociación que asegurase una salida decorosa para él, su familia, y sus partidarios. Es importante destacar como esta

bastante reducido por numerosas bajas, al paso que las filas del ejército constitucional mantenían la superioridad numérica y de organización que le garantizaban el triunfo.” Ibidem.

¹⁰³ La primera tregua fue solicitada inicialmente por el Nuncio Apostólico Macchi a través de una nota a Cáceres donde resalta dos aspectos fundamentales, la soledad política del General y un esbozo de las condiciones para una rendición suya: “*Interpretando los sentimientos ya de humanidad, ya de afecto profundo que el cuerpo diplomático profesa a esta nobilísima nación, tengo el alto honor de suplicar en su nombre a V.E. que, en vista siquiera de la mucha sangre peruana que se está derramando desde ayer en las calles de esta capital, V.E. procure cuanto esté de su parte, que cese de una vez tanto estrago de vidas e intereses*”. Agregó que le sería más fácil oír esta voz “*si es tan sólo a su persona a la que se hostiliza y no al principio de autoridad que V.E. representa. La fidelidad misma y el valor con que hasta ahora ha resistido el ejército dejan completamente a salvo el honor de V.E. y de su gobierno.*” (Basadre, Ibidem, Negrillas mías).

anécdota, refleja que, más allá de las ventajas militares de alguno de los bandos, el éxito de esta guerra se sustentó en factores políticos y sociales, como en este caso un frente unido de partidos y el apoyo mayoritario que tenían por parte de la población.

Ya a partir de la segunda prórroga de la tregua, el General Cáceres accedió a una rendición negociada. Para lo cual se nombró a una Junta de Gobierno compuesta por dos representantes por cada parte beligerante: Luis Felipe Villarán y Ricardo Espinoza nombrados por Cáceres; Enrique Bustamante y Elías Malpartida designados por Piérola; todos los cuales acordaron elegir al político civilista Manuel Candamo para presidir dicha comisión.

A partir de la constitución de este nuevo gobierno de transición, el General Cáceres viajó al extranjero, una vez que se le había garantizado su seguridad personal, familiar y de sus bienes; mientras que Piérola dio término a sus funciones como Delegado Nacional, así como de las autoridades que había nombrado como tal, del mismo modo ocurría con las fuerzas militares bajo su mando.

Análisis de una Transición No Cooperativa de un régimen autoritario a una democracia.

Tal como hemos apreciado en el difícil trayecto de la construcción de un orden social y político desde la independencia (1821), el Perú estuvo plenamente inmerso en una lucha violenta por el poder político entre facciones armadas, escenario en el cual los actores civiles (abogados, clérigos, comerciantes, hacendados, artesanos, vecinos) desempeñaban un rol subordinado a los actores principales: los militares.

Sin embargo, a medida que este orden se iba asentado en manos de algún militar que lograba una relativa estabilidad en el gobierno (Ramón Castilla y José Balta), emergía una sociedad civil que influía significativamente en la construcción de un ordenamiento jurídico liberal que excluía la fuerza como medio para acceder al poder (la Constitución de 1860) y posteriormente se organizaban políticamente, aspirando a una participación más directa en la escena política (se funda el primer partido político: el "civil" en 1871, el

cual accede al poder por la vía electoral en 1872), y por tal motivo propugnan el desplazamiento de los militares, a quienes antes habían secundado en la construcción de un orden público¹⁰⁴.

Este ciclo se vuelve a repetir de manera más abreviada a partir de la culminación de la Guerra del Pacífico y del retiro de las tropas chilenas de territorio peruano (1883), así en los primeros años se desata una violenta disputa por el poder político entre los generales que habían resistido al ejército invasor (Miguel Iglesias y Andrés Cáceres), el cual se resuelve por la vía estrictamente militar (Batalla de Huaripampa en 1885). La urgente tarea de la reconstrucción nacional (tanto desde el punto de vista institucional como económico), así como la clara hegemonía de una de las fuerzas militares permite la construcción de un consenso cívico militar para la constitución del primero gobierno del general Cáceres (1886 – 1890), retomando los principios liberales de la constitución de 1860 y la vía electoral para acceder al poder.

El rol de los civiles en el nuevo régimen ya no se reducía a ser meros consejeros y acompañantes de los jefes militares (como antaño), sino que ahora se constituían plenamente como aliados; de tal forma que compartían el poder político a través de encabezar los otros poderes del Estado (el Congreso y las Cortes de Justicia), e incluso liderando el partido oficialista (el civilista Manuel Candamo como el primer presidente del Partido Constitucional). La nueva composición más paritaria de la relación cívico – militar generó la expectativa de que la alternancia en el gobierno recaiga en un civil; sin embargo, la frustración que genera el continuismo militar por vías no legales (prohibición de la candidatura demócrata de Nicolás del Piérola, y las presiones militares para la

¹⁰⁴ El rol desempeñado por los militares en la construcción de un orden político es analizado por Huntington (1968: 221) de manera similar a la que se formula en esta investigación: *“cuando una sociedad cambia, así también el rol de los militares. En el mundo de la oligarquía, el soldado es un radical; en la clase media, es un participante y un árbitro, y en la medida que la sociedad de masas se vislumbra en el horizonte el soldado se convierte el guardián conservador del orden existente. Así, paradójica pero entendiblemente cuanto más atrasada es la sociedad, más positivo es el rol del militar.”* (Traducción mía).

marginación del candidato civilista Francisco Rosas en 1890) reconvierte el pacto cívico – militar en su opuesto: el clivaje¹⁰⁵ civil – militar.

El gobierno del Coronel Morales Bermúdez (1890 – 1894) será el escenario de la intensificación de este clivaje, ya sea en tanto que la oposición se unifica política y militarmente, así como por el progresivo cierre de los espacios de las libertades civiles y de la militarización de las estructuras del Estado y del partido oficialista. Dos hechos posteriores conducen al desencadenamiento de la guerra civil: el golpe de Estado del Coronel Borgoño a la muerte del Presidente Morales Bermúdez en marzo de 1894 y la clausura inconstitucional del Congreso.

El enfrentamiento militar directo entre los contendores principales del clivaje (civiles y militares) fue la vía por la que se produce el cambio de régimen político y la instauración de una democracia en 1895. Este tipo de transición por medios no cooperativos y luego del fracaso consecutivo de las negociaciones propiciadas por actores intermedios se diferencia notablemente del modelo de transición que la literatura académica relevante ha configurado¹⁰⁶, y que consiste en que un equilibrio de fuerzas de los actores contendientes genera “pactos” o arreglos institucionales que conduce a una distribución más proporcional del poder, la cual una vez institucionalizada da paso a un régimen democrático.

En esta perspectiva **cooperativa** del estudio de las transiciones, las orientaciones ideológicas de los actores no influyen decisivamente para un resultado determinado, ya que interesa más la dinámica de la interacción estratégica en sí misma. Así, la democracia puede ser la segunda o tercera preferencia de los actores, y sin embargo se llega a ésta como una consecuencia no esperada, producto de un compromiso pragmático que

¹⁰⁵ “Conflictos y controversias pueden surgir de una gran variedad de relaciones en una estructura social, pero solo algunas tienden a polarizar la política de un sistema dado. Hay una jerarquía de clivajes en cada sistema y este orden de prioridades no solo influye a la política, sino que perdura a lo largo de mucho tiempo” (Lipset y Rokkan: 1990:94, traducción mía)

¹⁰⁶ O'Donnell y Schmitter (1994, vols. 3 y 4); Przeworski (1992 y 1995); Colomer (1998, 2001a, y 2001b); Karl (1990); Huntington (1991).

satisface los intereses particulares de las élites, es decir se constituye como una “democracia sin demócratas”¹⁰⁷.

Asimismo, esta línea de análisis de las transiciones de la “tercera ola” señala que las divisiones al interior de la élite gobernante (“duros” y “blandos”) dan paso a un proceso de “liberalización” del régimen, mientras que alternativamente la oposición manifiesta dos alas (“moderados” y “radicales”) que luchan entre sí por imponer su estrategia contra el gobierno y se disputan la representatividad de la protesta y la movilización de la sociedad civil. A continuación se producen una serie de entrampamientos entre las élites contendientes¹⁰⁸ (gobernantes y opositores) que conducen a que las dos alas más cercanas (blandos del gobierno y moderados de la oposición) lleguen a acuerdos que neutralizan a los duros y radicales, y sientan las bases de los acuerdos que conducen al cambio de régimen¹⁰⁹. En suma, las negociaciones, los compromisos y los acuerdos entre las élites son los que permiten arribar a la democracia, las cuales excluyen las vías violentas o no cooperativas que propugnan las alas extremas de ambos bandos (Huntington; 1991: 164-5).

Por el contrario, la transición a la democracia que ocurre en el proceso político peruano de 1895 se da a través de una revolución, en la cual los triunfadores (coalicionistas) asumen los principales beneficios y los perdedores se resignan al exilio o la postergación política; de forma tal que el nuevo régimen no asume ningún compromiso o pacto que salvaguarde alguna de las instituciones creadas por el gobierno militar o que garantice la inmunidad jurídica de sus actos.

¹⁰⁷ “La democracia surge no tanto por que sea el objeto de la ambición política de una colectividad, sino por que resulta de un compromiso pragmático entre políticos, los cuales antes estuvieron bloqueados para alcanzar sus objetivos particulares.” (Roeder, 1998:300, traducción mía).

¹⁰⁸ “La democracia política es producida por un estancamiento o desacuerdo, más que por un consenso o unidad previamente alcanzada.” (O'Donnell y Schmitter, citado por MacFaul; 2002: 219, traducción mía).

¹⁰⁹ “Los procesos moderados y evolutivos son considerados buenos para la emergencia democrática. Los procesos radicales y revolucionarios son considerados malos. Los acuerdos cooperativos producen instituciones democráticas, los procesos no cooperativos no tienen el mismo resultado. Mas aún, las instituciones surgen de una negociación que provee ganancias para todos.” (Ibid: 219-20, traducción mía).

Asimismo, es un proceso en el cual los actores asumen roles distintos que en las transiciones “cooperativas”, ya que si bien podemos encontrar jugadores “duros” y “blandos” en el bloque del gobierno, estos últimos no desempeñan un rol protagónico en tanto que son civiles en un espacio eminentemente militar y por tanto su capacidad de presión es mínimo; mientras que en el bloque de la oposición, no se diferencian los actores al interior, asumiendo todos una posición radical en cuanto a su estrategia de rechazo del régimen militar por la vía revolucionaria.

La ideología de los actores sí juega un rol destacado en la revolución de 1895, ya que una de las facciones en contienda asume explícitamente una adhesión a principios democráticos (la coalición constituida por el Partido Demócrata y la Unión Cívica), de tal modo que el resultado obtenido tras el triunfo responde directamente a la imposición de los vencedores, y no a una negociación entre las élites de ambos bandos¹¹⁰. En ese sentido, la fracción perdedora resulta excluida de los procesos constituyentes del nuevo régimen, aún cuando la junta gobierno de transición garantizó la defensa de sus derechos y propiedades, lo cual no les otorgó inmunidad y en consecuencia se iniciaron juicios de responsabilidad civil y penal a los líderes del régimen autoritario.

Otro elemento significativo de la transición no cooperativa en el caso peruano es el rol destacado que juega la población en el desenlace de los acontecimientos de la guerra civil (a diferencia del juego predominante de las élites en el modelo cooperativo), ya que su apoyo a los coalicionistas permitió revertir la ventaja militar efectiva que el ejército de Cáceres tenía sobre los montoneros de Piérola. Es así que el diario “El Comercio” (26 de Marzo de 1895); destaca como un ejército de 4,000 hombres “*perfectamente armados y abundantemente municionados*” fue derrotado por 2,000 montoneros “*desprovistos de organización militar, con armamento defectuoso y heterogéneo y escaso de municiones*”, y lo explica a partir de la estrecha relación que establecieron los coalicionistas y el “pueblo peruano”; el cual no sólo les brinda apoyo material y moral, sino “*que se*

¹¹⁰ “El ensamblaje de nuevas instituciones –democráticas o no– están enmarcadas en un juego de suma cero, en el cual uno de los participantes alcanza su mayor resultado, y el otro debe asentarse con su segundo o tercer mejor resultado. Estas instituciones no son eficientes y no aseguran el bienestar colectivo, pero pueden ser estables.” (MacFaul, 2002: 224, traducción mía).

constituyó en la columna vertebral de un movimiento de opinión hastiado del creciente autoritarismo que sucedió después de la Guerra del Pacífico” (Mac Evoy; 1997: 313).

Sin embargo, el apoyo civil a los coalicionistas no se debió tanto a una convicción democrática interna, sino que es motivada por los altos costos que el régimen autoritario había impuesto en su afán de derrotar a la oposición civil (militarización de la estructura del Estado, expropiaciones e inseguridad jurídica, impuestos de guerra) y sobretodo por la pérdida de la capacidad del gobierno militar en preservar el orden público¹¹¹.

Otra notable diferencia entre la perspectiva teórica de las transiciones de la “tercera ola” y el caso peruano, es que en la primera se dio un proceso de liberalización como la fase inicial de un proceso de democratización, mientras que en la segunda se pasa de un autoritarismo liberal (tolerancia a un sector de la oposición, vigencia de algunas libertades civiles como la libre expresión, equilibrio de poderes, elecciones parlamentarias) a un endurecimiento del régimen que desemboca en una intensificación del conflicto entre el gobierno y la oposición.

Finalmente, cabe destacar que en el proceso de cierre de los espacios democráticos luego de la intensificación de la ruptura cívico militar, la unificación de la oposición como el “Pacto de la Coalición” no fue fácil y representa, de alguna manera, el proceso inverso de los círculos viciosos modelados anteriormente, en la medida que es una lenta y progresiva reconstrucción de lazos de confianza y cooperación¹¹². Así, una vez que los civilistas se separan del Partido Constitucional en 1890, se inician gestos significativos por parte de los civilistas hacia Piérola (proponiendo amnistías para los demócratas y al propio Piérola

¹¹¹ “En nuestro modelo, los ciudadanos prefieren la democracia por que genera un orden socio político que los protege contra las expropiaciones.” (Wantchekon y Neeman; 2002: 443, traducción mía).

¹¹² Una breve reseña histórica nos recuerda la gran adversidad que existía entre Piérola y civilistas, ya que el primero como Ministro de Hacienda afectó los intereses económicos de los consignatarios del guano en 1869, los cuales estuvieron estrechamente vinculados con el Partido Civil; la revancha de los civilistas contra Piérola se dio en 1872 cuando se le inició un antejuicio por malversación en el Parlamento, posteriormente Piérola encabezó insurrecciones armadas contra el gobierno civilista entre 1874 y 1876; más tarde los medios de prensa civilistas lo vincularon con el asesinato de Manuel Pardo en 1878 (fundador del civilismo). Esta enemistad se mantuvo vigente durante la década de los 80's en forma de rivalidad entre el Partido Demócrata y el Partido Constitucional.

desde el parlamento), los cuales son respondidos positivamente por los demócratas al iniciar las primeras conversaciones para conformar un frente opositor contra el gobierno militar. En esta perspectiva de construcción de la cooperación, los civilistas aceptan el liderazgo de Piérola en la Coalición; y posteriormente los demócratas comparten las jefaturas militares regionales de las montoneras con sus nuevos aliados; estos gestos y vínculos políticos de cooperación se seguirían manteniendo durante el primer gobierno del régimen democrático (1895 – 1899).

En síntesis, la dinámica predominante en el proceso de la transición política en el proceso político peruano de 1895 fue la confrontación directa y violenta entre enemigos¹¹³ de un determinado clivaje: civiles y militares; y los resultados obedecieron al desenlace de esta guerra civil y no a un compromiso entre la vieja élite y la cúpula revolucionaria; y en tanto que ésta última reivindicaba decididamente un régimen democrático, la orientación final de los vencedores se impuso de facto.

La derrota del “segundo militarismo” en 1895 no sólo representa la instauración de un nuevo régimen, sino además la constitución de un nuevo consenso político en torno a los actores del Pacto de la Coalición (civilistas y demócratas), el cual desplaza el clivaje cívico militar y genera nuevos temas de conflicto en la agenda pública. El esfuerzo de los primeros años de deliberación y reforma política de la nueva élite se orientará a crear una institucionalidad que permita canalizar la competencia política a través de mecanismos no violentos (la reforma electoral) y con una distribución del poder más equilibrada entre los fundadores de este nuevo orden (coaliciones multipartidarias ampliadas).

¹¹³ “El sentido de marcar la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, (.....) En último extremo pueden producirse conflictos con él que no pueden resolverse ni desde alguna normativa general previa ni en virtud del juicio o sentencia de un tercero «no afectado» o «imparcial» (...) Un conflicto extremo sólo puede ser resuelto por los propios implicados; en rigor sólo cada uno de ellos puede decidir por sí mismo si la alteridad del extraño representa en el conflicto concreto y actual la negación del propio modo de existencia, y en consecuencia si hay que rechazarlo o combatirlo para preservar la propia forma esencial de vida (...) Cuando dentro de un Estado las diferencias entre partidos políticos se convierten en «las» diferencias «políticas» a secas, es que se ha alcanzado el grado extremo de la escala de la «política interior», esto es (....) la guerra civil” (Schmitt: 1998: 56,62)

2.3. La Junta de Gobierno de la transición y el primer gobierno del régimen democrático, Nicolás de Piérola (1895-1899): Equilibrios entre el consenso y el conflicto.

La principal consecuencia que tuvo el cambio de régimen a través de una revolución en 1895 fue la instauración de una democracia política. Asimismo, se conformó una nueva élite política nacional compuesta por líderes del **Partido Demócrata** (Nicolás de Piérola, Guillermo Billinghurst, Augusto Seminario, Augusto Durand, Manuel Pablo Olacoechea, Enrique Coronel Zegarra, Alejandro López de Romaña, Aurelio Sousa, Carlos de Piérola, Mariano Cornejo, Joaquín Capelo, Benjamín Boza, entre otros) y del **Partido Civil** (Manuel Candamo, Francisco Rosas, Isaac Alzamora, Alejandro Deustua, Enrique de la Riva Agüero, Rafael Villanueva, Antero Aspíllaga, Manuel Bernardino Pérez, José Matías Manzanilla, Francisco Tudela, Domingo Almenara, entre otros); a quienes mencionaremos en roles destacados y eventos políticos significativos en éste y los próximos capítulos.

La derrota de las fuerzas militares del gobierno anterior tuvo la ventaja de otorgar un mayor margen de acción a los nuevos gobernantes, de tal modo que se abrieron las posibilidades para emprender diversas reformas institucionales dentro de la dinámica del nuevo régimen político, sin mayor interferencia política de los viejos protagonistas: los militares; a diferencia de lo que significaron el tipo de transiciones “pactadas”, que dejaban una “herencia” institucional difícil de revertir en los primeros años, así como cuotas de poder reservadas para la élite anterior.

Sin embargo, el nuevo panorama político que se abría con el consenso de los actores en torno a un régimen democrático y la constitución liberal de 1860, tenía sus propios obstáculos y contratiempos. Entre los inconvenientes más complejos y estructurales tenemos la presencia de una sociedad altamente segmentada, en la cual una gran proporción de la población vivía al margen de la ciudadanía y en condiciones de pobreza y explotación laboral, nos referimos a la “masa indígena” sometida al dominio de los hacendados en la costa norte del país y a lo largo de toda la sierra peruana. Asimismo, la política tenía una fuerte connotación oligárquica, en la cual predominaban las relaciones

familiares y económicas como criterios de pertenencia y ascenso político, sobretudo en los partidos civil y constitucional, y en menor medida en el partido demócrata, que programáticamente reivindicaba los intereses de sectores populares. Si bien, el predominio que los civilistas fueron ganando a partir del último tercio del siglo XIX y la hegemonía política de los demócratas a partir de la revolución de 1895 introdujeron nuevos sectores sociales en la activismo político (profesionales destacados y élites provincianas), otros sectores sociales urbanos emergentes no estaban incorporados a la escena oficial, como fue la incipiente clase media y los asalariados urbanos (y que luego serían reivindicados y se constituirían en la principal base de apoyo de los actores desleales o antisistémicos en la segunda década del siglo XX: Billingham y Leguía).

Otra debilidad institucional destacada era la ausencia de un Estado en diversas zonas del territorio nacional (la selva, el sector rural de la sierra y la costa), el cual por lo demás era extenso y poco poblado y se encontraba desarticulado por la carencia de medios de comunicación y transporte. Por lo tanto, grandes áreas territoriales estaban a merced de terratenientes o caudillos locales, quienes imponían su propio orden al margen de la legalidad estatal. Por tanto, el futuro régimen democrático tendría que lidiar con poderes regionales muy poderosos y autoritarios, los cuales además tenían amplios márgenes de autonomía política y social.

Por otra parte, si bien se ha destacado las orientaciones democráticas y liberales de la coalición vencedora de la guerra civil de 1895, **la democracia no formaba parte de una actitud socialmente compartida**¹¹⁴, es decir la población manifestó sus preferencias por los coalicionistas, en tanto que eran la garantía más creíble para reconstituir el orden público, más no por una convicción democrática internamente arraigada. Un argumento histórico vinculado con este tema es el hecho que la democracia era una experiencia poco asentada y permanentemente interrumpida (1872 – 1876; 1886 – 1890), mientras que los costos económicos, sociales y humanos de la guerra eran altos y recientes (1879 – 1883:

¹¹⁴ “Actitudinalmente, la democracia llega a ser “the only game in town” aún cuando en un contexto de severa crisis económica y social, la abrumadora mayoría de la gente cree que cualquier cambio futuro debe surgir desde adentro de los parámetros de las fórmulas democráticas” (Linz, 1996: 5, traducción mía).

“guerra del Pacífico y ocupación chilena, 1883 – 1885: “guerra civil entre los generales Cáceres e Iglesias”, 1894 – 1895: “guerra civil entre caceristas y coalicionistas”).

Esta falta de convicción democrática no sólo era propia de la población, sino también de muchos poderes locales y de diversos actores políticos. Como veremos a lo largo de los siguientes capítulos, el recurso a la violencia política y al golpe de Estado fue una práctica política muy recurrente antes y durante el cuarto de siglo que duró este régimen político. De tal manera que la agenda de los nuevos gobernantes afrontarían constantemente el reto de algún movimiento subversivo, del intento de secesión de alejadas regiones del país (Loreto), o de estallidos de violencia como un mecanismo de reivindicar alguna demanda puntual (ver Anexo No.7: Levantamientos armados durante el régimen político entre 1895 a 1919). En este contexto de inestabilidad por la existencia de la subversión interna habría que agregar los conflictos fronterizos no resueltos con casi todos los países vecinos (Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile) que obligaban al gobierno a hacer frente a rupturas de relaciones diplomáticas, expediciones militares, enfrentamientos armados y amenazas de guerras internacionales.

Esta condición de inestabilidad política será uno de los principales desafíos a encarar por la Junta de Gobierno de la transición y por el primer gobierno elegido en este régimen, para lo cual asumen la tarea de institucionalizar los mecanismos de competencia electoral, de normar la relación entre los poderes del Estado, y “neutralizar” a las fuerzas armadas mediante su despolitización y profesionalización, de tal manera de revertir las debilidades de una “democracia asediada”.

La Junta de Gobierno de la Transición.

Las primeras acciones emprendidas por la nueva Junta de Gobierno fueron la desmovilización de ambas fuerzas militares¹¹⁵ y la convocatoria a nuevas elecciones

¹¹⁵ En cuanto al proceso de desmovilización de los ejércitos, se licenció a la milicia cacerista otorgándole sus pagos y gratificaciones y permitiéndoles que regresen a sus lugares de origen, similar medida se tomó más tarde con las montoneras coalicionistas. *“El proceso de desarme del ejército cacerista tuvo lugar en el puerto del Callao. Ahí, en ceremonia pública, presidida por las autoridades civiles, se entregaron tres*

generales. Como parte de los acuerdos iniciales se respetarían los grados militares de ambos ejércitos, así como las resoluciones de carácter administrativo del gobierno anterior.

La Junta de Gobierno, presidida por el líder civilista Manuel Candamo, desempeñó tareas propias de una transición, tal como señalaron en su primer decreto¹¹⁶ en el que anunciaban la toma de posesión del Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución de 1860, y aceptaban *“la honrosa misión que les había sido confiada persuadidos de que ella va a consistir exclusivamente en respetar los derechos de todos... (y su labor) sería de paz y conciliación (...) allanando con sus trabajos el camino de reformas saludables en que debe entrar el gobierno que definitivamente ha de darse la nación en breve”* (Basadre, 1968: 112, v.X)¹¹⁷. La duración de esta Junta de Gobierno fue aproximadamente de seis meses (20 de marzo hasta el 8 de setiembre de 1895).

Otra de las tareas urgentes del gobierno fue la reconstitución del aparato estatal, que se encontraba severamente desarticulado desde la guerra civil. En un ánimo conciliador y plural propio de esta transición se procedió al llamado de personalidades independientes y de los diversos partidos civiles, tanto de procedencia provinciana como limeña. Un ejemplo de este “espíritu” consensual que pretendía suscitar el gobierno de transición fue el mantenimiento irrestricto de la libertad de prensa, la cual permitía la continuidad de la publicación del vocero del Partido Constitucional, “La Opinión Nacional” dirigido por el periodista cacerista Andrés Avelino Aramburú, el cual desempeñó una constante labor de oposición.

Respecto del proceso electoral, se procedió a la convocatoria de elecciones generales el 14 de abril de 1895, de acuerdo al estatuto electoral de 1861 que proveía la vigencia de

soles de plata a cada soldado que depuso las armas. En total fueron 1.650 soldados los que se acogieron a la medida desmovilizadora.” (Mac Evoy; 1997: 349)

¹¹⁶ “El 21 de Marzo la Junta de Gobierno lanzó un manifiesto a la Nación en que ofrecía una labor de paz y de conciliación propendiendo a la reconstrucción de los poderes públicos y declarando que la Constitución y las leyes imperaban, desde ese día, en toda la república” (Ulloa, 1981: 346).

¹¹⁷ En el balance final de la labor que rinden ante el parlamento señalaron que *“No le correspondía introducir innovaciones en lo que normalmente preexistía, iniciar reformas estables, ni tocar cuestiones de trascendencia en ningún orden.”* (Basadre; 1968: 118-9, v.X).

las Juntas de Notables y mediante el procedimiento indirecto de los Colegios Electorales. Por tanto, el estatuto electoral de 1892 aprobado por los civilistas (que pretendía retornar al eje de las Municipalidades como las sedes de las elecciones) fue postergado, así como la demanda demócrata de elecciones directas. Al respecto, la Junta de Gobierno argumentó que no disponían del tiempo necesario para implementar los cambios electorales que señalaba esta ley Electoral (una Junta Suprema Central independiente del Poder Ejecutivo) y aquellos exigidos por los coalicionistas antes y durante la guerra civil (voto directo). Esta Junta remarcó explícitamente que no deseaban que se extendiera más de lo necesario su permanencia en el poder.

Mientras tanto, se empiezan los preparativos partidarios para acudir al llamado electoral tanto entre los civilistas¹¹⁸ como al interior del Partido Demócrata. Recordemos que el Pacto de la Coalición fue originariamente una alianza para reivindicar una exigencia de elecciones justas y posteriormente fue el frente de lucha contra la dictadura militar, sin embargo no implicaba una candidatura electoral conjunta como señala explícitamente el acta en la que se suscribió dicho pacto¹¹⁹.

En esas condiciones, los civilistas evaluaron en una reunión la adhesión a la candidatura de Nicolás de Piérola o la presentación de una candidatura propia. Uno de los asistentes al conclave civilista, Celso Bambarén, se opuso a la adhesión a la candidatura de Piérola, mientras quienes la sostenían (Francisco Rosas y Luis Bryce) señalaron que sin esta candidatura el partido estaría perdido, ya que los demócratas tenían el apoyo popular, y los constitucionales el apoyo del Ejército. De esta manera la decisión a favor del apoyo a Piérola fue casi unánime con excepción de Bambarén (Basadre, 1968: 146-7, v.X).

¹¹⁸ Luego de la derrota de cacerismo y previamente a las elecciones de 1895, los civilistas se separan de la Unión Cívica y recuperan su autonomía, pero aún no reconstituyen el partido sino hasta el 10 de mayo de 1896. Mientras tanto, Mariano Valcárcel y sus amigos mantienen la Unión Cívica como un partido político; sin embargo perderá importancia progresivamente a lo largo de la siguiente década, aunque estará presente en muchas de las coaliciones de gobierno como un socio menor (Basadre; 1980: 46).

¹¹⁹ Inciso 2 del Pacto de la Coalición: *"Uno y otro partido son completamente libres para designar sus candidatos a la Presidencia de la República, a las senadurías y diputaciones, y a las funciones municipales, y para celebrar los acuerdos electorales que estimen convenientes."* Publicado en el Heraldo de Valparaíso, 18 de Abril de 1894 (Archivo de Isaías de Piérola), citado en Dulanto: 1947: 405.

Piérola recibió complacido la adhesión del Partido Civil a su candidatura, y asume que un resultado de consenso proporciona mayor estabilidad al nuevo régimen político. Por lo tanto, hace un llamado a la unidad nacional en la Asamblea Nacional de su partido (29 de Mayo de 1895), reunida para tomar decisiones frente al advenimiento del proceso electoral: *“No ha estado solo en la lucha (refiriéndose al Partido Demócrata): concurso más o menos eficaz, pero no dudoso, llevóle (sic) el Partido Civil y cuantos aguardaban en el alma el sentimiento de la patria, reprobación para lo malo, indignación por el oprobio que se había echado sobre el Perú con el desvergonzado golpe de fuerza del año anterior. (...) Borrando antiguas divisiones y enconos de lucha, apartando el debate de los intereses públicos del combate personal, para traerlo al campo único en que es saludable –el de las ideas- ha hecho que las fuerzas todas del país concurren, en amistosa faena, a levantar unidos el hogar del pueblo nuevo, que es su gran necesidad y nuestra antigua aspiración”* (El Comercio, 30 de mayo de 1895).

En esta asamblea se ratificó la candidatura del líder del Partido Demócrata y se eligieron líderes regionales como Guillermo Billinghurst (promovido por el mismo Piérola) y Augusto Seminario a la 1era y 2da Vicepresidencia respectivamente. Quedó desplazado al tercer lugar y por tanto fuera de la fórmula presidencial, el joven caudillo provinciano Augusto Durand, aunque en los meses posteriores asumiría la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Las elecciones generales se llevaron a cabo en mayo de 1895, y en éstas hubo un solo candidato: Nicolás de Piérola. Además, se realizaron también elecciones parlamentarias competitivas, en las que participaron listas de los partidos demócrata y civil por separado. Piérola es también electo como diputado por Arequipa (conjuntamente con Eduardo López de Romaña). En su calidad de diputado de mayor votación, Piérola fue nombrado como presidente de las Juntas Preparatorias, instancia a la que correspondía la calificación de las credenciales de los diputados según la antigua Ley Electoral.

Dados los defectos de la Ley de Elecciones de 1861 se suscitaron los tradicionales vicios electorales (falsificaciones, suplantaciones y dualidades) que correspondía resolver a las

Cámaras. Ante esta situación Piérola exhorta a sus colegas de las Juntas Preparatorias a que no hagan prevalecer sus intereses partidarios, sino en base del respeto de la ley: *“Aquí somos jueces y únicamente jueces (...) Vamos a constituir el primero de los Poderes Públicos y vamos a constituirlo sobre la única base sólida y real: el cumplimiento severo y escrupuloso de la ley, la verdad en la elección y el respeto profundo a la voluntad del país”* (Basadre; 1968: 145, v. X). Las palabras de Piérola se ratifican luego con sus propias decisiones, así solicita que se anulen las elecciones en Lima, aún cuando habían favorecido a los demócratas, ya que no se había exigido el voto personalizado y por que figuraban *“como electores personas que no habían nacido ni viven en las parroquias de la ciudad”* (Dulanto; 1947: 451). Otro hecho significativo respecto de la intención de Piérola de fundar una ética política basada en el respeto al libre sufragio, se reflejan en anécdotas que cuenta Basadre (1980: 47-8); en una de ellas refiere que uno de los candidatos demócratas y cercano colaborador de Piérola, Eduardo Bueno, fue aceptado por unanimidad en la Junta de Poderes, sin embargo fue objetado por su propio líder, quién señaló que no podía ser representante por Pomabamba ya que no residía allí, otro caso similar sucedió con un familiar, Carlos Abril y Piérola, que también fue tachado con las siguientes palabras: *“El señor no puede ser incorporado a esta Cámara por que yo soy su tío, le conozco desde la niñez y sé perfectamente que jamás ha residido en provincias”*. Estas Juntas preparatorias terminaron sus funciones el 29 de Agosto de 1895.

Mientras tanto, el Colegio Electoral proclama Presidente de la República a Nicolás de Piérola el 12 de agosto de este agitado año. Para ello se tuvo el resultado siguiente: 4,150 electores a favor de Piérola (96%), de un total de 4,310 electores que concurrieron a votar, siendo el total de electores a nivel nacional de 5,180 (Basadre; 1968: 146, v.X).

El término de la Junta de Gobierno de transición y el inicio de un nuevo gobierno presidido por Nicolás de Piérola se da en un ambiente de consenso y de convocatoria a la unidad política y social¹²⁰. El recuerdo de la violencia y anarquía de la guerra civil que

¹²⁰ El líder civilista y Presidente de la Junta de Gobierno, Manuel Candamo, en la ceremonia de entrega de mando en el Congreso hizo énfasis en su discurso en la conciliación política que representaba la alianza que

afectó directamente a la misma capital del país, influyeron en este ánimo de buscar la reconstitución de un nuevo ordenamiento social.

Asimismo, los coalicionistas gozaban de una amplia legitimidad debida no sólo al apoyo ciudadano, sino además por que habían logrado la unidad política e ideológica necesaria para enfrentarse y derrotar a sus tradicionales rivales a lo largo de la historia republicana: los militares¹²¹, y en un periodo en que este segmento social había consolidado un proyecto autoritario con expectativas de poder de largo plazo.

Otro elemento final que nos permite reflejar el nuevo escenario es el perfilamiento de nuevos liderazgos políticos que ejercen una representación de intereses en muchos niveles: partidarios, regionales y económicos, lo cual constituyó un buen inicio para asentar la nueva institucionalidad política en vinculación con otros sectores de la sociedad civil.

Todos estos factores políticos, económicos y sociales crean un escenario propicio para que prospere una forma específica de régimen democrático: el consensual¹²². Tal opción política no era nueva en la historia del Perú, el propio General Cáceres había logrado durante su primer gobierno (1886 – 1890) un amplio soporte político y social para la tarea de la reconstrucción nacional. Un acuerdo político pudo haberse plasmado anteriormente, tal como se deduce de la conversación entre los líderes del Partido Civil, Francisco Rosas, Luis Carranza le decían a Fuentes Castro: “*Si nos hubiéramos aliado*

había derrotado a los militares y que iba a mantenerse durante el nuevo gobierno, asimismo en el abandono de las viejas rencillas entre los miembros de la Coalición: “*Este trascendental acontecimiento no es el resultado de los esfuerzos perseverantes de un partido político; es el triunfo del país entero, que a costa de grandes sacrificios, ha logrado satisfacer su más vehemente aspiración, con el establecimiento de un gobierno civil. Ha tocado presidir transformación tan venturosa, al que, habiendo sido durante largos años prestigioso caudillo, ha arrojado ya de su memoria los ingratos recuerdos de las antiguas luchas, y llega a poder con el firme propósito de apelar a todos los miembros sanos que concurren a la obra del bien común.*” (Ulloa; 1981: 358).

¹²¹ “Por consiguiente, el problema de la democratización no sólo consiste en provocar la caída de un régimen autoritario, sino en establecer un compromiso entre las fuerzas que se han aliado para derrotar a dicho régimen.” (Przeworski, 1999: 93)

¹²² “el modelo consensual es incluyente, negociador y sujeto a arreglos; por esta razón, la democracia consensual puede también ser denominada como “democracia negociadora” (Lijphart; 1999: 2, traducción mía).

con Piérola hace veinte años, el país no habría perdido ese tiempo en convulsiones revolucionarias y en trastornos económicos” (Basadre, 1968: 147, v.X). Sin embargo, sólo bajo las condiciones que imperaron en 1895 es que se logra el acuerdo de una amplia coalición de gobierno civil en torno a la figura del líder del Partido Demócrata.

Nicolás de Piérola (1895 – 1899): el primer gobierno del nuevo régimen democrático.

Piérola llega por segunda vez al gobierno el 8 de setiembre de 1895. En ambas oportunidades, Piérola recibió el apoyo popular y político en momentos críticos para el Perú (la invasión del ejército chileno en 1879 y el inicio de un nuevo régimen político en 1895); sin embargo, en la primera ocasión se trataba de un golpe de Estado y la instauración de una dictadura; mientras que en el segundo era exactamente al revés. Esta diferencia nos remite a distintas etapas en la vida de este personaje que marcó la historia política del Perú por casi medio siglo (entre 1869 a 1913): el eficiente funcionario de Estado, el revolucionario, el estadista y el político de oposición.

Nicolás de Piérola y Villena nace en Arequipa en 1839, y descende de una familia provinciana con raíces aristocráticas, pero sin fortuna. Su padre (Nicolás de Piérola y Flores) estuvo vinculado a la política conservadora (fue ministro de Hacienda del Presidente José Rufino Echenique), la cual sirvió de primer vínculo doctrinal y político del hijo, quien asimiló las enseñanzas del ideólogo conservador más destacado del siglo XIX, Bartolomé Herrera, y las expone en un ensayo de 1861, titulado “Memoria sobre Soberanía Política”, la cual es “*una especie de versión hispano – americana del despotismo ilustrado de los reyes europeos del siglo XVIII, aunque sin lastre de enemistad con la Iglesia Católica*” (Chirinos; 1977: 346) . A la par de esta orientación ideológica, Piérola fue muy religioso (había estudiado en el Seminario de Santo Toribio durante ocho años), y mantendría durante toda su vida vínculos estrechos con el clero.

Piérola contrajo matrimonio a los 22 años con su prima hermana Jesús Iturbide y Villena, con la cual tendría siete hijos (cuatro de ellos fallecidos tempranamente), de los cuales Isaías y Amadeo tendrían una intensa actividad política. Ya como jefe de familia Piérola

se inició como hombre de negocios a través de una pequeña imprenta, en la cual edita su propio diario “El Tiempo” en 1864 y destaca por su corte polémico y de apoyo al gobierno conservador de Pezet, el cual le otorga una subvención oficial a través de la compra de un número determinado de ejemplares.

Cuando apenas contaba con 30 años, Piérola es nombrado ministro de Hacienda en el gobierno del Coronel José Balta (siendo recomendado personalmente por el general Echenique). La crisis económica provocada por el agudo déficit fiscal obligó a la renuncia de Francisco García Calderón, quien a su salida propone un empréstito extranjero o recurrir a nuevos adelantos a los consignatarios del guano (fertilizante natural que había sido la fuente principal de los ingresos públicos pero que estaba asignados a particulares para su exportación, los cuales cobraban suculentas comisiones).

El “boom” económico del guano empezó a mediados del siglo XIX durante el gobierno liberal del Mariscal Ramón Castilla, y fue el mecanismo económico para el crecimiento del aparato estatal, la construcción de ferrocarriles, la manumisión de los esclavos y correspondiente compensación a sus amos, y la supresión del tributo indígena. A su vez, este recurso se constituyó en el origen de una nueva clase social, los consignatarios que se enriquecieron con las comisiones ganadas, y luego las invirtieron en haciendas, bancos e industrias. Sin embargo, el desorden administrativo, la falta de fiscalización a estos consignatarios, y el exceso en el gasto público revirtió el efecto inicial de esta expansión económica, en un crecimiento de la deuda externa e interna y un déficit fiscal crónico.

El primer rol destacado y conflictivo de Piérola fue como Ministro de Hacienda, quien para contrarrestar la escasez de fondos públicos elimina todas las consignaciones del guano y realiza una licitación pública para la explotación de este recurso, la cual es ganada por el empresario judío -- francés Dreyfus. Las favorables condiciones de este contrato le permiten al gobierno superar el problema económico, sanear su presupuesto y reiniciar el ambicioso programa de construcción de ferrocarriles. Sin embargo, las consecuencias de este logro del joven ministro le ganarían la profunda enemistad de los

empresarios nacionales, quienes a su vez promueven la creación de la primera agrupación política de la historia republicana en 1871: el Partido Civil.

El proyecto liberal civilista que pretendía desplazar a los militares del poder es encabezado por Manuel Pardo, quien asume la presidencia mediante un proceso electoral en 1872; mientras Piérola se erige como un firme opositor a los liberales, quienes lo acusan en el parlamento por malversación en su gestión ministerial y se le impide asumir su cargo como diputado electo mediante maniobras fraudulentas (Chirinos; 1977: 350). A pesar de que fue absuelto gracias a notables alegatos en su propia defensa, Piérola abandona la oposición legal, y emprende una campaña contra este gobierno y su sucesor (Manuel Prado), a quienes identifica como representantes de la plutocracia; y en ese afán promueve conspiraciones como la expedición del Talismán en 1874¹²³, la revuelta de Yacango en 1876¹²⁴ y la sublevación del Huáscar en 1877¹²⁵. Si bien estas aventuras revolucionarias son muy criticadas por la prensa y la emergente clase política, sin embargo contribuyen a forjar *“la leyenda de un caudillo que exponía su vida codo a codo con sus prosélitos”* (Basadre; 1981b: 164).

A pesar de su oposición inicial a la guerra con Chile y acusando a aquellos que la azuzaban de *“ambiciosos vulgares, traficantes conocidos y anatematizados”* (Manifiesto de Valparaíso, 21 de octubre de 1879, citado en Ibidem), asumió el mando supremo a través de un golpe de Estado y encabezó la resistencia armada contra el invasor; sin embargo, la superioridad militar y de armamento determinan el triunfo chileno en las

¹²³ En octubre de 1874, Piérola y sus seguidores fletaron el barco “Talismán” en Inglaterra y lo equiparon de armamento en Chile. El Presidente Manuel Pardo ordenó al monitor Huáscar, bajo las órdenes de Miguel Grau, lograr su rendición. En el puerto de Ilo, donde Piérola había desembarcado para aprovisionarse, el Huáscar capturó al Talismán el 2 de noviembre. Los revolucionarios logran huir hacia Moquegua, que quedó bajo dominio temporal de los revolucionarios.

¹²⁴ El 6 de octubre de 1876, Piérola al mando de 300 hombres toman la ciudad de Moquegua. Simultáneamente debían producirse levantamientos en las ciudades de Puno y Arequipa, los cuales fracasan. La batalla decisiva entre los subversivos y el ejército se realizó en Yacango el 19 de octubre, donde luego de la derrota Piérola huye a Bolivia.

¹²⁵ El 6 de mayo de 1877, un grupo de picrolistas captura la nave de guerra Huáscar, y recogen a Piérola en el Puerto de Cobja dos semanas más tarde. Piérola se enfrenta luego en el Combate de Pacocha a dos buques ingleses de guerra y logra que se retiren. Finalmente, Piérola se entrega a la escuadra peruana que había partido en su búsqueda, sin embargo, su gesto se convertirá en una gran hazaña para el imaginario popular.

batallas de San de Juan y Miraflores, lo cual les permite ocupar Lima y dominar en gran parte del territorio nacional. Posteriormente, Piérola es desplazado de la dirección militar de resistencia por otros generales (Cáceres e Iglesias) y de la misma jefatura del Estado en 1881.

Piérola regresa a la escena pública por medio de la fundación del Partido Demócrata en 1884, en el cual se revela como un defensor de las instituciones como los partidos políticos¹²⁶ y el sufragio honesto¹²⁷, y con un programa que anunciaba un gobierno eficiente: funcionarios profesionales, organización tributaria racional y justa, presupuesto exacto, contabilidad honesta, una moneda sana, ejército disciplinado, policía capacitada (Basadre; 1981a: 146). El trayecto de Piérola en adelante fue la lucha contra el autoritarismo de los militares y por la instauración de un régimen democrático, por tal razón será nuevamente perseguido, exiliado o encarcelado; avatares que sólo contribuyeron a incrementar su popularidad y arraigo en las clases populares¹²⁸, de la cuales se había erigido como defensor de sus intereses¹²⁹.

El momento culminante de Piérola empieza con la revolución de 1895, en la cual logró reconstituir una amplia alianza civil y forjar una milicia que vence al poderoso y bien apertrechado ejército del General Cáceres. Su triunfo no sólo le abrió las puertas del poder, sino que permitió la instauración de un Estado de Derecho, en el cual prevaleciesen la Constitución y las leyes, se respetasen las libertades individuales y públicas, y se reconstituya el equilibrio de poderes. El reto que asumiría Piérola fue la de

¹²⁶ "...al interés nacional conviene que las diversas agrupaciones no sean privadas de voz y representación proporcional y permanente en los negocios públicos y que se sucedan en la dirección de éstos a medida que alternativamente ganen en su apoyo la mayoría nacional.

Sin partidos políticos permanentes, con organización y programa bien definidos y conocidos, es imposible la marcha ordenada y regular de una democracia." (Partido Demócrata; 1912: 7).

¹²⁷ "La elección es la base sobre la que descansa todo entero nuestro edificio político. Falsearla en cualquier forma, es, por lo mismo, minarlo desde sus cimientos; pervertir las instituciones; imposibilitar la ordenada y progresiva marcha del país, sustituir el imperio de la ley y del derecho, por la opresión en los que mandan y la rebelión en los que obedecen: es atentar contra la vida nacional y el bienestar de los ciudadanos de la manera más grave y trascendente" (Ibid: 27).

¹²⁸ Piérola es conocido popularmente también por los apelativos del "El Califa" y "El Regenerador".

¹²⁹ "...y que las leyes e instituciones, asegurando el derecho de todos, lejos de proponerse el beneficio especial de los más afortunados, deben tener en mira preferente el mejoramiento moral y material de las clases más numerosas y desvalidas" (Ibid: 8).

un estadista que quiso consolidar el nuevo régimen democrático y de un presidente que pretendió hacer realidad la promesa de un gobierno eficiente.

El primer jefe de gabinete y ministro de Gobierno fue un antiguo militante demócrata, Antonio Bentín; y lo acompañaron sus compañeros de partido: coronel Parra en la cartera de Guerra, Melitón Porras en el ministerio de Relaciones Exteriores; también figuraban Augusto Albarracín (perteneciente a la Unión Cívica) y el independiente Francisco Bresani en el ramo de Hacienda. Como señaló el diario *El Comercio* (10 de setiembre de 1895), este gabinete no expresaba una representación de los partidos, sino que se orientaba por las cualidades de las personas nombradas. Por otra parte, el Partido Demócrata alcanzó la mayoría en ambas cámaras legislativas y por lo cual eligieron a los demócratas Manuel Pablo Olacoechea y Augusto Durand como presidentes de las cámaras de senadores y diputados respectivamente, para el periodo 1895 – 1896.

Durante el periodo del gabinete Bentín se suscita el primer conflicto importante de este gobierno, se trató acerca del tema de las Juntas Departamentales. En efecto, el 19 de octubre de 1895 el Ejecutivo envió un proyecto de Ley que intentaba suprimir las Juntas Departamentales, los cuales eran organismos descentralizados encargados de realizar la obra pública y de administrar ciertos servicios públicos en las provincias, y que constituían el bastión de los núcleos regionales. Mac Evoy (1997: 353-4) argumenta que el desplazamiento de las regiones por el centro fue una intención política del oficialismo coalicionista; no sólo por la existencia de intereses centralistas que se sintieron amenazados por la fuerte presencia de líderes regionales en la capital, sino además por la preocupación del gobierno de generar un orden nacional más estable, luego del caos anarquizante de las guerras que habían afectado la estructura estatal desde 1879.

Dicho proyecto no fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin embargo otra de las maneras que el Gobierno encontró para debilitar a estas Juntas fue “*ahogarlas económicamente*”, y para ello se promovió la ley de abolición del tributo indígena el 11 de Noviembre de aquel mismo año. Aunque la declaración oficial de la supresión de este

tributo refería a la defensa de los intereses de los indios¹³⁰, Mac Evoy lo atribuye a que se pretendía la eliminación de la mayor parte de los ingresos de las Juntas Departamentales¹³¹.

Justamente la presentación del proyecto del ejecutivo de la abolición del tributo indígena motivó la primera crisis de gobierno: la censura parlamentaria del gabinete Bentín. Este conflicto se inicia el 21 de Noviembre de 1895, cuando al término de un intenso debate parlamentario en torno a la solicitud del Ministro de Hacienda Francisco Bresani acerca de la abolición de la contribución personal que pagaban los indígenas al Estado, la barra que había estado a favor del gobierno arremete en la calle con insultos y piedras a los diputados que habían criticado la petición del Gobierno¹³². Dos días después los diputados Germán Leguía y Ugarte acusaron al ejecutivo de no haber impedido estos actos de violencia con la intención de menguar el prestigio de la Cámara. Esta argumentación logró crear un espíritu de cuerpo de los diputados sin distinción de partido, por lo que se procedió a una moción de censura que fue aprobada incluso con los votos de varios diputados del Partido Demócrata, lo que determinó la inmediata renuncia del gabinete en pleno.

El Presidente Piérola no aceptó la dimisión de sus ministros y envió una carta al Senado¹³³ para que éste se pronunciase al respecto de esta moción de censura. Esta

¹³⁰ El Ministro de Hacienda Bresani fundamentó dicho proyecto de ley, señalando que la contribución personal era *"odiosamente injusta y necesariamente ocasionada a abusos y atropellos, en especial contra la clase indígena que es casi únicamente la que la paga. Mantenerla es mantener una odiosa injusticia"* (Citado en Basadre; 1968: 221).

¹³¹ Mac Evoy (1997: 358) sostiene que luego que la Coalición llegó al poder, *"un importante sector de políticos limeños dio inicio a un sutil y eficiente proceso de centralización política y de desactivación de los núcleos regionales. Así, paradójicamente, los antiguos aliados que mediante sus violentas acciones políticas colaboraron en el derrocamiento del orden cacerista además de ser excluidos del disfrute del poder político al que creían tener derecho, fueron privados de las autonomías locales, que a lo largo de los años habían logrado acumular"*.

¹³² A pesar de las consecuencias políticas que acarreó el tema de la abolición del tributo indígena, éste fue aprobado el 24 de diciembre de 1895, tal medida afectó considerablemente el presupuesto de las Juntas Departamentales, ya que al quitársele esta renta no se la compensó con alguna otra.

¹³³ *"Mi deber público me prohíbe aceptarla; ni podría hacerlo, sino en el caso de que, cumplida la condición exigida por la ley, hallase en mí permanente deseo de acatarla y aún sin estar obligado a ello, fundamento para esa aceptación. En la hora de malestar profundísimo, dentro y fuera, a que hemos llegado, el Perú condena todo lo que signifique querellas de círculo; todo cuanto no sea labor afanosa de*

cámara nombró una comisión compuesta tres miembros Boza, Coronel Zegarra y Carranza (siendo demócratas los dos primeros y civilista el último), los cuales respondieron a Piérola en los siguientes términos:

- La Constitución no obligaba a los ministros a renunciar sólo con la censura de la Cámara de Diputados (requiere el voto de ambas cámara o del Congreso), sin embargo es la costumbre lo que motivaba la dimisión ante el voto de censura de una de las cámaras.
- En la medida que la Cámara de Diputados no había enviado la resolución respecto del Gabinete Bentín a la Cámara alta, ellos no se consideraban competentes para votar sobre dicho asunto, a riesgo de generar un conflicto con sus pares congresales (Basadre; 1968: 150, v. X).

Resulta interesante analizar este evento que marcará una pauta en la relación Ejecutivo-Legislativo. En primer lugar, se destaca la importancia de la Cámara de Diputados que, por encima de opiniones partidarias, reacciona sólidamente frente al Ejecutivo, lo cual nos remite a una larga tradición de funcionamiento del Poder Legislativo en la historia republicana a pesar de los golpes de Estado, y en tanto que el parlamento se constituyó en el baluarte de oposición al régimen militar entre 1890 a 1894. En segundo lugar, los orígenes banales de este conflicto pudieron desembocar en un distanciamiento de Piérola con los parlamentarios, sin embargo la salida fue alturada y con el propósito de mantener una relación de independencia de poderes, a la vez que de cooperación. Tal como concluye Basadre (1968: 151, v.X): *“La conducta del Senado, que fue respetuosa pero no genuflexa ante el caudillo de la Coalición y consecuente con la otra rama del Legislativo aunque no sumisa a ella, anunció que había un nuevo clima de independencia entre los Poderes, sin beligerancia mendaz ni servilismo. El Gabinete Bentín fue sacrificado aparentemente por su propia voluntad y al marcharse, pese a ser injusta la censura, prestó un servicio al Gobierno.”*

Sólo ante la insistencia de la renuncia de sus ministros, Piérola accedió a las dimisiones y a continuación nombró un nuevo gabinete presidido por el demócrata Manuel Antonio Barinaga, en la cartera de Justicia; e integrado por otros 3 demócratas: Benjamín Boza en Gobierno, Manuel Jesús Obín en Hacienda y Ricardo Ortiz de Zevallos en Relaciones Exteriores; finalmente el Coronel Ibarra en el ministerio de Guerra. En este gabinete se creó el nuevo ministerio de Fomento, que lo pasó a ocupar el demócrata Eduardo López de Romaña el 22 de enero de 1896. Como observamos, este segundo gabinete aún mantiene una composición mayoritariamente demócrata, como también fue el caso anterior.

Un conflicto de similar naturaleza sucede con el nuevo gabinete Barinaga (una confrontación entre los poderes legislativo y ejecutivo) suscita la segunda crisis de gabinete. Este Consejo de Ministros que inició sus funciones el 30 de noviembre de 1895, renunció el 5 de agosto de 1896. Esta vez el incidente que origina la caída del Gabinete se debió al apresamiento de algunos diputados de provincias que fueron sorprendidos *in fraganti* transportando armas, y por ende fueron encarcelados y acusados de contrabando por el Gobierno. Frente a este hecho, una comisión de la Cámara de Diputados, compuesta por mayoría de demócratas, consideró que no se aplicó correctamente la figura jurídica del contrabando y que la detención no había respetado la inmunidad parlamentaria, ya que ésta se produjo cuando aún no se había vencido el plazo de treinta días posteriores a la última legislatura extraordinaria, por lo que el enjuiciamiento y detención de estos diputados constituía una violación constitucional. Previendo que la censura sería aprobada cuando la legislatura ordinaria empezase, el Gabinete renunció antes de que se instalen las Cámaras.

Este nuevo incidente reafirma la independencia que el Congreso trató de mantener frente al Poder Ejecutivo, a pesar de que éste contaba con una mayoría parlamentaria. Asimismo, es posible vislumbrar fisuras al interior de la bancada parlamentaria del Partido Demócrata, que no permite una lograr una estabilidad de los primeros gabinetes de Piérola. Por otro lado, el incidente muestra que la desmovilización militar no es completa y que no existe un juego democrático consolidado, de tal manera que aún

subsisten alternativas al margen de este régimen. En todo caso, la propuesta que hace Piérola para que todas las fuerzas políticas se sometan a un único medio (las elecciones) para alcanzar el poder¹³⁴, no es aún el sentido común de todos los actores.

Otro conflicto significativo durante las funciones del gabinete Barinaga fue el caso vinculado con el órgano de prensa de oposición *La Opinión Nacional*. Este publicó durante el mes de abril de 1896 hechos referentes a denuncias realizadas por los vecinos de la localidad de Cocharcas; según las cuales un grupo de gendarmes llevaban a un hombre atado, el cual gritaba que lo iban a matar. El director del diario cacerista Andrés Avelino Aramburú fue llamado por la Intendencia de Policía para que señalará la fuente de donde había obtenido esta información, y en la medida que el periodista se negara fue encarcelado bajo cargos de encubrimiento. El Ministro de Gobierno, el demócrata Benjamín Boza, ordenó que Aramburú fuese puesto a cargo del Juzgado del Crimen, frente a lo cual éste acusó al gobierno de atentar contra la libertad de prensa. Finalmente, la Corte Suprema dictaminó que no correspondía el delito de encubrimiento para el caso de alguien que usa una fuente informativa reservada para la publicación de una noticia en un medio de prensa; asimismo, que no era legal la prisión del inculcado por cuanto el proceso debió iniciarse previamente con una denuncia ante el Agente Fiscal. Por lo tanto, se pronunciaba por la libertad del detenido (la cual se hizo efectiva inmediatamente) y por la revocación de todos los cargos.

Este desenlace demuestra no sólo la independencia del Poder Judicial, sino el acatamiento del Ejecutivo frente a las resoluciones de aquella, aún tratándose de uno de los periodistas que fungía como vocero del Partido Constitucional y acérrimo opositor del

¹³⁴ La cita a la que se alude es la que transcribimos al comienzo de este capítulo, y que guarda un enorme parecido con el concepto moderno de “only game in town” que refiere Linz (1990:29): “una concepción minimalista de un régimen democrático consolidado, esto es, uno en el cual ninguno de los principales actores políticos, partidos o intereses organizados, fuerzas o instituciones, consideran que hay una alternativa a los procesos democráticos para obtener el poder, y que ninguna institución o grupo político tiene derecho a vetar la acción de los que gobiernan democráticamente elegidos. Esto no significa que no haya minorías prestas a desafiar y cuestionar la legitimidad de los procesos democráticos por medios no democráticos. Significa que los actores principales no recurren a ellos y que permanecen políticamente aislados. Por decirlo simplemente, la democracia debe ser considerada como el ‘único casino de la ciudad’ para utilizar una expresión del viejo Oeste.”

gobierno de Piérola. Por otra parte, se evidencia el carácter público del conflicto, tanto durante las audiencias judiciales como en los medios de prensa, así el diario *El Comercio* asumió la defensa de Aramburú; lo cual constituyó una retribución, ya que el diario *La Opinión Nacional* había procedido de igual forma cuando el Gobierno de Cáceres multó y suspendió las ediciones de *El Comercio*, luego de que informaran de la llegada clandestina de Piérola al país en 1894.

Otro de los incidentes políticos importantes durante el gabinete Barinaga fue la resolución de los pedidos de sanciones contra el régimen anterior que los diputados Mariano Cornejo y José Cáceres presentaron desde el 2 de Setiembre de 1895, para lo cual presentaron un proyecto de ley para declarar nulas y sin efecto las resoluciones del Congreso de 1894, borrar del escalafón a los generales Cáceres y Borgoño, así como anular los actos de gobierno de ambos gobiernos, asimismo se solicitaba que la Corte Suprema iniciase un juicio para investigar y penalizar a los autores del golpe de Estado del 1ero de Abril de 1894, cuando asumió el poder el Coronel Borgoño.

Luego del debate en ambas cámaras, se aprobó una ley que anulaba la proclamación como Presidentes del General Cáceres y del Coronel Borgoño, y declaraba nulos los actos gubernativos de ambos periodos, así como las leyes del Congreso de 1894. Sin embargo, también se aprobó una amnistía para los autores y cómplices de los delitos de rebelión cometidos desde el 1ero de Abril de 1894 (lo cual contemplaba a ambos grupos: Caceristas y Pierolistas); aunque ésta excluía a Cáceres y Borgoño y al gabinete Jiménez (el último de los gabinetes del General Morales Bermúdez)¹³⁵, por su colaboración directa en el golpe de Estado.

Este incidente nos muestra que a pesar de la original virulencia en las peticiones de sanciones contra los líderes del régimen militar provenientes de la Cámara de Diputados, el Senado como el Poder Judicial se limitaron a un marco mínimo de sanciones,

¹³⁵ Los ministros del gabinete Jiménez fueron finalmente absueltos por el Poder Judicial el 29 de diciembre de 1895.

sobretodo de carácter administrativo. Por su parte, el Partido Constitucional mantuvo una mínima vida orgánica como grupo político en torno a la figura de su líder, el General Cáceres; quien esperaba el momento propicio para retornar de su exilio. Sin embargo, dicha agrupación no tuvo una mayor relevancia durante el gobierno de Piérola.

Un último conflicto suscitado durante el gabinete Barinaga es la sublevación armada encabezada por Mariano José Madueño y Ricardo Seminario, que declaraba Estado Federal al lejano y selvático departamento de Iquitos. Para ello se había convocado previamente a una Asamblea Constituyente en la ciudad Loreto, la cual proclamaba la Federación aunque se reconocía al Gobierno central, lo cual es comunicado mediante telegrama al Presidente el 6 de Julio de 1896:

“Las cinco provincias de Loreto adheridose (sic) pacíficamente y gran entusiasmo al principio proclamado Iquitos, reconociendo igualmente gobierno de Vuestra Excelencia, protestando firme adhesión al orden de cosas república, dentro aspiración federal. Sería inútil expedición represora, pues actitud pueblo y gobierno Estado, es puramente pacífica, inspirada en ideas federales de vuestra excelencia, y conveniencia de su propia política actual. Si este pronunciamiento no fuese aceptado, de ninguna manera ha propósito de entrar en lucha fratricida; antes que todo es bien de patria. En todo caso actitud definitiva de VE impuesto realidad cosas así, será noblemente acatada”. Telegrama de Ricardo Seminario al Presidente, publicado en el diario El País, 8/7/1896, citado en Dulanto, 1947: 464.

Se destaca en las palabras de los insurrectos una intención de acogerse a los postulados federalistas del programa ideológico del Partido Demócrata, además de una voluntad de llegar a un acuerdo, a la par de mostrar su subordinación al orden político nacional; sin embargo, declaraban que mientras el Perú no adoptara el sistema federal, asumían los poderes y derecho de un Estado. Ante tales circunstancias, la respuesta de Piérola es terminante:

“Ricardo Seminario. Iquitos. Entregue Ud. sin demora gobierno Departamento a Cónsul del Perú, López Larrañaga, mientras llega Ministro Ibarra. La federación no puede ser hecha sino por el Perú, no por una fracción, y sólo por medios

debidos y saludables. El atentado cometido allí no ha hecho sino afearla." Ibid.: 465.

Por tanto, Piérola envió dos destacamentos militares a Iquitos, y aún antes de la llegada de éstos, los rebeldes se rindieron y huyeron el 16 de julio de aquel año. Dada la representación del orden y la institucionalidad que corresponde a un Presidente de la República, no fue plausible una negociación en semejantes condiciones: superioridad militar del Gobierno, inicio de un régimen democrático, insurrección militar que atentaba contra la constitución, pérdida temporal de soberanía. Sin embargo, el Congreso dio amnistía a los inculpados por este levantamiento el 7 de noviembre de 1896.

El tercer gabinete de Piérola fue encabezado por el demócrata Manuel Pablo Olaechea que a su vez ocupó la cartera de Justicia, y estuvo integrado por su compañero de partido José María de la Puente (Gobierno), el civilista Enrique de la Riva Agüero (Relaciones Exteriores), y tres profesionales independientes con trayectoria administrativa: Manuel Cuadros (Fomento), Ignacio Rey (Hacienda) y el coronel Juan Ibarra (Guerra y Marina)¹³⁶. Este consejo de ministros siguió conservando la tendencia profesional no parlamentaria de sus integrantes y que también lo habían tenido los dos primeros gabinetes (con algunas pocas excepciones); sin embargo, se incluía un connotado dirigente civilista, lo que empezaba a darle un cierto cariz consensual, el cual se va a acentuar más adelante. El gabinete Olaechea entró en funciones el 8 de agosto de 1896 y finalizó el 3 de noviembre de 1897.

El incidente más importante del gabinete Olaechea fue la aprobación de una nueva electoral. Ya desde el gabinete Bentín se había enviado a la Cámara de Diputados el proyecto de la Reforma Electoral, argumentando que se pretendía "*lograr que la renovación de los poderes públicos se haga únicamente por el voto de los ciudadanos; impedir que el partido llegado al poder se perpetúe en él a despecho de aquel voto*:"

¹³⁶ José María de la Puente y el Coronel Ibarra fueron prontamente reemplazados por Lorenzo Arrieta y el Coronel José de la Puente respectivamente (19 de agosto de 1896).

garantizar la sucesión en él de los partidos a medida que ganen la mayoría." (Citado en Basadre: 1968: 168, v.X).

Hasta ese momento, el proceso electoral no era precisamente un mecanismo que tradujese la voluntad de los votantes, sino más bien constituía una disputa violenta en las mesas de sufragio y una "calificación" arbitrariamente partidaria hecha en el Congreso, tal como lo relata en sus memorias un parlamentario de esa época, Manuel Vicente Villarán (citado en Dávalos; 1919: 128-30):

"Las Cámaras calificaban las credenciales de sus miembros. Todos los congresos, unos más que otros, abusaron de esta prerrogativa. Son conocidas las escenas de la incorporación, que se realizaban en las Juntas Preparatorias. Los candidatos, ordinariamente duales, presentaban sus actas, que pasaban a la Comisión de Poderes. El personal de la comisión era formado por sujetos que daban dictamen favorable al candidato favorecido por la mayoría de la junta. Contando con amigos, haciendo promesas, firmando compromisos, el aspirante más desnudo de méritos y popularidad podía tener esperanzas. Sus protectores del círculo imperante no le pedían sino traer actas, presentar unos papeles cualesquiera, que diesen pretexto al dictamen de la comisión. Las actas se traían desde la provincia, pero no habiendo tiempo de mandarlas hacer en el lugar, algunas se confeccionaban en Lima. En los días precedentes a la audiencia, andaban los aspirantes por los pasillos de las Cámaras haciendo sus trabajos. En la fecha señalada, los candidatos se presentaban ante la Cámara y, por turnos, subían a la tribuna a defender su elección. Algún amigo hacía de abogado oficioso. El presidente de la comisión de poderes replicaba defendiendo el dictamen. Y luego, por votación secreta, la Junta, como gran jurado irresponsable, daba su veredicto inmotivado.

El sistema era, pues, original. Rendían los pretendientes una especie de examen público de actitudes, sobretodo de facultades oratorias, y si la consigna política no era muy estrecha, algunos representantes tenían oportunidad de dar su voto de conciencia por el que hablaba mejor o tenía mejor aspecto personal. A veces siendo sobresaliente, había esperanza de forzar la entrada gracias a los votos de

almas justicieras, rebeldes a la consigna. Hubo aspirante que esgrimiendo con habilidad las armas de la buena oratoria, de la gracia y de la ironía, logró seducir a la Cámara, hundir en el ridículo a su desgraciado contendor y salir victorioso de una lucha desesperada. Y otras veces al contrario, se vieron irritantes inversiones de la justicia y del sentido común, cuando la obsecación del compromiso ineludible, produjo votos mudos y vergonzosos contra el candidato que demostrado brillantes facultades y presentado pruebas excelentes, y a favor del pretendiente que acababa de descalificarse por su torpeza o por sus bochornosos antecedentes revelados en el debate.

La conducta de la Cámara en el juzgamiento de las elecciones habría bastado para corromper las costumbres políticas. Pero el vicio arrancaba desde abajo, y tanta inmoralidad ostentaba el último acto de tragicomedia electoral que se desenvolvía en el recinto del Congreso, como su prólogo que se desarrollaba en las plazuelas. Las vísperas de la elección, en locales ubicados en las cercanías de las plazas públicas, se reunían bandas de plebe asalariada. Allí pasaban toda la noche, se les armaba y embriagaba, y al despuntar el día se lanzaban frenéticas unas contra otras a disputarse a viva fuerza las ánforas y las mesas. El pretexto de tan brutal sistema se encontraba en la ley, que inspirándose en una noción ultrademocrática quería que el pueblo por sí mismo eligiese, ante la llamada mesa momentánea, las mesas permanentes o comisiones receptoras de sufragio. Quien tenía las mesas había ganado la elección. Para conseguirlas se luchaba entonces a golpes y tiros. Se necesitaba expulsar de la plaza al bando contrario, para que el personal de la mesa arreglara tranquilo los papeles que simulaban la elección. El tumulto, los disparos, la sangre, formaban parte obligada del procedimiento tradicional.

(....) Los derrotados, como debe suponerse, no se resignaban. En el sigilo simulaban la elección de otra mesa, que servía de punio de partida para confeccionar el proceso dual.

Los demás actos eleccionarios eran muy sencillos. Los electores que se reunían elegidos ante las mesas receptoras de sufragios, reuníanse en la capital de la provincia. El colegio electoral provincial gozaba de autonomía. Ninguna junta

departamental ni nacional, ningún tribunal de justicia, revisaba ni vigilaba sus actos. Creyeron los autores de la ley que debía confiarse en los frutos espontáneos de la libertad y en la recta conciencia de los ciudadanos. Los electores celebran sesión en el local de la Municipalidad. Se calificaban a sí mismos juzgando entre ellos de la legalidad y verdad de sus propias credenciales. Y en seguida procedían a la votación para los cargos de diputados, senadores y Presidente de la República. Ellos mismos hacían el escrutinio, proclamaban el resultado y sentaban un acta. La copia del acta era la credencial del diputado. No era preciso que todos los asistentes ni siquiera la mayoría, firmase el acta, siendo bastante que lo hiciese la mesa directiva y seis electores, nueva facilidad que ofrecía la ley para dar entrada a la dualización de los colegios.

Demás es de advertir que el Colegio provincial carecía de independencia sobre el sentido de sus votos. Los electores llevaban consigna estrecha y eran simples instrumentos del partido o facción que los nombraba. Designados los electores, la reunión del colegio era una fórmula.

Tal es en breves rasgos, el sistema que tuvimos hasta 1896."

El debate de la reforma electoral fue largo y arduo, ya que a partir del proyecto de reforma que envía el ejecutivo, se hacen modificaciones tanto en la cámara de diputados como en la de senadores. Las votaciones a favor de una u otra de las cámaras reflejaban las posiciones descentralistas asumidas por los diputados que privilegiaban intereses regionales, mientras que una mayoría de senadores con una posición más centralista defendía una postura que favorecía la institucionalidad de los partidos históricos.

Chiaramonti (2000: 234) señala que el sistema electoral de sufragio amplio e indirecto anterior a 1896 promovía una tendencia descentralizadora, aunque impidiese la consolidación de un poder central, de tal modo que era difícil la gobernabilidad y estabilidad. Así, el sufragio indirecto con un registro de votantes incierto, inexacto y manipulable por los notables de las provincias determinaba una relación inadecuada entre

el número de votantes y el de electores¹³⁷, de tal manera que los departamentos de la sierra, especialmente aquella vinculada con la población indígena (Apurímac, Cuzco y Puno), resultaban con un gran peso político al momento de la elección presidencial. Mientras que con la reforma electoral, el voto directo y limitado (saber leer y escribir) había inclinado el mayor peso electoral a favor de los departamentos de la costa, cuya composición étnica ya no es mayoritariamente indígena, sino más bien mestiza y blanca¹³⁸. De tal manera que *“si antes al presidente lo elegían los Andes, ahora lo elegía la costa. No es causal que los presidentes elegidos en el periodo que Basadre llamó de la “república aristocrática” fueran todos costeños o vinculados a negocios azucareros o exportadores en general”* (Ibid.: 250).

Los argumentos de Chiaramonti se dirigen además a criticar la exclusión de los indígenas que contemplaba el proyecto de la reforma electoral. De tal modo que el 45.86% de la población total peruana fueron privados de su derecho al voto. Esta marginación surge, según esta autora, por el propósito de las élites dirigentes de *“regenerar un país maltratado por la guerra y prepararlo para los desafíos de la modernidad”* (Ibid.: 240), lo cual implicaba imponer una nueva identidad definida por la cultura escrita, de raza blanca y mayoritariamente habitante de la ciudad y de la costa, ello dejaba de lado las múltiples identidades legadas por la tradición colonial, y que se definían por sus vínculos con la comunidad¹³⁹. Por tanto, quitarles la condición de electores y de contribuyentes hacía peligrar la ciudadanía de este importante sector de la población.

Sin embargo, los indígenas siendo un grupo étnico muy numeroso, e igualmente importante desde el punto de vista social y económico, no tenían una representación

¹³⁷ De acuerdo a una fuente estadística de la época (Manuel Atanasio Fuentes, *Estadística electoral y parlamentaria del Perú, 1870-1876*, Lima, 1878). Chiaramonti señala que Cuzco, con sus 238,455 habitantes debía tener 438 electores, y sin embargo tenía **706**; mientras que Lima con sus 226,992 habitantes debía tener 423, pero en realidad elegía sólo **358**. (Ibid.: 245).

¹³⁸ Chiaramonti hace una nueva comparación de tres provincias: Trujillo (*“blanca y costera”*), Huamachuco y Otuzco (serranas e indígenas) las cuales tenían poblaciones similares, contaban con 39, 72 y 50 electores respectivamente. Mientras que en 1905, luego de la reforma electoral, en Trujillo votan 3,336 ciudadanos, en Huamachuco 505 y en Otuzco 1,083. (Ibid.: 249).

¹³⁹ Gracias al sufragio ampliado y al sistema electoral indirecto, Chiaramonti señala que los indígenas *“pudieron no sólo elegir sus municipalidades, y por lo tanto controlar sus propios recursos y su territorio, sino también ver reconocida una legitimidad política que supieron conservar.....”* (Ibid.: 259).

política propia, ni buscaron formarla. De tal manera que no podemos considerar que los partidos políticos se hayan sentido amenazados políticamente por el voto indígena. Las argumentaciones parlamentarias que fundamentaron el voto alfabeto aludieron básicamente a la manipulación que eran sujetos los indígenas por los hacendados para lograr un resultado favorable en las elecciones¹⁴⁰.

Sin negar entonces, un conflicto de identidades que esta reforma podía de algún modo acentuar y el peligro de la pérdida de ciudadanía que la exclusión electoral significaría para la población indígena; ambas son variables dependientes o consecuencias indirectas de una reforma electoral, cuya principal motivación fue centralmente lograr un proceso electoral que refleje la voluntad de los ciudadanos, como base para la institucionalidad democrática que se pretendía forjar¹⁴¹.

Las discrepancias de ambas cámaras se resolvieron finalmente en una legislatura extraordinaria a instancias del Gobierno¹⁴²; en la cual quedó establecido un sistema electoral centralizado. Sin embargo, no se logró la plena aceptación de la minoría, ya que el diputado provinciano y ex – guerrillero huanuqueño Augusto Durand encabezó una protesta en la que se argumentaba que según la Constitución vigente de 1860¹⁴³, no se habían reunido los dos tercios de los votos necesarios en caso de discrepancia de ambas

¹⁴⁰ “Desde una perspectiva exclusivamente electoral, esta exclusión obedeció a un esfuerzo pro acercarse a la “verdad del sufragio”, pues los indígenas eran cargados como recuas por los caciques hacia las mesas de sufragio, sin tener ellos exacta idea de lo que significaba aquella ceremonia.” (Planas; 1994: 19)

¹⁴¹ “Más premiosa es aún la expedición de la ley electoral. Mientras que no quede sólida e indeclinablemente establecido que no hay acceso a los puestos públicos sino por la voluntad de los electores, libres de toda coacción o adulteración –me bastara repetirlo– la paz pública continuará siendo pasajero descanso entre dos sangrientos combates, no habrá ley ni autoridad respetable, ni respetada, no quedará posibilidad siquiera de bien para la República.” (Mensaje del Presidente Piérola en la apertura del Congreso Ordinario el 28 de Julio de 1896. Citado en Basadre; 1980:50).

¹⁴² El 29 de Octubre de 1896, Piérola envía un mensaje al Congreso, lo cual era un gesto no acostumbrado en esa época del año, señalando: “Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: la elección es la base sobre la que descansa todo nuestro entero edificio político. Falsearla en cualquier forma, es, por lo mismo minarla desde sus cimientos, pervertir las instituciones; imposibilitar la ordenada y progresiva marcha del país, sustituir el imperio de la ley y del derecho. (.....) Sólo resta pues, que esta última instancia decida si acepta esas modificaciones, votando o no su insistencia (....) No, el Poder Legislativo no puede poner término a sus labores sin dejar sancionada la nueva ley electoral.” (Citado en Basadre; 1980: 51)

¹⁴³ “Artículo 62. Las Cámaras se reunirán: (....) 2º Para discutir y votar los asuntos en que hubiesen disentido, cuando lo exija cualquiera de las Cámaras; necesitándose, en este caso, dos tercios de votos para la sanción de la Ley”. Constitución de 1860

cámaras. Incluso el Presidente de la Cámara de Diputados Wenceslao Varela y el primer Vicepresidente Baldomero Maldonado se negaron a firmar Ley, debiendo reemplazarlos los respectivos accesitarios.

La ley finalmente promulgada el 12 de noviembre de 1896 y que modificaba el artículo 38 de la Constitución vigente de 1860, tenía las siguientes especificaciones:

- El voto **directo y público** en doble cédula firmada por los ciudadanos, los cuales podían entregar su copia a los candidatos, para que así éstos puedan verificar los escrutinios.
- El derecho de sufragio exigía el requisito de la mayoría de edad (21 años) o los casados que no hubieran cumplido esa, y **saber leer y escribir**; lo cual excluía a un gran sector de población indígena.
- Dada la inspiración que tenía se tenía en esta Ley de que los funcionarios públicos no interfirieran en los actos electorales, se prohibió el derecho de voto a los Ministros de Estado, a todas la autoridades políticas, a los militares y la Guardia Civil, e incluso a vocales y jueces.
- Una **Junta Electoral Nacional (JEN)** compuesta por nueve miembros: dos personeros por ambas cámaras legislativas (con representación de minorías y mayorías), un personero del Ejecutivo y cuatro representantes del Poder Judicial.
- Esta JEN no sólo dirigiría el proceso electoral (nombraba un delegado que dirigía las Juntas Electorales Departamentales), sino también **resolvería las reclamaciones y conflictos electorales**.
- La formación de un Registro General de la República a cargo de la JEN, con los reportes enviados por las Juntas Electorales Departamentales¹⁴⁴.
- Las Juntas de Registro Provincial se elegían de una lista de los 25 mayores contribuyentes con residencia en la capital del provincia, lo cuales eran verificados por la JEN, que a su designaba por sorteo a cinco de ellos. Estas Juntas nombraban las Comisiones Receptoras de Sufragios, y a los ciudadanos

¹⁴⁴ La división política del territorio peruano se compone en orden decreciente de Departamentos, Provincias y Distritos.

que integrarían las Juntas Distritales y enviaban un delegado que integraba la Junta Escrutadora Departamental.

- Las Junta Escrutadora Provincial se integraba de representantes electos por cinco grupos ocupacionales distintos (propietarios, profesionales, comerciantes, agricultores y artesanos). La JEN efectuaba un sorteo entre estos representantes para formar la Junta Escrutadora con sólo cinco miembros.
- Esta Junta Escrutadora Provincial se encargaba del escrutinio de los sufragios emitidos ante las comisiones receptoras de su dependencia, solucionaba quejas y reclamos, mandaba rehacer las elecciones que adolecía de vicios de nulidad, y finalmente proclamaba a los diputados, sin posibilidad de apelación alguna.
- La votación de senadores era enviada a la Junta Escrutadora Departamental (conformada por delegados provinciales); la correspondiente a Presidente y Vicepresidentes se dirigían al Congreso, quienes efectuaban el escrutinio de dicha votación.

Si mediante esta Ley se lograron superar algunos de los vicios tradicionales del proceso electoral hasta antes de 1896, como eran las batallas públicas para apoderarse de las mesas receptoras, las dualidades y la calificación de las credenciales de los candidatos por las respectivas Cámaras Legislativas; sin embargo, subsistieron algunos otros incentivos para ganar las elecciones mediante procedimientos poco transparentes, con lo cual no se lograba el objetivo originario que inspiraba dicha ley, cual era, en palabras de Piórola, “la verdad del sufragio”¹⁴⁵.

Así, todo el proceso eleccionario dependía ahora de una instancia central¹⁴⁶, de tal modo que el partido político que tuviese la mayoría de la JEN, lograría controlar el proceso electoral. Por otro lado, si bien una de las intenciones de esta ley era lograr un equilibrio

¹⁴⁵ “Penetrado de esta verdad (la de procurar elecciones verdaderas); no habiendo omitido esfuerzo para llevar a la convicción común; recibiendo la última penosa comprobación de los vicios de nuestras leyes y prácticas electorales en las calificaciones de diputados del nuevo congreso a las que asistí en buena parte, traje al Gobierno el empeño dominante de que lográsemos, por fin, el imperio de la soberanía de la Nación haciendo verdad el voto electoral....” Mensaje presidencial de Piórola el 26 de Octubre de 1896, Diario de los Debates, sesión del 23.1.1896: 763-764. (Citado en Basadre; 1980: 48)

¹⁴⁶ “De la descentralización absoluta de antes se pasó al más grande centralismo.” (Basadre; 1980: 55).

entre las juntas de registro que privilegiaba a los que tienen más recursos económicos (“los mayores contribuyentes”) y las juntas escrutadoras de un origen más popular y diversificado. Sin embargo, últimos grupos sociales no llegaron a constituirse y por ende no pudieron nombrar a sus delegados ante las juntas escrutadoras, de tal manera que la Junta Electoral Nacional pudo manipular estos nombramientos para favorecer deliberadamente a determinados candidatos.

Todas estas debilidades de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Piérola hacen que Basadre la denomine como la “ley electoral suicida”¹⁴⁷, en tanto señala que a partir de la misma y del copamiento que hace el Partido Civil de la Junta Electoral Nacional¹⁴⁸, el Partido Demócrata y el propio Piérola nunca más pudieron ganar las elecciones y acceder al poder a partir del nuevo siglo.

El gabinete Olaechea culmina a raíz de un conflicto respecto del tema de la atribución de funciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El conflicto se inicia cuando el Presidente Piérola remite un mensaje reservado al Congreso el 11 de setiembre de 1897, en el cual “*negó al Congreso reunido en sesiones extraordinarias la facultad de promulgar leyes aprobadas en Congreso Ordinario*” (Basadre; 1968: 154, v.X). La respuesta del Congreso fue la aprobación de un voto de extrañeza por que el Poder Ejecutivo no había hecho cumplir las leyes promulgadas en la última legislatura extraordinaria, dicho voto se le comunicó al jefe del gabinete el 21 de Octubre de ese

¹⁴⁷ “*Tal como estaba constituida la Junta Electoral Nacional, el gobierno mandaba en ella y al gobierno lo manejaban los civilistas (se refiere a la influencia que empezó a ejercer el Partido Civil a mediados del periodo del gobierno de Eduardo López de Romaña, sucesor de Piérola, nota mía). Piérola era un caudillo con entusiastas y heterogéneos adeptos, como ningún caudillo de otrora, pero el civilismo era una casta. Estando en el gobierno esta casta y siendo ella formada por los propietarios urbanos y rústicos, los contribuyentes de eficaz acción en las elecciones, lógicamente resultaban civilistas. Además, el voto era público y en consecuencia los ricos podían comprarlo. Piérola se había la puesto la soga al cuello con la ley de 1896. Los medios legales le quedaron vedados para regresar al gobierno. Fue así como se retiró de la lucha en 19093 ante la elección de Candamo, en 1904 ante la elección de Pardo, en 1908 ante la elección de Leguía.*” (Basadre; 1982: 97).

¹⁴⁸ “*..... pero la institución marchó rápidamente al desprestigio porque, contra el propósito de su existencia, lejos de ser un regulador y un purificador del sufragio, degeneró en el más poderoso agente de corrupción de la vida electoral de la República. Se convirtió en caucus partidario, y llegó hasta descender de su encumbrado puesto, encontrando algunas veces en cábalas vulgares y en claudicaciones escandalosas. La voz pública le atribuye que acomodó listas de contribuyentes, hizo falsos sorteos, acogió tachas imaginarias para eliminar a los favorecidos por la suerte, eligió presidentes de juntas departamentales a conocidos agentes de determinados candidatos.*” (Dávalos; 1919: 132)

mismo año. Los cinco ministros en conjunto respondieron enérgicamente en los dos días siguientes, señalando que un voto de extrañeza no puede ser aprobado durante las legislaturas extraordinarias del Congreso según lo prescribe el artículo 62 de la Constitución de 1860, además que el voto había sido aprobado sin que se haya convocado a una comisión que estudie la carta anterior del Presidente, en la medida que tocaba un asunto de carácter constitucional (las relaciones entre Poderes del Estado). Comentaban finalmente que el voto de extrañeza no era aplicado en las costumbres parlamentarias peruanas hasta ese momento y que no cabía aplicarlo al Presidente de la República.

La reacción de algunos diputados fue entonces plantear una moción de censura contra el gabinete Olaechea el 26 de octubre. La misma fue fundamentada por los diputados Lora y Castañeda (civilistas ambos) a partir de las observaciones al presupuesto hechas por el Ejecutivo, al voto de extrañeza que acababa de emitir el Congreso, y ciertos desórdenes de autoridades subalternas en provincias; sin embargo en su acusación reconocían la labor del Presidente: *“Yo veo en el Presidente de la República a un magistrado honrado, veo a un hombre que trabaja por el bien del país con un celo y una actividad infatigables, con una laboriosidad que no hay precedentes”* (palabras del diputado Juan de Dios Lora, citado en Basadre, 1968: 157, v. X). Empero, los diputados de la mayoría argumentaron que las observaciones del Ejecutivo al presupuesto tenían la intención de reducir gastos innecesarios y la buena inversión de los ingresos públicos; y respecto de los incidentes al interior de la república, señalaban que se trataba de la sublevación de los señores Villar en Lambayeque y que tales hechos se venían esclareciendo en el Poder Judicial.

A pesar que la Cámara de Diputados desechó la moción de censura por 49 votos contra 25. Sin embargo, el gabinete Olaechea renunció de todas maneras, argumentando que al margen del rechazo al voto de censura, creían conveniente la renovación del gabinete luego de más de catorce meses en funciones. Finalmente, ambas cámaras (por separado) respondieron al Presidente en el sentido que tendrían presente las indicaciones hechas en lo referente a los gastos públicos y aquello en cuanto contribuyera al cumplimiento de la Constitución y las leyes, aunque ello no implicaba aceptar algunos de los preceptos

respecto a la promulgación de leyes durante el ejercicio de las legislaturas extraordinarias, que no hayan sido promulgadas por el Ejecutivo.

Una breve reflexión sobre esta tercera crisis de gabinete nos permite observar que un incidente que empezó como un conflicto de poderes y pudo derivar en una nueva derrota del ejecutivo frente al legislativo (voto de censura contra el gabinete Olaechea), es frenado finalmente por la mayoría demócrata en el parlamento; además cabe destacar el proceso de interacción y comunicación entre el legislativo y el ejecutivo, por el cual estos Poderes del Estado van delimitando sus funciones y atribuciones, por lo que alguna extralimitación de uno de ellos afecta al otro. Más allá de las prescripciones y vacío de la Constitución de 1860, las precisiones efectivas de las funciones de cada Poder resultan de una interacción que implica conflicto y negociación.

Una par de sublevaciones armadas también estuvieron presentes como parte de los conflictos que asumió el gabinete Olaechea. El primero de ellos ocurrió el 27 setiembre de 1896 en la sierra del departamento de Ayacucho. En la ciudad de Huanta, 2,000 indígenas se sublevaron contra el impuesto a la sal que el gobierno había creado para reemplazar a la eliminación de la contribución personal, en dicho levantamiento mataron al sub-prefecto Abad. Algunos de los líderes eran partidarios del General Cáceres como el guerrillero Lorenzo Gonzáles, quien pereció en dicha insurrección. Esta rebelión fue violentamente aplacada por un contingente del ejército enviado por el gobierno en noviembre de ese mismo año. Otra rebelión de menor importancia es la encabezada por los hermanos Grimaldo y Belisario Villar, hacendados caceristas del norte del Perú, los cuales fueron ejecutados cuando ya habían sido capturados por las fuerzas del orden que encabezaba el subprefecto de Lambayeque. Los familiares de las víctimas solicitaron a congresistas la interpelación y censura al gabinete Olaechea, pero esta iniciativa no prosperó¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Otra sublevación de impacto local se dio en 1898, y estuvo encabezada por Agustín Verástegui y Manuel Rodríguez (cacerista) y se pronunció en contra del Tratado Billinghurst - La Torre, pero fue prontamente debelada por las fuerzas del orden.

Un balance sobre estas rebeliones nos indica que el recurso armado no había dejado de ser una alternativa en el juego político de esta época, y a pesar de no constituir una amenaza seria para el régimen, es una señal de que aún no se puede hablar de una consolidación del régimen. Incluso veremos que a partir de los siguientes gobiernos a partir del siglo XX, los mecanismos de violencia se acentúan y son una alternativa que se pone en juego para acumular poder ilegítimamente.

Dada la presencia de seguidores de Cáceres en algunos de estos movimientos subversivos, cabe preguntarse acerca del rol de éste en la participación de estas conspiraciones. Mientras Cáceres estuvo en el exilio, su labor de oposición al Gobierno se hizo desde entrevistas en medios de prensa desde el extranjero y mediante el vocero del Partido Constitucional, el diario “La Opinión Nacional”. Podríamos decir además que el Partido Constitucional se encontraba en un proceso de letargo o latencia, por lo que podemos suponer que estos movimientos no respondían a una directiva central que los motivasen a estas acciones, sino a situaciones locales y a los propios intereses económicos de quienes las promovían, lo cual limitó aún más el alcance de estas rebeliones. Hubo algunos intentos de reactivación del Cacerismo, como aquel promovido por el General Canevaro el 15 de enero de 1897, con el fin de completar las vacantes que la renuncia de los civiles habían dejado en la Junta Central del partido, lo cual acentuó más aún el perfil castrense que había tomado a partir del gobierno del Morales Bermúdez en 1890, muy alejado del cariz cívico que tuvo en sus primeros años (Miró Quesada; 1961: 279).

Otro suceso político importante durante este Gabinete es la realización de elecciones parlamentarias y municipales en 1897. En estas elecciones parlamentarias de junio de 1897, se presentaron aliados los Partidos Civil y Demócrata, producto de lo cual no varió la correlación de mayoría para el Partido Demócrata en ambas Cámaras. Para Lima se presentó el hermano del Presidente, Carlos de Piérola por la coalición gobiernista; mientras que una recién articulada oposición postuló a Cesáreo Chacaltana (ex – ministro en el segundo gobierno del general Cáceres); quién además contó con el apoyo de la juventud universitaria; sin embargo, *“la victoria muy discutida (la oposición acusó al*

gobierno de actitudes intervencionistas, acompañó a Carlos de Piérola” (Basadre; 1968: 185, v. X). De similares resultados fueron las elecciones municipales para la ciudad de Lima, en la que la coalición oficialista (demócratas y ciclistas) se impuso largamente ante la lista de oposición encabezada por Mariano Nicolás Valcárcel y Chacaltana¹⁵⁰. La Opinión Nacional, vocero constitucionalista, protestó por estos resultados, alegando fraude por parte del gobierno.

Una breve reseña sobre la oposición al Gobierno de Piérola en 1897 nos remite directamente a dos ámbitos. El primero de ellos es el Parlamento donde surge un ala izquierda del Partido Demócrata encabezada por el joven ex – guerrillero Augusto Durand¹⁵¹, y que logra ganar muchas batallas parlamentarias recibiendo el apoyo circunstancial de congresistas del Partido Civil. Este grupo será el germen del Partido Liberal que gravitará de manera significativa en las siguientes décadas.

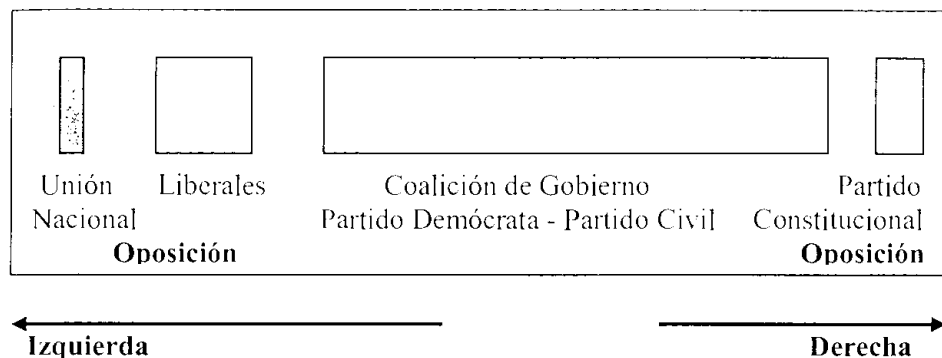
Otro partido en la oposición es el Constitucional, el cual no logra un funcionamiento orgánico regular debido a la ausencia de su líder, el General Cáceres; sin embargo ejercen una crítica a través de La Opinión Nacional y promueven indirectamente esporádicas sublevaciones. Por último, tenemos a la oposición antisistémica, nos referimos al escritor Manuel Gonzáles Prada, quien constituye el partido Unión Nacional de tendencias radicales y anarquistas. Este partido no llegará a ser relevante en el escenario político

¹⁵⁰ “*El cacerismo se había unido al valcarcelismo. Era una de las tantas alianzas circunstanciales que abundan en la historia política del país. Valcárcel rompió con Piérola y también con los civilistas de Candamo, y se unió a los caceristas a quienes había combatido ardorosamente durante las sangrientas jornadas del 95*” (Miró Quesada; 1961: 281).

¹⁵¹ Durand es un personaje bastante singular, ya que siendo muy joven (23 años) dirigió las montoneras en la sierra central y logra ganar ese espacio para la Coalición durante la Guerra Civil en 1894. Un año más tarde es elegido diputado, y por la popularidad que tuvo alcanzó la Presidencia de la Cámara de Diputados. Como presidente de la cámara favoreció la impugnación de varios gabinetes y terminó por distanciarse de su partido hacia 1897, pronunciando un duro discurso de ataque contra Piérola “*Es preciso decir las cosas alguna vez con claridad. Un plan legicida, salido de ese fétido fungo de Palacio, donde hoy como nunca se combinan las tramas más inicuas para el escarmiento de la ley, es la causa de lo que actualmente pasa.*” (Basadre, 1967: 185). Postuló nuevamente a la presidencia de la cámara en 1897 pero fue derrotado ante Carlos de Piérola con una diferencia de 45 votos contra 37. Fundó a continuación el Partido Liberal Democrático, pero tuvo corta existencia, pero fue el antecedente del Partido Liberal que tuvo relevancia política a partir del siglo XX. Como se verá posteriormente, al concluir el gobierno de Piérola, y por desacuerdos con la elección de López de Romaña como candidato a la presidencia por la Coalición, Durand emprendió nuevamente el camino de las guerrillas.

nacional, y son de mayor recordación las duras críticas que hace este escritor a través de sus discursos públicos contra todos los partidos del régimen.

Figura No 3: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Piérola a partir de 1897.



Esta figura nos muestra que la Coalición de Gobierno se ubica en el centro político y conforma una mayoría tanto electoral como parlamentaria, lo cual le da en este periodo una cierta estabilidad, y que a su vez permite que afloren intereses extra partidistas: regionales, religiosos, nacionalistas; de tal manera que muchas de votaciones y alineaciones políticas no se orientan por el criterio partidario, sino que cruzan a los mismos. Asimismo, es de notar que los ejes de la izquierda y la derecha comprometen al propio bloque de gobierno, ya que podemos clasificar al Partido Civil en las posiciones de derecha, como a algunos sectores del Partido Demócrata en las posiciones de izquierda (este sector será encabezado por Guillermo Billinghurst a la salida del Durand). En tanto que la estabilidad del gobierno estuvo sustentada en la alianza Civil - Demócrata, el Presidente Piérola se empeñó bastante en mantenerla, aún a costa de afectar la unidad de su propio partido, como veremos más adelante.

El cuarto gabinete de Piérola se constituye el 25 de noviembre de 1897, y es el más breve de todos los consejos de ministros (menos de un mes). Lo encabezó el demócrata Alejandro López de Romaña y se mantuvieron los Ministros de Relaciones Exteriores, Enrique de la Riva-Agüero y de Hacienda, Ignacio Rey del gabinete anterior. Se incorporaron además el civilista José Antonio Lavalle y Pardo en la cartera de Justicia e Instrucción, el demócrata Ricardo Florez en Fomento, y el Coronel José Rosa Gil en el

Ministerio de Guerra. Este gabinete acentuó la tendencia consensual que se inició con el anterior.

El incidente principal por el que atravesó este gabinete fue la discusión y aprobación de la ley sobre el matrimonio de los no-católicos. Ya antes que asumiera este gabinete, el Parlamento había discutido y aprobado los matrimonios no católicos, los cuales se podían registrar ante el alcalde provincial donde tuviera domicilio cualquiera de los contrayentes¹⁵². Sin embargo, el gobierno observó esta ley y el nuevo ministro Lavalle la devolvió al Congreso el 3 de diciembre de 1897, solicitando un nuevo debate. La oposición a la ley provenía de los católicos conservadores que apoyaban la posición de la Iglesia (entre los cuales estaba el mismo jefe de gabinete e implícitamente el propio Presidente Nicolás de Piérola), mientras que los promotores de esta ley eran miembros del Partido Civil, un sector de los parlamentarios demócratas y los congresistas liberales de Durand.

Hubo entonces un nuevo debate en la Cámara de Diputados, a cuyas galerías acudieron mujeres para apoyar la posición de la iglesia, quienes previamente habían presentado actas firmadas por cientos de ellas en diversas partes de la república en contra de la ley observada; asimismo algunos diputados amenazaron con alzamientos armados si se aprobaba este tipo de matrimonios. Finalmente, se aprobó una ley parecida a la anterior, que señalaba *“las formalidades a que debía sujetarse la celebración del matrimonio de los no católicos en el República, ante el Alcalde y en presencia de dos testigos. (...) Igualmente quedó autorizado en esta forma el matrimonio de las personas a quienes la Iglesia negara la licencia para casarse, por la disparidad de cultos.”* (Basadre; 1968: 278, v.X). Por lo tanto, el Ejecutivo se vio en la obligación de promulgar la ley; pero en la medida que el Presidente de Consejo de Ministros, Alejandro López de Romaña no

¹⁵² Ante varios hechos de parejas no católicas que pretendían la inscripción ante el registro civil de la Municipalidad de sus matrimonios, y que no fueron aceptados a pesar de sus apelaciones ante diversas instancias; el senador Billinghamst elaboró un proyecto de ley por el cual se autorizaba dichas inscripciones ante los Registros de Estados Civiles. Sin embargo, el Vicario General de Lima se opuso a dicho proyecto de ley, señalando que la Iglesia Católica se encontraba bajo el amparo del Estado, y que cualquier otro tipo de matrimonio no católico o meramente civil era un concubinato.

estaba de acuerdo con la ley aprobada por el parlamento, renunció un día antes de la promulgación de la misma, el 22 de diciembre de 1897.

Este incidente muestra tres detalles interesantes: en primer lugar el acatamiento que el gobierno de Piérola muestra hacia la autoridad del Legislativo, a pesar de las discrepancias que el propio Presidente tenía respecto de esta materia, dada su postura conservadora en materia religiosa. En segundo lugar, la inversión de posiciones ideológicas en las que se encontraron Piérola (y su gabinete) y el Partido Civil respecto de esta materia, ya que Ejecutivo terminó ubicado a la derecha del Partido Civil. Por último, el conservadurismo religioso de Piérola y López de Romaña no era compartido por otros miembros de su partido (tema que no estaba incluido en la plataforma partidaria), la mayoría de los cuales asumían posiciones liberales en este rubro.

Cabe resaltar el ámbito deliberativo que caracterizaba a la política durante el Gobierno de Piérola, no sólo por la existencia de un Poder Legislativo que permite este estilo de hacer política, sino por la libertad de expresión y prensa existente; así el diario civilista “La Ley” pudo iniciar exitosamente una campaña de apoyo a la promulgación de la ley de matrimonio de los no católicos, destacando de paso la figura del jefe del Partido Civil, Manuel Candamo¹⁵³.

Aunque formalmente la renuncia del Jefe de Gabinete suscitó una crisis ministerial, ésta se resuelve rápidamente con un “cambio de piezas”, ya que el Ministro de Relaciones Exteriores, el civilista Enrique de la Riva-Agüero pasó a ocupar la jefatura del Gabinete el 23 de diciembre de 1897, mientras que los demás ministros se mantienen en sus

¹⁵³ Como se había señalado anteriormente, el Partido Civil entró en un periodo de desarticulación a partir de la Guerra del Pacífico en 1879; sin embargo, sus integrantes se mantuvieron vinculados y participaron luego en la fundación del Partido Constitucional en 1884, luego en el abandono del mismo en 1890, en la alianza con Mariano Valcárcel por medio de la Unión Cívica en 1892, y finalmente en la constitución del Pacto de la Coalición en 1894. A partir del gobierno de Piérola, los civilistas se retiran de la Unión Cívica y entran en un periodo de reorganización de su propio partido, el cual se concretó el 10 de mayo de 1896. Encabeza el primer comité directivo Manuel Candamo (su posible rival en la jefatura del partido, Francisco Rosas fue nombrado Ministro Plenipotenciario del Perú en la República Argentina, con lo cual salió de la escena política interna). Una de las nuevas figuras en esta asamblea de reorganización partidaria fue Augusto B. Leguía, quien como señala Miró Quesada (1961: 258): “*el destino quiso que fuera precisamente el quien derribara la vieja tienda*”; aunque también el régimen democrático en 1919.

puestos y se incorpora el demócrata José María de la Puente en la cartera de Gobierno. Este cuarto gabinete de Piérola también tuvo una corta duración, pues apenas llegó a los cuatro meses y medio (dimite el 13 de mayo de 1898). Las razones de esta brevedad fue la rivalidad que se suscitó entre Riva-Agüero como Ministro de Relaciones Exteriores y el 1er Vicepresidente Billinghamurst, que había sido nombrado como Ministro Plenipotenciario en Chile para resolver el espinoso asunto del Tratado de Ancón, por el cual se debía realizar un plebiscito respecto de qué país ejercería la soberanía en los territorios de Tacna y Arica, luego de pasados 10 años de posesión de estas provincias por parte de Chile (plazo que se venía incumpliendo desde 1893).

Efectivamente, luego de arduas negociaciones, se firma el Tratado Billinghamurst- La Torre el 16 de marzo de 1898 (sujeto a ratificación por ambos Congresos), por el cual se establece las bases para el cumplimiento del Tratado de Ancón. Este consideraba los requisitos de los que participarían en el plebiscito, la forma de pago de los \$10'000,000 de indemnización que el Perú se había comprometido con Chile, y que los territorios serían entregados en un plazo máximo de 15 días luego de conocido el resultado de la consulta popular. Estas excelentes condiciones para el Perú se logran tanto por la habilidad negociadora de Billinghamurst (así como los vínculos que tenía en la política chilena), como por el grave conflicto fronterizo que en esos momentos enfrentaba a Chile y Argentina, y que amenazaba con derivar en una guerra. Estos resultados resaltaban la figura del 1er Vicepresidente, por lo cual ya se comenzaba a comentar acerca de sus intenciones para postular a la Presidencia en 1899 por el Partido Demócrata.

Sin embargo, Billinghamurst enfrentaba la oposición del Partido Civil, que veían en él a un peligroso adversario que adquiría demasiada popularidad, ya que era conocido que dentro de las antiguas rivalidades que aún subsistían dentro del Partido Demócrata contra el Partido Civil (y que el propio Piérola trató de superar durante su gobierno). Billinghamurst era aún un ferviente anti-civilista. Asimismo, el Vicepresidente percibió que el Ministro de Relaciones Exteriores Enrique de la Riva-Agüero (civilista) no participaba del entusiasmo general que suscitaba el tratado y por lo contrario tenía *“la impresión de que*

ese pacto era solapadamente combatido por la cancillería peruana" (Diario El Comercio, 29 de Enero de 1900).

Por tanto, a la par del recibimiento triunfal a su llegada a Lima¹⁵⁴, Billinghurst hace que sus aliados demócratas en el gabinete provoquen una crisis de gabinete, por lo que los Ministros Florez, De la Puente, Rey y Rosa Gil renunciaron al mismo, obligando al jefe de gabinete a simular medida el 13 de mayo de 1898. Más allá de la eficacia de esta táctica política y el éxito coyuntural del Vicepresidente, este incidente profundizará la adversidad política entre éste y el Partido Civil, lo cual repercutirá más adelante en la sucesión presidencial.

El último gabinete de Piérola es presidido por el Ministro de Justicia e Instrucción José Jorge Loayza, y lo acompañan los ministros del gabinete anterior: José María de la Puente (civilista) en Gobierno e Ignacio Rey en Hacienda, y se incorporan Manuel Cuadros en la cartera de Guerra, Melitón Porras (demócrata) en la cartera de Relaciones Exteriores y Francisco Almenara (civilista) a la cartera de Fomento. Este gabinete se inicia el 16 de mayo de 1898 y finaliza sus funciones con la transferencia de mando presidencial el 8 de setiembre de 1899, por lo cual constituye el gabinete de mayor duración, y también el más estable en cuanto las relaciones ejecutivo-legislativo.

Un hecho importante que ocurre durante este último gabinete son las elecciones municipales en diciembre de 1898. Estas elecciones municipales dieron una ingrata sorpresa a la lista de la coalición alianza Civil-Demócrata, ya que se presentó una lista independiente de vecinos que fueron los que ganaron las elecciones; no obstante la Municipalidad anuló el proceso, lo cual fue a su vez ratificado por el Ejecutivo. Este incidente motivo altisonantes acusaciones de fraudes por parte de la oposición, y más tarde del propio Billinghurst.

¹⁵⁴ "El 7 de mayo Billinghurst es recibido en Lima por 5,000 personas que le acompañan hasta el Palacio de Gobierno donde celebra inmediata conferencia con el Presidente Piérola." (Dulanto: 1947: 497).

Algunas explicaciones acerca de este revés electoral de la principal alianza política fue el hecho de que las discrepancias al interior del Partido Demócrata (núcleos disidentes liberales encabezados por Augusto Durand y otras fracciones billinghamistas) empezaron a repercutir en el plano electoral, así la lista independiente era apoyada por demócratas disidentes, constitucionalistas y billinghamistas (cuya candidatura ya había sido eliminada de la competencia al interior del Partido Demócrata, como veremos a continuación).

Uno de los serios conflictos que afectó internamente al Partido Demócrata casi al término del periodo presidencial, estuvo vinculado con el tema de la sucesión presidencial para 1899, y que enfrentó al Presidente Piérola y a su 1er Vicepresidente Guillermo Billinghurst, el cual no sólo era su amigo íntimo y fiel seguidor de las iniciativas conspiradoras del Piérola revolucionario desde hacía más de 20 años, sino además en su condición de rico comerciante, había sido el principal financista de las más audaces aventuras del Califa. Tal cercanía hizo que Piérola influyese definitivamente para su postulación a la Primera Vicepresidencia en la asamblea demócrata de 1895, que definió definieron las candidaturas para los comicios de aquel año y donde hubieron otros pre-candidatos con mayor renombre y popularidad que Billinghurst, como Augusto Durand y Augusto Seminario.

Una de las posibilidades que se presentaba al término del gobierno de Piérola era la reelección, idea que no provenía tanto de los círculos internos del Partido Demócrata como de grupos sociales conservadores y comerciantes que buscaban la prolongación de la estabilidad social y política, así como del auge económico que había logrado esta administración¹⁵⁵. En realidad, esta idea tenía muchas condiciones a su favor: la popularidad y carisma de Piérola tanto como líder de la revolución como por su calidad de buen estadista, una buena organización del Partido Demócrata (en ese momento mayoritario en el Congreso), el apoyo que hubiera seguido recibiendo del Partido Civil

¹⁵⁵ El restablecimiento del patrón de oro en la moneda que implantó Piérola (mediante la acuñación de la llamada libra peruana de oro que reemplazó a la libra de plata), incentivó eficazmente la economía nacional tanto por que dio solvencia al sistema monetario, estimuló la actividad financiera y redujo el déficit fiscal. Este auge económico implicó el crecimiento de la industria y de las exportaciones, y una significativa mejora de las condiciones de vida de los peruanos.

que no tenía un líder que le haga competencia (además de las buenas relaciones que Piérola había mantenido con ellos)¹⁵⁶, y finalmente la sentida necesidad de consolidar la institucionalización democrática que se había iniciado con su gobierno. Tal posibilidad era asociada con el conocido caso de Porfirio Díaz en México, sin embargo, el más tenaz opositor a esta reelección era el mismo Piérola, quien no estaba de acuerdo incluso con la comparación: “*Díaz habla a su pueblo de instituciones que ese pueblo no conoce, pero que no existen o que si están escritas en las leyes no están fundadas en las costumbres. Temo mucho que el día en que Díaz falte, todo el aparato de instituciones desaparezca.*” (Basadre, 1968: 8, v.XI). Además, Piérola hubo de considerar el impedimento constitucional para una reelección presidencial, dado el perfil institucional y legalista que había adoptado en esta etapa de su vida.

La aspiración del 1er Vicepresidente Billinghurst a la candidatura presidencial tenía fuertes bases de apoyo: había sido presidente de la cámara de senadores en el periodo 1896-97, su gestión diplomática que culminó en el tratado con Chile fue ampliamente reconocida, y tenía el respaldo y la confianza del partido, ya que formaba parte de la directiva partidaria y de la vieja guardia pierolista. Sin embargo, una característica especial le ponían al frente a poderosos adversarios: su acendrada y antigua rivalidad con el Partido Civil; una animadversión propia de la tradición del Partido Demócrata, que el mismo Piérola había acuñado desde la fundación del partido hasta antes de la constitución del Pacto de la Coalición.

Sin embargo, la estrategia de Piérola ante sus actuales aliados era completamente diferente a la que históricamente había adoptado, ya que consideraba que la alianza civil - demócrata era uno de los principales soportes del régimen que su gobierno había iniciado y que pretendía continuar. Ello hizo que Piérola no auspiciase la candidatura de su lugarteniente Billinghurst y promovió un mecanismo alternativo: una propuesta que

¹⁵⁶ Ulla señala además que dentro de los cálculos del Partido Civil estaba el convencimiento de que al no poder acceder al Gobierno en esos momentos, “*habrían calculado que el desgaste del régimen demócrata y la oposición creciente le facilitarían el acceso al Poder algunos años más tarde, dentro de la notoria tolerancia de Piérola para la acción política de sus adversarios y de su espíritu conciliador*” (1981: 383).

surja del acuerdo entre ambos partidos, y así lo hizo saber en una carta que dirigió al Comité Directivo del Partido Demócrata el 8 de setiembre de 1898:

“La primera renovación del gobierno, dentro del nuevo régimen en que ha entrado la república reviste, a no dudarlo, carácter de excepcional importancia y trascendencia. Condición de paz y prosperidad para la República es, hoy más que nunca, la de que el nuevo Presidente reciba ostensiblemente su investidura de la gran mayoría nacional, encontrando en ella los colaboradores de su delicada tarea, (...) Tamaños intereses serían hoy cumplidamente servidos si los dos partidos nacionales, Demócrata y Civil –que trabajan juntos en la reconstrucción de la República y cuyas diferencias de principios sería difícil de señalar– representados en una Convención Electoral, designasen en común un candidato. (...) Al cabo de seis meses el Partido Civil ha hecho pública su disposición de ir al propuesto concierto electoral. El Partido Demócrata no ha fijado aún su actitud en manera alguna. Es urgente que lo haga.” (Dulanto; 1947: 500-1)

Esta carta es leída en el Asamblea Nacional Demócrata del 9 de octubre de ese mismo año, en la cual se debate además una moción de mayoría (suscrita por Enrique Coronel Zegarra, Carlos Basadre y Alejandro López de Romaña) que acepta la invitación de Piérola a la concurrencia de una convención electoral entre ambos partidos. En desacuerdo con esta moción Billinghamst renuncia a la Presidencia de la Asamblea ya que *“no podría permanecer en ese cargo puesto que sin contrariar mis antiguas y arraigadas convicciones, ni desearía, por otra parte que se me considerase obstáculo, ni ahora ni nunca, a la ejecución del plan adoptado.”* (Ibid.:502). El reemplazante suplente en la presidencia del Comité Central Demócrata es Ricardo Florez quien también es partidario de Billinghamst, e igualmente se empeña en sacar adelante dicha postulación. Prontamente, los pierolistas nombran a Enrique Bustamante como Presidente Titular del Comité Central, quien sigue las instrucciones del Presidente y *“lamenta, pues el extravío de aquellos señores, que desertan de las filas del Partido Demócrata para constituir una agrupación puramente personal, por mucho que pretendan cubrirla con el nombre de aquel.”* (Circular del Presidente del Comité Central del Partido Demócrata del 26 de noviembre de 1898, citado en Ibid: 503).

Al día siguiente, Billinghamurst envió una carta al Vicepresidente de la Asamblea Demócrata, en la cual considera inapropiada la continuidad de la alianza con el Partido Civil: y hace una contrapropuesta proponiendo que en caso de impulsarse una Convención Electoral, se debería convocar al Partido Constitucional, a la Unión Cívica e incluso a la extremista Unión Nacional. Tal proposición no encontraría ninguna respuesta en la nueva directiva demócrata

Finalmente, los dirigentes civiles y demócratas llegaron a un acuerdo para la fórmula presidencial el 24 de noviembre (sin llegar a realizar ninguna convención electoral), por la cual el candidato a la presidencia sería designado por el Partido Demócrata, el candidato a la primera presidencia correspondería nombrar al Partido Civil y tanto la segunda presidencia como los candidatos a senadores y diputados serían de común acuerdo entre ambos grupos. Esta decisión terminaba de alejar a Billinghamurst del camino a la presidencia, ya sea por su anticivilismo como por el explícito veto que sobre él pesaba de parte del Partido Civil, y en consecuencia del mismo Piérola.

Mientras tanto, Billinghamurst trató afanosamente de lograr su candidatura por fuera de los canales partidarios. En ese afán logró la adhesión del grupo parlamentario Unión Cívica de Nicolás Valcárcel, quienes junto con un grupo de demócratas disidentes lanzan su candidatura en el Teatro Politeama el 8 de diciembre de 1898, lo cual implicaba una ruptura con la dirigencia partidaria.

La asamblea oficial de Partido Demócrata compuesta por los delegados departamentales se reúne el 31 de diciembre y elige por unanimidad al ingeniero Eduardo López de Romaña, quien era hermano de demócrata Alejandro López de Romaña, ex jefe de gabinete de Piérola. Originalmente la proposición de la candidatura fue hecha a éste, al igual que a otros demócratas de la "vieja guardia" como Manuel Pablo Olaechea o Enrique Bustamante y Salazar: sin embargo todos ellos se abstuvieron de participar, aunque Alejandro sugirió el nombre de su hermano.

Aunque Eduardo López de Romaña fue Ministro de Fomento en el 2do Gabinete de Piérola, no era un personaje que perteneciese al entorno dirigencial demócrata, tenía más bien una posición independiente y de perfil tecnocrático (se había educado en Inglaterra y tenía un grado en el prestigioso King's College de Londres). Era una persona tranquila, sin el carisma de un político y por lo tanto reunía los requisitos para ser un candidato de la alianza civil-demócrata: no opacaría la sombra de Nicolás del Piérola y no suscitaba un veto del Partido Civil¹⁵⁷. Mientras tanto, la Asamblea del Partido Civil nominó a Isaac Alzamora, connotado líder civilista como el candidato a la Primera Vicepresidencia.

Por su parte, Billinghurst reacciona dirigiendo una carta al partido el 3 de enero de 1899, por la cual renuncia a su candidatura, ya que no habría tenido probabilidades de éxito por fuera de los canales partidarios mayoritarios, y expresa una severa crítica a Piérola, que lo separa aún más del Partido:

“La exhibición de la candidatura oficial del señor Romaña verificada por la Asamblea dual demócrata, que obedece a las inspiraciones del Presidente Piérola; las declaraciones hechas por don Carlos de Piérola en el seno del Comité Demócrata el día en que éste sesionó, asegurando que su hermano el Presidente de la República combatiría a todo trance mi candidatura porque yo era una amenaza para su obra política; la descarada intervención oficial en las elecciones municipales de Lima; los ataques durante los últimos dos meses de “El País” y “El Tiempo”, diarios que reciben cuantiosos favores del Gobierno; la consigna presidencial contra todos mis amigos y contra mí especialmente; el escándalo que dieron en el Senado los representantes gobiernistas confabulados con los civilistas para destituir de su puesto de la Junta Electoral Nacional al señor Rodulfo, contra todo principio legal y tan sólo por que era

¹⁵⁷ En un editorial del diario civilista “La Ley”, el jefe del Partido Civil, Manuel Candamo, escribió respecto de López de Romaña: “El candidato exhibido es digno del altísimo cargo para el que se le propone. Es un profesional extraño a las agitaciones de la política activa y ofrece por eso mismo, la esperanza de consagrarse con todo ahínco a la administración. (...) Estamos acostumbrados a dejar que los caudillos se nos impongan, y tal disciplina contribuirá, de seguro, a que algunos encuentren extraño la presentación de un hombre sin aspiraciones, que no ha soñado en dominar a sus conciudadanos. (...) La presentación del señor López de Romaña se dirige pues, a desarmar ambiciones perturbadoras, a debilitar apetitos demasiado vivos, a ofrecer garantía de justicia a todos los partidos, y a reafirmar el régimen de moralidad administrativa abierta en la revolución de Marzo.” Citado en Dávalos: 1930: 15-16

adicto a mi candidatura, la propaganda activa de la falange de empleados fiscales de la Sociedad Recaudadora y de la Administración de la Sal contra mí; la inmotivada prórroga de la suspensión de garantías individuales hasta los momentos mismos de los preparativos electorales; todo esto demuestra claramente que el Presidente Piérola persiste en su propósito de combatir mi elección, olvidando la neutralidad que ha ofrecido, y sin recordar que la víctima de este atropello es quién durante un cuarto de siglo le ha dado pruebas de lealtad nunca sospechada siquiera, y, quién ha prestado siempre desinteresados servicios al partido demócrata.

Un móvil puramente patriótico y honrado me indujo a aceptar la candidatura presidencial, por que sinceramente creí que conjuraba, con ello, una situación difícil para el país, pues atrayendo a la elección a los partidos sistemáticamente excluidos de la vida social, pensé que extirpaba el germen de futuras luchas armadas.

La situación que ahora crea la candidatura oficial, hecha por tierra, desgraciadamente, esas expectativas patrióticas. (...)

El advenimiento del señor Piérola al poder, después de 25 años de batallar por la libertad electoral, ha costado a la República 20,000 vidas de peruanos y más de 20 millones de soles. (...)

He cometido un gran error creyendo que al dejar la tranquilidad de mi hogar y aceptar la candidatura, prestaba importante servicio al país; y me apresuro a enmendarlo, apartándome de la arena electoral, quitando así todo pretexto para futuros abusos.” (Dávalos; 1930: 11-12.)

Si bien el retiro de Billinghurst del Partido Demócrata no significó una ruptura partidaria definitiva¹⁵⁸, sí provocó una fisura que más tarde afectaría la misma institucionalidad del Partido Demócrata. Mientras tanto, se tenía una candidatura que formalmente reunía un

¹⁵⁸ “En el partido demócrata se acentuaban dos tendencias: una a mantener la coalición y otra a romperla. Romper la coalición era disminuir la fuerza de los elementos civiles; mantenerla era dividir al partido demócrata. Se optó por mantener la coalición. Felizmente las bajas del partido fueron menores de lo que pudo imaginarse...” (Cornejo; 1902: 253).

amplio bloque de mayoría, pero que a su vez encerraba gérmenes de futuras escisiones y actitudes desleales, que ya había denunciado el marginado político.

El conflicto más significativo de este último gabinete giró en torno a la inhabilitación de la Junta Electoral Nacional (JEN) mediante un decreto expedido por el Gobierno el 24 de abril de 1989, ad portas de las elecciones presidenciales. A raíz de la reforma electoral, el nombramiento de los integrantes de esta JEN recayó en conocidos personajes de la política y el foro. Sin embargo, al acercarse las fechas de las candidaturas, hubo cambios destinados a sacar a los partidarios de la candidatura de Billingham, la cual no tenía la aprobación del Presidente Piérola. Así, el gobierno cambió su delegado Elías Malpartida (favorable a la candidatura esta candidatura) por Manuel Pablo Olaechea (más cercano a Piérola), mientras que el Senado retiró a Manuel Rodulfo y colocó a Benjamín Boza por las mismas razones.

Basadre recoge testimonios acerca de irregularidades o intervenciones del Gobierno en esta Junta, por ejemplo que los delegados de las Cortes Julio Normand y Ricardo Florez no pertenecían a las mismas; que las listas de los mayores contribuyentes (de las cuales debían salir por sorteo los miembros de las Juntas de Registro Provincial) no se elaboraron por la Junta, sino por un miembro de la misma, Mariano Cornejo, con desacuerdo de la minoría. Por otro lado, otro miembro de esta Junta, Guillermo Seoane, relata que mientras se hacía el sorteo de las Juntas de Registro, se sacó el número cuatro y se pronunció el supuesto nombre que correspondía al mismo, Germán Leguía y Martínez (otro miembro de la Junta y representante de la oposición) protestó por que él tenía en su poder las listas de los contribuyentes y dicho nombre no correspondía a tal número. (Basadre; 1968: 13-14, v.XI).

Seoane y Leguía lograron aprobar una moción de censura al interior de la JEN contra el Presidente de la misma, Manuel Pablo Olaechea, por que no había convocado a reuniones; sin embargo, Olaechea ya había renunciado (aunque el Gobierno no le había aceptado tal dimisión). Esta situación de acefalía y de censura de los miembros de oposición ponía en riesgo, no sólo la anulación de muchas Juntas Electorales

provinciales, sino además que el propio proceso electoral (previsto para el siguiente mes) y la transferencia de poder, se postergasen.

Ante tal impasse, se expidió el decreto de inhabilitación de la Junta, fundamentándose en que esta institución era un órgano ejecutivo y no deliberante, que la oposición aprovechaba de la misma para enfrentarse al Ejecutivo, que no podía regular el acto de sufragio con exclusión del delegado del Gobierno, y finalmente que no estaba dentro de las funciones de la Junta vetar a un representante de un poder del Estado. Mientras tanto, y con carácter provisional, se entregaba el sorteo de las juntas escrutadoras a las Juntas Departamentales, que era la una de las últimas tareas pendientes para poder llevar adelante el proceso electoral.

Naturalmente, hubo muchos reparos y duras críticas por parte de la oposición, y tanto el Partido Civil como el candidato oficialista no aprobaron la medida. Por su parte, la oposición propuso en el Parlamento la nulidad del proceso electoral y además presentó una acusación constitucional contra Piérola por la disolución de la JEN y otros motivos, como la destitución del personero de la minoría Manuel Rodulfo, el reemplazo indebido de varios presidentes de Juntas Escrutadoras que hizo la Junta Departamental, y otras irregularidades (8 de setiembre de 1899). Esta acusación constitucional fue rechazada en la Cámara de Diputados, la cual sólo contó con doce votos a su favor.

En el debate parlamentario, Francisco García Calderón (ex-presidente de la república, primer presidente de la JEN y de postura independiente, aunque afín al Partido Civil) defendió la validez del proceso electoral de 1899, señalando que en el momento que se promulgó el decreto de cese de la JEN, ya se habían nombrado las Juntas Departamentales, Provinciales y Distritales y algunas Juntas Escrutadoras, y señaló que él mismo había preparado el registro de electores, además dijo: *“El Jefe de Estado quiso asegurar la tranquilidad del país. No se equivocó: se han hecho elecciones populares sin la Junta, todos han podido emitir sus votos, los hechos y los documentos que existen demuestran que ha habido elecciones; por consiguiente es menester confesar que el Presidente con buena fe defendió las elecciones populares.”* (Citado en Ibid.:17). Por su

parte, parlamentarios civilistas como Manuel Candamo y Antero Aspíllaga, si bien manifestaron su desacuerdo con el decreto del 24 de Abril, señalaron que ello no afectaba la legalidad de las elecciones.

Basadre (Ibid.: 15) considera que la inhabilitación de la Junta Departamental es más un error o precipitación de Piérola que un intento deliberado de intervenir en el proceso electoral. Por tanto, el motivo válido de esta medida era evitar un desorden institucional originado por una postergación indefinida del proceso electoral y la prórroga inconstitucional del mandato del Presidente y de su gobierno. Otros argumentos parecen convalidar este juicio: en primer lugar, las razones lógicas, ya no había necesidad de una intervención a favor de algún candidato, ni menos en contra de Billinghurst, ya que el asunto de la candidatura oficial había quedado resuelto meses antes y la candidatura de Billinghurst había sido retirada; asimismo se alude al argumento de la imposición de algunos delegados como el demócrata Ricardo Florez, lo cual no tiene fundamento por que éste estaba a favor de la candidatura de Billinghurst.

Incluso, la editorial del diario de oposición “La Opinión Nacional” consideraba irrelevante este hecho: *“felizmente la operación es meramente tangencial y en ella no se compromete el organismo eleccionario, queda éste en todo su vigor (...). En resumen, de dos males se ha optado por el menor con prudencial criterio y el patriotismo aconseja y hasta impone reconocerlo así y facilitar el curso pacífico y, en lo posible, correcto de la evolución que tiende a defender la integridad de la Carta política en orden a las prerrogativas tutelares del sufragio y a realizar la alternabilidad sin interregnos que pudieran comprometerla.”* (Ibid.: 15-16). Por su parte, el diario civilista “El Comercio” expresaba el 24 de Junio de 1899: *“Otra falta del Gobierno, la que ha dado pretexto para la revuelta, es el malhadado decreto suspendiendo en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Junta Electoral Nacional. Pocas medidas políticas recordamos tan violentas, tan innecesarias como ésta. Convenimos en ello; pero ¿a quién ha dañado, sino al mismo Gobierno que la dictó? No creemos que nadie piense que, si no se hubiera adoptado, habría sido distinto el resultado de las elecciones. No creemos que nadie piense que, si no se hubiera adaptado, habría sido distinto el resultado de las elecciones.”*

Habríamos tenido algunas escenas escandalosas más en el seno de aquella junta: quizás mayores dificultades para llegar tranquilamente a la trasmisión de mando: pero con el mismo resultado. De seguro que no habrían sido elegidos ni el Coronel Vizcarra, ni el señor Billinghamurst, ni el General Cáceres por que ninguno cuenta con los elementos de popularidad bastantes." (Citado en Dávalos; 1930: 17).

Para las primeras elecciones presidenciales directas realizadas el 25 de mayo de 1899 (en las cuales también se renovaba un tercio de las Cámaras Legislativas), hubo 108,597 ciudadanos inscritos, de los cuales votaron 58,285. El candidato López de Romaña obtuvo 52,174 de los sufragios, lo cual corresponde al 89.5% de los votos emitidos, y al 48% del universo electoral.

En su último mensaje al Congreso el 28 de julio de 1899, Piérola señala su balance del régimen, sus vínculos con el nuevo gobierno y sus pretensiones políticas:

"Problema arduo y delicadísimo es, en sí mismo, la renovación presidencial; pero, en nuestras condiciones revestía caracteres excepcionalmente graves.

Con partidos políticos no sólidamente constituidos todavía, faltos los ciudadanos de verdadera educación política, sujetos a tradiciones viciosísimas y habiendo imperado hasta ayer concepto lamentable de la vida pública, movidos a elegir antes de ahora no por razón si no por personal afecto y acostumbrados a tener presidentes más o menos impuestos por el gobernante, alcanzar la renovación de los poderes públicos hecha por la nación y sólo por ella, parece irrealizable.

Muchos hay sin duda que han creído, y más de uno con sanísimo intento que yo deseaba -que debía hacerlo- traer al Gobierno de la República hombres sobre los cuales pudiese ejercer influencia directa: acaso hasta que asegurasen mi vuelta al puesto en que voy a cesar; en una palabra dejar el poder, pero quedando realmente en él.

No conozco HH. Señores, entidad más ociosa ni más funesta que la del consejero irresponsable; ni calamidad para un pueblo que la de ser dirigidos por otros que no sean los que tienen el cargo de hacerlo, y he mirado siempre con puerilidad de

ignorancia la de creer en esas combinaciones para mañana cuya realización depende de tanto y tan variados accidentes. (...)

He buscado fundar un régimen, en el cual sea la nación la que escoja a sus gobernantes, y estos no se muevan por otro interés que el de ella misma. (...)

El pueblo peruano llamado a la ánforas en votación directa y pública, ha ido a ellas, con tranquilidad y orden ejemplar, en número que no tiene antecedente en nuestra historia, movido no por apasionamiento, sino por convicción; y para elevar, por sí mismo, a ciudadanos con quienes no le ligaban otro círculo que el de creerlos dignos del cargo para el que los designaba.

Hasta hace apenas cuatro años ¿se habría creído en la posibilidad de espectáculo semejante?” (Citado en Dávalos, 1930: 17-18).

Es así que Piérola hace entrega del mando a su sucesor y nuevo Presidente Eduardo López de Romaña el 8 de setiembre de 1899. La fama de Piérola estaba en su mayo auge en ese momento: “*Tal fue la aglomeración de gente en el patio de Palacio que hubo de llamarse a la policía, pues el pueblo intentaba llevar en hombros al ex –Presidente. La viudas y los pensionistas del Estado regaron con flores las escaleras del domicilio del señor Piérola.*” (Diario El Comercio, 8 de setiembre de 1899)

Los reconocimientos de la época se expresan en las palabras de un eminente contemporáneo suyo, Francisco García Calderón (con quien Piérola había intercambiado duras acusaciones durante la ocupación chilena):

“En 1895 se creía que el país se había perdido. Desunidos todos, la hacienda pública en bancarrota, y sin elementos para reorganizar la patria, creíamos que había llegado el último día para el Perú. Entonces os presentasteis en escena invocando como base de gobierno la unión de todos los peruanos y los que escucharon vuestra voz se agruparon a vuestro alrededor para trabajar de consuno. En el poder reorganizasteis el país, no considerándolo como el botín del vencedor sino que buscasteis a los que eran dignos de colaborar en vuestra obra. (...) lograsteis así que las rentas públicas fueran bastantes para todos los servicios (...) Como consecuencia de todo ellos las industrias han florecido, se

han formado sociedades y empresas que están dando prosperidad al país. (...) A nombre de todos los presentes os digo que estamos satisfechos de vuestra obra y que habéis cumplido vuestros deberes.” (Citado en Dulanto: 1947: 508).

Sin embargo, el balance global no resulta ser del todo positivo; ya que a partir de estas elecciones y del nuevo gobierno, el consenso político ya no fue total. Hubo focos aislados de rebeliones en distintas partes del país, entre los cuales destaca Augusto Durand en la zona central y el Coronel Vizcarra en Loreto. Por su parte, Billinghurst envía un telegrama el 8 de Octubre de 1899 desde Iquique (territorio chileno donde tenía sus empresas), en el cual califica a todo el proceso como de “farsa electoral”, y además anuncia: *“Para mí y una mayoría considerable del Perú, el gobierno del señor Romaña es espúreo y la encarnación del más torpe de los atentados contra la libertad de sufragio. Si la libertad electoral nada significa, ¿con qué derecho se ensangrentó el Perú en 1895? En todo caso, deseo que conste que estoy en contra del actual régimen que sólo puede sostenerse con el decadente prestigio de don Nicolás de Piérola. Cúmpleme además en declarar que considero obra de patriotismo robustecer a los que están en armas defendiendo nuestro sistema republicano de gobierno”*. (Citado en Dulanto; 1947: 507 y Basadre, 1968: 20, v.XI.)

Balance analítico de la instalación de un gobierno democrático.

Si bien la Junta de Gobierno de la transición¹⁵⁹ fue una transacción entre caceristas y coalicionistas en la guerra civil de 1895, esta situación no reflejaba tanto un estancamiento en el conflicto bélico entre ambas partes, sino fue consecuencia del reconocimiento de su rendición por parte de los militares, dado el aislamiento popular en que se encontraba respecto de la población civil. Así, la inicial composición paritaria (dos representantes por cada parte) deja de ser tal, cuando sus integrantes eligen por consenso al quinto miembro que presidiría esta Junta: el reconocido civilista Manuel Candamo.

¹⁵⁹ “El proceso de la transición se refiere al periodo incierto y fluido en que las estructuras democráticas están por emerger, mientras que simultáneamente las estructuras del viejo orden aún subsisten” (Morlino; 1998: 19, traducción mía). A diferencia de lo que señala este autor sobre la indefinición del tipo de régimen que se constituirá a partir de este periodo, el triunfo coalicionista en la guerra civil determinó la exclusión de la contraparte cacerista y la imposición de facto de un proyecto liberal democrático, el cual respondía a la ideología política de los vencedores.

La misión principal de esta Junta de Gobierno fue “allanar el camino” para la instalación de un gobierno democrático, para lo cual procedió a tres tareas específicas: la desmovilización militar de los contendientes, el restablecimiento de la Constitución liberal de 1860 y la convocatoria a elecciones generales. La breve duración de esta Junta y su inhibición de hacer mayores cambios institucionales respondió al estricto cumplimiento de esta misión.

Mientras tanto, la convocatoria electoral implicó un cambio en el perfil y actividad de los actores políticos; quienes pasaron de un rol destacado en el campo militar y regresaron a asumir su clásico papel: la política. Ello significó el reinicio de las asambleas partidarias y la definición de las candidaturas, para lo cual el Partido Demócrata llevaba una gran ventaja, en la medida que era el único partido que mostraba el suficiente grado de organicidad para llevar a cabo estas tareas. Es así que podemos entender que el apoyo civilista a la candidatura de Piórola obedece tanto al apoyo para la instalación de nuevo régimen, como por su imposibilidad de tener éxito en una siguiente elección competitiva. Sin embargo, ya desde esos momentos iniciales, los civilistas empiezan a relanzar su propio perfil terminando su pacto con la Unión Cívica de Mariano Nicolás Valcárcel y dando inicio al proceso de reconstitución del Partido Civil¹⁶⁰.

La fase de transición llega a su término con la instalación¹⁶¹ del primer gobierno democráticamente elegido y el inicio de la primera legislatura de un parlamento igualmente constituido. Algunas de las características con las que se configura originariamente este régimen tendrán una significativa influencia en su evolución posterior y en las condiciones de su éxito (consolidación) o su fracaso (ruptura). Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la resistencia de los actores a enfrentar un escenario

¹⁶⁰ “Había llegado el momento de que el Partido Civil volara con sus propias alas. Como preludeo de la reorganización se organizó un banquete en el Club Nacional, en honor de Manuel Candamo, que había dejado la presidencia de la Junta de Gobierno (...). El 11 de setiembre de 1895 se efectuó ese banquete con asistencia de muchos civilistas y de sus compañeros de Junta de Gobierno ...” (Miró Quesada; 1961: 252).

¹⁶¹ “La fase de instalación es caracterizada por la creación de nuevas estructuras y procedimientos, así como otros mecanismos informales intrínsecos al sistema democrático...” (Morlino; 1998: 20, traducción mía).

de incertidumbre propio de un régimen democrático¹⁶², lo cual se manifiesta en la abstención de los civilistas en 1895 (por temor a perder frente a Piérola), lo cual volvería a suceder más adelante pero en sentido inverso, es decir con el abstencionismo de Piérola frente a los civilistas; y por otro lado, se expresa en la tendencia de las candidaturas presidenciales consensuales (1895, 1899), e incluso de listas parlamentarias y municipales en coalición (1897, 1899, 1901).

Si bien entre los antecedentes que influyen en ambos fenómenos se encuentra el tipo de transición no cooperativa, que implicó un alto grado de violencia e incertidumbre en la guerra civil de 1895 y en las décadas anteriores; las consecuencias perversas de este proceso de confluencia política sería la exclusión de algunos de los actores relevantes, ya que una vez que los pactos no siguieron vigentes, permaneció la intolerancia a la incertidumbre. Por tanto, la mayorías no dieron lugar a las minorías, y el abstencionismo electoral fue una estrategia recurrente en éstas (al menos en los demócratas y liberales), lo cual contribuyó a restarle legitimidad a los siguientes gobiernos, como veremos en el siguiente capítulo.

Los principales retos que enfrentó Piérola, en esta segunda oportunidad de su carrera política, fueron la consolidación democrática¹⁶³ y la tarea de gobernar con eficacia, tal como anunciaban en la declaración de principios del Partido Demócrata en 1889 (Partido Demócrata; 1912: 36):

¹⁶² “El establecimiento de la democracia es un proceso de institucionalización de la incertidumbre, un proceso en el que todos los intereses son sometidos a la incertidumbre. (...) La democracia significa que todos los grupos deben someter sus intereses a la incertidumbre. Es precisamente este acto de enajenación del control de los resultados de los conflictos el que constituye el paso decisivo hacia la democracia” (Przeworski; 1994: 96). Esta perspectiva es criticada por O'Donnell y Schmitter (1994: 108-9), quienes señalan que para una transición política, “puede ser engañoso el hincapié que hace Adam Przeworski en su capítulo del volumen 3 sobre la incertidumbre como la característica definitoria por antonomasia de la democracia”, a su vez proponen que “la práctica emergente de la democracia institucionaliza una incertidumbre “normal” con respecto a ciertas piezas y sectores del tablero, pero al hacerlo asegura una certidumbre “normal” con respecto a otras piezas y sectores.”

¹⁶³ “Así, la consolidación es un proceso multifacético por la cual las estructuras y normas democráticas, y las relaciones propias de una sociedad de un régimen civil están firmemente establecidas. Este proceso implica el fortalecimiento de un régimen democrático que evite posibles crisis futuras. En términos más precisos, si en una democracia bien definida, las relaciones entre el gobierno, las instituciones representativas y la sociedad civil están asentadas, la consolidación puede ser vista principalmente como la construcción de una (más o menos) representación estable entre las instituciones de gobierno, las estructuras intermedias emergentes, y al sociedad civil en sí misma.” (Morlino; 1998: 14, traducción mía)

“En países como el nuestro, la mejor manera de las políticas, la casi única dentro y en gran manera fuera, es una recta administración” Administrar bien, es utilizar los elementos del país y emplearlos en apartar acertadamente las dificultades naturales o adquiridas y favorecer sus condiciones propicias, para alcanzar, moral y materialmente su bienestar presente y engrandecimiento venidero”.

Una de las primeras tareas asumidas con urgencia por el gobierno de Piérola fue impulsar la reforma electoral, de tal manera de poder recuperar la legitimidad y credibilidad de este mecanismo como vía para acceder al poder, y por tanto desterrar las prácticas fraudulentas que acarreaban violencia durante y después del proceso electoral, y deslegitimación de la institucionalidad democrática. El tema suscitó enfrentamientos entre los poderes locales y el gobierno que pretendía disminuir las autonomías regionales que limitaban notablemente el margen de acción del Estado; sin embargo, el énfasis centralizador de esta reforma fue un poderoso incentivo para la ruptura del pacto demócrata – civilista en los siguientes años, ya que sobredimensionó el peso de la Junta Electoral Nacional, como organismo arbitral para determinar al ganador absoluto de una competencia electoral, sin haber garantizado previamente su independencia, o alguna instancia de apelación que pudiese revisar la constitucionalidad o legalidad de sus actos.

El carácter centralizador del gobierno también se expresó en la abolición del tributo indígena, lo cual más allá de cumplir una vieja reivindicación pierolista respecto de este sector mayoritario de la población, implicó una nueva cortapisa a la autonomía de los poderes locales y regionales. Tanto la primera como la segunda de estas reformas provocaron un distanciamiento de algunas élites provincianas respecto del gobierno, lo cual se expresó en pugnas y escisiones al interior del Partido Demócrata, el cual estaba compuesto por algunos líderes regionales como Augusto Durand (hacendado de Huánuco) que terminó apartándose y conformando el Partido Liberal en 1901, cuyas bases serían principalmente regionales.

En este esfuerzo de consolidación del nuevo régimen, otras de las orientaciones estratégicas del gobierno de Pierola fue una distribución más equilibrada del poder. En este sentido, se crea un cuerpo consultivo denominado Consejo Gubernativo con el objeto de asesorar al Presidente e incluso de presentarle proyectos de ley respecto de asuntos políticos relevantes. Este consejo estuvo conformado por destacadas personalidades de la política, tanto demócratas como civilistas (Manuel Candamo, Isaac Alzamora, Francisco García Calderón, Enrique de la Riva Agüero, Luis Felipe Villarán); sin embargo, Piérola desistió prontamente de este grupo consejero, en la medida que “*seguramente no quiso arriesgar la plenitud del poder presidencial con la cortapisa de un Consejo de Estado*” (Basadre; 1968: 167, v. X).

La siguiente medida en ese mismo sentido es la creación de gabinetes de amplia base partidaria (demócratas, civilistas, independientes), los cuales no eran estrictamente necesarios por que el partido en el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras. Finalmente la alianza civil – demócrata se hace efectiva en tres elecciones parlamentarias (1897, 1899 y 1901), mediante las cuales se distribuyen los cargos de las circunscripciones electorales, de tal manera que el Partido Civil logra posicionarse mejor en ambas cámaras, al punto que logra la elección de dos civilistas a la presidencia del senado en 1897 y 1898 (Manuel Candamo y Rafael Villanueva) y la mayoría en esta misma cámara en 1901.

El mantenimiento de una amplia base civil – demócrata es asumida como un principio estratégico por Piérola no sólo con el fin de darle estabilidad al régimen político, sino como una manera de poder volver a la presidencia: a pesar de que ello conllevó una escisión partidaria con la salida de Guillermo Billinghurst en 1898 e incluso fue motivo del movimiento insurreccional de Augusto Durand en 1899. Basadre (1968: 7, v. XI) reseña los comentarios “maliciosos” que señalan que El Califa “*puso demasiado esmero en tratar de ganarse a sus antiguos enemigos, los civilistas*”; y si bien esta estrategia conllevaría a la marginación definitiva del propio Piérola de una siguiente gestión

gubernamental, contribuiría en su momento a la institucionalización de una élite política nacional¹⁶⁴.

Respecto de un balance de la eficiencia en la gestión de gobierno de Piérola, la productividad de sus políticas públicas fueron muy destacadas; cabe mencionar brevemente que durante este periodo se reformó el sistema monetario en base al patrón de oro, lo cual contribuyó a dar estabilidad económica e incentivó la inversión privada hasta la primera guerra mundial. Además, Piérola se preocupó en la reforma de la contabilidad fiscal y la recaudación tributaria, así como en sanear la deuda interna y en impulsar la aprobación de presupuestos equilibrados. Los ingresos obtenidos por estas vías, fueron canalizados a realizar obra pública (la continuación de la reconstrucción nacional y la creación de nueva infraestructura física, especialmente las vías hacia la inhabitada amazonia y el crecimiento urbano de Lima) mediante la creación del Ministerio de Fomento. Desde otros ámbitos, cabe mencionar la profesionalización e institucionalización del ejército mediante un convenio internacional que hizo posible la presencia de una misión militar francesa. Finalmente, el gobierno promovió la creación de instituciones de la sociedad civil como la Sociedad Nacional de Minería y la Cámara de Comercio de Lima (a la par que se preparó los códigos de minería y comercio), y la Sociedad Nacional Agraria.

Lo importante de resaltar acerca de estos logros en la estabilización del régimen y en cuanto a la eficiencia gubernamental en que se realizan en un contexto no exento de conflictividad política, no tanto proveniente de los enemigos del régimen (rebeldes caceristas y separatistas), sino por los mismos actores políticos que contribuyeron a derrotar al militarismo y a instaurar este gobierno. Sin embargo, esta conflictividad

¹⁶⁴ "Pensamos que las transiciones democráticas y las rupturas pueden ser mejor entendidas desde el estudio básico de las continuidades y cambios en la relaciones internas de las élites nacionales. Una élite nacional desunida, el caso más común, produce una serie de regímenes que tienden a oscilar entre formas democráticas y autoritarias en distintos intervalos de tiempos. Una élite nacional unificada y consensual, un caso históricamente más raro, produce un régimen estable que puede evolucionar hacia una democracia moderna (...). Dentro de este marco de referencia, nosotros concebimos una élite nacional como un conjunto de personas que son capaces de influir sustancial y regularmente en los resultados políticos nacionales, ya sea por virtud de sus posiciones de autoridad en poderosas organizaciones y movimientos de cualquier clase." (Higley y Burton: 1989: 17 – 8, traducción mía).

estuvo acompañado con una interacción leal entre los propios actores, es decir que a pesar que la institucionalidad se estaba construyendo día a día, el respeto a las reglas del juego democrático fue una variable que se destacó en este periodo en comparación con los siguientes gobiernos (ver Fig. No. : Incumplimientos en las reglas de juego y conflictividad en los gobiernos de la República Aristocrática, pag.326).

Asimismo, observamos que el tipo de conflictividad política se distingue por tener muchos ejes de conflicto: ejecutivo versus legislativo, centralistas versus descentralistas, conservadores versus liberales (en el tema religioso), demócratas versus civilistas, gobierno versus oposición. Tal pluralidad de ejes de conflicto permite que los adversarios no sean los mismos, es decir que se constituyan alianzas coyunturales de acuerdo con el tema del conflicto; de tal manera que los adversarios en un determinado conflicto serían los aliados en otro tema de conflicto. Así, los civilistas fueron adversarios de algunos demócratas conservadores en el tema del matrimonio de los no – católicos, pero esos mismos civilistas y demócratas fueron aliados en la reforma electoral versus parlamentarios demócratas regionalistas; asimismo, se formó un frente común entre civilistas y demócratas defensores del fuero parlamentario versus el ejecutivo, sin embargo ambos grupos se presentan coaligados en las elecciones municipales y parlamentarias versus una oposición conformada por caceristas y cívicos (seguidores de Mariano Nicolás Valcárcel). Por lo tanto, en la medida que existen varios temas de conflicto o clivajes, la intensidad de los mismos se dispersa en tantos grupos adversarios contingentes diferentes puedan crearse; por lo que, si un adversario puede ser el aliado en el siguiente conflicto, la tendencia del juego estratégico evitará generar enemigos absolutos o resultados de “suma cero” que puedan repercutir negativamente en la siguiente jugada.¹⁶⁵

En síntesis, los esfuerzos de Piérola en el terreno de la consolidación contribuyeron a forjar una institucionalidad democrática que, en base a un reforzamiento de los partidos y

¹⁶⁵ “Por lo tanto, una sociedad cuando está atravesada por una docena de oposiciones que corren a lo largo de distintas direccionalidades, puede estar en menor riesgo de estallar en violencia o hacerse pedazos, que una sociedad apenas dividida a lo largo de una sola línea.” (Ross, F. A. The Principles of Sociology, 1920. Citado en Miller: 1983: 735-6, traducción mía).

de la creación de una élite política nacional, afirmó la autoridad legal de un Estado de Derecho que pudo durar un cuarto de siglo y en el cual se alternaron pacíficamente seis gobernantes civiles: López de Romana, Manuel Candamo, Serapio Calderón, José Pardo (durante dos periodos no consecutivos), Augusto Leguía y Guillermo Billinghurst; y se restableció el normal funcionamiento del Congreso e incluso del régimen municipal.

Sin embargo, el asedio e inestabilidad a este régimen democrático no se eliminaron, por lo contrario nuevas amenazas surgen desde el interior del sistema democrático: los perdedores del proceso electoral (Billinghurst, Durand) y un mecanismo electoral centralizado que incentivaba la “captura” del mismo por jugadores desleales. Por lo tanto, el reto del siguiente periodo será completar el proceso de consolidación democrática iniciado por Piérola, mediante la reincorporación de los actores que no aceptaron los resultados de la interacción respectiva, y simultáneamente la ruptura del círculo oligárquico que caracterizaba a esta democracia, de tal forma de integrar a los nuevos grupos sociales emergentes: la clase media y los trabajadores urbanos.

CAPÍTULO 3

LARVAMIENTO Y CRISIS DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO: COEXISTENCIA DE LAS TRAMPAS DEL JUEGO POLÍTICO Y UNA INSTITUCIONALIDAD PARTIDARIA (1899 - 1912)

3.1. Una democracia inconclusa en la primera década del siglo XX.

El término del primer gobierno democrático de este régimen instaurado en 1895 y la elección de un nuevo presidente en 1899 (Eduardo López de Romaña) tuvo un múltiple significado en la vida política del Perú. Por una parte, era la primera vez en la historia política peruana que se daba la transferencia de un gobierno entre civiles que habían surgido de elecciones populares, ello implicaba la existencia de una élite nacional unificada (las dirigencias de los partidos civil y demócrata) que había logrado “moldear” un resultado político nacional en el marco de un conjunto de reglas institucionales (la Constitución de 1860).

En segundo lugar, el reconocimiento de la prensa¹⁶⁶ y la popularidad del presidente saliente Nicolás de Piérola reflejaban un gobierno eficiente que contribuyó a dar legitimidad al régimen democrático. Esta eficiencia se expresó en los resultados de determinadas políticas públicas que brindaron mayor estabilidad económica y social en comparación con los últimos gobiernos precedentes, lo cual además tiene por consecuencia el incremento de la participación política electoral y la mayor inserción de los partidos políticos en los diversos sectores sociales. La legitimidad del régimen es puesta a prueba y sale bien librada durante 1899 con el alzamiento de movimientos insurreccionales a inicios del gobierno de López de Romaña, los cuales son derrotados en la medida que no contaron con el apoyo popular que esperaban.

¹⁶⁶ “Termina hoy una administración cuyos merecimientos serán durante largo tiempo objeto de larga controversia. (...) Juzgado en conjunto el gobierno del último cuatrienio, encontramos que ha impulsado los adelantos materiales, que ha manejado honradamente los dineros fiscales; que ha desdeñado el apoyo de los pretorianos; que ha sido digno, en fin. Con esto está salvado ante el criterio nacional.” Editorial de El Comercio, 8 de setiembre de 1899. Si consideramos que este medio de prensa fue pronunciadamente antipierolista durante muchas décadas, podemos observar una corroboración de la eficiencia de este gobierno y de la legitimidad del mismo.

En tercer lugar, se puede observar que si bien el grado de conflictividad del gobierno de Nicolás de Piérola no fue menor (lo cual se manifiesta en la intensidad de enfrentamientos entre poderes, partidos y líderes) y da lugar a una serie continuada de crisis de gabinetes, la estabilidad del régimen como tal no se ve afectado por este factor, por lo contrario podemos decir que la influye positivamente en la medida que estos conflictos en un contexto institucional de balances y contrapeso de poderes, incentiva la búsqueda de acuerdos por medio de los cuales se produce un ambiente de cooperación política, y por ende de actitudes y comportamientos mas moderados y menos polarizados.

Así, a pesar de un sistema básicamente bipartidista (que hace más difícil equilibrios políticos ya que estimula juegos de suma cero) se alcanza una distribución de cuotas de poder entre ambos partidos muy homogénea (en el poder legislativo, en gabinetes bipartidarios, y en la Junta Electoral Nacional) y por ende con mayor satisfacción política para ambas partes. Todo ello se expresa finalmente en una sola candidatura presidencial y una única lista para el congreso en 1899.

Por último, el inicio del nuevo siglo con estas características políticas presentaba la oportunidad de una consolidación de este régimen democrático para los periodos sucesivos, en tanto que la continuidad de un gobierno civil y la presencia de dos partidos políticos en los principales ámbitos de poder podía representar la estabilización de ciertos patrones de representación, de toma de decisiones gubernamentales y de procesos de negociación y acuerdo entre los actores políticos relevantes. Sin embargo, como se observará en el presente capítulo, esta consolidación democrática no se llevaría a cabo y por lo contrario el proceso político se orientó hacia enfrentamientos muy polarizados, dicotómicos (civil versus demócrata) y de exclusión política, que desembocaron no sólo en sucesivas crisis de gobierno, sino además en un cuestionamiento de la legitimidad del régimen como tal.

¿Qué cambios institucionales se produjeron en el proceso de instalación¹⁶⁷ del nuevo régimen que incentivarían un cambio de estrategias de los actores políticos a partir de 1899?. ¿Qué eventos políticos marcan el cambio de rumbo de la política peruana a inicios del siglo XX?. ¿Qué nuevos actores se hicieron presentes en la escena política para determinar un cambio de estrategias que rompieron la alianza civil – demócrata y los acuerdos políticos previamente establecidos?. ¿Qué tipo de conflictos, de intereses y de intensidades determinaron que la dinámica política devenga en un marcado proceso de tendencias semileales y desleales entre los actores políticos relevantes?. Finalmente, ¿qué factores evitaron que el nuevo derrotero de inestabilidad y crisis no desembocase definitivamente en una alternativa de régimen autoritario?

El presente capítulo abarca el análisis de cinco gobiernos civiles durante el periodo de 1899 a 1912: Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Serapio Calderón, José Pardo y Augusto Leguía. De todos ellos, el primero perteneció al Partido Demócrata pero cambia de orientación política hacia la segunda mitad de su periodo, y gobernó en alianza con el Partido Civil. Mientras que los otros presidentes fueron miembros destacados del Partido Civil, con excepción de Serapio Calderón quién es integrante del Partido Constitucional y que asumió la presidencia por el fallecimiento de Manuel Candamo en 1904, aunque sólo permaneció cinco meses antes de la entrega de mando al nuevo presidente electo ese mismo año: el civilista José Pardo.

Otras características importantes de este periodo de la política peruana (1899 – 1912) fueron:

- La ruptura de la alianza civil – demócrata (1902), y la conformación de un nuevo eje partidario que asumió el poder político durante todo el resto del periodo: el civil – constitucional.
- El desplazamiento del Partido Demócrata de los principales ámbitos de poder, de tal manera que de ser un partido de gobierno y mayoritario tanto en las elecciones

¹⁶⁷ Por nuestra parte, consideramos que la fase de instalación del régimen democrático culminó con la aprobación de la reforma electoral y la instalación del Jurado Electoral Nacional durante el gobierno de Nicolás de Piérola.

como en ambas Cámaras entre 1895 a 1899, hacia 1903 ya no formaba parte del Ejecutivo, ya no era mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, y no tendría ningún representante en el estratégico e influyente Jurado Electoral Nacional.

- El debilitamiento y división del Partido Civil a partir de la segunda mitad del gobierno de Augusto Leguía (1911), quien lideró una de las alas del mismo y con un estilo marcadamente personalista y autoritario.
- El resurgimiento de alternativas no democráticas tanto desde la oposición (guerrillas, intentos de golpes de estado, manifestaciones violentistas), como desde el propio gobierno (supresión de garantías individuales y de libertades políticas, cierre inconstitucional del Jurado Electoral Nacional, manipulación de elecciones parlamentarias e imposición de congresistas).
- La entrada en la escena política de un nuevo actor: los movimientos sociales. Anteriormente, los partidos o el gobierno habían utilizado grupos sociales como soporte electoral o ataque a competidores, pero hacia finales del periodo que analizamos se hacen presentes en la escena política movimientos obreros y estudiantiles que entremezclan reivindicaciones específicas con demandas o protestas de tipo político.

3.2. Eduardo López de Romaña (1899 – 1903): un político de transacción.

Como vimos en el anterior capítulo, la elección de este político de bajo perfil significó un serio conflicto al interior de Partido Demócrata. López de Romaña estaba afiliado como demócrata aunque no formaba parte de los líderes históricos ni del entorno de Piérola, había desempeñado más bien un rol técnico como Ministro de Fomento durante el segundo gabinete de Piérola en 1896.

Más allá de sus credenciales profesionales de alto nivel (se había graduado como ingeniero en una prestigiosa universidad de Inglaterra) y de sus méritos como benefactor de su comunidad (había implementado el servicio de agua potable y electricidad en la ciudad de Arequipa), la propuesta de su candidatura había sido posible por que la había presentado su hermano Alejandro, quien sí pertenecía a la cúpula del partido y había

rechazado (al igual que otros líderes democratas) la candidatura presidencial, que según el acuerdo electoral entre los Partidos Civil y Demócrata para presentar una lista unitaria, correspondía a estos últimos nominar al titular de la fórmula presidencial.

Si bien la nominación demócrata de la candidatura de López de Romaña representó el distanciamiento temporal del partido de Guillermo Billinghurst, quién también pretendía la candidatura presidencial, la explicación de este conflicto nos permite entender en parte la estrategia del caudillo demócrata respecto de la alianza que mantenía con el Partido Civil. Piérola había llegado al convencimiento de que no se podía gobernar al Perú sin la presencia de los civilistas, tanto por la decidida participación de este partido en la revolución de 1895 como un firme aliado de la Coalición, como por la representación e influencia que tenían en un importante sector de la sociedad: la clase alta que agrupaba a los industriales agrarios y a los grandes comerciantes y banqueros de las principales ciudades del país. Por lo tanto, las expectativas futuras de un regreso al poder del propio Piérola, se sustentaba en la creencia de que necesitaba tener de su lado al Partido Civil, por lo que vetó decididamente la candidatura de su fiel amigo y antiguo compañero Billinghurst, ya que su acendrado anticivilismo hubiese implicado una ruptura de esta alianza¹⁶⁸.

Podemos observar en el gobierno de López de Romaña dos periodos claramente definidos: la vigencia de la coalición civil - demócrata en el gobierno, y la nueva alianza entre el gobierno y el Partido Civil. La frontera de ambos lo constituye el gabinete presidido por Domingo Almenara (2 de Octubre de 1900 al 9 de Setiembre de 1901), en el cual se produce la ruptura entre ambos partidos y simultáneamente entre los demócratas y el ejecutivo. Durante el primer periodo se mantiene la alianza civil –

¹⁶⁸ “... Llegaba el momento de renovar el poder, momento en el cual podían naufragar todas las conquistas obtenidas por un esfuerzo paciente y tenaz. En el partido demócrata se acentuaban dos tendencias: una a mantener la coalición y otra a romperla. Romper la coalición era disminuir la fuerza de los elementos civiles; mantenerla era dividir al partido demócrata. Se optó por mantener la coalición. Felizmente las bajas del partido demócrata fueron menores de lo que pudo imaginarse....(Cornejo: 1902: 253). El autor era uno de los líderes más prominentes del partido demócrata y la cita corresponde a un discurso parlamentario de la época inmediatamente posterior a los hechos que estamos comentando (9 de agosto de 1899); lo cual muestra que las consecuencias que se desprendían de la candidatura de López de Romaña eran conocidas por la dirigencia demócrata.

demócrata, sin embargo, ambos partidos tienen estrategias diferentes en su relación con el Ejecutivo. Mientras que los demócratas consideraban que tenían prerrogativas preferenciales en el Ejecutivo tanto por ser mayoría en ambas cámaras del parlamento, como por la afiliación demócrata del titular del Ejecutivo; los civilistas optaron por un bajo perfil y de discreto apoyo a las decisiones que tomaba el Presidente.

En tanto que Piérola habían anunciado en su último mensaje al Congreso (28 de Julio de 1899) que no iba a pretender de subordinar o al menos influenciar a su sucesor¹⁶⁹; López de Romaña intentó gobernar en sus primeros momentos con relativa autonomía, aunque buscando mantener el apoyo de ambos partidos en el parlamento. Con estas orientaciones, el Presidente conformó sus primeros gabinetes con personalidades independientes y con una baja presencia de ministros políticos. Sin embargo, este tipo de nombramientos despertó la suspicacia demócrata, quienes se empeñaron en censurar a estos gabinetes con diversos pretextos, que en el fondo obedecían a una demanda explícita de la conformación de un cuerpo ministerial muy ligado a los partidos y con predominancia del Partido Demócrata.

Es así que el primer gabinete presidido por Manuel María Gálvez (independiente) sólo duró menos de 3 meses, cuando fue censurado por la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 1899. El segundo gabinete Enrique de la Riva Agüero (en aquellos momentos independiente aunque anteriormente había sido civilista) tuvo un mayor tiempo de estadía llegando casi a los 8 meses. Sin embargo, luego de la censura de este segundo gabinete, la nueva conformación del gabinete (también bajo la dirección de Riva Agüero), fue rechazado por un voto de desconfianza de los diputados apenas a los 17 días de instalado.

¹⁶⁹ “Muchos hay sin duda que han creído y más de uno con sanísimo intento que yo descaba -- que debía hacerlo -- traer al Gobierno de la República hombres sobre los cuales pudiese ejercer influencia directa; acaso hasta que asegurasen mi vuelta al hogar que voy a cesar; en una palabra; dejar el poder, pero quedándome realmente en él. No conozco, HH, señores, entidad más odiosa, más funesta que la de consejero irresponsable; ni calamidad mayor para un pueblo que la de ser dirigido por otros que los que tienen el encargo de hacerlo.... ” (Pasaje del mensaje presidencial de Nicolás de Piérola ante el Congreso el 28 de julio de 1899, citado en Basadre, 1968: 24, Vol. XI).

Este periodo de agudo enfrentamiento de poderes y de frecuentes censuras a los gabinetes se le denominó el “canibalismo de las cámaras”¹⁷⁰; Me Evoy (1997: 380) señala que este procedimiento de los congresistas demócratas era “*una estrategia de la oposición para ejercer el poder sobre un ejecutivo que se iba alejando de las directivas de sus mentores*”.

Ante este impasse político, el Presidente López de Romaña convocó a los líderes de ambos partidos para lograr un acuerdo que permita una mayor estabilidad al gobierno. La primera de estas negociaciones fue entre los representantes de ambos partidos, Carlos de Piérola por los demócratas y Manuel Candamo por los civilistas. El acuerdo de estos líderes fue la constitución de un equipo ministerial con igual participación de ambos partidos, sin embargo la bancada parlamentaria demócrata rechazó esta fórmula. Finalmente quedó constituido el 30 de Agosto de 1900, un gabinete presidido por el demócrata Enrique Coronel Zegarra y con una composición predominantemente demócrata. La estrategia de presión parecía haber dado resultado.

Otro de los acontecimientos políticos significativos durante este primer periodo del gobierno de López de Romaña, fue la amnistía aprobada por el congreso el 10 de Agosto de 1900, la cual siendo una iniciativa del poder ejecutivo, favorecía a todos lo que habían tomado parte en delitos de carácter político hasta ese momento, de tal manera que los peruanos ausentes del país por motivos de rebeliones o conspiraciones podían reincorporarse al territorio nacional.

Recordemos que los más recientes actos subversivos a inicios de este gobierno (Augusto Durand en Huánuco, Octavio Negrete en Camaná, el montonero Oré en Chíncha, el alcalde Constantino Flores en Andahuaylas y el coronel Emiliano Vizcarra en Loreto) fueron rápidamente sometidos por las fuerzas del orden debido básicamente a dos nuevos

“... la situación del ministro en los meses que el parlamento está reunido es azarosa y llena de incertidumbre. El canibalismo de las cámaras es algo que pasa los límites de toda exageración. Su mayor placer es comerse un ministerio. Ya que no puede luchar con el Presidente, se ensañan con los ministros en los días desgraciados de la Patria, en aquellos en los cuales alguno tiene que pagar los platos rotos, y este es el Gabinete, el grupo mas inestable entre todas las instituciones políticas.” (Dávalos: 1919:63)

factores que hacía más difícil las tácticas guerrilleras de estos movimientos subversivos: por una parte, la ausencia de apoyo popular que no lograron estos levantamientos; y por otra lado, la modernización del ejército emprendida por Piérola con apoyo de una misión de militares franceses y el equipamiento de modernas ametralladoras que le otorgaron al ejército una ventaja técnica considerable sobre estos revolucionarios. Pues bien, la amnistía favorecía tanto a estos personajes, en su mayoría disidentes demócratas; y también al General Andrés Cáceres y otros dirigentes de Partido Constitucional, quienes desde los inicios del gobierno habían dado muestras de acercamiento al nuevo mandatario; poco después Cáceres anunció el cese de sus actividades conspirativas y declaraba “*su opinión favorable a la unificación de la familia peruana bajo el régimen de Romaña*” (Basadre, 1968: 20; V. XI).

Esta amnistía política tuvo importantes repercusiones en la política peruana. La primera fue la incorporación no sólo al país, sino también a la escena política oficial del General Cáceres y el Partido Constitucional, ya que desde su derrota en 1895, no participaron del nuevo régimen que los había apartado del poder e incluso habían estado involucrados en algunos movimientos subversivos en zonas apartadas del país. Mientras tanto, Cáceres declaraba esporádicamente desde el extranjero contra el gobierno de Piérola; mientras que el vocero oficial del partido, el diario La Opinión Nacional y su director Andrés Aramburú ejercían una constante oposición y crítica diaria de la política oficial. Esta reincorporación significó no sólo un nuevo aliado para el Presidente López de Romaña, sino sobretudo la incorporación de un tercer actor en el modelo bipartidista que rompía el delicado equilibrio que existía entre demócratas y civiles, como veremos más adelante.

En segundo lugar, la reincorporación del joven revolucionario y ex demócrata Augusto Durand también implicó la posterior presencia de un nuevo actor en la escena política oficial, cuando junto a otros disidentes demócratas y ex -- radicales formaron el Partido Liberal, a la derecha del agonizante Unión Nacional y a la izquierda del Partido Demócrata.

Los estatutos de la nueva agrupación fueron aprobados el 20 de agosto de 1901 y publicados un mes más tarde, en ellos se pronunciaban por la creación de un partido sin jefes individuales sino por una dirección colectiva a través del Comité Central; sin embargo, el derrotero político de este partido no fue muy diferente al modelo tradicional y personalizado del Partido Demócrata y Constitucional, vale decir la dirección era única e indiscutible y recayó a lo largo de todo el tiempo que duró este partido en Augusto Durand, quien la asumió como Presidente desde la primera junta directiva el 20 de Setiembre de 1902.

En esa misma fecha se aprobó el programa del partido, el cual consignaba una orientación más equilibrada de los poderes del estado y de recorte de poderes del presidencialismo, ya que proponía la obligatoriedad del examen de los actos del Poder Ejecutivo por el Congreso, que la Corte Suprema tuviese la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y que los funcionarios públicos puedan ser efectivamente responsables de sus actos administrativos, de tal manera que estuviesen sujetos a una causa de oficio cuando cesasen en sus funciones hasta su absolución. Asimismo, proponían la efectiva separación de la iglesia y el Estado, una estructura política federal, la protección de las comunidades indígenas y de sus tierras, y la defensa de las libertades de imprenta, de reunión y contra el servicio militar obligatorio.

Si bien el Partido Constitucional va a ser un apoyo efectivo al Presidente López de Romaña y más tarde al Partido Civil, el Partido Liberal va a ser un aliado permanente en esta primera década del siglo del Partido Demócrata; sin embargo ello no constituye (como podría aparentar) un contrapeso de partidos, ya que el Partido Liberal es tan sólo en términos políticos una disidencia demócrata que vuelve a reintegrarse a su tronco de origen, sin añadir una diferente representación social o engrosar las bancadas parlamentarias. Así, la amnistía no llega a ser finalmente un reencuentro de la élite nacional, sino un mero cálculo para constituir nuevas alianzas para todos los actores políticos relevantes: los demócratas, el gobierno y los civilistas; producto de lo cual, resultan más beneficiados los últimos que el primero.

Otro acontecimiento político relevante de esta primera fase del gobierno de López de Romaña fue el incidente Belaunde. Mariano Belaunde fue Ministro de Hacienda durante el primer y el segundo gabinete (Gálvez y Riva Agüero). Era un acaudalado comerciante y exportador arequipeño, de filiación demócrata y muy cercano a Nicolás de Piérola. Este personaje fue acusado de malversación¹⁷¹ por el gabinete Coronel Zegarra ante la Cámara de Diputados el 28 de setiembre de 1900, la cual ordenó su prisión y enjuiciamiento.

El hecho políticamente significativo en torno a este incidente fue la psicosis colectiva que se suscitó a raíz de este acontecimiento. Así, el periodista Benjamín Saldaña pidió autorización a la intendencia de policía para la realización de una manifestación pública para el día siguiente, pero esa misma noche se congregó una muchedumbre en la Plaza de Armas de la Lima, dando vivas al gobierno y con arengas contra Belaunde. Al día siguiente, una multitud se volvió a reunir convocada nuevamente por volantes anónimos suscritos por “patriotas”, ésta marchó hacia el Cuartel Santa Catalina para cerciorarse que el acusado se encontrase detenido, y luego se dirigieron a la Plaza de Armas donde tuvieron un encuentro con el Presidente, quién salió al balcón con los ministros y señaló que Belaunde se hallaba sometido al Poder Judicial, sin embargo algunos manifestantes exigieron que se les entregase a Belaunde para castigarlo públicamente. Posteriormente hubo mayores desórdenes callejeros y hubo quienes subieron a las torres de la catedral y tocaron las campanas a rebato, mientras otros apedrearon el edificio de la compañía La Colmena, cuyo gerente era Nicolás de Piérola.

Los historiadores Basadre y Chirinos especulan sobre los motivos de fondo de este evento, ya que sorprende varios hechos en torno a este incidente. En primer lugar, la

¹⁷¹ “Para remesar dinero a Europa con destino a adquisiciones bélicas, y para asegurar el secreto de esas remesas, Belaunde vende letras de cambio a la tesorería. Esas letras cuentan con el respaldo de su reconocida solvencia. Pero hay un momento en que la casa de París que debe aceptar los documentos cambiarios, demora en hacerlos por transitorias dificultades. A la larga, las letras hubiesen sido pagadas. En todo caso, estaban rescatadas por la fortuna de Belaunde. Demás está decir que éste no ganaba un centavo en la operación.” Chirinos, 1977: 375. Posteriormente Belaunde es acusado ante el Senado, el cual lo encuentra imputable y decide que había lugar para su enjuiciamiento en el fuero común y se procedió al embargo de todos sus bienes. Muchos años más tarde, el Congreso rehabilitó a Belaunde, lo declaró inocente de todos los cargos y ordenó una reparación económica por los graves perjuicios que se le había ocasionado.

presión que se ejerció desde el Ejecutivo para que se informara prontamente al Parlamento acerca de este hecho, sin dar tiempo al propio Belaunde para que resolviese este asunto y sobretodo tratándose de un asunto que comprometía la credibilidad financiera del Estado y respecto de un asunto reservado como era la compra de armamento en momentos de tensión internacional con los países vecinos. En segundo lugar, la repentina aparición de grupos de personas que sin mayor entendimiento de asuntos financieros generaron ruidosas protestas. La conclusión a que llegan es similar, este hecho sirvió para suscitar un alejamiento entre el Presidente López de Romaña y Nicolás de Piérola, de tal manera que a aquel sólo le quedaba buscar un acercamiento con el bando civilista.

Las consecuencias políticas del incidente Belaunde pronto se hicieron notar. A pesar de la mayoría parlamentaria que tenían los demócratas en ambas cámaras del congreso, éstos se replegaron confundidos con lo enmarañado del caso y temerosos de perder su popularidad. A continuación, los civilistas tomaron la iniciativa para proponer mociones de censura en la cámara de diputados contra el gabinete Coronel Zegarra (1er de Octubre de 1900), frente a los cuales los ministros optaron por la dimisión ese mismo día.

El presidente convocó esta vez al propio Nicolás de Piérola y le ofreció la jefatura del gabinete, pero éste rehusó esta proposición. Este episodio es confuso por la falta de información específica y se alimenta de fuentes indirectas y de declaraciones realizadas mucho tiempo después. Miro Quesada (1961:299) estima que fue un error estratégico de Piérola, ya que implicó la pérdida de la oportunidad para retomar una decisiva influencia sobre el gobierno, y la atribuye a la fuerte personalidad del caudillo demócrata que no quiso someterse a una autoridad superior, cuando él mismo había sido presidente.

De todos modos, el Presidente López de Romaña, Manuel Candamo, Isaac Alzamora y Piérola llegaron a un acuerdo respecto de la conformación del nuevo gabinete, el cual estaría presidido por el civilista Domingo Almenara e integrado por un número igual de ministros demócratas y civilistas. No obstante este hecho que prometía un nuevo periodo de acuerdo político, sucedió que los tres ministros demócratas designados por Piérola se

adhirieron al civilismo, y que incluso uno de ellos (Ernesto Zapata) fue uno de los más agresivos impugnadores de las pretensiones electorales de los demócratas durante el siguiente año. Basadre (1968: 40; V. XI) resalta este suceso como uno de los momentos en que Piérola contribuyó a restar cuotas de poder a su propio partido: *“Piérola contribuyó a formar el gabinete Almenara con prescindencia de sus más leales amigos políticos y personales, y con ello regaló el poder a sus adversarios implacables.”*

La correlación favorable que logró el Partido Civil en el gabinete Almenara refleja un rasgo importante de la estrategia de este partido, que a diferencia de los acentuados liderazgos partidos políticos de esta época, tenía un liderazgo más plural y por tanto más apto para sus objetivos de cooptación de autoridades y adversarios, como en este caso los ministros demócratas del gabinete Almenara. Esta táctica no sólo le dio resultado con el mismo Presidente López de Romaña, sino con varios personajes de la política nacional, incluyendo al propio Piérola. En efecto, al término de su gobierno, Nicolás de Piérola se dedicó en la vida privada a dirigir una empresa de construcciones urbanas y ahorros llamada “La Colmena”; en la cual eran socios capitalistas y miembros de la Junta Directiva connotados líderes civilistas como Isaac Alzamora y Domingo Almenara; asimismo Piérola e Isaac Alzamora eran socios en una empresa minera de oro y plata denominada “Cotabambas Auraria”. Karno (1971:62-3) supone que estos vínculos comerciales podría explicar la errónea decisión de Piérola respecto de la composición del gabinete Almenara, que conllevó luego a la ruptura definitiva de la Coalición y el alejamiento demócrata del Ejecutivo.

Una primera medición de la nueva correlación de fuerzas políticas se hizo posible en el proceso electoral municipal de principios de diciembre de 1900. Para la alcaldía de Lima se presentaron dos listas que reflejaban la situación política del momento; por una parte estaban los civilistas e independientes agrupados en la “Liga Municipal Electoral Independiente”, y por otra parte la opción demócrata encabezada por Nicolás de Piérola. El resultado sorprendió a todos, ya que Piérola habiendo terminado su mandato presidencial con gran popularidad apenas un año antes, perdió estas elecciones. Este

proceso electoral mostró la ascendencia electoral del civilismo, así como el declive de la popularidad y el manejo electoral del Partido Demócrata.

Un efecto de la derrota de Piérola en estas elecciones municipales fue la actitud de abstencionismo que asumió respecto de la política activa. Así, Piérola escribió una carta a Enrique Bustamante y Salazar (presidente del comité central de partido) unos días después de los comicios, donde manifiesta que prefiere apartarse de la dirección del partido y dedicarse a sus negocios, y dado que se le ha vedado ocuparse de la cosa pública concluye diciendo que “*la abstención política más absoluta es deber clarísimo hoy y lo cumplo contento.*” (Miro Quesada, 1961: 301). Tal decisión influiría notablemente en el derrotero estratégico del Partido Demócrata a lo largo de este periodo.

Otro de los conflictos políticamente relevantes al finalizar el año de 1900, es la acusación que le hace la representación parlamentaria demócrata al gabinete Almenara por no convocar a una legislatura extraordinaria para discutir el presupuesto nacional. Lógicamente, este gabinete no quiso dar una oportunidad a los demócratas para un nuevo voto de censura hasta no instalar el Congreso con el nuevo tercio parlamentario en 1901, lo que conllevó a que no se apruebe el presupuesto por el parlamento, tal como lo prescribían los procedimientos constitucionales, (el gobierno decretó la prórroga del presupuesto del año anterior), ello daría motivo para que al año siguiente, cuando los conflictos políticos se agudizaron notablemente, los demócratas acusaran al ejecutivo de ejercer una “dictadura hacendaría”.

En el año de 1901 se desencadena el enfrentamiento entre demócratas y civilistas, éstos últimos ya como el soporte parlamentario del Poder Ejecutivo; se iniciaba así la segunda fase del gobierno de López de Romaña.

Los conflictos se inician con acusaciones mutuas de manejos electorales indebidos entre el ministro de gobierno Ernesto Zapata, y el Presidente de la Junta Electoral, Carlos de

Piérولا¹⁷². Las elecciones de renovación del tercio parlamentario de mayo 1901 marcaron el rompimiento definitivo de la alianza civil – demócrata¹⁷³; puesto que si bien llegaron a un acuerdo para presentar una lista en común para ambas Cámaras, la disputa surgió por la candidatura del departamento de Junín, donde los civilistas arguyeron que el acuerdo era que ambas agrupaciones debían apoyar al civilista Leonidas Cárdenas, y que el Partido Demócrata no había respetado dicho pacto al presentar la candidatura de Joaquín Capelo.

Por su parte, el presidente de la JEN, Carlos de Piérولا, acusó al gobierno de intervenir a través del prefecto en dichas elecciones a favor del candidato civilista en Junín, y además del uso electoral de fondos públicos con fines de favoritismo electoral en otras partes del país. La JEN solicitaba la destitución de todos los funcionarios denunciados, sin lograr una efectiva respuesta. Mientras tanto, el ministro Zapata denunciaba que sin haber habido elecciones en Tacna (en aquellos tiempos bajo control de las autoridades chilenas), Piura, Paita, Huánuco y Cajamarca, la JEN había proclamado representantes a Congreso por dichas localidades. A continuación inició un juicio a Carlos de Piérولا por el delito de desacato, del cual fue absuelto por que quedó a disposición de la Cámara de Diputados, de la que también era presidente y donde los demócratas tenían mayoría.

Para la instalación de la legislatura ordinaria en julio de 1901, se procedió a la elección de las mesas directivas de ambas Cámaras, lo cual presentó la oportunidad de mostrar nuevamente la correlación de fuerzas de los partidos relevantes. Los demócratas volvieron a triunfar para la presidencia de la Cámara de Diputados con Mariano Cornejo que obtuvo 45 votos, mientras que el civilista Nicanor Álvarez Calderón obtuvo 30 votos.

¹⁷² Luego de la disolución de la JEN por Piérولا en abril de 1899 (ver capítulo anterior), se restauró este organismo en 1900 con los delegados del Poder Judicial, de las Cámaras y el Gobierno; la composición mayoritaria correspondía al Partido Demócrata. Fue bajo el control de esta Junta que se realizan las elecciones municipales de diciembre de 1900, en la cual pierde el líder demócrata, lo cual da buena cuenta de la correcta administración que hubo por parte de los demócratas.

¹⁷³ Para estas elecciones se presentan también algunos candidatos liberales en ciertas partes del país, Mariano Valeárcel por la Unión Cívica y el General Canevaro del Partido Constitucional para una senaduría por Lima. Los resultados no favorecieron a ninguno de ellos, pero sobretodo dejaron constancia de la pérdida de relevancia del partido Unión Cívica. El Partido Constitucional obtendrá una representación parlamentaria cada vez mayor a partir del reingreso a la escena política del General Cáceres, mientras que la representación liberal se hará posible a partir de la constitución formal del partido.

Sin embargo, los civilistas fueron los que triunfaron en la Cámara de Senadores, donde el nuevo presidente fue Manuel Candamo, quién obtuvo 20 votos contra 14 de Benjamín Boza, en ese entonces presidente del Comité Central del Partido Demócrata. Cabe resaltar que en dichas sesiones parlamentarias, las numerosas barras favorables al civilismo gritaron tanto a favor de Candamo como del Presidente López de Romaña.

La nueva legislatura anunciaba la agudización del conflicto tanto de poderes como de partidos a través del ya famoso recurso del voto de censura contra el gabinete. Efectivamente, el 13 de agosto de aquel año se presentó y aprobó la censura contra el gabinete Almenara, al cual se le acusaba de intervención en las elecciones parlamentarias, de atacar y desprestigiar a la JEN, y de no convocar a una legislatura ordinaria para aprobar el presupuesto. La censura fue aprobada y comunicada al presidente del Consejo de Ministros, quien respondió que *“las resoluciones de ese carácter no están incluidas dentro de los acuerdos que, adoptados por una sola Cámara, deben ser comunicados al Poder Ejecutivo”* (Basadre, 1968: 40; V. XI). Con ello daba a entender que no consideraban que el voto de censura de una sola de las Cámaras era suficiente para provocar la renuncia de un gabinete.

El debate que suscitó esta negativa del Consejo de Ministros a dimitir nos remite al voto de censura de la cámara de diputados que tuvo el primer gabinete de Piérola en 1895. En efecto, en aquel entonces el Presidente Piérola no aceptó la dimisión de sus ministros solicitando que el Senado se pronunciase sobre ella, a lo cual respondió esta Cámara que efectivamente la Constitución vigente no obligaba a renunciar a los ministros con tan sólo la censura de una de las cámaras, sino que requería una censura del congreso pleno (reunión de ambas cámaras); sin embargo, la dimisión de los ministros ante la censura de una sola de las cámaras había devenido en una costumbre aún cuando no estaban legalmente obligados. A pesar del desacuerdo de Piérola respecto de esta dimisión ministerial y que, según opinión del senado, podía desestimar tal medida, hubo un recambio de gabinete, con lo cual Piérola se asimiló a la costumbre tradicional de aceptar la renuncia ministerial a causa del voto de censura de una de las cámaras. Podemos considerar que este procedimiento político quedó como un acuerdo informal de las

fuerzas políticas relevantes de 1895, el cual limitaba las facultades presidenciales para, a su vez, otorgar una mayor relevancia al Poder Legislativo.

Empero, el Presidente López de Romaña rompió este acuerdo informal de 1895 y el gabinete se mantuvo a pesar del voto de censura de la cámara de diputados. Esta decisión incrementó el presidencialismo del presente régimen y afectó el equilibrio de poderes durante el resto del periodo de gobierno, así también influiría en la situación política de los siguientes gobiernos.

La protesta de los demócratas se trasladó entonces a la cámara de senadores hacia fines de agosto, en la cual presentaron una moción para que asista el gabinete y poder resolver este impasse entre la cámara de diputados y el ejecutivo. Dicha moción no fue aprobada (19 contra 18 votos, lo cual nos da una idea de la ajustada mayoría de los civilistas), y por el contrario acordaron no acudir a sesión plena del congreso hasta que no se resolviese este incidente, a la vez que aprobaban una moción de confianza al gabinete Almenara. Este conflicto refleja ya plenamente la nueva correlación de las fuerzas políticas en la legislatura de 1901, en la cual los demócratas pasaron a la oposición abierta y el gobierno estaba firmemente aliado al civilismo.

Finalmente, el gabinete Almenara renunció por propia iniciativa el 9 de setiembre y fue reemplazado por un nuevo gabinete dos días después, ya con clara predominancia del civilismo y dirigido por Cesáreo Chacaltana, ex ministro del General Cáceres, pero ahora incorporado al Partido Civil. Este gabinete tuvo una duración de casi 10 meses hasta el 31 de julio de 1902, sin mayores conflictos por el parlamento ya que éste se encontraba en receso.

La Junta Electoral Nacional continuó con serias discrepancias con el ejecutivo en 1902. Se trataba, esta vez, de la renovación de la JEN. El gobierno procedió en el mes de julio a gestionar ante el Poder Judicial la designación de nuevos delegados para la renovación de este organismo. Carlos de Piérola reaccionó rápidamente señalando que esta Junta aún

tenía vigencia para las siguientes elecciones presidenciales en 1903, el impasse no quedó resuelto en aquel momento.

La renuncia del gabinete Chacaltana propició un nuevo intento de negociación entre López de Romaña y los demócratas para formar un consejo de ministros. Las posibilidades de conciliación parecieron no agotarse aún; sin embargo, los intereses y las estrategias de los actores no permitirían arribar un nuevo consenso. La coyuntura política de principios de agosto significó un momento clave en las perspectivas políticas de los actores. Se iniciaba la legislatura ordinaria de 1902¹⁷⁴ y estaba pendiente por definirse el tema de la vigencia de la JEN, la incorporación de algunos senadores por los departamentos de Apurímac y Amazonas, y sobre todo la necesidad de que el gobierno diera garantías a los resultados electorales para las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo el siguiente año.

El Partido Demócrata respondió al requerimiento presidencial a través de una publicación en los diarios, donde señalaba sus condiciones para la formación de un gabinete plural: renovación total del consejo de ministros, representación partidaria en el gabinete por cuotas equivalentes a la presencia en el parlamento, presidencia y distribución de carteras ministeriales hecha por aquellos a los que se designe, abstención oficial para las próximas elecciones presidenciales y garantías para la libertad de sufragio. El Presidente López de Romaña no accedió a tales demandas, aunque declaró que continuaría con la política de conciliación y el respeto a la libertad electoral.

La perspectiva demócrata era que debían lograr ante todo un gabinete que garantizase la limpieza de las elecciones presidenciales en 1903, y a continuación decían incluso que su posición era generosa ya que no reclamaban una mayoría demócrata en el Consejo de Ministros. Por su parte, el punto de vista del gobierno era que las exigencias demócratas implicaban que el presidente cediese sus prerrogativas constitucionales, de hecho era

¹⁷⁴ La elección de las mesas directivas de las cámaras para la legislatura, ratificó la mayoría demócrata en diputados (salió elegido presidente Carlos de Piérola por 59 votos contra 33) y la mayoría civilista en senadores (ganó la presidencia Antero Aspíllaga por 26 votos contra 20).

prácticamente pasar de un modelo presidencial a uno cuasi parlamentario, por tanto lo consideraron una imposición. La estrategia de presión que los demócratas venían ejerciendo durante casi todo el trayecto de este gobierno no sólo no les dio resultados, sino que les trajo un mayor retroceso en las cuotas de poder que tenían en el Estado.

Así, el 9 de agosto de 1902, el Presidente nombra un nuevo gabinete de composición mayoritariamente técnica e independiente, pero dirigida por un connotado civilista y profesor universitario, Alejandro Deustua. Casi inmediatamente, los diputados demócratas aprobaron una moción de censura, que bajo el nuevo estilo presidencial no conllevó ningún efecto de renuncia, mientras que la cámara de senadores saludó la designación del nuevo gabinete con un voto de confianza.

La crisis política se desencadenó en la cámara de senadores el mismo día de la designación del nuevo gabinete. Los civilistas procedieron a nombrar delegados ante la JEN, frente a lo cual los demócratas se abstuvieron, lo cual no impidió dicha elección y por lo contrario los civilistas nominaron personeros por la mayoría y por la minoría a dos senadores de su propia bancada. A continuación, se debatió la incorporación de las senadurías por el departamento de Amazonas, en la cual existían dos juegos de credenciales, uno a favor de los demócratas Benjamín Boza y Julio Tenaud suscrita por el presidente en ejercicio de la Junta Electoral Departamental, y otra a favor de los civilistas Eleodoro Romero (yerno del Presidente López de Romaña) y Juan Ignacio Elguera, respaldada por el anterior presidente de la Junta Electoral Departamental.

La votación a favor de los candidatos civilistas y su respectiva incorporación a la cámara por el presidente del senado desató una gran trifulca, el senador demócrata Enrique Llosa arrancó las credenciales de los nuevos senadores de la manos del secretario de la cámara y las rompió en pedazos, a continuación se desató una gran pelea entre los asistentes e incluso entre las barras¹⁷⁵.

¹⁷⁵ "Aspillaga bajó de la presidencia y apostrofó en medio del salón. Empezó un pugilato general. Los Senadores se golpeaban. Los tñveros volaban por encima de las cabezas y estallaban en medio de las

En la siguiente sesión del senado, el senador Llosa fue desaforado por 24 votos contra 17, acusado de desacato a la autoridad del senado y daños a los bienes públicos. Asimismo, se aprobó una moción por la cual se rehusaron a asistir a las sesiones del Congreso, que había solicitado la Cámara de Diputados para resolver el tema del periodo de vigencia de la JEN.

Por su parte, Enrique Llosa apeló a la Cámara de Diputados, la cual resolvió acusar al presidente del senado y a 24 senadores civilistas que aprobaron la moción de desafuero por infracciones constitucionales. Sin embargo, Llosa no pudo reincorporarse más a su mandato legislativo. Toda esta situación configuró una grave crisis política, ya sea por el cisma congresal que implicaba el enfrentamiento de las Cámaras, como por la mutuas acusaciones que se hacían los parlamentarios civilistas y demócratas de atentados contra la constitucionalidad.

No dejaron de haber nuevos intentos de conciliación en medio de todos estos conflictos. Una comisión de diputados demócratas acudió donde el Presidente, quien les señaló que el problema principal era que los demócratas aceptasen la recomposición de la nueva JEN, y propuso que renunciaría el delegado civilista “en minoría” de la cámara de senadores, para que se nombrase un delegado demócrata; además que los diputados eligiesen sus respectivos delegados e incluso la minoría civilista sufragaría por un diputado demócrata como “delegado de la minoría”, y por último que el Ejecutivo nombraría una persona imparcial y sin vínculos con partidos políticos.

pecheras. La barra irrumpió en la sala y los diputados demócratas empezaron a llegar de su Cámara, situada cerca, tomando parte en el escandaloso pleito.

Desbordado, Aspíllaga dio orden para que entrara la guardia: “Venga la fuerza”. Hermoso y tonante, como un atleta griego, don Felipe de la Torre y Bueno, Senador por Lima, se lanzó: “¿Para qué esa fuerza?”. Aspíllaga, entonces, detuvo con sus propias manos a los soldados que ya ingresaban en la sala de sesiones, pero insistió en que la barra fuera despejada. Don Carlos de Piérola, Presidente de Diputados, se le encaró: “La barra no puede salir. Este es el pueblo que ha derramado su sangre con nosotros por el restablecimiento de la Constitución y las leyes”. (...)

Don Carlos de Piérola celebró una entrevista con Aspíllaga quien manifestó un propósito conciliatorio. En atención a sus promesas, don Carlos hizo retirarse al pueblo, continuando los civilistas al interior del local.” (Ulloa: 1981: 396-7).

Los demócratas no aceptaron esta fórmula, por que a pesar de todo ello seguirían en minoría en la JEN, y exigieron que se lleve a cabo las sesiones del congreso pleno. Ante la negativa demócrata de la propuesta presidencial, López de Romaña recomendó entonces que las negociaciones se llevasen a cabo directamente entre los Partidos Civil y Demócrata, que él aceptaría todo lo que llegasen a transar. Las negociaciones interpartidarias tampoco tuvieron resultados positivos.

La nueva JEN se instaló el 8 de setiembre sin representación demócrata, y sin el reconocimiento de los Partidos Demócrata, Liberal y Unión Cívica. La composición de esta Junta era mayoritariamente civilista, más un delegado del Partido Constitucional (Belisario Sosa) y un representante de la Unión Cívica (Guillermo Seoane), el cual tuvo que renunciar a su partido, ya que Mariano Valcárcel le pidió que no asistiese a las reuniones de esta Junta. Fue Domingo Almenara, quien había sido jefe del gabinete que marcó el final de la alianza civil – demócrata, el nuevo presidente de este organismo electoral.

La Cámara de Diputados aprobó una moción que señalaba que la nueva Junta era una “amenaza a la libertad electoral” y que sus actos eran nulos (Basadre; 1968: 67, v.XI). Los demócratas no aceptaron perder su mayoría en la institución que tenía todas las facultades para definir el proceso electoral, ya sea desde el nombramiento de las autoridades encargadas del escrutinio, como para declarar a los candidatos ganadores. La denuncia y el desconocimiento de la institucionalidad electoral no impidió el funcionamiento efectivo de la JEN.

Otro hecho políticamente relevante que sucedió en 1902 fue el retorno al país de personajes que se reincorporaron a la escena política: el general Andrés Cáceres, el líder montonero y jefe liberal Augusto Durand, y el disidente Guillermo Billinghurst que se reintegró a las filas demócratas. Cáceres, fundador del Partido Constitucional, declaró a su llegada *“no olvidéis que es virtud ciudadana rodear a los gobiernos que tienen la sana intención de hacer su deber, y que han cumplido con el mandato nacional de de ser antes*

que todo desapasionados y justos” (Miro Quesada, 1961: 312); por su parte, el Presidente López de Romaña envió un edecán a saludarlo a bordo del barco que lo trajo.

Mientras tanto, el presidente del nuevo Partido Liberal, Durand fue recibido por numerosos dirigentes del Partido Demócrata, del cual se había alejado precisamente por la elección del Presidente López de Romaña. En este mismo caso se encontraba Billinghamurst, que a su retorno a Lima pronunció un discurso de acerba crítica contra el civilismo. Se configuraba un escenario de fuerte polarización política con la presencia de todos líderes que participaron en la revolución de 1895.

El gabinete Deustua tuvo una corta duración (2.6 meses) ya que se vio envuelto en un confuso incidente que involucraba las tensas relaciones internacionales que el Perú mantenía con Chile, Ecuador y Colombia por problema limítrofes. Se trató de un cablegrama que se envió al Canciller de Chile sobre informes reservados del Congreso, y se vieron comprometidos en este affaire el Ministro Villegas de Relaciones Exteriores e incluso el demócrata Manuel Pablo Olaechea, como miembro de la comisión consultiva de Relaciones Exteriores. A pesar de que las comisiones investigadoras de las Cámaras de Diputados y de Senadores, exculparon a los acusados de esta infidencia y lo atribuyeron a particulares, la extrema virulencia del debate parlamentario que continuó en el pleno reflejaba el ambiente político del momento. El diario “La Opinión” reflejó este escenario de conflicto en su editorial del 11 de Octubre: *“Asistimos a un espectáculo verdaderamente inusitado; nada ni a nadie se respeta. Es la debacle política.”*

Como corolario de este incidente se aprobó un voto de censura en la Cámara de Diputados el 9 de octubre, por un amplio margen que reunía a demócratas e incluso civilistas (70 votos contra 4); sin embargo el Presidente no aceptó las renunciaciones de los ministros del gabinete sino hasta un mes después, con lo cual pretendía mantener el criterio de no aceptar un recambio ministerial sujeto a impugnaciones del parlamento; empero, se hizo necesario tener un nuevo grupo de ministros para asumir el último año de gobierno, ya que el anterior había asimilado la altísima tensión de los conflictos de poderes y de partidos que habían marcado la legislatura de 1902. Para tal efecto, López

de Romaña nominó al civilista Eugenio Larrabure y Unanue como nuevo jefe del Consejo de Ministros, cuya composición también tenía predominancia civilista aunque ya con participación de algunos representantes del Partido Constitucional; este equipo inició sus labores el 4 de noviembre y duraría hasta el último día del mandato presidencial (8 de setiembre de 1903).

Una importante declaración a reseñar es la que hicieron los demócratas el 24 de octubre en 1902, se trataba de un manifiesto publicado en los diarios en el cual denunciaban al gobierno de ejercer una dictadura política (dada la ausencia de garantías para las elecciones) y hacendaría (refiriéndose a la ausencia de la aprobación parlamentaria del presupuesto del ese año); señalaban además que las bases constitucionales del régimen se habían destruido, por lo cual caracterizaban al gobierno de una “*dictadura anónima, sin objetivo y sin programa*”. Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó una moción declarando inconstitucional la recaudación de impuestos sin la existencia de un presupuesto; por lo cual instaban a la ciudadanía de abstenerse de pagar sus impuestos.

La respuesta del gobierno frente a este exacerbado ataque demócrata no es menos desleal: el Ministro de Hacienda se niega a pagar el presupuesto de la Cámara de Diputados, lo cual repercute directamente en los sueldos de los diputados y de los empleados, y en todos los gastos de servicios que hacen posible el funcionamiento de la misma. La cámara emitió certificados de pago y enjuició a los funcionarios del gobierno que resultasen responsables de esta omisión. Ya sean las declaraciones de los demócratas como la reacción civilista nos muestran un escenario donde predominaban ya las conductas semileales mutuas de ambas fuerzas políticas, lo cual nos permite afirmar que más allá de una crisis de gobierno, estamos observando el inicio de una crisis del régimen.

Ya para finalizar el convulsionado año de 1902, los civilistas lanzaron la candidatura presidencial de Manuel Candamo, con lo cual se presentaba la posibilidad de un gobierno civilista por segunda vez en la historia, luego del que tuvo a su cargo el fundador del partido, Manuel Prado entre 1872 y 1876. Esta candidatura tuvo el acuerdo y respaldo del

partido Constitucional, los cuales nominaron a los dos vicepresidentes de la fórmula electoral: Lino Alarco y Serapio Calderón.

Otro acontecimiento político significativo fue la elección municipal del 1ero de diciembre, en ellas midieron sus fuerzas nuevamente (preparándose para las elecciones presidenciales) las coaliciones demócrata liberal versus la civil constitucional, siendo los ganadores de la plaza de Lima (la más importante) esta última coalición.

Nicolás de Piérola retomó conversaciones con el líder civilista Isaac Alzamora (quien era vicepresidente de la república y además su socio comercial) el 17 de diciembre, y le propuso un gran acuerdo para superar esta crisis política, a través de una convención de partidos para nominar el candidato presidencial, que incluiría además delegados de los partidos liberal, Unión Cívica y los constitucionales. Los civilistas, más allá de no convenirles una base tan ancha donde no serían mayoría (incluso contando con el apoyo de los constitucionales), consideraban que su coalición ya tenía la suficiente fuerza para ganar las elecciones presidenciales, tal como lo demostraban las elecciones municipales previas.

El año de 1903 se abre políticamente con la reafirmación de la actitud de abstención de Piérola y por tanto su no participación en las elecciones presidenciales, lo cual aseguraba el triunfo del candidato civilista Manuel Candamo. Esta renuncia del “candidato natural” de la oposición desconcertó grandemente a sus afiliados, simpatizantes y amigos. Sin embargo, la dirección del Partido Demócrata anunció que no participarían en estas elecciones (incluyendo la renovación del tercio parlamentario que la acompañaban) e invocando que sus integrantes “*mantuvieran la más absoluta fe en los destinos del partido y en la eficacia de su acción política*” (Ulloa, 1981: 402).

¿Cómo explicar este repliegue del caudillo demócrata que durante toda su vida había demostrado una gran voluntad política para llegar al poder?, ¿Cómo entender la actitud del resto de la dirección partidaria que se sometía, una vez más, a seguir perdiendo posiciones políticas de importancia, como sería esta vez la mayoría en la Cámara de

Diputados? Más allá del pesimismo que tenía Piérola en la posibilidad de su triunfo electoral, cuando ya no contaban con presencia alguna en el órgano regulador electoral y tomando en cuenta los recientes resultados electorales, pensamos que existían razones más poderosas que explicarían la abstención política de los demócratas.

Una primera consideración a tener en cuenta, era que el ambiente político revestía tal grado de confrontación entre civilistas y demócratas, que una contienda electoral y posterior derrota del líder demócrata pudiese haber alentado una tendencia revolucionaria al interior del Partido Demócrata, de tal manera que si Piérola no le daba curso hubiese significado una ruptura del partido. Por otro lado, consideramos que el líder demócrata Piérola hubo también de considerar, que una aventura insurreccional se vería enfrentada a un ejército con una capacidad militar superior a la que encontró en 1895, ya que el mismo Piérola había convocado a la misión de militares franceses para su reconstitución y entrenamiento, y para dotarla de moderno equipamiento.

Otro factor a evaluar es que Piérola tenía una estrecha vinculación personal con Manuel Candamo, quién no sólo había sido un leal aliado durante la revolución de 1895 y presidido el gobierno de transición que dio paso al nuevo régimen, sino que además representaba el ala más conciliadora del Partido Civil, proclive a entendimientos con las demás fuerzas políticas. Pudo Piérola entonces suponer que su oportunidad para retomar las riendas del poder se verían más favorecidas al término del gobierno de Candamo y una vez que el Partido Civil hubiera alcanzado su aspiración de ser gobierno, se producirían mejores condiciones para una nueva alternancia política.

En síntesis, no quiso Piérola demostrar que su afán por llegar nuevamente al poder, truncaría el régimen democrático y que prefería mantener sus vínculos con los civilistas para alentar una nueva esperanza de recambio gubernamental en una siguiente oportunidad. Piérola remite una carta a los civilistas el 17 de diciembre de 1902, donde les dice: *“Completo error padecerían ustedes si creyeran que tengo deseos de volver al gobierno. No es halagador afanarse por edificar lo que ha de ser luego empeñosamente derribado, y así prefiero con mucho mi actual tarea de albañil, a la de gobernante. (...)”*

Creo haber demostrado que no soy enemigo de los señores civilistas." (Miro Quesada, 1961: 322).

Las elecciones se llevaron a cabo el 25 de mayo de 1903, y el resultado de las mismas confirmó lo obvio: el triunfo de la única lista participante. Así, Manuel Candamo fue elegido Presidente de la República con una votación de 92,729 votos, de un total de 146,142 inscritos. Asimismo, se eligió un nuevo tercio parlamentario íntegramente civilista – constitucional, lo cual otorgaba la mayoría congresal para esta alianza en ambas cámaras. Sin embargo, aún antes de que se otorgasen las credenciales a los nuevos diputados oficialistas, el civilista Nicanor Álvarez Calderón ganó la presidencia de su cámara por 40 votos contra 39 del demócrata Pablo Solís (lo cual demuestra el continuo incremento de la bancada civilista por deserciones de demócratas y el convencimiento de parlamentarios independientes) ¹⁷⁶. Mientras tanto, en la cámara de senadores Antero Aspíllaga fue elegido presidente por 34 contra 10 del demócrata Augusto Seminario ¹⁷⁷.

La minoría demócrata solicitó la anulación de las elecciones en el Congreso, argumentando la intervención del gobierno para propiciar el predominio de uno de los partidos en la JEN (la cual no tenía representantes de la oposición), y que esta Junta favoreció a los candidatos de una sola coalición política. Sin embargo, en la medida que los demócratas demandaron la elección del presidente y vicepresidentes por el Congreso, era una clara señal que se habían resignado a la victoria civilista, en tanto era un hecho que se había consolidado la mayoría parlamentaria de los civilistas, restándoles sólo la intención de deslegitimar a la JEN.

¹⁷⁶ Basadre (1968: 126, V. XI) comenta que para las elecciones de la presidencia de la cámara de diputados en 1903, el gobierno apresó a los demócratas Belisario Spelucín y Moisés Bohl, para impedir que asistiesen a la sesión respectiva y así permitir que el civilismo obtenga la mayoría. Sin embargo, al margen de esta trampa del ejecutivo, la bancada parlamentaria demócrata en diputados era mucho mayor que dos votos que la bancada civilista, lo cual demuestra que muchos diputados demócratas e independientes se alinearon con el Partido Civil.

¹⁷⁷ Un balance más exacto de la nueva correlación de fuerzas en la cámara de diputados (luego de la instalación de la legislatura de 1903) lo da la elección del delegado de esta cámara ante el JEN, una vez que ya se había incorporado el nuevo tercio parlamentario. Así, el civilista Cesáreo Chacaltana fue elegido como representante de su cámara ante la Junta por 52 votos contra 32 del demócrata Aurelio de Sousa.

La votación congresal para dictaminar sobre las mociones a favor y en contra del resultado electoral mostró una vez más la correlación mayoritaria de la alianza oficialista, 113 votos contra 36. De esta manera, el congreso proclamó a Manuel Candamo como Presidente de la República y a Serapio Calderón como 2do Vicepresidente de la República para el periodo 1903 – 1907¹⁷⁸. Así tenemos que para inicios de la segunda legislatura de 1903, la alianza civilista – constitucional había desplazado a los demócratas de todos los ámbitos de poder relevantes durante el gobierno de López de Romaña, no sólo por maniobras “dudosas” del civilismo, sino también por su incremento electoral y la estrategia abstencionista y errática que le imprimió el caudillo Piérola a su colectividad política.

A pesar de la impugnación demócrata del triunfo y del clima de insatisfacción política que alimentaba este resultado, Nicolás de Piérola (acompañado de la plana mayor demócrata) realizó una visita de saludo y reconocimiento a Candamo, con lo cual contribuyó a restaurar legitimidad tanto al gobierno que se iniciaba, como al régimen político en su conjunto.

Balance Analítico del Gobierno de López de Romaña.

Una evaluación de este gobierno nos permite diferenciar claramente dos etapas. Una primera es caracterizada por una alta conflictividad y una recurrencia de crisis de gobierno debido al conflicto de poderes entre el parlamento (con mayoría demócrata) y el ejecutivo, a pesar de la alianza que formalmente mantenían los civilistas y demócratas, y del vínculo orgánico que aún subsistía entre el ejecutivo y el Partido Demócrata. Una segunda etapa empieza con la ruptura de la coalición civil – demócrata (la cual ocurre durante el periodo del gabinete Almenara) y sigue con el cambio de orientación política del ejecutivo (que encontró el soporte que necesitaba en el Partido Civil); es a partir de este momento en que el grado de conflictividad cambia cualitativamente y presenciamos un escenario al borde de la crisis del régimen democrático.

¹⁷⁸ Lino Alarco, candidato a la primera vicepresidencia, falleció el 14 de junio de 1903, luego de que se conociese su triunfo electoral, pero antes de ser proclamado como tal por el congreso; no hubo acuerdo político para que se procediese a su respectivo reemplazo, por lo que el cargo quedó vacante.

En general, la alta conflictividad de este gobierno se expresó tanto en la inestabilidad de los gabinetes ministeriales, como en las acusaciones mutuas de actos semileales (trampas para acumular poder en perjuicio del adversario), las que al intensificarse desencadenan actitudes de deslealtad, como es el desconocimiento de la legalidad y la constitucionalidad de algunas de las instituciones existentes, como es el caso de la Junta Electoral Nacional y el parlamento.

Otra característica importante que marca el paso de esta inestabilidad de gobierno a una crisis de régimen es la intensidad cuantitativa de los indicios de trampas (acusaciones al adversario de actos ilegales o inconstitucionales), de tal modo que constatamos un crecimiento de conflictos derivados de acusaciones de actos ilegales o anticonstitucionales desde 1899 a 1903. Otro rasgo que marca el inicio de la segunda etapa del gobierno de López de Romaña es el tránsito de “indicios de trampas” a “trampas” propiamente dichas (es decir que al margen de las denuncias que pueda hacer alguno de los actores, un espectador neutral puede juzgar como violaciones de las reglas del juego político); como es el caso de la detención arbitraria de parlamentarios o del no pago de los sueldos de los congresistas opositores por parte del Poder Ejecutivo.

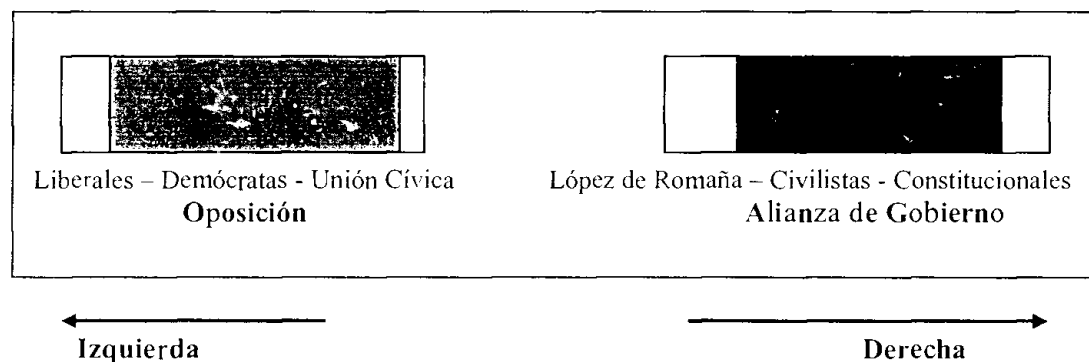
El hecho de que este tipo de conflictos ocurran mayormente durante el periodo de las legislaturas ordinarias refleja el carácter parlamentario de este sistema de partidos, propio del tipo de partidos de élite del fines del siglo XIX y principios del XX (tal como los clasifica Mair, 1997: 110 - 111), es decir con un sistema de sufragio restringido, con actores vinculados a clases sociales altas, una sociedad política excluyente y donde importaba los roles adscritos (vínculos sociales y consanguíneos) para su ingreso y pertenencia.

A diferencia de lo que en 1901 el líder civilista Manuel Candamo dijo en un discurso parlamentario: *“El defecto está en los hombres; (....) No es cuestión de instituciones ni de leyes; las tenemos muy sabias y muy buenas; pero que importa cuando no les damos cumplimiento, cuando por el contrario, alentamos la impunidad y la amparamos.”*

(Basadre, 1968: 133, V.IX); uno de los nudos gordianos de la conflictividad de este periodo deviene de una “semilla” institucional dejada por el gobierno anterior: la reforma electoral y los incentivos que dejó en los actores políticos para lograr la máxima ganancia en la política (llegar a ser gobierno) a partir de la “captura” de la Junta Electoral Nacional.

A pesar de la permanencia y agravamiento de la crisis institucional, hubo permanentes esfuerzos de negociación entre los diversos actores políticos para solucionar o aminorar los conflictos políticos, sin embargo las negociaciones no llegaron a buen término, en parte por el esquema de incentivos que aseguraba la mayor ganancia en las victorias conseguidas en el corto plazo y por la configuración de un solo escenario de polarización, el cual resultaba “vacío” de un centro político que le permitiera un eje de estabilización, tal como se observa en la siguiente figura.

Figura No 4: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de López de Romaña a fines de 1902.



En consecuencia en el clivaje demócrata-civilista se concentró y alineó todo el resto de actores políticos (liberales y cívicos por un lado, y constitucionales y el ejecutivo en el otro extremo) y de la agenda política, todo se reducía a una sola lucha. Así “a fines de 1902 el alineamiento de los partidos era el siguiente: los demócratas estaban coaligados con el partido liberal y la Unión Cívica; mientras que los civilistas tenían vínculos con los constitucionales caceristas o auténticos, cuyo jefe había regresado al país y participaba activamente para impedir que volviera al poder Nicolás de Piérola” (Basadre, 1968: 115; v. XI).

Los resultados concretos de la competencia por el poder durante este gobierno, dejó un saldo de pérdida absoluta para el Partido Demócrata. El desenlace de la mayor parte de los conflictos fue favorable para el Partido Civil, por lo que los demócratas progresivamente pierden la mayoría de congresistas en ambas cámaras, su participación en el gabinete y el control de la Junta Electoral Nacional. Este desplazamiento de los demócratas se debió tanto a una estrategia más hábil y adaptativa de sus adversarios civilistas, como al abstencionismo del líder; cuyo propósito de deslegitimar la acumulación de poder de los civilistas no obtiene resultados inmediatos, y éstos terminan imponiéndose por la vía de los hechos consumados.

Sin embargo, el derrotero de una crisis de gobierno hacia una crisis institucional no terminó en una ruptura del régimen, la élite unificada que surgió de una revolución democratizadora todavía se mantuvo en forma de lazos personales y sociales que permitieron mantener las expectativas de una futura relevancia de poder. Por otro lado, la intensa lucha parlamentaria no penetró en la sociedad civil, que aunque poco participe de una sociedad política excluyente, no hizo eco de algunas voces que empezaron a proclamar medios alternativos no democráticos. Finalmente, los poderes del Estado tampoco avasallaron derechos básicos y libertades de expresión, de reunión y de actividad política. Así, el orden público permaneció inalterable, lo cual de por sí era un apreciado y significativo logro de este gobierno¹⁷⁹.

¹⁷⁹ "El crecimiento económico y hacendario continuaron; se sentía la impresión de que el Perú seguía convalreciendo. Candamo era prestigioso y tenido por honesto y moderado. El país prestó su asentimiento, activo o pasivamente, al proceso de 1903." (Basadre: 1968: 120, V.IX)

3.3. Manuel Candamo y Serapio Calderón (1903-1904): una expectativa trunca.

En la ceremonia de toma de mando del 8 de setiembre de 1903, Candamo reconoció la continuidad que su gobierno representaba respecto de los dos anteriores (Piérola y López de Romaña), elogiando los logros de ambos gobernantes; asimismo señaló su voluntad de superar los conflictos de poderes entre el ejecutivo y el congreso, y de gobernar en acuerdo con la Cámaras, con ductibilidad y espíritu conciliador; además mencionó entre las promesas de su futura gestión, una reforma de la ley electoral (Basadre; 1968: 133-4, v.XI).

Este gesto del Presidente Candamo fue correspondido por los demócratas poco tiempo después. El 23 de octubre se realizó un banquete con representantes de todas las fuerzas políticas, y fueron Carlos Forero y Mariano Comejo quienes hablaron a nombre del Partido Demócrata, agradeciendo la actitud de Candamo en la toma de mando y deseándole buenos augurios para su gobierno. Así, las estrategias de los actores políticos iniciaba una tregua, la cual representaba una nueva oportunidad para un reencuentro de la élite en torno a un modelo político, que pudiera garantizar la distribución del poder entre las fuerzas políticas relevantes y la posibilidad de una alternancia de gobierno.

El nombramiento del nuevo gabinete significó el primer conflicto político, pero esta vez al interior del Partido Civil. Efectivamente. Candamo ofreció la jefatura del Consejo de Ministros a Isaac Alzamora, pero se trataba más bien de un gesto de cortesía a un representante del civilismo histórico; sin embargo, un joven líder recién allegado al civilismo, José Pardo, venía haciendo las gestiones propias para conformar un nuevo gabinete. Lógicamente Alzamora comprendió que la oferta presidencial era una deferencia a su larga trayectoria al servicio del partido y no aceptó, dando así paso a una nueva generación de líderes en la conducción del país, y más tarde del mismo Partido Civil.

José Pardo era hijo del fundador del partido, Manuel Pardo; y en la medida que pertenecía a una nueva generación (a esa fecha tenía 39 años), buscó a sus pares: Augusto

Leguía en la cartera de Hacienda, Manuel Barrios en el ministerio de Fomento, ocupando él mismo la cartera de Relaciones Exteriores. Integraban también el consejo de ministros, dos representantes constitucionales: Francisco Eguiguren en Justicia y el coronel Pedro Muñiz en Guerra y Marina.

Los buenos auspicios del nuevo gobierno pronto se vieron ensombrecidos por la enfermedad del Presidente Candamo. Efectivamente, ya los medios de prensa comentaban el mal estado de salud del Presidente, que se presentaba desde que era candidato y se agravó por el trajín de la campaña. Siguiendo el consejo de sus médicos, el Presidente Candamo realizó un viaje de descanso a la ciudad de Arequipa, en la cual se encontró con el 2do Vicepresidente Serapio Calderón, a quien le encargó temporalmente el mando supremo el 22 de abril de 1904. Candamo falleció dos semanas más tarde, y Calderón devino en Presidente provisional, hasta que se eligiese un nuevo mandatario.

El Presidente Calderón nombró a un nuevo gabinete el 14 de mayo, ya que Pardo, Leguía y Barrios renunciaron para prepararse para las nuevas elecciones presidenciales, en la cual apoyarían la candidatura del primero de ellos. Asumió la jefatura del Consejo de Ministros y la cartera de Hacienda, Alberto Elmore, un personaje que declaró abiertamente su independencia ya que era magistrado del Poder Judicial; mientras tanto ocupaban las carteras de Hacienda y Fomento, dos altos funcionarios de carrera (José Balta y Juan José Reinoso), el resto de gabinete permaneció inalterado. Este gabinete convocó a las elecciones para Presidente y 1er Vicepresidente¹⁸⁰ para el 9 de agosto de ese mismo año.

La candidatura presidencial volvió a suscitar el enfrentamiento entre los dos representantes generacionales del Partido Civil: Isaac Alzamora y José Pardo. En la “vieja guardia” que respaldaba a Alzamora se encontraban los dirigentes históricos del

¹⁸⁰ La convocatoria no incluía al 2do Vicepresidente, por que el cargo lo ocupaba Serapio Calderón hasta setiembre de 1907.

partido: Domingo Almenara, Alejandro Deustua¹⁸¹, Antero Aspíllaga, entre otros. Mientras que Pardo despertó la entusiasta adhesión de los “jóvenes turcos” siendo Augusto Leguía, el principal promotor de esta candidato. Todos ellos formaban parte de la Junta Directiva civilista, el cual fue uno de los escenarios donde se pretendió resolver el impasse suscitado, pero las alternativas que se propusieron: la renuncia de ambos candidatos para apoyar un tercero, o una convención de partidos para elegir un candidato de consenso, no fueron aceptadas por José Pardo, quien calculó que tenía mayoría en esta Junta, y además tomó sus previsiones para que sus recomendados ante las cortes superiores fueran designados como miembros de la Junta Electoral Nacional. Así, nuevamente un mecanismo institucional como era la JEN devenía en un criterio importante para la toma de decisiones de los actores políticos.

Ante todas estas circunstancias Isaac Alzamora retiró su candidatura el 24 de mayo, pero también renunció a la presidencia de la Junta Directiva del partido, igual actitud tomaron Almenara y Aspíllaga. Ellos sabían que la insistencia de su posición implicaría la división de partido y en la medida que los jóvenes del partido “tomaron las riendas” de esa colectividad, no tenía sentido su permanencia en esta Junta Directiva. La candidatura de Pardo fue ratificada por una asamblea nacional de dirigentes departamentales y parlamentarios del partido una semana después; esta asamblea además reemplazó a los renunciantes a la Junta Directiva con partidarios de esta nueva tendencia.

El Partido Constitucional se había mantenido en un compás de espera mientras se decantaran las posiciones en el seno de los civilistas, lo cual una vez decidido se inclinaron por apoyar la candidatura presidencial de Pardo, lo cual ratificaba la alianza civil – constitucional, mediante la cual el candidato a la Iera Vicepresidencia sería el constitucional José Salvador Caveró¹⁸².

¹⁸¹ Dentro de las críticas que le dirige Alejandro Deustua al “delfín” (hijo de Manuel Prado, fundador del partido), además de su reciente ingreso al partido, le conminó que su candidatura encendería los antagonismos con Piérola. Ello demuestra que al interior del partido había una corriente (la de mayor experiencia) que era proclive a una élite nacional unificada.

¹⁸² Se sumó a esta alianza la Unión Cívica de Mariano Valcárcel, aunque para esa fecha eran un actor político muy disminuido; y más que sumar votos al candidato, buscaban incorporarse al nuevo gobierno.

Así, el partido de Cáceres intentaba nuevamente una alianza que la llevaría a formar parte del gobierno; lo cual permite constatar el gran cambio que experimentó como colectividad política, ya que de un grupo político que encarnó un proyecto militarista la década anterior y luego de pasar por siete años de exilio del líder, ahora no sólo estaba reintegrado a la institucionalidad del régimen, sino que formaba nuevamente parte del bloque de poder.

La existencia del partido sin Cáceres, fue la de un grupo de élite que se desvinculó de sus bases provinciales, perdió vitalidad y se produjeron divisiones entre sus dirigentes: Augusto Seminario, los generales César Canevaro y Justiniano Borgoño, el Coronel Pedro Muñiz. El regreso del líder y más tarde la alianza con el civilismo le permitió un reordenamiento institucional y recobrar sus bríos organizativos. Ya en 1904, el partido estaba reorganizado con una nueva Junta Directiva presidida por el General Cáceres. Aunque el status del Partido Constitucional como socio menor implicó cuotas de poder mucho más reducidas que el Partido Civil, tanto en el número de parlamentarios y en la composición del gabinete; sin embargo, a lo largo de la década llegarían a ser el segundo partido más grande en la escena oficial, al menos en cuanto a su representación parlamentaria, desplazando así a los demócratas.

El crecimiento de los constitucionales “a la sombra” de los civilistas fue posible en la medida que el caudillismo militarista de Cáceres se había desvanecido, y el propio general Andrés Cáceres era, en el nuevo siglo, sólo un símbolo de la resistencia contra el invasor extranjero; su carisma se había rutinizado y sus ambiciones se limitaban a lograr ser parte del gobierno y disfrutar de las prebendas del mismo. Cáceres no tuvo sucesores, como tampoco sus pares de la época: Nicolás de Piérola, Augusto Durand, Mariano Valcárcel.

En el discurso del lanzamiento oficial de la candidatura civilista el 12 de junio de 1904, Pardo anunció el carácter pragmático de su programa de gobierno, y aunque resaltó la defensa de la Constitución y el respeto a la libertad electoral y de prensa, hizo énfasis en alejarse de los debates doctrinales de la política y en la importancia de emprender

“reformas del progreso material”, asumiendo como lemas *“Orden y Progreso”* y *“Escuelas y Caminos”*. Nótese que esta tendencia se va a acentuar algunos años más tarde en desmedro de los criterios constitucionales y liberales.

Por otro lado, los dirigentes demócratas y liberales acuerdan lanzar la candidatura de Nicolás de Piérola. En efecto, el 19 de junio se realiza una asamblea de la nueva coalición demócrata liberal que proclamó la nueva fórmula electoral de la oposición: Piérola para la presidencia y Augusto Durand para la 1er vicepresidencia. El discurso de aceptación de Piérola retoma una dura crítica al civilismo y a la situación política del momento:

“Lo mentiroso y lo fingido nos envuelven en atmósfera letal que todo lo enferma e invalida; por que la ficción, el engaño, en la palabra o en la obra que, en lo privado no será jamás sino viveza, constituyen en lo público delito abominable, de incalculable y desastrosas consecuencias.” (Ulloa, 1981: 407). *“La causa de los males públicos está encerrada en una fórmula terrible: instituciones, hombres y cosas, todo ha sido falsificado, no son verdad aquí.”* (Basadre, 1968: 146-7, V-XI, negritas mías). *“Mientras que la elección no tenga otro carácter que el de una farsa, la paz pública continuará no siendo otra cosa que un pasajero descanso entre dos sangrientos combates, no habrá ley ni autoridad respetable ni respetada, no quedará posibilidad siquiera de que la República entre en camino de la salud.”* (Miro Quesada; 1961: 368).

Como se apreciará de estas palabras, el clima político se presentaba sumamente polarizado entre demócratas y civilistas (con sus respectivos aliados). Es así que, Piérola hace un cuestionamiento ya no sólo del oficialismo sino del régimen mismo, no para descalificar a la democracia como tal, sino por que las autoridades se colocaban peligrosamente fuera de la legalidad por el incumplimiento de las reglas de juego. lo cual podía acarrear el desmoronamiento de todo el edificio político. En ese sentido, Piérola hace también un llamado público al Presidente Calderón para que no se parcialice con el candidato civilista.

Este enfrentamiento desembocó en la violencia cuando ambas coaliciones convocaron a sus partidarios para sus respectivas manifestaciones públicas el mismo día: 26 de junio, aunque en diferentes lugares¹⁸³. Los demócratas – liberales en el Palacio de la Exposición en Lima y los civilistas – constitucionales en el Callao; sin embargo, al regreso de los manifestantes civilistas a Lima, se produjo un choque armado entre los militantes de ambo grupos en la calle donde se encontraba el diario “La Prensa”, vocero del Partido Demócrata, producto del cual murió una persona y muchas otras quedaron heridas. Los civilistas velaron el cadáver en el local de su partido para darle al hecho un carácter de denuncia política contra los demócratas; por su parte, el diario “La Prensa” publicó un editorial titulado “ traficantes de cadáveres”, ya que alegó que el muerto era demócrata. El hecho sorprendió mucho a la opinión pública y los corrillos limeños especularon acerca de una guerra civil.

Cabe señalar que la manifestación de los demócratas fue multitudinaria, con una importante presencia de sectores populares y de otros grupos sociales. La concurrencia masiva de los mítines de los demócratas fue una constante en la historia del Partido Demócrata, y fue un indicador de la vinculación y representación que Piérola tuvo con los intereses de las clases populares. Sin embargo, el apoyo popular no era necesariamente una garantía del triunfo electora luego de la reforma electoral de 1896. La concentración que hicieron los civilistas en Lima unos días más tarde, se caracterizó por ser muchísimo menos concurrida y fue un desfile de personajes de la clase alta, lo cual también mostraba la vinculación social que tenía el candidato civilista.

La conflictividad que desató la campaña electoral preocupó al Presidente Calderón, de tal manera que encargó a una comisión presidida por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Espinoza, para que negocie con ambos candidatos su renuncia y pueda buscarse un candidato de transacción. Tal iniciativa no fue acogida por ninguno de los actores relevantes.

¹⁸³ El gobierno preocupado por la virulencia que había adquirido la campaña electoral convoca a los delegados de ambas coaliciones, el demócrata Enrique Bustamante y el civilista Manuel Bernardino Pérez, para llegar a un acuerdo que no se alterase la paz de la ciudad; el cual fue aprobado por ambos representantes y reglamentaba las manifestaciones públicas.

Por su parte, Piérola visitó a Calderón el 22 de julio, para entregarle un memorial donde señalaba que la JEN estaba parcializada, en tanto que la minoría del senado y de diputados no estaba representada en ella, que los miembros de las cortes de justicia habían sido propuestos por su contendor y que esta Junta venían incurriendo en faltas como la aprobación de listas falsas de los mayores contribuyentes y la no inscripción de numerosos ciudadanos. Solicitaba Piérola que se renovase esta Junta, se depurase el registro electoral y se posterguen las elecciones hasta el mes de diciembre, cerraba su documento con una fuerte advertencia: *“Una elección fraudulenta es una convocatoria a la revuelta”*. Calderón devolvió el memorial el 27 de julio sin respuesta, vale decir, no aceptaba los términos del candidato de oposición, no en vano el Presidente formaba parte de uno de los partidos que apoyaban a Pardo.

Los demócratas trasladaron su protesta a las cámaras el 1ero de agosto, donde obviamente su carácter minoritario les hizo perder la moción de aplazamiento de las elecciones en la cámara de diputados por 62 votos contra 43, y en la cámara de senadores por 31 contra 13. Unos días antes a estas votaciones, los demócratas – liberales habían intentado frustrar el quórum la sesión de la cámara de senadores a través de sus inasistencias; sin embargo de los 51 senadores, 40 eran de la alianza civil – constitucional, logrando así realizar la sesión donde eligieron al civilista Rafael Villanueva como presidente y al constitucionalista Manuel Irigoyen para vicepresidente. Similar victoria obtenían los civilistas en la cámara de diputados, donde eligieron al civilista Cesáreo Chacaltana para presidente por 63 votos contra 31. Se ratificaba así el dominio de la alianza civil – constitucional en el Congreso.

Agotado este último recurso, Piérola renunció a su candidatura presidencial mediante un telegrama público en el cual reiteraba su ya conocida posición cuando los pronósticos le eran adversos: *“Esterilizado todo esfuerzo para traer la elección a terreno de ley y de verdad, sin pretexto siquiera que lo excuse, nuestro deber nos prohíbe tomar parte en la hiriente burla de sufragio que va a consumarse, nos haríamos cómplices de ella.*

Abstenerse de votar, no es abstenerse de la acción política.” (Ulloa; 1981: 409, negritas nuestras).

Esta segunda ocasión en la que Piérola renunciaba a participar en las elecciones presidenciales combina varios factores, el primero es la posibilidad de una derrota por el manejo indebido que podían realizar los civilistas que controlaban la JEN; sin embargo, otra razón factible era que su derrota obedeciese a una resultado electoral verídico. El Partido Civil mantenía una organización muy articulada a nivel nacional, y gozaba del prestigio de Manuel Candamo (cuya defunción había dado lugar a numerosos y plurales homenajes a nivel nacional), finalmente José Pardo aún encarnaba el recuerdo de su padre y su juventud era una buena carta de presentación electoral. Por tanto, Piérola tenía el temor de una derrota legítima que evidenciara que su hora política ya había pasado. Prefería así que su marginación se atribuyese a la falta de garantías electorales, y de paso a restar legitimidad al nuevo gobierno civilista.

Lógicamente, el único candidato presidencial (cuarta ocasión que sucedía este caso durante este régimen) triunfó en las elecciones con 96,430 votos, de los 146,990 del total de inscritos. Este resultado fue obtenido por una comisión de cómputo de la Cámara de Senadores, y su presentación en el Congreso dio lugar a un arduo y acalorado debate, en el cual la oposición denunciaba fraude electoral¹⁸⁴ y demandaba la nulidad del proceso. Sin embargo, el dictamen de proclamación de José Pardo como nuevo Presidente de la República fue aprobado por 101 votos contra 50 en el Congreso. Esta vez la correlación parlamentaria favorecía a la alianza oficialista en una proporción de 2 a 1 respecto de la coalición opositora.

Balance Analítico de los gobiernos de Candamo y Calderón.

Una revisión de este periodo nos lleva a las siguientes conclusiones. Si comparamos los dos breves periodos de ambos mandatarios (Manuel Candamo y Serapio Calderón),

¹⁸⁴ Los argumentos de los congresistas demócratas Joaquín Capelo y Aurelio Sonza señalaban las irregularidades en la conformación de la JEN, el cronograma electoral ajustado, adulteración de registros electorales, inflación en el número de votos escrutados, y violencia en algunas mesas electorales.

observaremos claramente que el primero de ellos fue mucho menos conflictivo que el segundo. Podemos distinguir varios hechos circunstanciales para explicar esta diferencia pero una razón de fondo. Entre las primeras tenemos que el gobierno de Candamo no atravesó por una campaña electoral mientras que Calderón sí afrontó la campaña presidencial de 1904; además Candamo se encontraba en sus primeros meses de mandato, lo cual le otorgaba la tregua usual que suscita un nuevo gobierno; por otro lado Candamo ostentaba la legitimidad que le otorga un proceso electoral y el reconocimiento de su posición por los adversarios, mientras que Calderón era un gobernante provisional que implicaba un periodo de reacomodos políticos y de incremento de la incertidumbre.

Sin embargo, la razón de fondo de la mayor estabilidad del gobierno de Candamo radicaba en que los demócratas pudieron volver a tener las expectativas de una futura alternancia de poder, en ía medida que así había sucedido en 1895 cuando Candamo fue presidente de la junta de gobierno de transición previo al mandato de Nicolás de Piérola; asimismo las declaraciones y primeros actos de Candamo retomaron la relación cordial que los civilistas y demócratas habían mantenido durante todo el transcurso del primer gobierno de este régimen, periodo en que Candamo fue jefe del partido y como tal permanente interlocutor de los dirigentes demócratas.

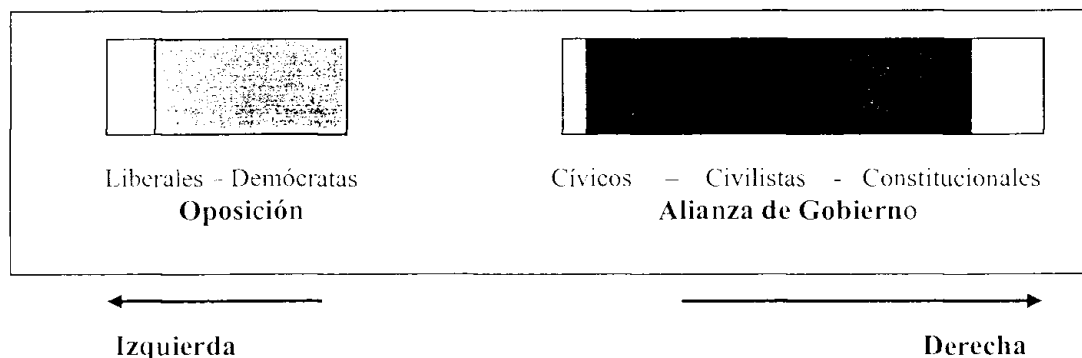
Mientras que el breve lapso del gobierno de Calderón sirvió para que se desvanezca esperanza de que Piérola acceda nuevamente a la presidencia, no sólo por que Calderón no satisfizo las demandas que Piérola le hizo respecto de las elecciones presidenciales, sino además por que emergió un nuevo liderazgo en el partido civil que lo proyectaba para ser gobierno en el largo plazo. Recordemos que estos nuevos dirigentes eran además una joven generación que había desplazado a los viejos cuadros del partido, con quienes los demócratas habían compartido una revolución, la fundación de un nuevo régimen y las negociaciones propias de un gobierno compartido.

Por lo contrario la pugna civil -- demócrata renacía con los recuerdos de la adversidad histórica que había enfrentado encarnizadamente a Manuel Pardo y Nicolás de Piérola. Recordemos que fue durante el gobierno de Pardo que se acusó constitucionalmente a la

gestión ministerial del joven Piérola y que se le impidió acceder a su escaño parlamentario (1872); por su parte, Piérola organizó hasta dos expediciones revolucionarias contra el gobierno civilista de Manuel Pardo. Posteriormente, este antagonismo político se agudizó cuando la familia de Pardo acusó a Nicolás de Piérola de estar vinculado en el asesinato de Manuel Pardo. En fin, más que un conflicto entre civilistas y demócratas renacía la irreconciliable hostilidad entre Pierolistas y Pardistas.

En síntesis, los vínculos históricos que aún mantenían las esperanzas de reconstituir una élite unificada durante el gobierno de Candamo, desaparecieron con la emergencia de una nueva vanguardia civilista bajo la dirección de José Pardo. Ahora, sólo quedaba la lógica competitiva por el poder entre dos partidos, que marcaron la pauta de una polarización a la que se sumaron (una vez más) los partidos liberal y constitucional. Por lo tanto, la correlación de fuerzas en el escenario político de 1904 reproducía una configuración bipolar, muy similar a la que se tenía al término del gobierno de López de Romaña, con excepción de la nueva ubicación de la irrelevante Unión Cívica de Mariano Valcárcel y de la significativa reducción de la representación demócrata en el parlamento, tal como se muestra en la siguiente figura. Esta correlación se mantendría durante el siguiente quinquenio que abarca el siguiente gobierno de José Pardo y el primer periodo del gobierno de Augusto Leguía.

Figura No 5: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno provisional de Calderón en 1904.



3.4. José Pardo y Barreda (1904 – 1908): la tranquilidad que precede a la tormenta.

A diferencia de Manuel Candamo, Pardo no recibió el saludo protocolar ni menos el reconocimiento de la coalición demócrata – liberal. Sin embargo, su gobierno ya no pasó por las tormentas parlamentarias de sus predecesores en la medida que la mayoría parlamentaria era oficialista, sin embargo el conflicto político se abrió por nuevas vías.

Pardo asumió la presidencia el 24 de setiembre a los 40 años, y además de ser hijo de una familia ilustre (su abuelo Felipe Pardo y Aliaga fue uno de los principales dramaturgos peruanos del siglo XIX), era propietario de una importante hacienda agro exportadora y de industrias textiles. Además, Pardo se desempeñó como diplomático en España y luego como catedrático en Derecho Diplomático en la Universidad de San Marcos antes de ser convocado por Candamo para encabezar el gabinete y asumir la cartera de Relaciones Exteriores.

El primer gabinete estuvo conformado por Augusto Leguía en la cartera de Hacienda, e integrado por una nueva generación de políticos civilistas y herederos de una tradición política nacional: Javier Prado en la cartera de Relaciones Exteriores (hijo del ex – presidente Mariano Ignacio Prado), José Balta en el ramo de Fomento (hijo del ex – presidente del mismo nombre), Jorge Polar en el ministerio de Justicia e Instrucción, Eulogio Romero en el ramo de Gobierno, y el constitucionalista coronel Pedro Muñiz en Guerra y Marina.

Este gabinete fue el de más larga duración de todos los gobiernos del presente régimen, puesto que se mantuvo por dos años y 1 mes en funciones. De esta manera, podemos decir este gobierno tuvo una gran estabilidad ministerial, ya que sólo tuvo 3 gabinetes, a diferencia de los ocho que tuvieron los gobiernos de Piérola, López de Romaña y Augusto Leguía. Cabe destacar que esta estabilidad estaba muy vinculada al control mayoritario de las cámaras de la alianza civil – constitucional, aunque ello no implicó que no hubiesen intensos debates sobre temas de legislación laboral, empréstitos del extranjero y proyectos de vialidad ferroviaria, sin embargo casi todas las iniciativas del

ejecutivo fueron aprobadas y no hubo ningún voto de censura contra este primer gabinete pardista. A ello cabe añadir la deposición de la actitud batalladora de los parlamentarios demócratas, que en cada elección de tercio parlamentario vieron reducidas cada vez más su representación en el congreso.

En 1905 se realizaron las elecciones de renovación del tercio parlamentario. De las 32 diputaciones, 22 fueron para los civilistas, 8 para los constitucionales y 2 para la Unión Cívica. En las elecciones para la mesa directiva de la cámara de diputados, se eligió al civilista Antonio Miro Quesada por 69 votos contra 23 del demócrata Aurelio Sousa; mientras que en la cámara de senadores venció el constitucionalista Manuel Irigoyen por 24 votos contra 8 del demócrata Juan Ignacio Elguera.

La abrumadora mayoría civilista en el parlamento incentivó la creación de tendencias al interior del Partido Civilista. Un ala reformista que apoyaba las reformas de legislación social¹⁸⁵ y un ala más conservadora que se oponía a las mismas. Fue el propio Presidente Pardo quien remitió los proyectos de legislación laboral elaborados por el diputado Matías Manzanilla a la legislatura ordinaria de 1905, la cual da inicio a un débil acercamiento entre la élite política y los nuevos movimientos sociales que surgían en la época. El debate en torno a estos proyectos fue largo y sólo se promulgó la ley de accidentes de trabajo el 20 de enero de 1911 durante el siguiente gobierno.

Leguía renuncia a la jefatura del gabinete el 31 de julio de 1907, ya que se disponía a preparar su candidatura presidencial. El entusiasta apoyo que Leguía le había dado a Pardo era correspondido en esta oportunidad, y se convertía aquel en el sucesor de éste. Leguía había desarrollado una intensa labor en el ministerio de hacienda; y durante su gestión durante los gobiernos de Candamo y Pardo había incrementado el ingreso nacional mediante la recaudación y creación de nuevos impuestos (alcohol, tabaco,

¹⁸⁵ El gobierno de Candamo había encargado al parlamentario y jurista José Matías Manzanilla en marzo de 1904, la preparación de proyectos de ley de legislación del trabajo (seguridad laboral, trabajo infantil y femenino, descanso obligatorio, jornada de trabajo, indemnización por accidentes de trabajo, contratos laborales, organización sindical, conciliación y arbitraje, entre otros). En mayo de ese mismo año se había realizado una prolongada huelga de los trabajadores del Callao, que culminó con un enfrentamiento entre la policía y los trabajadores con el resultado de un muerto.

azúcar, fósforos) y los empréstitos del extranjero, que a su vez permitieron el aumento del gasto público en obras de vialidad (ferrocarriles) y en educación. Leguía defendió personalmente su gestión e iniciativas de endeudamiento y obras en el parlamento, sosteniendo la necesidad de invertir capitales productivamente, aunque ello implicase el crecimiento del gasto público. Las iniciativas económicas del Ministro Leguía fueron atacadas no solamente por los parlamentarios demócratas sino también por algunos civilistas y constitucionalistas, pero en su mayor parte fueron aprobadas en ambas cámaras.

El nuevo gabinete de Pardo estuvo presidido por el civilista Agustín Tovar (Gobierno), y compuesto por Germán Schreiber en Hacienda (también civilista), Pedro Muñiz y Delfín Vidalón en Guerra y Fomento respectivamente (ambos constitucionales) y los independientes Solón Polo en Relaciones Exteriores y Carlos Washburn en Justicia e Instrucción. Este gabinete inició sus funciones el 1er de setiembre, pero sólo llegó a durar algo más de dos meses.

Se trató según el diario “El Comercio” de una celada de la oposición, puesto que en el transcurso de un debate donde el ministro Tovar había señalado que “*todas las juntas departamentales marchan al garete*”, la reacción adversa que provocó esta frase en algunos diputados que formaban parte o eran presidentes de dichas juntas, fue aprovechado por un diputado demócrata y presentó una moción que decía “*La Cámara de Diputados, sin aceptar las apreciaciones del Ministros sobre las Juntas Departamentales, pasa a la orden del día*”, la cual fue aprobada sin que nadie hiciese uso de la palabra, lo cual obligó a la renuncia de este ministro. Germán Arenas (1941: 28-9), un testigo presencial de estos hechos, atribuye este desenlace a la inexperiencia de este personaje y al malestar que su falta de habilidad política causaba en la bancada parlamentaria oficialista. En todo caso, la crisis de gabinete y censura parlamentaria significaba menos que un conflicto político, un caso anecdótico.

Dada la poca importancia del affaire Tovar, su renuncia fue el único cambio que hubo en el gabinete (fue reemplazado justamente por el citado testigo Germán Arenas en la

cartera de gobierno), asumiendo la jefatura de gabinete Carlos Washburn el 9 de octubre de 1907. Este fue el tercer y último gabinete de Pardo, teniendo una duración de casi un año. La estabilidad de gobierno de Pardo hizo que el Ejecutivo convocase reiteradamente a congresos extraordinarios (3 en 1904, 2 en 1905 y 1 en 1906), ya que el ejecutivo no estaba expuesto a una crisis ministerial en tanto que la alianza civil – constitucional era mayoritaria en el parlamento.

Por otro lado, el Partido Demócrata que había estado inactivo durante estos años, se reorganizaba para enfrentar las siguientes elecciones presidenciales, para lo cual eligió un nuevo Comité Central en el mes de octubre, presidido por Pedro de Osma y Pardo (primo hermano del Presidente Pardo, aunque su constante adversario en la política) y compuesto por algunos elementos de la vieja guardia pero también por nuevos cuadros, aunque todos ellos fieles seguidores del carisma de su líder. Sin embargo, el Partido presentaba discrepancias internas respecto de la estrategia a seguir, había por un lado una corriente electoral y parlamentaria, y otra más decididamente conspiradora y revolucionaria. Mientras tanto, la actitud de Piérola seguía siendo de abstención y observación, no se pronunciaba a favor de ninguna de estas alternativas.

Un significativo acto demócrata fue la celebración del natalicio del líder el 5 de enero de 1908. Se realizó un banquete donde concurrieron militantes y simpatizantes de los partidos demócrata y liberal que llenaron no solo los salones del Hotel Maury, sino que se ubicaron en las afueras del local. En este acto, Piérola denunció a sus adversarios, y destacó la trayectoria de su partido: *“Lejos, muy lejos de esa atmósfera de mentira sistemada (sic) que está corroyendo las entrañas de la nación, yo siento aquí palpar con el nuestro, el corazón del Perú. (...) El Partido Demócrata no tuvo jamás complacencias, ni disimulaciones con la culpa, jamás llamó bueno a lo que juzgó malo. Sus miembros no se contaminaron nunca con las explotaciones fiscales; ni buscaron, en el envilecimiento del favor, un lugar en el presupuesto”* (Ulloa: 1981: 416.7). A diferencia del pragmatismo de Pardo y de Leguía, Piérola acentuaba el carácter programático y ético de sus partidarios.

El ambiente de 1908, en contraste con el resto del periodo de gobierno de Pardo, era tenso y se rumoreaba la posibilidad de un estallido revolucionario. Frente a estas presunciones de carácter público, algunos líderes civilistas insinuaron al Presidente, la propuesta de una convocatoria a una convención de partidos, para de esta manera se encontrara un candidato que despertase menos encono en el sectores de oposición como sucedía con Leguía. Pardo no aceptó la idea, en tanto que afirmó que ya se había comprometido en apoyar al candidato Leguía¹⁸⁶.

El ambiente de exclusión de los ámbitos oficiales en el que se encontraba el Partido Demócrata se acentuó aún más cuando se eligieron a los representantes de las cámaras para la Junta Electoral Nacional, y se impidió que la minoría demócrata tenga un delegado por senadores y otro por diputados, optando por una votación por partidos, de la cual salieron elegidos un civilista y un constitucional por cada cámara. El copamiento oficialista de la JEN era total.

La alternativa revolucionaria fue tomando forma en los predios demócrata y liberal, ello se confirma en que no postularon la candidatura de Piérola y por tanto no hubo indicios de una oposición en el plano electoral, por el contrario emitieron bonos para subvencionar el complot subversivo, que permitieron la compra de armas y su almacenamiento en diversos lugares estratégicos. La conspiración fue largamente preparada por la coalición demócrata liberal, sin embargo (según versión de Arenas, 1941: 35), ésta se adelantó por el deseo de emulación y preponderancia del líder liberal, Augusto Durand.

En efecto, el 1ero de Mayo un grupo de partidarios de Durand capturaron el tren de la ruta Lima – Chosica, y en el trayecto a la sierra lograron desconectar el servicio eléctrico que abastecía la capital, de igual modo hicieron con las comunicaciones telegráficas. El

¹⁸⁶ "Nicolás de Piérola, caudillo del partido de más acción, había dicho que no alteraría el orden público si el civilismo reemplazaba, como candidato a don Augusto Leguía, que había manifestado tendencias agresivas y arbitrarias, como otro civilistas moderado y respetuoso de la Constitución." (Arenas; 1941: 32-3). En este grupo de civilistas se encontraba el propio Arenas, Antonio Miro Quesada, Manuel Bernardino Pérez y el coronel Ernesto Zapata.

objetivo era tomar las ciudades de Cerro de Pasco y Huánuco, para de allí poder cercar a los valles de Lima. En pleno operativo subversivo, el maquinista del tren logró escapar y dar aviso en Cerro de Pasco, donde rápidamente se organizó una fuerza preventiva, de tal manera que se lograron frustrar los planes subversivos. Así, una vez derrotados algunos pequeños grupos de montoneros que se habían “sembrado” a lo largo de la ruta ferroviaria, el intento revolucionario culminó a la semana de su inicio. Durand pudo escapar al extranjero, pero diversos líderes demócratas y civiles fueron capturados¹⁸⁷ y sometidos a juicio. La participación del líder demócrata no fue demostrada y no se procedió legalmente contra él.

Los parlamentarios que fueron detenidos solicitaron que se les remita a su fuero respectivo, lo cual fue resuelto así por la Corte Suprema, que además ordenó la libertad de todos los procesados que no hubiesen sido capturados con las armas en la mano. La liberación, el 5 de agosto, dio lugar a una nutrida manifestación popular. Es importante destacar que el ejecutivo acató puntualmente lo dispuesto por el Poder Judicial, lo cual demuestra la independencia que aún mantenían los jueces respecto de los otros poderes del Estado. El propio Germán Arenas, Ministro de Gobierno durante el conato revolucionario, manifiesta que no cedió a la presiones del candidato Leguía para censurar o cerrar el diario de oposición “La Prensa”, para no quebrantar la libertad de prensa que había caracterizado al gobierno de Pardo (Arenas; 1941: 39-42).

Las elecciones presidenciales se realizaron sin contratiempos el 25 de mayo, resultando electo como Presidente de la República, el único candidato Augusto Leguía. Lo acompañaron en la fórmula presidencial el civilista Eugenio Larrabure en la 1era Vicepresidencia y el constitucionalista Belisario Sosa en la 2da Vicepresidencia. Leguía obtuvo 133,732 votos, de un total de 184,386 inscritos. La transmisión de mando se

¹⁸⁷ Entre los detenidos tenemos a los liberales Juan Durand (hermano del líder liberal), el viejo guerrillero Mateo Vera, los vicepresidentes del Partido Liberal Augusto Ego Aguirre y Wenceslao Valera; Ricardo Florez, y Fernando Gazzani; por otra parte, los demócratas Pedro de Osma (presidente del comité central), Alberto Ulloa (director del diario La Prensa), Enrique Llosa (el ex senador desaforado por los civilistas en 1903), Isaías de Piérola (hijo del líder demócrata) y los senadores José Carlos Bernalles, Enrique Coronel Zagarra (ex jefe de gabinete), los diputados Lino Cornejo y Alfredo del Valle, entre otros.

realizó el 24 de setiembre de 1908, cumpliéndose así la cuarta transferencia de gobierno entre mandatarios civiles electos.

Un hecho singular pero significativo sucedió el 9 de agosto de ese mismo año en las calles de Lima, Augusto Leguía caminaba hacia su domicilio acompañado por su edecán y el prefecto, cuando se encontró casualmente frente a frente con Isaías de Piérola (hijo mayor de El Califa, quien reaccionó virulentamente y se abalanzó sobre el Presidente electo, el ataque fue detenido por los acompañantes de Leguía y arrestaron al agresor, quien escapó cuando era conducido a la comisaría. Es un evento que muestra el grado de polarización de fuerzas que atravesando el ámbito institucional, trasciende al nivel subjetivo de acendrados odios personales. La potencialidad del conflicto político se abría así hacia múltiples explosiones de violencia que más adelante afectarían los diversos niveles de la convivencia social.

Balance Analítico del Gobierno de Pardo.

Una evaluación de este cuatrienio nos permite sacar algunas conclusiones. En primer lugar, constatamos una baja conflictividad política a lo largo de la mayor parte de este gobierno que se expresa en una mayor permanencia de los gabinetes ministeriales; sin embargo esta estabilidad de gobierno no conlleva necesariamente a una estabilidad del régimen en su conjunto. Por lo contrario, podemos inferir que la poca conflictividad se debe a la exclusión de la oposición de los ámbitos de poder, lo cual incentiva a los demócratas y liberales a asumir estrategias por fuera de los marcos institucionales y democráticos. Observamos así, una opción revolucionaria que va surgiendo al interior del Partido Demócrata que los aparta de las opciones electorales presidenciales y parlamentarias, lo cual continuó repercutiendo en una mayor disminución de sus cuotas de poder institucional.

Por otro lado, un factor que contribuyó a gestar la crisis institucional al término del gobierno de Pardo es el desplazamiento de la élite histórica del partido civil por una nueva generación de dirigentes, de tal modo que no sólo desaparecen los últimos vínculos que tenían ambos partidos, sino que además se reavivan viejos antagonismos entre ambos

partidos: los odios familiares entre el pardismo y el pierolismo. Por lo tanto, se pierde uno de los componentes centrales que permitieron la creación de régimen y que hubiese podido ayudar a la consolidación del mismo: una élite nacional unificada (Higley y Burton, 1989).

Aclaremos la naturaleza de la crisis que atribuimos a este gobierno. Se trata de una crisis latente en la mayor parte de su periodo, y que no se manifiesta progresivamente como en el caso del gobierno de López de Romaña. Es una crisis que se inicia cuando la oposición no reconoce la legitimidad del triunfo electoral de Pardo, continua con una aparente calma que se puede interpretar como estabilidad de gobierno, se desata cuando los demócrata liberales deciden incursionar en una conspiración revolucionaria, y se trunca parcialmente con el fracaso militar de este movimiento subversivo.

Si las expectativas de consolidación democrática al término del gobierno de Piérola no se cumplieron, las expectativas al finalizar el gobierno de Pardo son la de una profundización de la crisis y el derrumbe democrático. ¿Qué otros incentivos surgieron en el siguiente gobierno para que los actores decidan o no seguir incursionando en alternativas autoritarias?, ¿Qué condiciones políticas pudieron evitar este derrotero en el corto plazo? En el momento en que se inicia el gobierno de Leguía, cuando las opciones políticas se abren por fuera de las reglas del juego democrático, las instituciones políticas jugarían un rol decisivo.

3.5. Augusto Leguía (1908 – 1912): al filo de la navaja.

No escapaba a la percepción de Leguía el ambiente conflictivo con el que se inició su gobierno y por ende la necesidad de buscar un consenso político nacional, por lo que sus primeros actos de gobierno serían el nombramiento de un gabinete sin acento partidario¹⁸⁸ y una propuesta de reforma electoral que permitiese un cambio en la composición de la JEN; con lo cual pensaba reintroducir a la oposición en el juego político y así disminuir la tensión predominante.

A diferencia de su antecesor (José Pardo) y de muchos de los miembros de su generación, Leguía no provenía de una casta familiar de prestigio, ni tenía una carrera universitaria. Su dedicación a los negocios desde muy joven le permitió tener una cómoda posición económica y desarrollar vínculos sociales con la clase alta¹⁸⁹. Su participación en política se inició cuando formó parte de los “Amigos de la Paz” en 1894, grupo que buscó llegar a un acuerdo con el General Cáceres para terminar con la guerra civil de aquel entonces. Más adelante, fue destacado y polémico Ministro de Hacienda en los gobiernos de Candamo y Pardo, así como miembro de la Junta Directiva del Partido Civil, y como tal formó parte de la nueva generación de líderes que desplazó a la “vieja guardia” civilista.

La política de conciliación que el Presidente promueve en el primer año de su mandato, se inicia con un proyecto de ley de reforma electoral que el Ministro Rojas presenta a la cámara de diputados en el mes de octubre de 1908, la cual eliminaba los delegados del Poder Judicial para la JEN, siendo constituida por ocho representantes del Congreso y uno por el poder ejecutivo. Asimismo, se estableció la renovación de los registros electorales, así como la inadmisibilidad de las tachas a los funcionarios del sufragio, una vez que fueran declaradas sus aptitudes legales. La aprobación de esta ley, con acuerdo de los partidos, permitió la participación de tres miembros de la oposición en dicha Junta.

¹⁸⁸ Este gabinete estuvo presidido por un pariente cercano del Leguía, Eulogio Romero desde la cartera de hacienda, y conformado por gente independiente como Melitón Porras en Relaciones Exteriores (aunque muy cercano a los demócratas y amigo de Nicolás de Piérola), Miguel Rojas en Gobierno, Juan Manuel Ontaneda en Guerra y Marina, y algunos pocos civilistas como Manuel Vicente Villarán en Justicia y Francisco Alayza y Paz Soldán en Fomento.

¹⁸⁹ El 8 de diciembre de 1890 se casó con Julia Swayne y Mariátegui, nieta del prócer de la independencia Francisco Javier Mariátegui, lo cual le permitió vincularse con una de las familias más prominentes de la “sociedad” limeña.

Otra de las medidas conciliatorias impulsadas por el Gobierno fue la iniciativa de ley para declarar una amnistía para todos aquellos que hayan tomado parte en actos subversivos hasta ese momento (noviembre de 1908); la aprobación parlamentaria de esta amnistía permitió la liberación de todos los que participaron en el conato revolucionario del 1er de mayo de ese mismo año, así como el regreso del jefe de los liberales, Augusto Durand.

El acercamiento que Leguía promueve con los demócratas (con el desacuerdo o al menos el recelo de algunos dirigentes civilistas) pretendió concretizarse en una propuesta electoral novedosa a principios de 1909, que se le denominó la política de las “ubicaciones”; ésta consistió en un reparto de las vacantes en la próxima renovación del tercio parlamentario, de tal manera que hubiesen elecciones pero sin enfrentarse las candidaturas, ya sea presentándose los candidatos oficialistas en determinados lugares y los candidatos de oposición en otros. Hasta ese momento la correlación de fuerzas en el congreso era como sigue: 129 civilistas (77%), 29 constitucionales (17%), 8 demócratas (5%) y 2 liberales (1%). El acuerdo al que llegaron el comité central Demócrata (que nuevamente había incorporado a Guillermo Billinghurst)¹⁹⁰, la junta directiva civilista¹⁹¹, y el Presidente Leguía consistía en que se entregaría a la oposición 31 de las curules disponibles (un poco más de la mitad del número total de representantes a elegirse).

Sin embargo, Piérola se opuso a este acuerdo el 3 de marzo, lo cual provocó la renuncia del comité central y nuevamente el alejamiento partidario de Billinghurst. El Califa adujo que tal reparto era una compra – venta de escaños y que el comité central había sido influido por “*el letal influjo de esta atmósfera envenenada que se llama aquí política*”, asimismo insistió en una postura principista “*de cumplimiento honrado e indeclinable de la ley*”, por lo que esta política de ubicaciones significaba una deplorable invención que

¹⁹⁰ Este acuerdo fue también atacado por el sector radical demócrata, en tanto que esta repartición de escaños parlamentarios no modificaría la correlación existente en el congreso dominado por los civilistas. El director del diario “La Prensa” señalaba a su vez que el problema de fondo consistía en la doctrina excluyente del civilismo, que sólo pretendía favorecer los intereses de las clases privilegiadas (Diario. La Prensa, 1908: 18, 19 y 20 de setiembre, citado en Karno: 1971: 115).

¹⁹¹ Tanto el nombramiento de un gabinete sin predominancia civilista como la política de las ubicaciones resintió al sector pardista del civilismo, que no estaba de acuerdo con otorgar concesiones a los pierolistas.

suponía el olvido de los dogmas del credo demócrata (Ulloa; 1981: 426-7). Piérola insistió en su política de abstención, dado que en esos momentos las elecciones eran una farsa, y que si se respetasen las leyes electorales, los demócratas volverían a obtener la mayoría de los votos (Karno; 1971: 117). La renuncia de la dirección del partido obligó a Piérola a asumir personalmente el comando de su agrupación, lo cual no había sucedido hacia varios años.

El resultado de las elecciones de mayo dieron nuevamente una amplia mayoría de representantes para la alianza oficialista y una mínima cuota para la oposición (44 versus 6 respectivamente). Una explicación de los desentendimientos al interior de los demócratas y de los resultados adversos que arrinconaba cada vez más al partido en la escena oficial, está relacionado con las corrientes internas en el Partido Demócrata que ya habíamos anotamos anteriormente: una corriente institucional parlamentaria, una postura revolucionaria y la posición de abstencionismo del líder. Para las dos últimas tendencias, la política de las ubicaciones y los acuerdos que se pudieron haber llegado con Leguía, implicaba para Piérola un involucramiento con los civilistas en una posición de minoría y un atentando contra los principios constitucionales que la revolución de 1895 había restaurado (sobre todo los referidos a la libertad del sufragio o “la verdad del voto” como se usaba en aquel entonces).

El desistimiento de una estrategia de entendimiento con el gobierno de Leguía y con el civilismo dio paso nuevamente a la vía subversiva¹⁹². El 29 de mayo, 36 hombres armados asaltaron el Palacio de Gobierno y capturaron al Presidente Leguía en sus oficinas. El comando de revolucionarios lo dirigía Carlos de Piérola (quien había sido presidente de la cámara de diputados, presidente de la JEN, y formaba parte del comité central demócrata), los dos hijos de Piérola, Isaías y Amadeo y lo integraban Ernesto Llosa, el guerrillero liberal Orestes Ferro, el senador José Carlos Bernal, entre otros. Al preguntar el sorprendido Leguía de que se trataba todo esto, obtuvo la siguiente

¹⁹² Ya el diario *El Comercio* había advertido desde el inicio del gobierno de Leguía, como los intentos conciliadores no eran correspondidos por el Partido Demócrata (*El Comercio*; 1908: I, 26 de setiembre). Por otro lado, el diario demócrata “*La Prensa*” advertía de una inminente revolución, ya que Leguía carecía tanto del apoyo popular como de su propio partido (*La Prensa*; 1909: I, 24 de mayo).

respuesta: “Significa que ha dejado Ud. de ser presidente de la república, repuso el señor Isaías de Piérola, registrándole rápidamente y extrayéndole del bolsillo del pantalón un enorme revólver. Don Isaías de Piérola tomó entonces de un brazo al señor Leguía, diciéndole: - Es Ud. mi prisionero.” (Paz- Soldán, 1914: 6).

El objetivo del grupo era dar un golpe rápido y sorpresivo, y lograr que Leguía firme su renuncia y derive el mando militar a Isaías de Piérola, de tal manera de poder enviar este documento al Jefe del Estado Mayor, el General Clement, (un oficial francés que había llegado durante el mandato de Piérola para la reorganización de las fuerzas del orden), y de esa manera neutralizar al Ejército. Sin embargo, Leguía se negó a firmar dicho documento desde el primer momento. Entonces, los conjurados sacaron al Presidente a las calles, esperando despertar la adhesión ciudadana y después de un periplo por varias calles del centro terminaron en la Plaza de la Inquisición (al frente del Congreso) donde nuevamente lo conminaron a firmar su renuncia, y el Presidente reiteró su famosa frase: “**No firmo**”. Es significativo señalar que durante todo este recorrido, donde Leguía soportó estoicamente insultos e increpaciones de los insurrectos y de algunos transeúntes, ni la policía ni el ejército intervinieron para detener a los complotados y sus rehenes (los Ministros Villarán y Rojas acompañaron al Presidente en este trayecto).

Poco después un piquete de caballería rescató al Presidente y al Ministro Villarán, quienes resultaron sorprendentemente ilesos luego de una arriesgada operación militar¹⁹³. Cuando la situación se hubo normalizado, se desató una enérgica represión y fueron

¹⁹³ “Nuevamente el subteniente Gómez salió entonces al frente de sus veinticinco hombres, que desfilaron esta vez a pie, llegó a la plaza de la Inquisición, y sin hacer caso a los pañuelos blancos que enarbolaban los que rodeaban al presidente de la república, (...) ordenó tranquilo.

- Apunten! - Fuego!

A la descarga cerrada cayeron la mayor parte de los que rodeaban al presidente Leguía y este mismo y el Ministro Villarán quedaron por el suelo, arrastrados por el peso de los que a su lado resultaron muertos y heridos. (...)

Al acercarse, revólver en mano, el alférez Gómez acompañado de varios soldados al monumento de Bolívar, uno de los actores de esta tragedia, que yacía en tierra, se levantó empapado en sangre y al ver que los soldados le apuntaban, gritó con energía:

- Soy el presidente de la república.

(...) El alférez le tendió la mano, y el presidente al estrechársela le pregunto quién era:

- Soy el alférez Gómez del número 5.

- Gracias alférez. Es usted Capitán. (Paz --Soldán; 1914: 34).

apresados numerosas personas vinculadas a los partidos demócrata y liberal; además el vocero demócrata “La Prensa” fue asaltado por una turba que destruyó el local y las maquinarias; la persecución de los rebeldes ocasionó muchas muertes, dado que la tropa disparaba a cualquier grupo de personas reunidas que les pareciese sospechosa. Se pretendió detener a Nicolás e Piérola, pero no fue hallado y se mantuvo en la clandestinidad por más de tres años¹⁹⁴. Los historiadores no tienen la certeza de si estuvo o no enterado del golpe, aun cuando no había participado directamente de éste.

Basadre (1968: 63, v.XII) reseña que las críticas de la época calificaron a este incidente como “*un vejamen delictuoso e inmerecido*” contra un presidente que recién iniciaba su periodo de gobierno y que durante los primeros meses había demostrado una intención de conciliación a través de determinadas políticas dirigidas precisamente a favorecer a la oposición; sin embargo, el historiador argumenta hipotéticamente que los sublevados hubiesen respondido a estas críticas señalando que “*se sublevaron no tanto contra un hombre sino contra un sistema que había cerrado al partido demócrata, a través de muchos años, el paso al poder y que lo hicieron, no mediante la compra de voluntades ajenas u otros procedimientos mañosos, sino cara a cara al peligro en un despliegue de energía, audacia y valor estupendos.*”

El plan de ataque parece haber sido cuidadosamente planificado, sin embargo resulta poco conocido las fases ulteriores del plan en caso de haberse logrado la renuncia del presidente; ya que a primera vista ello no les hubiera garantizado la legitimidad o legalidad de la acción, en tanto que el 1er Vicepresidente Larrabure hubiese podido pretender reemplazar al mandatario tal como la mandaba la Constitución. Por otro lado, es difícil suponer que la toma del palacio de gobierno y algunos otros locales públicos estratégicos (la prefectura, el local del congreso) les aseguraban que iban a tener la obediencia de las fuerzas armadas; en todo caso era imposible suponer que este pequeño grupo de rebeldes hayan tenido la intención de enfrentarse militarmente al ejército.

¹⁹⁴ Entre los cientos de detenidos por la policía estuvieron: los periodistas Alberto Ulloa, Luis Fernan Cisneros, Carlos Guzmán y Vera, Leonidas Yerovi, así como gran parte de la dirigencia de los comités centrales de los partidos demócrata y liberal, resulta anecdótico señalar que Enrique Llosa, Orestes Ferro, y Amadeo de Piérola lograron fugar de prisión el 18 de febrero de 1910.

Karno (1971: 121-2) propone que el plan de los revolucionarios habría contado con el apoyo de los militares, de tal manera que habrían derrocado al gobierno, en caso de que hubiesen contado con la renuncia firmada por el presidente. Ello puede explicar la indiferencia y la acción tardía con la que intervinieron para rescatar al presidente. Contado con este apoyo, los revolucionarios pudieron asumir el riesgo de una acción que combinase aspectos políticos (renuncia del presidente) sociales (recibir la adhesión popular) y militares (el apoyo del ejército). Sin embargo, la negativa del presidente a firmar su renuncia habría hecho desistir a los militares de continuar apoyando el complot subversivo.

Dos consecuencias políticas inmediatas se derivaron del fracaso de este estallido revolucionario, el primero es la popularidad que alcanzó Leguía luego de esta experiencia, ya que demostró valor y carácter, en tanto que estando su vida amenazada para lograr que firme su renuncia, no se amilanó ante este peligro; y el segundo efecto, es el término de la política conciliadora del presidente y el inicio de un periodo de represión y duros ataques contra la oposición. El 8 de junio, Leguía nombra un nuevo gabinete con estas nuevas orientaciones, presidido por el experimentado político Rafael Villanueva en la cartera de gobierno, e integrado por Melitón Porras (Relaciones Exteriores), los civilistas Agustín de la Torre Gonzales (Hacienda) y Ernesto Zapata (Guerra y Marina), el independiente Matías León (Justicia) y el constitucional David Matto (Fomento).

Un detalle que caracteriza el estilo de la gestión del ministro Villanueva, es la respuesta que da frente a las interpelaciones que recibe del senador demócrata Joaquín Capelo respecto de detenciones, cambios de lugar de residencia para el enjuiciamiento de presos, incomunicaciones indefinidas, aislamientos y vejámenes dentro de las prisiones; el Ministro respondió: *“prima la conservación del orden sobre todas las leyes y la Constitución misma, por que la Constitución no puede conservarse sino a la sombra del orden público.”* (Ulloa; 1981: 436). Otro de las violaciones del orden jurídico en aquel momento es el desconocimiento de la elección de Augusto Durand como diputado por

Huánuco, cuando ya había sido proclamado por la Junta Electoral Departamental respectiva.

A pesar del distanciamiento que había empezado a surgir entre el Presidente Leguía y una parte importante de los dirigentes del Partido Civil, tanto por la política de conciliación inicial que el ejecutivo había promovido, como por la forma inconsulta que Leguía había procedido para nombrar los gabinetes, la bancada civilista dio un voto de confianza al Ministro Villanueva cuando fue interpelado por los representantes demócratas a causa de los excesos represivos de su gestión.

Sin embargo, la discrepancia entre el legislativo (con mayoría civilista) y el ejecutivo siguió incrementándose a través del tradicional recurso empleado anteriormente por los demócratas y ahora por los civilistas disconformes con Leguía: el voto de censura. En efecto, el ministro La Torre Gonzáles renunció el 26 de octubre de 1909 por un voto de extrañeza que el congreso aprueba, su sucesor Carlos Forero (constitucionalista) tampoco duró mucho en el cargo y renunció el 1er de febrero del 1910 por críticas a su gestión (aunque se retiró un voto de censura en su contra) y dado que no contaba con el apoyo civilista. El canciller Porras presentó también su renuncia por la misma razón, pero ésta no fue aceptada por el Presidente Leguía dado el difícil contexto internacional por el que se atravesaba en ese momento (las tensiones internacionales con los países vecinos – Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile- eran muy agudas por conflictos fronterizos).

La inestabilidad de gobierno se hace nuevamente presente a partir de 1910, siendo una de sus manifestaciones la precariedad de los gabinetes y el enfrentamiento entre poderes. Leguía decide un cambio de política a partir de este año, para lo cual pide la renuncia del gabinete Villanueva (5 de marzo de 1910) y convoca a Carlos Álvarez Calderón para que forme un nuevo gabinete que cuente con mayor apoyo parlamentario. Álvarez propuso un programa conciliador que contemplaba el aceleramiento de juicios de los comprometidos en el golpe de estado del 29 de mayo y la liberación de los líderes opositores que no hayan estado directamente comprometidos, permitir la reapertura del diario “La Prensa”, y el término de las persecuciones y hostigamientos; además propuso integrar al ala

pardista al gabinete (convocando a Juan Pardo y Barreda) aunque manteniendo al canciller Porras (a insistencia de Leguía y a pesar de la hostilidad que le tenían los civilistas por sus vínculos con Piérola). Una larga negociación y los obstáculos que presentaron los civilistas terminaron por hacer desistir a Álvarez. El mismo esfuerzo hizo el presidente del Partido Civil, Antero Aspíllaga, sin poder conformar un gabinete.

Las dificultades para constituir un gabinete demostraban la carencia de apoyo que Leguía tenía de su propio partido. Ante tales circunstancias, Leguía envió una carta de renuncia a de su cargo como Presidente al Congreso el 13 de marzo; una apuesta arriesgada que pretendía enfrentar a los civilistas a una crisis de régimen, que podía desembocar en una guerra civil. El efecto fue inmediato, Javier Prado, vicepresidente del partido, se ofrece para conformar un gabinete y asumir el ministerio de Gobierno, recibiendo el apoyo de los civilistas. La composición ministerial es predominantemente partidaria: los civilistas Germán Schreiber (Hacienda), Julio Ego-Aguirre (Fomento), Antonio Flores (Justicia), el constitucionalista general Pedro Muñiz (Guerra y Marina), aunque aún manteniendo a Porras en Relaciones Exteriores (a insistencia de Leguía) a pesar de las discrepancias en política internacional que tenía con Javier Prado.

La política del gabinete Pardo siguió los lineamientos que había trazado Álvarez Calderón: libertad de presos políticos no involucrados directamente en el atentado de mayo, cese de hostilidades a los opositores, reapertura del diario "La Prensa". Durante los meses de la gestión de Prado no correspondía el funcionamiento de las cámaras; sin embargo, resurgió la tensión internacional y estuvo a punto de desembocar en una guerra con el Ecuador. El canciller Porras accedió a someter las divergencias en cuanto a los límites fronterizos a una comisión de países mediadores (Estados Unidos, Brasil y Argentina), lo cual contradijo la posición de Javier Prado.

Este desacuerdo entre el canciller (que contaba con el apoyo del presidente) y el jefe de gabinete propició la renuncia del último el 25 de julio¹⁹⁵, quien no estuvo dispuesto a asumir la defensa de una política exterior ante el parlamento, el cual empezaba la legislatura ordinaria que correspondía a 1910. Un desacuerdo tan específico no obliga al resto de ministros a renunciar, de tal manera que Leguía hace el reemplazo en la cartera de gobierno (José Manuel García) y nombra como jefe de gabinete al ministro Schreiber. Los cambios en el gabinete realizados no contaron con la consulta ni aprobación del civilismo. Una nueva tormenta parlamentaria aguardaba a este gabinete.

En el mes de agosto, el debate parlamentario se centró en la política exterior que defendía el canciller Porras y las críticas del civilismo fueron expuestas por el diputado José Matías Manzanilla. Las consecuencias de debate no resultaron finalmente en un voto de censura contra el Ministro Porras, el cual resultaba inoportuno hasta la culminación de la comisión internacional mediadora; de esta manera el ejecutivo se adjudicó esta primera victoria¹⁹⁶.

Se discute entonces una propuesta de la bancada civilista, promovida por el sector pardista, para postergar la renovación del tercio parlamentario prevista para 1911. Se fundamentó esta moción señalando que desde la muerte del Presidente Candamo en 1904, no coincidían las elecciones parlamentarias con las presidenciales, de tal manera que se aproximaban tres elecciones consecutivas; tercio parlamentario en 1911, presidenciales en 1912, y renovación de otro tercio en 1913, lo cual contribuía a generar desórdenes públicos. Se planteaba reunir las todas en las elecciones de 1912.

Las intenciones políticas de esta propuesta era evitar que Leguía pudiese aprovechar las ventajas del gobierno para obtener una cuota de la representación parlamentaria en 1911. Esta moción de prórroga de las elecciones parlamentarias fue aprobada por la Cámara de

¹⁹⁵ El general Muñiz, ministro de guerra y marina, también estuvo en desacuerdo con los lineamientos de política internacional del canciller, ya que Muñiz favorecía una actitud más beligerante. Renuncia el 22 de junio de 1910.

¹⁹⁶ A raíz de otro incidente fronterizo con Bolivia el 8 de diciembre de 1910, en el que resultaron muertos varios militares peruanos, los civilistas y los constitucionales no leguístas, los liberales y los demócratas lograron hacer caer al Ministro Porras.

Diputados el 1er de setiembre¹⁹⁷; sin embargo recibió prontamente el rechazo de la opinión pública, que interpretó esta iniciativa como un intento de prolongar los beneficios de aquellos que no tenían esperanzas de ser reelegidos. Ante esta situación¹⁹⁸, la Junta Directiva del Partido Civil da marcha atrás en la propuesta y ordena a los senadores afines a no aprobar esta moción. Nuevamente, Leguía obtiene un segundo triunfo en esta agitada legislatura.

La tercera batalla parlamentaria se dio casi inmediatamente. Leguía se había caracterizado desde que era ministro de hacienda por sus polémicas sus iniciativas ferroviarias que, de una manera u otra, se habían aprobado y llevado a cabo. Esta vez se trataba del proyecto del gobierno para la construcción del ferrocarril a la selva del Ucayali y el correspondiente préstamo por 20 millones de libras esterlinas, que había sido aprobado en 1907. El ministro de Fomento, Julio Ego – Aguirre, solicitaba la aprobación de las modificaciones que el Ejecutivo había realizado por carencia de recursos fiscales. En el debate destacaron las intervenciones del ala pardista (José Matías Manzanilla, Luis Miro Quesada, Francisco Tudela y Varela) que ya se perfilaba como nítida oposición al gobierno, calificando al proyecto de “*peligrosa aventura*” y un exceso de deuda sobre el país, sobretudo en un periodo de inestabilidad internacional donde se hacia necesario la compra de armamento. No se aprobó en esta ocasión la autorización al ejecutivo sino sólo tres modificaciones específicas al contrato original con la empresa contratista¹⁹⁹, el tema quedó pendiente.

¹⁹⁷ “Como inmediata consecuencia de la aprobación, se produjo la separación del partido civil, de los diputados Roberto Leguía y Pedro Larrañaga. (...) Al mismo tiempo una gran ola de indignación popular levantábase condenando la prórroga.” (Capuñay, 1951: 84). Estas separaciones van conformando el grupo parlamentario leguista.

¹⁹⁸ El ambiente conflictivo en la política suele trasladarse al plano personal, como hemos visto anteriormente en el caso del ataque físico de Isaías de Piérola a Leguía; esta vez se suscita en este turbulento periodo dos duelos, uno de ellos entre el periodista demócrata Alberto Ulloa y el diputado leguista Pedro Larrañaga. El otro se da entre el constitucionalista Arturo Osorio y el diputado liberal Arturo Urquiza. Ninguno de ellos tuvo un desenlace de muerte.

¹⁹⁹ La mayoría parlamentaria leguista aprobó finalmente este proyecto el 8 de marzo de 1912. La empresa encargada Me Clune cedió sus derechos a la Amazon Pacific Railway. Leguía en su mensaje final anunció que las obras empezaron un día antes del término de su mandato. El nuevo gobierno no mantuvo interés en el proyecto, y Leguía no retomó dicho proyecto en su segundo gobierno.

A raíz de las modificaciones a la ley sobre la composición de la JEN, se llevó a cabo el 19 de octubre una sesión plenaria del congreso para elegir sus representantes a dicha Junta. Los delegados elegidos son: los civilistas José Matías Manzanilla, Juan Pardo y Barreda, los constitucionales Pedro Muñiz y Belisario Sosa, y el liberal Torres Balcázar (todos ellos forman parte del grupo de oposición a Leguía); y Juan de Dios Salazar, Arturo Rubio y Ricardo Salcedo (integrando la bancada leguista). A este grupo se sumó el delegado del poder ejecutivo, Lizardo Alzamora. La mayoría de la JEN correspondía esta vez a la oposición contra Leguía, la cual elige como presidente de la junta a Juan Pardo y Barreda.

Las pugnas en torno al apoyo u oposición a Leguía también atravesaron al Partido Constitucional. El sector que se alinea con los civilistas pardistas estuvo patrocinada por el entonces presidente del partido, Pedro Muñiz, mientras que en el sector oficialista se encontraba el propio general Cáceres. Sin embargo, la pugna política no llegó a fracturar al partido, ya que Muñiz nunca intentó disputarle el liderazgo al viejo jerarca. Por lo demás, el General Cáceres no tenía como residencia habitual el Perú, ya que era embajador plenipotenciario en Alemania y Francia.

El gabinete Schereiber renunció el 21 de octubre de 1910 y Leguía decidió prescindir esta vez de cualquier apoyo civilista. El nuevo gabinete, así como los siguientes, puede asumir el rótulo de “leguista; ya que a falta de apoyos partidarios se atuvo a los familiares y muy allegados; así el nuevo consejo de ministros tuvo dos parientes cercanos del presidente: Enrique Basadre²⁰⁰ (gobierno) y Enrique Oyanguren (hacienda); el gabinete fue presidido por el constitucional José Salvador Cavero (Justicia e Instrucción), quien asumió dicha responsabilidad sin apoyo de su partido; y completaron el equipo ministerial el canciller Porras, el coronel José Ramón Pizarro en Guerra y Marina, y Julio Ego Aguirre en Fomento. Ninguno de estos ministros era parlamentario.

²⁰⁰ Un retrato del ambiente político de aquel entonces se refleja en las siguientes declaraciones del Ministro Basadre el 26 de diciembre de 1910: “*Cuando hubo un momento en que peligraba la libertad ciudadana y no encontraba un hombre que quisiera ser su Ministro de Gobierno, yo afronté la situación y lo hice por el señor Leguía...*” (Basadre; 1968, v. XII).

A propósito de un incidente fronterizo con Bolivia, en el cual renuncia el canciller Porras (lo sucede en el cargo Germán Leguía y Martínez, primo hermano del presidente); hubo también un cambio en la jefatura del consejo de ministros; y reemplaza a Cavero el ministro Basadre, no hubieron otros cambios además del nuevo canciller y de Antonio Flores en la cartera de Justicia. Sin embargo, un factor extra añade un nuevo elemento de conflictividad política hacia fines de 1910: la aparición de montoneras demócratas en diversas partes del país.

Efectivamente, el Partido Demócrata deja de realizar una labor de oposición en el parlamento como prioridad (en el cual sólo mantiene una reducida presencia) y sectores radicales del partido se empeñan en campañas subversivas en el interior del país. Así, se levantaron grupos armados dirigidos Orestes Ferro en el norteño departamento de Lambayeque (quien también participó en las insurrecciones del lero de mayo de 1908 y del 29 de mayo de 1909); mientras en el sur se encontraba el diputado demócrata David Samanez Ocampo²⁰¹ comandando una montonera, a su vez una guerrilla al mando del ex diputado demócrata Juan Pablo Tresierra llegó a tomar por las armas la ciudad de Abancay, capital del departamento Apurímac. Sin embargo, la superioridad militar del ejército (ametralladoras, cañones de montaña) logró abatir muy pronto estos brotes revolucionarios.

La cumbre de conflictividad política alcanzó su cenit en 1911, hasta el punto que este régimen democrático se encontró al borde del quiebre institucional. Como ya devino en una tendencia casi desde inicios del régimen, el eje de la conflictividad estuvo estrechamente vinculado con la JEN y las consiguientes elecciones. El control parlamentario del organismo regulador electoral volvía a presentar el riesgo de las dualidades, dadas las características de la última reforma electoral de 1909 que otorgó mayores prerrogativas al congreso para conformar la JEN.

²⁰¹ Samanez Ocampo era diputado cuando fue apresado en 1910 al mando de un grupo de hombres armados que se disponían a tomar por asalto el cuartel y la prefectura en el Cuzco. El gobierno solicitó entonces a la Cámara de Diputados su desafuero, sin embargo no sólo no se atendió dicho pedido sino que la Cámara respectiva ordenó su liberación para que se hiciese presente ante el Congreso para responder a los cargos. Una vez libre, Samanez Ocampo se dirigió a Apurímac y organizó un nuevo contingente guerrillero. Recién la Cámara de Diputados permitió su desafuero y enjuiciamiento a partir de esta nueva evidencia.

En efecto, el Presidente Leguía tomó en cuenta todas estas desventajas y conocedor de que si las elecciones se llevasen a cabo con esta Junta, la oposición (que ahora se presentaba aliada y mayoritaria en ambas cámaras), incrementaría su predominio parlamentario y radicalizaría su labor de obstrucción en el congreso, preparó su propia ofensiva para lograr el control de la mayoría de las cámaras. Por tales razones, Leguía expidió un decreto de clausura de la JEN el 18 de mayo de 1911, atribuyéndole cargos de haberse excedido en sus atribuciones. Las elecciones quedarían a cargo de los organismos departamentales y provinciales ya constituidos y Leguía nombró como representante legal de la junta, a un seguidor suyo: Juan de Dios Salazar y Oyarzábal.

Este acto causó lógicamente una gran protesta de todos los partidos. El propio Nicolás de Piérola emitió una carta pública condenando el hecho y diferenciándolo con aquel similar que él mismo había protagonizado el 24 de abril de 1899. Decía el líder demócrata que en aquella ocasión se pretendió garantizar las elecciones para la fecha prevista y por tanto para la transferencia de poder en el momento que la Constitución lo mandaba, de tal modo que aquel cierre de la Junta no había sido en provecho personal, sino para asegurar el cumplimiento de la ley; a diferencia de la clausura de la Junta por Leguía, que sí obedecía a *“fabricar un congreso que sancionara los desmanes del Presidente Leguía y le ayudase a imponer a un sucesor”* (Basadre, 1968: 115, v.XII). Sin embargo, más allá de las distintas motivaciones que pudieron haber tenido dichas clausuras de la JEN, ambos actos eran anticonstitucionales y el primero sirvió como precedente del último.

Las elecciones se llevaron a cabo entre el 25 y 28 de mayo, pero de manera irregular. Algunos candidatos de la oposición o independientes renunciaron por falta de garantías, muchas de las juntas departamentales fueron sometidas a dura presión por parte de las autoridades del gobierno (prefectos, sub-prefectos, policía), hubo mucho ausentismo y finalmente resultaron muchas candidaturas duales. Correspondía a las cámaras la calificación final y ello hacía suponer una ventaja para la oposición.

La oposición (civilistas pardistas, constitucionales muñizistas, liberales) se disponía a presentar un frente común contra los actos anticonstitucionales del gobierno, para ello se reunieron el 8 de julio para conformar una alianza que fue conocida como el “Bloque”²⁰², y publicaron un documento donde se comprometían a “*defender y conservar la legalidad*” (Capuñay; 1951: 87). Esta alianza contaba con mayoría en ambas cámaras y aparentemente con los presidentes de sus juntas directivas: Antonio Miro Quesada en diputados y Antero Aspíllaga en Senadores. Algunos autores (Karno; 1971:166; Sánchez; 1935:37; Capuñay; 1951:88) indican que el civilismo pardista con apoyo de sus aliados preparaba un golpe de estado al inicio de la legislatura de 1911, mediante la declaratoria de la vacancia de la presidencia por el parlamento, de tal manera que asumiría el mando el presidente de la cámara de diputados, Antonio Miro Quesada.

La instalación de las juntas preparatorias de la legislatura ordinaria empezó el 13 de julio. Previa a este evento, el gobierno se había preparado para lograr imponer el resultado de las elecciones. Así, los congresistas del bloque Santiago Parodi, Daniel Huaco, José Antonio Cáceres y José Armaza fueron retenidos en el barco que llegaban bajo el pretexto de una cuarentena por razones de salubridad. Por otra parte, en el local donde se reunía el congreso, turbas armadas trataron de impedir la entrada de diputados y senadores de la oposición y luego incluso atacaron a los congresistas al interior del recinto parlamentario, todo ello ocurría ante la ausencia de la policía, y además previamente el Ministro de Guerra se había negado a enviar custodios del orden para resguardar este acto de instalación. Resultaba evidente el grado de planificación de estos actos para evitar que se constituya el congreso bajo la batuta de la oposición²⁰³.

²⁰² Los demócratas no integraron oficialmente esta alianza ya que su prioridad política no era tanto la lucha parlamentaria, sino se debatían entre el abstencionismo principista del líder y las acciones armadas. Sin embargo, el diputado Aurelio Sonza sí se adhirió a este grupo, mientras que el resto de parlamentarios demócratas apoyaban tácitamente las iniciativas políticas de esta alianza.

²⁰³ “El civilismo pardista se dispuso a cerrar la entrada a los candidatos de gobierno. El gobierno civilista de Leguía se resolvió a imponer a sus allegados. Para ello, la tarde 13 de julio hubo extraordinario despliegue de fuerzas. El Ministro de Gobierno en persona, don Enrique Basadre, dirigía las maniobras desde un coche cerca de la Plaza de la Inquisición. Una turba de gente de policía secreta y elementos populares frustró los empeños de Miró Quesada y del civilismo llamado entonces “bloquista”...” (Sánchez; 1937: 37).

En la medida que no se pudo llevar a cabo dicha instalación, los congresistas oficialistas prepararon su propia plenaria al día siguiente (previamente la policía no había dejado entrar a los parlamentarios del bloque); de esta manera constituyeron la legislatura ordinaria sin contar con el quórum reglamentario, y a continuación procedieron a incorporar al nuevo tercio exclusivamente leguista. Mientras tanto en la Cámara de Senadores, el presidente Antero Aspíllaga se inclinó en último momento a favor del gobierno (previamente Leguía había alentado sus aspiraciones presidenciales y prometido su apoyo para el lanzamiento de su candidatura), e incorporó a los senadores oficialistas, así como validó la clausura de la JEN²⁰⁴. Esta maniobra le permitió a Leguía lograr una mayoría en ambas cámaras del congreso durante el resto de tiempo de su periodo presidencial. Más tarde, el grupo de diputados oficialistas que ya “se habían constituido como mayoría” eligió como nuevo presidente de su cámara a Roberto Leguía, hermano del presidente.

Un grupo de diputados envió una carta al presidente de su cámara, Antonio Miro Quesada, denunciando “*el atentado de lesa constitucionalidad de intentar la dualización del Congreso colocando frente a las juntas preparatorias debidamente instaladas, un grupo parlamentario que se presu a servir de instrumento de la empresa para demoler las instituciones del país.(...) Este escándalo constituye episodio sin precedente en nuestra historia: socava la legalidad de las instituciones y tiene la misma trascendencia política y constitucional que impedir el funcionamiento del Congreso o disolverlo*” (Basadre, 1968: 117, v.XII). Palabras tan enérgicas de la oposición indujeron otras iniciativas más radicales contra Leguía: ponerse bajo las órdenes del General Muñiz, jefe del Partido Constitucional, para defender la Constitución con las armas. En aquel momento los actores políticos se encontraban “*al filo de la navaja*” entre el régimen democrático y una nueva revolución.

Mientras tanto en el seno de la junta directiva del Partido Civil (que agrupaba a ambos sectores, aunque con predominancia pardista) se evaluaba la posición a tomar por esa

²⁰⁴ “Una hora después, se presentaba su presidente, don Antero Aspíllaga, ante el Mandatario para expresarle la entera confianza y la solidaridad del primer Poder de la Nación” (Capuñay; 1951: 89).

colectividad política. El temor y la cautela primó en la deliberación de los líderes civilistas: acordaron retornar a las cámaras, había muchos intereses en juego en un clima político explosivo, por un lado los pierolistas en las trincheras, por el otro Leguía en pleno control de la maquinaria represiva del Estado; una guerra civil prolongada sólo los colocaría en un escenario de fuegos entrecruzados, en el cual no sólo resultarían perjudicados sus industrias y haciendas, sino peligraría también sus vidas. Sólo Antonio Miro Quesada decidió no retornar al parlamento.

La ilegitimidad de la mayoría parlamentaria leguista cohesionó más aún a la alianza opositora. “El Bloque” ya venía actuando de manera conjunta desde 1909, pero es a partir de 1911 cuando asumen una actitud beligerante en defensa de la constitucionalidad. A pesar de una coyuntura de actitudes desleales en este periodo, es aún posible destacar la vigencia de la libertad de expresión que se plasmaba tanto en la crítica parlamentaria como en la existencia de amplia gama de medios de prensa, los cuales eran voceros de las tendencias en pugna o manifestaban cierta independencia política.

Las interpelaciones ministeriales volvieron a ser actualidad de la agenda parlamentaria. Es interesante reseñar dos de los discursos de congresistas opositores. José Matías Manzanilla recordó que en la historia peruana hubo dos formas de atacar al congreso, la primera fue mediante convocatorias plebiscitarias y la segunda por medio de disolución violenta; empero, este gobierno había implementado una tercera: “*las pobladas, las turbas, los movimientos espontáneos o dirigidos, con o sin armas de fuego...*” (Basadre: 1968: 119, v.XII); y efectivamente este régimen sería testigo de la presencia de grupos sociales que participaron en política, y evolucionan desde las turbas dirigidas por intermediarios políticos a los movimientos sociales que intersectan sus reivindicaciones específicas con demandas de tipo político.

Otro discurso que trascendió las críticas normativas fue el que pronunció el demócrata Mariano Cornejo, cuando enfatizó que más allá de la gravedad de los hechos acaecidos y en el cual resultaron impunes los instigadores de los mismos, es necesario reconocer que éstos forman parte de los vicios y errores del sistema imperante, en el cual era difícil

saber quién era el que había iniciado estas actitudes poco honestas; por tanto uno de los temas de fondo al que alude y en el que la presente investigación se concentra es en torno a los incentivos institucionales que estimulan conductas desleales, las cuales generan círculos viciosos de ataques y respuestas ilegítimas, que al incrementarse progresivamente desembocan en crisis institucionales.

Es importante destacar que en todo este periodo de aguda crisis institucional, el ejército se mantuvo neutral. Sin embargo, la experiencia del golpe del 29 de mayo de 1909 permitió a Leguía prestar mayor atención a la situación de las fuerzas armadas y sus respectivas demandas, es así que a partir de esa fecha duplica el número de tropas efectivas, adquiere una flota de submarinos y un acorazado; y en el orden interno decreta un sustantivo incremento salarial a los militares. Por ende, una de las debilidades de Leguía a inicios de su gobierno, cual era su relación con las fuerzas armadas, devino en una fortaleza que influiría significativamente en los acontecimientos políticos en los siguientes años.

El mes de agosto de 1911 continuó siendo altamente conflictivo. Las iniciativas de voto de censura fueron derrotadas dada la mayoría que Leguía tenía en las cámaras, de tal modo que sería un voto de confianza el que se aprueba para el gabinete Basadre (5 de agosto) luego de un arduo debate y cuestionamiento por la minoría del Bloque. Sin embargo, en la medida que el gabinete Basadre había cumplido su tarea “legicida” (Miro Quesada; 1961: 397), y con ello asumido una gran impopularidad, Leguía hace un nuevo cambio de ministros, y el 31 de agosto Agustín Ganoza asumió la jefatura del gabinete y la cartera de Justicia e Instrucción, acompañado de Juan de Dios Salazar y Oyanguren (Gobierno), Juan Manuel de la Torre (Guerra y Marina), Daniel Isaac Castillo (Hacienda), Agustín de la Torre González (Fomento) y Germán Leguía y Martínez (Relaciones Exteriores).

Por otra parte, el 8 de agosto empezaron los juicios a los revolucionarios del 29 de mayo, los cuales habían sido sometidos al fuero militar (consejo de guerra). Las sentencias se expidieron el 13 de setiembre y condenaron a Isaías de Piérola a ocho años de cárcel, y a

penas que variaban entre cuatro y cinco años a los otros líderes del fallido golpe de Estado, entre los cuales se encontraban Amadeo y Carlos de Piérola. Nicolás de Piérola fue absuelto. Previamente a la sentencia, el Senado había aprobado una amnistía política, pero luego la habían reconsiderado y enviado a trámite de comisión, lo cual implicaba una dilación para el siguiente año.

Un día antes de esta sentencia, el joven catedrático José de la Riva Agüero publicó un artículo en el diario “El Comercio”, donde lamentaba que el golpe de estado del 29 de mayo no haya tenido éxito y hace una dura crítica al gobierno acusándolo de haber ocasionado inestabilidad política y económica, y de debilitar al Partido Civil y a los otros partidos, ya que la táctica empleada por Leguía fue la de dividir para dominar. Finalmente, proponía que el congreso aprobase la ley de amnistía política. La reacción del ministro Salazar (ferviente leguista) fue inmediata: mandó a apresar a Riva Agüero el mismo día de la publicación del artículo.

El encarcelamiento de Riva Agüero suscitó una gran manifestación de protesta universitaria en la plaza de armas el 14 de setiembre. La policía actuó con extrema dureza contra dicha concentración, resultado de lo cual hubo varios heridos y un muerto; asimismo penetraron en el Centro Universitario y destrozaron todo el mobiliario. El incidente repercutió en el Congreso, y se presentó una moción de censura que desató un álgido debate en la cámara de diputados. La inmediata renuncia del ministro en cuestión cortó la discusión; sin embargo, los diputados bloquistas aprovecharon el impulso de la situación y propusieron un voto de aplauso a la juventud, el cual fue aprobado. Otra de las consecuencias del desliz ministerial fue la reactivación del proyecto de amnistía política, pero esta vez el ejecutivo tomó la iniciativa para mandar el proyecto a la cámara de senadores, el cual fue aprobado por unanimidad el 23 de setiembre.

El incidente Riva Agüero implicó no sólo la caída del ministro de gobierno sino que también provocó una crisis de gabinete. Sin embargo, esta vez Leguía no cedió a ninguna presión partidaria y ratificó a su jefe de gabinete y equipo, y sólo introdujo a dos nuevos

ministros; Plácido Jiménez (Gobierno) y Ernesto Ráez (Hacienda). Este sería el último gabinete de Leguía, que lo acompañaría hasta el término de su periodo de gobierno.

Un hecho importante acaece el 12 de noviembre de 1911, y fue la asamblea civilista que se reunió para elegir una nueva junta directiva, fue el momento en que midieron sus fuerzas los leguístas y los pardistas. Fue elegido Antero Aspíllaga como presidente, y lo acompañaron: Roberto Leguía, Juan de Dios Salazar, Rafael Villanueva, entre otros. El triunfo de Leguía fue claro, además que se plasmaba la candidatura presidencial de Aspíllaga. Sin embargo, la tendencia pardista no aceptó este triunfo y constituyó su propia junta directiva el 2 de enero de 1912, la escisión estaba dada. El nuevo partido se llamó Partido Civil Independiente, y su nueva dirigencia la integraban Enrique de la Riva Agüero (como presidente), Javier Prado, Enrique Barreda y Osma, Juan Pardo y Barreda, José Matías Manzanilla, Antonio Miro Quesada, Manuel Vicente Villarán, Manuel Bernardino Pérez, Germán Schreiber, Francisco Tudela y Varela, Germán Arenas, entre otros. El nuevo partido era la suma del civilismo histórico y el ala pardista.

1912 es un año electoral, por tanto moviliza partidos y candidaturas. La oposición se reunió y negoció la posibilidad de presentar un candidato único. En las conversaciones para dicho fin están Nicolás de Piérola, Enrique de la Riva Agüero, Augusto Durand y el general Muñiz. Sin embargo, el 11 de febrero se produjo la ruptura. Las condiciones que Piérola propuso era constituir una nueva coalición, con jefatura unipersonal, candidato único, y una plataforma de cambios institucionales (reforma electoral, no aceptación de los acuerdos de los últimos tratados internacionales sobre fronteras, negativas de créditos del extranjero, etc.). La propuesta alterna era planteada por los liberales: convención electoral con 100 delegados por cada partido²⁰⁵. Más allá de algunos acuerdos en torno a la condena de las violaciones de la Constitución y el restablecimiento de la institucionalidad, el Partido Civil Independiente no aceptó las exigencias de Piérola y se

²⁰⁵ "Examinada en el fondo la fórmula liberal, era la de la evolución, dentro de la legalidad existente, pero la fórmula demócrata era la de la revolución. (...) En realidad, el Partido Demócrata no tenía fe en que el simple cambio presidencial modificara instituciones corrompidas y violadas. Un concepto definido y radical de la situación, lo llevaba a reclamar en el concepto de la coalición, autoridad, situaciones y medios suficientes para lograr sus fines." (ULLOA, 1981: 448-9).

retiró de la negociación, lo cual dejó *“sin piso”* la posibilidad de una candidatura de la oposición. Piérola reasumió su actitud abstencionista.

La siguiente oportunidad para que los partidos civil independiente, liberal y constitucional se presentasen unidos fue la idea de la candidatura de José Pardo y Barreda (quien por ese entonces vivía en Europa), empero el ex – presidente no la aceptó. La candidatura de Aspillaga era la única en contienda y además con una nueva JEN, que tenía una mayoría leguista, parecía estar asegurada.

La candidatura de Guillermo Billinghurst surgió tardía y casi inesperadamente (casi un mes antes de las elecciones). Billinghurst fue Alcalde de Lima en el periodo 1910-1911²⁰⁶, y su candidatura emergió al margen de partidos, negociaciones o convenciones. Su figura fue vista como la alternativa esperada frente al oficialismo, por lo que rápidamente recibió el apoyo de los partidos del bloque, mas no así el respaldo oficial del Partido Demócrata e incluso fue criticado por Piérola; sin embargo, muchos dirigentes y militantes demócratas se adhirieron entusiastamente a su campaña. Los diarios de mayor tiraje como “La Prensa”, “La Crónica y “El Comercio” también le brindaron amplia cobertura.

Una de las características de la campaña de Billinghurst fue el apoyo masivo que recibió de los sectores populares, no solamente por que provenía de las canteras demócratas y era visto como el representante del pierolismo sin Piérola, sino también por su gestión municipal en la cual había establecido contactos con estas clases sociales. Así, artesanos, obreros, estudiantes y comerciantes de mercados formaron clubes políticos para hacer propaganda a su candidatura; muy pronto las adhesiones sociales devinieron en una “avalancha” electoral.

²⁰⁶ Billinghurst es elegido Alcalde de Lima en 1909, aunque no como candidato del Partido Demócrata (del cual se había apartado recientemente) y sin contar con el apoyo de Piérola: *“su administración es caracterizada por un sentido de firmeza, sensibilidad ante las necesidades populares, preocupación por la higiene y por cierta moral restrictiva. (...) La experiencia municipal le sirvió para tomar contacto con los emergentes sectores urbanos, productos de una relativa modernización y del crecimiento económico”* (González; 2002: 194-5)

El discurso de Billinghurst empezó a tener peculiares relieves, así afirmó que era “*un ciudadano completamente desvinculado de la actividad política interna*” (La Prensa, 9 de mayo de 1912; citado en González; 2002: 201), y cuando se dirigía a los sectores populares, les ofrecía que de llegar al gobierno, él sería el “*primer obrero*”. En la medida que Billinghurst veía crecer las posibilidades de éxito de su candidatura, orientó su atención a los conocidos “mecanismos legales” (el manejo mayoritario de leguístas en la JEN) que pudiese impedir su triunfo, y por tanto demandó al gobierno que anulase el proceso electoral y que convocase a nuevas elecciones con diferente fecha y nueva JEN.

Mientras tanto, la preocupación por la inesperada candidatura de Billinghurst se hacía presente en las filas del candidato oficialista. Aspíllaga se percató de que la resistencia a su candidatura provenía en parte por ser apoyado por el gobierno, de tal manera que quiso aparentar que este vínculo no existía²⁰⁷. Leguía observando el apoyo popular del candidato de la oposición con quien mantenía relaciones cordiales (Billinghurst le había expresado su apoyo en el caso del golpe de Estado del 29 de mayo de 1909 y además que simpatizaba con los arrestos anticivilistas de su gestión), retiró efectivamente su apoyo a Aspíllaga en el momento más importante: el debate parlamentario sobre los resultados electorales.

El contraste de apoyo popular masivo a la candidatura de Billinghurst y el limitado grupo que respaldaba a Aspíllaga se vio claramente el 19 de mayo, cuando se realizaron los mítines de ambos candidatos. La manifestación de Billinghurst fue multitudinaria y popular, en ella destacaron especialmente unos carteles del club de “Motoristas y Conductores” que decían: “*Esto será veinte centavos de pan si sube Aspíllaga*” al costado de un diminuto panecillo, y “*Esto será cinco centavos de pan si sube Billinghurst*” al lado de un pan gigantesco. A partir de esa fecha, Billinghurst sería conocido como “Pan Grande”. Mientras tanto, el desfile de Aspíllaga fue muy escaso y sólo con personas vestidas muy elegantemente, que denotaban gente de la clase alta, el periodista Luis

²⁰⁷ “(Aspíllaga) *Un día se le presenta a don Augusto, y gastándole un disfuerzo de niña pudorosa le dice: “Señor Leguía hablan que soy candidato oficial y esto me perjudica”. “Bueno - le responde el Presidente - no se preocupe si esto le perjudica le retiro mi apoyo.”* (Capuñay: 1951: 100).

Fernán Cisneros lo plasmó así: “*El duelo se recibe por tarjeta en la calle San Pedro. Como entierro es el más concurrido que se ha visto en Lima*” (Ulloa, 1981:458).

Aún cuando los partidos del bloque y las opiniones de los medios de prensa concordaron con la postergación de la elecciones, Leguía no cedió a esta demanda, arguyendo que no dependía legalmente de su autoridad cambiar la fecha de las elecciones. El día esperado, sábado 25 de mayo de 1912, un gran paro cívico frustró el proceso electoral. Los partidarios de Billinghurst rompieron las mesas de sufragio y ahuyentaron al personal respectivo. “*Tuvieron la tolerancia y quizás el oculto apoyo del Gobierno. En la noche hubo incineraciones públicas de enseres de “soplones” y serenatas en casa de Billinghurst, **Por primera vez en el siglo XX el pueblo apareció como actor decisivo en la escena política.***” (Basadre; 1968: 214, v.XII; negritas nuestras).

El éxito del boicot electoral trajo consigo el debate acerca de cómo proceder para elegir al Presidente. Varias propuestas se pusieron a consideración, el sector oficialista pretendía una prórroga del gobierno de Leguía hasta la convocatoria de nuevas elecciones, Piérola en un manifiesto señaló que se realizasen a nuevas elecciones en el plazo de un mes, mientras Aspíllaga señalaba que las elecciones eran válidas ya que sí se habían efectuado en otros lugares de la república y que habían alrededor de 60,000 votos a su favor, de un total de 140 mil. La oposición que apoyaba a Billinghurst opinaba que era el congreso el que debía elegir al presidente de acuerdo a lo que decía el inciso 10 del artículo 59 de la Constitución, que indicaba que correspondía al Congreso: “*Proclamar la elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la República, y hacerla cuando no resulte elegido según la ley.*”

El 27 de mayo se reunieron el Presidente Leguía con Billinghurst, y aún cuando no hay una versión primaria de lo que sucede en ese encuentro, se presume lo acordado por los hechos posteriores que sucedieron en el parlamento. Así, en la sesión del Congreso del 19 de agosto, se decidió por una mayoría de 132 votos contra 30, la elección de Guillermo Billinghurst como nuevo Presidente de la República, y como Vicepresidente a Roberto

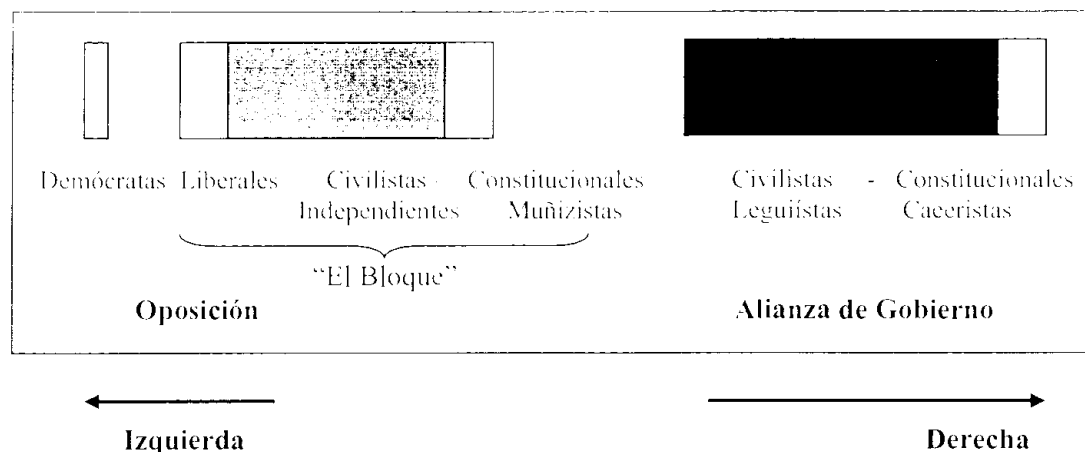
Leguía (hermano del Presidente) por 94 votos contra 54. La mayoría leguista en el parlamento siguió teniendo un rol importante en la política nacional.

Balance Analítico del Gobierno de Leguía.

Una evaluación de este periodo nos remite a las siguientes consideraciones. De los cuatro periodos de gobiernos analizados en el presente capítulo, el último (gobierno de Leguía) resultó el más conflictivo y el que presentó más conductas desleales es decir, donde la gravedad de las trampas fue máxima, tanto por parte del gobierno como de la oposición (ver Figura No. Incumplimiento de reglas y conflictividad en gobiernos de la República Aristocrática; supra, pag.). Si el alto grado de conflictividad nos remite a crisis de gobiernos constantes (que repercute en la alta rotación de gabinetes y ministros), la suma gravedad de las trampas acercaba al régimen al peligro de su colapso o quiebre. Por otro lado, el “juego de la trampas” fue atractivo para los actores ya que quien las cometía, como es el caso de Leguía, obtenía “*grandes ganancias*”: mayoría en el Parlamento y en la Junta Electoral Nacional, por señalar sólo dos ejemplos.

Una segunda constatación que hacemos de este gobierno fue la alta intensidad del conflicto que enfrentaron los actores. Este antagonismo radicó básicamente en la adversidad entre el gobierno y la oposición, el cual reproducía el mismo patrón de conflicto que se daba entre los gobiernos de López de Romaña y Pardo: la dicotomía ejecutivo y oposición. Sin embargo, una diferencia entre ambos periodos es la titularidad o personería de la oposición. En el caso de López de Romaña y Pardo la oposición fueron los demócratas, y en el gobierno de Leguía fueron los civilistas antileguistas. Este escenario dicotómico también fue un factor que favoreció la crisis de régimen o institucional, ya que desincentivó el éxito de las negociaciones entre los partidos o líderes, en la medida que la inexistencia de un “centro político” impedía una mediación que haga viable una búsqueda de alternativas incluyentes, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura No 6: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Leguía en 1911.



Una tercera cuestión estuvo relacionada con la posición estratégica que desempeñó el Partido Demócrata, el cual llegó a ser casi totalmente excluido de la escena oficial (su representación parlamentaria fue menor incluso que la del Partido Constitucional y Liberal), lo cual los indujo a adoptar una orientación decididamente antisistémica e insurreccional. Sin embargo, la estrategia demócrata fue errática por que el partido estuvo dividido y experimentó un menor dinamismo y arraigo en los sectores sociales conforme perdía sus cuotas de poder en la escena oficial.

Observamos así que la actitud abstencionista del líder demócrata paralizó al partido durante mucho tiempo y desautorizó cualquier negociación que hubiese podido favorecerlo en el plano político parlamentario o electoral²⁰⁸, mientras que la tendencia revolucionaria se inclinó por el vanguardismo y buscó realizar golpes audaces y sorpresivos, por lo que su dependencia de factores de azar disminuyó significativamente sus posibilidades de éxito. La predominancia de ambas tendencias (la abstencionista y la

²⁰⁸ “Esta actitud pasiva del ala de los demócratas, aquella que se caracterizó por haberse pasado, con vastas consecuencias, como punto de partida para una vigorización del sistema de partidos en el Perú, tan sin equilibrio en el recinto del Congreso por la características que presentaban en su empleo la ley electoral. La purtana minoría de Pirola hizo trazar esta tentativa, sin que se percibiera cuáles eran las medidas prácticas que el anciano caudillo había concebido para dar vigor y poder a su agrupación política” (Basadre, 1968: 138, V, XII).

revolucionaria) obligó a la tercera corriente legalista a actuar por fuera del marco partidario, ya sea en el parlamento apoyando al “bloque” o a Billinghurst, quien participaba exitosamente en elecciones sin el soporte oficial del Partido. Todo ello repercutió finalmente en el progresivo y definitivo debilitamiento de este partido.

La estrategia del civilismo antileguista se enfrentó al mismo dilema por el que atravesaron los demócratas en el gobierno de López de Romaña. Por una parte, los líderes partidistas pretendieron hacer valer su peso político mediante el chantaje: restarle apoyo parlamentario al gobierno en caso de no seguir las directivas del partido; sin embargo, Leguía logra “desmarcarse” de la presión civilista cuando evaluó que podía hacer uso de los mecanismos de poder de la presidencia para construir su propio soporte parlamentario. Por último, la crítica deslegitimizadora del civilismo de los actos desleales del gobierno y el consiguiente chantaje de un golpe de Estado no logró impactar en Leguía, quién conocía desde adentro al civilismo y sabía que era un partido parlamentario, con intereses económicos muy arraigados en el status quo, y que difícilmente habrían de encabezar un movimiento armado.

Por su parte, el gobierno de Leguía transcurrió de una primera fase de negociación y conciliación a una segunda fase de represión y enfrentamiento. Basadre señala que si bien Leguía se abrió paso en las altas esferas de la sociedad peruana y logró encumbrarse en la primera magistratura de la república a través del Partido Civil²⁰⁹, no pertenecía naturalmente a aquel estrato social, de tal modo que su estrategia inicial fue desde un principio lograr un aliado que pudiese contrarrestar su independencia frente al civilismo: el Partido Demócrata²¹⁰. Empero nunca logró superar la intransigencia ideológica y

²⁰⁹ “Podría haberse dicho que llegaba al mando supremo como un mayordomo capaz puede llegar a recibir de los verdaderos dueños la administración de una hacienda. Pero en el fondo de su alma, se sentía quizás demasiado humillado por sus amigos y protectores y, desde el momento en que empezó a gobernar, reveló independencia frente a ellos.” (Ibid)

²¹⁰ La estrategia inicial de Leguía de apoyarse en el Partido Demócrata en 1909 se plasmó en su propuesta de un mecanismo electoral que les permitiese una mayor representatividad en el parlamento (la política de las “ubicaciones”); sin embargo, la prioridad estratégica de los demócratas en ese momento ya no era parlamentaria sino más bien insurreccional. En el hipotético caso de una aceptación de los demócratas a la propuesta de Leguía, hubiese significado un re-equilibramiento de las fuerzas políticas en el parlamento, el triunfo de la línea legalista al interior del Partido Demócrata, y por ende un derrotero político diferente al que se siguió en la segunda década del siglo XX.

abstencionista de Piérola, a lo más logra un débil vínculo con otro acérrimo anticivilista: Guillermo Billinghurst. Por el contrario, la respuesta democrata a la propuesta conciliadora de Leguía fue el endurecimiento de sus posiciones hasta su máxima expresión: el golpe de estado del 29 de mayo de 1909. Leguía entonces consiguió una tregua con el civilismo para implementar una dura política represiva que lograría derrotar de manera definitiva al ala dura de los demócratas, y con ello la dispersión de este partido. Una vez aplastada la oposición armada y el repliegue de los demócratas, Leguía desarticula la oposición legal (el bloque) aprovechando los mismos “mecanismos legales” que el civilismo utilizó contra los demócratas en ocasiones anteriores: avasallamiento y copamiento de la JEN, predominio del ejecutivo y haciendo caso omiso de los votos de censura contra los gabinetes; e incluso violando gravemente las normas constitucionales, para imponer ilegalmente un tercio de congresistas, para lograr mayoría parlamentaria.

Un cuarto punto nos remite a la necesaria explicación acerca de los factores que ayudaron a que el régimen no colapse, teniendo en cuenta este acoplamiento de crisis de gobierno y crisis de régimen. Remitiéndonos exclusivamente al periodo de Leguía, mencionaremos dos: en primer lugar la institucionalidad partidaria, la cual se reflejó en el momento en que el partido civil se vio enfrentado a una trampa gravísima (su desplazamiento del congreso), y la junta directiva no adoptó ninguna de las alternativas que hubiesen contribuido a quebrar el régimen: la revolución o la abstención. El segundo factor que permitió superar un escenario de máximo enfrentamiento y colapso fue la aparición de un tercer actor (Billinghurst) que rompió la polaridad existente y reconstituyó (al menos temporalmente) un nuevo consenso.

En quinto lugar, tenemos el fenómeno del debilitamiento institucional. Observamos cómo este tipo de partidos de élite que de por sí tuvieron poca vinculación con la sociedad civil (Mair; 1997: 110-1), se vieron enfrentados a otros factores que afectaron su institucionalidad. Por una parte, está el liderazgo carismático que caracteriza a los partidos democrata, constitucional y liberal, de tal manera que el ausentismo de Durand, Cáceres y Piérola (ya sea por razones de exilio, viaje o abstencionismo) terminaron afectando sistemáticamente a la actividad orgánica de estas colectividades políticas. Por

otro lado, la gran intensidad de los antagonismos generó corrientes centrífugas al interior de estos partidos, que afectaron especialmente a los partidos Civil y Demócrata, los cuales fueron los pilares del sistema de partidos durante la mayor parte de la década estudiada. Y finalmente, el modelo institucional electoral orientó la prioridad de la actividad política a la “captura” de los mecanismos legales (la JEN) más que a un crecimiento partidario, ya que un partido grande y popular podría ser fácilmente derrotado si es que no contase con el control de estas instituciones.

Por último, se introdujo un nuevo elemento en la dinámica de este régimen: los actores sociales. Desde la forma de turbas amorfas y dirigidas por agentes del partido o del gobierno, a incipientes movimientos sociales (estudiantiles y obreros en este caso), los partidos se vieron obligados a dejar su exclusiva actividad parlamentaria, para establecer sus primeros vínculos con la sociedad civil. Sin embargo, la mera presencia de estos grupos sociales en la escena política sin un mecanismo funcional de canalización fue un factor de desestabilización, ya que incrementó la potencialidad de la crisis institucional cuando estos nuevos actores son introducidos en una lógica de las trampas y actos destieales, como ocurrió durante el gobierno de Leguía.

CAPITULO 4

CRISIS Y RUPTURA DEL REGIMEN DEMOCRATICO: EL CÍRCULO VICIOSO DE LAS TRAMPAS EN UN CONTEXTO DE DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL (1912 – 1919).

4.1. La infructuosa construcción del consenso en la segunda década del siglo XX.

Un nuevo factor de consenso resolvió parcialmente la última crisis del régimen democrático durante el gobierno de Leguía: la elección de Guillermo Billinghurst como Presidente de la República para el periodo 1912 - 1916. En efecto, la primera década del siglo XX, por la que transcurrieron los gobiernos de López de Romaña, Candamo, Calderón, Pardo y Leguía, se caracterizó por una progresiva tendencia a la bipolarización de fuerzas que intensificó el conflicto político, acentuó el uso de estrategias ilegítimas (trampas) de los actores políticos, y provocó un debilitamiento de los partidos políticos.

La bipolarización se concentró inicialmente en el clivaje político civil – demócrata, pero conforme el Partido Demócrata fue desplazado de las estructuras de poder y el civilismo devino en un partido predominante (constituyéndose formalmente un sistema de partido y medio a partir del gobierno de Pardo en 1904), el conflicto político se desbordó del escenario parlamentario cuando los demócratas apelaron a estrategias subversivas para recuperar el poder (levantamientos del 1ero mayo de 1908, 29 de mayo de 1909, y movimientos guerrilleros en 1910 y 1911).

La derrota militar de los demócratas y la progresiva separación del Presidente Leguía del Partido Civil reconfigura la bipolarización política en torno a los partidarios de Leguía y a sus opositores. Este nuevo antagonismo sería más intenso aún que el anterior y consecuentemente ocurrirían graves alteraciones del orden institucional (clausura del Jurado Electoral Nacional, elecciones de un nuevo tercio parlamentario sin las garantías respectivas, imposición por la fuerza del tercio parlamentario leguista). Este contexto de graves irregularidades conllevaría una crisis del régimen político que estuvo a punto de desencadenar una ruptura de esta incipiente y debilitada democracia.

No obstante, los actores políticos (civilistas, liberales y constitucionales) se “reacomodan” en este nuevo escenario de ilegitimidades y desestiman la salida revolucionaria o de conspiración subversiva. Por otro lado, el debilitamiento del Estado de Derecho por el propio gobierno (violación de garantías individuales, atentados contra la libertad de expresión, cierre inconstitucional de la JEN; imposición de un tercio de congresistas) afectó seriamente la credibilidad del candidato oficialista Antero Aspíllaga, y favoreció la espontánea candidatura del Guillermo Billinghurst, quien asume la representación de un nuevo estilo de política: sin las maniobras ilícitas de los partidos tradicionales²¹¹ y muy vinculado a los sectores populares urbanos, que reclamaban una mayor presencia en la escena oficial.

El manejo de los “elementos legales” del proceso electoral (el copamiento oficialista del Jurado Electoral Nacional), no fue un obstáculo definitivo para que una nueva alianza articulase sus propios mecanismos para llegar al poder. Es así que el conjunto de los partidos políticos de la oposición se adhirió a Billinghurst, los principales medios de comunicación le dieron su apoyo (“El Comercio” y “La Prensa”), y la movilización social impidió que este mecanismo electoral, de cuestionada parcialidad, se ponga en funcionamiento a favor del candidato oficialista. Así, el rol protagónico que tuvieron los obreros, artesanos y estudiantes en las famosas “jornadas cívicas” no sólo hicieron fracasar el proceso eleccionario y obligaron a que el Congreso eligiera al nuevo presidente; sino que además devino en un nuevo rasgo del régimen político a partir de 1912.

Como veremos en el presente capítulo, los tres siguientes gobiernos (Guillermo Billinghurst, Coronel Oscar Benavides y José Pardo) comparten la siguiente peculiaridad: se inician con un apoyo político altamente mayoritario y sin embargo no logran una estabilidad de gobierno, y por lo contrario contribuyen a profundizar la crisis de régimen hasta conducirla finalmente a la ruptura democrática en 1919. **La última década de esta**

²¹¹ En el discurso de transmisión de mando, Billinghurst dice: “... Y contrario como soy a los antiguos y gastados métodos, he de prometerlo y de serlo completamente extraño a las sugerencias partidarias y a las influencias de círculo por seductoras que ellas sean.” (Capuñay; 1951: 103).

denominada “República Aristocrática” tuvo tres rasgos relevantes, que conjugados se vuelven fatales para una democracia: predominancia de las estrategias ilegítimas de acumulación de poder de los actores, debilitamiento y crisis de los partidos políticos, deslegitimación del conjunto de las instituciones políticas.

¿Cuáles fueron los impedimentos para reconstituir la élite política nacional?, ¿Por qué los inicios mayoritarios de un gobierno no se pudieron canalizar para retomar un modelo de democracia consensual?, ¿Qué influencia tendría la presencia de los nuevos actores sociales en la escena política?, ¿Cuáles fueron los incentivos por los cuales los actores políticos enfatizaron en el uso de las estrategias ilegítimas (trampas) en la competencia por el poder?, ¿Qué nuevos factores contribuirían al debilitamiento de los partidos?, ¿A qué tipo de legitimidad recurrirían los actores que atentarían finalmente contra el régimen democrático?

Este capítulo analiza el periodo político comprendido entre 1912 y 1919, durante el cual transcurren los gobiernos de Guillermo Billinghurst, Coronel Oscar Benavides y José Pardo. El primero de ellos fue electo por el Congreso y luego interrumpido por un levantamiento militar paradójicamente apoyado por una mayoría parlamentaria. El segundo fue un gobierno provisional en el que participaron en un inicio todos los partidos políticos relevantes, tanto en la conformación de los gabinetes como en el apoyo que le dieron desde el parlamento. Finalmente, el segundo gobierno de José Pardo surge de una convención de los principales partidos (civil, liberal y constitucional), y alcanza un mayoritario respaldo electoral; sin embargo no logra culminar su periodo constitucional a causa del golpe de Estado de Augusto Leguía (4 de julio de 1919).

Algunas de las características políticas más significativas de este periodo fueron:

- La reincorporación del ejército a la política, el cual inicialmente sirve como un instrumento de los partidos políticos para resolver la crisis de régimen creada durante el gobierno de Billinghurst, a causa del agudo enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo; pero que sin embargo devendría posteriormente en un “*fiel de balanza*” para definir el destino final del presente régimen.

- La presencia de nuevos movimientos sociales, cuyas huelgas y movilizaciones impactan en la escena oficial, y sitúan la cuestión social como parte del proceso político. Por una parte, el movimiento obrero en torno a la jornada de las ocho horas y al abaratamiento de las subsistencias, en segundo lugar el movimiento estudiantil con respecto a la reforma universitaria.
- El debilitamiento de los principales partidos políticos, tanto del Partido Demócrata que tendió a su disolución a partir de la muerte de su fundador en 1913, como del Partido Civil escindido por sus corrientes internas. Por otra parte, el Partido Liberal asimilado completamente al “*establishment*”, perdió vitalidad, una vez que se alejó de sus banderas sociales de agitación; mientras tanto el Partido Constitucional se replegó a sus huestes militares tradicionales, sin mayor capacidad de renovación y reciclamiento. Finalmente, el nuevo Partido Nacional Democrático expresó la incapacidad de los demás partidos de asimilar a una nueva generación, pero a la vez fue un partido que no supo entroncarse con la realidad social que su programa político reconocía como vital²¹².
- La deslegitimación de la institucionalidad política se fue plasmando en un rechazo social y popular de los partidos políticos, los cuales son identificados como parte de una misma élite excluyente y tradicional (la oligarquía), que actuaba en beneficio exclusivo de sus intereses económicos²¹³. El anticivilismo sería el *leit*

²¹² Un agudo balance de los partidos de este periodo lo hace el periodista José Carlos Mariátegui: “Hoy el Partido Civil no es realmente un partido. Es una facción nominal destruida por los cismas. Cada uno de sus personajes conspicuos acaudilla un pequeño grupo. (...) Mucho menos puede subsistir el partido constitucional. Y es una preocupación que no renueva ni incrementa su proselitismo. Los constitucionales de hoy son los mismos constitucionales de ayer. Son una sociedad de sobrevivientes de La Breña. Una escolta de honor del venerado general Cáceres. (...) Otro partido que no podrá ser restaurado es el partido demócrata. El partido demócrata no constituyó jamás una verdadera agrupación principista, pese a los descos de su gran jefe. No era la “declaración de principios” lo que unía a los ciudadanos. Era la figura de Piérola. Por consiguiente había sólo pierolismo. No había partido demócrata. (...) El partido liberal, el menos viejo de los partidos, no necesita reorganización. Pero no tiene vitalidad alguna. No la ha tenido tal vez en ningún momento. Sus elementos básicos fueron disidentes del pierolismo y dispersos del fracasado partido radical. Las bizarrías del doctor Durand, conspirador temerario, dieron popularidad al partido. (...) Todo induce a creer que poco a poco, extinguidos sus arrestos juveniles y enfriados sus fervores principistas, irá perdiendo la fuerza provinciana que los sustenta.” (Nuestra Época: No.2, Lima 6 de julio de 1918; citado en Mariátegui; 1991: 331-3).

²¹³ “Para apreciar bien el cuadro de la época diré que se estaba formando una miope camarilla que trataba de imponerse a despecho de las realidades circundantes. Se habló de la “argolla”, expresión peyorativa que sirvió para designar a un grupo pequeño pero influyente que deseaba dar sus directivas al país.” (Miró Quesada; 1959:110-1).

motiv de aquellos políticos empeñados en atacar a este régimen, y buscarían la representación de los nuevos grupos sociales en ascenso; clases medias y trabajadores urbanos.

4.2. Guillermo Billinghurst (1912 – 1914): el ejecutivo versus el legislativo.

La llegada al poder de Billinghurst pareció cerrar una crisis de régimen que se desencadenó durante el gobierno de Leguía, la cual provenía de un enfrentamiento irreconciliable entre dos grandes sectores políticos y de un resquebrajamiento institucional que afectaba la legitimidad del parlamento (cuya renovación de un tercio de sus representantes había sido usurpada ilegalmente) y de los partidos políticos, los cuales se encontraban en su mayor parte escindidos a inicios de la segunda década del siglo XX.

La mayoritaria elección de Billinghurst por el Congreso (con 81% de los votos a su favor) significó el apoyo inicial de la mayor parte de estos actores polarizados (leguístas y antileguístas), los cuales dejaron de lado este clivaje político para retomar a sus agrupamientos partidarios tradicionales (aunque con algunos ligeros cambios): el partido civil independiente, el partido civil (fracción leguista), el partido constitucional, el partido liberal y el partido demócrata.

Billinghurst contaba con el respaldo informal de los demócratas (no compartido por el Califa) y del Partido Liberal, con quienes tenía afinidad ideológica y una larga trayectoria parlamentaria e insurreccional. Además tenía el apoyo de otras agrupaciones en el congreso (civilistas independientes y constitucionales), y el soporte de los principales medios de comunicación (“El Comercio” civilista, y “La Prensa” demócrata – liberal).

Sin embargo, Billinghurst era consciente que no disponía de una bancada parlamentaria propia ni menos con un partido (se había separado del Partido Demócrata definitivamente en 1909), pero tenía muy en cuenta el apoyo popular que había recibido para impedir el

proceso electoral de 1912 mediante las famosas “jornada cívicas”²¹⁴, lo que constituía un nuevo elemento que podía hacerle depender menos de la política oficial, hasta entonces, eminentemente parlamentarista.

Guillermo Billinghurst nació el 27 de julio de 1851 en Arica, era un rico comerciante e industrial minero, cuyas propiedades y negocios se ubicaban en las sureñas provincias de Tarapacá, Tacna y Arica²¹⁵. Fue un decidido defensor de los intereses peruanos en aquella guerra, en la cual se le otorgó el grado de coronel y participó heroicamente en las Batallas del Morro de Arica, de San Juan y de la defensa de Lima, donde fue tomado prisionero y enviado a Chile.

Billinghurst fue autor de numerosas publicaciones: “Rápida Ojeada sobre la Cuestión del Salitre” (1875), “Compendio de la Legislación Municipal del Perú 1873-1875” (1878), “Alfonso Ugarte, Corona Fúnebre” (1880), “Reconocimiento Militar del Río Desaguadero y de la Altiplanicie Andina” (1880), “Estudio sobre la Geografía de Tarapacá” (1886), “Abastecimiento de Agua Potable para el Puerto de Iquique” (1887), “Condición Legal de los Peruanos Nacidos en Tarapacá” (1887), “Los Capitales Salitreros de Tarapacá” (1889), “La Irrigación en Tarapacá” (1893), “Legislación sobre Salitre y Bórax en Tarapacá” (1903), entre otros (Basadre, 1968: 220, v.XII).

La trayectoria política de Billinghurst estuvo estrechamente vinculada a la de Nicolás de Piérola tanto en las novelescas incursiones subversivas (la expedición revolucionaria en el Talismán, la revuelta de Yacango y la sublevación del Huáscar), como en la revolución de 1895, gracias a lo cual el Califa promovió su candidatura como 1er Vicepresidente; al tiempo que fue elegido Senador y Presidente de su cámara (previamente Billinghurst ya se había desempeñado como diputado por Tarapacá en 1878). Hacia fines del gobierno de

²¹⁴ “De otro lado, frente a las elecciones de 1912, surgió una oleada popular, un pierolismo sin Piérola, lo que echó de lado la maquinaria del sufragio en la que tal vez no hubiera encajado e impuso al Congreso la designación del ídolo del momento: Billinghurst.” (Basadre; 1978: 478).

²¹⁵ Estos territorios fueron peruanos hasta antes de la Guerra del Pacífico (1879-1883), como parte de las condiciones de rendición Tarapacá pasó a formar parte definitiva de Chile, mientras que Tacna y Arica estarían bajo a su dominio por 25 años. Luego de infructuosas o postergadas negociaciones, Tacna regresó a la soberanía del Perú y Arica se mantuvo como parte del territorio chileno en 1929.

Piérola, fue embajador plenipotenciario en Chile donde negoció el Tratado Billinghurst – La Torre respecto de la devolución de los territorios de Tacna y Arica, el cual no fue finalmente ratificado por el parlamento chileno.

La cercanía y lealtad que tuvo con Piérola no impidió que éste lo vetara para la candidatura presidencial de 1899, en tanto que el anticivilismo de Billinghurst devino en un impedimento para mantener la coalición demócrata – civil, la cual constituía el eje de la estrategia de Piérola para retornar al poder en el futuro. Este desencuentro motivó acuerdos tentativos entre el líder liberal Augusto Durand y Billinghurst, para promover levantamientos en diversas partes del país²¹⁶, sin embargo dicho plan nunca se llevó a cabo, a excepción de las montoneras que Durand promovió en Huánuco y que recibió el apoyo público de Billinghurst.

El alejamiento de Billinghurst del Partido Demócrata fue temporal y se alineó nuevamente en 1904 contra la candidatura presidencial de Pardo, y más tarde contribuyó económicamente al fondo recolectado para el movimiento revolucionario del lero de mayo de 1908. Hacia 1909, Billinghurst dirigía el Comité Directivo del Partido Demócrata que negoció el acuerdo electoral con Leguía (denominado la política de las ubicaciones), y se aparta nuevamente cuando Piérola lo desautorizó. Para entonces, Billinghurst formaba parte de una tendencia menos subversiva (opuesta a los “duros” del Partido), y orientada a negociaciones para lograr mejores posiciones en el Estado; es así como es elegido Alcalde de Lima el lero de mayo de 1909, aunque sin contar con el apoyo formal del Partido Demócrata. En esa perspectiva, no forma parte de levantamiento del 29 de mayo de ese mismo año, y acude a Palacio de Gobierno a expresar su saludo al Presidente Leguía, luego que salió bien librado de su secuestro.

²¹⁶ “Triunfante el señor de la Romaña, los disidentes del Partido Demócrata no quisieron resignarse. Empezóse una conspiración, que reunía a los hombres de significación resaltante, como dos Elias Malpariida, don Augusto Seminario y don Ricardo Flórez. En la casa particular de este ilustre médico se efectuaban las reuniones de la Junta Revolucionaria, a la que yo servía de Secretario. Don Guillermo Billinghurst, residente en Iquique, podía confacilidad remover el sur; el doctor Augusto Durand – vaciado en el molde de los viejos caudillo – podía hacer lo mismo en el centro; y don Augusto Seminario, igualmente en el norte.
(.....) No podría precisar por qué pero la revolución no llegó a estallar, logrando el señor de la Romaña mantenerse en poder durante los cuatro años de su periodo presidencial” (Chocano; 1940: 185).

Ya mencionamos anteriormente que su gestión como Alcalde fue una oportunidad para que Billinghamurst se vinculase con diversos sectores populares de la capital, a partir de las diversas obras que emprende para beneficio de pequeños comerciantes, obreros y pobladores de viviendas precarias. Estos nexos sociales adquirirán un peso político relevante en la campaña presidencial de 1912, dado que fueron estos grupos sociales los que lograron impedir la instalación de mesas y el sufragio electoral. Billinghamurst los introduciría como una pieza recurrente del juego político a partir de entonces.

El primer gabinete del nuevo gobierno estuvo encabezado por un connotado dirigente liberal y antiguo camarada de Billinghamurst, Elías Malpartida²¹⁷, siendo acompañado por Wenceslao Valera en la cartera de Relaciones Exteriores y Baldomero Maldonado en Hacienda (también liberales); por los civilistas independientes Francisco Moreyra en el Ministerio de Justicia e Instrucción, el general Enrique Varela en el ramo de Guerra y Marina, y Fermín Málaga Santolalla como Ministro de Fomento.

Tal como anunció en su discurso de toma de mando, Billinghamurst dio prioridad a una reforma electoral que diese mayores garantías para obtener un resultado justo. Es así que encarga al demócrata Aurelio Sousa, al periodista Alberto Ulloa y a su ministro Valera, la redacción de un anteproyecto de reforma electoral, el cual fue sometido a consultas de dirigentes de varios partidos. El proyecto que el Ministro Malpartida remitió al legislativo el 29 de octubre de 1912 fue finalmente aprobado el 16 de diciembre, de tal modo que tendría vigencia para el proceso electoral de renovación del tercio parlamentario en 1913. La nueva ley electoral No.1777 devolvió la autonomía electoral a las provincias²¹⁸, a diferencia del centralismo que representaba el Jurado Electoral Nacional en la anterior

²¹⁷ Elías Malpartida formó parte de la representación de Pierola en la Junta de Gobierno provisional que encabezó Manuel Candamo en 1895. Disidente del Partido Demócrata en 1899, fue parte del círculo de fundadores del Partido Liberal en 1901.

²¹⁸ *“Los miembros de las juntas provinciales de registro y de las juntas escrutadoras provinieron de la elección, por mayoría y minoría de los contribuyentes de la provincia en asamblea pública. Dichos contribuyentes fueron seleccionados en las listas formadas por el Ministerio de Hacienda en vista de los padroncillos respectivos”* (Basadre: 1968: 234-5. v XII).

normatividad. Otro cambio significativo fue el rol arbitral (en última instancia) otorgado a la Corte Suprema para resolver la validez de las impugnaciones electorales²¹⁹.

Otro acuerdo multipartidario que demuestra el ánimo concertador y consensual en los inicios del gobierno de Billinghurst (octubre de 1912), fue la aprobación del proyecto del Ejecutivo respecto del presupuesto de 1913. La votación en la Cámara de Diputados a favor de esta iniciativa del Gobierno fue casi unánime, con el único voto en contra del leguista Rafael Grau (Basadre; 1968: 263-4, v.XII).

Otra de las iniciativas del Presidente Billinghurst estuvo relacionado con uno de los temas pendientes de la política peruana: la cuestión de las provincias cautivas de Tacna y Arica. Como señalamos anteriormente, los territorios donde se ubicaban las industrias y negocios de Billinghurst se encontraban en ese entonces bajo dominio chileno, por tales razones había entablado estrechos vínculos con políticos y empresarios chilenos, los cuales le habrían facilitado llegar al acuerdo de 1898 (Tratado Billinghurst – La Torre) que no fue ratificado posteriormente.

En esta ocasión, Billinghurst emprendió negociaciones confidenciales con su viejo amigo, el ministro chileno Antonio Valdez Cuevas respecto de las provincias de Tacna y Arica en el mes de noviembre de 1912, y llegaron al acuerdo provisional siguiente: *“aplazamiento del plebiscito hasta 1923, el cual sería presidido por el Presidente con dos delegados chilenos y dos peruanos, voto para los residentes de tres años y para los nativos excluyéndose en todo caso a los analfabetos, pago por Chile de 500,000 libras esterlinas”* (Basadre; 1968: 238, v.XII).

Esta negociación fue puesta en conocimiento del Congreso el 30 de noviembre. Los fundamentos en los que se basaba dicho acuerdo señalan la inferioridad militar peruana, los conflictos simultáneos en la delimitación de fronteras que Perú tenía con Bolivia,

²¹⁹ Esta capacidad de revisión de la Corte Suprema tenía algunas limitaciones: *“La ley dispuso que la Corte juzgara solamente en el caso de las dualidades dentro de un periodo breve, como jurado, en una sola sesión y sin mas pruebas que las que presentaran los interesados.”* (Basadre; 1980: 72).

Ecuador y Colombia, y el abandono en que se encontraba la solución de estos problemas. Obviamente que el punto más cuestionable para los intereses peruanos era la dilación del plebiscito, que daría tiempo para la “chilenización” de dichas provincias²²⁰; sin embargo, se argumentaba que *“era necesario al Perú el transcurso de algún tiempo para consolidar las instituciones, acrecentar su hacienda, robustecer sus energías, levantar su moral, colocarse en aptitud, en fin, de luchar dignamente y de triunfar”* (Ibid: 239).

A pesar de que el parlamento peruano no llegó a ocuparse de esta iniciativa del Presidente Billinghurst y refrendada por los cancilleres Varela del Perú y Hunneus de Chile; hacemos referencia y comentario de esta negociación por que la misma suscitó una fuerte oposición en ciertos sectores de la opinión pública y sobretudo en muchos oficiales del ejército peruano, de tal magnitud que una de las razones que Basadre (1968: 299) señala para explicar el movimiento cívico militar que derrocó a Billinghurst fue esta propuesta de postergación del plebiscito para la definición de la territorialidad de las provincias de Tacna y Arica²²¹.

El gabinete Malpartida fue de corta duración (3 meses), confirmando la tendencia de una alta rotación ministerial cuando el Ejecutivo no cuenta con una bancada mayoritaria propia en el parlamento. La renuncia del gabinete estuvo vinculada con el asalto y destrucción de la imprenta Berrío (que publicaba un periódico leguista de oposición llamado El Mosquito) por grupos populares a fines al Presidente el 19 de diciembre de 1912. El senador demócrata Joaquín Capelo presentó una interpelación al ministro de gobierno y premier Malpartida acerca de este suceso, sin embargo la demora en la respuesta provocó un voto de censura en ambas Cámaras, las cuales tenían mayoría de la bancada leguista. La respuesta inmediata de Billinghurst a la caída de su gabinete (23 de

²²⁰ Según una fuente histórica chilena: *“El acuerdo era favorable a los intereses chilenos. Podíamos dar por definitivamente resuelto el problema del norte y considerar como seguro nuestro triunfo en el plebiscito, con once años para chilenizar la región.”* (Rivas: 1964: 330, v. I).

²²¹ *“Las dificultades internacionales impidieron que avanzara la tramitación de este asunto. Pero las huellas que él dejó se hicieron visibles hasta en la misma madrugada del 4 de febrero de 1914. Había sido ya depuesto el Presidente y salía preso de Palacio cuando se oyó una voz (se ha dicho que fue la de Rafael Grau) para acompañarlo con una exclamación insultante: “Muera Chile”.* (Basadre: 1968: 240-1, v. XII)

diciembre) fue intempestiva y elocuente²²², ordenando el retiro de los proyectos de ley que había enviado el Ejecutivo a la legislatura extraordinaria, lo cual prácticamente implicó el cese de la misma, por encontrarse sin agenda que debatir.

El reemplazó ministerial (24 de diciembre) no implicó mayores cambios, de tal forma que el General Varela asumió la presidencia del Consejo de Ministros (desde su misma cartera), mientras que el nuevo ministro de Gobierno fue Abel Montes. Uno de los acontecimientos más importante durante la gestión de este gabinete fue la huelga general de los trabajadores del puerto del Callao el 7 de enero de 1913. Hemos visto anteriormente que el apoyo de los sectores populares en la campaña electoral de Billinghurst fue generando un vínculo e identificación mutua entre el Presidente y los trabajadores. Ya en un mitin espontáneo previó a su elección, *“Billinghurst se dirigió a la multitud desde la ventana, vivó a la clase obrera y señalaba que, de llegar la poder, sería el “primer obrero”. Pueblo y líder empezaban a reconocerse mutuamente”* (González; 2002: 202). En tal sentido, en vísperas de que Billinghurst asuma la presidencia (24 de setiembre), los trabajadores se sintieron incentivados a reclamar mejores condiciones laborales²²³. Fue así, que empezaron las primeras huelgas: los trabajadores de la fábrica de tejidos Santa Catalina (4 de setiembre), los electricistas de las Empresas Eléctricas Asociadas (18 de setiembre)²²⁴. De este modo, una de las primeras tareas de la agenda presidencial fue afrontar tales conflictos laborales.

²²² Piérola refiriéndose al carácter temperamental y explosivo de Billinghurst dijo *“que entregarle el poder era como darle un arma a un niño y que nunca puede gobernar bien al país quien no sabe gobernar sus nervios”* (Ibid: 297).

²²³ En el mensaje de asunción de la presidencia, Billinghurst dice: *“El interés bien entendido del Gobierno reclama su actuación incesante sobre las grandes colectividades trabajadoras, a fin de prepararlas, con un claro concepto de sus deberes y verdadero acierto, por la evolución social que se opera en la hora presente; satisfaciendo, desde luego, con justicia y equidad, las necesidades de esa clase que tiene de hambre de cariño y benevolencia”* (Billinghurst; 1913: 73).

²²⁴ *“..... los electricistas renovaron sus demandas y al no ser satisfecha se declararon en huelga el 18 de setiembre, cortando los servicios de electricidad y dejando la ciudad a oscuras. Para no frustrar las ceremonias de la transmisión del mando presidencial, que debía efectuarse el día 24 y como un homenaje al presidente electo, los huelguistas depusieron momentáneamente su actitud y volvieron al trabajo con la simple promesa de que dentro de un plazo de quince días serían atendidos, bajo la garantía del nuevo jefe de Estado. Así ocurrió.”* (Mac-Lean; 1959: 120).

La intervención directa de Billinghamurst en la huelga de obreros de Santa Catalina marcó un hito de los acontecimientos posteriores. Luego de 36 días de huelga, el Presidente logra resolver el conflicto en sólo un día, logrando un pequeño incremento de salarios y haciendo la promesa de que el gobierno iba a proveer de ayuda a dicha industria²²⁵. Sin embargo, tal desenlace no hizo sino estimular nuevas demandas obreras: los panaderos de Lima se declaran en huelga en octubre, y de igual manera los trabajadores de las fábricas de galletas “Arturo Field” y “La Estrella” en noviembre (Blanchard; 1982: 88-9); los cuales también se beneficiaron en la resolución de sus reivindicaciones gracias a la intermediación del Presidente.

Sin embargo, el conflicto laboral de mayor impacto fue la huelga de los estibadores del puerto del Callao. Originalmente, los trabajadores esperaban recibir el apoyo del gobierno a sus demandas de cambios en el sistema de turnos de trabajo, aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, en tal sentido realizaron una petición a las autoridades. Empero, la influencia anarquista influyó en un cambio de estrategia y se declararon en huelga reivindicando la jornada laboral de las ocho horas el 7 de enero de 1913²²⁶. Dos días más tarde, los propios trabajadores rechazaron la orientación radical de la huelga (los anarquistas querían que se realicen sabotajes a las empresas) y optaron nuevamente por acudir al Presidente Billinghamurst²²⁷.

²²⁵ Una comisión de huelguistas conferenció con el Presidente Billinghamurst, en el Palacio de Gobierno, y el día siguiente el propio mandatario, en medio de las aclamaciones de los trabajadores, visitó personalmente la Fábrica de “Santa Catalina”, recorrió todos sus compartimientos, revisó los libros de contabilidad y las existencias, obtuvo de patrones y obreros las informaciones necesarias, conferenció con el Directorio de la negociación y obtuvo para los obreros, lo que ellos pedían desde la supresión del reglamento difamatorio hasta un pequeño aumento de jornales.” (Ibid: 121).

²²⁶ “El cambio fue el resultado de las arengas de dos anarquistas italianos, José Spagnoli y Antonio Gustinelli, representantes de la Federación Obrera Regional Argentina, quienes estaban en el Callao como invitados de los grupos anarquistas locales” (Blanchard; 1977: 259-60, traducción mía).

²²⁷ En una asamblea de los estibadores el 9 de enero “fue decidido el destino de la huelga, pues los jornaleros se hallaban indecisos ante la prolongación del conflicto y el gerente del Muelle y Dársena seguía negándose a acceder a sus peticiones. (...) En la asamblea se hallaban la que podríamos llamar plana mayor del anarquismo limeño, agrupada en “La Protesta”. (...) Ante la propuesta de un sector de los trabajadores en el sentido de recurrir a Billinghamurst, los anarquistas mostraron su total desacuerdo, pero sin ofrecer alternativa alguna al conflicto. En cambio, a los ojos de los trabajadores, la otra propuesta constituía al menos un intento de solución. Esta última posición fue la que finalmente contó con el apoyo de la mayoría. Enseguida se formó la comisión que iría a hablar con el Presidente.” (Parra; 1969: 54-5)

Las expectativas de los trabajadores respecto del éxito de sus demandas no eran altas, tanto por que la huelga sólo involucraba a los estibadores, los antecedentes de huelgas anteriores en las cuales habían sido duramente reprimidos, como por que la jornada de 8 horas no existía en ninguna parte del Perú (y del mundo); sin embargo, la gran sorpresa fue que Billinghamurst logró que se les concedan todas sus reivindicaciones, para lo cual emitió una resolución suprema ordenando la jornada de 8 horas en el Muelle y Dársena del Callao el 10 de enero de 1903 (Yepes; 1972: 239). Esta medida demostraba, no sólo el firme compromiso de Billinghamurst con las demandas de los trabajadores, sino además su voluntad de asumir el liderazgo de este movimiento social, lo cual implicaba el desplazamiento de su competencia más relevante en el movimiento obrero: los anarquistas.

Por supuesto que estos acontecimientos y el progresivo acercamiento del Presidente con los trabajadores alarmaron a los estratos altos de la sociedad (industriales, mineros, hacendados). En efecto, la jornada de las 8 horas podría afectar sus intereses económicos si se generalizaban para todo el país, pero además generaban un fuerte incentivo para desatar una ola de huelgas en toda la clase trabajadora, como realmente sucedió luego tanto en Lima, como en el puerto del Callao. Tales temores le fueron expresados al Presidente por los empresarios en una reunión el 17 de enero; Billinghamurst les dio garantías acerca del restablecimiento de la normalidad laboral, que la jornada de ocho horas correspondía exclusivamente a la modificación del Reglamento de Trabajo del Muelle y Dársena, y finalmente que el Gobierno no intervendría en la forma que lo había hecho con los trabajadores del puerto, y sería imparcial en los conflictos futuros que se suscitasen entre patrones y obreros (Mac-Lean; 1959: 124; Blanchard; 1977: 261).

El dilema de restablecer la normalidad laboral y apoyar las demandas de los trabajadores fue resuelto mediante la dación de un decreto supremo el 24 de enero. Este decreto, que señalaba los requisitos de forma y de fondo para que las autoridades reconocieran la huelga como legal, tuvo el efecto inmediato de frenar la ola de conflictos laborales; sin

embargo no dejó de preocupar los contenidos del mismo en el sector empresarial²²⁸, que como tal representaba una legislación de avanzada en el derecho laboral, aún cuando también contemplaba disposiciones fuertemente represivas para los obreros que la incumpliesen²²⁹.

Aún cuando las declaraciones de Billinghamurst a propósito de este decreto fueron que estaba destinado a terminar con los conflictos del capital y el trabajo que venían perjudicando los sectores económicos y financieros del país (La Prensa: 29 de julio de 1913); Blanchard (1977: 261-2) señala que tras el decreto, el mensaje indirecto de Billinghamurst a los trabajadores era que no podían actuar por su cuenta, y que sólo siguiendo sus reglas, recibirían apoyo del gobierno respecto de sus demandas; mientras que mostraba a los empresarios que era él quien tenía el control de los trabajadores, como efectivamente sucedió cuando hubo un temporal retorno a la normalidad laboral tras la dación del decreto.

La duración del gabinete Varela fue más breve que el anterior (apenas dos meses), ya que tanto el General Varela como el Ministro Maldonado presentaron su renuncia por que decidieron postular como candidatos para la siguiente renovación del tercio parlamentario, lo cual suscitó una nueva crisis ministerial el 24 de febrero de 1913. El

²²⁸ “Parece que el llamado conflicto social está perdiendo su importancia con el decreto del Gobierno reglamentando las huelgas, aunque por primera vez en Lima, y entendemos que en el mundo, se reconoce oficialmente, como lo hace el artículo 4° del decreto que deja entender, el curioso derecho de huelga (subrayado en el original) que no sabíamos que pudiera existir en un país bien organizado y menos en un país cuya organización está en pañales. La huelga no es un derecho, es un arma de los obreros, y decir que hay un derecho de huelga monta tanto como decir que todos los ciudadanos tenemos el derecho de salir a la calle con un revólver, puñal o rifle. Creemos que se trata de un error de redacción, pues, no es aceptable que el señor ministro de gobierno, y menos el presidente, puedan tener la candorosa fatuidad de querer innovar en el Perú los conceptos generales sobre la cuestión social,.....” (Variedades, Año IX, No.257, Lima, 12 de febrero de 1913, columna “De jueves a jueves”; citado en Santistevan: 1980: 37-8).

²²⁹ “Los panaderos, en cambio, amenazaron con declararse en huelga si no se satisfacía su nueva reclamación. (...) Soldados de artillería y del grupo de cazadores se dedicaron a la elaboración del pan para que no faltara en el puerto. Fuerzas de línea y policía incursionaron el 28 (de enero) en los locales y campamentos obreros, clausurando los primeros y reduciendo a prisión a muchos trabajadores. Los ánimos se exacerbaron más aún; pero en cambio, como la huelga se prolongara y los hogares proletarios estaban ya sin recursos, empezaron las defecciones.” (Mac-Lean: 1959: 128). “El testimonio de Delfín Lévano (dirigente obrero anarquista de la época, anotación nuestra), en ese sentido, da cuenta de que el gremio de panaderos tuvo que ceder “por temor a la ley de reglamentación de huelgas” (Martínez de la Torre; 1947: I; citado en Ibid: 44).

tercer gabinete mantuvo la mitad de la composición anterior (Valera, Moreyra y Santolalla) y fue complementada por Federico Luna y Peralta como nuevo jefe de gabinete y Ministro de Gobierno, Carlos Velarde en el ramo de Guerra y Marina, y Felipe Derteano en la cartera de Hacienda. Estos tres ministros no eran políticos sino más bien funcionarios de la administración pública, por lo que la conducción política del gobierno recaía en manos del propio Billinghurst.

Durante el periodo del gabinete Luna y Peralta se realizaron las elecciones de renovación del tercio parlamentario sujetas a la nueva Ley Electoral. Dichas elecciones no pudieron incrementar la casi nula representación congresal favorable al Presidente Billinghurst; incluso el propio premier Luna y Peralta y el ex ministro Varela (ambos cercanos al Presidente) perdieron sus respectivas elecciones por resolución de la Corte Suprema (Basadre; 1980: 79).

Estas fueron las primeras elecciones, en que siguiendo las normativas de la Ley No. 1777, la Corte Suprema intervino para resolver 46 procesos electorales (13 sobre senadurías y 33 sobre diputaciones), de los cuales anuló 6 credenciales de senadores y 33 de diputados, considerando irregularidades como falsedad en las actas o en los votos, suplantación de votos o de personal, intervención de autoridades e incluso asesinato²³⁰. Asimismo, la Corte Suprema procedió a denunciar penalmente a quienes habían cometido delitos electorales, sin embargo muchas de las sanciones no se llegaron a ejecutar.

Un nuevo cambio de gabinete se dio el 17 de junio de 1913 en vísperas del inicio de la legislatura de aquel año. Asumió la jefatura del consejo de ministros, un destacado líder de los demócratas, Aurelio Sousa. Este gabinete de corte plural y político también lo

²³⁰ Basadre (1980: 78-9 y 80; 1968: 236-7) opina que el rol jugado por la Corte Suprema en las elecciones de 1913, 1915, 1917 y 1919 fue imparcial y honesto, lo cual fue un notable avance en el proceso electoral, a pesar de las limitadas funciones que tenía la Corte, ya que sólo pasaban a su jurisdicción lo que las juntas escrutadoras provinciales y departamentales determinaban que podían ser impugnables. Así, las mayores irregularidades se encontraban en las asambleas de los contribuyentes mayores debido a la adulteración de los respectivos padrones, de tal manera que si antes de 1896 era decisivo controlar las mesas o tener el favor de la cámara para que un candidato ganara la elección, a partir de 1912 la clave era dominar la mayoría de esta asamblea, la cual nombraba las mesas receptoras de votos y las juntas escrutadoras.

integraban Francisco Tudela y Varela (civilista) en la cartera de Relaciones Exteriores, José Balta (liberal) en el ministerio de Hacienda, Alfredo Solf y Muro (leguista) en el ramo de Justicia e Instrucción, el contralmirante Melitón Carvajal en Guerra y Marina, y Víctor Castro Iglesias en la cartera de Fomento.

Un hecho altamente significativo fue la muerte del líder demócrata, Nicolás de Piérola, el 23 de junio de aquel año. Previamente y durante el transcurso de su enfermedad lo visitaron personajes de política peruana como el Presidente Billingham, el ex – presidente Leguía, y el nuevo premier Sousa (militante de su partido y fiel admirador del Califa)²³¹. Con Piérola moría también el Partido Demócrata²³², que arrinconado y desplazado de las estructuras de poder, luego había sido derrotado militarmente en cada acción subversiva que intentó a partir de 1908. Así, este partido ya no tendría mas una acción políticamente relevante a partir de 1913, aunque algunos de sus adeptos si jugarían aún roles destacados, como el que desempeñaba en ese momento el jefe de gabinete Sousa.

Piérola fue uno de los fundadores protagónicos del régimen democrático entre 1895 y 1899, líder de la revolución que derrocó a la dictadura de Cáceres y primer presidente del gobierno de este régimen. Al Piérola conspirador de la década de los 70's en el siglo XIX, le sigue el Piérola demócrata y estadista de la década de los 90's, defensor programático de una reforma electoral que permita la realización de sufragios transparentes y justos, forjador de una gran alianza de la clase política que le dio estabilidad política en su primer quinquenio de vida democrática, gobernante respetuoso y promotor de las libertades individuales, sociales y políticas. Sus últimos 14 años de vida (los primeros del siglo XX) fue el periodo de la abstención y el desaliento, cuando a

²³¹ “El mismo día del juramento del Ministerio Sousa, 17 de junio, se dio la noticia de la enfermedad y de la grave postración del Caudillo. La ceremonia de juramentación se retardó, por que antes de ella Sousa, visitó la casa de su antiguo jefe.” (Ulloa; 1981: 463).

²³² En todo caso, era previsible que un partido esencialmente asentado sobre el carisma de su líder, lo acompañe tanto en sus triunfos como también en su destino final, tal como también sucedería una década más adelante con los partidos liberal y constitucional a la muerte de Augusto Durand y Andrés Cáceres, respectivamente.

la ofensiva civilista sólo pudo oponer una estrategia reactiva y errática; la cual conllevó costos que no sólo los sufrió el líder²³³, sino directamente su colectividad política e indirectamente el régimen en su conjunto²³⁴.

Así como Piérola fue el político que despertó las simpatías y la admiración del imaginario popular, así también suscitó la animadversión de la plutocracia, la cual surgió cuando el joven Ministro de Hacienda les quitó el privilegio económico de las consignaciones del guano en 1869. Por otra parte, el Piérola ideólogo introdujo en la política peruana el clivaje social de las diferencias de clase: popular – oligárquico (que luego Billinghurst acentuó durante su breve periodo de gobierno). Esa popularidad y fervor de las masas por la figura del Califa, lo acompañaría en sus últimos momentos y durante el entierro: *“Este acompañamiento de la muchedumbre a Piérola en su último desfile, confundidas gentes de trajes raídos y ropa buena, sin distinción de razas, nivel educacional, profesión, procedencia o edad, (...). Dejó el caudillo demócrata una leyenda, pero no un partido organizado”* (Basadre; 1968: 230, v.XII).

Los incidentes de violencia política que empezaron con el ataque a la imprenta del periódico de oposición “El Mosquito” en diciembre de 1912, se empezaron a generalizar a partir del inicio de la legislatura ordinaria del siguiente año. Sin embargo, estos ataques fueron respuestas a estrategias no menos ilegítimas de la oposición, lo cual nos permite observar nuevamente círculos viciosos de trampas entre los actores políticos, cuya consecuencia más directa es el escalamiento en la intensidad del conflicto.

²³³ “Después de haber sido primer ciudadano del Perú, Piérola había conocido catorce años de contrariedades. Su biografía íntegra fue de 1899 a 1913 tan triste como altiva. Mientras más se adentró en la vejez, más golpes recibió. (...) ... pudo sentir a veces que hallábase sumergido en el olvido, helado infierno para los que aman la gloria” (Basadre; 1968: 229, v.XII)

²³⁴ “Profundo error el del civilismo al no dejar que Piérola volviese al poder. En poco o nada habríase amenguado su preponderancia social; hubiera habido eficiencia y honradez en la administración; y la opinión pública se hubiese envenenado menos, pues fue entonces cuando se acendró el odio a la “argolla”, voceado en editoriales vibrantes por Alberto Ulloa, en el gran diario demócrata y popular La Prensa, prédica que apenas fructificó en una época posterior. La postergación de Piérola dio origen al advenimiento de Leguía, a la reacción demagógica de Billinghurst en 1912, y fue también el antecedente lejano de la crisis de 1919 a 1930.” (Basadre; 1982: 99).

En efecto, el 13 de julio de 1913 el senado incorpora a su cámara a los candidatos Carlos Forero por Tacna y Juan Antonio Trelles por Apurímac, cuyas nominaciones habían sido previamente anuladas por la Corte Suprema. Tal usurpación y desconocimiento de la autoridad arbitral se había realizado bajo la iniciativa liberal y leguista, facciones ambas que había empezado a establecer coordinaciones parlamentarias. La respuesta de los “Comités de Salud” que apoyaban al gobierno fue la realización de un atentado en contra de la casa del Presidente de Senado, Rafael Villanueva (leguista) y un intento de asaltar la casa de ex – Presidente Leguía esa misma noche. El ataque a la casa de Villanueva sólo ocasionó leves daños materiales, sin embargo las turbas lograron penetrar al patio interior de la casa de Leguía, quien con ayuda de sus hijos y empleados lograron repeler el ataque con armas de fuego, resultando un muerto y muchos heridos entre los atacantes. La refriega culminó con la llegada del prefecto Orestes Ferro²³⁵, quien detuvo a Leguía acusándolo de asesinato y conspiración. Posteriormente, Leguía fue sometido a juicio militar, pero salió libre bajo fianza y se exilio en Panamá, donde fue bien recibido por recomendación de la Embajada de los Estados Unidos²³⁶. Desde ese país, Leguía hace las siguientes declaraciones para el diario *Panama Mourning Journal*: “*el Perú se halla en estado de anarquía en que la voluntad del populacho reina como ley suprema, y en que los descamisados han usurpado todas las prerrogativas del gobierno*” (*Panama Journal Mourning*, 22 de agosto de 1913, citado en Gonzáles; 2002: 234).

Los integrantes de los Comités de Salud Pública²³⁷ eran aparentemente trabajadores de una dependencia estatal sanitaria; sin embargo se trataba en realidad de dirigentes obreros, artesanales y refugiados peruanos de la provincia de Tarapacá que apoyaban a Billinghurst y lo hacían a través de ataques físicos y amenazas contra los opositores al

²³⁵ Orestes Ferro fue el famoso guerrillero liberal que participó en la revolución de mayo de 1909, y más tarde fue encarcelado por Villanueva, en ese entonces Ministro del Interior de Leguía. Karno (1971: 172) comenta que es una “*curiosa coincidencia*” que justamente las casas de Villanueva y Leguía hayan sido atacadas y que Ferro fuese la autoridad encargada de arrestar a Leguía y encerrarlo en El Panóptico, cárcel donde él mismo estuvo preso luego del frustrado golpe de estado.

²³⁶ *Siguió a este viaje el de su hermano Roberto, cuyo juramento como Vice – Presidente no había llegado a efectuarse y contra quien se desató una campaña de impresos en las calles*” (Basadre; 1968: 231).

²³⁷ “*Es significativo el nombre y las funciones de este Comité de Salud Pública, pues porta una fuerte carga simbólica, ya que se inspira en Le Comité de Salut Public, que fue el encargado de llevar a cabo el gobierno de terror jacobino durante la Revolución Francesa, identificando enemigos, persiguiéndolos y eliminándolos.*” (Gonzáles; 2002: 232)

gobierno. Uno de los boletines del “El Huracán” que editaba este grupo decía. “Si *el Congreso se mantiene hasta el 28 de julio en actitud hostil, guerra a él, pero guerra terrible y sin cuartel por que sobre todo está la soberanía del pueblo.*” (Records of Department of State Relating to Internal Affairs of Peru, 1910 – 1929, rollo 2).

Como directas consecuencias de estos ataques, hubo una crisis de gabinete por la renuncia de los ministros Balta (liberal) y Solf (leguiísta), quienes protestaron por estos atentados; por su parte el premier Sousa también dimitió ante la inminente censura del Senado. Esta cámara reconsideró el acuerdo de incorporación de Forero y Trelles y la dejó sin efecto.

El quinto y último gabinete de Billinghurst se inició el 27 de julio de 1913 y estuvo nuevamente encabezado por el General Enrique Varela en la cartera de Guerra y Marina, quien regresó acompañado del liberal Baldomero Maldonado en el ministerio de Hacienda, mientras quedaba en su cargo el civilista Tudela y Varela en el ramo de Relaciones Exteriores, Luis Felipe Paz Soldán en el ministerio de Justicia e Instrucción, el coronel Gonzalo Tirado en la cartera de Gobierno y el coronel Pedro Portillo en Fomento, siendo los tres últimos amigos personales del Presidente Billinghurst.

Nuevamente otro atentado conmocionó el ambiente político y social el 10 de setiembre, esta vez fue contra la imprenta del diario La Crónica y las revistas Variedades e Ilustración Peruana. Aunque no se reivindicó este ataque, se presumió que eran nuevamente partidarios del gobierno por la orientación opositora de estos medios de prensa. En este suceso murió el portero de la empresa editora.

Fue en este mes de setiembre que se intensificó el conflicto de poderes entre el ejecutivo y el legislativo que sería la causa de una nueva crisis de régimen y la posterior caída del gobierno de Billinghurst. La primera confrontación fue el tema de la renovación de las autoridades del Concejo Provincial de Lima. En efecto, las elecciones para la Municipalidad de Lima se realizaron a comienzos de junio de 1913, sin embargo fueron objetos de tachas y pasaron al Poder Judicial. En tanto que, por diversas razones, no hubo

cambio de autoridades municipales en 1910, 1911 y 1912; el Gobierno envió un proyecto al Congreso el 11 de setiembre de 1913, por el cual pedían autorización para designar nuevas autoridades ediles hasta el 31 de diciembre de 1914.

En el debate suscitado en la Cámara de Diputados a propósito de esta iniciativa del ejecutivo, se opusieron diputados de las fracciones leguista y liberal. Al término de los debates el 17 de setiembre, manifestantes agredieron a algunos de estos diputados en las calles céntricas de Lima. El diputado leguista Rafael Grau protestó enérgicamente al día siguiente, y la cámara solicitó una explicación del Ministro de Gobierno, y optaron por no seguir deliberando sobre el proyecto de Ejecutivo.

Otro de los temas que suscitó otra confrontación entre el ejecutivo y el legislativo fue el debate sobre el presupuesto de 1914. Desde el 5 de setiembre de 1913, el Presidente Billinghurst había señalado en un mensaje al Congreso, los fundamentos de su propuesta del presupuesto del siguiente año²³⁸. El debate acerca del proyecto presupuestal no empezó inmediatamente, sino hasta muy avanzada la legislatura de ese año, de tal modo que finalmente tampoco resolvieron la aprobación de esta iniciativa gubernamental como correspondía de acuerdo a ley. En todo caso, los congresistas de oposición esperaban que el gobierno sin el presupuesto aprobado convocase a legislatura extraordinaria; empero Billinghurst no lo decidió así, el alejamiento entre ambos poderes del Estado estaba en su punto más crítico.

A pesar que la bancada civilista no se sumaba al gran frente de oposición que se iba conformando en el parlamento y se mantenía en una cautelosa neutralidad, el clivaje político por el que atravesaba esta vez la escena oficial se configuraba nítidamente como el ejecutivo versus el legislativo. La intensidad del antagonismo ponía en perspectiva un dilema de coexistencia; por una parte empezaron a circular los rumores de la deposición

²³⁸ "Billinghurst consideró necesaria la emisión de un préstamo extranjero de 600,000 soles al 6% para invertirlo en satisfacer los compromisos del Estado en orden a diferentes deudas, en la renovación de del material de Guerra y Marina y en alguna obras públicas premiosas entre las que incluye la construcción de escuelas, cárceles y cuarteles, algunos ferrocarriles y habitaciones para obreros." (Basadre, 1968: 272, v. XII).

del Presidente desde julio de 1913²³⁹, mientras que por otro lado el Gobierno consideraba la posibilidad de disolución de parlamento. Un esfuerzo aislado tendiente a aminorar este conflicto fue el banquete que el Presidente ofreció al Congreso con motivo del primer aniversario del gobierno el 24 de setiembre de 1913; sin embargo, el gesto no devino en canales de intermediación que permitiese iniciar un proceso de negociaciones entre representantes de ambos poderes. En todo caso pudo tratarse sólo de un acto protocolar.

La conspiración empezó los primeros días del mes de noviembre de 1913, cuando diputados de oposición²⁴⁰ tuvieron varias reuniones en las que diseñaron una estrategia para derrocar al gobierno. Entre las medidas previstas estaba la redacción de un manifiesto de protesta contra la disolución del parlamento, apelar al ejército y la armada para impedir aquel atentado, y declarar la vacancia de la Presidencia de la República. Asimismo, acordaron que Augusto Durand sería el jefe de la comisión parlamentaria para asumir la defensa de la constitucionalidad, que Rafael Grau se encargaría de establecer los vínculos con los militares, que el diputado García Irigoyen sondearía la posible adhesión de los representantes bloquistas (del civilismo independiente), y finalmente que Balta y Grau conseguirían la mayor cantidad de firmas de diputados y senadores para el manifiesto, especialmente de los presidentes de ambas cámaras (Ulloa; 1946: 324-5-6).

Una vez que el líder liberal Durand aceptó el encargo de la jefatura del movimiento conspirador, tomó contacto personalmente con oficiales del ejército, y previo convencimiento de éstos a partir de que su intervención era solicitada por un poder del Estado, algunos oficiales se mostraron dispuestos a respaldar el movimiento en defensa del Congreso. Durand tendría varias reuniones más con los militares para elaborar el plan de asalto al Palacio de Gobierno y la captura del Presidente Billinghurst.

²³⁹ United States, State Department, *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1913* (Washington, 1920), p. 1143; citado en Blanchard; 1977: 265.

²⁴⁰ Entre ellos se encontraban Arturo Osorio (constitucionalista), Alberto Ulloa (demócrata), José Balta (liberal), Plácido Jiménez (leguista), David García Irigoyen (civilista), Rafael Grau (leguista), Luis Julio Menéndez (civilista) y Oswaldo Hoyos Osorio (constitucionalista), entre otros.

Otro frente de conflictos se abría en este escenario político, se trataba de la segunda ola de huelgas que hubo de afrontar este gobierno hacia fines de 1913. Nuevamente, los trabajadores del puerto del Callao suspendieron sus labores el 17 de diciembre, pidiendo aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Esta situación perjudicaba a Billingham por que contribuía a acrecentar el ambiente conflictivo que ya existía²⁴¹, ponía en duda su capacidad de influir sobre la clase obrera y además por que obstaculizaba un préstamo que había solicitado a financieras inglesas y francesas a través de la empresa Grace²⁴². En tal contexto, se puede entender la dura reacción que esta vez Billingham tuvo frente a esta huelga organizada por la Federación Marítima y Terrestres del Callao. Es así que el Prefecto del Callao, con la aprobación del Presidente, declaró ilegal la huelga, restringió el movimiento de los huelguistas, clausuraron locales y campamentos obreros, y finalmente arrestaron a los líderes sindicales.

No obstante el carácter inusual y riesgoso que esta estrategia representaba para Billingham en su afán de mantener el apoyo popular; sin embargo resultó exitosa, ya que los obreros acudieron a una reunión con el Presidente el 28 de noviembre, quien los reprendió severamente por no seguir las directivas del decreto que regulaba las huelgas, lo cual implicaba “*matar a la gallina que ponía los huevos de oro*”. Por su parte, los obreros reconocieron que la huelga había sido un grave error, la cual había perjudicado los “*altos intereses*” de este régimen; y más tarde acataron con poca resistencia la deportación de sus principales líderes (Fernando Vera y José Robles) a Panamá el 28 de diciembre de aquel año (Blanchard; 1982: 97).

Para mediados de diciembre, el ambiente laboral había vuelto al orden, con el consiguiente beneplácito de los industriales y hacendados. Sin embargo, ello no detuvo la marcha de la conspiración parlamentaria, ni tampoco aminoró los recelos del gobierno respecto de un parlamento que obstaculizaba sus iniciativas, ya que la no aprobación del

²⁴¹ “La intranquilidad social predisponía el ánimo de la opinión pública contra el Régimen, lo que era habitualmente explotado por la astucia de los políticos opositores.” (Mac-Lean, 1959: 129).

²⁴² “En esta situación, como el ministro Británico comentaba, “cualquier levantamiento de la cuestión social podría afectar ciertamente en detrimento de las perspectivas de ese adelante” (Public Record Office, London, UK, F.O. 371/1735; citado en Blanchard; 1977: 266, traducción mía).

presupuesto de 1914 paralizaba el trámite del crédito externo que el ejecutivo venía solicitando, frente a lo cual se presentaba el siguiente dilema: o aprobaba el presupuesto por decreto para lo cual ya no se convocaba a legislatura extraordinaria (tal como había sucedido anteriormente con López de Romaña y Leguía), o disolvía el parlamento y convocaba a nuevas elecciones parlamentarias.

A pesar de que Billinghurst se decidió por la primera opción (aprobó por decreto el presupuesto el 29 de diciembre de 1913)²⁴³, el gobierno no ignoraba la amenaza golpista que se gestaba, ni tampoco descartaba el cese del Congreso²⁴⁴. En lo inmediato, la estrategia que se implementó para defender al régimen era la que había resultado en anteriores ocasiones: la movilización social. Así nuevamente, el Comité de Salud Pública organizó demostraciones públicas de apoyo al gobierno, tanto en Lima como en varias ciudades del interior, en las cuales se reclamaba la disolución de congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Por otra parte, las organizaciones de trabajadores como la Asamblea de Sociedades Unidas, la Federación Marítima y Terrestre del Callao, la Confederación de Artesanos, ofrecen “*su incondicional apoyo a la salvaguarda de los sagrados intereses de la patria, amenazada por las ambiciones de políticos inescrupulosos*” (La Nación, Lima, 28 de enero de 1914; citado en Blanchard, 1977: 268).

Una de las fechas tentativas que los conspiradores fijaron para el golpe de Estado fue el 18 de enero de 1914²⁴⁵; sin embargo, Rafael Grau se opuso a la misma por que proponía esperar a que el Gobierno publique el decreto que disolvía el parlamento, en tanto que

²⁴³ De la misma forma Billinghurst procedió con el proyecto que había enviado al Congreso pidiendo la autorización para nombrar directamente nuevas autoridades ediles, y que no había sido resuelto. El Gobierno nombró nuevas autoridades ediles el 22 de diciembre de ese mismo año, los cuales eligieron como Alcalde al ex –jefe del primer gabinete de Billinghurst, Elías Malpartida.

²⁴⁴ Ya en radical desacuerdo con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y la idea presidencial de eliminar el Congreso, los ministros Tudela (civilista independiente) y Maldonado (liberal) habían presentado su renuncia desde fines de octubre; aunque sólo oficiaron la misma el 24 de diciembre cuando el Gobierno no convocó a una legislatura extraordinaria y tomó varias decisiones por decreto. Los reemplazantes fueron funcionarios leales al presidente: Emilio Althaus en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Armando Vélez en la cartera de Hacienda. (Basadre; 1968: 273, v.XII).

²⁴⁵ Inicialmente el golpe se había programado para mediados diciembre, pero una inesperada orden de traslado del batallón No.7 a Arequipa y del batallón No.9 al cuartel de Santa Catalina en Lima, impusieron una postergación. (Basadre; 1968: 283, v.XII).

para este diputado la magnitud de lo que iba suceder (la ruptura de un largo periodo de “paz interna” iniciado en 1895) sólo se justificaría ante la necesidad de evitar el avasallamiento de las instituciones; *“era, en consecuencia, preciso esperar la expedición del decreto disolutorio o comprobar la efectividad del propósito”* (Ulloa; 1946: 332).

Mientras tanto, los diputados que integraban este selecto grupo, aprovechaban para extender la red social y política contra el gobierno, y para integrar a los altos mandos del ejército. Es así que logran comprometer al jefe del Estado Mayor del Ejército, Coronel Augusto Benavides, sobre quien no sólo recaería el comando del operativo militar, sino además la presidencia provisional. Basadre señala que de no ser por las postergaciones mencionadas anteriormente, la jefatura del Estado hubiese recaído en el líder liberal, Augusto Durand (Basadre; 1968: 284, v.XII).

Los acontecimientos se aceleraron el mes de febrero de 1914. En efecto, entre los días 2 y 3 de febrero el Gobierno y los partidarios de Billinghurst iniciaron una ofensiva contra la oposición; la policía allanó varios locales donde detuvieron a varios diputados y senadores²⁴⁶, y hubo una reunión en el local de la Confederación de Artesanos (una autodenominada asamblea universitaria) donde se reunieron partidarios del Presidente y se distribuyeron armas y organizaron patrullajes amedrentadores en las calles de la ciudad, en los cuales se vivaba a Billinghurst y se hacían disparos al aire.

Mientras tanto, los conspiradores (civiles y militares) intensificaron sus coordinaciones a pesar de las detenciones de muchos de ellos, la orden de inamovilidad para el ejército y de los peligros del caso²⁴⁷, y decidieron dar el golpe para el 4 de febrero ya que en ese

²⁴⁶ Fueron detenidos los diputados Gerardo Balbuena, Néstor Price, Plácido Jiménez (autor del manifiesto), Manuel Jesús Urbina y los senadores Francisco del Barco, Carlos Leguía, entre otros. A su vez varios congresistas como José Balta, Alberto Ulloa, Arturo Osoreo y Francisco Changanauquí buscaron asilo en diversas sedes diplomáticas.

²⁴⁷ Augusto Durand asiste a la reunión del día 2 de febrero en la cual se considera la inminencia del levantamiento, aunque no se decide aún la fecha exacta esperando una nueva reunión al día siguiente en la que concurren los principales jefes militares de la operación. A la salida de dicha asamblea se cruza con fuerzas policiales que habían acordonado su casa y buscaban capturarlo, sin embargo se escapa de la celada y se refugia en un apartado lugar donde permanece incomunicado por varios días. Dicha ausencia lo aparta del escenario principal de los acontecimientos del golpe de estado, de tal modo que es reemplazado en la jefatura de la conspiración por el Coronel Augusto Benavides (Ulloa; 1947: 208).

momento, tenían completamente asegurada la participación de la guarnición de Lima, pero además pesaba mucho en su determinación la ofensiva del gobierno contra la oposición en las últimas horas y los rumores acerca de la creación de “milicias populares” para defender el régimen, las cuales serían apertrechadas con armamento del ejército.

En efecto, hubieron noticias acerca de que el Presidente había dispuesto que se entreguen armas del ejército a los obreros y además de que se iría “*a retirar de Lima, en el día necesario, las tropas de la guarnición y dejaría a la ciudad por 24 o 48 horas a merced de las turbas*” (Ulloa; 1946: 339). A pesar de que Billinghurst negó estas acusaciones en un mensaje que hizo desde el exilio en 1915, el diario La Prensa sostiene que se firmó un decreto por el cual el servicio de artillería quedaba separado de la autoridad del Jefe de Estado Mayor General; esta orden no fue ejecutada por la férrea oposición del General Desvoves, jefe de la misión militar francesa quien amenazó que de no reconsiderarse dicho decreto se daría por terminado el convenio con dicha misión (Basadre, 1968: 281, v.XII). Otro hecho significativo que contribuyó a apresurar la decisión de los conspiradores fue la orden presidencial para desarmar a la Columna de Zapadores y al Regimiento No.3 del ejército acantonado en la ciudad de Lima, que debía efectuarse para el día 4 de febrero²⁴⁸.

La ejecución del golpe se inicia en la madrugada del 4 de febrero, cuando el Regimiento No.3 de Caballería, el Batallón No.9, la Sección de Artillería de Montaña y el Regimiento Escolta se reunieron en el Parque de la Exposición, y bajo el mando del Coronel Benavides iniciaron la marcha hacia Palacio de Gobierno²⁴⁹. A pesar de la inicial

²⁴⁸ “Además, todos ellos se habían dado cuenta desde la noche del lunes (3 de febrero), una vez producida la renuncia del jefe del Estado Mayor Coronel Benavides, que tanto este como el comandante Urdanivia y algunos de los oficiales comprometidos en el movimiento, estaban tenazmente espiados y fuera de ellos, siendo en consecuencia, posible su apresamiento y el fracaso de la conjuración, en cualquier instante.” (Ulloa; 1946: 346).

²⁴⁹ Una fuente primaria muy detallada de los acontecimientos acerca del golpe de estado de 1913 lo encontramos en el artículo *El Movimiento Político – Militar del 4 de febrero* inserto en el libro *Reflexiones Históricas* de Alberto Ulloa (1946: 319-71); este artículo es publicado antes en el diario La Prensa en los días inmediatamente posteriores a estos eventos políticos. El autor es connotado periodista y cronista de la época y es elegido diputado en 1913, además participa desde sus inicios en la conspiración contra Billinghurst; no obstante haber sido uno de sus principales apoyo de su candidatura en 1912 y en los primeros meses de su gobierno.

resistencia del cuerpo de Gendarmes que resguardaba la sede del gobierno, la avanzada militar logró reducir toda oposición armada, capturaron al Presidente Billinghurst y lo obligaron a su dimitir, posteriormente es mantenido preso unos pocos días y luego exiliado a Chile²⁵⁰.

A la caída de Billinghurst, se constituye una Junta de Gobierno provisional compuesta por todos los partidos políticos presentes en el Parlamento: coronel Augusto Benavides en el ministerio de Guerra y Marina y Presidente de la Junta, Rafael Grau (leguista) en la cartera de Justicia e Instrucción, Arturo Osorio (constitucionalista) en el ramo de Gobierno, José Balta (liberal) en el Ministerio de Hacienda, Benjamín Boza (demócrata) en la cartera de Fomento, y José Matías Manzanilla (civilismo bloquista) en el ministerio de Relaciones Exteriores²⁵¹.

Dos hechos relevantes a reseñar al término del gobierno de Billinghurst son los siguientes: la muerte del General Varela (ministro de Guerra y Marina, y jefe del último gabinete de Billinghurst) y la tranquilidad pública luego del derrocamiento del Presidente. El General Varela, en previsión de cualquier intento subversivo, fue a dormir al cuartel Santa Catalina la noche del 3 de febrero, confiando en que su sola presencia sería un disuasivo eficaz para alguna maniobra golpista; sin embargo, algunos oficiales del Batallón No.9, que estaba acantonado en ese cuartel, formaban parte de la conspiración y para proceder a movilizar a sus tropas debían neutralizar al General, quién resultó muerto al momento de responder el intento de un grupo de soldados para que se rindiese. Finalmente, es sorprendente encontrar una absoluta calma social en los momentos posteriores al golpe de estado, de tal modo que ninguna organización popular u obrera

²⁵⁰ Billinghurst radica un tiempo en Arica, luego por presión de la cancillería peruana es obligado a salir de allí y se dirige a Iquique, donde fallece el 15 de junio de 1915 a los 64 años de edad. Sus restos son repatriados a Lima el 20 de setiembre de 1916 por acuerdo del mismo Congreso que había derribado a este presidente, y recibe un homenaje oficial y sobretodo de nutrida participación popular.

²⁵¹ La inclusión de Manzanilla en esta Junta de Gobierno tuvo ciertas resistencias dado que su partido no había participado activamente en la conspiración, sin embargo la idea de que la nueva Junta de Gobierno sea investida con la máxima autoridad luego del golpe de estado, implicaba una composición que integrase a todos los grupos políticos. Cabe anotar que a pesar de actitud moderada que el civilismo bloquista mantuvo frente a Billinghurst, la Junta Directiva de este partido político envía una carta al Presidente el 30 de enero de 1914, en la cual le expresan su radical desacuerdo con la posibilidad de la clausura del Parlamento, y señalan que cualquier reforma constitucional debía realizarse en el marco de la ley.

salió a protestar o manifestar activamente (mucho menos a resistir violentamente) su desacuerdo con la deposición de Billinghurst.

Balance Analítico del Gobierno de Billinghurst

La evaluación de este gobierno nos permite distinguir dos etapas: el consenso y la polarización. El periodo de Billinghurst se inició con buenas perspectivas²⁵². En primer lugar, el acuerdo mayoritario con que fue electo como presidente no sólo rompió la bipolaridad existente (leguístas versus antileguístas) sino presentó la oportunidad de constituir un nuevo compromiso entre la élite política nacional. En segundo lugar, un nuevo equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo (en la medida que Billinghurst es electo a través del parlamento), la equidistancia que el nuevo presidente tiene con el conjunto de los partidos políticos, y la inexistencia de un partido oficial que sostenga las iniciativas oficiales, fueron un incentivo para la formación de gabinetes multipartidarios y consensuales²⁵³. Finalmente, la entrada en la escena política de un emergente sector popular pudo hacer más incluyente el régimen político.

Fue en este ambiente de acuerdo multipartidario que una de las cuestiones de mayor preocupación y controversia de la clase política logró una solución consensuada: la reforma electoral. Asimismo, un tema que solía ser objeto de desavenencias entre el ejecutivo y el legislativo fue resuelto casi unánimemente: la aprobación del presupuesto anual de 1913²⁵⁴. Sin embargo, la primera irrupción de los sectores populares (asalto de la

²⁵² “El camino está llano. Tenemos en derredor del señor Billinghurst una gran conjunción de partidos que saben que el nuevo mandatario representa garantía eficaz para la realización de ese ideal. Respétese el derecho de todos; abrase el campo electoral; sean las autoridades, al encarnar tal independencia, representantes del Gobierno y no cómplices del candidato, y se resolverá fácilmente el problema de la política interna en la fórmula sencilla de la preponderancia de las mayorías ciudadanas.” (Editorial del diario La Prensa, 24 de setiembre de 1912).

²⁵³ “Poder ejecutivo compartido en una amplia coalición. En contraste con la tendencia del modelo Westminster a concentrar el poder ejecutivo en un gabinete mayoritario de un solo partido, el principio de consenso es permitir a todos, o a los partidos más importantes, compartir el poder ejecutivo en una coalición amplia” (Lijphart, 1999: 34, traducción mía).

²⁵⁴ Otra iniciativa del ejecutivo altamente controversial como fue la propuesta de modificación del artículo 4to de la Constitución, que proscribía otras religiones que no fuera la católica, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas, a pesar de la críticas acerbas que suscitó en el clero peruano. (González; 2002: 228)

Imprenta Berrío en diciembre de 1912) es el inicio del quiebre de las relaciones de cooperación entre el ejecutivo y el resto de partidos políticos.

Las explicaciones del golpe de Estado de 1914 son diversas; sin embargo una de la más recurrente es la interpretación marxista, por la cual Billinghurst representó una amenaza política y social contra la clase dominante. Villanueva (1962: 47) señala: *“El ejército volvió a las andadas, volvió a intervenir en política, mas no a favor de un caudillo como antaño, ahora lo hizo para proteger los amenazados bolsillos de la clase dominante”*²⁵⁵; asimismo Yepes (1972: 241) dice que la clase dominante se vio expuesta a un juego político extremo y peligroso, y por tanto *“la coyuntura obliga al grupo hegemónico a apoyarse en un ejército que tome partido por él directa e indirectamente, a fin de restablecer la correspondencia entre el poder económico y el poder político.”* También Cotler (1986: 176) tiene una lectura similar del desenlace del gobierno de Billinghurst: *“Evidentemente, el Presidente había ido muy lejos sin contar con los recursos necesarios para asegurar sus objetivos revolucionarios. Con la movilización popular Billinghurst ponía en peligro las bases mismas del régimen de dominación y el fundamento mismo de la sociedad capitalista – dependiente. La gravedad de la situación motivó que la clase dominante se aglutinara y convocara al Ejército como un medio de asegurar la vigencia del sistema de dominación social.”*²⁵⁶

Incluso una versión reciente y más matizada del proceso político y social de la época, no deja de apelar a una argumento estructural y clasista: *“Evidentemente, Billinghurst cuestionó –aunque sólo a medias – las bases sobre las que se edificó el orden oligárquico, y esa fue la razón última que explica la interrupción de su mandato constitucional”* (González; 2002: 252). Estas bases sería para el autor: un parlamento como expresión de los poderes locales, un poder ejecutivo controlado por grandes familias y una estrecha relación entre la Iglesia Católica y el Estado (Ibid.: 254).

²⁵⁵ “Los hechos ulteriores habrían de demostrar que Urdanivia sólo fue el instrumento material de la acción, Benavides el testaferro y la burguesía la autora intelectual de la insurrección.” (Villanueva; 1973: 151)

²⁵⁶ Estas versiones forman parte de una interpretación socio estructural del conjunto del periodo político conocido como la República Aristocrática, la cual es criticada en el capítulo I de la presente investigación. donde además se propone un modelo alternativo de análisis político para este mismo periodo.

Evaluación algo más compleja (aunque afin a las anteriores) de este proceso político es el que presenta Blanchard cuando señala que la razón principal del golpe de estado fue que Billinghurst cuestionó el viejo orden (*“Under his tutelage the workers were becoming too disrespectful, too bold”*) de tal manera que las reglas del sistema político fueron alteradas y que los intereses económicos de los grupos de poder fueron afectados (1977: 270), identificando a los protagonistas del golpe como la alianza de políticos, oficiales del ejército y empresarios (ibid: 271). Sin embargo, Blanchard también señala otras razones adicionales que explican el golpe de estado. Por una parte, las ambiciones políticas del líder liberal Augusto Durand por llegar a la presidencia; y por otra parte, el alto grado de descontento que los militares tenían contra Billinghurst por tres razones básicas: la sospecha de que el gobierno recortaría su presupuesto para beneficiar a los obreros, las buenas relaciones que Billinghurst mantenía con Chile y la consiguiente propuesta de posponer el plebiscito en las provincias cautivas de Tacna y Arica para decidir la soberanía de las mismas, y finalmente lo que más alteró los ánimos militares fue la posibilidad de la creación de milicias populares, tal como sucedió el día anterior al golpe, cuando se dieron armas a partidarios obreros y universitarios del Presidente (Blanchard; 1982: 99 – 100).

Un tipo de explicación diferente es el que hace Gerlach (1973; Cap.5) cuando señala que la irrupción cívico militar fue una reacción de los partidos contra un presidente que intentaba infringir la constitución, disolver el Congreso y convocar elecciones para una renovación total del mismo. Tal lectura se sustenta en que el golpe contaba con el apoyo de todos los partidos políticos (aunque ajustándonos a los hechos no fue así exactamente, ya que no participaron inicialmente los civilistas del bloque y los demócratas), si bien podríamos añadir el argumento de que la composición final de la Junta de Gobierno provisional sí tuvo la composición consensual de todos los partidos políticos y la aprobación unánime de los congresistas que se reunieron el mismo día de los acontecimientos.

Esta lectura se ajusta a lo que los propios actores políticos señalan luego de su exitosa intervención. Ulloa, uno de los más activos conspiradores, señala refiriéndose al derrocamiento de Billinghurst: *“el Perú ha estado lejos en esta ocasión de operar un pronunciamiento de cuartel, una revolución, una rebelión misma, contra un régimen constitucional, por malo que él fuese, su actitud ha sido exclusivamente en defensa de sus instituciones”* (1946: 371). Otro de los personajes de la época es el civilista Germán Arenas²⁵⁷, quien reconociendo en sus memorias que uno de los motivos de alarma y descontento de la clase política era los grupos armados que merodeaban las calles y además que Billinghurst había alentado las exigencias de las clases populares, señala que el motivo determinante en la caída del Presidente fue que *“desde mediados de 1913, se dijo cada vez con más insistencia, hasta por personas de las esferas oficiales, que Billinghurst irritado con la sorda oposición que le hacían las Cámaras Legislativas, compuestas en su mayor parte por leguístas, tenía el proyecto de expedir un decreto disolviendo el Congreso, acto no permitido por la Constitución del Perú y al que se consideraba, por lo mismo, dictatorial”* (Arenas; 1941: 84 -5).

Asimismo, el propio manifiesto que los conspiradores redactan para defender su posición, señalaba: *“La decisión del Poder Ejecutivo de cancelar dictatorialmente los poderes del Congreso y convocar a elecciones generales de Senadores y Diputados, para sustituir un Parlamento legal, con otro que no puede serlo, constituye un gravísimo delito contra la Soberanía Nacional, cuya manifestación más sustantiva es el Poder Legislativo, ejercido por el congreso”*. (s/a; 1916:71). Este manifiesto es suscrito por 88 congresistas, que constituirían el 54% del congreso.

Un criterio genérico en común que podemos tomar de ambos tipos de interpretación, sería que Billinghurst puso en peligro las bases del régimen de esta “república aristocrática”, pero la divergencia respecto de esta afirmación es si se trata de las bases formales y constitucionales (separación e independencia de poderes), o las bases económicas y

²⁵⁷ Arenas fue ministro de gobierno durante el último gabinete de José Pardo entre 1907 y 1908, y vicepresidente de la Cámara de Diputados durante los años de 1909 a 1910; también integró la Junta Directiva del Partido Civil Independiente en diversas oportunidades.

sociales sobre las cuales una clase asentaba su dominio sobre otra. Púdiere ser que ambos tipos de motivaciones (defender la constitución o defender los intereses socio-económicos de la oligarquía) haya movilizó la acción cívico-militar con que se derrocó el gobierno de Billinghurst. Sin embargo, nuestra orientación investigativa nos conduce a tratar de explicar la dinámica por la cual los acontecimientos políticos desembocan en el desenlace reseñado.

Las primeras divergencias serias entre el ejecutivo y el legislativo ocurren en diciembre de 1912 (censura al gabinete Sousa). La reacción de Billinghurst fue el retiro de los proyectos que el gobierno había enviado a la legislatura extraordinaria, con lo cual se aseguraba un periodo de ausencia de oposición parlamentaria al menos hasta el inicio de la siguiente legislatura ordinaria en julio de 1913. Sin embargo, este primer enfrentamiento mostraba al Presidente la profunda dependencia y debilidad que tenía respecto de un Poder del Estado, en el cual no contaba con una representación propia.

A inicios de 1913, sucede un acontecimiento sindical de particular relevancia política: la huelga de los trabajadores del Callao y el consiguiente éxito de la estrategia de Billinghurst para lograr un respaldo político de la clase obrera (resolución suprema de las ocho horas para los trabajadores del Muelle y Dársena del Callao –10 de enero–) y para mantener simultáneamente la paz laboral (decreto de reglamentación de huelgas – 24 de enero –). Esta consolidación de sus relaciones con el joven movimiento obrero permitiría configurar una estrategia distinta de las relaciones del Presidente con el Congreso; de tal manera que el soporte del movimiento popular podría compensar la ausencia de un respaldo político propio en el parlamento²⁵⁸. Probablemente, Billinghurst también haya tomado muy en cuenta para esta evaluación, su propia elección como Presidente a partir de una sorprendente movilización social, que hizo posible la derrota de la maquinaria legal con que contaba el candidato oficialista, Antero Aspíllaga.

²⁵⁸ En las elecciones de renovación del tercio parlamentario de junio de 1913, Billinghurst no logra un resultado favorable que le permita contar con una bancada parlamentaria mínimamente significativa, por lo que el Congreso sigue siendo un ámbito completamente fuera de su control y en la cual tiene que depender de los partidos políticos.

Si el 12 de diciembre de 1912 se produjo el primer ataque violento contra un periódico de oposición por “*turbas del elementos populares adictos al Presidente*” (Basadre; 1968: 227, v.XII); es partir del inicio de la legislatura del siguiente año (junio de 1913) cuando esta forma de presión y chantaje se convierte en una práctica recurrente (atentados contra el Senador Villanueva, la casa del ex – presidente Leguía, el diario La Crónica), e incluso se organizó un grupo especialmente encargado de estas tareas ilícitas: el Comité de Salud Pública²⁵⁹, el cual además de la impunidad que tenía, contaba con recursos económicos y armas, e incluso hasta contar con su propio medio de expresión: “El Huracán”²⁶⁰.

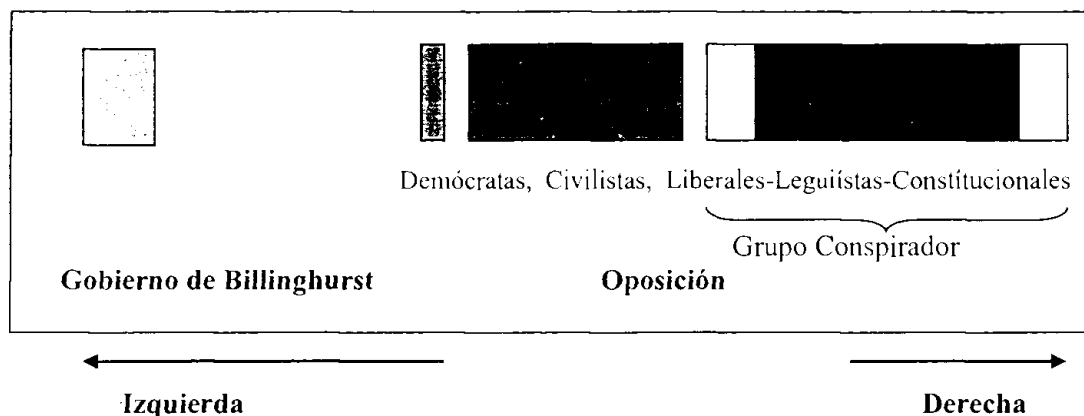
Podemos observar entonces que a partir del inicio de la legislatura de 1913, la intensidad del conflicto se acentúa notablemente, así como la ruptura de las reglas de juego entre los actores políticos; por otro lado Billinghurst no deja de mantener relaciones cordiales con los civilistas, quienes respondiendo a su táctica tradicional, pretenden cooptar al Presidente sutilmente y le prestan apoyo de sus políticos para los sucesivos gabinetes, hasta el momento en que la gravedad de los acontecimientos restringe la composición ministerial a personas muy allegadas al Presidente.

Unos meses previos al golpe, el escenario político estuvo configurado por una clara bipolarización entre el ejecutivo y el legislativo, (tal como se muestra en la siguiente figura), en la cual podemos observar un gran aislamiento de Billinghurst y por otro lado un importante sector de la oposición (los civilistas independientes) que no se decide, sino hasta el último minuto, a aprobar la iniciativa golpista del grupo conspirador. En este conflicto de poderes, no existía mediación alguna, ya que el Presidente no tienen interlocutores suyos en el congreso y la composición del gabinete, a partir de mediados de diciembre, no tiene ministros que pertenezcan a un partido político.

²⁵⁹ “un organismo semioficial del gobierno que el ministro Británico en el Perú describió como: un grupo numeroso y misterioso de hombres que decían hacer trabajos de sancamiento para el gobierno, pero que también estaban listos para servir como medio de expresión de los deseos del Presidente” (Blanchard; 1982: 95, traducción mía).

²⁶⁰ Este boletín tiene un marcado tono agresivo y violento contra los políticos opositores, los cuales “debemos linchar sin misericordia”, y “(debían) pagar con sus vidas la infamia de sus actos”, asimismo contra el Congreso al que amenazaban con “una guerra terrible y sin cuartel” (González; 2002: 233-4). También existieron otros medios de prensa favorables al Presidente como el periódico obrero “La Acción Popular” y el órgano oficial “La Nación”.

Figura No 7: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Billinghurst en enero de 1914.



Por tanto, esta bipolarización extrema y alta conflictividad tiende a incentivar estrategias distributivas en un juego de suma cero, es decir una orientación de los actores por emplear estrategias ilegítimas (trampas). Así, los actores se encuentran en un círculo vicioso de interacciones tramposas, en el cual surge inevitablemente el incentivo de asegurar el triunfo definitivo sobre el adversario a través de una trampa del máximo grado: la eliminación del adversario; así, mientras el gobierno trata de generar las condiciones para la disolución del Congreso, la oposición conspira con los militares para derrocar al Presidente. Tal como señala Basadre (1968: 290, v.XII) el alto grado de exacerbamiento entre el Presidente y el Congreso conducía inevitablemente a un choque final, y tarde o temprano “*uno de los dos Poderes del Estado, el Legislativo o el Ejecutivo, habría eliminado al otro*”.

La ventaja de la oposición es su resolución para llevar adelante la conspiración, mientras que la debilidad de Billinghurst es su dubitación para proceder a dar el decreto de la clausura del parlamento. Algunos factores desaniman al Presidente para el golpe respectivo: la oposición a esta medida por parte del Partido Civil Independiente, no contar con el apoyo de altos oficiales del Ejército y la Marina. En todo caso, la eficiencia y velocidad con que evolucionaron los planes sediciosos, demuestran la fuerza de los conspiradores. Mientras que del lado oficialista, las fuerzas de apoyo al Presidente

Billinghurst no estaban institucionalizadas y constituían tan solo un entorno informal alrededor de su líder, asimismo el movimiento popular era aún incipiente y no estaba en condiciones de ser un adversario relevante contra la poderosa alianza que constituía la clase política y los altos mandos del ejército²⁶¹.

En síntesis, nuestra interpretación del golpe de Estado del 4 de febrero de 1914 radica en que el conflicto devino en una nueva bipolarización: ejecutivo versus legislativo; con una intensidad tal que configuraron una dinámica de juego político absolutamente extrema y distributiva: el que elimina al adversario gana. Todas las otras razones aducidas anteriormente para explicar esta crisis del régimen son de algún modo también válidas, sin embargo se subsumen en el clivaje principal, tal como aparece en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 6
Esquema de oposiciones en juego político en el periodo de junio
de 1913 a febrero de 1914 (Gobierno de Guillermo Billinghurst)

CLIVAJES	OPOSICIONES	
Clivaje Principal	Ejecutivo	Legislativo
Clivaje Social	Popular	Oligárquico
Clivaje Económico	Obreros (jornada de las 8 horas)	Empresarios y Hacendados
Clivaje de Política Externa	Acuerdo Perú – Chile sobre las provincias cautivas	Nacionalismo

Fuente: Elaboración propia.

El golpe de Estado representó la expresión mayor de una nueva crisis de régimen, pero también una solución, al menos parcial, de la misma; ya que se resolvió un grave conflicto político producto de una bipolarización extrema mediante un acuerdo institucional (una Junta de Gobierno provisional) que involucraría a todos los partidos políticos del momento. Sin embargo, la escena política ya no sería la misma, entre otras

²⁶¹ Nuestra explicación de los acontecimientos coincide más con la lectura que ofrece Basadre sobre estos mismos hechos: "El tardío ataque frontal al Congreso, después de casi año y medio de Gobierno en convivencia con él, resultó una maniobra anunciada demasiado tiempo y sumamente peligrosa, pues ayudó a agruparse a muchos hombres poderosos de la capital y en las provincias frente al peligro común. (...) Así se formó una poderosa corriente conservadora frente a tres peligros: 1) la amenaza de que el Estado se lanzara a un salto sobre el vacío al salirse de la Constitución, 2) los desmanes plebeyos con la perspectiva de las milicias populares y 3) la política pacifista internacional." (Basadre: 1968: 299)

razones por que el escenario político tiene nuevos protagonistas: el ejército y el movimiento obrero.

4.3. Coronel Oscar Benavides (1914 – 1915): los vaivenes del consenso.

La Junta de Gobierno presidida por el coronel Benavides pareció resolver transitoriamente el problema acerca de la continuidad del régimen. Aunque inicialmente Benavides se rehusó a formar parte de la nueva junta de gobierno,²⁶² sólo aceptó integrarla y presidirla cuando se le propuso la composición consensual del gabinete y que sólo duraría hasta la instalación oficial del Congreso. A pesar de que el Congreso se constituyó sin los dos tercios de asistentes que exigía la Constitución, aunque sí más de la mitad de sus representantes, no hubo ninguna impugnación al procedimiento de instalación, ni a la elección de la Junta de Gobierno, ni menos alguien que defendiese al ex – gobernante caído y desterrado. El consenso parecía resurgir como colofón de esta nueva crisis del régimen.

Augusto Benavides nació en Lima el 15 de marzo de 1876. Ingresó en la escuela militar en 1890 a la edad de 14 años y egresó con honores a principios de 1894. Luego, participó con el grado de subteniente en la guerra civil entre Cáceres y Piérola, como parte de las fuerzas gobiernistas en la Brigada de Artillería “Dos de Mayo” en el puerto del Callao. A raíz del triunfo de los revolucionarios se le da de baja por cinco meses, mas luego es reincorporado en la Segunda Compañía del Batallón Callao No.5 en agosto de 1895. Ingresa a la recién creada Escuela Superior de Guerra a cargo de la misión militar francesa, de donde egresa como Sargento Mayor con las primeras calificaciones a fines de 1906, motivo por el cual es destinado a un curso en Francia, a donde viaja a principios de siguiente año. Se incorpora al Ejército francés como parte de su misión de estudios, en el cual sirve por 3 años y 10 meses, y regresa al Perú a fines de 1910 con el grado de Comandante. En julio de 1911 dirige una expedición a la selva peruana para recuperar

²⁶² “Señores, nunca quise, ni siquiera remotamente, figurarme la idea de una intervención política militar con mi persona. Terminado el acto de fuerza y afianzado el orden institucional de mi país, doy por terminada mi misión, por que así es mi profundo convencimiento, y es necesario que deje constancia que el movimiento que acaba de realizarse no llevaba el menos interés personal, ni de ninguno de los miembros del Ejército, pues sólo nos ha guiado un ideal patriótico y profesional” (S/A; 1976: 221).

territorio peruano ocupado por el ejército de Colombia, operación militar que logra su cometido y por el cual es ascendido a Coronel. Esta hazaña le permite alcanzar un gran prestigio a nivel nacional y es recibido efusivamente por las poblaciones de Lima y Callao (luego de un periodo de convalecencia de seis meses en Europa) el 12 de abril de 1912. El Coronel Benavides es nombrado jefe del Estado Mayor del ejército el 17 de octubre de 1913 por el Presidente Billinghurst, siendo destituido el 3 de febrero de 1914, un día antes del golpe de Estado, previamente desde el 20 de enero ya había establecido conversaciones con los líderes parlamentarios Durand y Grau que propiciaban la deposición de Billinghurst (S/A; 1976; Paz Soldán; 1921: 53). A la fecha del levantamiento cívico – militar, el coronel Benavides era el militar de mayor prestigio y popularidad.

El acuerdo político logrado luego de la caída del gobierno de Billinghurst y expresado en la composición multipartidaria de la Junta de Gobierno, pronto desaparece ante el problema de la sucesión presidencial²⁶³. Surgen dos posiciones, la primera es defendida por el Partido Civilista (fracción leguista) y el Partido Liberal, quienes proponían que correspondía al primer vicepresidente Roberto Leguía reemplazar a Billinghurst por el resto de su mandato (dos años y medio). La segunda postura es asumida por el Partido Civil Independiente, el Partido Constitucional y el Partido Demócrata, quienes constituyen un frente denominado “Asamblea Nacional”²⁶⁴, y propusieron restablecer la constitucionalidad a partir de la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, ya que el ejecutivo había vacado en su totalidad con el movimiento cívico militar del 4 de febrero²⁶⁵ (Miró Quesada; 1961:416).

²⁶³ “El mandato otorgado a la Junta de Gobierno por la reunión de diputados y senadores celebrada el 4 de febrero sólo debía durar hasta la instalación oficial del Congreso” (Basadre; 1968: 308, v.XII).

²⁶⁴ La Asamblea Nacional estaba presidida por Javier Prado, y tenía un Comité integrado por tres representantes por cada uno de los partidos integrantes: civil independiente, demócrata y constitucional (Arenas, 1941: 90).

²⁶⁵ Billinghurst narra en su manifiesto de Arica (1915: 88) que en la horas siguientes del golpe de Estado, sugirió a Jorge Prado (uno de los conspiradores), que su sucesor podía ser el vicepresidente Roberto Leguía, a lo que éste replicó “*Nosotros no hemos hecho la revolución para Leguía*”. Otros argumentos dados por el grupo opositor a Leguía, es que éste no había juramentado como vicepresidente (los Comités de Salud Pública habían impedido que se realizase dicha ceremonia), y que su elección como vicepresidente por el Congreso, emanaba de una mayoría artificial lograda por imposición ilegítima de un tercio de representantes por parte del ex – presidente Augusto Leguía en 1911.

La correlación en el parlamento favorecía aún a los leguistas, más aún con el apoyo que recibían de los liberales (alianza paradójica ya que unos años antes estos últimos habían organizado revoluciones contra los primeros, mientras que aquellos reprimían con cárcel persecución y destierro a los liberales), asimismo contaban con el respaldo del diario “La Prensa” dirigido por el periodista y diputado Alberto Ulloa. Por su parte, el líder más representativo de la propuesta electoral era Javier Prado, quién fue jefe de gabinete de Leguía, no se asimiló al “bloque” en los años de la escisión civilista y fue partidario de la candidatura de Aspillaga en 1912²⁶⁶. Las intenciones de Prado era presentarse como candidato a estas elecciones presidenciales. Las tradicionales alianzas del primer decenio del siglo XX aparecían cambiadas, ya no existía ahora el antagonismo liberal versus leguistas, o la polarización demócrata civilista²⁶⁷.

Un hecho políticamente relevante fueron los incidentes en torno a las convocatorias para iniciar las sesiones en el Congreso que decidirían el problema de la sucesión presidencial. Efectivamente, hubo hasta 3 intentos de constituir la asamblea plena del parlamento, pero resultaron fracasadas a falta de quórum (dos tercios del total de representantes); sin embargo en una de ellas (21 de marzo) se produjeron choques armados entre partidarios de ambos grupos, producto de lo cual resultó herido el diputado leguista Alberto Salomón, quién se hizo llevar así al recinto parlamentario. Aún cuando el grupo parlamentario de los leguistas – liberales tenían mayoría parlamentaria, no lograban reunir el número necesario de representantes para el quórum de instalación, que era de 121 legisladores. Por lo que la estrategia de los civilistas y constitucionalistas era evitar que se instale el congreso (Basadre; 1968: 310-1).

²⁶⁶ Otro de los cambios inesperados fue el 2do vicepresidente Miguel Echenique, quien había sido elegido con los votos leguistas, pero que optó por renunciar a su cargo (que tampoco pudo juramentar) el 6 de febrero de 1914, se integró al Partido Civil Independiente y asumió la alternativa electoral.

²⁶⁷ En la Junta de Gobierno, la opción de Roberto Leguía era defendida por los ministros Balta (liberal) y Grau (leguista), mientras que la propuesta de elecciones presidenciales era asumida por los ministros Manzanilla (civilista), Osorio (constitucional) y Boza (demócrata).

A pesar que parte de la campaña de los que favorecían la tesis electoral estaba orientada a ganarse a la opinión pública de la época, para lo cual disponían del diario de mayor prestigio como era *El Comercio*, y de otras medidas como la convocatoria de paros laborales (esta vez como iniciativa de empresarios), y conferencias que los parlamentarios más destacados de este grupo (Joaquín Capelo, Alejandro Deustua, José de la Jara y Ureta, Javier Prado) daban para sustentar la propuesta eleccionaria; también hubieron acciones ilegítimas como el ataque de turbas contra personajes del leguismo, así el director y periodista del diario *La Unión* (que defendía la posición del vicepresidente Roberto Leguía) fue atacado por elementos “desconocidos”; y también fue asaltada y saqueada la casa del propio vicepresidente Roberto Leguía ubicada en pleno centro de la capital (Capuñay; 1951: 110, 113).

Fue en estas circunstancias que llegan al Perú dos nuevos protagonistas en este conflicto, por una parte Roberto Leguía que se encontraba en el exilio desde que fue víctima de ataques de los partidarios de Billinghurst; y por otro lado Isaías de Piérola, quien respaldado en el prestigio de su nombre fue aceptado por ambas partes para que oficie de mediador. Una vez que el hijo del legendario Califa asumió dichas funciones y se reunió con todas las partes y con las autoridades de la Junta de Gobierno, propuso que los principales protagonistas del momento (Javier Prado, los hermanos de José Pardo²⁶⁸ y Roberto Leguía) sacrificasen sus intereses y renunciasen a sus pretensiones políticas. Así lo hicieron los dos primeros, pero no Leguía, con lo cual Piérola finalizó su mediación para la sucesión presidencial²⁶⁹, y sólo restaba esperar la instalación definitiva del Congreso, para resolver este conflicto (Basadre; 1968: 311-2, v. XII).

Previo a la reunión definitiva del Congreso, hubo una última negociación entre las partes en conflicto, la reunión se realizó en Palacio de Gobierno, y a ella asistieron el civilista

²⁶⁸ Para esta época (abril de 1914) volvía a aparecer la candidatura de José Pardo y Barreda a la presidencia de la república, aún cuando éste residía en París. Sus hermanos, Luis, Juan y Felipe asumieron su representación para las negociaciones que mantuvieron con Isaías de Piérola.

²⁶⁹ Al término de su tarea, Isaías de Piérola declaró en receso al Partido Demócrata, el cual ya de hecho tenía una mínima representación parlamentaria y el partido mismo no estaba en actividad. Posteriormente, algunos dirigentes demócratas como Pedro de Osma y Carlos de Piérola intentarían infructuosamente darle nueva vida orgánica al Partido.

Javier Prado, los liberales Augusto Durand y José Balta, y los leguístas Rafael Villanueva y Rafael Grau, entre otros. El jefe de la Junta de Gobierno, Benavides señaló que los había convocado para evaluar la propuesta sobre la renuncia de Roberto Leguía a la vicepresidencia y consecuentemente a sus reclamos de la sucesión presidencial. De parte de la alianza leguista – liberal se hizo una contrapropuesta: Leguía renunciaba si así lo hacía simultáneamente la Junta de Gobierno provisional y se nombraba una nueva, y que la composición de la nueva junta incluyera cuatro representantes de la alianza liberal leguista. Una vez más, las negociaciones no llegaron a buen término.

Karno (1971: 180-1) sugiere que una de las formas en que se superó el entrampamiento en el que estaban la Alianza (leguístas y liberales) y la Asamblea Nacional (civilistas, constitucionales y demócratas), fue la propuesta que hicieron estos últimos para que Benavides asuma la presidencia provisional hasta que se convoque a nuevas elecciones. Benavides terminó inclinando la balanza a favor de la Asamblea Nacional a condición de que tenga la facultad de promover los oficiales que considere necesario. La intervención militar decidió por segunda vez un crucial desenlace político en este régimen. Sin embargo, los mecanismos operativos para implementar este acuerdo no fueron legítimos. Así, el 15 de mayo de 1914, los congresistas civilistas y constitucionales llegaron al recinto parlamentario unas horas antes de la convocatoria, la maniobra consistía en no dejar entrar por intermedio del ejército a los representantes liberales y leguístas. Así, se procedió a instalar el Congreso sin el quórum reglamentario (dos tercios de los legisladores) ya que los civilistas y constitucionales sólo llegaron a reunir a 68 congresistas, lo cual no constituía ni la mitad del parlamento.

Otra de las trampas del gobierno consistió en arrestar a varios diputados y senadores con el fin de evitar que se integren a sus cámaras²⁷⁰; no obstante algunos de ellos lograron burlar el cerco militar y penetrar en el recinto donde se procedía a iniciar la reunión, uno

²⁷⁰ El autor del libro “Leguía: vida y obra del constructor del gran Perú”, Manuel Capuñay (1951) de clara orientación leguista, reseña emotivamente las trampas cometidas contra los representantes leguístas, pero no considera que eran las mismas maniobras ilegítimas que poco tiempo antes había implementado el ex – presidente Augusto Leguía, para incorporar a un tercio de representantes al congreso por la fuerza (13 y 14 de julio de 1911).

de ellos fue el diputado liberal Mariano Lino Urquieta, quien interrumpió al vicepresidente del senado Leoncio Samanez²⁷¹ a cargo de dirigir la sesión: *"Me permito preguntar a V.E. con qué quórum se ha instalado el Congreso. Se está consumando un crimen. He cumplido mi deber y seguiré cumpliéndolo hasta llegar al sacrificio"*. Las voces de los demás congresistas y de las barras lo acallaron gritando: ¡Fuera!, ¡Fuera!; haciendo finalmente que Urquieta se retire de la sala.

A pesar de la falta de legalidad de la Asamblea Legislativa, se procedió a elegir al coronel Benavides como nuevo Presidente provisional hasta que se realicen las siguientes elecciones presidenciales, cesando por tanto a la anterior Junta de Gobierno. Esta moción fue aprobada por la mayoría presente, pero con los votos en contra de Manuel Quimper, Alberto Secada y Abelardo Gamarra, quien fundamentaron sus votos en contra, protestando contra lo que consideraban la instauración de nueva dictadura²⁷². El nuevo gabinete estaba encabezado por el General Pedro Muñiz (constitucionalista), quien a su vez estaba a cargo del ministerio de Guerra y Marina, Hildebrando Fuentes (constitucionalista) en la cartera de Gobierno y Policía; Luis Julio Menéndez (civilista) en el ramo de Justicia, Luis Felipe Villarán (civilista) en el ministerio de Hacienda; y los demócratas Joaquín Capelo y Fernando Gazzani en las carteras de Fomento y Relaciones Exteriores respectivamente. Las fuerzas armadas secundaron al nuevo Presidente provisional Benavides, a través de un desfile militar a los pocos días de la nominación del nuevo gobierno.

Paralelamente a esta asamblea, los congresistas de la alianza liberal leguista se reunieron en la casa de Roberto Leguía para proceder a elegir a éste como Presidente. Se trató sólo de un gesto para incitar futuras sublevaciones y para deslegitimar el acto llevado a cabo

²⁷¹ A quien realmente correspondía dirigir la sesión parlamentaria del 15 de mayo de 1914 era al senador Ricardo Bentín como presidente titular de la cámara de diputados, sin embargo el atropello cometido ese día lo induce a renunciar a la presidencia, no reconociendo los resultados de esta asamblea (Miró Quesada: 1961: 417).

²⁷² El diputado Gamarra dijo: *"La legítima mayoría de ambas cámaras es un poder constituido y no es posible que acepte que una dictadura intentada y a la que puso término el ejército en la jornada del 4 de febrero sea sustituida por otra dictadura precisamente recaída en la personalidad de ese mismo ejército, que con semejante borrón no sólo desprestigia la noble carrera de las armas, sino que hunde al Perú en el naufragio de las instituciones"* (Basadre: 1968: 313, vol. XII)

por los partidos civilista y constitucional, ya que al poco tiempo tanto Leguía como Durand salieron al exilio. En todo caso, la legalidad de esta asamblea alternativa a la minoritaria también estaba en duda, ya que tampoco contaban con el quórum constitucional y se había prescindido del otro requisito que era la presencia de los vicepresidentes de las cámaras. Otro parlamentario exiliado fue el periodista Alberto Ulloa, conspirador del movimiento del 4 de febrero y director de La Prensa, no obstante este diario siguió ejerciendo una dura crítica al gobierno de Benavides, sin que se impusiese ninguna restricción a la libertad de expresión.

La respuesta de los “perdedores” de la jornada del 15 de mayo de 1914 fue promover asonadas subversivas e incitar al no pago de los impuestos. Entre ellas estuvieron tres intentos de sublevación: el 23 de mayo en Puno, el 14 de junio en la Escuela Militar de Chorrillos y el 22 de julio en la casa del diputado Balbuena. Todos estos movimientos fueron prontamente descubiertos y sofocados por el ejército (Basadre; 1968: 320; vol. XII).

El Congreso no volvió a reunirse sino hasta la convocatoria a la legislatura ordinaria de julio de 1914. Mientras tanto, luego de los develamientos de los intentos subversivos y el exilio de los principales líderes de la alianza liberal leguista, el gobierno del coronel Benavides pareció asentarse. Sin embargo, el temor que suscitaba la próxima legislatura residía en que la mayoría parlamentaria no acudiera al congreso para aislar al gobierno, o por lo contrario asista con toda su representación y desarrolle una eficaz labor de obstrucción desde el parlamento.

Sin embargo, un giro inesperado tuvieron los acontecimientos, cuando el grupo político leguista se reconcilió con el coronel Benavides, lo que significó una nueva mayoría oficialista en el Congreso, y que Benavides incluso contara con ministros leguistas. Por tanto, el único grupo que quedó en la oposición fue el Partido Liberal, mientras su líder Augusto Durand se encontraba en el destierro; *“el político que pensó sería el beneficiario del cambio de gobierno, resultó una de las víctimas.”* (Miró Quesada; 1961: 418).

El mes de agosto de 1914 fue importante políticamente por cambios en la jefatura del gabinete y por el inicio de la segunda guerra mundial. En efecto, el jefe de gabinete, general Muñiz renuncia el 1ero de agosto aduciendo razones de salud y es reemplazado por el contralmirante Melitón Carvajal, sin que hubiese otro cambio ministerial. Sin embargo, pronto hubo una nueva recomposición ministerial, y el 22 de agosto asume la presidencia del concejo de ministros y el ramo de Justicia, el demócrata Aurelio Sousa (quien también había sido jefe de gabinete de Billinghurst); mientras que Gazzani permanece en su puesto y los nuevos ministros son: el leguista Francisco Paz Soldán en el ministerio de Fomento, el civilista Francisco Tudela en la cartera de Hacienda, Fernando Fuchs en el ministerio de Hacienda y el Coronel Augusto Bedoya en Guerra y Marina. A los pocos días; 18 de setiembre, renuncia Tudela al ministerio de Hacienda y es reemplazado por el premier Sousa, y la cartera de Justicia es asumida por el civilista Daniel Isaac del Castillo.

Los primeros efectos económicos de la primera guerra mundial fueron el pánico financiero, empresarial y una crisis fiscal en el Perú²⁷³. Las iniciales reacciones de la gente fue el ocultamiento de las monedas metálicas y masivos retiros bancarios; por otro lado hubo un descenso del precio de las materias primas de exportación y una contracción del comercio exterior, lo cual repercutió en la balanza de pagos y en consecuencia en el déficit fiscal; afectando a su vez en los ingresos del Estado que trajo problemas para el pago de haberes de los empleados públicos y otros egresos del Estado. Las medidas a tomar fueron urgentes e inmediatas: emisión de cheques circulantes, regulación del despido de obreros y del aumento de los precios de artículos de primera necesidad, reducción del gasto público y moratorias para el pago de deudas.

Esta crisis económica tuvo relevancia política por dos razones. La primera es que el eje de atención se trasladó de la escena política a la crisis económica y al mismo fenómeno de la guerra internacional, lo cual hizo que disminuyese notoriamente la intensidad del conflicto político. En segundo lugar, surgieron discrepancias en el manejo económico

²⁷³ Posteriormente, la guerra sí tuvo efectos positivos en la economía peruana, dado el incremento de las exportaciones agrícolas y mineras, y del comercio (Basadre: 1968: 341, v.XII).

entre el Presidente Benavides y los ministros de Hacienda civilistas,' de tal modo que dos de ellos renunciaron y fueron reemplazados por un ministro demócrata: Sousa.

Un recambio ministerial hubo el 11 de noviembre y Germán Schreiber (civilista) asumió la jefatura del gabinete y la cartera de Hacienda, en reemplazo de Sousa, sin que haya más cambios ministeriales. El programa que propuso el nuevo premier estaba relacionado con el manejo de la economía en el contexto de la primera guerra mundial y propiciar una mayor libertad electoral.

El ascenso del coronel Benavides al grado de general de brigada significó una expresión del nivel de acuerdo al que habían llegado las fuerzas políticas a pesar de los conflictos previos. Es así que se propone en la Cámara de Diputados una moción para el ascenso militar de Benavides sustentado en una ley del 29 de octubre de 1879, por la cual se recompensaba a quienes hayan salvaguardado la existencia de los poderes públicos; el diputado leguista Rafael Grau fue uno de los que sostuvo la moción, la cual fue aprobada por unanimidad menos un voto el 2 de octubre de 1914.

A mediados de diciembre del mismo año, la Cámara de Diputados solicitó al Ministro de Guerra, coronel Augusto Bedoya, un informe sobre los sucesos del 4 de febrero y el 15 de mayo, a pedido del diputado liberal Juan Torres Balcázar, y dándole como plazo tres días. El ministro aludido se negó a cumplir con dicho plazo, y a insistencia de la Cámara, el Ministro renunció el 19 de diciembre de 1914, siendo reemplazado por el coronel Carlos Abrill. Cabe destacar que en este conflicto prevaleció el espíritu de cuerpo de la cámara por encima de su filiación gobiernista, lo cual rompió momentáneamente la polaridad del gobierno versus la oposición liberal

Un segundo conflicto significativo fue el pedido de expulsión del ex – presidente Guillermo Billinghurst y del líder liberal Augusto Durand de los territorios de Tacna y Arica que hizo el ministro Gazzani (demócrata) a la cancillería chilena. Esta solicitud fue interpretada por varios sectores como un reconocimiento implícito de la soberanía chilena sobre dichos territorios. Tal actitud fue prontamente criticada por el diputado liberal

Wenceslao Valera, aunque la moción de censura planteada por éste fue rechazada por el pleno. Este conflicto suscitó un violento enfrentamiento verbal entre el senador liberal Juan Durand (hermano de Augusto) y el Canciller Gazzani, resultado del cual hubo un duelo en el que el segundo resultó levemente herido. Este incidente muestra que la tradicional alianza demócrata -- liberal ya era una historia del pasado, y ambos se ubicaban ahora en trincheras opuestas durante esta fase del gobierno de Benavides.

Una huelga en una fábrica textil en Vitarte arrojó 1 muerto y varios heridos producto de la represión policial el 9 de enero de 1915; asimismo, una protesta de empleados y comerciantes en Arequipa (contra impuestos a las utilidades y a los sueldos) el 30 de enero terminó en un resultado más trágico aún: 9 muertos y varias decenas de heridos. Ambos eventos fueron tema de críticas al gobierno y una moción de censura contra el ministro de Gobierno por parte de los diputados liberales, la cual no fue aprobada.

Por último, el Congreso aprobó una nueva reglamentación electoral que fue iniciativa del ejecutivo y fue debatida durante la legislatura extraordinaria en el mes de enero de 1915. Esta ley pretendía armonizar las leyes electorales de 1896 y la última de 1912, e introducía las siguientes novedades: el empleo del registro de conscripción militar como padrón del sufragio, de tal manera de eliminar los registros de contribuyentes que adolecían de muchas manipulaciones. Esta nueva ley electoral mantuvo la potestad de la Corte Suprema para intervenir en los casos de apelación y le otorgaba más facultades para imponer penas graves a los delitos electorales, asimismo mantuvo la descentralización para la designación de diputados y senadores.

La dimisión del gabinete Schreiber ocurrió el 17 de febrero de 1915, luego de una agitada legislatura extraordinaria en la que se debatió la reforma electoral y se criticó la represión gubernamental en conflictos sociales y laborales ocurridos en Arequipa y Vitarte respectivamente; pero además por las renunciias de varios de los ministros, quienes tenían expectativas electorales para la próxima renovación del tercio parlamentario. El nuevo jefe de gabinete y ministro de Guerra y Marina fue el Coronel Pedro Abrill, y lo acompañaron los leguistas Plácido Jiménez en la cartera de Justicia e Instrucción.

Enrique Oyanguren en el ramo de Hacienda y Francisco Alayza Paz Soldán en el ministerio de Fomento; asimismo Solón Polo (un funcionario de la administración) en Relaciones Exteriores y Víctor Benavides (pariente del presidente) en la cartera de Gobierno. Este sería el último de los gabinetes del Presidente Benavides.

El año de 1915 trajo consigo los ajetreos partidarios propios de la proximidad de las elecciones presidenciales y la renovación del tercio parlamentario (los cuales se darían simultáneamente luego de 12 años de disparidad electoral). Bajo los auspicios del Presidente Benavides²⁷⁴, el General Andrés Cáceres propuso a todos los partidos realizar una convención electoral para elegir un candidato común de los partidos para la presidencia de la República²⁷⁵. Este evento era el primero en la historia política del Perú y fue además el único, aunque tuvo el antecedente de las gestiones realizadas por los partidos liberal, demócrata, civil independiente y constitucional (sector de Muñiz) para realizar similar encuentro electoral a principios de enero de 1912, aunque no llegó a realizarse por desacuerdos entre estos partidos.

Es interesante recalcar que en las cartas que el general Cáceres envía a sus pares políticos, señala *“la aguda crisis que sufre el Perú y sus partidos políticos”*; lo que implica el reconocimiento explícito de la debilidad y problemas por los que los acontecimientos políticos habían afectado a estas instituciones políticas. La situación de los partidos previo a esta convención electoral era la siguiente. El Partido Civil era el más fuerte de todos, sin embargo se hallaba dividido en tres corrientes: una primera encabezada por Javier Prado, quien a su vez tenía pretensiones presidenciales; una

²⁷⁴ La iniciativa original de la convención de partidos para elegir un candidato presidencial es “auto – atribuida” tanto por el coronel Benavides (en una carta dirigida al General Benjamín Puente el 17 de setiembre de 1917), como por el general Muñiz (en el manifiesto a la nación del 29 de marzo de 1915). Ambos documentos se encuentran en Ríos; 1918: VIII y 296.

²⁷⁵ El general Cáceres, a título de presidente del Partido Constitucional, envió cartas a los jefes de los partidos Civil (Javier Prado), Liberal (Ricardo Florez en ausencia del Augusto Durand) y Demócrata (Isaías de Piérola) invitándolos a una convención de partidos para elegir candidatos comunes a la presidencia y vicepresidencias. Tanto Prado como Florez respondieron a esta invitación, señalando que los respectivos comités centrales de sus partidos habían aceptado por unanimidad acudir a dicha convención; sin embargo la respuesta de Isaías de Piérola fue la siguiente: *“Apresúrome en hacer conocer a Ud. que no existe actualmente jefe, ni Comité Central Directivo en el Partido Demócrata, pues, desde la muerte de su jefe fundador, en julio de 1913, y desde que por acto público y solemne de 27 de abril de 1914, pusieron término a sus funciones los miembros de aquel Comité, ...”*. (Ríos; 1918: XIII-XXII).

segunda de orientación “pardista”, que estaba compuesto por los bloquistas y favorecía la candidatura presidencial del ex – presidente José Pardo, y finalmente el ala leguista comandada por Rafael Villanueva, que si bien se había integrado al gobierno de Benavides, en el año de 1915 había entrado a un proceso de latencia y falta de actividad política.

Por otra parte, estaba el Partido Constitucional que se mantenía unido orgánicamente bajo la conducción de su líder histórico, el general Cáceres; pero que al interior se hallaba dividido en dos corrientes: la leguista que propiciaba el General Canevaro, y la corriente más afín al civilismo dirigida por el General Muñiz (quien a su vez tenía aspiraciones de ser el candidato presidencial de la convención y por lo cual se enfrentaría al civilismo en la convención).

Por otro lado, estaba el Partido Liberal que era la oposición al gobierno de Benavides, y por tal razón su líder se encontraba en el destierro; este partido había desplazado a los demócratas en su perfil crítico y conspirador, e incluso en la representación parlamentaria, pero estaba fuertemente marcado por el personalismo de su líder, por lo que la prioridad de su actividad política se concentraba en lograr el retorno de Augusto Durand. Finalmente, estaban los demócratas, que a falta de un partido orgánico, desempeñaban algunos roles destacados como funcionarios o ministros, y con esporádicos intentos de reorganización, pero nunca lograron recuperar la dinámica política que los había caracterizado anteriormente²⁷⁶.

Una nueva agrupación política que emerge en este periodo es el Partido Nacional Democrático o “futurismo”²⁷⁷, el cual estuvo integrado por una generación joven, entre

²⁷⁶ El receso en el que se encontraba el Partido Demócrata durante el gobierno de Benavides fue la causa principal de su exclusión de la convención. sin embargo con la expectativa de participar en la misma quedó formalmente reorganizado bajo la presidencia de Pedro de Osma el 15 de marzo de 1915, empero al no contar con personería jurídica y representación parlamentaria fue objetado por el Partido Constitucional, de tal manera que no pudo participar de este evento político (Basadre; 1968: 361).

²⁷⁷ “L.E. Cisneros (periodista de La Prensa, anotación nuestra) esgrimió contra el partido el arma terrible del ridículo y le puso un apodo que casi pesó como una lápida. Lo llamó “futurista”. (...) Y el Partido Futurista, para desgracia de la política peruana, resultó un Partido sin porvenir. Cisneros hizo algo más que un anuncio irónico, y, sin saberlo quizás, escribió un epitafio” (Belaunde: 1962:61).

los cuales se encontraban destacados intelectuales como José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaunde, Oscar Miró Quesada, José María de la Jara, Raúl Porras, José Gálvez y Julio Tello, entre otros; quienes a lo largo del siglo van a tener una desatacada actividad académica. Estos jóvenes pudieron ser el recambio generacional en los partidos tradicionales, especialmente el civilismo y el pierolismo; sin embargo la muerte del Califa y el debilitamiento institucional del Partido Civil, impidió una asimilación de este movimiento juvenil a la política oficial. Este partido no pudo cuajar como tal, ya que no llegó a tener una representación parlamentaria (a excepción del joven médico Tello, más tarde fundador de la arqueología en el Perú), y aunque apoyó la candidatura de José Pardo en 1915, no fueron incorporados en la plana mayor del nuevo gobierno²⁷⁸. La labor más destacada de esta generación, también llamada “arielista”²⁷⁹ no fue política, sino más bien cultural e intelectual.

Para la convención electoral, los partidos políticos participantes acordaron nombrar dos delegados por cada uno de ellos, para que discutan y definan las bases de dicho evento. Estos fueron: Hildebrando Fuentes y Arturo Osoreo por el Partido Constitucional, Wenceslao Valera y Gonzalo Silva Santistevan por el Partido Liberal, y David García Irigoyen y Alfredo Solf por el Partido Civil; quienes se reunieron desde el 5 al 17 de marzo de 1915 y acordaron las bases de la convención. Los participantes de este evento tendrían las siguientes características: cien delegados por cada partido, los diputados y senadores en ejercicio, y los que hayan sido ministros y parlamentarios desde 1885. El mecanismo de votación de la asamblea sería el siguiente: los votos serían personales y secretos, se elegiría exclusivamente al candidato presidencial y a los candidatos a las dos vicepresidencias en votaciones separadas, se proclamaría ganador a la persona que haya

²⁷⁸ Un balance del fracaso político de esta agrupación en palabras de uno de sus líderes dice: “En lugar de contar con la simpatía de los antiguos partido civil o demócrata, suscitó el recelo de los primeros y el resentimiento de los segundos. El partido era un magnífico Estado Mayor de los intelectuales a quienes faltó la habilidad maniobrera de la antigua oligarquía y el aura popular del Partido Demócrata.” (Belaunde: 1962: 62).

²⁷⁹ “Se les llama así por que tuvieron como libro de cabecera el opúsculo del ensayista uruguayo José Enrique Rodó, *Ariel*, de 1900, que tuvo gran resonancia continental. (...) Los arielistas se distanciaron simultáneamente del civilismo tradicional y de las clases populares, que en aquellos años empezaba a ser influida por la prédica anarquista... Su intento fue fundar un orden que evitara que la llamada República Aristocrática sea subvertida por la vorágine popular” (González: 1996: 24 y 27).

obtenido el 85% de los votos en la primera o segunda vuelta, o 66% de los votos en las siguientes oportunidades. La asamblea de la convención sería presidida por el General Cáceres (Ríos; 1918: 236-9).

La convención electoral se llevó a cabo el 28 de marzo de 1915 y participaron 471 miembros previamente inscritos. Antes de dicho evento, Javier Prado había renunciado a su candidatura a favor de José Pardo, en ese momento rector de la universidad, lo cual contribuyó a la reunificación del Partido Civil, aunado al apoyo que el leguista Rafael Villanueva dio a la candidatura de Pardo. Otro de los candidatos para esta convención era el general Pedro Muñiz, quien contaba con el apoyo del Partido Constitucional y de algunos leguistas encabezados por Rafael Grau.

El alineamiento de los liberales con los civilistas determinó el triunfo de Pardo²⁸⁰, a pesar de la barrera del 85% de las votaciones en la primera y segunda vuelta y luego del 66% en la tercera y sucesivas rondas para lograr la nominación, que las bases de la convención estipulaban, las cuales evidenciaban una preocupación de sustentar la candidatura presidencial con el mayor consenso posible.

El resultado de la convención fue reconocido tanto por el general Muñiz (quien fallece en noviembre de ese mismo año) como por el Partido Constitucional y el Presidente Benavides; por lo que parecía que la presencia militar en la política (que emergió en el golpe de Estado contra Billinghurst) parecía replegarse nuevamente luego que pasó el periodo de incertidumbre y alta conflictividad. Conjuntamente con José Pardo, fueron nominados a la primera y segunda vicepresidencia, Ricardo Bentín (un destacado empresario minero), y Melitón Carvajal (un heroico marino sobreviviente de la Guerra del Pacífico), respectivamente. Es así que José Pardo, el ex – presidente de 1904 a 1908,

²⁸⁰ Ya desde la primera votación Pardo obtuvo una considerable ventaja sobre Muñiz (261 votos contra 145 votos respectivamente). Pardo logra superar el requisito del triunfo en la tercera ronda de votaciones al obtener el 70% de los votos. (Ríos; 1918: 277-8). Basadre (1968: 365) atribuye estratégicamente el triunfo de Pardo al retiro de algunos simpatizantes de Muñiz con el objetivo de dejar sin quórum la Asamblea, a su vez, dice que simbólicamente fue un triunfo de los civiles sobre el militarismo. En ese mismo sentido, un artículo del diario La Crónica del 30 de marzo de 1915 dice: “La derrota sufrida por el General Muñiz en sus pretensiones presidenciales, más que derrota personal suya, es derrota del símbolo que él encarnaba. (...) la acción directriz de los negocios públicos por la institución armada...”. (citado en Ríos; 1918: 293).

asume la candidatura presidencial de 1915 en representación de los principales partidos del momento: el civil, el constitucional y el liberal.

Los candidatos presidenciales en 1915 fueron José Pardo por la triple alianza de liberales, civilistas y constitucionalistas, y Carlos de Piérola por el Partido Demócrata²⁸¹. Las elecciones se efectuaron los días 16 y 17 de mayo, y los resultados fueron los siguientes: Pardo obtuvo 131, 289 votos (90%) y Piérola 13,151 votos (9%). La votación demócrata fue destacada considerando que no hubo una campaña propiamente como tal a favor de Piérola, y además que ganó en las provincias de Huaraz y Arequipa.

La transmisión del mando presidencial programada originalmente para el 24 de setiembre de 1915 se trasladó para el 18 de agosto. La razón de este adelanto imprevisto fue la rebelión que encabezó el comandante Manuel Rivero en Huaraz el 14 de agosto, quien desconoció al Congreso y la elección de Pardo y propuso la continuación del Gobierno de turno. En la medida que este hecho no estuvo vinculado con Benavides²⁸², éste deslindó rápidamente con los subversivos y a la vez que enviaba tropas del ejército a develar la insubordinación, coordinaba con Pardo para una transferencia anticipada de la presidencia. La rebelión de Rivero fue derrotada en pocos días.

Balance Analítico del Gobierno de Benavides

En el lapso del año y seis meses que duró este gobierno podemos distinguir dos etapas. La primera etapa (febrero a julio de 1914) se inició con el sello del consenso, expresado

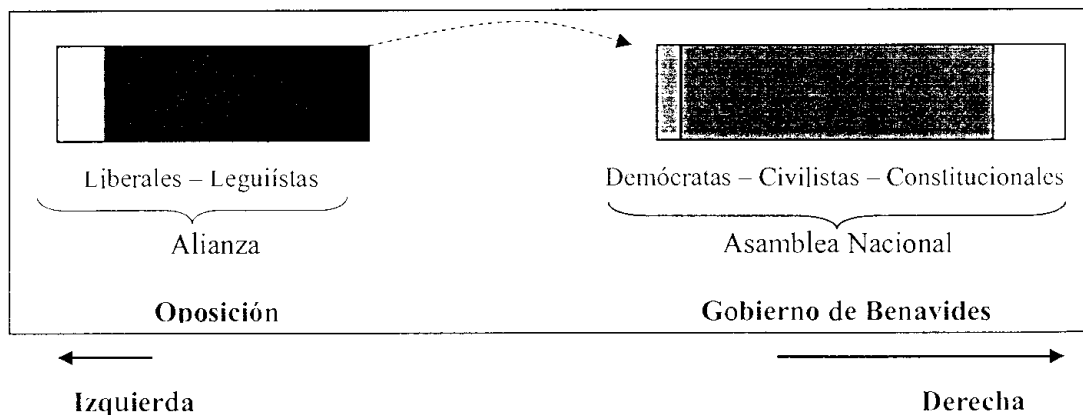
²⁸¹ “El Partido Demócrata se limitó a publicar una circular a sus afiliados solicitándoles un voto de honor para Carlos de Piérola. Era todo lo que podía hacer el poderoso partido que en 1895 había polarizado la efervescencia popular y que atrajo la marejada revolucionaria de una incontenible y exultante popularidad.” (Miró Quesada; 1961:433)”. Al momento de las elecciones presidenciales, Carlos de Piérola, hermano y seguidor del Califa, se desempeñaba como director de la Casa Nacional de la Moneda. Cuando asumió la presidencia José Pardo en 1915, Piérola renunció a este cargo, petición que no fue aceptada por el nuevo gobernante.

²⁸² El levantamiento de Comandante Rivero estuvo vinculado con enemigos locales del Presidente electo Pardo, entre los que se encontraban demócratas, liberales y leguistas, tal como se desprende de la proclama que hace el líder subversivo, en la cual se daba vivas al General Benavides, al Partido Demócrata y a Augusto Leguía. Las declaraciones de uno de los subversivos, el capitán Prada, durante el proceso judicial, señalaba que “la intención de los amotinados era que si el General Benavides se negaba a continuar en el Poder, se constituiría una Junta Gubernativa presidida por Augusto Durand o Augusto B. Leguía” (S A: 1976:254-5).

no sólo en el apoyo unánime de la clase política al golpe de Estado contra Billinghurst sino además en la constitución de una Junta de Gobierno donde estuvieron representados todos los partidos políticos, incluso el demócrata que había perdido casi toda su representación parlamentaria. Lo cual, de paso, reflejaba el grado de aislamiento político en el que había caído el gobierno derrocado.

Sin embargo, este ambiente de acuerdo político se desvaneció rápidamente frente al dilema de la sucesión presidencial definitiva (nuevas elecciones presidenciales o el reemplazo por el vicepresidente Roberto Leguía), dividiéndose el escenario en dos novedosas coaliciones: la Asamblea Nacional (civilistas, constitucionalistas y demócratas) versus la Alianza (leguistas y liberales). Esta nueva configuración de la correlación política cambió el tradicional alineamiento de los partidos políticos de la primera década del siglo XX (demócratas y liberales en la oposición, civilistas y constitucionales en el poder) y de los primeros años de la siguiente década (leguistas y antileguistas), empero se mantuvo aún una conformación bipolar que influyó en una alta intensidad del conflicto político.

Figura No 8: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el gobierno de Benavides entre febrero y julio de 1914.



En efecto, esta primera fase del gobierno de Benavides estuvo plagada de trampas mutuas entre los actores. La iniciativa de estas trampas, como sucede anteriormente, provino inicialmente de los sectores gobiernistas, especialmente cuando el Coronel Benavides se

inclina a favor de la coalición que propugnaba las elecciones presidenciales, a cambio de lo cual fue nominado Presidente provisional. Sin embargo, esta salida provocó una nueva crisis de régimen, ya que se conformaron dos Congresos paralelos y los actores políticos de ambos bandos se descalificaron mutuamente como anticonstitucionales o usurpadores. La reacción de los “perdedores” (leguístas y liberales) en cuanto a la definición de la sucesión presidencial no es tampoco novedosa: conspiraciones y sublevaciones.

La segunda fase del gobierno de Benavides (agosto de 1914) empieza con un giro inesperado pero pragmático, la fracción leguista se incorporó al gobierno de Benavides (como lo indica la flecha punteada de la figura anterior). Contando con una nueva mayoría parlamentaria, el gobierno tuvo mayor estabilidad política, que se tradujo en una menor rotación ministerial y en la resolución de conflictos políticos vía la negociación. Esta fase también implicaría el retorno a nuevas convocatorias al consenso en torno a dos ejes: afrontar la crisis económica provocada por el inicio de la primera guerra mundial (agosto de 1914) y en promover una amplia libertad electoral.

Luego de una serie de ajustes económicos que permitieron sobrellevar el impacto económico de esta guerra, los principales partidos políticos (civil, constitucional y liberal) se comprometieron a realizar una convención que elija a un solo candidato presidencial que los represente en las siguientes elecciones presidenciales. Es significativo que tanto esta vez como en casi todas las anteriores elecciones presidenciales, los líderes políticos evitaron la confrontación electoral y las elecciones tuvieron un solo candidato, ya sea por que fueron el resultado de un acuerdo consensual (1895, 1899, 1915) o por que la oposición no asumió el riesgo de perder y se abstuvieron de participar (1903, 1904, 1908). La única ocasión en este periodo en que hubo dos competidores por la presidencia (Billinghurst y Aspíllaga), la confrontación terminó en una crisis de régimen.

La actividad partidaria se dinamizó a partir de esta convención electoral, de tal manera que en el caso de Partido Civil se produjo una reunificación de dos de las tendencias en las que estaba dividido: pardistas y pradistas. Mientras tanto, la tendencia leguista que

había estado muy activa hasta 1914, se vio afectada por la ausencia de su líder y se dividió en dos grupos, uno encabezado por Rafael Villanueva que apoyó la candidatura civilista de Pardo, y otro dirigido por Rafael Grau que se inclinó por la candidatura constitucionalista de Muñiz. Por otro lado, observamos el ocaso formal y definitivo del Partido Demócrata, que dejó de ser uno de los ejes del sistema de partidos, para devenir en nada más que un recuerdo y un sentimiento: el pierolismo; sin embargo, se mantuvieron aún algunos líderes demócratas jugando roles destacados en la política. El Partido Constitucional y el Partido Liberal siguieron activos, y junto con el civilismo conformarían la nueva alianza de gobierno bajo la segunda presidencia de José Pardo.

Esta segunda fase también incorporó una dinámica de acuerdos políticos entre todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento, de tal manera que en la legislatura ordinaria de 1914 y la extraordinaria de 1915 se aprobaron por una amplia mayoría el ascenso de Benavides al grado general; la insistencia al Ministro de Guerra, coronel Bedoya, para que informe sobre los sucesos del 4 de febrero y 15 de mayo (la cual motivó finalmente su renuncia); y una nueva reforma electoral. Estos acuerdos incluyeron a los representantes de la oposición (el Partido Liberal), aún antes de que se integrasen al proceso de convergencia de la convención de partidos políticos en marzo de 1915.

Sin embargo, estos acuerdos logrados en la segunda etapa del gobierno de Benavides no lograron eliminar del todo la presencia de los movimientos sociales en la escena oficial, ya que si bien estos resultaron derrotados con la salida de Billinghurst, mantuvieron su actividad organizadora y reivindicativa en estos años, y serían nuevamente una variable política importante durante el siguiente gobierno de José Pardo. En todo caso, la contraparte de esta presencia popular fue el perfilamiento de un discurso crítico contra la clase política, la cual es identificada como una oligarquía enquistada en el poder para defender exclusivamente sus intereses económicos. La agitación antioligárquica que enarboló inicialmente Piérola y que luego fue uno de los ejes de gobierno de Billinghurst, pronto se arraigaría en la clase media y popular, y sería una de las justificaciones ideológicas para el derrumbe definitivo de este régimen político.

Finalmente cabe mencionar la inclusión de un actor y la exclusión de otro durante el gobierno de Benavides. En primer lugar, nos estamos refiriendo al rol protagónico que jugó el ejército para el derrocamiento de Billinghurst, en la constitución de la nueva Junta de Gobierno provisional, y en la auspicio de la convención de partidos que eligió a José Pardo como el candidato presidencial. Sin embargo, aún cuando la cúpula militar bajo la égida del General Benavides se retiró oportunamente respetando la nueva institucionalidad civil, volverían a asumir la conducción política del país a partir de 1929, dando inicio a un largo periodo de regímenes autoritarios, mas conocido como el “*tercer militarismo*”.

En segundo lugar, nos referimos a la exclusión de una nueva generación de políticos: los “arielistas”, quienes desde el recién conformado Partido Nacional Democrático dieron su apoyo al candidato Pardo, pero que no fueron incorporados al aparato ejecutivo del gobierno. Esta exclusión contrasta con el Partido Civil vigoroso, dinámico y con capacidad de adaptación de 1903, el cual supo canalizar a sus políticos jóvenes, que en ese momento eran José Pardo, Javier Prado, Augusto Leguía, Antonio Miró Quesada, José Matías Manzanilla, entre otros; los cuales hicieron posible la continuidad del régimen por varios años, pero que luego no supieron incorporar los aportes de la siguiente generación.

4.4. José Pardo (1915 – 1919): el fracaso del consenso.

Una vez más, las expectativas con que se inicia el segundo gobierno de José Pardo están fundadas en la recomposición del consenso. La convención de los principales partidos conformó una nueva mayoría oficialista: civilistas, constitucionales y liberales. Además de ello, el nuevo Presidente Pardo contaba con el apoyo de una nueva generación de políticos agrupados en el nuevo Partido Nacional Democrático²⁸³. Asimismo, el presidente del recientemente reorganizado Partido Demócrata, Pedro de Osma, *“había ordenado por medio de una circular a los diversos comités del partido, la intención de que no debía hacerse oposición al nuevo gobierno. Viejos demócratas como José Carlos Bernales²⁸⁴, prestaron valiosa colaboración al régimen desde la tribuna parlamentaria”* (Martín; 1948: 104). Por otro lado, la facción del leguismo encabezada por Rafael Villanueva también había dado su apoyo a la candidatura de Pardo, y se reintegró al Partido Civil. Sólo una corriente del leguismo se mantuvo aparte y en la oposición, estaba dirigida por Rafael Grau.

Esta nueva mayoría oficialista se consolidó a partir de los resultados de las elecciones que renovó el tercio parlamentario en 1915, por lo que predominó en las juntas directivas de las cámaras y eligió a los civilistas Manuel Barrios y Francisco Tudela como presidentes de diputados y senadores, respectivamente. La composición del primer gabinete reflejó la alianza de los partidos que apoyaron a Pardo, y estuvo integrada por los civilistas Enrique de la Riva Agüero (presidente del consejo de ministros y encargado de la cartera de Relaciones Exteriores), Aurelio García Lastres (Hacienda), Luis Julio Menéndez

²⁸³ Uno de los fundadores y principales líderes de este partido, José de la Riva Agüero, relata en un artículo de 1915 la génesis del nombre y su posición frente a Pardo (1960: 81-2,3): *“Obedeciendo a este intento de fusión de las juventudes de los dos grandes partidos históricos (se refiere al civilista y al demócrata, nota nuestra), creamos el Nacional Democrático. Su título compuesto no fue casual ni caprichoso: descubría a las claras el doble impulso de que nació y al que se conformó en el quinquenio de su existencia. Mi innato derechismo propuso el apelativo de Nacional (...) Principales amigos, procedente del campo demócrata, insistieron en que se agregara el calificativo segundo, que les correspondía con razón. (...) nunca tuvimos esencial disidencia con el segundo gobierno de Pardo, cuyas líneas principales aprobábamos y aplaudíamos ...”*

²⁸⁴ Bernales era un antiguo dirigente demócrata que pertenecía a la “línea dura” del partido; precisamente durante el primer gobierno de Pardo (1908) participa en el movimiento subversivo del 1er de mayo de 1908 y fue por ello encarcelado en la penitenciaría, asimismo estuvo comprometido en el secuestro del Presidente Leguía el 19 de mayo de 1919, y por lo cual volvió a ser detenido y pasó nueve meses en prisión.

(Gobierno), el liberal Wenceslao Valera (Justicia), el constitucional Belisario Sosa (Fomento) y el coronel Benjamín de la Fuente (Guerra y Marina).

Belaunde (1962: 81-2) criticó esta composición señalando que si bien el gabinete integraba a todos los partidos que participaron en la Convención, sin embargo no incluía a las personalidades más destacadas del civilismo: Javier Prado, José Matías Manzanilla, Antonio Miró Quesada, y menos se daba cabida a la nueva generación del Partido Nacional Democrático, por lo cual señalaba que este equipo ministerial “*anunciaba una política rutinaria y de tendencia personalista*”.

Una de las expresiones que reflejaba el ambiente de acuerdo que hubo en los inicios del gobierno de Pardo, es la ley de amnistía política que se dio el 21 de setiembre de 1915²⁸⁵. Otro acuerdo multipartidario significativo en el Congreso fue la aprobación de la libertad de cultos el 11 de noviembre de ese mismo año, para lo cual se procedió a modificar el artículo 4to de la Constitución que trata sobre el reconocimiento de la Iglesia Católica como la religión del Estado, suprimiendo la frase “*y no se permite el ejercicio público de alguna otra*”²⁸⁶. Cabe destacar que la aprobación de esta ley no contó con la opinión favorable del Presidente Pardo y que enfrentó una dura resistencia y protestas públicas de grupos católicos de la época.

La oposición al gobierno empezó a resurgir desde el ámbito periodístico, siendo uno de los críticos más incisivos el diario “El Tiempo”, dirigido por el diputado leguista Pedro Ruiz Bravo; este medio de prensa popularizó el término “neogodo” para identificar a los civilistas. Otros voceros de la oposición fueron la revista “Variedades” conducida por el

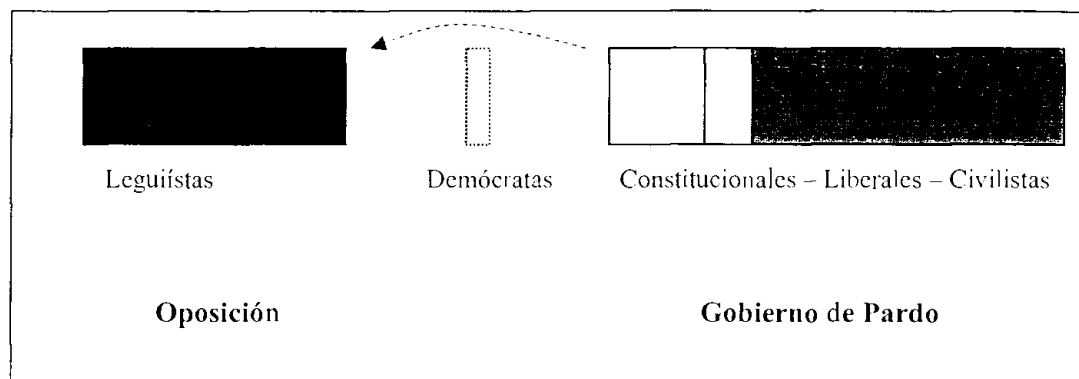
²⁸⁵ Quedaron exceptuados de esta ley, los que estuvieron en homicidios como el que se cometió contra el general Varela el 4 de febrero de 1914 (Basadre: 1968: 378, v. XII). Una nueva ley de amnistía se promulgó el 11 de agosto de 1917.

²⁸⁶ Esta reforma suscitó un violento incidente en la Cámara de Diputados cuando el representante por Celendin, sacerdote José Sánchez “*se precipitó sobre la mesa de su Cámara para romper el texto de la ley en medio de ensordecedor vocerío*.” (Basadre: 1968: 460, v. XII).

escritor Clemente Palma y el periódico "El Mosquito (ambos también de tendencia leguiísta)"²⁸⁷.

Por otra parte, la oposición en el congreso, que un principio no tenía una clara afiliación partidaria (estaban indistintamente leguiístas, algunos liberales que se había apartado del partido de Durand, y unos pocos billinghurstistas), empezó a destacar por enérgicas interpelaciones a los ministros del gobierno en la legislatura de 1916; sin embargo la mayoría oficialista evitó una crisis de gabinete o un cambio ministerial que estuviese motivado en la aprobación de una moción de censura.

Figura No 9: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el segundo gobierno de Pardo en 1915.



Uno de los conflictos que enfrenta al gobierno y la oposición está vinculado con el tema presupuestal. El gobierno remitió la propuesta del presupuesto para 1917 al Congreso en agosto; sin embargo, las cámaras estuvieron concentradas en los problemas económicos derivados de la primera guerra mundial u otros temas políticos y no llegaron a debatir y votar dicha iniciativa, por lo que tocaba al Ejecutivo convocar una legislatura extraordinaria para que se apruebe la ley de presupuesto; empero no lo hizo así, y procedió a prorrogar por decreto el presupuesto del año anterior. Lógicamente, la oposición reaccionó inmediatamente a través de sus medios de prensa, y tomaron los mismos argumentos que los civilistas independientes y del bloque de 1910 y 1913 usaron

²⁸⁷ "El Mosquito, redactado por Florentino Alcorta, llevó a cabo una propaganda soca y muy celebrada contra los hombres del régimen de Pardo en los primeros tiempos de éste." (Basadre; 1968: 380, v. XII). Recordemos que un ataque violento contra la imprenta que editaba El Mosquito, originó la primera crisis de gabinete durante el gobierno de Billinghurst en diciembre de 1912.

contra los gobiernos de Leguía y Billinghurst por haber procedido de igual manera con el presupuesto de 1911 y 1914. Incluso personajes vinculados al gobierno como el diputado liberal Alberto Ulloa y el diputado civilista Manzanilla no estuvieron de acuerdo con dicha medida. La legislatura de 1917 regularizó esta situación, mediante la rectificación de algunas cifras del presupuesto y la consiguiente aprobación del mismo. (Basadre: 1968: 446-7, v. XII).

La primera crisis del gobierno estuvo vinculada con las elecciones parlamentarias de 1917. Ese año, además de la acostumbrada renovación del tercio congresal, se completaban las curules que por diversas razones habían vacado o no se habían ocupado por las nulidades que había dictaminado la Corte Suprema de elecciones anteriores, en total se elegiría el 40% de las representaciones parlamentarias. Por lo tanto, esta elección revestía una importancia estratégica, por que el nuevo parlamento estaría encargado de la revisión de las elecciones presidenciales de 1919.

Durante los meses de febrero y marzo de 1917 se suscitaron muchos incidentes violentos durante estas elecciones parlamentarias en diversas provincias del interior del país (Cotabambas, Cutervo, Chumbivilcas, Cuzco); en las cuales fueron asesinados hasta 3 candidatos. Sin embargo, el crimen que conmocionó a la opinión pública y al ambiente político fue el de Rafael Grau, quien era diputado de oposición (leguista) y buscaba la reelección. Todas estas muertes fueron producidas en pleno proceso de campaña electoral y surgieron de enfrentamientos entre candidatos rivales, sin que haya existido una manipulación concertada de alguno de los partidos o del gobierno, ya que incluso dos de las víctimas eran candidatos civilistas²⁸⁸.

²⁸⁸ La opinión de Basadre (1968: 385; v. XII) sobre estos incidentes es la siguiente: “A juzgar por una lectura sumaria de los documentos de la época, fue, como acaba de señalarse, un producto del estado semicivil de la vida en la sierra y de la fuerza que, en localidades pequeñas y apartadas, adquieren los personajes que se jactan de contar con el apoyo del poder central.” Por su parte, el civilista Germán Arenas (1941: 113) opina sobre estos mismos hechos: “se cometió un gran error político en no resguardar, por todos los medios posibles, la persona de Rafael Grau, cuyo nombre tenía aureola de gloria dentro y fuera del país, pero hubiera sido muy difícil prever que su opositor, Santiago Montesinos, que ya había sido representante en el Congreso [...], convirtiéndose de pronto en un criminal, recibiera a balazos a su contendor en la plaza de Palcayo.”

No obstante, los hermanos de Rafael Grau (Miguel y Oscar) responsabilizaron al Presidente Pardo de los sangrientos acontecimientos ocurridos en el lejano poblado de Palcaro el 4 de marzo²⁸⁹. Tanto Miguel (más tarde senador suplente por Amazonas) como Oscar desempeñaron roles destacados de oposición a Pardo y estuvieron comprometidos en el golpe de Estado de 1919. Otras repercusiones del crimen de Grau, fueron la renuncia del ministro de Gobierno (el constitucionalista José Manuel García Bedoya), las críticas al gobierno del propio presidente del Partido Civil, Javier Prado y su pedido de un nuevo gabinete ajeno a los intereses electorales y presidido por un vocal de la Corte Suprema, y posteriormente la renuncia de todo el gabinete en julio de 1917, antes del inicio de la legislatura ordinaria. Lógicamente, la prensa leguista utilizó el crimen para redoblar su campaña de críticas contra el gobierno.

El gabinete Riva Agüero renunció el 26 de julio de 1917 luego de dos años de haberse mantenido en el cargo; ya hemos visto anteriormente como la tendencia de los gobiernos con mayoría parlamentaria es a una baja rotación ministerial, como efectivamente sucedió durante los primeros años del segundo gobierno de José Pardo. Esta crisis de gobierno tuvo varias causas, entre ellas el desgaste sufrido por los acontecimientos de la violencia electoral en primer trimestre de aquel año, en especial por el crimen del diputado Rafael Grau; y en segundo lugar por el cambio de orientación de la política internacional en cuanto a la primera guerra mundial, ya que el ministro y canceller Riva Agüero era partidario de la neutralidad y estaba considerado como germanófilo, sin embargo a raíz del hundimiento del barco “Lorton” de bandera peruana por un submarino alemán el 17 de febrero de 1917, y por el ingreso de los Estados Unidos en esta guerra el 6 de abril de ese mismo año, la tendencia fue hacia el rompimiento de relaciones con Alemania.

²⁸⁹ El impacto del asesinato de Rafael Grau y de las denuncias de sus hermanos contra el gobierno se debieron no sólo al protagonismo político del primero, sino además a que eran hijos del héroe más reconocido de la Guerra del Pacífico, el contralmirante Miguel Grau. Oscar Grau se desempeñaba como prefecto de Piura al momento de la muerte de su hermano, y renunció a su cargo con el siguiente telegrama dirigido al Presidente Pardo: *“Intenso dolor no perturba serenidad de mi criterio. Intimamente convencido de su responsabilidad en el crimen de mi infortunado hermano, desoyendo justísimas, reiteradas demandas, negase separar subprefecto Moreno, ex –presidiario. Mantengo invariable mi actitud.”* Por su parte, su hermano Miguel publicó en el diario El Tiempo, un artículo que titulaba: *“Yo Miguel Grau, acuso a José Pardo del asesinato de mi hermano”* (Ibid.: 387-8).

La nueva composición del segundo gabinete de Pardo fue exclusivamente civilista – liberal, ya que el Partido Constitucional se apartó de la alianza de gobierno²⁹⁰. Presidía el nuevo consejo de ministros, el civilista Francisco Tudela y Varela (Relaciones Exteriores), acompañado del también civilista Germán Arenas (Gobierno), los liberales Ricardo Florez (Justicia) y Baldomero Maldonado (Hacienda), el independiente Héctor Escardó (Fomento) y el coronel César de la Fuente (Guerra y Marina).

La legislatura ordinaria de 1917 en el segundo semestre del año, fue altamente conflictiva y significó el resquebrajamiento de la bancada oficialista y del propio Partido Civil. Varios fueron los conflictos que enfrentaron a la oposición y al gobierno en este periodo, entre los cuales tenemos temas electorales y económicos.

Las elecciones de diputados para Lima reflejó claramente uno de los problemas de este régimen político: la ausencia de reglas claras para resolver los conflictos. Los candidatos para dos diputaciones por la capital eran el civilista Luis Miró Quesada y el liberal Gerardo Balbuena por la alianza oficialista, y por la oposición el independiente Jorge Prado y el leguista Juan Manuel Torres Balcázar. A pesar que las elecciones se llevaron con normalidad, los problemas surgieron en la Junta Escrutadora, que luego de dar un primer resultado del conteo de votos que favoreció a Miró Quesada y a Jorge Prado, suscitó las protestas del resto de candidatos. A partir de ese momento, esta Junta Escrutadora no volvió a reunirse por ausencia de dos de sus integrantes²⁹¹. Ante la solicitud de nulidad que hizo el candidato Torres a la Corte Suprema, ésta se abstuvo por

²⁹⁰ A propósito del crimen de Rafael Grau, la junta directiva constitucional declaró “*que no se solidarizaban con el gobierno con el que decía no tener vinculación política alguna*” (Miró Quesada: 1961: 437). Sin embargo, las causas principales del alejamiento de los constitucionales del gobierno estaban vinculadas con la reconstitución de los vínculos de este partido con el leguismo a través de uno de sus principales líderes: Arturo Osoreo. Justamente fue este senador quien convenció a Cáceres de que el rechazo de Pardo para su ascenso como mariscal era un humillante insulto (Karno: 1971: 207). La razones formales de la ruptura civil – constitucional fueron la negativa del Presidente Pardo de no aceptar la solicitud de incorporar tres ministros constitucionales en el nuevo gabinete.

²⁹¹ Uno de ellos, el párroco de la iglesia San Marcelo, Eloy Chirinos, “*desapareció e hizo publicar un documento para anunciar que no concurriría a las sesiones de la junta escrutadora. Se atribuyó a elementos vinculados al gobierno la anormal situación entonces producida para impedir el otorgamiento de credenciales a Jorge Prado*” (Basadre: 1968: 390, v.XII).

que sólo le correspondía intervenir cuando habían culminado los escrutinios y expedido las credenciales respectivas. Por su parte, la comisión electoral de la Cámara de Diputados recomendó que fuese la misma cámara la que procediese a hacer el escrutinio (lo cual favorecía a los candidatos oficialistas), lo cual no fue compartido por la oposición, arguyendo que ello atentaba contra la autonomía provincial que se contemplaba en la reforma electoral de 1912, y con lo cual se regresaba al mecanismo electoral anterior a 1895; sin embargo la mayoría civilista – liberal llegó a aprobar dicha propuesta y la derivó al Senado. En dicha cámara, los senadores aprobaron una propuesta distinta: otorgar a la Corte Suprema la facultad de realizar los escrutinios; sin embargo este tribunal declaró que no estaban facultados para realizar esta función por la Constitución²⁹². Finalmente, la Cámara de Diputados no se pronunció más sobre el asunto, tampoco el Senado, y Lima se quedó sin representación para diputados.

Los temas económicos que acarrearón graves confrontaciones en el Congreso fueron: el presupuesto para la construcción de ferrocarriles y el asunto de La Brea y Pariñas. Respecto del primero, la Cámara de Senadores aprobó una partida de 500,000 libras para la construcción de diversos ferrocarriles; a continuación pasó a su colegisladora donde hubo varias modificaciones que obedecían a motivos técnicos y a intereses regionales, por lo que luego de muchas negociaciones y aclaraciones técnicas que daban los ministros diputados Escardó y Maldonado se aprobó una cifra similar pero con distintas especificaciones (200,000 para construir tres ferrocarriles, 20,000 para estudios y 280,000 para el presupuesto de ferrocarriles de 1919). A su turno el Senado insistió en su propuesta original, lo cual remitía finalmente la resolución a una sesión conjunta de Congreso. Los debates de sala plena fueron los primeros días de marzo de 1918 y la respectiva votación favoreció al proyecto del Senado pero por un margen insuficiente de votos (61 versus 46), ya que según la Constitución se necesitaba los dos tercios del total, es decir 72 votos, de tal manera que la insistencia quedó desechada. Sin embargo, Juan Pardo, presidente de la Cámara de Diputados, procedió a considerar como ley sancionada

²⁹² De acuerdo a las facultades otorgadas a la Corte Suprema para intervenir en la apelación de los resultados electorales, la Corte Suprema resolvió por tercera vez los casos presentados a raíz de las elecciones de 1917; y si antes se demoró dos meses para dictaminar respecto de las elecciones en 1913 y tres meses para 1915, esta vez resolvieron 63 casos en 7 meses.

la que había aprobado su cámara. El Presidente Pardo observó dicha ley, por no tener los requisitos constitucionales.

En tanto que el poder ejecutivo vetó dicha ley y envió un proyecto sustitutorio al Senado, esta cámara interpeló el 10 y 11 de abril de 1918 a los ministros Escardó y Arenas²⁹³ de Fomento y Hacienda respectivamente. Luego del debate, el Senado insistió en su proyecto original, lo cual motivó la renuncia del gabinete Tudela. Esta crisis de gobierno fue resuelta por medio de las juntas directivas liberal y civilista, las cuales ratificaron a Tudela como presidente del gabinete, pero con dos nuevos ministros: los civilistas Víctor Maúrtua en la cartera de Hacienda y Clemente Revilla en el ramo de Fomento.

A pesar que finalmente el financiamiento de ferrocarriles se aprobó el 3 de setiembre de 1918, este complicado incidente reflejó algunas características del régimen político: los intereses regionales y locales resquebrajaron la mayoría oficialista en el parlamento, de tal manera que no hubo una legislación pronta y eficaz (la aprobación del presupuesto de ferrocarriles se demoró más de un año); en segundo lugar, la alta exigencia de votación y de quórum para la aprobación de una ley en sala plena del congreso o para constituir las legislaturas ordinarias y extraordinarias (dos tercios) constituían muchas veces impedimentos para la tarea legislativa, y finalmente ello traía como consecuencia que los legisladores tuviesen que generar mecanismos alternativos para legislar, los cuales muchas veces contravenían las reglas de juego formales que prescribía la Constitución²⁹⁴; lo cual podía implicar el cuestionamiento de la legitimidad por parte de la oposición.

Otro de los polémicos asuntos tratados por el Congreso en 1917 y que suscitó muchos conflictos entre los poderes, al interior de los partidos y un gran despliegue periodístico

²⁹³ Arenas reemplazó al liberal Baldomero Maldonado el 26 de febrero de 1918, quien renunció debido a desacuerdos con la cámara de diputados respecto de si ésta podía introducir nuevas partidas en el presupuesto (Basadre, 1968: 393-4, v.XII). Asimismo, el liberal Samuel Sayan fue nombrado Ministro de Gobierno.

²⁹⁴ En muchas ocasiones cuando no se lograba los dos tercios necesarios para los casos de aprobación de una ley que haya tenido como antecedente el disenso de las dos cámaras, se procedía a aprobar las leyes con mayoría simple, lo que alguna vez originaba la protesta de la minoría que se amparaba en la Constitución. No hubieron intentos de reformar la Constitución para rebajar el requisito de la aprobación de este tipo de leyes.

fue el complejo caso de la concesión que la compañía London Pacific Petroleum tenía sobre los yacimientos de brea y petróleo de la mina La Brea y Pariñas. Desde el siglo pasado sólo se tenían registradas 10 pertenencias por parte de esta compañía, sin embargo el Presidente Benavides ordenó en 1915 una nueva medición y resultó que existían 41,614 pertenencias, lo cual elevaba el pago anual que efectuaba al Estado de 300 soles a 1'248,420 soles. Sin embargo, dicha compañía alegó que sólo explotaban mil pertenencias y que el resto estaban inexploradas, y que el monto que se les exigía correspondía al valor bruto de la tercera parte de lo que exportaban, por lo que se negaron a pagar y presentaron una queja a través del gobierno británico.

Se iniciaron tratos directos entre ambos gobiernos y llegaron a un acuerdo provisional, el cual fue presentado al Senado el 7 de diciembre de 1915. Este arreglo consideraba el pago de 30 soles por pertenencia en explotación y 0.75 centavos por pertenencia que no se estuviese trabajando, concesión que tendría una duración de 50 años a partir del 1ero de enero de 1915. Asimismo, la compañía otorgaba un préstamo al Estado peruano por 3 millones de libras esterlinas con amortización nula y a ser devueltos dentro de 25 años. El dictamen en mayoría del senado aceptó este acuerdo, aunque restringiendo la concesión a sólo 30 años y estableciendo un monto mínimo a ser percibido por el Estado, lo cual la compañía inglesa aceptó. Sin embargo, hubo una enérgica reacción por parte de otros senadores (no solo de la oposición) que reclamaron la vigencia de la resolución suprema de 1915, que mandaba a pagar por todas las pertenencias, y por tanto la compañía tenía un plazo para que escogieran las pertenencias que iban a ocupar. La cámara de senadores aprobó el dictamen de mayoría el 23 de noviembre de 1917 aunque con nuevas modificaciones (tres tipos de impuestos por pertenencias y la jurisdicción exclusiva de los tribunales peruanos sobre el contrato) que la compañía inglesa no estuvo de acuerdo. La revista Variedades resaltó el voto en contra de los senadores que se opusieron a este acuerdo y los llamó: "Los Trece Patriotas del Senado", entre los cuales se encontraban destacados dirigentes del oficialista Partido Civil como Antonio Miró Quesada, Germán Schreiber, Leoncio Samanez y Pedro Rojas (Miro Quesada: 1961: 438). En su mensaje del 28 de julio de 1918, el Presidente Pardo recomendó la aprobación de dicho proyecto en la cámara de diputados, señalando que aunque el fisco iba a perder unas cuantas

decenas de libras, se vería compensado con los miles de empleos que esa industria proveería y con las rentas de aduana de dichas exportaciones (Basadre; 1968: 464; v.XII).

Cuando el proyecto pasó a la cámara de diputados hubo un rechazo unánime de la propuesta de senadores y se presentaron hasta cinco dictámenes diversos. Mientras tanto, la empresa ejercía presión al gobierno subiendo el precio de los combustibles, dificultando su distribución, despidiendo obreros y cerrando pozos petroleros. El debate en diputados fue muy intenso, y en el cual un grupo de diputados leguístas, constitucionales e incluso oficialistas (encabezados por José Matías Manzanilla) manifestaron un enérgico rechazo a la propuesta del gobierno. Finalmente, el 4 de diciembre de 1918 se aprobó por 52 votos contra 32, la autorización al Poder Ejecutivo para que pacte con el gobierno británico el sometimiento a un arbitraje internacional respecto de La Brea y Pariñas. El senado acordó no insistir sobre esta propuesta de diputados.

Un breve balance del complicado y tortuoso derrotero del caso La Brea y Pariñas nos muestra un minoría consolidada en torno al rechazo del proyecto del gobierno, y por otro lado una mayoría gobiernista debilitada y dividida, ya que destacados líderes del Partido Civil se oponían a la iniciativa del gobierno. Estas divergencias nos presentan nuevamente un recrudecimiento de las tendencias al interior del civilismo, entre las cuales podemos distinguir: los pardistas conservadores, una línea más independiente y progresista –Javier Prado, Antonio Miró Quesada y José Matías Manzanilla-, y los que aún simpatizaban con Leguía.

Por otra parte, la postura del gobierno respecto del caso La Brea y Pariñas sirvió para que la oposición los calificara como defensores de intereses extranjeros y reforzara su identificación como oligarquía, de tal manera que se “desenterraba” el clivaje social que Piérola había iniciado y Billinghurst llevó hasta sus extremos; ya que como el propio Basadre evalúa (1982:), el sometimiento de un asunto interno al arbitraje internacional constituyó un grave error del gobierno de Pardo en cuanto a la defensa de la soberanía y autonomía jurisdiccional del Perú. Paradójicamente, el desenlace que aparentemente

favoreció al gobierno en el presente caso (ya que hizo prevalecer su mayoría en ambas cámaras), arrojó un saldo negativo para éste: división interna, desprestigio y consecuente deslegitimización.

Las divergencias partidarias al interior del civilismo y la cercanía de las elecciones presidenciales motivaron un recambio de la junta directiva en marzo de 1918, de tal manera que Javier Prado fue reemplazado por dirigentes más afines al Presidente Pardo, entre los cuales se encontraba Antero Aspíllaga, quien a su vez se perfiló nuevamente como uno de los candidatos para 1919 (recordemos que en su anterior postulación como candidato oficialista a la presidencia fue derrotado por Billinghurst en 1912). Los legisladores gobiernistas quisieron tomar similar medida en la cámara de senadores y desplazar a los civilistas más remisos a las directivas de Pardo y a la voceada candidatura de Aspíllaga; sin embargo, no lograron su objetivo y se impuso en la elección Antonio Miró Quesada, contando tanto con votos de su partido como de la oposición. La escisión civilista se hizo más notoria.

Otro sonado conflicto fue el caso de las manifestaciones de descontento militar en 1918. El primer incidente ocurrió el 18 de mayo en la realización de un banquete militar, en el cual el coronel Enrique Ballesteros criticó al gobierno de Pardo de haber debilitado al ejército, expresiones que ya venían circulando en la joven oficialidad. Este pronunciamiento militar en política motivó un artículo de José Carlos Mariátegui en el primer número de la revista *Nuestra Época* (22 de junio), en el cual criticaba el discurso de este coronel, por que significaba una intromisión indebida del ejército en la política, asimismo discrepaba rotundamente con una política armamentista y finalmente dedicaba frases despectivas respecto del ejército y su oficialidad²⁹⁵. Las opiniones de Mariátegui enardecieron los ánimos de muchos oficiales del ejército, de tal forma que el 24 de junio

²⁹⁵ “La oficialidad está compuesta, en un noventa cinco por ciento, por gente llevada a la escuela militar unas veces por la miseria del medio y otras veces por el fracaso personal. La vocación militar apenas se asoma de raro en raro. Para comprobarlo basta con reparar en que, mientras en otros países la aristocracia puebla los colegios militares, entre nosotros, los jóvenes “decentes” burlan la conscripción. Y en que hasta hace muy poco los severos padres de familia “metían” en la escuela militar al hijo más desalmado, jaranista y bribón. La escuela militar era para ellos una especie de escuela correccional donde “a punta de palo” eran enmendados los muchachos de mala índole y deshonestas travesuras.” (En *Nuestra Época*: No.1: Lima, 22 de junio de 1918, citado en Mariátegui: 1991: 324).

un grupo de estos oficiales irrumpió en la imprenta de El Tiempo y golpearon al joven periodista. A continuación, un número mayor de oficiales se dirigió a Palacio de Gobierno para presentar sus quejas al Presidente Pardo y exigir represalias contra Mariátegui. El Presidente Pardo recibió personalmente a estos oficiales y si bien rehusó tomar medidas contra el periodismo, desagravió al ejército y criticó la campaña que la prensa hacía contra su gobierno. Las consecuencias políticas inmediatas de este incidente fueron la renuncia del Ministro de Guerra y Marina, coronel César La Fuente, y del jefe de Estado Mayor, coronel Manuel María Ponce. El reemplazante en esta misma cartera fue el coronel Andrés Cateriano. Asimismo, el coronel Ballesteros, promotor original de estos hechos fue enviado al Japón en misión oficial tres meses después. (Karno; 1971: 205-6; Basadre; 1968: 405-6, v.XII; Garret; 1973: 37-8).

El trasfondo de este hecho reflejaba un creciente descontento que se va gestando en el ejército contra el régimen, el cual estaba promovido por militares pertenecientes al Partido Constitucional (en ese entonces ya en la oposición), y a otros con vínculos leguistas. Una de estas expresiones de este malestar en las fuerzas armadas es la sublevación de Ancón del 22 de agosto de 1918 encabezada por el comandante Armando Patiño. A pesar de que este conato fue fácilmente develado, el manifiesto que emitieron refleja las vinculaciones políticas que tenía este movimiento subversivo²⁹⁶, y aunque el vocero periodístico del civilismo “La Ley” acusó a los leguistas de promover esta rebelión, uno de los personajes de la época, Germán Arenas, atribuye el hecho a una conspiración urdida por uno de los líderes del Partido Constitucional, Arturo Osoreo²⁹⁷.

²⁹⁶ “El manifiesto de Patiño Zamudio fue una mezcla incoherente de planteamientos militares, sociales, económicos y políticos que sugieren la existencia de múltiples conexiones. Proponía desde el ingreso del Perú a la guerra mundial a favor de los aliados (...), así como la adquisición de armamento (...), hasta una reforma universitaria y duros ataques contra la oligarquía que causaba el hambre del pueblo, así como duras censuras al régimen de Pardo.” (La Prensa, 23 de agosto de 1919, citado en Villanueva; 1973: 166).

²⁹⁷ “Poco a poco, se llegó a saber que había existido un vasto plan ideado por el doctor Arturo Osoreo, que se frustró por el hecho casual de haberse quedado Pardo en Miraflores en la mañana del 22 de agosto; lo que hizo creer a los conspiradores que estaban descubiertos y los obligó a esconderse apresuradamente. Este era el plan: detener el automóvil del Palacio de Gobierno en un lugar a propósito del camino de Miraflores a Lima y secuestrar al Presidente Pardo; que se sublevaran inmediatamente dos regimientos de Lima y el destacado a Ancón, formar una Junta de Gobierno presidida por el General Cáceres; convocar después a elecciones populares, en las que el doctor Osoreo sería candidato a la Presidencia de la República; y burlar así a los leguistas, sus aliados, a quienes se dijo que se trataba de hacer Presidente a

A raíz de este incidente, el parlamento aprobó la suspensión de las garantías individuales el 23 de agosto de 1918 (luego de un arduo debate donde se enfrentaron los civilistas Manuel Pérez – favor de la medida- y José Matías Manzanilla – en contra-). La tranquilidad política que se pretendía con esta medida tuvo efectos contrarios: protestas del movimiento universitario, represión policial, renuncia del Ministro Samuel Sayán (quien no estuvo de acuerdo con la suspensión de garantías y con la intervención policial). Podríamos decir que la escalada de violencia que empezó con la asonada militar de Ancón inició una secuencia de conflictos que culminaron en el golpe de Estado del 4 de julio de 1919.

Un factor estratégico en el desarrollo de los acontecimientos políticos entre 1918 y 1919 es el impacto de la presencia de los movimientos sociales en la estabilidad del régimen. La movilización de los universitarios ya había jugado un rol destacado durante el primer gobierno de Leguía, a propósito del encarcelamiento del joven catedrático José de la Riva Agüero en 1911, logrando no sólo la renuncia del ministro del interior y la liberación de Riva Agüero, sino además un reconocimiento de la misma cámara de diputados por la defensa de las libertades individuales. Coincidentemente, el reingreso de los estudiantes en la escena política se manifestó en la defensa de las garantías individuales en 1918. Sin embargo, esta vez ya no se trataba de una movilización espontánea, sino que estuvo respaldada por un grado mayor de organización: la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), fundada en 1917.

El descontento de los universitarios con el régimen nacía en la propia estructura de la principal universidad de la época: “San Marcos”, cuyas autoridades y profesorado formaban parte de la clase política, especialmente del civilismo. La crítica de los estudiantes se dirigía a la falta de renovación de catedráticos y la ineptitud de algunos de ellos, quienes sólo por sus vinculaciones políticas lograban un puesto en la enseñanza universitaria. Mientras tanto, la composición estudiantil había cambiado en los últimos

su jefe, que estaba aún ausente. Fracasado el plan, se avisó al jefe de Ancón para que no se sublevara; pero éste, desatendiendo la indicación, inició el movimiento revolucionario...” (Arenas; 1941: 119).

años, a partir de un gran incremento de estudiantes de menores recursos y de procedencia provinciana. A todo esto se añadió la influencia ideológica de nuevas corrientes de pensamiento como el socialismo y de profundas transformaciones en el mundo contemporáneo como la revolución mexicana y rusa.

La lucha de los estudiantes para reformar la Universidad fue liderada por una nueva generación de líderes universitarios de extracción social media, entre los cuales se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre, que desempeñaría un rol político protagónico durante todo el resto del siglo XX²⁹⁸. Sin embargo, la protesta estudiantil trasuntó el ambiente universitario y se extendió al ámbito político. En efecto, una de las tendencias del movimiento estudiantil fue la vinculación con sectores populares, de esta forma se adhirieron a las luchas de los obreros por la jornada de las ocho horas y fueron partícipes de las huelgas de febrero y mayo de 1919.

La oposición universitaria al civilismo en la universidad, sus protestas contra las medidas políticas del gobierno, su adhesión a las huelgas obreras, el liderazgo radical de una nueva generación de estudiantes, la predominancia social de las clases medias de la que provenían estos estudiantes, son todos elementos que contribuyen a que éstos asuman un perfil político contra el “*establishment*” encabezado por el civilismo, el cual era considerado como una reproducción en la política de lo que sucedía al interior de la universidad. Sin embargo, de las diversas corrientes en contra del régimen (socialistas, anarquistas), la mayoría de estudiantes se orientan por la tendencia más moderada, que a la vez significaba la opción más concreta contra el gobierno de Pardo: el ex – presidente Augusto Leguía.

Fue en este contexto que los estudiantes eligieron a Leguía como “Maestro de la Juventud” el 7 de octubre de 1918, un cargo honorífico que solía reconocer los méritos de

²⁹⁸ Este grupo de jóvenes líderes es conocido como la generación de 1919, quienes son los que introducen doctrinas como el marxismo y el leninismo en el Perú, y son fundadores de los partidos de izquierda más importantes en el Perú del siglo XX: el APRA y el Partido Comunista. Miembros destacados de esta generación son Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Eudocio Ravines, Manuel Seoane, Luis Valcárcel, entre otros.

un profesor universitario, pero que la manipulación política de los estudiantes leguistas otorgó a quien nunca ejerció la cátedra universitaria²⁹⁹; este resultado confirmaba el vínculo de un importante sector de los estudiantes con una opción política para las elecciones presidenciales de 1919, a la vez que un rechazo explícito a la presencia civilista en la universidad (los otros candidatos era Javier Prado y Manuel Vicente Villarán, destacado líderes del Partido Civil). La carta de respuesta de Leguía desde Londres no fue menos política, asumía la responsabilidad que los estudiantes le asignaban, así como esperaba que ellos lo acompañen en la tarea de la “reconstrucción nacional”. En efecto, el regreso de Leguía como candidato a la presidencia recibió el respaldo de varios comités electorales formados por universitarios.

El movimiento obrero también tuvo un protagonismo importante en el último año de este régimen. Hemos visto, como el inicio de la primera guerra mundial trajo dificultades a la economía peruana, las cuales fueron afrontadas en su etapa inicial por el gobierno de Benavides. Por su parte, Pardo tomó medidas preventivas y conservadoras respecto de esta delicada coyuntura económica, enfocadas básicamente a la reducción del gasto público, al pago de la deuda externa y la restricción a la emisión de papel moneda³⁰⁰. Sin embargo, la guerra también produjo efectos positivos para la economía, ya que las demandas por las exportaciones de algodón y azúcar se incrementaron rápidamente, lo cual incentivó a que los hacendados dedicasen mayores extensiones de terrenos agrícolas a estos productos en desmedro de los cultivos de pan llevar³⁰¹. De esta manera, si bien el aumento de las exportaciones permitió al Estado y a los hacendados una mejor situación financiera, las consecuencias que repercutieron para las clases medias y populares fue el encarecimiento de los productos de consumo; así, la inflación de estos bienes se

²⁹⁹ “Leguía fue nombrado Maestro de la Juventud, pese a su total desvinculación de los centros universitarios y académicos, pues siempre había sido un hombre de negocios. Se olvidó entonces que en su primer Gobierno (1911) sableó a la juventud universitaria al producirse graves sucesos callejeros”. (Miró Quesada: 1959: 111-2)

³⁰⁰ Estos fueron los tres puntos básicos del programa económico que Pardo presentó como candidato presidencial el 30 de abril de 1915. (Basadre: 1968: 425-6).

³⁰¹ La producción de azúcar se incrementó de 179,387 toneladas cultivadas en 39,556 hectáreas para 1913, a 248,458 toneladas sembradas en 48,754 hectáreas para 1919. Mientras que la producción de algodón aumentó de 24,603 toneladas en un área cultivada de 55,635 hectáreas en el periodo 1915-1916, a 33,558 toneladas en un área de 88,863 hectáreas en el periodo de 1917-1918. (Extracto estadístico: 1929-1930: 166,175)

incrementó en un 100% de 1913 a 1919 (Arrus; 1927:17). Otra de las consecuencias de este desplazamiento de los cultivos de consumo por los de exportación fue una oleada migratoria del campo a la ciudad, lo cual incrementó las necesidades de vivienda y servicios básicos (Alexander; 1922: 26-46); lo cual a su vez ocasionó una mayor incidencia de enfermedades, especialmente la tuberculosis, de tal manera que el índice de mortalidad por enfermedad se elevó de 4.79 por mil en 1913 a 5.3 por mil en 1919 (Lorente; 1925: 106).

La austeridad económica del gobierno de Pardo y la inexistencia para esa época de políticas sociales (subsidios, viviendas, salud pública) no permitió que las medidas oficiales que se tomaron para tratar de regular los precios de los alimentos sean efectivas, de tal manera que la resultante de esta problemática social fue un creciente descontento en la clase obrera, que radicando inicialmente en la protesta contra el alza del costo de vida, pronto se proyectaría hacia otras demandas, como la disminución de la jornada laboral y el aumento de los salarios. En efecto, el 21 de diciembre de 1918, los trabajadores textiles de la fábrica “El Inca” se declararon en huelga exigiendo la jornada de las ocho horas y un incremento del 50% en sus salarios. A esta huelga se le unieron otras fábricas del mismo rubro, de tal modo que para fines de diciembre toda la industria textil estuvo paralizada (Blanchard; 1982: 150-1).

Otros grupos de trabajadores se plegaron a la huelga: los panaderos, curtidores, madereros; la diseminación de paro fue aprovechada por los líderes anarquistas como Carlos Barba, Nicolás Gutarra y Julio Portocarrero para generar un gran movimiento huelguista, y para tal fin constituyeron un “Comité Pro Huelga General”, de tal manera que asumieron progresivamente la dirección del movimiento huelguístico. Este comité logró el apoyo de los trabajadores en Lima y Callao, y decretaron un primer paro general los días 13 y 14 de enero de 1919. La adhesión de los tranviarios y choferes contribuyó a una falta generalizada de medios de transporte, de tal manera que impidió a obreros y empleados acudir a sus centros de trabajo; por otro lado piquetes de trabajadores huelguistas impidieron que se abran los centros laborales y comerciales. así “*el éxito de*

la huelga resultó a partir de una efectiva combinación de 'solidaridad obrera, planificación estratégica e intimidación.' (Parker; 1992: 14).

Al tercer día de huelga, y luego de arduas negociaciones entre los trabajadores, el Ministro Manuel Vinelli, y una delegación de representantes de la Federación de Estudiantes en calidad de mediadores³⁰², se llegó al compromiso de establecer la jornada de las ocho horas para los trabajadores estatales, y provisionalmente para los que pertenezcan al área privada hasta que logren un acuerdo mutuo los empleadores y sus empleados, de lo contrario un instancia arbitral resolvería según el caso. No se otorgó, sin embargo, ningún incremento salarial (El Comercio, 16 de enero de 1919).

A pesar de que hubo una represión oficial contra los organizadores de la huelga (algunos líderes fueron arrestados y las tropas del ejército fueron movilizadas para patrullar las calles), no hubo ninguna víctima fatal, ni grandes pérdidas en destrozos o vandalismo. Por otro lado, aún cuando el cese de la huelga general fue celebrado por parte de los líderes anarquistas como un gran triunfo de la "*acción directa*" de la clase trabajadora, hemos de considerar otras razones que explican la decisión gubernamental para establecer la jornada laboral de ocho horas.

En primer lugar, la finalización de la primera guerra mundial disminuyó rápidamente las exportaciones peruanas, de tal manera que muchos de los empresarios textiles quedaron con muchos remanentes de producción, asimismo el pago de los trabajadores de estas empresas era al destajo, es decir un pago sometido a la productividad. Por tal razón, la medida no fue del todo incompatible con los intereses económicos de estos empresarios, resultando en muchos casos más bien conveniente; de hecho la decisión gubernamental fue tomada luego de una reunión del Ministro Vinelli con los empresarios textiles. En segundo lugar, el decreto presidencial fue tomado como una medida preventiva, considerando no sólo los acontecimientos europeos como la revolución bolchevique y los

³⁰² La Federación de Estudiantes del Perú envió a los siguientes delegados para asistir a los trabajadores en huelga: Víctor Raúl Haya de la Torre, Bruno Bueno y Valentín Quezada. Asimismo, los líderes estudiantiles cedieron su propio local para las reuniones del Comité Pro Huelga General. (Blanchard; 1982: 153)

levantamientos obreros dirigidos por los comunistas en Alemania, Hungría e Italia; sino además el lamentable “baño de sangre” en que desembocó la huelga general en Buenos Aires (conocida como la “semana trágica”) justo antes del inicio de la huelga en el Perú. En tercer lugar, la opinión pública estaba a favor de la reivindicación de la jornada laboral de las ocho horas, la cual ya había sido conquistada por los trabajadores del puerto del Callao en 1913 y recientemente para las mujeres y niños a principios de 1918 (reforma aprobada en el parlamento por iniciativa del diputado Manzanilla); tal corriente de opinión era alentada no sólo por algunos medios de comunicación importantes como La Prensa, El Tiempo y El Comercio, sino además defendida por políticos civilistas destacados, que fueron los promotores de las primeras reformas sociales en el Perú: José Matías Manzanilla, Javier Prado, Antonio Miró Quesada. En quinto lugar, y la razón más relevante para el presente estudio, esta decisión presidencial fue tomada considerando el contexto electoral en el que se encontraba, y a pesar de que Pardo no era candidato, la solución de este caso podría influenciar no sólo a los resultados electorales, sino la suerte misma del Partido Civil, el cual venía siendo duramente criticado por el candidato de la oposición, Augusto Leguía; de tal manera que se quiso evitar que se vuelva a repetir el caso de las elecciones presidenciales de 1912, en la cual Billinghurst apoyado en la movilización popular pudo presionar exitosamente al Congreso para que lo eligieran como Presidente. Así, el decreto de la jornada laboral de ocho horas era resultado de la intención que Pardo tenía para apaciguar los ánimos de los trabajadores e impedir que el movimiento obrero sea ganado a la prédica anti oligárquica de Leguía y se incorporen como la vanguardia de choque contra el gobierno. (Parker; 1992: 16-20)

Sin embargo, las intenciones de desmovilizar el movimiento obrero y evitar su manipulación por Leguía no fueron efectivas. El convencimiento de los líderes anarquistas respecto del triunfo obrero, los incentivó para radicalizar el movimiento. Como se ha señalado, la jornada de las ocho horas no satisfacía muchas de las necesidades que surgían del incremento de los precios de los productos básicos (alimentos, vivienda, vestido, etc...). El malestar latente que quedó luego de la huelga de febrero renació bajo la reivindicación de la disminución del costo de vida, así en Marzo se organizaron los Comités Pro-Abaratamiento de las Subsistencias (CPAS) promovidas

por los sectores obreros más radicales: panaderos, textiles e impresores, con la expectativa de obligar al gobierno para disminuir los precios de los productos de consumo popular. Como en la anterior ocasión, esta nueva movilización estaba dirigida por los líderes anarquistas: Nicolás Gutarra, Carlos Barba y Adalberto Fonkén (Blanchard; 1982: 160-1).

Inicialmente, los CPAS lograron concitar el apoyo e integración de múltiples sectores sociales: la Sociedad de Empleados del Comercio, la Confederación de Artesanos, y la Asamblea de Sociedades Unidas, todas ellas de tendencias moderadas y hasta conservadoras. La planificación de la siguiente huelga fue programada para el mes de mayo de 1919, inmediatamente después de las elecciones presidenciales; sin embargo la dura represión policial contra una de las acciones previas, una “*marcha de hambre*” encabezada por mujeres obreras el 26 de mayo, desencadenó no sólo la huelga general al día siguiente, sino que a diferencia de la anterior, una gran escalada de violencia y desorden: saqueos, destrozos, ataques a comerciantes³⁰³. Esta vez, el gobierno actuó con toda energía, declaró la ley marcial y mandó a reprimir a los huelguistas con el ejército, con la orden de disparar contra cualquier grupo sospechoso; hubieron muchos muertos (se afirman distintas cantidades según varias fuentes, desde una docena hasta 400 víctimas) y cientos de heridos, además del arresto de los principales líderes anarquistas. Ante esta violencia incontrolada, los actores moderados se retiraron de los CPAS, e incluso se incorporaron a las “guardias urbanas”, una brigada ad-hoc de policías, bomberos y voluntarios, constituida para restablecer el orden en la ciudad.

Los resultados totalmente adversos para los líderes anarquistas y en general para todo el movimiento obrero se explican por el entorno diferente en el que se encontraba esta paralización, en comparación con la huelga anterior de enero; ya que en esta ocasión habían pasado las elecciones presidenciales y de renovación del tercio parlamentario, el presidente Pardo estaba de salida, y las demandas obreras a la vez que confusas en cuanto

³⁰³ “El costo de una huelga en términos de vidas y daños a la propiedad había sido muy alto. El *West Coast Leader* reportó que al menos una centena de personas habían muerto y que otros varios cientos quedaron heridos. Los daños a la propiedad excedieron los dos millones de soles, y doscientas pequeñas tiendas, mayormente de propietarios asiáticos, había sido destruidas.” (Blanchard: 1982: 166, traducción mía)

a las medidas concretas que permitiesen disminuir la inflación de determinados productos, sí implicaban una seria amenaza para muchos intereses económicos: limitación de las exportaciones de algodón y azúcar, obligatoriedad para los hacendados para sembrar productos de panllevar, reducción de las rentas inmobiliarias, fijación de precios máximos de leche, carbón, menestras, y *“toda la comida que sirve a la subsistencia diaria”*.

La derrota de la huelga del abaratamiento de las subsistencias afectó profundamente el movimiento obrero, generando una división de radicales y moderados que perduró por muchos años más; a la vez que incentivó a muchas de las asociaciones y corporaciones de empleados, obreros y artesanos a la búsqueda de un nuevo líder que pudiera mejorar las condiciones de vida de las clases populares y medias, y se enfrentase al civilismo que los había derrotado y reprimido, pero sin llegar a los extremos a que los arrastró la conducción anarquista, y quien en ese momento encarnaba tal perfil era Augusto Leguía³⁰⁴.

En el ámbito específicamente político, 1919 representó una de las cumbres más altas en conflictividad y de proliferación de trampas entre los actores políticos. El 26 de noviembre de 1918 había renunciado el gabinete Tudela, ya que fue nombrado embajador en Washington, y fue Germán Arenas, uno de los políticos civilistas de mayor confianza del Presidente Pardo, quien asumió la jefatura del gabinete y la cartera de Gobierno el 18 de diciembre, lo acompañaban el civilista, Arturo García Salazar en el ministerio de Relaciones Exteriores, los liberales Manuel Vinelli en Fomento y Ángel Gustavo Cornejo en Justicia, el independiente Héctor Escardó en Hacienda, y el General Juan Manuel Zuloaga en la cartera de Guerra y Marina. Arenas sabía del difícil momento por el que atravesaba el gobierno y su propio partido, ya sea por la deteriorada imagen del gobierno producto de las campañas de la oposición (y de los propios errores del Presidente Pardo),

³⁰⁴ “En vista de la intransigencia del gobierno de Pardo y de su propia debilidad, los líderes obreros se orientaron hacia el archienemigo de la oligarquía, Augusto Leguía. Sin duda, muchos trabajadores aún recordaban que fue durante el primer gobierno de Leguía que se aprobó la ley de accidentes laborales.” (Karno: 1971: 191, traducción mía).

como por las divisiones internas que habían surgido al interior del Partido Civil por el advenimiento de las elecciones presidenciales (Arenas; 1941: 119-20).

En tanto que Leguía había lanzado su candidatura presidencial ya desde marzo de 1918, con un discurso muy crítico contra el gobierno y el civilismo³⁰⁵; el Presidente Pardo propuso en su mensaje al Congreso en julio de ese mismo año, la realización de una convención de partidos para elegir un candidato presidencial con el mayor apoyo político posible, tal como él mismo había sido elegido en 1915. Esta invitación no se hizo extensiva a Leguía, ya que en realidad Pardo buscaba justamente un candidato que pudiese competir con exitosamente contra él. Sin embargo, el jefe del Partido Civil, Antero Aspíllaga y uno de los voceados candidatos a la presidencia, señaló que los leguistas sí podían participar en dicha convención, aunque bajo la cobertura de algunos de los partidos a los que hubieren pertenecido, en realidad era más un gesto que evitase generar una apariencia de exclusión política, ya que se sabía que Leguía no aceptaría dicha invitación, en tanto era uno de los candidatos con más opción y no iba a someterse a un escenario en el que podía ser derrotado por las cúpulas partidarias.

Esta propuesta a una nueva convención hizo que se empezase a especular sobre diversas candidaturas³⁰⁶; como la de Augusto Durand por el Partido Liberal, el líder civilista Manuel Vicente Villarán por el Partido Nacional Democrático, Pedro de Osma, Isaías de Piérola y José Carlos Bernaldes por los demócratas, Javier Prado, Francisco Tudela, Antonio Miró Quesada por el Partido Civil, aunque se sabía del favoritismo de Pardo hacia Aspíllaga, el cual no suscitaba las simpatías al interior de su propia agrupación. Finalmente, el 7 de diciembre de 1918, varios representantes de los diversos partidos (José de la Riva Agüero, por el Nacional Democrático; Isaías de Piérola, por el Demócrata; Augusto Durand, por el Liberal; el General Cáceres, por el Constitucional;

³⁰⁵ “Por una paradoja corriente en política, Leguía, surgido del cogollo civilista y que extremó los métodos de este Partido, aparecía hoy encarnando las aspiraciones de un grupo mesocrático y la oposición al civilismo.” (Belaunde; 1962: 135).

³⁰⁶ “Después de ciertos formulismos y de cambios de cartas entre los jefes de Partidos, estos nombraron delegados para la formación de un reglamento de bases para la Convención, Germán Arenas y Felipe Barrera y Laos, por el Partido Civil; Gerardo Balbuena y Ernesto Díez – Canseco, por el Partido Liberal; y José María de la Jara y Carlos Arana Santa María, por el Partido Nacional Democrático; fueron los delegados que no llegaron a reunirse” (Martín; 1948: 117).

Agustín Ganoza, presidente del Comité Leguista; Antenor Aspíllaga por el Civil) se reunieron en palacio con el Presidente Pardo, pero no llegaron a un acuerdo concreto, ya que Cáceres exigía que se formase un Gabinete representativo de todos los partidos como garantía previa, y más tarde Isaías de Piérola “*en nombre del Partido Demócrata, una vez más en trance de reorganizarse, afirmó en una circular que las convenciones eran atentatorias a la libertad electoral*” (Basadre; 1968: 7, v. XIII). Sin la participación de estos partidos, la convención de partidos dejaba de tener sentido, de tal modo que la iniciativa de la reconstitución del consenso de Pardo no prosperó.

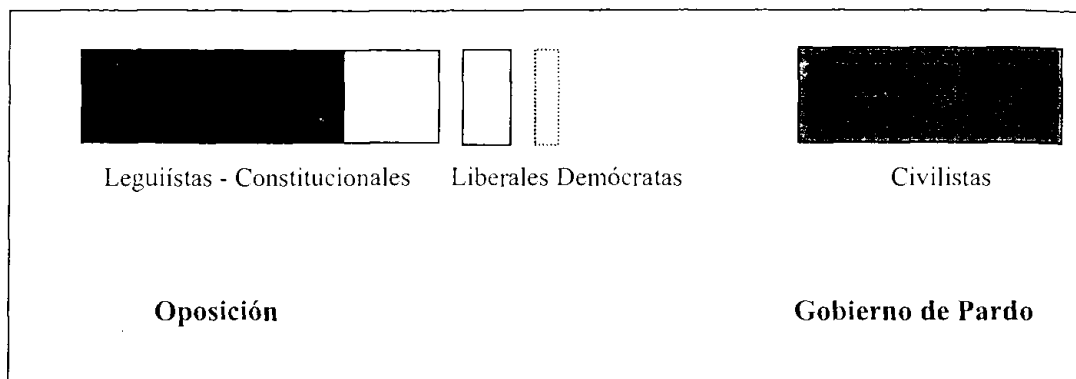
La fragilidad del gobierno llegó a su máxima expresión cuando los ministros del Partido Liberal, Vinelli y Cornejo renunciaron a sus carteras el 22 de marzo de 1919, como expresión de la ruptura que hacía este partido de la alianza oficialista. El diario liberal “La Prensa” justificó la renuncia en tanto que el gobierno no había prestado las suficientes garantías a los candidatos liberales en las provincias de Huari, Parinacochas y Yauyos, (La Prensa, 23 de marzo de 1919). Sin embargo, la verdadera razón del retiro liberal del gobierno, según el diario El Tiempo, fue el desacuerdo que tenían con la candidatura presidencial del civilista Antero Aspíllaga (citado en Basadre; 1968: 404-5, v.XII).

Los ministros liberales fueron reemplazados por el civilista Augusto Arrese en la cartera de Fomento, y el jurista Federico Panizo en el ministerio de Justicia e Instrucción, quien al asumir esta responsabilidad señaló que lo hacía con el propósito “*que abriga el Jefe de Estado, de que el proceso electoral que se está realizando continúe desarrollándose sin intervención del gobierno y con su absoluto respeto a la voluntad popular.*” (Martín; 1948: 119).

La salida de los liberales del gabinete confirma la tendencia cíclica que atravesaron los gobiernos durante esta segunda década del siglo: del consenso al aislamiento, al igual que Benavides, Billinghurst y anteriormente el primer periodo de Leguía. Así, el gobierno de Pardo termina reducido a un solo partido a pocos meses del término de su periodo

presidencial, en contraste con la mega alianza partidaria con que inició su mandato en 1915.

Figura No 10: Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos durante el segundo gobierno de Pardo en 1919.



La distancia entre los liberales y civilistas se acentuó a raíz del intento de asesinato de Augusto Durand el 19 de abril de 1919³⁰⁷, aparentemente cometido por enemigos locales del jefe liberal; pero luego atribuido a vínculos leguístas, ya que cuando Leguía asumió nuevamente la presidencia, los nueve arrestados en este caso y que estaban siendo procesados judicialmente, son liberados y algunos de ellos asumen cargos de autoridad (Basadre; 1968: 406, v. XII). Nuevamente el diario liberal La Prensa acometió contra el premier y Ministro de Gobierno, Germán Arenas, acusándolo “*por las garantías que había concedido antes a los agresores e hizo alusión a los sangrientos sucesos que habían ocurrido a principios de aquel mismo año en Yauyos.*” (Ibid: 407; Arenas; 1941: 123).

El cariz que estos últimos conflictos habían tomado y que enfrentaban directamente al Ministro Arenas con el Partido Liberal, desencadenó la última crisis de gabinete el 26 de abril. Arenas fue reemplazado por el General Juan Zuloaga en la presidencia del Consejo de Ministros; y por el Capitán de Fragata, Oscar Mavila, en la cartera de Gobierno, no

³⁰⁷ “Durand fue abaleado y seriamente herido el 19 de abril, privando así al Partido Liberal de su jefe, y cerrando toda posibilidad de reconciliación entre su partido y los civilistas antes de la elección” (La Prensa, 30 de abril de 1919, citado en Garret: 1973: 45, traducción mía)

hubo otros cambios ministeriales. Este gabinete acompañaría al Presidente Pardo hasta el golpe de Estado del 4 de julio del mismo año.

Indudablemente que a la caída del régimen político en 1919 contribuyó determinadamente la estrategia del actor político más representativo del anticivilismo: Augusto Leguía³⁰⁸. Como ya mencionamos anteriormente, la campaña presidencial de Leguía empezó en marzo de 1918, mucho antes que cualquier otro candidato y obtuvo logros significativos en su lucha por llegar al poder durante ese mismo año: la nominación de “Maestro de la Juventud” por la Federación de Estudiantes del Perú, una exitosa campaña periodística de los diarios de oposición (El Tiempo, el Mosquito, la revista Variedades, y nuevos medios de prensa promovidos por jóvenes intelectuales como Nuestra Época, o por los estudiantes como Germinal) que aprovechaban oportunamente de los errores del gobierno para acentuar el desprestigio del Presidente Pardo y de la clase política en general; y la lenta pero eficaz construcción de un soporte social compuesto por empleados, obreros, estudiantes, militares de mediana y baja graduación.

Durante 1918 se reconstituyó el aparato organizacional leguista que desde antes del inicio del gobierno de Pardo se había desarticulado. Para ese fin se formó el “Comité de los Catorce”, en el cual participaban antiguos leguistas como Juan de Dios Salazar, Agustín Ganoza, Melitón Porras y José Manuel García, (ex ministros en el primer gobierno de Leguía), Alberto Salomón³⁰⁹ y otros representantes de la oposición al gobierno de Pardo, como Manuel Químper y el constitucionalista General José Manuel García. En ese mismo año, se constituyó un primer comité central de los leguistas (aún sin un nombre oficial como Partido), donde se incorporaron el capitán de navío Juan

³⁰⁸ “Por una paradoja corriente en política, Leguía, surgido del cogollo civilista y que extremó los métodos de este Partido, aparecía hoy encarnando las aspiraciones de un grupo mesocrático y la oposición al civilismo.” (Belaunde; 1962: 135)

³⁰⁹ “El 23 de marzo de 1914 durante la dictadura del general Oscar Benavides, fuerzas armadas de policía impedían el paso a balazos a los diputados el ingreso al local del congreso. El doctor Salomón trató de forzar el paso que le cerraban los gendarmes, pero cayó herido de un balazo en la frente. Curado y vendado en el consulado de Bolivia, el herido exigió a sus amigos que lo condujeran al local de la cámara para pasar lista, y con su ropa cubierta todavía de sangre asistió a aquella histórica sesión.” (Paz Soldán; 1921: 358).

Manuel Ontaneda, el senador Oscar Grau (quien había recriminado directamente al Presidente Pardo por la muerte de su hermano) y el político disidente del civilismo Pedro Rojas (Capuñay; 1951: 143-4).

A pesar de que la campaña presidencial de Leguía ya había empezado, su retorno al Perú fue deliberadamente retrasado hasta un momento tácticamente apropiado, y éste fue el 9 de febrero de 1919. El viaje de Londres a Lima, tuvo una planificada escala en Nueva York, donde declaró que el capital americano sería necesario para la construcción de obras públicas, ferrocarriles y proyectos de irrigación; en este sentido Karno (1971: 202-3) señala que Leguía buscaba desplazar el capital financiero inglés por el americano, y que además pretendía el apoyo de los Estados Unidos para recuperar las provincias cautivas de Tacna y Arica, para lo cual demandaba al gobierno de Pardo que Perú declarase la guerra a Alemania, como un explícito apoyo a la política exterior americana.

Leguía fue recibido en el puerto del Callao por una gran multitud de simpatizantes, quienes lo acompañaron en una nutrida caravana hasta la Plaza de Armas de Lima, en la cual dio su primer discurso de campaña presidencial, atacando duramente al civilismo, prometiendo el abaratamiento de las subsistencias y la recuperación de las provincias peruanas arrebatadas durante la Guerra del Pacífico. Sus palabras además de oportunas desde el punto de vista político (tocaba los temas más relevantes para la opinión pública) fueron dichas desde un escenario revelador: los balcones del Club de la Unión, el cual agrupaba a sectores de la clase media emergente³¹⁰, en contraposición al aristocrático y exclusivista Club Nacional, sitio de conclave y recreación de los personajes más prominentes del civilismo.

La estrategia de Leguía consistía en articular una coalición social y popular contra la clase política tradicional, para ello proponía solucionar reivindicaciones específicas de cada grupo social; así prometía servicios sociales, viviendas, mayores compensaciones

³¹⁰ “Un síntoma del estado de conciencia reinante lo reflejaron los clubes sociales. El Club Nacional, seguía siendo aristocrático, severo reducto de familias antiguas; el Club de la Unión, donde la fortuna de sus socios no era pujante, donde la mesocracia había logrado infiltrarse, se convirtió en círculo leguista.” (Miró Quesada: 1959: 109).

por accidentes de trabajo y reducir el costo de vida para los trabajadores³¹¹; por otro lado ofrecía una reforma universitaria para los estudiantes; y mayor equipamiento militar y mejores salarios para los militares. Incluso, Leguía asumía banderas federalistas como los congresos descentralizados, para ganarse la “buena voluntad” de regiones muy autónomas como Arequipa e Iquitos. (Garret; 1973: 43)

Como plataforma más genérica, el candidato Leguía anunciaba la modernización y expansión de la economía (recordemos que se vivían años de recesión económica en el Perú y América Latina por el término de la primera guerra mundial y la consecuente disminución de sus exportaciones). Asimismo, Leguía se autodefinía como un reformista social, que buscaba deponer del poder al civilismo oligárquico y excluyente, para construir alternativamente un nuevo orden social incluyente y más homogéneo. A pesar de que Leguía fue parte del núcleo central del civilismo, la percepción social de Leguía, era la de un ciudadano que emergía de las clases medias y había triunfado en la vida por sus propios méritos y esfuerzos (Ibid.: 44-5).

Además de sus propios partidarios, Leguía contó casi desde un inicio con el apoyo partidario de los constitucionales de Cáceres (más adelante, ya como Presidente cumpliría uno de los anhelos más caros del jefe de los constitucionales: su ascenso a Mariscal; que Pardo le negó), con lo cual contaba con el apoyo estratégico de los militares que formaban parte de este partido. De esta manera, los generales Cáceres y Canevaro fundaron el Centro Militar el 30 de enero de 1919, que integraba a jóvenes oficiales, y que se convirtió en una de las bases de apoyo del candidato Leguía (Karno; 1971: 211).

La campaña de Leguía no sólo se reducía a programas y promesas dirigidos a atender los intereses de estudiantes, obreros, empleados y militares (lo cual ya de hecho representaba una novedad en la política peruana), sino que además buscaba un contacto personal con

³¹¹ Los obreros tuvieron en cuenta el rol jugado por los medios de prensa leguistas (El Tiempo, Germinal, Nuestra Epoca) en el apoyo que dieron a la huelga de las ocho horas en enero de 1919, asimismo en que el líder y abogado leguista Mariano Cornejo (ex – demócrata, ex – billinghamista) defendió a los obreros encarcelados por dicha protesta. Por su parte, otro connotado líder leguista, Pedro Rada y Gamio, organizó grupos de obreros para apoyar la campaña de Leguía (Karno: 1971: 215).

representantes de cada uno de estos grupos, tal como lo reconoce personajes de la época como Luis Alberto Sánchez (1936: 60): *“Leguía entretanto, seguía su política de captación subterránea. (...) Cada mañana sentaba a su mesa, en la casa de Pando, a un militar, un estudiante, un amigo; y, ahí, sin protocolo halagaba pasiones, despertaba ambiciones, exploraba conciencias”*. Asimismo, Germán Arenas (1941: 122), el líder civilista cuenta en sus memorias en son de crítica, lo que había escuchado acerca de la casa de Leguía: *“En una habitación del fondo de su casa, que tenía comunicación con el interior de la casa vecina, por la que se entraba, recibía también a matones, y especialmente, a sargentos y cabos del ejército y la gendarmería, a los que ofrecía ascensos y otras ventajas.”*

Por otra parte, Basadre (1968: 9, v.XIII) destaca que la campaña de Leguía, a diferencia de las candidaturas de anteriores candidatos presidenciales (incluido la de él mismo en 1908, y quizás con la excepción de Guillermo Billinghurst) no pretendió ganar el consenso de los actores políticos, sino de contar con el apoyo popular, de tal manera que fue *“la iniciación de la marea ascendente de las clases medias y populares que desbordaba las vallas oligárquicas para caer, por efecto de la ignorancia política, en el caudillaje.”*

Las candidaturas para las elecciones presidenciales de 1919 fueron Augusto Leguía, Antero Aspíllaga por el Partido Civil³¹², y los demócratas Isaías de Piérola y José Carlos Bernaldes; estas dos últimas candidaturas no revestían mayor importancia, ya que el Partido Demócrata ya no existía como tal, por lo que el hijo de Piérola aglutinaba sólo algunos compañeros dispersos; mientras que la candidatura de Bernaldes pretendió representar al movimiento obrero, el cual luego de la derrota de la huelga de mayo, se

³¹² Aspíllaga resultaba el candidato menos apropiado para enfrentarse a Leguía, no sólo por el poco entusiasmo que generaba en su propio partido, sino además por que en la medida que representaba la corriente más conservadora del civilismo reflejaba la típica imagen del aristócrata y oligarca que tanto criticaba Leguía. Alternativamente, Manuel Villarán, Javier Prado, Antonio Miró Quesada eran mejores opciones electorales y que incluso hubieran evitado un triunfo electoral de Leguía; sin embargo, estos personajes no eran de las simpatías del Presidente Pardo en tanto que no eran sumisos al conservadurismo de éste. En todo caso, Pardo confiaba en la ventaja del aparato partidario para ganar las elecciones y en último caso en que una mayoría adversa a Leguía en el Congreso, favorecería la elección de su patrocinado. (Belaunde: 1962: 136-7; Garret: 1973: 45).

encontraba muy debilitado y fraccionado en una tendencia leguista, una corriente anarquista (que se abstenía de votar) y el grupo que participó en estas elecciones como Partido Obrero, y que llevaba como candidato a Bernales.

A pesar de que en la constitución de las asambleas de mayores contribuyentes hubo algunos incidentes violentos en algunas provincias del país. Las elecciones presidenciales y parlamentarias (renovación del tercio) que se llevaron a cabo el 20 y 21 de mayo fueron tranquilas y sin presiones del gobierno. Los primeros resultados indicaron un triunfo de Leguía en Lima y Callao, mientras que los escrutinios de provincias tardaron en conocerse, y luego muchos de ellos fueron impugnados y pasaron a revisión a la Corte Suprema de Justicia. (Basadre; 1968: 15, v.XIII). Los diarios anunciaban al ganador según las preferencias que tenían, así El Tiempo declaró vencedor a Leguía y denunciaba las trampas que cometían los partidarios de Aspíllaga en algunas localidades, mientras que el periódico La Ley señaló que Aspíllaga había ganado en muchas provincias del interior, y que los resultados de Lima eran fraudulentos. Mientras tanto, diarios no comprometidos con alguna de las candidaturas, como El Comercio y La Prensa no señalaban que hubiese un ganador.

Mientras tanto, la Corte Suprema revisaba resultados de 35 provincias, cada una de las cuales había mandado resultados paralelos declarando a Leguía y Aspíllaga como ganadores (las famosas dualidades electorales). De todas ellas, la Corte había resuelto siete de los casos hasta un día antes del golpe de Estado, de los cuales tres favorecían a Aspíllaga, dos a Leguía y otros dos fueron anulados; de esta manera, "*Leguía había perdido, ya por ejecutorias del Supremo Tribunal, casi 15,000 votos.*" (Basadre; 1968: 15, v.XIII).

Por otra parte, luego de las elecciones sobrevino la huelga del abaratamiento de las subsistencias, y por tal razón el gobierno clausuró el diario leguista El Tiempo³¹³,

³¹³ "Los propietarios del diario clausurado interpusieron un recurso de habeas corpus. La Corte Suprema ordenó la reapertura del El Tiempo y el Gobierno hizo uso entonces del artículo 13 de la ley de 21 de octubre de 1897 que permitía la apelación, en ambos efectos, de las sentencias expedidas con motivo de

acusándolo de subvertir el orden, dado el apoyo que dieron a los huelguistas. Este hecho, aunado, a los resultados desfavorables de la Corte y la demora con la que resolvían³¹⁴, provocó las suspicacias de Leguía y su entorno respecto de las posibilidades de que el gobierno pudiese intervenir para frustrar su triunfo.

La incertidumbre del compás de espera y la proliferación de especulaciones incrementó notablemente la tensión política y se empezaron a generar sospechas mutuas por parte de ambos candidatos presidenciales, ya sea que el Congreso tuviese que decidir finalmente el resultado (lo cual no favorecía a Leguía) o una insurrección de los opositores, por lo que el Presidente Pardo sugirió medidas preventivas, lo que fue considerado como innecesarias por su Ministro de Guerra, y por lo que finalmente no se ejecutaron (Garret; 1973: 48)³¹⁵.

Finalmente, el golpe de Estado se ejecutó la madrugada del 4 de julio de 1919 a través del cuerpo de gendarmes bajo las órdenes del Coronel Gerardo Álvarez, quien avanzó hacia Palacio de Gobierno con una tropa de 25 hombres y procedieron a arrestar al Presidente Pardo, a su secretario privado Alejandro Revoredo y al Ministro Zuloaga. Durante ese día, hubo un par de intentos de las fuerzas leales que reaccionaron contra el golpe, pero ya sea por la intervención de oficiales a favor de Leguía (como el capitán de navío Juan Manuel Ontaneda que neutralizó a la armada en el puerto del Callao), o por la desobediencia de oficiales de menor graduación simpatizantes de Leguía, fueron prontamente reducidos (Basadre; 1968: 18-9, 20-1, v.XIII). Al margen de estos intentos de resistencia, la mayor parte del ejército apoyó pasivamente el golpe de Estado,

dicho recurso. El asunto seguía en trámite al producirse la revolución del 4 de julio. Cuando fue clausurado El Tiempo había cumplido su misión. Realizó con José Pardo lo que no había conseguido, años antes (se refiere al primer gobierno de Pardo), La Prensa de Alberto Ulloa Cisneros: derrocarlo.” (Basadre; 1968: 14, v.XIII).

³¹⁴ *“Ahora por mucha prisa que se diese la Suprema en efectuar esa revisión, sería materialmente imposible que la concluyese antes del 18 de agosto. Se debe tener en cuenta que las dualidades en esta ocasión son, probablemente, más numerosas que en 1917.” (En La Razón, No.17; Lima, 3 de junio de 1919; citado en Mariátegui, 1991: 344)*

³¹⁵ *“La actitud del ministro reflejaba el rechazo del gobierno de Pardo por escuchar advertencias y su ceguera respecto de la lealtad de las fuerzas armadas, una confianza que Pardo pronto encontraría que fue trágicamente desatendida” (Karno: 1971: 221, traducción mía).*

manteniéndose acuartelado en sus barracas, lo cual fue previamente coordinado por oficiales militares vinculados con Leguía y sobretodo con el Partido Constitucional.

Leguía se presentó en Palacio a las seis de la mañana y fue aplaudido por los oficiales y la tropa allí presente. Más tarde, grupos de leguístas asaltaron la imprenta del diario *El Comercio*, e hicieron estallar una bomba en la sala de máquinas; la casa del Presidente Pardo y del líder civilista Eelipe Barreda y Pardo también fueron atacadas e incendiadas. Es significativo reseñar que uno de los que dirigían las turbas de ataque a los medios de prensa y a las casas de los políticos fue Jorge Billinghurst, hijo del derrocado presidente Guillermo Billinghurst. También cabe señalar que este golpe de Estado fue recibido con beneplácito y satisfacción por muchos de los sectores sociales a los que Leguía dirigió su campaña, y que los partidos tradicionales no supieron representar: estudiantes, empleados, obreros y ciudadanos de las provincias.

Ese mismo día, Leguía publicó un manifiesto explicando las causas del golpe de Estado, señalando que era su deber evitar que se frustrase el voto popular, y acusaba al gobierno de conspirar para que se desconociese las elecciones presidenciales, así como de suprimir la libertad de prensa (aludiendo a la clausura del diario *El Tiempo*), y finalmente anunciaba reformas constitucionales y la reinstauración de los poderes públicos. A continuación Leguía procedió autoproclamarse Presidente Provisorio, a establecer un gobierno provisional y formar un nuevo gabinete integrado por leguístas y constitucionalistas, además convocó a elecciones parlamentarias³¹⁶, la cual elegiría una Asamblea Nacional que tendría facultades para redactar una nueva constitución. Por último, se convocó a un plebiscito de 19 puntos que debería contener esta nueva carta.

El 10 de setiembre de 1919, Leguía denunció una conspiración e intento de asesinato contra su persona, y procedió a arrestar a muchos políticos civilistas, liberales y

³¹⁶ Esta convocatoria no reconocía las recientes elecciones del nuevo tercio congresal y interrumpía la acostumbrada renovación por tercios, ya que convocaba a elecciones para constituir un nuevo parlamento.

militares³¹⁷, los cuales fueron apresados y deportados. Grupos de manifestantes atacaron e incendiaron los edificios de los diarios principales: El Comercio y La Prensa, asimismo saquearon e incendiaron las casas de Antero Aspíllaga, Augusto Durand y Antonio Miró Quesada. Similares actos vandálicos hubieron en ciudades del interior como Arequipa (donde asaltaron la casa del diputado liberal Lino Urqujeta, el Club Arequipa y la imprenta El Heraldito) y Chiclayo (saqueos y destrozos de los periódicos El País, La Tarde, El Departamento). La policía permaneció impasible frente a todos estos atropellos³¹⁸.

La supresión de la libertad de prensa y las garantías individuales fue avalada por un nuevo parlamento sumiso y carente de independencia política, de tal manera que se aprobaron leyes que legalizaban la represión contra la oposición como los arrestos, encarcelamientos y deportaciones sin el debido proceso y denegaban “legalmente” los recursos de *habeas corpus*. De esta manera, el 4 de noviembre de 1919, la Asamblea Nacional (la reunión de ambas cámaras) aprobó la ley No.4007 que le daba poderes extraordinarios al gobierno para reprimir a la oposición política.

Posteriormente y en el transcurso de los once años de gobierno dictatorial de Augusto Leguía, fueron también presos o deportados muchos de sus seguidores o quienes contribuyeron al golpe de Estado de 1919, como Arturo Osorio, Germán Leguía, los hermanos Javier, Jorge y Manuel Prado, Miguel y Oscar Grau, y Melitón Porras, entre varios otros. En suma, varios cientos de políticos de los diversos partidos fueron al destierro o estuvieron en prisión, entre los cuales estuvieron los líderes de los partidos de oposición a Leguía: los demócratas Isaías de Piérola, Pedro de Osma, José Carlos

³¹⁷ Entre los detenidos estuvieron Luis Pardo (hermano del presidente), ex – ministros civilistas como Samuel Sayán, Germán Arenas, Aurelio García, el ex vicepresidente y senador Miguel Echenique, los diputados Felipe Barreda y Laos y Juan Durand, el coronel Fernando Sarmiento, y el mayor Alfredo Henríquez, entre otros. (Basadre: 1968: 36, v. XIII)

³¹⁸ “Un comicio de protesta se reunió aquel día, escuchó un discurso de Leguía y grupos de manifestantes perpetraron en seguida condenables desmanes. Incendiaron el local de La Prensa. Atacaron a balazos el edificio del El Comercio y le prendieron fuego. Luis Miró Quesada, secundado por los empleados y tipógrafos de este diario, improvisó la defensa. Armados de revólveres se atrincheraron en el patio de la imprenta y tras las bobinas de papel contestaron a las descargas cerradas de los asaltantes. Desde el techo, y a pecho descubierto, Luis Miro Quesada dirigió el combate, apostrofando a un oficial y a varios gendarmes montados que, impasibles, contemplaban lo ocurrido.” (Ibidem)

Bernales y Aurelio Sousa; los liberales Juan Durand; José Balta y Wenceslao Varela; los civilistas José Pardo, Antonio Miró Quesada, Antero Aspíllaga; Manuel Vicente Villarán, Francisco Tudela; los “futuristas” Víctor Andrés Belaunde, José de la Riva Agüero, José María de la Jara; el ex – presidente general Oscar Benavides; todo lo cual implicó la dispersión y posterior desintegración de la élite política que dirigió el país durante el régimen anterior.

El golpe de Estado de Leguía cerró un capítulo de la historia política peruana que había durado 25 años, desde la revolución de marzo de 1895, que constituyó una Junta Provisional de Gobierno presidida por el civilista Manuel Candamo, pasando por nueve gobiernos elegidos en comicios populares o por el Congreso, hasta la caída del último de los gobiernos electos en julio de 1919. En este régimen hubo una renovación ininterrumpida de los tercios parlamentarios cada dos años, y a pesar de las faltas y violaciones constitucionales, la tendencia principal fue el respeto a las garantías individuales, las libertades de prensa, de expresión y de asociación política, por medio de la cual pudieron constituirse y coexistir una pluralidad de partidos políticos, que dinamizaron la política peruana tanto en la competencia electoral como en el debate parlamentario y la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo³¹⁹. Al término de la dictadura de Leguía en 1930, ninguno de los partidos tradicionales pudo recuperar su dinamismo y vigencia, con lo cual había caducado todo el sistema de partidos que hemos analizado en la presente investigación.

Balance Analítico del Segundo Gobierno de Pardo.

De las conclusiones que podemos extraer del este gobierno se destaca un fenómeno ya visto anteriormente: el tránsito del consenso al aislamiento político. En efecto, la convención de partidos políticos en 1915 permitió reconstituir una élite nacional, la cual

³¹⁹ “Sobre el fin de los partidos tradicionales debo agregar algunos comentarios. Su desaparición marca el eclipse del sentido jurídico de la vida nacional, rompiéndose violentamente la convivencia política que se inició en 1895. Fueron cerca de veinticinco años de constitucionalidad casi ininterrumpida en los que el Perú conoció el libre juego de las instituciones democráticas. Pero aún dentro de ese marco de respeto a los gobernantes, (...) no faltaron escenas de violencia y atropellos a la libertad, (...) Entre 1895 y 1919 tuvimos revoluciones, “cuartelazos” y motines. Todo ello fue menos penoso para el país, porque hubo una élite que frenaba los excesos.” (Miró Quesada; 1946: 123)

acuerda presentar un solo candidato presidencial en nombre de una gran alianza de los partidos más importantes del periodo: Civil, Constitucional y Liberal. Otros actores políticos habían perdido importancia estratégica como el Partido Demócrata a partir de la muerte de Nicolás de Piérola en 1913, y la fracción leguista que se dispersó en ausencia de su líder, mientras que un tercer actor no logró adquirir la relevancia que se esperaba: el Partido Nacional Democrático.

Esta alianza se expresa en la conformación sobredimensionada del primer gabinete de Pardo³²⁰, en la cual estaban representados los tres partidos de la convención; sin embargo este consenso se empieza a diluir lentamente por tres factores claves: la falta de permeabilidad política y social del gobierno, la emergencia de nuevos grupos sociales que buscan ocupar un espacio en la escena política, el debilitamiento de las instituciones políticas. Tres elementos que se relacionan y refuerzan entre sí.

Belaunde (1962:162) criticó las fuertes tendencias personalistas del gobierno de Pardo, ya que su propia generación de jóvenes políticos no fue incluida en el manejo del poder, aún cuando había manifestado su apoyo al régimen. Esta exclusión política se manifestó también con el ala progresista de su propio partido civil: José Matías Manzanilla, Javier Prado, Antonio Miró Quesada, quienes no fueron llamados a participar en el gabinete. Por otro lado, ni el gobierno ni el resto de la clase política supieron incorporar a nuevos sectores sociales (la clase media) que tenían un activa participación en la espacio público: estudiantes y empleados; por el contrario las expresiones organizativas de estos grupos sociales como eran la Federación de Estudiantes del Perú y la Sociedad de Empleados del Comercio lograron establecer su propia dinámica de reivindicaciones sociales y económicas, las cuales se realizaban en disputa de los privilegios de las clases altas, por lo que prontamente asumieron un discurso antioligárquico³²¹.

³²⁰ "...gabinetes sobredimensionados, los cuales contiene más partidos de los son necesarios para tener apoyo mayoritario en la legislatura." (Lijphart; 1999: 90, traducción mía).

³²¹ "Un liderazgo diferente se necesitaba, pero ni el gobierno ni la Cámara de Comercio parecían poder ofrecerlo. Principalmente, por que el pedido de los empleados acaba siendo eclipsado por otros eventos mas urgentes" (Parker; 1998: 81, traducción mía).

Acontecimientos varios debilitaron a los principales partidos políticos como la muerte de Piérola, la pérdida de vitalidad y arraigo popular de los liberales dado el proceso de asimilación a un gobierno conservador y alejado de las reivindicaciones sociales, el fraccionalismo civilista. Lo cual trasladaba el peso de las decisiones políticas de los colectivos institucionales a los individuos o pequeños grupos³²², de tal manera que eran cada vez menos los que se veían comprometidos con los resultados de las políticas de gobierno.

Todos estos elementos de aislamiento del gobierno fueron bien aprovechados por el candidato Augusto Leguía, quien no sólo incorporó las demandas y sentimientos de las clases que aspiraban a tener un espacio en la política nacional, sino que además manipuló el sentimiento antioligárquico de los excluidos orientándolo hacia una guerra contra la clase política y el régimen, del cual años antes, había sido actor protagónico como ministro de hacienda y presidente de la república³²³.

Como vimos anteriormente con el golpe de Estado contra Billinghurst en 1914, existe una orientación explicativa de la caída del gobierno de Pardo desde una perspectiva marxista. Ella alude a que Leguía representaba los intereses de la burguesía asociada al capital imperialista norteamericano, y además que buscaba resolver las contradicciones sociales que el capitalismo había desarrollado desde hace 25 años, expresados en conflictos internos en la clase dominante y la insurgencia de una clase popular que deseaba mayor participación política (Cotler; 1986; 182-4). *“En resumen, con Leguía, a la par que se liquida el modelo exportador civilista, se reordena la composición y tendencias de intereses de las fricciones dominantes hegemónicas...”* (Yepes; 1972; 287).

³²² “Para apreciar bien el cuadro de la época diré que se estaba formando en el gobierno una miope camarilla que trataba de imponerse a despecho de las realidades circundantes. Se habló de la “argolla”, expresión peyorativa que sirvió para designar a un grupo pequeño pero influyente que deseaba dar sus directivas al país. Tan craso error repercutió en la vida nacional. La lucha interna había perforado la estructura de la vieja organización cívica.(...) La división fue mucho más profunda y comprometedora y parece que no hubo inteligente visión de su importancia.” (Miró Quesada; 1959: 110-1).

³²³ “El sentimiento de oposición al señor Pardo conserva al lado del señor Leguía a la fuerza ocasional que el leguismo explota agitando la bandera de la guerra contra el civilismo y el régimen. Aunque parezca paradójico, es lo cierto que la presencia del señor Pardo en el gobierno constituye la única fuerza propulsora del leguismo. A pesar de que los leguistas miran en el señor Pardo a su más resuelto adversario.” (En *La Razón*, No.17; Lima, 3 de junio de 1919, citado en Mariátegui; 1991: 345)

Otro rubro de explicaciones es el que proviene de los propios actores perjudicados por el golpe. Así, José Pardo señala que el golpe estaba dirigido básicamente contra el Congreso, y que él no dispuso de algún plan para intervenir en contra de alguno de los candidatos (Belaunde; 1962: 161). En ese mismo sentido, el ex ministro civilista Germán Arenas, señala (1941: 126-7): *“Leguía, que tenía carácter orgulloso y autoritario, no pudo realizar durante su primer gobierno, con gran contrariedad de su parte, todos sus proyectos económicos y todos sus intentos de imponer su voluntad discrecional, a causa de que el “Bloque Parlamentario”, los partidos de oposición y los periódicos independientes libraron tenaz campaña contra sus propósitos y actos perjudiciales para la nación. (...) Comprendió, pues, desde entonces que, para gobernar sin control, conforme a sus tendencias, necesitaba un parlamento incondicionalmente suyo y que éste no podía ser el de 1919, en el que existían grupos políticos adversos y que fiscalizarían sus actos como mandatario.”* En suma, como dice Miró Quesada (1961: 444-5), el verdadero motor de la revolución del 4 de julio de 1919 fue eliminar al parlamento, en el cual la oposición era mayoría, y gobernar con un nuevo congreso sumiso.

Por su parte, Basadre (1968; 23, v.XIII) no sólo coincide con los planteamientos de Pardo y Arenas, sino que además desestima el argumento que brinda Leguía para justificar su acción, según el cual el gobierno de Pardo pretendía arrebatarse el triunfo vía el parlamento, ya que una vez que Leguía estuvo en el poder, nunca pudo exhibir prueba alguna de que *“iba a escamotearle en el último momento sus credenciales”*.

Otras opiniones no concuerdan con las explicaciones del golpe de Estado de Leguía como una manera de disolver el congreso y evitar una mayoría opositora, por lo que se habría preparado este levantamiento desde antes de que empezara el proceso electoral. Así, Garret (1973: 51-2) señala que hay que tomar en consideración el clima político tenso y violento que se vivió durante la campaña electoral de 1919, de tal manera que ambos actores temieron ser víctimas de maniobras y actos ilícitos por parte de sus adversarios; y a pesar que los comicios fueron relativamente calmados, la sospecha de trampas siguió alertando los ánimos de los candidatos durante el proceso del escrutinio, ya sea que fuese

una revolución por parte de Leguía o un golpe reaccionario por parte de fuerzas leales al gobierno.

En la máxima tensión de esta incertidumbre Leguía decidió actuar, ya que si hubiese esperado a que Pardo “haga el primer movimiento”, poco o nada se habría podido hacer estando prisionero, exiliado o muerto. La “puesta de mano” de Leguía decidió la situación a su favor, como podría haber sido lo contrario en caso de una anticipación por parte de Pardo. Los hechos consumados parecieron demostrar a los pardistas que efectivamente habían sido víctimas de un plan golpista elaborado con antelación (Karno; 1971: 223-4).

Desde nuestra perspectiva, nos interesa explicar las razones del éxito que tuvo el golpe de Estado de Leguía, ya sea que fue planificado con anticipación o que se haya presentado por la lógica de interacción de los actores políticos dado un contexto electoral caracterizado por un ambiente viciado de estrategias ilegítimas.

Tanto por la falta de permeabilidad política y social del gobierno, como por la emergencia de nuevos actores sociales, el régimen político se reveló como un escenario excluyente, de tal manera que el clivaje latente producto de la marcada estratificación social que caracterizaba al Perú de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se traslada a la política y configuran dos polos claramente definidos: la oligarquía versus las clases medias y populares. La emergencia de este clivaje en el ámbito de la política se hace posible además por que surge un actor político que lo propone explícitamente como tal, y asume la representación de uno de estos sectores: Augusto Leguía.

La movilización de obreros, empleados y estudiantes que caracterizaron casi todo el gobierno de Pardo y con especial énfasis durante 1919, dadas las dificultades económicas que la primera guerra mundial trajo para estos grupos sociales y además por la política de austeridad fiscal que impuso el gobierno, evidenciaron la escisión que la clase política tenía con la sociedad, la cual dejaba de ser una pasiva observadora del escenario de la política, para convertirse en grupos activos que intentaban ingresar en ella a pesar de la

poca receptividad de la misma. En todo caso la experiencia populista de Billinghurst aún permanecía en la memoria de todos ellos, ya sea para quienes estaban dispuestos a intentarlo otra vez, como para quienes lo tomaban como una poderosa razón para evitar que se vuelva producir un nuevo desborde social.

La expresión “argolla” para referirse al gobierno, expresaba tanto una voluntad de no abrir los espacios de la política, como un síntoma de la deslegitimación del gobierno de Pardo y en general del régimen político al que pertenecía, abarcando por tanto a la clase política en su conjunto. Es probable que de no haber surgido un canal político que reivindique estas voces populares, el “status quo” no se hubiese visto alterado, o por lo contrario se hubiese incubado una profunda amenaza de una revolución social.

Pero el hecho fue que un actor, que surgió de este mismo régimen, percibió esta necesidad de representación política y la utilizó como un elemento clave de su estrategia para acceder al poder. Y es a partir del despliegue de esta estrategia de polarización que el escenario político se decanta con claridad: la oligarquía versus el pueblo³²⁴. Tal alternativa atraviesa a los distintos partidos políticos y grupos de interés, dejando perplejos a quienes no atinan a tomar posición en esta polarización³²⁵.

La representación de los intereses populares fue asumido anteriormente por los demócratas y liberales, más tarde constituyeron el núcleo programático y la inspiración estratégica de Billinghurst. Sin embargo, el Partido Demócrata perdió su relevancia política a partir de la muerte de su fundador en 1913, y el Partido Liberal se alejó de estos grupos al incorporarse al gobierno conservador de Pardo. Por su parte, los excesos

³²⁴ Este decantamiento fue apuntalado por los propios errores de las políticas gubernamentales, que reflejaban una ausencia de interés por las necesidades económicas de estos grupos sociales. Más tarde la propia decisión del Presidente Pardo de respaldar la candidatura de Antero Aspíllaga, representante nato de la oligarquía, también contribuirá a destacar la relevancia de esta oposición.

³²⁵ Un importante sector de la clase política no se alinea con Aspíllaga ni con Leguía, quedando como observadores de un conflicto que parecía no involucrarlos, si es que éste se hubiese resuelto por los canales institucionales, de tal manera que hubieran conservado sus cuotas de poder políticos tradicionales: sin embargo, todos se verían afectados, para bien o para mal, con la ruptura democrática que acarreó este golpe de Estado.

radicales de la movilización popular que Billinghurst promovió, suscitó una reacción de la clase política en su conjunto, que provocó la caída de su gobierno.

Sin embargo, la diferencia clave en las estrategias de polarización que tanto Billinghurst como Leguía implementaron, fue la postura que tomaron las fuerzas armadas. Mientras que la clase política se alió con el ejército para derrocar a Billinghurst en 1914, Leguía se adelantó a cooptar al ejército, la marina y la gendarmería para derrotar a la clase política en 1919. Ya desde la insurrección demócrata el 29 de mayo de 1909 durante el primer gobierno de Leguía, éste se percató del rol clave que desempeñaba el ejército como árbitro en una crisis de régimen; por lo tanto tomó especial cuidado en asumir sus reivindicaciones (salarios, armamento, ascensos, la recuperación de las provincias cautivas) y en establecer alianzas con algunos de sus interlocutores (el Partido Constitucional) y vínculos clientelares con oficiales de múltiples rangos; todo ello le permitió a Leguía obtener la ventaja estratégica necesaria para realizar la jugada final de un juego viciado: eliminar al adversario.

CONCLUSIONES

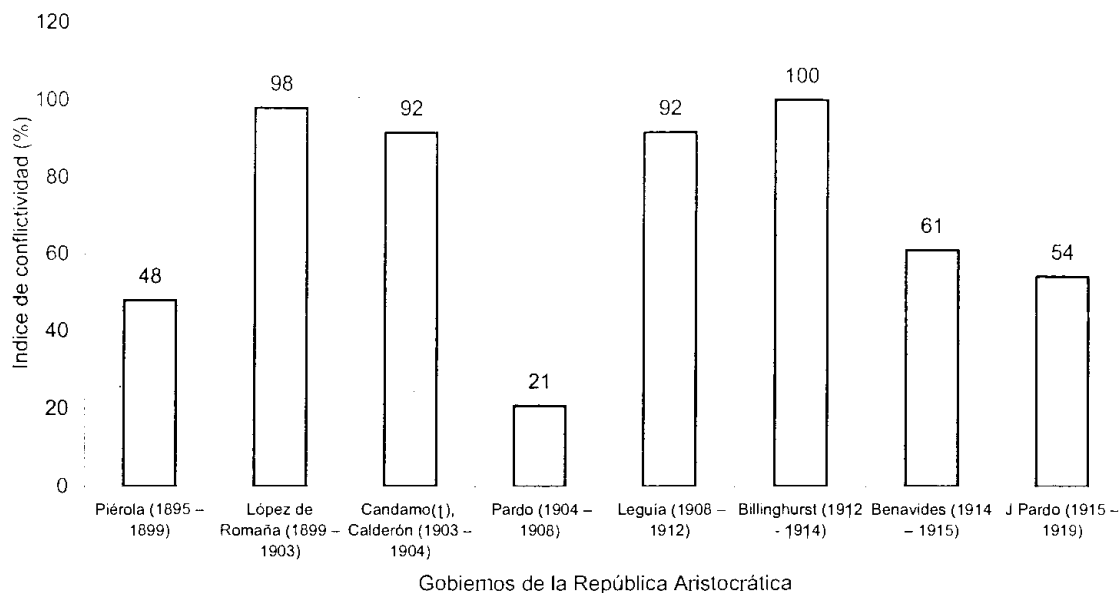
Conflictividad e incumplimiento de reglas: el círculo vicioso.

La promesa de una consolidación democrática que el siglo XIX parece dejar al término del gobierno de Nicolás de Piérola en 1899, no se cumpliría en la primera década de siguiente siglo. Las ventajas políticas e institucionales logradas durante la fase de instalación del régimen democrático (una élite nacional unificada, legitimidad de la institucionalidad democrática, distribución equilibrada de poderes y reconstitución de los partidos políticos) serían progresivamente desarticuladas en el transcurso de los siguientes gobiernos.

La coalición triunfante de la revolución de 1895 permitió a la élite demócrata - civilista restablecer un orden institucional sobre la base de la Constitución de 1860 y una nueva ley electoral. La nueva dinámica política no implicaba ausencia de conflictos; la fase de instalación que se desarrolló durante el gobierno de Piérola (1895 – 1899) tuvo una conflictividad media que repercutió directamente en varias crisis de gabinetes (ver Figura No.11). Empero, una característica importante de esta conflictividad es su variedad, de tal manera que encontramos antagonismos de diverso tipo: ejecutivo versus legislativo, católico conservador versus laico liberal, demócrata versus civilista, centralista versus descentralista. Esta pluralidad de antagonismos disminuyó la intensidad de la conflictividad ya que desincentivó a los actores a que asumieran estrategias distributivas o de suma cero y por lo contrario favoreció el mantenimiento de acuerdos partidarios y de élite, en la medida que los adversarios circunstanciales en un determinado conflicto eran requeridos como aliados en alguna otra situación, así las actitudes de competitividad se moderaron en función de cálculos estratégicos para futuras alianzas³²⁶.

³²⁶ Los ámbitos de cooperación de esta élite civil – demócrata los lleva no sólo a la regulación de los conflictos existentes vía la negociación, sino además a presentarse como alianza electoral en múltiples oportunidades, constituyendo como tal la única opción políticamente relevante.

Figura No. 11: Índice de conflictividad según gobiernos entre 1895 y 1919



Por lo tanto, el tipo gobierno democrático que se implementó durante el gobierno de Nicolás de Piérola se aproxima a lo que Lijphart denomina “modelo consensual” (1999: cap.3), en la medida que la alianza civil – demócrata representaba políticamente a casi toda la población electoral³²⁷; el tipo de gabinetes de Piérola (e incluso hasta la primera fase del gobierno de López de Romaña) eran de composición multipartidaria y sobredimensionados³²⁸; y existía un equilibrio de poderes que se manifestaba en una frecuencia media de rotación ministerial (ver Anexo No. 6) y en la capacidad de veto de cualquiera de las cámaras del legislativo sobre los gabinetes del ejecutivo. Finalmente, el

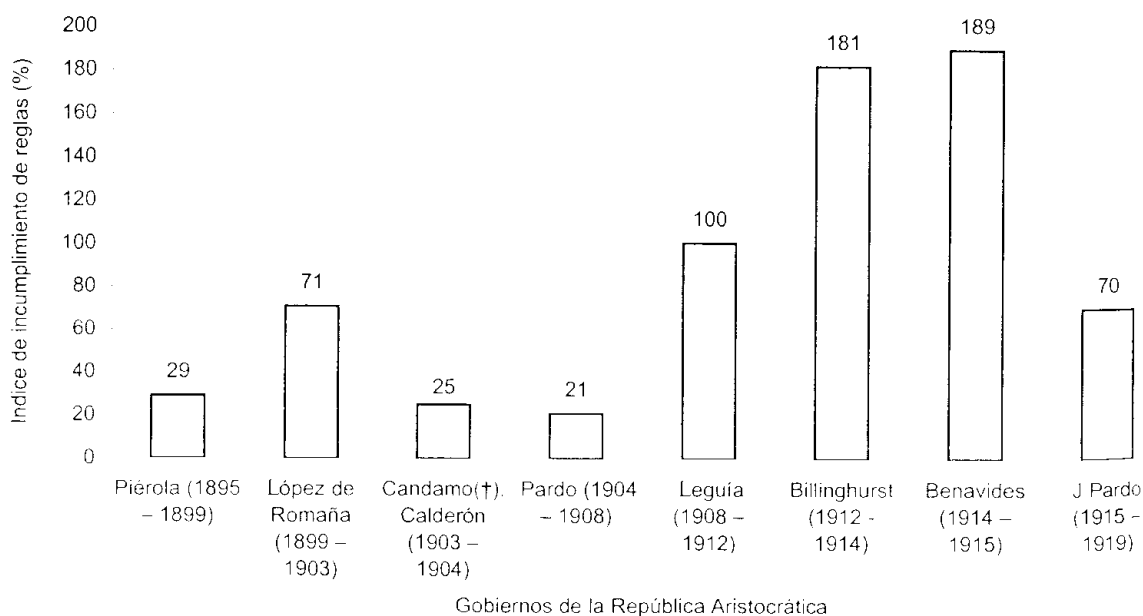
³²⁷ Tanto Nicolás de Piérola como Eduardo López de Romaña ganaron las elecciones presidenciales con el 96% de los votos válidos en 1895 y 1899 respectivamente. Ambos fueron candidatos de la coalición civil – demócrata y no se presentaron candidatos alternos. Sin embargo, una diferencia significativa en los resultados electorales de ambos candidatos fue el grado de ausentismo electoral, aunque considerando que el voto no era obligatorio: en el primer caso fue del 16.7% y de 46.3% para el segundo (porcentajes calculados sobre los datos que brinda Basadre; 1968: 119, v. X; y 1968: 16, v. XI)

³²⁸ Uno de los indicadores que Lijphart (1999: 90-1) señala para diferenciar a los gobiernos mayoritarios de los consensuales, es que éstos últimos constituyen gabinetes sobredimensionados (“oversized cabinets”), es decir compuestos por más partidos de los necesarios para lograr el apoyo de una mayoría parlamentaria. Es el caso de la mayor parte de los gabinetes de Piérola, que teniendo la posibilidad de ser monopartidarios dada la mayoría demócrata en ambas cámaras legislativas, estaban integrados por destacados miembros del Partido Civil.

estilo político predominante consistió básicamente en negociaciones y acuerdos cooperativos entre los partidos y sus respectivos líderes.

Sin embargo, la constitución de un nuevo orden político no estuvo exenta de violaciones a las reglas del juego democrático por parte de los actores políticos (ver Figura No.12), las cuales reflejaban la falta de consolidación del modelo en sus primeros años, a pesar de los esfuerzos de la élite política y el propio Presidente Piérola por fortalecer las instituciones. Estas trampas se debieron en su mayor parte a dos criterios: la falta de acostumbramiento de los líderes a una dinámica de conflicto por las vías establecidas por la ley, de tal manera que algunos de los perdedores recurrieron circunstancialmente a medios violentos (montoneras) o estrategias ilícitas; y por otro lado, a la existencia de un Estado aún débil que es asediado por poderes locales que no se someten a un orden jurídico nacional. Podemos observar que sólo durante el gobierno de Piérola “estallan” 11 movimientos armados (ver Anexo No. 7), aunque la mayor parte de ellos de raigambre local y fácilmente derrotados por destacamentos del ejército nacional enviados al lugar de los hechos.

Figura No.12: Índice de incumplimiento de reglas según gobiernos entre 1895 a 1919



Las estrategias divergentes de los demócratas y el Presidente López de Romaña a partir de 1900, dieron la oportunidad para que el Partido Civil logre desplazar al Partido Demócrata del gobierno. Es a partir de la segunda fase del Gobierno de López de Romaña en que se empiezan a resquebrajar progresivamente los acuerdos y alianzas que habían imperado hasta entonces, y se da paso progresivamente a un modelo democrático mayoritario (Lijphart; 1999: cap.2) con la conformación del gabinete Chacaltana (11 de octubre de 1901 al 30 de julio de 1902) que excluyó al Partido Demócrata del bloque gobiernista, y quedó constituido por la alianza entre López de Romaña y el Partido Civil, el cual le prestó no sólo el apoyo en la conformación del Consejo de Ministros, sino además con el respaldo de la mayoría que los civilistas disponían en la Cámara de Senadores.

Un evento políticamente significativo es el que ocurre el 16 de agosto de 1901, cuando el Gobierno de López de Romaña no reconoce la facultad de la Cámara de Diputados de censurar al gabinete (amparándose en la Constitución de 1860 que señalaba que la capacidad de veto requería de ambas cámaras en congreso pleno), la cual sí se había respetado de manera informal durante el gobierno de Piérola. Esta menor dependencia del ejecutivo respecto del parlamento contribuyó decisivamente a un desequilibrio de los poderes y repercutió directamente en una mayor estabilidad de los gabinetes ministeriales (antes del desconocimiento de López de Romaña al veto ministerial por parte de una sola de las cámaras, sus gabinetes tenían un promedio de 4 meses de duración; mientras que posteriormente sus gabinetes tuvieron una vigencia promedio de 9 meses³²⁹); y por otro lado incentivó la conformación de “coaliciones ganadoras mínimas”³³⁰. En consecuencia, es partir de 1901 en que los gabinetes de López de Romaña se sostuvieron exclusivamente en la mayoría que los civilistas alcanzaron en el Senado ese mismo año (ver Anexo No. 3), y por lo tanto el ejecutivo deviene en un poder dominante respecto del

³²⁹ Ver anexo No.3. Encontramos nuevamente una alta rotación de gabinetes durante los gobiernos de Leguía y Billinghurst, los cuales no contaban con mayoría parlamentaria, y durante los breves gobiernos de Candamo y Benavides.

³³⁰ Lijphart fundamenta su concepto de “coaliciones mínimamente ganadoras” (minimal winning coalitions) en William Riker, y la define como “*winning (majority) coalitions in which only those parties that are minimally necessary to give the cabinets majority status*” (1999: 92).

equilibrio en las relaciones gobierno -- parlamento, lo cual lo acerca al denominado “modelo mayoritario”³³¹.

La configuración de un modelo de democracia mayoritaria se reforzó en la medida que se hizo mayor la exclusión del Partido Demócrata de los ámbitos de poder (nominación de la Junta Electoral Nacional con mayoría civilista y sin la participación de los demócratas en 1902; la pérdida de la mayoría en la cámara de diputados y un gobierno sustentado en la nueva alianza de los partidos civil -- constitucional en 1903). Por lo tanto, la predominancia política del Partido Civil fue la directa contraparte de la marginación demócrata. Esta ruptura de la alianza civil -- demócrata durante el gobierno de López de Romaña incrementó notoriamente el índice de conflictividad, lo cual repercutió inicialmente en la inestabilidad de gobierno (crisis de gabinetes); por otro lado, la frecuencia de comisión de trampas en el juego político se hizo mayor que en el periodo anterior, pero sin llegar a alcanzar el carácter desleal que adquirió en la siguiente década.

A inicios de la primera década del siglo XX, el sistema de partidos era bipartidista con una ligera mayoría demócrata³³², hacia fines de la misma el sistema sería de “partido y medio” con una marcada predominancia del Partido Civil, lo cual nos refleja la disminución de la representación demócrata en el parlamento e incluso su desplazamiento como segunda fuerza política por el Partido Constitucional. Otro nuevo actor políticamente relevante (el Partido Liberal) contribuyó a que no disminuyese más el número efectivo de partidos. El rol de estos nuevos partidos en la escena política durante la primera década del siglo XX fue la de estrechos aliados de los partidos tradicionales, así los liberales se constituyeron en acompañantes de los demócratas en las trucas

³³¹ “The majoritarian model concentrates political power in the hands of a bare majority (...) whereas the consensus model tries to share, disperse and limit power in a variety of ways. A closely related difference is that the majoritarian model of democracy is exclusive, competitive and adversarial ... (Lijphart; 1999: 2).

³³² La estimación de número efectivo de partidos en 1901 la realizamos en base a la sumatoria de las votaciones para las mesas directivas de ambas cámaras en el Parlamento en las que competían los candidatos demócratas (52%) y civilistas (48%), de tal manera que el 1.99 que obtenemos nos arrojan un bipartidismo casi perfecto. Consideramos tomar como referencia estos datos en la medida que no existen cifras que nos muestren resultados electorales legislativos para ese periodo ni la correlación partidaria en el parlamento; sin embargo las votaciones para la mesa directiva de las cámaras es un buen indicador ya que sólo existían para esa época dos partidos formalmente presentes en Congreso: el civil y el demócrata. Los porcentajes de votación fueron calculados en base a los datos encontrados en Miro Quesada: 1961: 309.

campanías electorales de 1903, 1904 y 1908, en la coordinación parlamentaria e incluso en los movimientos subversivos que se promovieron en 1908, 1909 y 1911; por otro lado, los constitucionales devinieron en socios permanentes de los civilistas, ya sea en diversas campañas electorales presidenciales y legislativas entre 1903 y 1908, en los gabinetes del ejecutivo y en la actividad legislativa.

El breve lapso en que Manuel Candamo estuvo en el poder (setiembre de 1903 a mayo de 1904) implicó un reencuentro de la élite política y el renacimiento de la expectativa demócrata para una alternancia en el poder; por tales razones la conflictividad y el incumplimiento de reglas de juego durante los pocos meses de este gobierno fue muy bajo. La afinidad entre Candamo y Piérola se basaba en las estrechas relaciones que habían unido a estos líderes históricos durante la revolución de 1895, luego como aliados en el gobierno del Califa; así como en las frecuentes reuniones que tuvieron ambos actores durante esta efímera gestión, interrumpida por la muerte de este mandatario.

Sin embargo, una nueva elección presidencial, la reafirmación de la alianza civil – constitucional y la negativa del Presidente Provisional, Serapio Calderón, para modificar el predominio civilista en la Junta Electoral Nacional, reactivaron la conflictividad entre civilistas y demócratas, así como el incremento de las violaciones de las reglas del juego democrático. Finalmente, la política de abstención electoral de Nicolás de Piérola terminó por arrinconar al Partido Demócrata de la escena oficial, al extremo que su otrora mayoritaria bancada parlamentaria disminuyó notoriamente su representación en el transcurso de la siguiente década, hasta el punto de su virtual extinción.

El bajo nivel de conflictividad y de incumplimiento de reglas durante el primer gobierno de José Pardo (1904 – 1912) nos podría dar una equivocada idea si es que no consideramos que bajo una aparente tranquilidad y estabilidad de gobierno, los componentes centrales de fortalecimiento del régimen estaban siendo minados. De este modo, ya no se contaba con una élite nacional unificada (una parte de ella estaba apartada de la escena oficial): en segundo lugar, el debilitamiento del partido demócrata afectaba la institucionalización del sistema de partidos en su conjunto, y finalmente una aplastante

mayoría oficialista quebraba el otrora equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo (la rotación más baja de los gabinetes se da durante el primer gobierno del Presidente Pardo). Por tanto, la aparente calma política durante este gobierno era sólo un preámbulo para la “tormenta” que se venía gestando y que tendría graves consecuencias para la institucionalidad democrática.

La marginación del Partido Demócrata del escenario oficial de la política y la pérdida de expectativas de retornar al poder por la vía electoral incentivó en este actor una conducta desleal: el recurso a la violencia. Por tanto, el partido restó prioridad a su labor proselitista, se replegó en su rol de oposición en el ámbito parlamentario e iniciaron los preparativos para la lucha armada. El primer intento subversivo estalla hacia fines del gobierno de Pardo y continuarían durante el siguiente gobierno de Leguía, hasta resultar militarmente derrotados hacia principios de la segunda década. La facción demócrata menos recalcitrante y negociadora encabezada por Guillermo Billinghurst es relegada, por lo que la exitosa carrera política de éste transcurrió por fuera de los canales partidarios.

El bipartidismo vuelve a tener vigencia durante la segunda fase del gobierno de Leguía (a partir de 1911), pero en esta ocasión con un diferente realineamiento de fuerzas: leguístas versus antileguístas³³³. La progresiva autonomización de Leguía del Partido Civil y la conformación de su propia agrupación política dividen el escenario político en dos grandes polos que incluso divide internamente a los partidos oficialistas: civilistas y constitucionales. El avasallamiento de las instituciones democráticas que acomete Leguía en un contexto de alta conflictividad y de constantes violaciones a las reglas de juego incentiva la conformación de un solo grupo de oposición: “el Bloque”, alianza conformada por los partidos que se oponen a Leguía: el Partido Civil Independiente, el

³³³ El número efectivo de partidos para julio de 1911 es de 1,99, y lo calculamos según las cifras que proporciona Capuñay (1951: 87) cuando estima la correlación de los dos frentes parlamentarios: el bloque contra Leguía (72 parlamentarios) y los gobiernistas (62 parlamentarios). Para agosto del mismo año y luego de imposición ilegítima que Leguía hace de un tercio de los parlamentarios al Congreso, calculamos el número efectivo de partidos en 1,85; sin embargo un año más tarde calculamos dicho número efectivo de partidos en 1,90, en base a la elección del 1er Vicepresidente (94 votos a favor y 59 en contra) Roberto Leguía, que nos indica un balance de los grupos políticos en el Congreso (Basadre: 1968: 218, v.XII).

sector constitucional liderado por el General Muñiz, el Partido Liberal, y de manera informal por los pocos parlamentarios que aún quedaban del Partido Demócrata.

El incremento en las violaciones en las reglas de juego se constituyó en una espiral a partir del gobierno de Augusto Leguía (1908 – 1912), y más exactamente cuando fracasan las negociaciones para reincorporar al debilitado Partido Demócrata en la escena oficial (1909), y éstos optan por la vía armada, lo cual desencadenó la represión oficial y la consiguiente exclusión definitiva de los demócratas de la política nacional. Por lo tanto, una vez que el Presidente Leguía ya no tiene la posibilidad de ampliar su base política para incrementar su poder al interior del civilismo, asume una estrategia de confrontación con todos los partidos y de imposición ilegítima de su propia bancada parlamentaria, lo cual conllevó a la primera crisis de régimen en 1911 (usurpación del tercio parlamentario por parte del ejecutivo) y al borde de una ruptura constitucional. La institucionalidad partidaria postergó este desenlace.

Esta primera crisis de régimen marca un hito que nos permite diferenciar la dinámica política de la primera década con la segunda década del siglo XX. Si bien la conflictividad política de ambas décadas es similar (ver Figura No. 11, *infra* pag. 318), la interacción estratégica entre los actores es mucho más “tramposa” en este segundo periodo, lo cual contribuye a que los acuerdos de la élite política sean más efímeros, y por ende se vea más debilitada la institucionalidad del sistema de partidos (la mayor parte de ellos resquebrajados por pugnas y divisiones internas), como la propia legitimidad del régimen democrático. Es a partir del gobierno de Leguía en el que aparecen los primeros movimientos sociales (estudiantes y obreros) que además de reivindicar sus demandas particulares, cuestionan las prácticas políticas tradicionales, así como a los partidos políticos existentes.

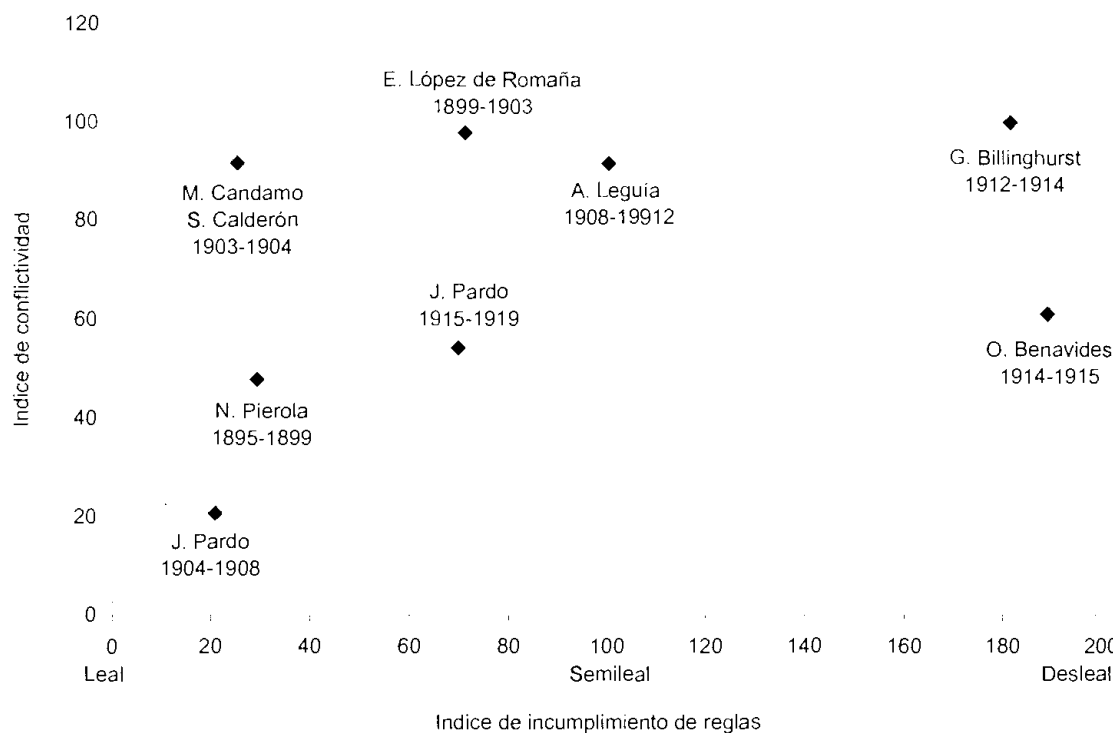
La irregularidades institucionales es una característica constante durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, ya sea desde el momento en que el éxito del boicot electoral con el apoyo del movimiento obrero le permite ser electo por el Congreso en 1912, hasta su salida por un “golpe institucional” en 1914. La intensidad conflictiva durante este

gobierno (la más alta de todos los demás), la naturaleza estratégica de interacciones de suma cero que alentaban esta conflictividad, y el carácter minoritario de los gabinetes (no contaban con el respaldo de una mayoría parlamentaria) desembocó en una orientación abiertamente desleal en ambos actores: la eliminación del adversario. Consideramos que la irregular salida de Billinghurst del poder no implicó una ruptura democrática, en tanto que fue aprobada por el Congreso, la misma fuente de poder que lo investió como presidente unos meses antes. En todo caso, el triunfo de la estrategia contraria (la clausura del parlamento) sí hubiese implicado una quiebra definitiva de las instituciones democráticas.

Características similares en cuanto a la alta conflictividad y naturaleza desleal en la interacción estratégica de los actores tiene el nuevo gobierno del Coronel Oscar Benavides (1914 – 1915), sobre todo a partir de la ruptura del consenso inicial por el cual se forma la Junta Provisional de Gobierno integrada por todos los partidos políticos relevantes del momento, y se nombra a Benavides como Presidente Provisional, con una composición ministerial que sólo incluía al sector minoritario del parlamento (civilistas y constitucionales). Esta nueva crisis de régimen se superó cuando los leguístas deciden apoyar la nueva correlación de fuerzas y sólo el Partido Liberal se mantuvo en la oposición, como fuerza minoritaria.

Más allá de estas similitudes entre los gobiernos de Billinghurst y Benavides (ver Figura No. una diferencia sustantiva entre ambos es el desenlace final, ya que mientras el primero terminó abruptamente, el último promovió una convención partidaria que eligió a un candidato presidencial que representaría a todos los participantes en las siguientes elecciones (civilistas, liberales y constitucionales). A partir de este acuerdo multipartidario salió electo el civilista José Pardo como nuevo mandatario por un segundo periodo (1915 - 1919), y con lo cual pareció que la élite política nacional se recomponía luego de una accidentada y conflictiva dinámica política durante el quinquenio anterior.

Figura No. 13: Incumplimiento de reglas y conflictividad en Gobiernos de la República Aristocrática (1895-1919)



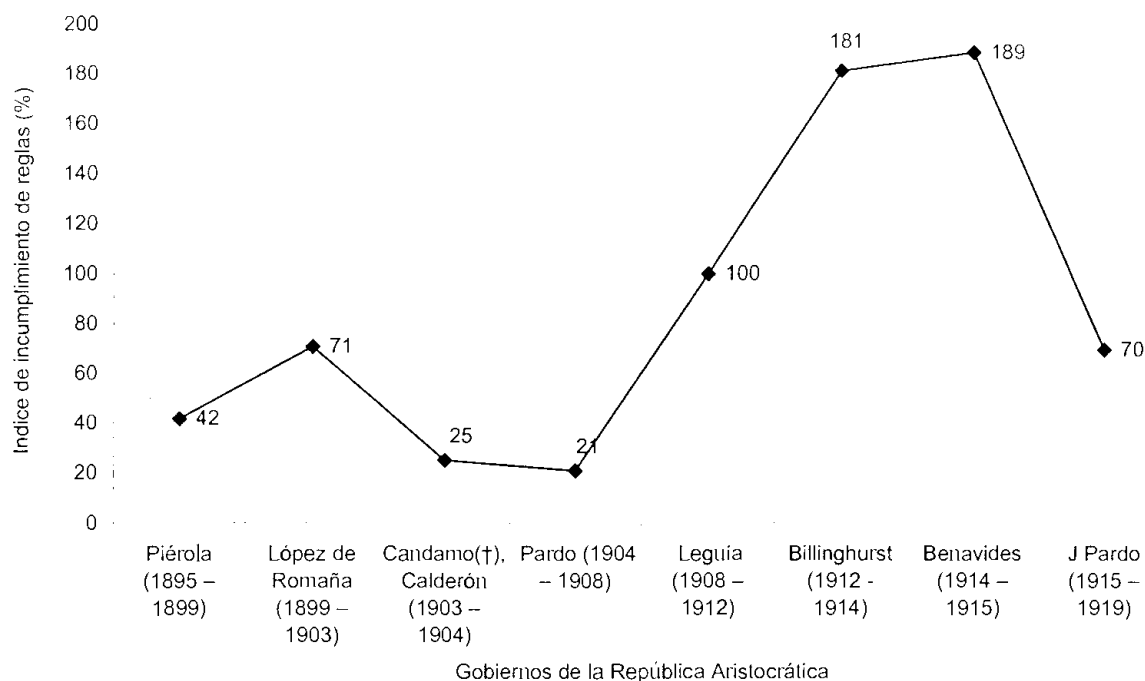
Sin embargo, este aparente consenso fue precario y duró muy poco tiempo. Tres factores contribuyeron a la disolución esta efímera alianza: en primer lugar, la orientación conservadora del gobierno de Pardo que no dejó que las nuevas fuerzas políticas (el Partido Nacional Democrático) y sociales (el movimiento obrero y estudiantil) tuviesen un espacio de representación en su interior. Por el contrario, se acentuó una tendencia excluyente y oligárquica que alejó aún más a los jóvenes universitarios de la política oficial, y aplicó una política económica austera y restrictiva que afectó severamente las condiciones de vida de la clase media y popular. En segundo lugar, la reactivación de un actor político (Leguía) que se había mantenido latente durante los últimos años, y que regresa con un gran ímpetu y con una orientación estratégica muy definida: la ruptura del régimen democrático y la eliminación de sus adversarios. Y finalmente, el alto grado de deslegitimación en la que había caído el régimen democrático y que se manifestaba en

una gran cantidad y variedad de manifestaciones, huelgas y paros durante este segundo gobierno de Pardo.

A pesar que el grado de conflictividad y comisión de trampas durante este gobierno no fue uno de los más altos (más bien de grado intermedio), la “corrosión” institucional de los círculos viciosos de la democracia (estrategias ilegítimas) habían desgastado lo suficiente a la élite política nacional, que una parte importante de ella se alió al golpe de Estado de Leguía en 1919, y otro sector no pudo oponer una acción eficaz para defender la vigencia de esta institucionalidad. Por otro lado, el sistema de partidos políticos estaba seriamente afectado por el debilitamiento de sus principales actores: el divisionismo del Partido Civil, la muerte del carismático líder liberal Augusto Durand, la cuasi desaparición del Partido Demócrata, el repliegue de carácter subversivo del Partido Constitucional. En suma, un escenario muy propicio para que el golpe de Estado no encontrara mayores dificultades en su cometido: el cierre del espacio democrático institucional.

Esta reconstrucción de la dinámica de conflictos y trampas de los gobiernos de la “República Aristocrática” nos permite demostrar la hipótesis inicial por la cual se pretende explicar la quiebra democrática a partir de la existencia de una intensificación de estrategias ilegítimas de los actores políticos, que denominamos “círculos viciosos”. Así, podemos observar en la Figura No.14 que esta espiral viciosa de trampas tiene un primer ascenso durante el periodo del Presidente López de Romaña (1904 – 1908), aunque el gran incremento empieza durante el gobierno de Leguía (1908 – 1912), para de allí en adelante seguir escalando durante el siguiente quinquenio (gobiernos de Billinghurst y Benavides). La disminución relativa de estas trampas durante el segundo gobierno de Pardo (1915 – 1919) no contrarresta el alto grado de desgaste de las instituciones, de tal modo que la consumación golpista acaece sin la menor resistencia de los actores políticos.

Fugira No.14: Índice de incumplimiento de reglas según gobiernos
entre 1895 a 1919

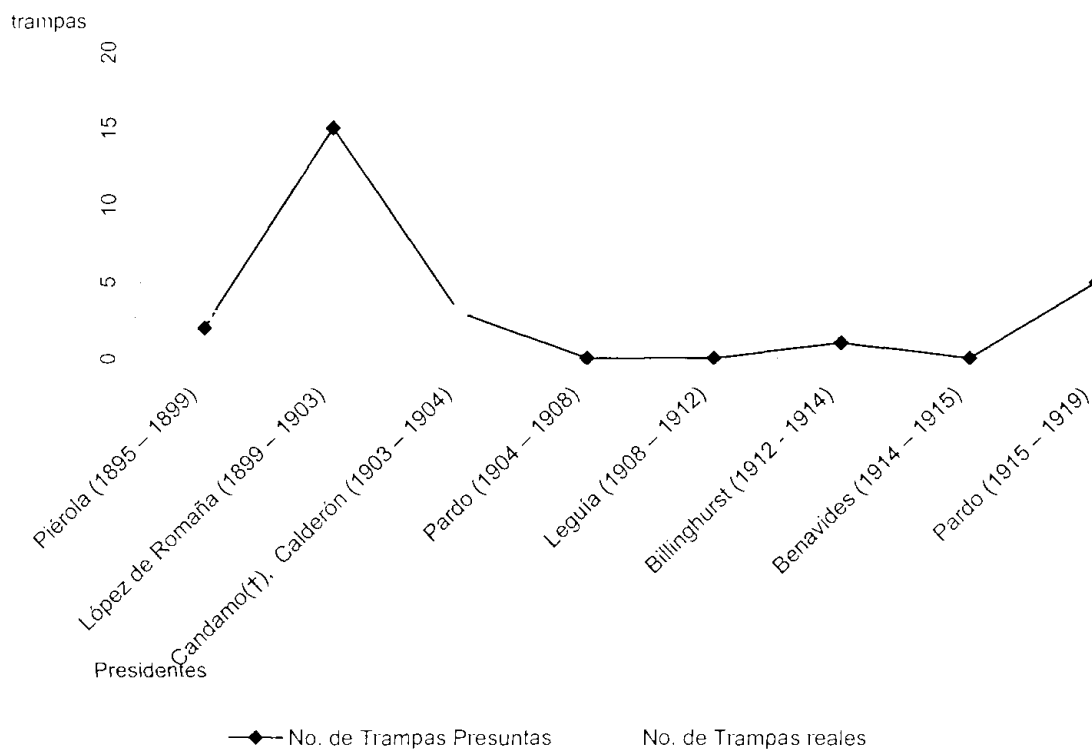


Asimismo, este **círculo vicioso** de trampas entre actores políticos también se manifiesta en una transición de lo que denominamos “trampas presuntas” a “trampas reales”³³⁴, es decir que en los primeros años hay una predominancia de indicios de trampas por parte de los actores políticos relevantes; sin embargo, más adelante empiezan a imperar las

³³⁴ Clasificamos a un evento político como “*trampa presunta*” cuando un actor denuncia a otro de la comisión de la violación de una regla formal o de una norma informal del juego político, y sin embargo el otro actor defiende que su acción es legítima. Si la ambigüedad del caso no nos permite resolver con certeza acerca de la realidad de la trampa, la calificamos como “presunta”, la cual no es útil por que nos indica que la proliferación de estos casos denota la existencia de un ambiente donde los actores sospechan que su adversario no está jugando correctamente. Denominamos “*trampa real*” a una evidente violación de la regla que comete cualquier actor político relevante, de tal manera que nosotros como observadores externos podemos calificarla como tal a partir del conocimiento de normatividad institucional respectiva, ya sea que exista o no una denuncia pública de los adversarios. La valoración de las “trampas reales” es mayor que de las “trampas presuntas” para efectos de calcular el valor de las trampas cometidas durante un gobierno determinado.

trampas propiamente dichas, es decir que el “juego sucio” se hace más abierto y descarnado.

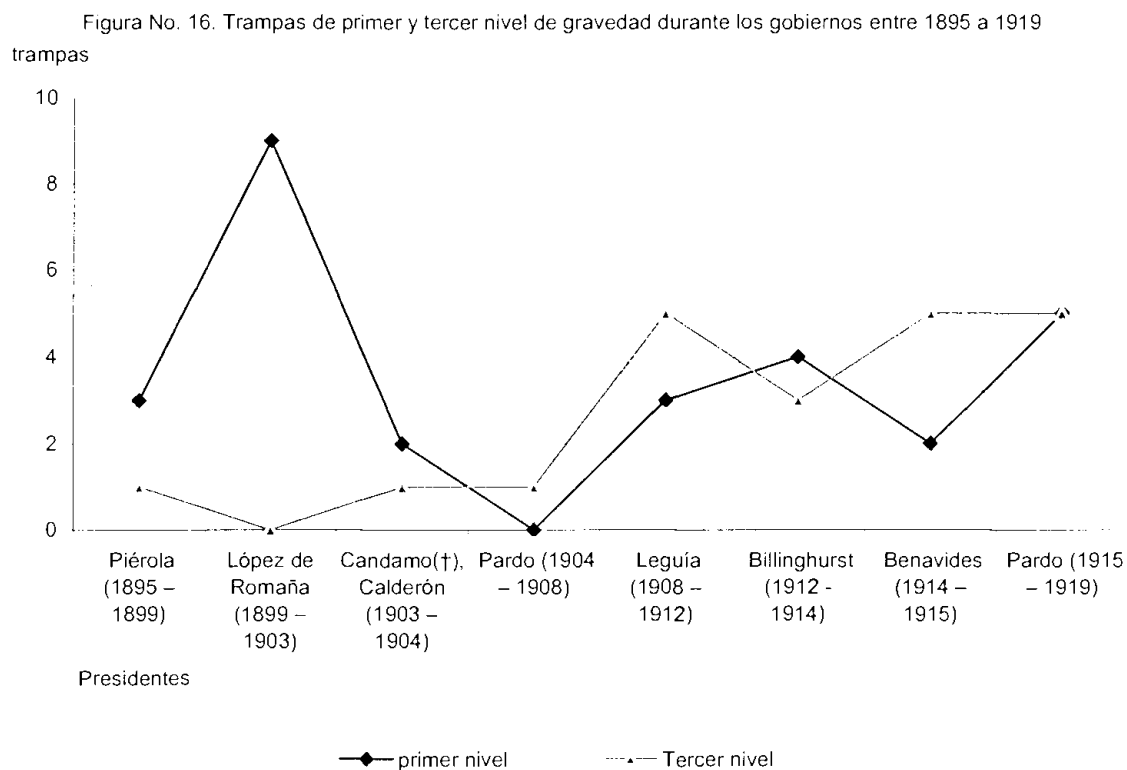
Figura No. 15: Trampas Presuntas y Trampas Reales durante los gobiernos entre 1895 a 1919



En tercer lugar, observamos una progresión en cuanto a la gravedad de trampas³³⁵. Vale decir que cada vez se empiezan a cometer trampas de mayor gravedad (3er nivel) conforme transcurren los gobiernos; con lo cual concluimos que los actores políticos

³³⁵ Distinguimos tres niveles de gravedad de las trampas reales o trampas presuntas, el de mayor gravedad (o nivel 3) son aquellas acciones políticas que están dirigidas a eliminar al adversario (física o políticamente) y que puede ser por ejemplo: un intento de golpe de estado, un movimiento subversivo, la violación de los derechos elementales de los opositores, las acciones de gravedad intermedia (o nivel 2) se refieren a aquellas que están orientadas a corromper, cooptar o usurpar al árbitro (Poder Judicial, Junta Electoral Nacional, Parlamento) con el fin de validar alguna otra acción política ilegítima, ejemplos: usurpación de delegados en la Junta Electoral Nacional, clausura de la Junta Electoral Nacional, nombramiento de candidatos no electos como parlamentarios; finalmente tenemos las acciones de menor gravedad (o nivel 1) que son atribuidos a las acciones políticas que violan una regla de juego y que permiten la acumulación de poder o prestigio de un actor en perjuicio de su competidor: rompimiento de acuerdos electorales, no convocar a legislatura extraordinaria para aprobar el presupuesto, apoyo del gobierno a determinados candidatos en desmedro de otros.

relevantes pretenden la eliminación de su adversario conforme se incrementa la interacción estratégica viciosa (ver siguiente figura). El fracaso de esta misma estrategia en el caso de Billinghurst tuvo como dramática consecuencia su exclusión definitiva de la presidencia de la república y de la política nacional.



La clave explicativa: interacción entre actores e instituciones. Un enfoque pluralista.

Considerando los procesos y secuencias posibles de un cambio de régimen que propone Morlino (1998: 22); la ruta específica del régimen democrático del presente estudio transcurre a través de las siguientes fases: transición, instalación, crisis y ruptura (marcadas por las líneas continuadas en la siguiente figura).

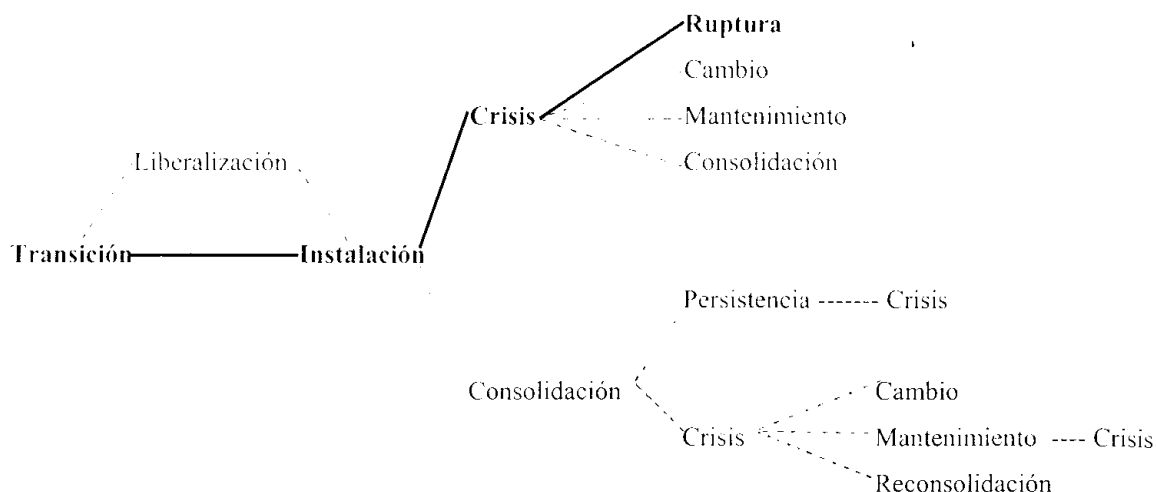


Figura No. 17: Procesos, resultados y secuencias en el cambio democrático (traducción mía).
 Fuente: Morlino; 1998: 22.

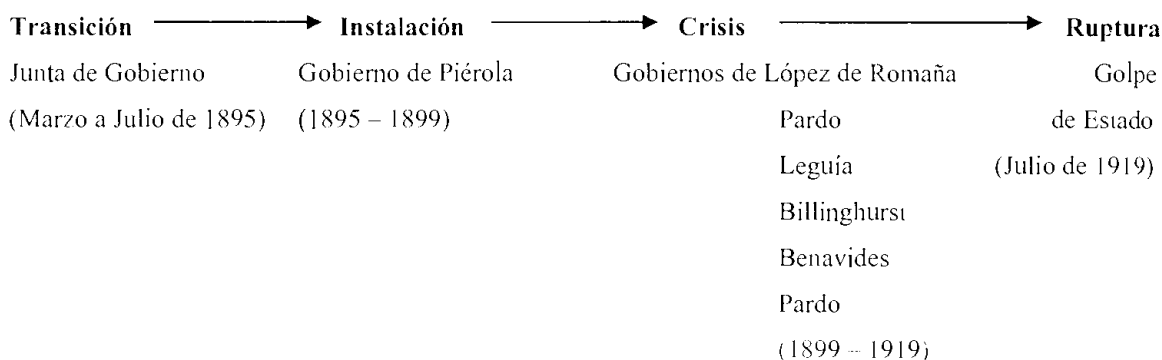


Figura No. 18: Fases por las que atraviesa el régimen político peruano entre 1895 a 1919.

Como señalamos anteriormente, los esfuerzos de consolidación democrática³³⁶ iniciados durante la fase de instalación del gobierno de Piérola (1895 – 1899) no se continuaron en las siguientes dos décadas, es decir desde los gobiernos que van de López de Romaña al segundo gobierno de José Pardo (1899 a 1919). Por lo contrario, lo que se tuvo en este periodo fue un proceso constante de debilitamiento de las instituciones democráticas que se tradujeron en frecuentes crisis políticas. En concreto, nos referimos al deterioro

³³⁶ "Thus, consolidation is the multifaceted process by which democratic structures, norms and regime-civil society relationships are firmly established. This process implies the strengthening of the democratic regime to avert possible future crisis." (Morlino; 1998: 14)

institucional de los partidos políticos, a un desequilibrio de poderes expresado en el predominio del poder ejecutivo sobre el parlamento, y al rompimiento de acuerdos y alianzas que regulaban la dinámica del juego democrático que conllevó a la dispersión de la élite política nacional. Todos estos “retrocesos” contribuyeron notablemente a la pérdida de legitimidad del régimen democrático en la segunda década del siglo.

Por tanto, si la dinámica política a partir de 1899 estuvo marcada por una crisis largamente sostenida³³⁷; es necesario diferenciar los **tipos de crisis** por los que transcurren los gobiernos de López de Romaña al segundo gobierno de Pardo, para lo cual recurriremos a las explicaciones sobre el conflicto político que brinda la teoría pluralista. Según este enfoque, una democracia no está exenta de conflictos, por lo que la “materia prima” de la política consiste en las demandas de los grupos de interés y los equilibrios logrados a partir de la competencia entre estos grupos. Asimismo, señala que las preferencias de los individuos están influidas por la pertenencia a determinados grupos sociales, los cuales dividen a la sociedad en determinados conflictos fundamentales o “clivajes” (Miller; 1983).

Por lo tanto, podemos encontrar un tipo de crisis política cuando una sociedad se encuentra “atravesada” por varios clivajes, y por tanto la superposición de estos conflictos genera múltiples y pequeños grupos de preferencias (personas de diversas pertenencias sociales y políticas que tengan algún tipo de interés en común); de este modo, las intensidades de los conflictos serán menores, lo cual contribuye significativamente a brindar estabilidad al sistema político.

Esta dispersión del conflicto en un escenario de varios clivajes la podemos encontrar en el gobierno de Nicolás de Piérola, lo cual daba como resultante una baja intensidad del conflicto. Asociamos el gobierno de Piérola con una democracia consensual (Lijphart) y

³³⁷ Una situación de crisis política respecto de un régimen democrático puede mantenerse durante un largo periodo en el tiempo, a diferencia de la acepción médica del término que alude a un lapso temporal breve.

una bipolarización no polarizada (Sartori)³³⁸, es decir con un bipartidismo con muchos ejes de conflicto (multipolarización). El tipo de crisis que podemos vincular a este modelo es el que se deriva de los problemas de mayorías cíclicas (alianzas eventuales de grupos minoritarios que derrotan a una opción mayoritaria), es decir donde se forman coaliciones circunstanciales que censuran a diversos gabinetes por temas diferentes. Incluso la propia bancada parlamentaria oficialista se dividen en sus votaciones y por tanto emergen “ganadores” en todos los grupos políticos relevantes. Este tipo de conflictos generan **crisis de gobiernos** (expresado básicamente en rotación de gabinetes), que se superan con la aceptación de los resultados por parte de los perdedores (en tanto tienen expectativas futuras de triunfo)³³⁹ y con procesos de negociación entre las élites de los grupos políticos.

Por otro lado, un tipo de crisis política diferente se gesta cuando nos encontramos frente a un sistema bipolar polarizado (Sartori) o modelo de democracia mayoritaria (Lijphart), es decir cuando se constituyen dos polos claramente opuestos en un clivaje predominante, el cual intensifica altamente la conflictividad del escenario político. Si bien, en un inicio esta tendencia bipolar o mayoritaria se configura con una mayoría clara o estable (como sucedió con el primer gobierno de José Pardo entre 1904 a 1908), la teoría pluralista advierte sobre el peligro de que emerjan actores (los minoritarios) que se vean permanente excluidos y por tal razón tiendan a no aceptar los resultados, y en consecuencia promuevan movimientos antisistémicos o revolucionarios (la estrategia subversiva del Partido Demócrata hacia fines del gobierno de Pardo y en el siguiente gobierno de Leguía).

De este modo, en la medida que los demócratas se vieron excluidos del poder y sin expectativas de acceder al mismo por la vía electoral recurrieron a medios alternativos a

³³⁸ “Se supone que un sistema bipolar no está polarizado, en tanto que la polarización bipolar indica un sistema un sistema político muy conflictivo propenso a la fragmentación. Técnicamente, un sistema bipolar tiene una curva de distribución normal en forma de campana (la curva de Gauss – La-pluce) en la que los electores se ubican en un *continuum* izquierda – derecha (o de otro tipo), mientras que la bipolarización supone una curva de opiniones políticas en la que hay dos picos y el centro está vacío.” (Sartori: 1996: 26).

³³⁹ “Acatar los resultados del momento, aunque supongan una derrota, y encauzar todas sus acciones a través del marco institucional resulta preferible para las fuerzas democráticas que intentar subvertir la democracia” (Przeworski: 1995: 43).

la institucionalidad vigente (golpes de estado y movimientos subversivos), mientras que la alianza oficialista recurrió a mecanismos represivos cada vez más duros y progresivamente menos ajustados a la ley. Así, la oposición dejó atrás el “*only game in town*” que caracteriza la dinámica de una democracia, y el gobierno no respetó el “*rule of law*” que le daba sustento y legitimidad. Es el punto en que se constituyen los “*círculos viciosos*” de una democracia, en tanto que la interacción de actores dicotómicos en un contexto de conflicto polarizado los sitúa en el conocido dilema del prisionero, donde la competencia ilegítima desplaza a la cooperación y la negociación³⁴⁰.

La derrota militar de la estrategia subversiva demócrata hacia 1911 dio paso a nuevas polarizaciones (conflicto en una sola dimensión o clivaje) igualmente desequilibrantes: leguistas versus antileguistas entre 1910 a 1912, ejecutivo versus legislativo durante 1913 a 1919, dinámica que incrementó la intensidad del conflicto y que además incentivó la comisión de trampas por parte de los actores políticos. Se constituyó así un escenario donde la gravedad de los conflictos provocó no sólo crisis de gobierno sino además **crisis de régimen**, los cuales rebasan los mecanismos institucionales que se contemplan para resolver un conflicto, generando en consecuencia inestabilidad de todo el sistema político, tal como fueron: la imposición ilegítima del tercio parlamentario leguista en 1911, el boicot electoral de las elecciones en 1912, el golpe institucional contra Billinghurst en 1914, la exclusión de la mayoría parlamentaria para la elección de Benavides como Presidente Provisorio en 1914.

Cabe señalar que así como era de esperarse una consolidación del régimen democrático a fines del siglo XIX (meta truncada), no hubiese sorprendido la ruptura del régimen democrático durante algunas de las crisis de régimen que sucedieron durante este periodo. Empero, las decisiones colectivas que emergieron de los partidos en esos momentos de crisis de régimen se orientaron a lograr la recomposición el consenso y a evitar la ruptura institucional. Tales propósitos permitieron la reconstitución temporal de

³⁴⁰ “the more closely a society approximates to the model of a monolithic majority bloc facing a minority which is always on the losing side, the more a reasonably prudent person would refuse to accept that, if he or she found himself in such a society and in the minority group, he or she would be bound to respect the laws that had been passed by the majority over minority opposition.” (Miller; 1983: 737).

la élite política y la continuidad del régimen; sin embargo, la institucionalidad estaba ya resquebrajada y la legitimidad seriamente cuestionada; por lo tanto, la presencia de un actor antisistémico (Eguía) aprovechó de todas estas circunstancias para dar curso a la trampa definitiva (el golpe de Estado) que cerró el largo ciclo democrático iniciado en 1895.

Bibliografía

- Allison, Graham** (1971), *Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis*. Little, Brown, Boston, Mass.
- Annino, Antonio**, (1995), *Historia de las Elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, De la Formación del Espacio Político Nacional*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Arenas, Germán**, (1941), *Algo de una Vida (Para después de mi muerte)*, Lima.
- Basadre, Jorge** (1968), *Historia de la República del Perú, v.IX. al XIV*, Talleres Litográficos de la Editorial Universitaria, Lima.
- (1978), *APERTURA, textos sobre temas de historia, educación, cultura y política entre 1924 y 1977*, Ediciones Taller, Lima.
- (1980), *Elecciones y Centralismo en el Perú, Apuntes para un esquema histórico*, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima.
- (1981a), *Sultanismo, Corrupción y Dependencia en el Perú Republicano*, Editorial Milla Bartres, Lima.
- (1981b), *Peruanos de siglo XX*, Ed. Rikchay Perú, Lima.
- (1982), *Perú: Problema y Posibilidad y otros ensayos*, Biblioteca Ayacucho.
- Belaunde, Víctor Andrés** (1961), *Mi Generación en la Universidad, Memorias*, Imprenta Lumen, Lima.
- (1962), *Planteamiento del Problema Nacional, Memorias*, Imprenta Lumen, Lima.
- (1964), *La Realidad Nacional*, Talleres Gráficos Villanueva, 1964.
- (1987), *Obras Completas, II Meditaciones Peruanas*, Edición de la Comisión Nacional del Centenario, Lima.
- Binmore, Ken** (1995), *Game Theory and the Social Contract, Volume I, Playing Fair*, The MIT Press, Cambridge.
- (1998), *Game Theory and the Social Contract II. Just Playing*. The MIT Press, Cambridge.
- Blanchard, Peter** (1977), "A populist Precursor: Guillermo Billinghurst" en *Journal of Latin American Studies*, Vol. 9. Part 2. Cambridge University Press, Cambridge.

- (1982), *The Origins of the Peruvian Labor Movement, 1883 - 1919*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Bobbio**, Norberto (2000a), *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México.
- (2000b), *Liberalismo y democracia*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Bollen**, Kenneth (1980), "Issues in Comparative Measurement of Political Democracy" en *American Sociological Review*, Vol. 45, No.3, Junio.
- Burga**, Manuel y Alberto Flores Galindo (1987), *Apogeo y Crisis de la República Aristocrática*, Ed, Rikchay Perú, Lima
- Capuñay**, Manuel (1951), *Leguía, Vida y Obra del Constructor del Gran Perú*, Compañía de Impresiones y Publicidad, Enrique Bustamante y Ballivián, Lima.
- Carmagnani**, Marcelo (1984), *Estado y Sociedad en América Latina, 1850 - 1930*, Crítica, Barcelona.
- (1998) "Elites políticas, sistemas de poder y gobernabilidad en América Latina" en *Metapolítica*, Vol.2, No.5: 7-16.
- Carothers**, Thomas (2000), "The End of the Transition Paradigm", en *Journal of Democracy*, Vol. 13, No.1, Enero.
- Cohen**, Youseff (1994), *Radicals, Reformers and Reactionaries, The Prisoner Dilemma and the Collapse of Democracy in Latin America*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Colomer**, Josep (1998), *La transición a la democracia: el modelo español*, Anagrama, Barcelona.
- (2001a), *Transiciones estratégicas, Democratización y teoría de juegos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- (2001b), *Instituciones Políticas*, Ariel Ciencia Política, Barcelona.
- Collier**, David y Steven Levitsky (1997). "Democracy with adjectives: conceptual innovation in comparative research", en *World Politics*, vol. num. 3, 430-51. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Cornejo**: Mariano H. (1902), *Discursos Parlamentarios y Políticos V 2*, Imp. de la C. de D., Lima.

- Cotler, Julio** (1986), *Clases, estado y nación en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- (1994), *Política y Sociedad en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Chanamé, Raúl** (), “El sufragio en el Perú”, en *Revista Socialismo y Participación* No.52: 63-75, CEPES, Lima.
- Chiaramonti, Gabriella** (2000), “Construir el centro, redefinir al ciudadano: restricción del sufragio y reforma electoral en el Perú de finales del siglo XIX”, en Carlos Malamud, *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México.
- Chiaramonti, Gabriella** (1995), “Andes o Nación. La reforma electoral de 1896 en Perú”, en Antonio Annino, *Historia de las Elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX, De la Formación del Espacio Político Nacional*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Chirinos, Enrique** (1977), *Historia de la República 1821-Perú-1978*, Editorial Andina, Lima.
- Chocano, José Santos** (1940), *Memorias. Las mil y una aventuras*. Editorial Nascimento, Santiago de Chile.
- Dahl, Robert** (1989), *La Poliarquía, Participación y Oposición*, Editorial Rei, Argentina.
- (1971), *Polyarchy, Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven.
- (1991), *Los dilemas del pluralismo democrático, Autonomía versus control*, Alianza Editorial, México.
- (1993), *La democracia y sus críticos*, Ediciones Paidós, Barcelona.
- (1999), *La democracia. Una guía para sus ciudadanos*, Taurus, España.
- Dávalos, Pedro** (1919). *La Primera Centuria. Causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente*, Librería e Imprenta Gil, Lima.
- (1930), *Diez años de la Historia Contemporánea del Perú 1899-1908*, Librería e Imprenta Gil, Lima.

- Del Águila, Alicia** (1994), *Callejones y Mansiones, Espacios de opinión pública y formas de acción política: el funcionamiento de una democracia restringida (1895 - 1919)*, Tesis para optar el grado de maestra en ciencias sociales, Flaco, México.
- Diamond, Larry; Juan Linz y Seymour Lipset** (1988), *Volume two, Democracy in Developing Countries, Africa*, Lynne Rienner Publishers, Boulder Colorado.
- (1989), *Volume four, Democracy in Developing Countries, Latin America*, Lynne Rienner Publishers, Boulder Colorado.
- (1990), *Comparing Experiences with Democracy*, Lynne Rienner Publishers, Boulder Colorado.
- Diamond, Larry; Marc Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien** (1997), *Consolidating the Third Wave Democracies*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Doorenspleet, Renske** (2000), "Reassessing the Three Waves of Democratization" en *World Politics*, vol. 52, No.3: 384-406.
- Dulanto, Jorge** (1947), *Nicolás de Piérola*, Compañía de Impresiones y Publicidad, Lima.
- Felstiner, Mary** (1976), "Kinship Politics in the Chilean Independence Movement" en *Hispanic Historical Review*, vol.5, No.1: 58-80.
- Friedman, Douglas** (1984), *The state and underdevelopment in Spanish America The political roots of dependency in Peru and Argentina*, Westview Press, Colorado.
- Gasiorowski, Mark** (1993), "The Political Regimen Project", en *On Measuring Democracy, its consequences and Concomitants*, Alex Inkeles (editor), Transaction Publishers, New Jersey.
- (1996), "An Overview of the Political Regime Change Dataset" en *Comparative Political Studies*, Vol.29, No.4, Agosto, 469-83.
- Garret, Gary** (1973), *The Oncenio of Augusto B. Leguía: Middle Sector Government and Leadership in Peru 1919-1930*, Tesis Ph.D., The University of New Mexico, New Mexico.

- Gilbert, Dennis** (1982), *La oligarquía peruana: historia de tres familias*, Editorial Horizonte, Lima.
- Gonzales, Michael** (1991), "Planters and Politics in Peru, 1895 – 1919" en *Journal of Latin American Studies*, Vol. 23, Part 2, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gonzales, Osmar** (1996), *Sanchos Fracasados, Los arielistas y el pensamiento político peruano*, Ediciones PREAL, Lima.
- (2002), *Los Orígenes del Populismo en el Perú: El gobierno de Guillermo Billinghurst*, Biblioteca Nacional del Perú, Lima.
- Gootenberg, Paul** (1989), *Between Silver and Guano, Commercial policy and the state in postindependence Peru*, Princeton University Press, Princeton.
- Grindle, Merilee** (1986), *State and Countryside, Development policy and agrarian politics in Latin America*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Guerra, Margarita** (1994), *La República 1900 – 1948, Tomo VIII*, Editorial Brasa, Lima.
- Hartlyn, Jonathan** (1993), *La Política del Régimen de Coalición, La Experiencia del Frente Nacional en Colombia*, Ediciones Uniandes, Colombia.
- Hermet, Guy; Alain Rouquie y Juan Linz** (1982), *¿Para qué sirven las elecciones?*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Higley, John y Michael Burton** (1989), "The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdowns" en *American Sociological Review*, vol. 54, No.1: 17 – 32.
- Higley, John y Richard Burton** (1992), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Huntington, Samuel** (1968), *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Have.
- (1991), *The Third Wave, Democratization in the late twentieth century*, University of Oklahoma Press, Oklahoma.
- Irurozqui, Marta** (2000), "Sobre leyes y trasgresiones: reformas electorales en Bolivia 1826-1952, en Carlos Malamud, *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México.

- Jacobson, Nils** (2002); "Pensamiento económico y políticas económicas en el Perú, 1885-1899" en Carlos Contreras y Manuel Glave, *Estado y Mercado en la Historia del Perú*, Fondo Editorial del PUCP, Perú.
- Kalyvas, Stathis** (1996), *The Rise Of Christian Democracy in Europe*, Cornell University Press, Ithaca.
- Karl, Terry Lynn** (1990); "Dilemmas of Democratization in Latin America", en *Comparative Politics*, No. 23, Octubre.
- Karno, Howard** (1970), *Augusto B. Leguía: The Oligarchy and the Modernization of Peru, 1870 – 1930*, Tthesis Ph. D., University of California, Los Angeles.
- Kenney, Charles** (1996), " Outsider and Antiparty Politicians in Power: New Conceptual Strategies and Empirical Evidence from Peru" en *Party Politics*, vol. 4, No.1: 57-75.
- Lijphart, Arend** (1988), *Democracia en Sociedades Plurales, Una Investigación Comparativa*, Ediciones Prisma, México.
- (1999), *Patterns of Democracy, Government Forms and Performances in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven.
- Levi, Margaret; Jean-Laurent Rosenthal y Barry Weingast** (1998), *Analytic Narratives*, Princeton University Press, New Jersey.
- Lewin, Linda** (1979), "Some Historical Implications of Kinship Organizations for Family – based Politics in the Brazilian Northeast" en *Comparative Studies in Society and History*, vol. 62, No. 2: 262-92.
- Lynch, Nicolás** (1996), "Del fracaso de los partidos al reino de los independientes", Mimeo.
- Linz, Juan** (1970), "An authoritarian regime: The case of Spain" en *Mass Politics: Studies in Political Sociology*", Erik Allard y Stein Rokkan (editores), Free Press, Nueva York.
- (1975), "Totalitarian and authoritarian regimes" en *Handbook of political science. Vol. 3. Macropolitical theory*, Fred Greenstein y Nelson Polsby, Addison Wesley, Massachusetts.
- (1987), *La quiebra de las democracias*, Alianza Editorial, Madrid.

- (1990), "Transiciones a la democracia" en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, No.51, julio-setiembre: 7-33.
- Linz, Juan;** y Alfred Stepan (1978), *The Breakdown of Democratic Regimes, Latin America*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- (1996), *Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Linz, Juan y Arturo Valenzuela** (1994), *The Failure of Presidential Democracy*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Mac-Lean, Roberto** (1959), *Sociología del Perú*, Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Madalengoitia, Laura** (1979), "El estado oligárquico y la transición hacia una nueva forma de estado en el Perú" en Enrique Bernal, *Burguesía y Estado Liberal*, Lima.
- Mair, Meter** (1997), *Party System Change, Approaches and Interpretations*, Clarendon Press, Oxford.
- Mainwaring, Scott y Timothy Scully**, editores (1995), *Building Democratic Institutions, Party Systems in Latin America*, Stanford University Press, California.
- Mainwaring, Scott;** Guillermo O'Donnell y Samuel Valenzuela, editores (1992), *Issues in Democratic Consolidation, The New South American Democracies in Comparative Perspective*, University of Notre Dame Press, Indiana.
- Malamud, Carlos** (2000), *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México.
- Mariátegui, José Carlos** (1991), *Escritos Juveniles, La Edad de Piedra, Tomo III*, Biblioteca Amauta, Lima.
- Martín, José Carlos** (1948), *José Pardo y Barreda, El Estadista, un hombre, un partido, una época, apuntes para la historia del Perú*, Compañía de Impresiones y Publicidad, Lima.

- Mc Evoy**, Carmen (1997), *La Utopía Republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana (1871-1919)*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima.
- McFaul**, Michael (2002), "The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship, Noncooperative Transitions in the Postcommunist World" en *World Politics*, No.54, vol. 2: 212 – 244.
- Miller**, Nicholas (1983), "Pluralism and Social Choice" en *The American Political Science Review*, vol. 77, No.3, The American Political Science Association, Washington.
- Miller**, Rory (1982), "The Coastal Elite and Peruvian Politics" en *Journal of Latin American Studies*, Vol.14, Part 2, Cambridge University Press, Cambridge.
- Miro Quesada**, Carlos (1946), *Pueblo en Crisis*, Emecé Editores, Buenos Aires.
- (1959), *Radiografía de la Política Peruana*, Ediciones Páginas Peruanas, Lima.
- (1961), *Autopsia de los Partidos Políticos*, Ediciones Páginas Peruanas, Lima.
- Morlino**, Leonardo (1998), *Democracy between Consolidation and Crisis. Parties, groups, and citizens in Southern Europe*, Oxford University Press, Oxford.
- Munck**, Gerardo y Jay Verkuilen (2000), *Measuring Democracy. Evaluating Alternatives Indices*, Documento presentado al Congreso Mundial 2000 del International Political Science Association, Quebec, Canada.
- O'Donnell**, Guillermo (1993), "On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries" en *World Development*, Vol.21, No.8: 1355-69.
- (1997), *Contrapuntos, Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Argentina.
- O'Donnell**, Guillermo, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead (1994). *Transiciones desde un Gobierno Autoritario. vol. 3. Perspectivas Comparadas*. Paidós. Barcelona.

- O'Donnell**, Guillermo y Philippe Schmitter (1994), *Transiciones desde un Gobierno Autoritario*, vol. 4, *Conclusiones Tentativas sobre las Democracias Inciertas*, Paidós, Barcelona.
- Ortega**, Reynaldo (2001), *Caminos a la Democracia*, El Colegio de México, México.
- Palma**, Guiseppe di (1990), *To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions*, University of California Press, Berkeley.
- Parra**, Pedro (1969), *Bautismo de fuego del proletariado peruano*, Editorial "Linotipo de los Rotarios", Lima.
- Parker**, David (1992), *The eight hour day in Peru, January 1919; Anarchist Victory or Political Bargain?*, LASA XVII International Congress, Los Angeles.
- (1998), *The Idea of the Middle Class. White -Collar Workers and Peruvian Society, 1900 - 1950*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Partido Demócrata** (1912), *Declaración de Principios del Partido Demócrata*, Tip. La Voce de Italia, Lima.
- Pasquino**, Gianfranco (1999), *La democracia exigente*, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
- Paz - Soldán**, Juan Pedro (1914), *El Golpe de Estado del 29 de Mayo de 1909*, Imprenta del Estado, Lima.
- (1921), *Diccionario Biográfico de Peruanos Contemporáneos*, Librería e Imprenta Gil, Lima
- Pease**, Franklin (1995), *Breve Historia Contemporánea del Perú*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Planas**, Pedro (1994), *La República Aristocrática*, Fundación Friedrich Ebert, Lima.
- Posada**, Eduardo (2000), "Fraude al sufragio: la reforma electoral en Colombia 1830-1930", en Carlos Malamud, *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México.
- Portocarrero**, Gonzalo (1995), "El fundamento invisible: función y lugar de las ideas aristocráticas en la República Aristocrática" en Aldo Panfili y Felipe

Portocarrero (editores), *Mundos Internos; Lima 1830 -- 1950*. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima.

Przeworski, Adam (1992), "The Games of Transition" en Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell y Samuel Valenzuela, editores (1992), *Issues in Democratic Consolidation, The New South American Democracies in Comparative Perspective*, University of Notre Dame Press, Indiana.

----- (1994), "Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia" en Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter y Lawrence Whitehead (1994), *Transiciones desde un Gobierno Autoritario, vol. 3, Perspectivas Comparadas*, Paidós, Barcelona.

----- (1995), *Democracia y Mercado, Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*, Cambridge University Press, Cambridge.

----- (1999), "La democracia como resultado contingente de resultados" en Jon Elster y Rune Slagstad, *Constitucionalismo y Democracia*, Fondo de Cultura Económica, México.

Przeworski, Adam; Michael Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi (2000), *Democracy and Development, Political Institutions and Well -Being in the World, 1950 - 1990*, Cambridge University Press, Cambridge.

Ríos, Ricardo (1918), *La Convención de los Partidos de 1915*, Imprenta Torres Aguirre, Lima.

Rueschemeyer D., Huber Stephens and J.D. Stephens (1992), *Capitalist Development and Democracy*, University of Chicago Press, Chicago.

Rivas, Manuel (1964), *Historia política y parlamentaria de Chile*, Chile: Biblioteca Nacional, Santiago.

Ruiz, Augusto (2001), *La multitud, las subsistencias y el trabajo, Lima 1890 - 1920*, Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial, Lima.

Roeder, Philip (1998), "Transitions from Communism: State - Centered Approaches" en Harry Eckstein, Frederic Fleron, Erik Hoffman y William Reisinger, editores, *Can democracy take root in post-Soviet Russia?: explorations in state-society relations*, Rowman & Littlefield, Lanham, Md.

- Rustow, Dankwart** (1970), "Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model". en *Comparative Politics*, vol. 2, No.3, Abril, 337-363.
- s/a.** (1976), *El Mariscal Benavides, su vida y su obra*, Editorial Atlántida, Lima.
- Sánchez, Luis Alberto** (1936), *Haya de la Torre o el Político, Crónica de una vida sin tregua*, Ediciones Arcilla, Santiago de Chile.
- Sánchez, Luis Alberto** (1958), *El Perú: Retrato de un País Adolescente*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Santistevan, Jorge** (1980), *La Huelga en el Perú*, Cedys, Lima.
- Saragoza, Alex** (1979), *The Monterrey Elite and the Mexican State, 1880 – 1940*, University of Texas Press, Texas.
- Sartori, Giovanni** (1989), *Teoría de la democracia, el debate contemporáneo*, Alianza Editorial, Madrid.
- (1994), *Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Schedler, Andreas** (2002), "Elections Without Democracy, The Menu of Manipulation" en *Journal of Democracy*, Volume 13, Number 2, April, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Sehmitt, Carl** (1998), *El Concepto de lo Político*, Alianza Editorial, Madrid.
- Smith, Peter** (1974), *Argentina and the failure of democracy: conflicts among political elites, 1904 – 1955*, Madison, Wisconsin.
- Sorensen, Georg** (1998), *Democracy and Democratization, Process and Prospects in a Changing World*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- Schumpeter, Joseph** (1947), *Socialism and Democracy*, Harper, New York.
- Tanaka, Martín** (1998), *Los Espejismos de la Democracia. El Colapso del Sistema de Partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva Comparada*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima
- Topik, Steven** (1987), *The political cconomy of the Brazilian State, 188 – 1930*, University of Texas Press, Austin.
- Torrejón, Luis** (1995), "Lima 1912: el caso de un motín popular urbano" en Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero (editores), *Mundos Internos: Lima 1830 – 1950*. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima.

- Touraine, Alain** (2000), *¿Qué es la democracia?*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Ulloa y Cisneros, Alberto** (1947), *Reflexiones de un cualquiera*, Talleres Gráficos Rodríguez Giles y Cía., Buenos Aires.
- (1946), *Escritos Históricos*, Talleres Gráficos Didot, Buenos Aires.
- Ulloa Sotomayor, Alberto** (1981), *Don Nicolás de Piérola, Una Época en la Historia del Perú*, Imprenta Editorial Minerva, Lima.
- Valenzuela, Arturo** (1991), *The Breakdown of Democratic Regimes, Chile*, The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Valenzuela, Samuel** (2000), “La ley electoral de 1890 y la democratización del régimen político chileno, en Carlos Malamud, *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, México.
- Villanueva, Víctor** (1973), *Ejército Peruano, del caudillaje anárquico al militarismo reformista*, Editorial Juan Mejía Baca, Lima
- Varian, Hal** (1992), *Análisis Microeconómico*, Antoni Bosch Editor, España.
- Wantchekon, Leonard y Zvita Neeman** (2002), A Theory of Post Civil-War Democratization, en *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 14, No.4, Sage Publications.
- Wells, Alan** (1984), “Family Elites in a Boom – and – Bust Economy: The Molinas and Peons of Porfirian Yucatan” en *Hispanic American Historical Review*, vol. 62.
- Yepes, Ernesto** (1972), *Perú 1820 – 1920, Un siglo de desarrollo capitalista*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Anexo No. 1 Presidentes del Perú Republicano entre 1868 y 1930

Coronel José Balta *	Agosto de 1868 – Julio de 1872
Manuel Pardo *	Agosto de 1872 – Agosto de 1876
General Mariano Ignacio Prado *	Agosto de 1876 – Diciembre de 1879
Nicolás de Piérola ***	Diciembre de 1879 – Noviembre de 1881
Francisco García Calderón ³⁴¹	Febrero a Noviembre de 1881
Contralmirante Lizardo Montero ***	Noviembre 1881 – 1883
General Miguel Iglesias ***	Octubre de 1883 – Diciembre de 1885
General Andrés Avelino Cáceres *	Mayo de 1886 – Julio de 1890
Coronel Remigio Morales Bermúdez **	Agosto de 1890 – Abril de 1894
Coronel Justiniano Borgoño ***	Abril de 1894 – Marzo de 1895
Manuel Candamo (Junta de Gobierno) ³⁴²	Marzo a Setiembre de 1895
Nicolás de Piérola *	Setiembre 1895 – Setiembre de 1899
Eduardo López de Romaña *	Setiembre de 1899 – Setiembre de 1903
Manuel Candamo *	Setiembre de 1903 – Mayo de 1904
Serapio Calderón ³⁴³	Abril a Setiembre de 1904
José Pardo y Barreda *	Setiembre de 1904 – Setiembre de 1908
Augusto Bernardino Leguía *	Setiembre de 1908 – Agosto de 1912
Guillermo Billinghurst **	Agosto de 1912 – Febrero de 1914
Coronel Oscar Benavides **	Febrero de 1914 – Agosto de 1915
José Pardo y Barreda *	Agosto de 1915 – Julio de 1919
Augusto Bernardino Leguía ***	Julio de 1919 – Agosto de 1930

* **Cargo asumido por elecciones**

** **Elegido por el Congreso**

*** **Golpe de Estado**

³⁴¹ Nombrado por una Junta de Notables en Lima durante el periodo de ocupación del ejército chileno; no siendo reconocido como presidente por Piérola, que a su vez ejercía la presidencia desde Ayacucho.

³⁴² Ejerció la presidencia de una Junta Provisoria de Gobierno como acuerdo de los delegados nombrados por Piérola y Cáceres, con el encargo de convocar a elecciones para nombrar nuevo presidente.

³⁴³ Calderón era 2do Vicepresidente y que ocupó la presidencia a la muerte Manuel Candamo conforme al mandato constitucional: anteriormente había ya fallecido el 1er Vicepresidente Alarco.

Anexo No.2
**Relación de Presidentes de la Cámara de Diputados
durante el régimen político entre 1895 a 1919**

Año	Nombre	Partido	Actividad	Procedencia
1895	1. Augusto Durand	Demócrata	Hacendado	Huánuco
1896	2.			
1897	3. Carlos de Piérola	Demócrata	Funcionario	Lima
1898	4. Carlos de Piérola	Demócrata	Funcionario	Lima
1899	5. Aurelio Sousa	Demócrata	Abogado	Lima
1900	6. Carlos de Piérola	Demócrata	Abogado	Arequipeño
1901	7. Mariano Cornejo	Demócrata	Funcionario	Lima
1902	8. Pedro de Osma	Demócrata	Negociante	Limeño
1903	9. Nicanor Álvarez Calderón	Civilista	Negociante	Limeño
1904	10. Cesáreo Chacaltana	Civilista	Abogado	Ica
1905	11. Antonio Miró Quesada	Civilista	Periodista	Callao
1906	12. Cesáreo Chacaltana	Civilista	Abogado	Ica
1907	13. Juan Pardo	Civilista	Negociante	Lima
1908	14. Juan Pardo	Civilista	Negociante	Lima
1909	15. José Matías Manzanilla	Civilista	Abogado	Ica
1910	16. Antonio Miró Quesada	Civilista	Periodista	Callao
1911	17. Roberto Leguía	Civilista	Hacendado	Chiclayo
1912	18. Juan Salazar y Oyarzábal	Civilista	Abogado	Junín
1913	19. Ricardo Bentín	Constitucionalista	Minero	Lima
1914	20. David García Irigoyen	Civilista	Abogado	Lima
1915	21. Francisco Tudela	Civilista	Abogado	París
1916	22. José Matías Manzanilla	Civilista	Abogado	Ica
1917	23. Juan Pardo	Civilista	Negociante	Lima
1918	24. Juan Pardo	Civilista	Negociante	Lima

Anexo No.3
**Relación de Presidentes de la Cámara de Senadores
durante el régimen político entre 1895 a 1919**

Año	Nombre	Partido	Actividad	Procedencia
1895	1. Manuel Pablo Olaechea	Demócrata	Abogado	Ica
1896	2. Guillermo Billingham	Demócrata	Minero	Arica
1897	3. Manuel Candamo	Civilista	Negociante	Lima
1898	4. Rafael Villanueva	Civilista	Abogado	Cajamarca
1899	5. Benjamín Boza	Demócrata	Abogado	Ica
1900	6. Julio Normand	Demócrata	Abogado	
1901	7. Manuel Candamo	Civilista	Negociante	Lima
1902	8. Antero Aspíllaga	Civilista	Hacendado	Pisco
1903	9. Antero Aspíllaga	Civilista	Hacendado	Pisco
1904	10. Rafael Villanueva	Civilista	Abogado	Cajamarca
1905	11. Manuel Irigoyen	Constitucionalista	Abogado	Lima
1906	12. Manuel Barrios	Civilista	Médico	Moquegua
1907	13. Manuel Barrios	Civilista	Médico	Moquegua
1908	14. Agustín Ganoza	Civilista	Medico	Trujillo
1909	15. Antero Aspíllaga	Civilista	Hacendado	Pisco
1910	16. Antero Aspíllaga	Civilista	Hacendado	Pisco
1911	17. Agustín Tovar	Civilista	Hacendado	Puno
1912	18. Rafael Villanueva	Civilista	Abogado	Cajamarca
1913	19. Juan Eléspuru	Constitucionalista	General	Lima
1914	20. Amador del Solar	Civilista	Diplomático	Lima
1915	21. Manuel Barrios	Civilista	Médico	Moquegua
1916	22.			
1917	23. José Carlos Bernal	Demócrata	Agricultor	Lima
1918	24. Antonio Miró Quesada	Civilista	Periodista	Callao

Anexo No.4
**Relación de los Jefes de Gabinetes
durante el régimen político entre 1895 a 1919**

Nro.	Fecha	Nombre	Partido	Presidente
1.	1895	Antonio Bentín	Demócrata	Piérola
2.	1895	Manuel Antonio Barinaga	Demócrata	Piérola
3.	1896	Manuel Pablo Olaechea	Demócrata	Piérola
4.	1897	Alejandro López de Romaña	Demócrata	Piérola
5.	1897	Enrique de la Riva Agüero	Civilista	Piérola
6.	1898	José Jorge Loayza		Piérola
7.	1899	Manuel María Gálvez	Civilista	López de Romaña
8.	1899	Enrique de la Riva Agüero	Civilista	López de Romaña
9.	1900	Enrique Coronel Zegarra	Demócrata	López de Romaña
10.	1900	Domingo Almenara	Civilista	López de Romaña
11.	1901	Cesáreo Chacaltana	Civilista	López de Romaña
12.	1901	Alejandro Deustua	Civilista	López de Romaña
13.	1902	Enrique Larrabure	Civilista	López de Romaña
14.	1903	José Pardo	Civilista	Manuel Candamo
15.	1904	Alberto Elmore	Independiente	Serapio Calderón
16.	1904	Augusto Leguía	Civilista	José Pardo
17.	1907	Agustín Tovar	Civilista	José Pardo
18.	1907	Carlos Washburn	Civilista	José Pardo
19.	1908	Eulogio Romero	Civilista	Augusto Leguía
20.	1909	Rafael Villanueva	Civilista	Augusto Leguía
21.	1910	Javier Prado y Ugarteche	Civilista	Augusto Leguía
22.	1910	Germán Schreiber	Civilista	Augusto Leguía
23.	1910	José Salvador Cavero	Constitucional	Augusto Leguía
24.	1910	Enrique Basadre	Civilista	Augusto Leguía
25.	1911	Agustín Ganoza	Civilista	Augusto Leguía
26.	1912	Elias Malpartida	Liberal	Guillermo Billinghurst
27.	1912	Enrique Varela	Militar	Guillermo Billinghurst
28.	1913	Federico Luna y Peralta	Constitucional	Guillermo Billinghurst
29.	1913	Aurelio Sousa	Demócrata	Guillermo Billinghurst
30.	1913	Enrique Varela	Militar	Guillermo Billinghurst
31.	1914	Coronel Oscar Benavides	Militar	Oscar Benavides
32.	1914	Pedro Muñiz	Constitucional	Oscar Benavides
33.	1914	Aurelio Sousa	Demócrata	Oscar Benavides
34.	1914	Germán Schreiber	Civilista	Oscar Benavides
35.	1915	Carlos Abrill	Militar	Oscar Benavides
36.	1915	Enrique de la Riva Agüero	Civilista	José Pardo
37.	1917	Francisco Tudela y Varela	Civilista	José Pardo
38.	1918	Germán Arenas	Civilista	José Pardo
39.	1918	Juan Manuel Zuolaga	Militar	José Pardo

Anexo No.5

**Lista del grupo de los “24 amigos” y
Cargos Políticos Importantes durante el régimen político entre 1895 a 1919.**

Nro.	Nombre	Presidente Cámara de Diputados	Presidente Cámara de Senadores	Jefe de Gabinete	Presidente de la República
1.	Francisco Rosas				
2.	Luis Carranza				
3.	José A. Miró Quesada				
4.	Pedro Correa				
5.	Santiago Correa				
6.	Luis Dubois				
7.	Pedro Gallagher				
8.	Ernesto Malinowski				
9.	Narciso de Aramburú				
10.	Armando Vélez				
11.	Manuel Candamo		2		1
12.	Domingo Olavegoya				
13.	Isaac Alzamora				
14.	Luis Felipe Villarán				
15.	Domingo Almenara			1	
16.	Estanislao Pardo Figueroa				
17.	Ezequiel Álvarez Calderón				
18.	Manuel Álvarez Calderón				
19.	Calixto Peiffer				
20.	Carlos Ferreyros				
21.	Enrique Ferreyros				
22.	Enrique Barreda				
23.	Antero Aspíllaga		4		
24.	Luis Bryce				
25.	Alejandro Garland				
26.	Leonidas Cárdenas				
27.	Felipe de Osma				
28.	Augusto Leguía			1	1
29.	Felipe Pardo				
30.	Francisco Tudela		1	1	
31.	Antonio Miró Quesada	2	1		
32.	José Pardo			1	2
33.	Víctor Maúrtua				

Anexo No. 6

**Consolidado de Gabinetes Ministeriales de los Gobiernos entre 1899 a 1919,
indicando el Jefe de Gabinete, fecha, duración y promedio de gabinetes por
Gobierno**

Gobierno de Nicolás de Piérola (setiembre de 1895 a setiembre de 1899)

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Antonio Bentín	8 de Set de 1895 a 28 de Nov de 1895	2.7
Manuel Antonio Barinaga	30 de Nov de 1895 a 5 de agosto de 1896	7.1
Manuel Pablo Olaechea	8 de Ago de 1896 a 3 de Nov de 1897	14.8
Alejandro López de Romaña	25 de Nov de 1897 a 23 de Dic de 1897	1
Enrique de la Riva Agüero	23 de Dic de 1897 a 13 de Mayo de 1898	4.7
José Jorge Loayza	16 de Mayo de 1898 al 8 de Set de 1899	15.7
Total : 6		Promedio: 8

Gobierno de López de Romaña (setiembre de 1899 a setiembre de 1903)

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Manuel María Gálvez	8 Set de 1899 a 2 de Dic de 1899	2.8
Enrique de la Riva Agüero	14 Dic de 1899 a 23 de Ago de 1900	8.2
Enrique Coronel Zegarra	30 Ago de 1900 a 30 de Sep de 1900	1.0
Domingo Almenara	2 de Oct de 1900 a 9 de Oct de 1901	12.2
Cesáreo Chacaltana	11 de Oct de 1901 a 30 de Jul de 1902	9.7
Alejandro Deustua	9 de Ago 1902 a 27 de Oct de 1902	2.6
Eugenio Larrabure y Unanue	4 de Nov de 1902 a 8 de Set de 1903	10.1
Total : 7		Promedio: 7

Gobierno de Candamo (†) y Calderón

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
José Pardo	8 de Set de 1903 a 9 de Mayo de 1904	8
Alberto Elmore	14 de May de 1904 a 22 de Set de 1904	4
Total: 2		Promedio: 6

Gobierno de Pardo

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Augusto Leguía	24 de Set de 1904 a 31 de julio de 1907	34.2
Agustín Tovar	1 de Ago de 1907 a 8 de Oct de 1907	2.2
Carlos Washburn	7 de Oct de 1907 a 24 de Set de 1908	11.5
Total: 3		Promedio: 16

Gobierno de Leguía

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Eulogio Romero	24 de Set de 1908 a 7 de jun de 1909	9.5
Rafael Villanueva	8 de Jun de 1909 a 5 de Mar de 1910	8.9
Javier Prado y Ugarteche	13 de Mar de 1910 a 25 de Jul de 1910	4.4
Germán Schreiber	3 de Ago de 1910 a 21 de Oct de 1910	2.6
José Salvador Cavero	3 de Nov de 1910 a 15 de Dic de 1910	1.4
Enrique Basadre	27 de Dic de 1910 a 30 de Ago de 1911	8.1
Agustín Ganoza	31 de Ago de 1911 a 24 de Set de 1912	12.8
Total: 7		Promedio: 7

Gobierno de Billinghurst

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Elias Malpartida	24 de Set de 1912 a 23 de Dic de 1912	3.0
Enrique Varela	24 de Dic de 1912 a 24 de Feb de 1913	2
Federico Luna y Peralta	25 de Feb de 1913 a 17 de Jun de 1913	3.8
Aurelio Sousa	17 de Jun de 1913 a 17 de Jul de 1913	1.0
Enrique Varela	27 de Jul de 1913 al 3 de Feb de 1914	6.1
Total: 5		Promedio: 3

Gobierno del Coronel Oscar Benavides

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Coronel Oscar Benavides	4 de Feb de 1914 a 14 de Mayo de 1914	3.3
Pedro Muñoz	15 de mayo de 1914 a 1er de Ago de 1914	2.5
Aurelio Sousa	22 Ago de 1914 a 9 de Nov de 1914	2.5
Germán Schreiber	11 de Nov de 1914 a 17 de Feb de 1915	3.2
Carlos Abrill	19 de Feb de 1915 a 18 de Ago de 1915	6.0
Total : 4		Promedio: 4

Segundo Gobierno de José Pardo

Gabinetes	Fechas	Número de Meses
Enrique de la Riva Agüero	18 de Ago de 1915 a 27 de Jul de 1917	23.7
Francisco Tudela y Varela	27 de Jul de 1917 a 26 de Nov de 1918	16
Germán Arenas	18 de Dic de 1918 a 26 de Abr de 1918	4.3
Juan Manuel Zuolaga	26 de Abr de 1918 a 4 de Jul de 1919	2.3
Total : 4		Promedio: 12

Síntesis del Consolidado de los gabinetes durante los gobiernos de 1899 a 1912, indicando el promedio de duración meses de los gabinetes según cada gobierno y estableciendo un nivel de rotación ministerial.

Gobiernos	Número de Gabinetes	Promedio de Duración en meses por cada gabinete	Nivel de rotación de gabinetes
Piérola	6	8	Media
López de Romaña	7	7	Alta
Candamo†, Calderón	2	6	Alta
Pardo	3	16	Baja
Leguía	7	7	Alta
Billinghurst	5	3	Alta
Benavides	5	4	Alta
Pardo	4	12	Media
Promedio		7.8	

Escala de Rotación de gabinetes según el número promedio de duración en meses.

Promedio de duración en meses	Nivel de Rotación de gabinetes
1 a 7	Alta
8 a 11	Media
12 a más	Alta

Anexo No. 7

Levantamientos Armados durante el régimen político entre 1895 a 1919

Nro.	Fecha	Gobierno y Gabinete	Jefe de la Rebelión y Lugar	Reivindicación	Resultados
1.	18 de mayo de 1896	Piérrola, Gabinete Barinaga	Ricardo Seminario, Mariano José Madueño, Loreto	Pronunciamiento que declara el Estado Federal de Loreto	Fuga de los líderes ante el avance de tropas del gobierno, luego fueron amnistiados.
2.	27 de setiembre de 1896	Piérrola, Gabinete Olaechea	Guerrillas indígenas caceristas en Huanta	Sublevación contra el impuesto de la Sal	Derrotados por el ejército al mando del Coronel Parra
3.	Junio de 1897	Piérrola, Gabinete Olaechea	Grimaldo y Belisario Villar (caceristas), Jaén	Insurrección de Intereses locales, promovidos por jefes regionales caceristas	Muerte de los jefes de montoneros por fuerzas del orden
4.	1898	Piérrola	Agustín Verástegui y el cacerista Manuel Rodríguez, Celendín	Insurrección enra el protocolo Billingham - La Torre	Dispersión de los jefes guerrilleros por fuerzas del orden
5.	1899	Piérrola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Coronel Vizcarra, Loreto	Declaración del Estado Federal de Loreto	Es derrotado por el ejército y Vizcarra muere en combate
6.	1899	Piérrola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Augusto Durand, Huánuco	Sublevación contra la elección de López de Romaña	Es derrotado por el ejército y Durand huye al extranjero, luego sería amnistiado.
7.	1899	Piérrola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Octavio Negrete, Camaná	Montonera contra el gobierno y la elección de López de Romaña	Capturado por el ejército
8.	1899	Piérrola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Constantino Flores, Andahuaylas	Montonera contra el gobierno y elección de López de Romaña	Derrotados por el ejército.
9.	1899	Piérrola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Octavio Santa Gadea, Huaraz	Sublevación contra el gobierno y elección de López de Romaña	Derrotada por el ejército

10.	1899	Piérola y López de Romaña Gabinetes Loayza y José María Gálvez	Felipe Oré	Montonera contra el gobierno y la elección de López de Romaña	Dispersada por el ejército
11.	1ero de mayo de 1908	Pardo, Gabinete Washburn	Augusto Durand y dirigentes liberales y demócratas	Movimiento subversivo contra gobierno de Pardo	Descubierta a tiempo, derrotada por el ejército, arresto de líderes liberales y demócratas.
12.	29 de mayo de 1909	Leguía, Gabinete Romero	Isaías de Piérola, dirigentes demócratas y liberales	Intento de golpe de estado y secuestro de Presidente Leguía	Desbaratada por incursión policial.
13.	Diciembre de 1910	Leguía, Gabinete Caveró	Montoneras demócratas en sur (Samanez Ocampo) y norte del país (Orestes Ferro)	Subversión contra Presidente Leguía, últimos arrestos militares de demócratas.	Derrotadas por el ejército
14.	Febrero de 1914	Billinghurst, Gabinete Valera	Conspiración entre parlamentarios y el ejército	Contra el intento de Billinghurst por cerrar el Congreso.	Revolución triunfante, pero no constituyó una ruptura del orden constitucional.
15.	23 de mayo de 1914	Benavides, Gabinete Muñiz	Batallón No. 7, Puno, incentivada por Durand	Intento de revuelta contra gobierno de Benavides	Descubierta a tiempo
16.	14 de junio de 1914	Benavides, Gabinete Muñiz	Conjuración para sublevar Escuela Militar de Chorrillos	Revuelta contra gobierno de Benavides	Descubierta a tiempo, apresamiento de líderes militares.
17.	22 de julio de 1914	Benavides, Gabinete Muñiz	Reunión subversiva en casa de diputado liberal Gerardo Balbucna	Revuelta contra gobierno de Benavides	Descubierta a tiempo, se persiguió a Durand y Ulloa, quienes se asilaron.
18.	17 de agosto de 1915	Benavides, Gabinete Abrill	Sublevación del comandante Rivero en Ancash	Contra la elección de Pardo y a favor de continuidad de Benavides	Benavides no apoya esta rebelión y renuncia inmediatamente, por lo cual la rebelión aborta.
19.	22 de agosto de 1918	Pardo, Gabinete Zuloaga	Comandante Patiño Zamudio	Asonada militar contra el gobierno, pro Cáceres y Leguía	Derrotados por el ejército, apresados pero luego liberados por Leguía.
20.	4 de julio	Pardo, Gabinete Zuloaga	Augusto Leguía	Colpe de Estado	Exitoso, fin del régimen democrático

Anexo No. 8

Amnistías Políticas durante el régimen político de 1895 a 1919.

	Fecha	Gobierno	Gabinete	Beneficiarios
1	19 de diciembre de 1895	Piérola	Barinaga	Caceristas excepto jefes principales
2	7 de noviembre 1896	Piérola	Olaechea	Insurrectos de la sublevación de Iquitos
3	10 de agosto de 1900	López de Romaña	Riva Agüero	Disidentes demócratas, Cáceres y dirigentes del Partido Constitucional
4	diciembre de 1908	Leguía,	Romero	Dirigentes demócratas y liberales del movimiento subversivo del 1ero de mayo de 1908
5	23 octubre de 1911	Leguía	Ganoza	Dirigentes demócratas y liberales del movimiento subversivo del 29 de mayo de 1909
9	21 de setiembre de 1915	Pardo	Riva Agüero	Particulares o militares por delitos políticos: amotinados del batallón No. 7 en Puno en mayo de 1914, amotinados en Iquitos en marzo de 1914
7	11 de agosto de 1917	Pardo	Tudela	Sobreser juicios pendientes contra militares, autoridades y particulares por delito de rebelión, motín o asonada militar y delitos electorales, desde 1915

Anexo No. 9

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS

Nicolás de Piérola (1895 – 1899)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto descentralista-centralista	19 de octubre de 1895	Cámaras de Senadores y Diputados, Ejecutivo	Tanto la Cámara de Senadores como el ejecutivo estaban a favor de la eliminación de las Juntas Departamentales, un conflicto que remitía a la gran autonomía que tenían y que disminuía la autoridad del gobierno central. No hubo la votación suficiente para eliminarlas: se mantuvieron	Parlamentarios descentralistas	Vigencia de las Juntas Departamentales	Aceptaron formalmente su derrota, pero luego recortaron los fondos y atribuciones de las Juntas	El primer conflicto no se da en torno a los ejes partidarios, sino al conflicto de del eje territorial: el viejo poder de las regiones o localidades versus el Estado débil e incipiente.
2. Conflicto de Poderes. Voto de censura de la cámara de diputados al gabinete Bentín	20 y 21 de Nov. de 1895	Ejecutivo versus Cámara de Diputados	Diputados opuestos a la abolición del tributo indígena son atacados por turbas favorables al gobierno, aquellos logran un voto de censura al gabinete. Entre los abucheados estaba el presidente de la cámara de diputados. El gabinete Bentín renuncia pero Piérola no acepta.	Gana Cámara de Diputados	Prestigio y predominio sobre el ejecutivo	Piérola no acepta el desenlace, apela al senado	Primer entrampe de este gobierno, no se produce entre el ejecutivo y la oposición, sino entre poderes.
3. Conflicto de Poderes. Aceptación presidencial de renuncia de gabinete Bentín	25 de Nov de 1895	Ejecutivo versus legislativo	Piérola envía un mensaje al congreso rechazando que el voto de censura de una sola cámara ocasione la caída de su gabinete. Senado se pronuncia sin dar la razón a ninguna de las partes.	Gana Legislativo, renuncia gabinete	Reafirmación de sus facultades de censura, mayor prestigio, división de bancada demócrata	Aunque Piérola criticó mucho esta censura, termina aceptando y nombra nuevo gabinete Barinaga	El conflicto que se inicia con un enfrentamiento agudo termina con un desenlace menos complicado. Sin embargo, prevalece influencia parlamentaria

4. Conflicto de Poderes Incidente de apresamiento de diputados por contrabando de armas.	Enero de 1896	Ejecutivo versus Cámara de Diputados	Diputados Luya, Montoya, Pizarro, Burga y Díaz son detenidos por llevar armas que provenían del Estado, y son acusados de contrabando. Luego son liberados ya que no se procedió adecuadamente en su detención, cámara les da su respaldo.	Gana Cámara de de diputados.	Reafirmación su autonomía frente al ejecutivo, más tarde será uno de los principales motivos de la renuncia del gabinete Barinaga	Piérrola acepta este desenlace y nombra nuevo gabinete Olaechea	Nuevamente se impone un resultado favorable a la cámara de diputados en desmedro del Ejecutivo, aun cuando tenía mayoría parlamentaria.
5. Conflicto gobierno y prensa. Incidente Aramburú,	Abril de 1896	Ejecutivo versus diario "Opinión Nacional"	Apresamiento del director del diario "Opinión Nacional" Avelino Aramburu, por noticia que acusaba de abuso a autoridades policiales, al fin el poder judicial lo libero de delito de encubrimiento	Gana Aramburú, periodista de oposición y vocero de caceristas.	Se reafirma libertad de prensa	Gobierno respeta decisión del poder judicial	Desenlace que contribuye a la estabilidad política en tanto que reafirma independencia de poderes y ganadores múltiples
6. Conflicto descentralista-centralista Sublevación federalista en Iquitos,	Julio de 1896	Ejecutivo versus autoridades regionales de Iquitos, departamento de Loreto	Se sublevan Ricardo Seminario y Coronel Madueño, exigiendo cumplimiento de promesa federalista demócrata, a pesar de que no rompen con la unidad territorial nacional, se ordena expedición militar y los líderes rebeldes huyen.	Gana Ejecutivo	Se afirma autoridad centralizada del poder estatal	Sublevados huyen	Primeros conatos descentralistas, pero de inspiración demócrata, luego los sublevados son amnistiados.
7. Conflicto de Poderes Renuncia gabinete Barinaga.	5 de Agosto de 1896	Ejecutivo versus Cámara de Diputados	El gabinete Barinaga renuncia para evitar un nuevo voto de censura con motivo del incidente de los diputados apresados por contrabando de armas	Gana Cámara de diputados	Reafirmación de su inmunidad y autonomía		Una vez más se enfrenta el ejecutivo y la cámara de diputados, pero el nuevo gabinete cierra la crisis de gobierno con nuevo gabinete Olaechea

8. Conflicto descentralista centralista. Sublevación de indígenas con alguna influencia cacerista	27 de setiembre de 1896	Indígenas (con influencia cacerista) versus el Gobierno	Indígenas se sublevan contra el impuesto de la Sal, liderados por comandantes de guerrillas caceristas como Lorenzo González y Miguel Elías Lazón. Son derrotados por una división expedicionaria del Ejército	Gana Gobierno	Estabilidad y paz en el territorio nacional además de derrotar sublevación cacerista	Caceristas no reconocieron levantamiento como suyo oficialmente	Sublevación de pequeña escala que no constituyó un verdadero peligro para el gobierno, solo implicó una respuesta militar efectiva.
9. Conflicto descentralista centralista. Reforma electoral	20 de noviembre de 1896	Ejecutivo versus Congreso	Luego de un largo debate parlamentario (1 año y 1 mes), se aprueba, a partir de insistencia del propio presidente, ley de reforma electoral con estructura centralizada. La oposición se va conformando en torno a los jóvenes y liberales	Gana Ejecutivo, recibe el respaldo de civilistas	Logra aprobar una de sus primeras reformas de Estado	La oposición denuncia trampa real, pero ya que se aprobó sin los dos tercios necesarios para casos de disenso del legislativo.	A pesar de que efectivamente se logra una mayoría demócrata civil para aprobar la reforma electoral, se infringe la constitución. La oposición se consolida y se agudiza la división al interior de los demócratas (se forma ala liberal).
10. Conflicto de Partidos. Coalicionistas versus alianza cívica. Elecciones parlamentarias y municipales	Mayo y Junio de 1897	Partidos de la Coalición, versus alianza cívica - constitucional	La correlación de fuerzas para estas elecciones se dividen entre la alianza de oposición (Valcárcel y caceristas) versus los partidos de la coalición (demócratas y civilistas). Ganan el oficialismo.	Gana bloque oficialista de la Coalición	Correlación favorable electoral para el oficialismo	No aceptan la derrota, y denuncian fraude electoral (trampa real)	No es dable suponer la existencia de una trampa real, en tanto que ambos partidos oficialistas (el civil y el demócrata) tenían un amplio apoyo electoral, y eran los más consolidados
11. Conflicto de Partidos. División al interior del partido	27 de julio de 1897	Partidarios de Durand versus partidos de la coalición	Durand lanza una dura crítica contra Piérola que significó la ruptura definitiva, luego Durand postula a la reelección como presidente de la Cámara	Gana Gobierno y bloque oficialista	Se mantienen las mayorías parlamentarias del oficialismo, que en esta		Momento de auge en la alianza civil demócrata. Se presenta un primer cambio en el

Demócrata: liberales de Durand versus Gobierno			de Diputados pero pierde ante Carlos de Piérola (quien recibe el apoyo demócrata civil); luego Durand forma el “Círculo Independiente”		oportunidad eligen a Candamo como presidente de la cámara de senadores		sistema de partidos, con la aparición de grupo liberal, que aún no se consolida como partido.
12. Conflicto cacerista gubernista, involucran intereses regionales, sublevación de caceristas Grimaldo y Belisario Villar	Junio de 1897	Líderes Caceristas locales versus gobierno	Incurción subversiva de hacendados locales (Villar) de orientación Cacerista, pero prontamente son derrotados y fusilados por las fuerzas del orden, la madre de las víctimas pretendió iniciar una acusación en el parlamento pero fue desestimada ante la indiferencia de la opinión pública.	Gana Gobierno	Estabilidad y paz en el territorio nacional además de derrotar nuevo intento subversivo cacerista	Caceristas no reconocieron levantamiento como suyo oficialmente	Sublevación de pequeña escala que no constituyó un verdadero peligro para el gobierno, solo comprometió unas cuantas partidas locales
13. Conflicto de poderes, ejecutivo versus legislativo, debate sobre facultades y división de poderes	11 de septiembre de 1897	Ejecutivo versus Congreso	Piérola envía mensaje al Congreso para refutar facultades durante la legislatura extraordinaria. La respuesta de ambas cámaras fue alturada, pero mantuvieron la firmeza en la defensa de sus facultades para promulgar leyes no promulgadas por el ejecutivo aún en legislatura extraordinaria	Legislativo	Facultades		Proceso de definición de división de poderes, donde el parlamento se reserva autonomía y defiende sus fueros por encima de divisiones partidarias.
14. Conflicto de poderes, ejecutivo versus cámara de diputados, debate sobre facultades y división de poderes	21 de octubre de 1897	Ejecutivo versus Congreso	Voto de extrañeza de la cámara de diputados ante la demora del Ejecutivo de mandar el cumplimiento de las leyes promulgadas por el última legislatura extraordinaria	Legislativo	Facultades	Gabinete rechaza e voto de extrañeza por no existir tal figura en la constitución, y por que no consideraban legítimas tales leyes	Impasse entre la cámara de diputados y ejecutivo en el proceso de delimitar facultades entre los poderes del Estado.

15. Conflicto de Partidos. Coalición versus oposición	29 de octubre de 1897	Partidos Demócrata y Civil versus Oposición	A raíz del voto de extrañeza al Gabinete, los diputados de la oposición presentaron voto de censura contra gabinete Olaechea, pero éste fue rechazado por los partidos de la Coalición, a pesar de ello renuncian para renovación	Gana Ejecutivo, recibe el respaldo parlamentario de partidos	Afianza alianza de gobierno, consigue estabilidad		Uno de los gabinetes de mayor duración del gobierno, momento de mayor estabilidad del gobierno, luego de las escaramuzas entre poderes. Se nombra gabinete López de Romaña
16. Conflicto de tendencias en el tema religioso: Liberales versus conservadores. Renuncia de gabinete López de Romaña	3 de Diciembre de 1897	Conservadores versus liberales	Luego de un debate largo y complicado en el parlamento se aprueba la ley del matrimonio de los no católicos, el bando conservador en el tema religioso era el primer ministro y el Presidente Piérola, mientras que en el sector liberal estaban demócratas, civilistas y seguidores de Durand. A raíz de este incidente renuncia gabinete y se conforma nuevo: Riva Agüero.	Gana sector liberal, se conforma una gran alianza contra la posición del ejecutivo		Piérola aceptó con mas disponibilidad que primer ministro el triunfo de los liberales, se promulgó la ley	Nueva correlación en un eje distinto de debate político. Destacan algunos congresistas civilistas: Pérez y Candamo
17. Conflicto de Intereses económicos. Reforma Monetaria	Diciembre de 1897	Ejecutivo versus Exportadores	Se aprobó varias medidas tendientes a reemplazar la moneda de plata por la de oro, aunque la reforma fue gradual finalmente se logró implantar el patrón de oro en el Perú, aunque con la inicial oposición de los exportadores.	Gana Ejecutivo	Estabilidad económica	Protestaron con vehemencia los exportadores	El cambio al patrón de oro significó grandes beneficios económicos para la economía peruana

18. Conflicto de Partidos. Demócratas versus civilistas en el tema del tratado Billinghurst La Torre. Renuncia del gabinete Riva Agüero	13 de mayo de 1898	Demócratas Billinghurstistas versus civilistas	Divergencias personales entre Billinghurst (Ministro plenipotenciario que negociaba el tratado de devolución de las provincias con Chile) y Primer Ministro Riva Agüero (civilista), se trataba de afirmar las aspiraciones presidenciales del Billinghurst, el cual hace que sus seguidores en el gabinete (Florez, De la Puente, Rosa Gil y Rey) renunciasen, provocando crisis de gabinete y renuncia de Riva Agüero.	Demócratas Billinghurstistas	Logran prestigio y popularidad en vistas de las elecciones internas para la candidatura presidencial	Civilistas no reconocen derrota como suya y sólo la atribuyen a Riva Agüero	El celo civilista contra Billinghurst se basaba en que éste encarnaba la tendencia dura demócrata de su anticivilismo histórico, que Piérola había generado pero que luego trató de desterrar en su gobierno.
19. Conflicto cacerista - gobiernista, involucran intereses regionales, sublevación de Verástegui y Pedro Manuel Rodríguez en Cajamarca	1898	Líderes Caceristas locales versus gobierno	Verástegui y el montonero caceristas Pedro Manuel Rodríguez se levanta contra el tratado Billinghurst – La Torre, son derrotados por el ejército.	Gana Gobierno	Estabilidad y paz en el territorio nacional además de acabar con amenaza cacerista	Caceristas no reconocieron levantamiento como suyo oficialmente	Sublevación de pequeña escala que no constituyó un verdadero peligro para el gobierno, solo comprometió unas cuantas partidas locales
20. Conflicto de partidos. Billinghurstistas versus alianza civil demócrata	24 de noviembre de 1898	Billinghurstistas versus alianza civil demócrata (apoyada por Piérola).	Con motivo de la candidatura presidencial, y frente al avance de Billinghurst, los civilistas lo vetan y es desplazado por Piérola, quien impulsa frente común para la candidatura presidencial. Billinghurst se retiran de la contienda. Se afirma la alianza y escogen una fórmula única presidida por López de Romaña	Alianza civil - demócrata	Candidatura presidencial única: Eduardo López de Romaña	Reacción de denuncia y abandono del partido por parte de Billinghurst	La estrategia de Piérola de mantener la coalición le cuesta al partido su segunda división interna.

21. Conflicto de partidos. Coalición civil versus oposición (liberales, billinghurstistas, caceristas, cívicos). Elecciones municipales	2 de diciembre de 1898	Coalición oficialista versus oposición variopinta	Los resultados de la elección municipal en Lima fueron inciertos, ya que inicialmente el triunfo fue atribuido a una lista independiente de vecinos. Sin embargo la Municipalidad anuló el proceso, lo cual fue a su vez ratificado por el Ejecutivo. Sin embargo, otras fuentes atribuyeron el triunfo a la Coalición	Coalición civil demócrata	Retienen los cargos municipales de la capital	Los derrotados arguyen fraude electoral (trampa con el voto)	Es difícil determinar si hubo realmente fraude, considerando la honestidad electoral de Piérola y el arraigo electoral de ambos partidos.
22. Conflicto de Partidos. Inhabilitación de la JEN	24 de abril de 1899	Ejecutivo versus oposición	La oposición se enfrentó duramente con los delegados del gobierno en la Junta Electoral Nacional, en pleno conflicto el gobierno disolvió esta junta, sin embargo el fin era no retrasar el proceso electoral, no había intención de fraude ya que no había candidato de la oposición	Ejecutivo	Logró frenar las críticas de la oposición en la JEN, y que se lleve a cabo el proceso electoral presidencial	Los derrotados arguyeron fraude y una acción contra la constitución (trampa con el voto)	A pesar que la disolución de la JEN fue un error o precipitación de Piérola, pero no fue en provecho propio o para favorecer la candidatura oficial, sino para evitar el caos institucional y la prórroga electoral
23. Conflicto de Partidos. Sublevación de Augusto Durand y otros	Junio de 1899	Ejecutivo versus Durand	Durand y otros (Negrete en Camaná, Flores en Andahuaylas y Santa Gadea en Huaraz) se levanta contra el gobierno, la intervención de la JEN y la candidatura de López de Romaña	Ejecutivo	Logran controlar ola de movimientos subversivos en 1899	Trampa con el voto	A pesar del mantenimiento de la Coalición, la oposición se radicaliza.

Síntesis

CONFLICTOS: 23

Número de meses de duración del gobierno: 48

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1) 2 = 2	(2)	(3)
Trampas Reales	(2) 1 = 2	(4) 1 = 4	(6) 1 = 6

Total: 2 + 2 + 4 + 6 = 14

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS
Eduardo López de Romaña (1899 – 1903)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de Poderes. Renuncia de Gabinete Gálvez	2 de diciembre de 1899	Poder Ejecutivo Y Poder Legislativo	Crisis del 1er Gabinete (Gálvez). Duró sólo 3.7 meses. Defensa de prerrogativas parlamentarias frente al Gobierno.	Gana el Poder Legislativo (e indirectamente el Partido Demócrata)	Preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Capacidad efectiva de veto.	Nombró nuevo Gabinete pero sin mayor coloración política que el anterior.	El Nacional comenta que el propósito de los demócratas de un gabinete más partidario no se logró, lo cual dejaba pendiente la razón del conflicto.
2. Conflicto centralista -- descentralista. Sublevación militar en Iquitos	Enero del 1900	Militares federalistas y Ejecutivo	Se sublevan en la región selvática el Coronel Vizcarra y otros militares con propósitos federalistas, son inmediatamente derrotados y muere el líder.	Gana el Poder Ejecutivo	Orden Político y prestigio		Inicio con focos guerrilleros (también Oré en Chinchá) pero pronto son derrotados y se establece una paz social y política al inicio del gobierno de López
3. Conflicto de Partidos. Competencia electoral de las mesas directivas de la Cámaras.	27 de julio 1900	Parlamentarios de los partidos demócrata y civil	En las elecciones de las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores ganan ambas el Partido Demócrata.	Gana Partido Demócrata.	Mesas directivas de las cámaras del congreso.		Predominio demócrata en el Parlamento. Asumen Carlos de Piérola en Diputados y Julio Normand en Senadores.
4. Conflicto de Poderes. Renuncia del Gabinete Riva Agüero.	7 - 8 - 1900	Poder Ejecutivo y Poder Legislativo	Crisis del 2do Gabinete (Riva Agüero). Duró 8.7 meses. Acusación de diputado demócrata Souza de intervención del gobierno en elecciones de Loreto.	Gana el Poder Legislativo (e indirectamente el Partido Demócrata).	Preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Capacidad efectiva de veto.	Nombramiento de nuevo gabinete de mayor color político, pero aún encabezado por Riva Agüero.	Adversidad de parlamentarios demócratas al Ministro Parra, el conflicto entre poderes es gatillado por el Partido Demócrata.

						Impacto en la historia	
5. Conflicto de Poderes. Nueva renuncia del recompuesto gabinete Riva Agüero	23 de agosto 1900	Poder Ejecutivo y Poder Legislativo	Crisis del 3er Gabinete (Riva Agüero). Duró sólo 0.5 meses (17 días). Voto de desconfianza en el Senado. Hostilidad demócrata al Jefe de Gabinete.	Gana el Poder Legislativo (e indirectamente el Partido Demócrata)	Preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Capacidad efectiva de veto, gabinete con preeminencia de los demócratas. (Coronel Zegarra).		La presión que ejerce el partido demócrata contra el ejecutivo, contribuyó a generar desconfianza de un presidente elegido a través del propio partido demócrata.
6. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada entre civilistas y demócratas y ejecutivo.	24 de agosto 1900	Partidos Civil y Demócrata y Gobierno	Intento de conciliación con la presencia de los representantes de ambos partidos (Candamo y Carlos de Piérola), acuerdan gabinete con igual representación partidaria. El gabinete resultante no fue aprobado por la representación parlamentaria demócrata. Nombramiento de gabinete encabezado por demócrata.	Gana el Partido demócrata.	Preeminencia de parlamentarios demócratas. Capacidad efectiva de veto. Presidencia del Consejo de Ministros: Coronel Zegarra		El Comercio atribuyó el fracaso de la negociación a la indisciplina de algunos grupos en ambos partidos. Se destacan los esfuerzos del presidente López de Romaña por llegar a acuerdos, cede ante los demócratas.
7. Conflicto de Partidos. Acusación a ex - Ministro Belaunde (demócrata): defraudación	28 de setiembre de 1900	Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Partidos Civil y Demócrata	Acusación de malversación a ex ministro demócrata muy cercano a Piérola, movilizaciones de protesta contra Belaunde. Aprobación de la acusación en el Congreso incluso con participación demócrata.	Gana el Ejecutivo y el Partido Civil.	Golpe a demócratas y especialmente a Piérola, apoyo popular.	Abstención por temor a perder popularidad. <i>El tiempo pasado de la noche.</i> (años más tarde se demostró inocencia de Belaunde	Incidente personal que adquiere relevancia por los intereses de los actores políticos que afecta. Primer retroceso de la mayoría demócrata en ambas cámaras. Movilización social de civilistas.

8. Conflicto de Poderes	30 setiembre 1900	Poder Ejecutivo y Poder Legislativo	Crisis del 4to Gabinete (Coronel Zegarra). Duró sólo 1 mes. Mociones de censura presentadas por civilistas en Diputados. Caída del gabinete en el contexto del escándalo Belaunde.	Gana Poder Legislativo (e indirectamente el Partido Civil).	Preeminencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Capacidad efectiva de veto.	Arrinconados los demócratas, se abstuvieron en la caída del gabinete Coronel Zegarra	Creemos que la abstención demócrata se debió al contexto adverso del incidente Belaunde, en todo caso demuestra un retroceso táctico más de los demócratas.
9. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada entre Piérola y López de Romaña	1 octubre 1900	Presidente y Jefe del Partido Demócrata	El presidente ofrece a Piérola la presidencia del gabinete, éste lo rehúsa. Luego se la ofrece al demócrata Aurelio de Souza pero Piérola lo hace desistir	Gana partido civil con impasse del gobierno y Piérola	Prestigio y mejor posición frente a Presidente López de Romaña.		Miro Quesada (1961) estima que fue un error de Piérola no aceptar este ofrecimiento, en tanto que sería estar sometido al Presidente. lo cual motiva a López de Romaña a buscar respaldo en el civilismo.
10. Conflicto de Partidos. Elecciones municipales en Lima. Partido Demócrata versus partido civil.	1 de diciembre 1900	Partido Civil y Partido Demócrata.	Nicolás de Piérola encabezaba la lista para la Municipalidad de Lima, a la vez se presentaba una lista civilista "Liga Municipal Electoral Independiente". En todas las mesas perdió Piérola, fue su primera derrota electoral.	Gana Partido Civil	Cargo público en la capital de la república para un civilista. Derrota del jefe de los demócratas. Preponderancia electoral del civilismo.	Abstención política hacia delante, reconocimiento de la derrota por parte de Piérola, quién sufrió tremenda decepción.	Primera ruptura de la alianza electoral civil demócrata, ahora competían. Derrota de Piérola a pesar de que dominaban en la Junta Electoral Nacional. Hubo dos choques violentos entre militantes.
11. Conflicto de Poderes (Junta Electoral Nacional JEN versus Gobierno)	22 de enero de 1901	Gobierno y Partido Demócrata (que controlaba la JEN)	El gobierno como respuesta a acusaciones de la JEN de intervenir en el proceso electoral, solicitó un dictamen de la Corte Suprema, que la JEN no aceptó. Acusaciones mutuas de TRAMPA	Gana Partido Demócrata.	Prevalencia de su manejo de la JEN	El gobierno emitió resolución suprema expresando extrañeza sobre la respuesta de la JEN. Tratando de imponer su autoridad.	Elecciones suscitan conflictos de poderes y entre partidos, donde se empiezan a alinear el gobierno y el partido civil.

12. Conflicto de Partidos. Matanza de Pazul	15 de abril de 1901	Dirigente demócrata Pedro de Osma y Ministro civilista carvajal	Con motivo de una matanza de presos en Pazul, denuncia el mayor Ramiro de Osma y es detenido, a lo cual protesta su hermano Pedro de Osma. Motivo por el cual renuncia el ministro Carvajal.	Gana Partido Demócrata	Logra la renuncia de Ministro de Guerra	Conflicto de Partidos. Matanza de Pazul	15 de abril
13. Conflicto de Partidos. Elecciones Tercio Parlamentario	25 al 28 de Mayo de 1901	Partidos Civil, Demócrata	Luego de un acuerdo de alianza electoral entre ambos partidos, hubo problemas en la candidatura de Junín: los civilistas acusaron a los demócratas de no respetar los acuerdos en torno a la candidatura de Leonidas Cárdenas y postular a su propio candidato Joaquín Capelo, el cual salió elegido dado el apoyo de la Junta Electoral Nacional bajo control de los demócratas.	Gana Partido Demócrata	Cargos Parlamentarios, mantener mayoría en la Cámara de Diputados	Acusaciones del jefe civilista Manuel Candamo de actos desleales de los demócratas. Campaña por la derrota de los demócratas. Derrota de candidatos de la Unión Cívica de Valcárcel y de los Constitucionales (con Cáceres aún ausente).	Ultima alianza electoral de civilistas y demócratas. Temor de los demócratas de ir solos a las elecciones. lo cual refleja un avance civilista en la población electoral. El conflicto entre los partidos por la candidatura derivó en un enfrentamiento de los civilistas con la JEN. Aparecen candidatos del partido liberal en proceso de organización.
14. Conflicto de Poderes (Junta Electoral Nacional JEN versus Gobierno)	6 y 8 de julio de 1901	Partido Demócrata y Gobierno	Ministro de Gobierno Zapata envía carta a JEN señalando que no serían impasibles ante la conducta censurable de esta institución. Carlos de Piérola protesta y acusa al gobierno de querer intervenir en el proceso electoral y asume defensa de la libertad de sufragio.			Campaña por la derrota de los demócratas.	Gobierno amenaza con tomar sus propias medidas contra la JEN.

15. Conflicto de poderes. Denuncia de Gobierno contra presidente de la JEN, demócrata Carlos de Piérola.	9 de julio 1901	Gobierno y Partido Demócrata	Enjuiciamiento de Carlos de Piérola (Presidente de la JEN) por delito de desacato. Quedo a disposición de la Cámara de Diputados de la cual era presidente, y fue desestimada la acusación.	Gana Partido Demócrata	Desestimación de la acusación por parte de la Cámara de Diputados de la cual también era presidente.	Incidente que agudiza la pugna entre el Gobierno y los parlamentarios demócratas.	
16. Conflicto de Partidos. Elecciones para las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores	27 de julio de 1901	Partidos Demócrata y Civil.	Los demócratas mantienen su mayoría en Diputados (Mariano Cornejo gana la presidencia por 45 votos contra 30 de su rival civilista), mientras que los civilistas ganan la mayoría en senadores (Candamo gana la presidencia por 20 votos contra 14 de su rival demócrata)	Gana Partido Civil	Arrebatan la mayoría parlamentaria en el Senado	Primera derrota de los demócratas en cámara de senadores, pérdida estratégica.	
17. Conflicto de Poderes y de Partidos. Ejecutivo, Partidos Demócrata y Civil.	13 de agosto de 1901	Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, Partidos Demócrata y Civil.	Voto de censura de la Cámara de Diputados contra el Gabinete Almenara , se le acusaba de intervenir en las elecciones parlamentarias de 1900, de desprestigiar a la JEN, de no convocar legislatura extraordinaria, de no aprobar el presupuesto “dictadura hacendaria”. El gabinete renuncia, pero el Presidente no la acepta y continúan en funciones.	Ganan Partido Civil y Gobierno	Invalidar la capacidad de veto de una sola de las Cámaras. Preeminencia del Poder Ejecutivo.	No aceptación de la respuesta de no renuncia del gabinete TRANSPA realda el nivel	Este nuevo gabinete implicó la ruptura de la alianza civil demócrata en el bloque de poder. los demócratas pasan a la oposición. Se rompe la regla informal de la capacidad de veto al Gabinete de una sola de las Cámaras. No existe un árbitro entre estos actores para resolver el conflicto.
18. Conflicto de Partidos en el Senado.	28 y 29 de agosto y 3 de setiembre	Partido Demócrata y Civil.	Senadores demócratas solicitan que el Gabinete acuda al Senado para	Ganan Partido Civil y Gobierno	Los Civilistas ratifican su mayoría en el	La coordinación entre el Ejecutivo y el Senado es la base de la	

Partidos civil y demócrata	de 1901		explicar el impasse que tenían con la colegisladora. Los civilistas se oponen y además logran que se apruebe una moción de confianza al gabinete.		Senado. Se fortalece la alianza civilistas-Presidente López de Romaña.		nueva alianza de civilistas y Presidente López de Romaña.
19. Conflicto de Poderes entre Senado y Cámara de Diputados. Partidos Civil y Demócrata	Setiembre de 1901	Partidos Demócrata y Civil	La cámara de diputados solicita sesión de Congreso, la cual es rechazada por el Senado hasta que se resuelva el impasse con el Gabinete Almenara (que se retire la moción de censura). La cámara de diputados no acepta dicha postura.	Gana Partido civil y ejecutivo	La alianza senado ejecutivo predomina sobre la cámara de diputados de mayoría demócrata.		Primeros intentos de conciliación entre ambas cámaras.
20. Conflicto de Partidos. Renuncia de Gabinete Almenara.	9 setiembre de 1901	Gobierno y partidos civil y demócrata	En plena crisis parlamentaria, el 5to gabinete (Almenara) renuncia (primer gabinete que sale sin presión directa del parlamento) y cede paso a uno más oxigenado, duró 11.2 meses.	Gana Gobierno	La renuncia se debe al propio cálculo del gobierno, la cual descoloca intentos de voto de censura de demócratas.		Se nombra nuevo gabinete presidido por Cesáreo Chacaltana, político ex -- constitucional y ahora civilista, amplia experiencia. Composición civilista e independiente. Sin ministros demócratas.
21. Crisis de Partidos. Incidente Urquieta en Arequipa. Diputados liberales versus Ministro de Gobierno, Elías Cárdenas	Setiembre, Octubre de 1901	Dirigente liberal Urquieta, diputados liberales, Ministro de Gobierno	Ante la proximidad de las elecciones municipales de Arequipa, el dirigente liberal y director del periódico de oposición Lino Urquieta es hostilizado y detenido. A raíz de esto, los diputados liberales interpelan ministro de Gobierno Cárdenas, pero no logran su renuncia	Partido Civil y Ejecutivo	Logran mantener al ministro	Trampan con el gobierno	-

22. Conflicto de Poderes	Julio de 1902	Gobierno y JEN	Nombramiento de los delegados del Poder Judicial ante la JEN y vigencia de ésta.	Gana Gobierno y Partido Civil	Presencia en la JEN de nuevos miembros civilistas	Carlos de Piérola protesta por lo que consideraba una intromisión del Ejecutivo en la JEN. Trampa presunta de 1do nivel	Cada parte interpretó a su interés la aplicación de la ley, por lo que no se puede determinar la existencia de una trampa, más allá de la denuncia que hizo el presidente de la JEN.
23. Conflicto de Partidos. Crisis de Gabinete	30 de julio 1902	Gobierno y Partido Demócrata	Renuncia del Gabinete (Chacaltana) antes del inicio de la legislatura ordinaria del Congreso, duró 10. 7 meses.	Gana Gobierno	Afirman su propia dinámica de rotación de gabinete.		2do gabinete sale sin presión del Parlamento. Basadre lo atribuye a clima de tensión por proximidad electoral presidencial.
24. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada	31 de Julio de 1902	Partidos Demócrata y Civil y Gobierno	Luego de la renuncia del gabinete, el gobierno proponen un gabinete de conciliación, pero los demócratas exigen no ser minoría en el nuevo gabinete, abstención del gobierno en el proceso electoral venidero y que los ministros designados definieran sus propias carteras y la presidencia del gabinete. El presidente no acepta y nombra nuevo gabinete afín al civilismo encabezado por destacado civilista Deustua.	Gana partido civil	Controlan nuevo gabinete, se acercan más al Presidente.		Exigencias que dejaban sin autoridad al presidente López de Romaña, parece que la estrategia demócrata aleja acerca cada vez más al Presidente y al civilismo.
25. Conflicto de partidos en el Senado. Moción de censura a la mesa directiva civilista por	7 de agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil.	Moción de censura a la mesa directiva de la cámara por la facción demócrata no prospera.	Gana Partido civil.	Logran retener la estabilidad de la mesa directiva civilista.		Intensificación del conflicto entre los ex – aliados: civilistas y demócratas.

parte de demócratas.							
26. Conflicto de partidos en el Senado Elección de delegados del Senado ante la JEN	8 de agosto de 1902	Partidos demócrata y civil	Los demócratas se abstienen de participar en la elección delegados ante la JEN con el fin de evitar esta elección. De todos modos los civilistas eligen una terna exclusivamente de su partido.	Gana partido civil	Siguen copando la JEN con delegados civilistas	Los demócratas denuncian ilegitimidad de esta elección <i>Tramitación de 2do nivel</i>	La arremetida civil por copar los espacios del poder, especialmente de la JEN contrasta con estrategia de abstención de los demócratas.
27. Conflicto de partidos en el Senado. Incorporación de senadores por Amazonas	9 de agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil	Incorporación de nuevos senadores por el departamento de Amazonas, se decidió por la terna civilista contra la demócrata (apoyada por la JEN). Cuando se procedió a la incorporación de los nuevos senadores se suscitó una batalla campal en pleno recinto, luego que el senador Llosa arrancó los documentos de las manos del relator y las rompió.	Gana Partido Civil Incorporación de senadores al margen de la opinión de la JEN (aún controlada por demócratas).	Incorporación de nuevos senadores civilistas.	Acusación de la Cámara de Diputados al Presidente del Senado, y mayoría civilista en el Senado por infracciones constitucionales. <i>Tramitación de 2do nivel</i>	El senado procede contra la resolución de la JEN en la incorporación de los senadores civilistas.
28. Conflicto de partidos. Boicot a sesión de congreso de parte de civilistas.	11 y 12 de agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil	El Senado se negó a asistir a sesión de Congreso.	Gana partido civil..	Evita que se reúna el congreso con mayoría civil	La comisión de constitución de diputados califica esta negativa como delito. <i>Tramitación de 2do nivel</i>	La intensidad del conflicto civil versus demócratas es alto.
29. Conflicto de poderes. Voto de desconfianza a Gabinete Deustua	11 agosto 1902	Gobierno y Partidos demócrata y civil	Voto de desconfianza de la cámara de diputados. Gabinete no renuncia. Senado respalda a Gabinete Deustua	Gana el Gobierno y el partido civil	Logra preeminencia frente a la censura de diputados.	Demócratas denuncia ilegitimidad de este desafuero. <i>Tramitación de 2do nivel</i>	Se fortalece la preeminencia del ejecutivo con apoyo del senado frente a diputados: retroceso de demócratas.

30. Conflicto de partidos en el Senado. Desafuero del senador Llosa	13 de agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil.	Llosa fue desaforado por haber incurrido en delitos de desacato.	Gana partido civil.	Favorece a la correlación en el senado.		
31. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada.	21 de agosto de 1902	Gobierno y Demócratas	Comisión de parlamentarios demócratas acude donde el Presidente López de Romaña. Este señala que el problema es la composición de la JEN, de lo cual dependía la formación de un nuevo gabinete con ambos partidos, ofreciendo la elección de un demócrata como delegado de minoría en el senado, dos delegados demócratas por diputados y un delegado del gobierno completamente imparcial. Demócratas rechazan el ofrecimiento señalando que el problema consistía en la continuidad del gabinete Deustua y la negativa de senadores de que sesione el Congreso.	Gana Partido civil	Logran progresivamente el desplazamiento de los demócratas		El Ejecutivo hace propuestas importantes pero los demócratas la rechazan ya que les cuesta pasar a ser minoría en la composición de la JEN.
32. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada.	24 al 30 de Agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil.	Continuación de la negociación anterior. Los delegados civilistas sostuvieron la fórmula del presidente, los demócratas exigieron que los delegados a la JEN fuesen elegidos por el Congreso pleno y que se eligiesen en proporción a la fuerza de cada partido.	Gana civilistas.	El status quo de impasse los favorecía		Los demócratas reivindicaban el fuero del Congreso donde podrían retomar una mayoría. La posición dura de los demócratas a la larga los perjudicaría.

33. Conflicto de partidos en el Senado. Partidos Demócrata y Civil.	17 de agosto de 1902	Partidos Demócrata y Civil.	A pedido de la consulta de la JEN para que se resuelva su tiempo de vigencia, el Senado se niega a acudir a sesión de congreso para evitar que se resuelva a favor de los demócratas.	Gana el Partido Civil	Logra hacer prevalecer su criterio de no reunirse y evita decisiones que favorezcan a demócratas	Diputados demócratas acusan a senadores civilistas de delito y proceder anticonstitucional. Trampa presentada de 1er nivel.	La intensidad del conflicto se focaliza en la pugna civil-demócrata. Lo cual redefine los demás tipos de relaciones institucionales. Se fortalece la alianza gobierno y civilistas.
34. Conflicto de Partidos en el Parlamento	2 al 6 de setiembre de 1902	Partidos Demócrata y Civil.	Se debate Convención de Límites con Ecuador en Sesión del Congreso. Las duras críticas de demócratas al Gabinete hicieron que este resolviese no acudir nuevamente al Congreso. Los senadores civilistas respaldaron esta actitud ministerial, dejando sin quórum a la sesión del congreso, a través de sus inasistencias.	Gana el Gobierno y el Partido Civil.	Neutralizan sistemáticamente la mayoría demócrata en la Cámara de Diputados. El presidente del gabinete, Deustua, acusa a demócratas de tender celadas al gobierno y se jactó de tener apoyo popular.	Demócratas denuncian esta actitud del ejecutivo y el gabinete. Trampa presentada de 1er nivel.	
35. Conflicto de poderes y de partidos.	8 de setiembre de 1902	Partidos Civil y Demócrata, Cámaras de Diputados y Senadores. Gobierno	Instalación de la nueva JEN, luego del fracaso de las negociaciones se instala la JEN sin representantes demócratas, con personeros del Senado, del ejecutivo y de las Cortes Superiores de Justicia (los cuales habían sido nombrados obedeciendo órdenes del Gobierno). Los demócratas habían frustrado la elección de delegados en la Cámara de Diputados y rechazaron la nueva JEN	Gana el Partido Civil y el Gobierno	Logran control del órgano arbitral electoral: JEN	Los demócratas tacharon de ilegal a la nueva JEN y "amenaza a la libertad electoral", además señaló que sus actos eran nulos. Trampa presentada de 1er nivel.	2da pérdida estratégica de demócratas: la JEN.. El nivel de conflicto político es bastante agudo, por la repetición de denuncias de trampas. Los demócratas empiezan a quedar fuera de la escena política formal y sólo les queda el recurso de la protesta y denuncia.

36. Conflicto de Partidos. Declaraciones de Billinghurst y civilistas	14 de setiembre de 1902	Billinghurst y civilistas	Regreso a Lima de demócrata disidente Billinghurst, quien tiene expresiones virulentas contra el civilismo, en banquete de desagravio civilistas se defienden..	Gana Partido demócrata	Reincorpora a líder importante		Declaraciones que ahondan el conflicto. Billinghurst reingresa a la arena política para oponerse a la postulación del civilista Candamo.
37. Conflicto de poderes y de partidos.	16 de setiembre 1902	Partidos Civil y Demócrata, Cámaras de Diputados y Senadores, Gobierno	La cámara de diputados vota la acusación contra la mesa directiva del senado y 24 senadores por haber autorizado el desafuero del senador demócrata Llosa.	Gana Partido Demócrata	Pretenden ilegítimizar Senado		Enfrentamiento directo entre las dos cámaras congresales, que expresa el conflicto central entre demócratas y civilistas.
38. Conflicto de poderes y de partidos	19 de setiembre 1902	Partidos Civil y Demócrata, Cámaras de Diputados	Agitado debate en la cámara de diputados donde se aprueba una moción declarando la nulidad de la JEN, lo cual generaba un conflicto institucional. Ese mismo día los congresistas demócratas publicaban una declaración donde señalaban que el Congreso no tomará en consideración los actos electorales de la JEN.	Gana Partido Demócrata	Pretenden ilegítimizar nueva JEN		Desconocimiento de la legalidad de las actividades de la JEN. Punto máximo de confrontación que los lleva a una interacción de semilealtad
39. Conflicto de Poderes. Inhabilitación de presupuesto de la Cámara de Diputados.	Octubre de 1902	Ejecutivo y Cámara de Diputados	El poder ejecutivo se negó a pagar el presupuesto de la Cámara de Diputados, lo cual repercutía en los sueldos de los demócratas. La cámara llegó a aprobar certificados de pago, pero además acusó judicialmente a los funcionarios responsables.	Acción que evidencia TRAMPA del Ejecutivo		Remanente de 1er nivel	El nivel de enfrentamiento semileal se reproduce en todo ámbito, se "rebaja" el nivel de la competencia.

40. Conflicto de poderes y de partidos	9 octubre de 1902	Partidos Demócrata y Civil, Gobierno	Voto de censura al gabinete Deustua por participar en incidente de infidencia en asunto internacional. El gabinete renuncia dos días después pero el Presidente López de Romaña no acepta dicha renuncia y continúan en funciones.	Gana Gobierno y Partido Civil.	Preeminencia del Gabinete sobre la censura del gabinete.	A pesar de este triunfo, el diputado civilista hace constar que la censura no tiene fundamento tal como se demostró en las investigaciones efectuadas. <i>Trampa presunta le devolví</i>	Se aprovecha cualquier incidente para derivarlo al antagonismo civil demócrata y diputados versus gobierno. Ambos partidos realizan las mismas maniobras para desprestigiar al adversario aún cuando no haya bases materiales para ello. "Nada ni nadie se respeta, es la debacle política" El Nacional, 11 de Octubre.
41. Conflicto de Partidos, Manifiesto de la Cámara de Diputados	25 de octubre 1902	Cámara de diputados (iniciativa demócrata).	Acusan al gobierno destruir las bases constitucionales de la república, haciendo una reseña de los últimos acontecimientos: "dictadura fiscal por la falta de presupuesto; dictadura política por la falta de garantías para el sufragio..." (77, Basadre). Pedían a los contribuyentes a no pagar sus impuestos.				Ataque que refleja un nivel de antagonismo ya desleal (mutuo), denuncian los demócratas comisión de trampas de 1er y 2do nivel. El enfrentamiento se hacía también directo y confrontacional entre el Gobierno y los demócratas.
42. Conflicto de partidos. Crisis de Gabinete	4 de noviembre de 1902	Gobierno	Renuncia del 7mo Gabinete (Deustua) duró 2.9 meses. Su corta durabilidad se dio en un contexto de alta conflictividad política. Se nombra nuevo gabinete muy vinculado al partido civil, bajo la presidencia de	Gana Gobierno	Afirman su propia dinámica de rotación de gabinete.		Se afianza la alianza de civilistas con el gobierno del Presidente López de Romaña.

			Larrabure y Unanue. También aparecen por primera vez ministros vinculados con el Partido constitucional.				
43. Conflicto de Partidos. Elecciones Municipales	1 de diciembre de 1902	Alianza civil constitucionala y demócratas	Ganan las elecciones la alianza gobiernistas civil constitucional	Alianza gobiernista civil constitucional	Municipalidad de Lima		Afianzan su arraigo electoral.
44. Conflicto de partidos. Negociación fracasada	17 de diciembre 1902	Partidos Civil, Demócrata, Constitucional, Liberal y Unión Cívica	Propuesta de una asamblea de 500 delegados designados por tres delegados por cada partido, civilista Alzamora se opuso por que habría una mayoría demócrata de 3 a 2.	Gana Partido Civil	Evita una coalición donde sería minoría.	Demócrata Boza, liberal Durand y cívico Valcárcel acusan al civilismo del fracaso	Al civilismo no le convenía una alianza en tanto que ahora tenían uno de los mecanismos estratégicos para llegar al poder: la JEN. Aplicar el concepto Racional acerca de la menor alianza posible que permita alcanzar el poder.
45. Conflicto de Partidos. Abstención electoral de Piérola	3 de febrero de 1903	Partido Demócrata	A pedido de los partidos Demócrata y Liberal para que Piérola sea candidato presidencial, éste desiste y continúa con su actitud abstencionista que había adoptado luego de su derrota en las elecciones municipales en 1900.	Gana Partido Civil	No tendría competencia relevante para su candidatura.		Se especula bastante sobre la actitud derrotista y pesimista del abstencionismo de Piérola, que también perjudicaría la correlación de fuerzas en el Parlamento, pero hay razonables cálculos para suponer la derrota de esta candidatura, tanto por la creciente popularidad del civilismo como por su control de la JEN.

46. Conflicto de partidos. Elecciones presidenciales y parlamentarias	25 de mayo de 1903	Partidos Civil, constitucional y Demócrata	Resultado electo Manuel Candamo como Presidente, aunque no tuvo rival. El tercio de senadores y diputados fue casi íntegramente de la alianza civil-constitucional, a pesar de que hubo candidaturas independientes.	Gana el Partido Civil y Constitucional	Acceden al gobierno, y cambian a su favor las correlaciones en ambas Cámaras.	Parlamentarios demócratas denuncia algunas irregularidades de la JEN para algunos pocos candidatos independientes al parlamento. Pidieron la anulación de las elecciones en el parlamento y que se elija por medio del Congreso, lo cual implicaba ratificar a Candamo. <i>Inicio la presunta de 20 años.</i>	Es la tercera elección presidencial consecutiva lo cual sucede por primera vez en la historia política del Perú. A pesar de las irregularidades en la constitución de la JEN, el hecho de que no haya candidaturas alternas hace que la candidatura única triunfara fácil sin fraude.
47. Conflicto de Partidos	5 de agosto de 1903	Partidos Demócrata y Civil	Victoria civilista en la presidencia de la Cámara de Diputados. El civilista Alvarez Calderón derrotó al demócrata Pedro de Osma por un voto a pesar de que no se había incorporado el nuevo tercio gobiernista.	Gana la alianza gobiernista civil – constitucional.	Acceden al control total del parlamento. Los demócratas son minoría en todos los ámbitos.		3era derrota estratégica del Partido Demócrata. Una vez que los civilistas controlan la cámara de diputados, se termina el conflicto de poderes que se mantenía con la JEN.

Síntesis

CONFLICTOS: 47

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS:

Número de meses de duración del gobierno: 48

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1) 6 = 6	(2) 9 = 18	(3)
Trampas Reales	(2) 3 = 6	(4) 1 = 4	(6)

Total: $6 + 6 + 18 + 4 = 34$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS
Manuel Candamo, Serapio Calderón (8 de Set de 1903 a 22 de Set de 1904)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de tendencias al interior del Partido Civil. Nombramiento de primer gabinete Pardo.	Agosto de 1903	Políticos al interior del partido Civil. Partido Constitucional	Nombra un gabinete partidario, pero escoge a la generación joven (Pardo, Leguía y Barrios) frente a la antigua generación (Alzamora). También lo integran miembros del partido constitucional	Gana generación joven del partido Civil	Presiden e integran el Gabinete		Se empiezan a perfilar diferencias generacionales al interior del Partido Civil. Este gabinete proyectará carrera política de Pardo y Leguía. Ambiente parlamentario tranquilo.
2. Conflicto de Partidos. Elección del 1er vicepresidente por vacancia de Lino Alarco (fallecimiento).	15 de marzo de 1904	Partidos demócrata y civil	Discrepancias en torno a la elección del primer vicepresidente, los civilistas planteaban una nueva elección a lo que se oponían los demócratas. Finalmente el tiempo de la legislatura no alcanzó para resolver este asunto.				
3. Conflicto de tendencias al interior del Partido Civil. Elección de nuevos miembros a la mesa directiva del partido civil.	19 de marzo 1904	Políticos al interior del Partido Civil.	Los nuevos miembros de la Junta Directiva: Pardo, Leguía y Barrios exigen que se desautorice al Presidente de la junta directiva civilista Alzamora por haber criticado al gabinete. Alzamora se retracta.	Gana generación joven del partido Civil	Integran mesa directiva del partido civil y gana posiciones frente al líder de la vieja guardia: Alzamora y demás líderes.		Continúan las contradicciones intergeneracionales en el Partido Civil

4. Conflicto de tendencias al interior del Partido Civil. Nombramiento de primer gabinete Pardo. Muerte de Candamo, elección de candidatura del partido civil	Mayo de 1904	Partido Civil, Pardo versus Alzamora	Muere el Presidente Candamo, quien antes de su muerte encargó el mando al vicepresidente Serapio Calderón, miembro del partido constitucional. Las mismas pugnas generacionales para la sucesión. Vence Pardo, Alzamora renuncia a la junta directiva y se retira de la escena política.	Gana generación joven del partido Civil	Candidatura presidencial	Deustua señaló que la candidatura de Pardo implicaría un mayor encono con Piérola.	Se impone del todo la generación joven con lo que hay un recambio en la dirección del partido civil. Se consolida alianza civil - constitucional a través de la fórmula presidencial.
5. Conflicto de Partidos. Violencia política	26 de junio de 1904	Partidos Demócrata y Civil	Luego de manifestaciones y marchas electorales de ambos partidos, hay un encuentro violento de ambos en la sede de La Prensa, resultaron heridos y un muerto, ambos se acusaron de la violencia.			Impugnación de Piérola	Se agudizan nuevamente las luchas entre ambos partidos. Violencia de ambos bandos que indica actitudes desleales. La manifestación de Piérola fue muy numerosa y de carácter popular.
6. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada	27 junio 1904	Partidos Demócrata, Civil y Gobierno	El Presidente Provisional Calderón convoca a Palacio a una comisión negociadora para que se encargue de gestionar ante Pardo y Piérola su renuncia para que haya un candidato de transacción. Ambos candidatos rechazaron la propuesta.				
7. Conflicto de Partidos. Exigencias de Piérola al gobierno.	22 de julio de 1904	Piérola, Calderón	Piérola visita al Presidente para entregarle un memorial donde señala que la JEN estaba mal constituida y era parcializada. Pedía la	Gana la alianza civil - constitucional	Logra mantener sus posiciones de poder en la JEN	Impugnación de Piérola	A pesar de la iniciativa de imparcialidad anterior del Presidente

			renovación de la JEN, depuración del registro electoral, la postergación de las elecciones. El presidente devolvió el memorial el 27 de julio				Provisional (y de sus propias declaraciones en ese mismo sentido) prevalece finalmente su afiliación constitucional que forma parte de la alianza de poder con el civilismo.
8. Conflicto de partidos. Elección de mesas directivas del senado y diputados.	27 de julio 1904	Alianza civil-constitucional y alianza demócrata-liberal	A pesar de que los demócratas no asistieron a la sesión para que no se logre el quórum, los civilistas logran alcanzar el mismo y eligen a Rafael Villanueva como presidente en diputados y Chacaltana en Senadores.	Gana la alianza civil - constitucional	Logran mantener la directiva de las cámaras congresales.		Correlación en senadores: de 51 senadores, 40 eran de la alianza civil constitucional. En diputados 63 fueron para Chacaltana y 41 para el demócrata Aurelio Sousa.
9. Conflicto de partidos. Proyecto de nulidad de la JEN, presentada por los diputados demócratas	1 de agosto 1904	Alianza civil-constitucional y alianza demócrata-liberal	Los diputados demócratas presentan un proyecto de ley declarando nulos los actos de la JEN y la postergación de las elecciones, pero pierden por 62 contra 43. Lo mismo en senadores, pero pierden por 31 contra 13.	Gana la alianza civil - constitucional	Logra mantener sus posiciones de poder en la JEN y la fecha de las elecciones		La iniciativa era bastante inútil, pero se puede considerar como una manera de sentar precedentes para la futura impugnación de las elecciones.
10. Conflicto de partidos. Renuncia de Piérola a la candidatura presidencial	5 de agosto de 1904	Jefe del Partido Demócrata y candidato presidencial de los demócratas liberales	"Esterilizado todo esfuerzo para traer la elección a terreno de la ley y de la verdad,... nuestro deber nos prohíbe tomar parte en la hiriente burla del sufragio que va a consumarse, nos haríamos cómplices de ella" (Basadre, 153). Renuncia de Piérola	Gana la alianza civil - constitucional	Asegura elección de su plancha presidencial, ya que eran lista única, cuarta vez que se produce una lista única en este régimen.		Pretende deslegitimar el proceso electoral y el futuro gobierno civil constitucional.

11. Conflicto de partidos. Resultados electorales presidenciales	13 de agosto 1904	Congreso y Lista presidencial civil constitucional	Comisión de Cómputo del Congreso dictamina victoria de José Pardo en las elecciones presidenciales: Este dictamen fue aprobado en sesión plena de congreso por 101 votos contra 50 de la minoría demócrata liberal, luego de que se cortó el debate que suscitaron protestas de la bancada demócrata.	Gana la alianza civil - constitucional	Ganan el poder ejecutivo.	Los demócratas en el congreso piden la nulidad del proceso por irregularidades de la JEN, adulteraciones de registros electorales y que el gobierno apoyo maniobras fraudulentas en el proceso electoral. Trampa presunta de 2do nivel.	Segundo gobierno civilista constitucional. Sin embargo no recibe el reconocimiento de los demócratas como en el caso del anterior presidente Candamo. Por tanto su legitimidad es menor aunque no nula. La abstención electoral fue notoria, de 150 mil electores sólo acudieron 100 mil
--	-------------------	--	---	--	---------------------------	--	--

Síntesis

CONFLICTOS: 11

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS:

Número de meses de duración del gobierno: 12

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1) 1 = 1	(2) 2 = 4	(3)
Trampas Reales	(2) 1 = 2	(4) 1 = 4	(6) 1 = 6

Total: $1 + 2 = 3$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS

1er Gobierno de José Pardo (1904 a 1908)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de Partidos Elecciones de tercio parlamentario	1905	Partidos Civil, Demócrata, Constitucional, Liberal y Unión Cívica	Amplio triunfo de la alianza de gobierno, y merma significativa de la oposición. De 32 diputados, 22 fueron civilistas, 8 constitucionales y 2 cívicos. En las elecciones de las mesas directivas del congreso venció en diputados el civilista Antonio Miro Quesada por 69 contra 23 de Aurelio Souza. En senadores, venció el constitucionalista Manuel Irigoyen por 24 contra 8 del demócrata Elguera	Gana alianza civil constitucional	Consolidan dominio de ambas cámaras congresales		El partido demócrata raleado en sus filas ante la avalancha parlamentaria de 1905 depuso la actitud batalladora de etapas anteriores.
2. Conflicto de partidos. Oposición de diputados a empréstito solicitado por el gobierno	17 de febrero a fines de marzo de 1906	Partidos Civil, Demócrata, Constitucional, Liberal y Unión Cívica, y ejecutivo	La oposición se declara firmemente opositora al empréstito por 3 millones de libras que pedía el gabinete Leguía. Los demócratas logran la adhesión de algunos leguístas. Finalmente gana alianza de gobierno	Gana alianza civil constitucional	Consolidan dominio de ambas cámaras congresales		
3. Crisis de Gabinete. Renuncia de gabinete Tovar	8 de Octubre de 1906	Políticos al interior del partido Civil y Constitucional, y Partido Demócrata	Renuncia Tovar por una moción propuesta por diputado demócrata pero apoyado por un sector civilista. Duró este gabinete 2 meses. Lo sucede el diputado civilista Germán Arenas,	Gana el Partido Demócrata	Hace renunciar un gabinete		El Comercio señala que la mayoría había caído en una celada de la oposición.

			miembro de la JEN.				
4. Crisis de Gabinete. Renuncia de gabinete Arenas	9 noviembre de 1907	Políticos al interior del partido Civil. Partido Constitucional	Renuncia Arenas, duró este gabinete 1 año. Lo sucede Carlos Washburn (Independiente), quien dura hasta el final del mando de Pardo (11 meses).				Sólo hubo un cambio en el gabinete (Guerra y Marina), el propio Arenas se mantuvo en Gobierno. Menos que una crisis fue solo un recambio
5. Conflicto de partidos. Renuncia de Gabinete Tovar	Octubre de 1907	Políticos civilistas y demócratas-liberales.	La oposición logra hábilmente la renuncia de ministro Agustín Tovar, a pesar de ser minoría	Ganan demócratas y liberales	Desestabilizó gobierno de Pardo	El Comercio aseveró que la mayoría había caído en un celada de la oposición.	
6. Conflicto de partido al interior de los civilistas. Negociación fracasada	1907	Políticos civilistas y Presidente Pardo	Políticos civilistas proponen al Presidente una convención electoral de partidos para propiciar una candidatura unificada menos beligerante que la de Leguía y para quitarle una bandera subversiva a los demócratas. Pardo contesta que éstos no aceptarían en que tenía que respetar su compromiso con Leguía.	Gana Leguía	Se mantiene el apoyo del Presidente Pardo a su candidatura		Se manifiestan corrientes contrarias a Leguía al interior del partido civil.
7. Conflicto de partidos Composición de la JEN	1907	Político civilistas, constitucionales y demócratas	Para la representación parlamentaria en la JEN, los civilistas se habían negado a que la integren los demócratas como minoría, haciéndose la votación por partidos. resultado elegidos el civilista Arenas y el constitucionalista Germán Porras	Gana la alianza de gobierno TRAMPA, proceden contra la ley de la JEN	Control total de la JEN	Trampa total. Deliberante	Este control amenaza - desaparecer a la representación demócrata del parlamento.

8. Conflicto entre partidos. Movimiento subversivo.	1er mayo de 1908	Políticos demócratas y liberales y alianza de gobierno	Durand y seguidores se apoderan del tren Lima – Huancayo, luego desconectan la energía eléctrica de Lima, dejaron una montonera en San Mateo e interrumpieron las líneas cablegráficas. Planes fracasaron	Gana la alianza de gobierno,	Derrotan movimiento subversivo		Respuesta de una trampa grave a otra trampa grave. Se rompe el clima de paz política y bajo perfil de la oposición que había caracterizado el gobierno de Pardo, aunque el conflicto era latente.
9. Conflicto de partidos. Represión gubernamental	Mayo de 1908	Gobierno y partidos de oposición	Con motivo de la rebelión fueron apresados todos los integrantes de los comités directivos demócrata y liberal (donde se incluían varios parlamentarios) y periodistas de oposición (Alberto Ulloa). Les iniciaron juicio militar, pero exigieron alguno fuero especial por su investidura. Gobierno accedió y la Corte Suprema los liberó por falta de pruebas.	Gana la alianza de oposición	Son liberados y hallados inocentes a la mayor parte de ellos		Detalle que revela respeto de la autonomía del poder judicial por parte del gobierno de Pardo. Su liberación fue recibida con una gran manifestación popular de apoyo.
10. Conflicto de partidos. Elecciones presidenciales	25 mayo 1908	Partidos civil, constitucional y demócrata	La derrota del movimiento subversivo dio características optimistas a estas elecciones. La comisión de cómputo del congreso (sin presencia de la oposición) anunció el triunfo de Leguía.	Alianza de Gobierno Civil Constitucional	Ganan por tercera vez consecutiva el gobierno		Sin embargo, el encono civil demócrata era nuevamente agudo.

Síntesis

CONFLICTOS: 10

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 10

Número de meses de duración del gobierno: 48

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1)	(2)	(3)
Trampas Reales	(2)	(4) 1 = 4	(6) 1 = 6

Total: $4 + 6 = 10$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS

Augusto Leguía (1908 a 1912)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de partidos. Elección de nueva JEN	Noviembre de 1908	Partidos civil, constitucional, demócrata y liberal	Al elegir el congreso a los miembros de la JEN se obtuvo una nueva mayoría civil constitucional, protestó la oposición y Presidente negoció con bancada civilista, lo cual dio origen a nueva delegación del congreso para la JEN.	Ganó Presidente Leguía y demócratas	Predominio de Leguía en decisiones legislativas, y presencia de demócratas en la JEN		Un conflicto al inicio del gobierno de Leguía que desemboca en un acuerdo político de suma positiva, a este buen ambiente se acompañaría la amnistía y la propuesta de "Ubicaciones".
2. Conflicto de Partidos. Negociación fracasada entre demócratas -- liberales y gobierno respecto de acuerdo electoral.	Marzo de 1909	Partidos Civil, Constitucional, Liberal, Demócrata, Unión Cívica	Propuesta de acuerdo electoral para las siguientes elecciones de renovación de tercio parlamentario de mayo de 1909 (ubicaciones). Mitad del tercio para la oposición. La junta directiva acepta pero no Piérola, quien reitera política de abstención electoral. Junta Directiva demócrata renuncia y Piérola se hace cargo de la dirección partidaria. Piérola no quiere legitimar Gob. de Leguía, adujo razones principistas.	Pierden Partido Demócrata y Liberal	Se condena nuevamente a una mayor correlación parlamentaria más desfavorable.	Tres corrientes demócratas: 1) los pragmáticos que aceptaban las ubicaciones, 2) los principistas pierolistas, 3) los radicales inclinados a la vía armada. Aceptar las ubicaciones era involucrarse en la política con los civilistas y descartar la vía revolucionaria.	La correlación de fuerzas en el parlamento era: 129 civilistas (77%), 29 constitucionales (17%), 8 demócratas (5%) y 2 liberales (1%). Primer desacuerdo importante entre Leguía y los civilistas, ya que éstos no estaban de acuerdo con las ubicaciones.
3. Conflicto de Partidos. Elección de	Mayo de 1909	Partidos	Gana Guillermo Billinghurst la alcaldía de Lima	Pequeño triunfo de la oposición			Falta mayores datos, pero parece que no fue una elección

Billinghurst como Alcalde de Lima.							popular sino una elección interna por reemplazo del titular
4. Conflicto de Partidos. Elecciones de tercio parlamentario	Mayo de 1909	Partidos Civil, Constitucional, Liberal, Demócrata	Sin el acuerdo de las ubicaciones, nuevamente el Partido Civil gana abrumadoramente	Pierden partido demócrata y liberal	Continúan disminuyendo número de parlamentarios demócratas y liberales		En el tercio congresal correspondiente entran 34 civilistas, 14 constitucionales, y 6 demócratas.
5. Conflicto de Partidos. Intento de Golpe de Estado	29 de mayo de 1909	Partidos Civil, Demócrata y Presidente Leguía	Hermano e hijos de Piérola más amigos toman de rehén al presidente Leguía y pretenden que firme su renuncia, éste se niega y lo sacan a la calles. Luego es rescatado por un piquete de caballería, hubo inmediata reacción de represión y mueren más de 100.	Gana el Presidente Leguía y la alianza civil – constitucional. TRAMPA de 3er nivel cometida por los demócratas. Se reliva la figura del presidente (su valentía ante sus captores y negarse a firmar su renuncia).	Mantienen el poder y tienen pretexto legítimo para marginar a los demócratas que se pusieron fuera de la ley.	Los demócratas señalaron que no se sublevaron contra un hombre sino contra un sistema que había cerrado las puertas al partido demócrata, mediante la compra de voluntades ajenas y procedimientos mañosos. (Basadre: 3560). Trampa real de 3er nivel	Con este acto (iniciado por la oposición) se cierra un capítulo breve de intentos de negociación con la oposición a iniciativa del gobierno. Se abre un periodo de represión y mayor marginación política del partido demócrata.
6. Conflicto de partidos. Represión indiscriminada a Renuncia de gabinete Romero.	7 junio de 1909	Partidos Civil, demócrata y liberal, ejecutivo	Renuncia del 1er gabinete Romero. Duró 9.5 meses. Se nombra nuevo gabinete presidido por civilista Rafael Villanueva, quien se encargará de endurecer la represión política contra la oposición. Se clausura el diario LA PRENSA, la cual es asaltada y destruida por turbas	Gana Ejecutivo	Pone fuera de línea a oposición	Trampa real de 3er nivel	Aprovechando la coyuntura del golpe, la línea política de Leguía cambia y entra la fase dura represiva. Ministro Villanueva se hará conocido por su empeño represivo de los opositores: detenciones,

			leguistas.				incomunicación indefinida, aislamientos, vejámenes.
7. Conflicto de partidos	Julio de 1909	Durand, jefe de los liberales y JEN	JEN desconoce triunfo de Durand en las elecciones para diputado para Lima, mientras se éste se encontraba en la clandestinidad	Gana alianza civil constitucional	Mayor marginación política de la oposición al desplazar líder liberal	Tramitación de "Punto"	Como parte de la política represiva, los civilistas aprovechan su mayoría en la JEN para desconocer triunfo electoral de Durand.
8. Conflicto de Partidos.. Moción de confianza de la Cámara de Diputados	7 de agosto 1909	Cámara de Diputados, bancada civil constitucional, demócratas y liberales	Los diputados aprueban una moción de confianza al gabinete Villanueva en su política represiva	Gana Gobierno	Frente común de los poderes contra la oposición.	Los parlamentarios demócratas y liberales protestan.	Ya no sólo el gobierno, sino el bloque de la alianza oficialista cierran filas contra la oposición y respalda la represión.
9. Conflicto de Partidos. Declaraciones del Jefe de Gabinete Villanueva.	12 agosto de 1909	Villanueva, Cámara de Diputados	Villanueva dice: "el orden público prima aún sobre la constitución"	Gana Gobierno	Se justifica ilegítimamente la represión.	Tramitación de "Punto"	Declaración anticonstitucional que anuncia intención de conducta desleal del gobierno.
10. Conflicto de poderes. Renuncia del ministro de Hacienda, La Torre.	26 de octubre de 1909	Ejecutivo, bancada civilista - constitucional	La mayoría parlamentaria consideró que el ministro no brindó los recursos necesarios en momentos internacionales críticos, emitió voto de extrañeza.	Gana Legislativo	Predominio sobre ejecutivo		Pugnas entre el ejecutivo y el legislativo. Se atribuye voto de extrañeza a que no se gestionó préstamo solicitado por el legislativo.
12. Conflicto de poderes. Renuncia del	1er de febrero de 1910	Ejecutivo, bancada civilista -	Enfrentamiento entre el Ministro y el legislativo por razones de un préstamo y el	Gana Legislativo	Predominio sobre ejecutivo		Siguen pugnas que ahondan diferencias entre el ejecutivo y

ministro de Hacienda, Forero.		constitucional	presupuesto. Hubo intentos de voto de censura contra el ministro e incluso el gabinete, pero no pasó y sólo renunció el ministro de Hacienda				el legislativo, a pesar de que éste siguió prestando respaldo a la política del premier Villanueva.
13. Conflicto de poderes. Renuncia del ministro de Guerra, Ernesto Zapara	26 de febrero	Ejecutivo, bancada civilista - constitucional	Enfrentamiento el legislativo y el ejecutivo por razón de la compra de armamento, el ministro se inclinó a favor de la mayoría parlamentaria y tuvo que renunciar	Gana Legislativo	Predominio sobre ejecutivo		Siguen conflictos entre ejecutivo y legislativo.
13. Conflicto de partidos. Crisis de Gabinete	5 de marzo 1910	Villanueva y Presidente Leguía, políticos civilistas	Renuncia Gabinete Villanueva, duró 10 meses. Pugnas al interior del bloque de gobierno (legislativo – ejecutivo) desgastan su gestión	Gana Legislativo	Predominio sobre ejecutivo		La renuncia de este gabinete marca el fin de una primera etapa del Gobierno de Leguía, caracterizado por la represión política como respuesta al intento de golpe de Estado de 29 de mayo.
14. Conflictos al interior del Partido Civil. Nombramiento de nuevo gabinete	6 al 14 de Marzo de 1910	Políticos al interior del Partido Civil y Presidente Leguía	Desacuerdos para formar el gabinete, los propuestos por Leguía no tuvieron el apoyo del Partido Civil. Leguía anunció su renuncia y logró el apoyo de Javier Prado, quien encabeza gabinete con apoyo del partido.	Gana Legislativo	Predominio sobre ejecutivo		Rectificación de la política interna, numerosos presos políticos fueron liberados, devolvieron la Prensa. La crisis política fue conjurada pero se anuncia conflictos.
15 Crisis de Gabinete Prado	25 de julio 1910	Políticos al interior del Partido Civil y	Renuncia ante la inminencia de acres debates en el Congreso que debía instalarse	Gana Leguía contra el Partido Civil	Nombra Gabinete leguista.		Este gabinete implica el inicio de una discrepancia

		Presidente Leguía	pocos días después y por discrepancias con Canciller Porras sobre política exterior. Duró 4 meses. Asume Germán Schreiber como presidente de un gabinete compuesto por amigos del presidente sin consultar ni pedir el apoyo del Partido Civil				abierta entre el Presidente Leguía y el Partido Civil. Este conflicto se trasladará al Congreso, al JEN y demás instituciones públicas
16. Conflicto de poderes y al interior del partido Civil	Primeros días de agosto de 1910	Políticos al interior del Partido Civil y Presidente Leguía	Enfrentamiento en el congreso entre el canciller Porras y civilista parlamentario Matías Manzanilla por política exterior. El voto de censura no prospera.	Gana Leguía	Mantiene a su ministro del exterior.		
17. Conflicto de poderes y al interior del partido Civil	5 de octubre al 6 de noviembre de 1910	Políticos al interior del Partido Civil, otros partidos y el Presid. Leguía	Proyecto de construcción del ferrocarril al Ucayali que era una iniciativa del Presidente Leguía, fue discutido en el Congreso. Los diputados no aprobaron el nuevo proyecto y solo 3 modificaciones al anterior contrato.	Opositores a Leguía al interior del partido Civil.	Hicieron prevalecer su mayoría y derrotaron iniciativa del Presidente.		El enfrentamiento entre los partidarios de Leguía y sus opositores se traslada al parlamento, a la vez que se intensifica nuevamente el clima de conflicto entre los poderes.
18. Conflicto de partidos. y al interior del partido civil. Elección de delegados de la JEN.	19 de noviembre de 1910	Políticos al interior del Partido Civil, otros partidos y el Presid. Leguía	El parlamento nombró los delegados ante la JEN, resultando que el civilismo no leguista obtuvo 4, el gobierno 3 y 1 liberal. Al partido demócrata le negaron personería ante la Junta.	Opositores a Leguía al interior del partido Civil.	Lograron el control de la JEN		
19. Conflicto de partidos. Crisis de	21 de noviembre 1910	Políticos al interior del partido Civil y	Renuncia el gabinete Schreiber, siendo el incidente del proyecto del ferrocarril a	Gana Presidente Leguía	Gabinete enteramente leguista.		La duración de los gabinetes empieza otra vez a ser corta.

Gabinete		constitucional, presidente Leguía	Ucayali uno de las causas. Duró 2.7 meses. Se nombra gabinete presidido por José Salvador Cavero, constitucional, pero sin autorización de su partido. ningún congresista, se conformo sin participación del partido civil. Había 2 parientes de Leguía.				Este gabinete refleja una oposición entre Leguía y los civilistas tradicionales. El partido constitucional es atravesado por estas pugnas y se divide entre partidarios de Leguía (Cáceres) y los que forman bloque con el civilismo (General Muñiz).
20. Conflicto de Partidos. Caída del Canciller Melitón Porras	8 de diciembre 1910	Partidos Políticos	Con motivo de un incidente violento en la frontera con Bolivia, el Canciller Porras fue interpelado y aprobó un voto de no satisfacción con las explicaciones de éste. Se aliaron civilistas no leguistas, un sector constitucional, liberales y demócratas	Gana sector antileguista.	Caída de uno de los principales aliados de Leguía.		La caída de Porras refleja una pugna abierta entre dos sectores del partido civil: leguistas e independientes (liderados por los hermanos Pardo, Miro Quesada y Manzanilla.
21. Conflicto de partidos. Movimiento subversivo demócrata.	Fines de 1910	Políticos demócrata y ejecutivo	Aparecieron montoneras en el norte (Lambayeque) encabezadas por el liberal Orestes Ferro. Son derrotados por el ejército.			Tramitado por el ejecutivo	Últimos arrestos subversivos del partido demócrata.
22. Conflicto de Partidos. Caso del diputado David Samanez Ocampo.	Fines de 1910	Ejecutivo, políticos demócratas	Diputado Samanez Ocampo es tomado preso en el Cuzco en plenos preparativos subversivos. Se encontraba junto con ex senador demócrata Enrique Llosa	Ganó ejecutivo	Desactiva otro intento subversivo.	Tramitado por el ejecutivo	

23. Conflicto de Poderes. Caso del diputado Samanez Ocampo.	Fines de 1910	Legislativo, ejecutivo y partidos políticos.	Gobierno denuncia a Samanez ante la cámara de diputados para que orden su desafuero, pero ésta ordena que lo liberen y comunicó al diputado que se haga presente ante la cámara. Este aprovechando su libertad se fugó a Apurímac, donde inició otra montonera, y allí sí la cámara permitió su enjuiciamiento.	Ganó esporádicamente legislativo	Hace prevalecer su fuero ante el ejecutivo		A pesar del carácter subversivo comprobado de Samanez, los diputados le otorgan su libertad, pero la insistencia revolucionaria de éste le dio la razón a la demanda de desafuero del gobierno.
24. Conflicto de Partidos. Crisis de Gabinete	Mediados de diciembre de 1910	Partidarios de Leguía.	A la caída del gabinete Scheriber (duró 1 mes), se nombra un gabinete más vinculado con el presidente; de los cuales 3 eran parientes suyos. Presidió Enrique Basadre.	Gana Presidente Leguía	Gabinete enteramente leguista.	Se constituye una oposición a Leguía que reúne a constitucionales (fracción Muñiz), civilistas (independientes) y liberales y se denominan. EL Bloque	La separación entre ejecutivo y legislativo se hace aguda a partir de este gabinete enteramente leguista.
25. Conflicto de Poderes. Clausura de la JEN.	18 mayo 1911	JEN. Gobierno. Partidos	Los dos bandos al interior de la JEN querían el mando, los nombramientos de las Juntas Electorales fueron casi iguales pero favoreciendo levemente al BLOQUE, los pronósticos del tercio parlamentario serían parecidos, pero con los otros dos tercios que quedaban, el BLOQUE seguiría teniendo mayoría parlamentaria. Ambos sectores se acusaron de malos manejos y luego, el gobierno cerró la JEN	Gana Presidente Leguía.	Asumió control de las elecciones.	Trampa recu de 20 años. Protestas duras del BLOQUE y una declaración de Piérola que condenó el atropello que tenía por objeto fabricar un Congreso que sancionara los desmanes del presidente Leguía y le ayudase a imponer un	Empiezan otra vez las trampas pero esta vez entre el gobierno y el bloque (alianza de sectores de los partidos civil, constitucional y los liberales). Este conflicto no sólo se da entre actores, sino que atraviesa todas las instituciones e involucra toda la agenda política.

			inconstitucionalmente			sucesor.	
26. Conflicto de Poderes. Renovación del tercio pariamentario	Mayo de 1911	Partidos. Ejecutivo. nueva JEN nombrada extra oficialmente.	Las elecciones fueron hechas con las juntas ya nombradas y el secretario de la JEN, Juan de Dios (aliado de Leguía) asumió la personería de la JEN. Surgieron muchas dualidades, por lo que correspondía a las Cámaras su evaluación con la nueva ley electoral.	Aparentemente ganan la oposición a Leguía, ya que disponían de la mayoría para anular las elecciones o privilegiar a sus candidatos.			Este impasse generó un clima de tensión e incertidumbre. Los bandos estaban claramente delineados Ejecutivo versus Legislativo.
27. Conflicto de poderes. Se conforma oficialmente el bloque opositor	8 de julio 1911	Congresistas civilistas, constitucionales y liberales	Se conforma oficialmente el "bloque" de oposición al Leguía, por el cual contaban en el congreso con 46 votos fijos y 4 probables en Diputados y 20 votos fijos y 3 probables en la Senadores. Mientras que Leguía contaba con 36 votos fijos y 8 probables en Diputados y 16 fijos y 3 probables en Senadores. Este bloque condenaba las violaciones a la constitución y procurarían su restablecimiento y reforma electoral, proponían convención de partidos para formula presidencial.	Gana el Bloque	Logran una correlación favorable en el congreso con lo cual revertir los resultados electorales del tercio parlamentario. Los demócratas no integraron dicha alianza (excepto Aurelio Sousa) aunque sí fueron adherentes del mismo.		Este bloque significó divergencias fuertes en el partido constitucional entre Cáceres que apoyaba a Leguía y el general Pedro Muñiz (presidente de la Junta Directiva) que apoyaba al bloque, no se llegó a una ruptura dado que aún predominaba la figura histórica de Cáceres. El antagonismo político se articula no en torno a partidos sino contra medidas autoritarias del ejecutivo.
28. Conflicto de poderes. Usurpación del legislativo por Leguía.	13 y 14 de julio de 1911	Diputados del bloque y leguistas.	El Gobierno evita que para la instalación de la Juntas Preparatorias de las Cámaras en el Congreso asistan los congresistas del Bloque	Gana Leguía.	Gana mayoría en las cámaras de diputados y senadores.	Opositores denuncian "atentado de lesa constitucionalidad ... y de demoler las	La gravedad de esta trampa orilla a este régimen al borde de su disolución, tanto así que los políticos

			(detiene a 4 congresistas en el barco en el que se hallaban so pretexto de cuarentena) otros fueron atacados por turbas leguistas con piedras y balas, finalmente la policía no los dejó entrar al recinto congresal. Los congresistas oficialistas sesionaron sin el quórum respectivo e incorporaron sólo a los candidatos leguistas, luego eligieron al hermano del Presidente (Roberto) como Presidente de Diputados.			instituciones del país ... socava la legalidad de las instituciones y tiene la misma trascendencia política y constitucional que impedir el funcionamiento del Congreso o disolverlo" (Basadre). Trámite real de Ser m. el	del bloque se pusieron a las órdenes del ex ministro de Guerra, Gral. Muñiz para "defender la constitución armas en las manos" pero estos planes se frustran, algunos opinaron a favor del ausentismo, pero la Junta Directiva del Partido Civil les impuso el reingreso a sus curules. En caso de haber prosperado alguna de estas iniciativas se hubiera producido una guerra civil. Importa el esfuerzo institucional partidario para evitar este desenlace.
29. Conflicto de Partidos. Moción de confianza al gabinete Basadre.	4 de agosto de 1911	Diputados del bloque y del leguismo.	El Bloque en minoría presenta una moción de censura al gabinete, Matías Manzanilla acusa al gobierno de utilizar a las turbas con armas de fuego contra la oposición. La cámara no aprobó esta censura sino más bien una de confianza.	Gana Leguía	Bloquea oposición en el congreso.	Esta moción vuelve a destacar el manejo tramposo del gobierno en las últimas elecciones parlamentarias. Trámite real de Ser m. el	La mayoría leguistas que se constituye es ilegítima. Con ella, Leguía atenta seriamente contra la existencia del régimen, pero éste logra subsistir. LA oposición de poderes ahora deviene en pugna entre partidos.

30. Conflicto de partidos. Proceso a los revolucionarios del putsch del 29 de mayo	8 de agosto 1911	Políticos demócratas, fuero militar, Leguía	Se condenó a prisión (diversas penas) a los conjurados del intento de golpe de estado: Isaías, Amadeo y Carlos de Piérola y otros varios dirigentes demócratas y liberales	Gana Leguía	Margina políticamente a oposición demócrata.		Ya anteriormente se había liberado a otros demócratas inocentes o poco relacionados con el incidente, y a pesar de que Basadre menciona que la sentencia fue consultada con Leguía, esta fue justificada.
31. Conflicto de Partidos. Renuncia de Gabinete Basadre	31 de agosto 1911	Ejecutivo. Partidos Bloque, y Leguistas	A la salida del gabinete Basadre (duró 8. 5 meses), entra uno presidido por Agustín Ganoza. El gabinete fue atacado duramente por el Bloque, pero no logra la mayoría para su censura, éste renuncia habiendo cumplido su cometido y renuncia para "oxigenar" al gobierno.	Gana Leguía	Logra mantener su propia dinámica y ventaja en plena crisis de régimen.	El Bloque continua con la campaña de calificar de ilegítimo los actos del ejecutivo, pero manteniéndose en el parlamento.	
32. Conflicto de partidos. Incidente Riva Agüero	12 y 15 de setiembre de 1911	Ministro de Gobierno, José de la Riva Agüero, oposición.	Joven catedrático Riva Agüero escribe un artículo en El Comercio para proponer la amnistía a los presos políticos y censurar la trayectoria política del leguismo Al día siguiente Riva Agüero fue apresado, lo cual suscitó una gran asamblea universitaria y una manifestación en las calles.	Gana oposición Error del gobierno al atentar contra la libertad individual y represión abusiva.	Recibe apoyo estudiantil (gana prestigio)	En un plenario en la cámara de diputados el mismo día de la	Mal manejo de política de gobierno, uso de policía secreta para fines políticos.
33. Conflicto de poderes. Renuncia del Ministro del	15 setiembre de 1911	Parlamentarios de los partidos políticos, ministro de	Moción de voto de censura al Ministro de Gobierno Salazar y Oyarzábal por "la detención arbitraria de un	Gana oposición	En tanto se hacen manifestas las trampas del	En un plenario en la cámara de diputados el mismo día de la	La oposición vuelve a generar un conflicto político no gracias a una

Interior, Salazar.		gobierno	ciudadano y por atropellos contra la juventud universitaria. Ministro renunció antes de que se procediera a votación (duró 14 días en el cargo: "ministro soneto). Se aprobó además voto de aplauso a la juventud, la mayoría se dejó manejar por la minoría por el agitado clima político.		gobierno, éste pierde prestigio mientras lo gana la oposición.	manifestación estudiantil donde la minoría planteó el voto de censura contra el ministro, la mayoría dejó sin quórum la sesión. Luego de que se anunció la renuncia del ministro se aprobó el voto de aplauso a la juventud.	correlación favorable, sino gracias a movilización popular (en este caso estudiantil), que pone en jaque al gobierno.
34. Conflicto de poderes. Amnistía	23 de setiembre 1911	Gobierno, Cámara de Senadores	El gobierno envía un proyecto de ley para declarar amnistía a todos los implicados en delitos políticos desde el 29 de mayo de 1909. Se aprobó unánimemente el día 25 de ese mismo mes. El Presidente acompañó mensaje de conciliación. Los presos salieron ese día en medio de entusiasmo popular. El incidente Riva Agüero determinó la crisis de todo el gabinete.	Gana oposición	Libertades políticas		Intento de conciliación del gobierno, aunque presionado por las manifestaciones estudiantiles y el cargado ambiente político, por que el 6 y 12 de setiembre se votaron proyectos de amnistía en el senado que fueron rechazados primero por 24 contra 1 y luego 19 contra 5, respectivamente.
35. Conflicto de partidos. Mociones de al ministro de hacienda, Daniel Castillo.	10 de octubre de 1911	Ejecutivo, oposición en el legislativo	Se intenta censurar al ministro de hacienda, por un contrato con la Peruvian Corporation referente al muelle de Paíta. Pero la moción no fue aprobada por la mayoría leguista en la cámara de diputados	Gana Leguía	Logra evitar una censura de diputados y hacer vales su mayoría		La minoría del bloque se mantiene unida y activa contra Leguía.

36. Conflicto de partidos. Crisis de Gabinete Ganoza	16 de octubre de 1911	Ejecutivo, oposición.	Hubo dificultades para formar un gabinete de conciliación. Se frustran intentos de negociación para formar gabinete plural. Se recompuso el Gabinete Ganoza con 2 nuevos: parlamentarios leguistas.	Gana Leguía	2do Gabinete Ganoza, nuevamente con marcada orientación leguista		Este gabinete acompañará al Presidente Leguía hasta el fin de su mandato.
37. Conflicto de partidos. Competencia de intereses al interior del Partido Civil.	12 de noviembre de 1911	Corrientes al interior del Partido Civil.	Se recompone la Junta Directiva del partido civil, y gana la tendencia de Leguía y de su futuro candidato presidencial: Antero Aspíllaga..	Gana Leguía y Aspíllaga	Junta Directiva del partido civil leguista.		A estas alturas Leguía había copado casi todo el poder: Gobierno, Parlamento, neutralizado la JEN, Partido Civil; habiendo recorrido el mismo camino de avasallamiento contra sus opositores como había sucedido antes con el partido Demócrata. Sin embargo, un nuevo actor había derrotado a Leguía: la movilización social de los estudiantes.
38. Conflicto de intereses al interior del Partido Civil	6 - 12 - 1911	Corrientes al interior del Partido Civil.	Escisión formal del Partido Civil, se nombra una Junta Directiva del Partido Civil Independiente				Esta nueva junta directiva se inicia con la voluntad de logra una candidatura única de oposición.
39. Conflicto de Partidos. Constitución	Enero de 1912	Parlamentarios de los partidos: bloque y	Se constituye nuevamente la JEN, pero ahora como los leguistas constituyen	Gana Leguía y Aspíllaga	Logran la dirección de la JEN		El oficialismo completa toda la maquinaria legal

de la nueva JLE:N		leguístas	mayoría parlamentaria, copan este organismo.				para asegurar el triunfo de la candidatura presidencial de sucesor de Leguía.
40. Conflicto de partidos Negociación fracasada	11 de febrero de 1912	Partidos del bloque y los demócratas	Ruptura entre Nicolás de Piérola y lo demás delegados. Piérola no aceptó una coalición encabezada por el civilista Enrique de la Riva Agüero. Luego, el bloque intentaría la candidatura de José Pardo, pero éste la rechazó.	Gana Leguía y Aspíllaga			La estrategia de abstención de Piérola perjudica la presentación de una candidatura de oposición. Surge espontáneamente la candidatura de Billinghurst.
41. Conflicto de partidos Manifestación de la oposición y demandas de Billinghurst al gobierno	19 - 5 - 1912	Políticos de la oposición, ejecutivo, movimientos sociales	“Imponente manifestación pública de las fuerzas billinghurstas” (Basadre). Surge símbolo de la candidatura de Billinghurst: pan grande (que se vendería 5 ctvs. si sale elegido). En su discurso demandaría la libertad de sufragio; además presentaría memorial al gobierno para anular los actos de sufragio, al cual se adhieren el Partido Civil Independiente, Partido Liberal y Constitucional, además de universitarios.	Gana la oposición	Ganan prestigio, logran apoyo popular.	Gobierno no accede a la prórroga o anulación de actos de sufragio	La coyuntura política se polariza y tensa.
42. Conflicto generalizado de partidos y poderes. Crisis de Régimen	25 de mayo de 1912	Políticos de la oposición, ejecutivo, movimientos sociales.	En el mismo día de las elecciones, se convoca a paro nacional, el primero de la historia peruana. Grupos sociales salen a las calles para romper ánforas y poner en fuga al personal de las	Gana la oposición	Evita un fraude electoral	Candidato Aspíllaga denuncia boicot de la oposición.	Basadre insinúa un apoyo tácito del gobierno con el fin de suscitar una prórroga. Actor decisivo que aparece en la historia: el

			comisiones receptoras de sufragios.				pueblo. Basadre califica este hecho de grave crisis de la república aristocrática.
43. Conflicto político, Piérola versus Billinghurst. Declaraciones de Piérola. En contra de las propuestas que facilitarían que Billinghurst llegue al poder	14 de julio 1912	Piérola	Se mostraba partidario de la anulación de las elecciones. Opinaba en contra de la presidencia provisoria, la prórroga de Leguía, o la elección por el Congreso, prefería elecciones en el mes siguiente.				Nuevo distanciamiento entre Piérola y Billinghurst, con lo cual se evitó una nueva oportunidad para que el Partido Demócrata lograra injerencia directa en el gobierno. Tal decisión desgarró al partido demócrata y significó un golpe definitivo para éste.
44. Conflicto de partidos. Elección de Billinghurst como Presidente por el congreso. Acuerdo negociado	19 de agosto de 1912	Partidos civil, liberal, constitucional, Leguía, Aspillaga	Después de debatirse las diversas alternativas para resolver la crisis política resultante de las elecciones fallidas, se decidió la elección de presidente por el Congreso, eligiendo a Billinghurst por 132 votos contra 30. Para ello contó con el apoyo de la mayoría leguista, acuerdo por el cual también se elegía a Roberto Leguía (hermano del presidente) como 1er vicepresidente y Miguel Echenique como 2do Vice de la filiación leguista	Ganó Billinghurst y Leguía.	El primero la presidencia, y el segundo la posibilidad de que en caso de ser relevado puedan acceder nuevamente al gobierno.		Un acuerdo sólo válido para la fórmula presidencial pero no para el gobierno. Se ungió al candidato auspiciado por la simpatía popular pero por un congreso de origen discutible y sin una elección popular formalizada. En el decenio anterior se eligió por sufragio popular a candidatos no populares.

Síntesis

CONFLICTOS: 44

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 48

Número de meses de duración del gobierno: 48

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 48

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1)	(2)	(3)
Trampas Reales	(2) 3 = 6	(4) 3 = 12	(6) 5 = 30

Total: $6 + 12 + 30 = 48$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS
Guillermo Billinghurst (24 de setiembre de 1908 a 4 de febrero de 1912)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto Nacionalista – Internacionalista por el Acuerdo Varela - Hunneus	30 de noviembre de 1912	Presidente Billinghurst versus oposición y algunos oficiales del ejército	A raíz de un acuerdo entre los gobiernos de Perú y Chile para el problema pendiente de las provincias cautivas, se generó una mala opinión de este acuerdo en sectores políticos y militares, aún cuando este no se llegó a debatirse en el Congreso	Ganó oposición	Lograron el primer tema de desprestigio para el Presidente		Este sería uno de los temas de mayor conflicto con el ejército, por el cual se tomaría como pretexto para el golpe de Estado.
2. Conflicto de violencia política	19 de diciembre de 1912	Turbas billinghurstistas versus periódicos de oposición	Turbas Billinghurstistas atacan la Imprenta Berrio (donde se imprimía el libelo de oposición “El Mosquito”) y la casa de periodista de oposición.			Se presumió de la orientación Billinghurstista del ataque, la oposición reacciona pidiendo una interpelación. <i>Interpelación por el nivel</i>	Primer incidente de violencia política que se repetirá más adelante con más frecuencia.
3. Conflicto de Poderes, censura y renuncia del primer gabinete Malpartida	23 de diciembre de 1912	Gabinete y Congreso	A propósito de un ataque de turbas billinghurstistas a una imprenta de periódicos de la oposición, el senador Capelo interpeló a ministros, sin embargo la demora de su respuesta generó el voto de censura al gabinete en ambas cámaras.	Ganó oposición	Lograron hacer prevalecer capacidad de censura del parlamento y además ratificar el carácter minoritario del gobierno	En rechazo de tal censura, Billinghurst retiró proyectos de ley del ejecutivo, lo cual impidió la legislatura extraordinaria	Con este conflicto empieza el distanciamiento entre Billinghurst y el Congreso, luego de medio año de haber tenido una buena relación

4. Conflicto de Partidos, crisis de gabinete por renuncia de Varela con fines electorales	24 de febrero de 1913	Partidos Políticos	El gabinete Varela renuncia para poder postular en las elecciones de renovación de tercio parlamentario, sin embargo, los resultados electorales no favorecen a partidarios de Billinghurst				
5- Conflicto de partidos. Competencia electoral por renovación de tercio parlamentario	Abril de 1913	Partidos Políticos	Los resultados electorales no favorecen a partidarios de Billinghurst	Ganaron partidos civilista, liberal y constitucional	Mayor cantidad de escaños parlamentarios		El fracaso de obtener una representación parlamentaria (aunque sea minoritaria), separa más aún a Billinghurst del Congreso.
6. Conflicto de partidos. Elecciones municipales	2 de Junio de 1913	Partidos Políticos	Se efectuaron las elecciones pero surgieron reclamaciones acerca del acto de sufragio y de los registros electorales. El poder judicial resolvió su anulación			Trampa por parte del poder judicial	No hay datos acerca de los resultados y participantes de esta elección.
7. Conflicto de Poderes, Congreso versus Poder Judicial	13 de julio de 1913	Leguístas y liberales versus Poder Judicial	El senado con mayoría liberal leguista (antes enemigos ahora trabajaban conjuntamente), incorporan a su seno a Carlos Forero y José Antonio Trelles, a pesar de que sus nominaciones habían sido anuladas por la Corte Suprema.	Ganaron partidos leguístas y liberales	Mayor cantidad de escaños parlamentarios	Trampa por parte del poder judicial	La calificación de este tipo de trampa es por que usurparon las funciones del árbitro.
8. Conflicto de partidos, Billinghurstistas versus leguístas, violencia	Julio de 1913	Billinghurstistas y leguístas	Luego de la incorporación de los senadores, turbas billinghurstistas atacan las casas de Rafael Villanueva (presidente de Senado) y Augusto Leguía. Este último	Ganan Billinghurstistas	Billinghurst empieza a usar como arma política, la intimidación a través de sus partidarios.	Leguía denuncia que en el Perú está en anarquía y la voluntad del populacho reina por encima de la	Atentado grave del gobierno de deshacerse de un enemigo político de manera ilegal y usando la

política			se defiende con armas, pero luego que llega el Prefecto Orestes Ferro, Leguía es arrestado y acusado de conspiración, logra salir libre bajo fianza y se exilia.			ley. Tramitación de nivel	violencia.
9. Conflicto entre poderes, Congreso versus Poder Judicial	Julio de 1913	Partidos, poder judicial, protestas ciudadanas	Juntas Preparatorias pretenden incorporar a los candidatos que habían sido anulados sus respectivas elecciones por la Corte Suprema (la mitad de los procesos electorales), la gente protesta y hace desistir de tal propósito.	Ganan Billinghurstistas	Desprestigio de partidos políticos		Maniobra movilizadota de Billinghurst que dio mayor resultado.
10. Conflicto de partidos, billinghurstistas versus leguístas y liberales	Julio de 1913	Ejecutivo versus liberales y leguístas	En reacción a este ataque, los ministros Balta (leguista) y Solf (liberal) renuncian al gabinete a modo de protesta, también renuncia premier Sousa, ante la inminente censura del senado.	Ganan partidos leguista y liberales	Desprestigio del gobierno. Ruptura formal de la alianza en el gobierno		El conflicto se hace más agudo, el gobierno empieza a aislarse.
11. Conflicto de violencia política	10 de setiembre de 1913	Turbas billinghurstistas versus periódicos de oposición	Turbas atacan la imprenta del diario La Crónica y la Revista Variedades e Ilustración Peruana (todas de oposición), no se aclara el incidente pero se presumen de gobierno por la orientación política de las víctimas. Muere portero de la empresa en el ataque.			Tramitación de nivel	Nuevo incidente de violencia atribuida al gobierno, tales hechos alejan incluso a ex partidarios del presidente como el periodista Ulloa.
12. Conflicto de poderes, ejecutivo versus oposición leguista liberal	11 de setiembre de 1913	Ejecutivo, turbas billinghurstistas, diputados de oposición	Ejecutivo envió proyecto de ley solicitando facultades para nombrar autoridades edilicias (en vista de la anulación del proceso electoral por el poder judicial), los diputados que	Gana oposición	Hacen prevalecer predominio parlamentario sobre el ejecutivo y sus estrategias violentas	Tramitación de nivel	Mes de grandes conflictos entre el ejecutivo y el parlamento.

			opusieron a tal cesión fueron agredidos luego en las calles. La cámara resuelve no seguir debatiendo la solicitud del gobierno.				
12. Conflicto de poderes, legislativo versus ejecutivo	23 de setiembre e3 1913	Ejecutivo, cámara de diputados	Ejecutivo envió proyecto de presupuesto para 1914, la cámara de diputados la empieza a debatir, luego se presenta el incidente de agresión a diputados. La cámara deja el debate en espera que el Presidente convoque a una legislatura extraordinaria, más así no sucedería.	Gana oposición	Subordina interés del ejecutivo de que se apruebe el presupuesto, sin embargo el Presidente tampoco muestra interés en que se apruebe, luego se muestran las cartas de los actores		Punto de quiebre definitivo de la relación entre el ejecutivo y el parlamento. Termina la legislatura ordinaria y ambos actores (Parlamento y Ejecutivo) terminan en las peores relaciones.
13. Conflicto de partidos; ministros Tudela y Maldonado versus Presidente	Octubre a 24 de diciembre de 1913	Ministros Tudela (civilista) y Maldonado (liberal) versus Presidente Billinghamurst	Maldonado y Tudela no estaban de acuerdo en que no se convoque a legislatura extraordinaria, por lo que se encontraban en condición de dimisionarios hasta que finalmente formalizan su renuncia, Billinghamurst los reemplaza con funcionarios de segundo nivel.	Gana oposición	Crea crisis ministerial, desestabilizando una vez mas al gobierno		
14. Conflicto de poderes, represión contra parlamentarios de oposición	2 de febrero de 1914	Billinghamurst versus parlamento	Ambos sectores conspiraban para eliminar al otro. Ejecutivo arresta a varios diputados y senadores, realiza allanamientos, varios se asilan en embajadas. Se clausura La Prensa. Turbas billinghamuristas armadas recorren las calles entre gritos y disparos.			Los opositores siguen conspirando en esos días y ganan a militares de alto rango a su causa. <i>Trampan real de 3er nivel</i>	

15. Conflicto de Poderes. destitución del Presidente por la oposición parlamentaria	4 de febrero de 1914	Billinghurst versus parlamento	Parlamentarios apoyados por el ejército derrocan al Presidente, previamente habían declarado la vacancia de la presidencia con mayoría de congresistas. Exilian a Billinghurst	Gana Oposición	Asumen el poder mediante Junta Provisional		No calificamos de trampa este desenlace puesto que contó con el apoyo mayoritario del congreso. Que a su vez lo había elegido.
16. Conflicto de partidos. Violencia política. Asesinato de General Varela	4 de febrero de 1914	Partidarios de parlamentarios, general Varela (premier de Billinghurst)	Los militares conspirados para la destitución de Billinghurst asesinan al general Varela.	Gana oposición	Logran anular al que pudo frenar la conspiración	Trampa real de Billinghurst	

Síntesis

CONFLICTOS: 16

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 29

Número de meses de duración del gobierno: 16

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1) 1 = 1	(2)	(3)
Trampas Reales	(2) 3 = 6	(4) 1 = 4	(6) 3 = 18

Total: $1 + 6 + 4 + 18 = 29$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS
Coronel Oscar Benavides (4 de febrero de 1914 a 18 de agosto de 1915)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de partidos. Violencia Política Grupo liberal – leguiísta versus el grupo civil, constitucional, demócrata	21 de marzo de 1914	Grupo liberal – leguiísta versus “Asamblea Nacional” (civilistas, constitucionales, demócratas)	El tema que dividió el acuerdo nacional post Billinghamst estuvo en torno a la sucesión presidencial. Hubo 3 convocatorias para sesiones de Congreso, en una hubo tiroteos y cayó herido el diputado leguiísta Salomón. No se pudo constituir en estos primeros meses el congreso	Ganaron Asamblea Nacional	No se constituyó el Congreso que elegiría como sucesor a Roberto Leguía	Trampos real de 1er nivel	Leguiístas y liberales tenían mayoría pero no el quórum de dos tercios para instalar el Congreso.
2. Conflicto de Partidos. Negociaciones de Isaías de Piérola para arribar a un acuerdo	Abril de 1914	Partidos Políticos, Isaías de Piérola	De regreso del extranjero Isaías de Piérola recibió el encargo de ser mediador. Pero tal misión fracasó, y Piérola aconsejó que el Congreso resuelva el problema.				El rol mediador de Piérola lo hizo asumir una actitud neutral, por lo que el Partido Demócrata se puso al margen de alguna de las propuestas en liza, aunque no varios de sus dirigentes
3. Conflicto de Partidos. Grupo liberal – leguiísta versus el grupo civil, constitucional, demócrata. Ruptura del consenso de la Junta de Gob.	15 de mayo de 1914	Grupo liberal – leguiísta versus “Asamblea Nacional” (civilistas, constitucionales, demócratas)	En la 4ta convocatoria al congreso, acudieron la minoría (civil – constitucional), mientras que la mayoría (leguiísta – liberal) era impedida por la policial de entrar al congreso. Se aprobó la presidencia provisorio del Coronel Benavides, hasta la realización de elecciones	Ganaron Asamblea Nacional	Se ganaron el voto del Coronel Benavides dentro de la Junta, a cambio de su nombramiento como presidente provisorio, pero por medios ilegítimos.	Trampos real de 3er nivel Leguiístas rechazaron como ilegal dicha elección. Nombraron su propio gobierno.	Se constituye un nuevo gabinete bajo el nuevo titularato del Coronel Benavides, de Presidente de Junta de Gobierno A Presidente Provisorio, sin embargo tal objetivo se logra con estrategias ilegítimas: la eliminación de la mayoría.

4. Conflicto de Partidos. Sublevación de Augusto Durand y otros	23 de mayo de 1914	Subversivos liberales y Ejecutivo	Batallón No. 7, Puno, incentivada por Durand. Intento de revuelta contra gobierno de Benavides. Descubierta a tiempo	Ganó Ejecutivo	Develaron intento subversivo	Trampa real de Benavides	La oposición liberal se agudiza y pasan a la conspiración
5. Conflicto de Partidos. Sublevación de Augusto Durand y otros	14 de junio de 1914	Subversivos liberales y Ejecutivo	Conjuración para sublevar Escuela Militar de Chorrillos. Intento de revuelta contra gobierno de Benavides. Descubierta a tiempo, apresamiento de líderes militares	Ganó Ejecutivo	Develaron intento subversivo	Trampa real de Benavides	Idem
6. Conflicto de Partidos. Sublevación de Augusto Durand y otros	22 de julio de 1914	Subversivos liberales y Ejecutivo	Reunión subversiva en casa de diputado liberal Gerardo Balbuena. Intento de revuelta contra gobierno de Benavides. Descubierta a tiempo, se persiguió a Durand y Ulloa, quienes se asilaron, también se detuvieron a líderes leguístas: Villanueva y Victor Larco	Ganó Ejecutivo	Develaron intento subversivo y lograron descabezamiento de líderes políticos.	Trampa real de Benavides	Idem, Durand pierde y se asila, con lo cual se acabaron los intentos subversivos
7. Conflicto de partidos. Represión de la policía secreta sin el proceso legal debido	Julio de 1914	Partidarios del gobierno y oposición.	Asalto de la policía secreta a la casa del vocal supremo Eguiguren para buscar a Leguía.			Trampa real de Benavides	
8. Conflicto de poderes. Rechazo del proyecto hacendario del gobierno y renuncia de gabinete Carvajal	13 de agosto de 1914.	Senado versus Ejecutivo	El senado desechó el proyecto de hacienda del Gobierno, con tal motivo renunció el gabinete Carvajal, y lo reemplazó el gabinete Sousa (demócrata, ex ministro de Billinghurst).	Ganó Senado	Hizo prevalecer su criterio		

8. Conflicto de poderes. Ministro de Guerra Bedoya y cámara de diputados. Renuncia del ministro.	11 de noviembre de 1914	Diputados versus ejecutivo.	A pedido del diputado Balcázar, se dio plazo de 3 días para que ministro de Guerra, Bedoya informe acerca de sucesos del 4 de febrero y 15 de mayo. Este se niega a cumplir dicho plazo, a lo cual insiste la Cámara de Diputados, haciendo espíritu de cuerpo, lo cual originó la renuncia del ministro	Ganó Cámara de Diputados	Hizo prevalecer su criterio		Ambos incidentes del conflicto de poderes refleja predominancia parlamentaria sobre el ejecutivo.
9. Conflicto político. Renuncia de gabinete Schreiber	17 de febrero de 1915	Ministros de Benavides	Renuncia del gabinete Schreiber con el propósito de algunos ministros (incluido el premier) de postular a las próximas elecciones parlamentarias.				
10. Conflicto de Partidos. Elecciones internas en la Convención de partidos para la candidatura presidencial de 1915	28 de marzo de 1915	Partidos civil, constitucional, liberal,	Se convoca convención de partidos para elegir candidato presidencial, acuden civilistas, constitucionalistas y liberales (no se aceptan a los demócratas por estar desorganizados). Compiten Muñiz y Pardo.	Ganó Pardo (alianza partido civil y liberal)	Candidatura presidencial de los partidos predominantes, a los cuales se ha incorporado el Partido Constitucional.	Muñiz acepta derrota, felicita al ganador y se adhiere a su candidatura.	Nuevamente se presenta una recomposición del consenso político a partir de esta convención de partidos. Si bien Partido Demócrata no participa, pero estaban en repliegue y casi inexistentes en su representación congresal.
11. Conflicto de partidos, sublevación de Comandante Manuel Rivero versus elección de Pardo	17 de agosto de 1915	Ejecutivo, sublevados, partidos políticos	Prefecto Rivero se subleva en Ancash desconociendo la elección de Pardo como Presidente, y planteando la permanencia de Benavides en el poder, pero sin el consentimiento de éste. Inmediatamente Benavides renunció a la presidencia provisoria y entrego el mando a Pardo. Rebelión abortó	Ganaron Pardo y Partidos de la alianza oficialista	Cambio de mando sin alteraciones y con subordinación del ejército y Benavides.	Transparencia de Benavides	

Síntesis

CONFLICTOS: 11

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 34

Número de meses de duración del gobierno: 18

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 34

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1)	(2)	(3)
Trampas Reales	(2) 2 = 4	(4)	(6) 5 = 30

Total: $4 + 30 = 34$

CLASIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y TRAMPAS
2do Gobierno de José Pardo (18 de agosto de 1915 a 4 de julio de 1919)

Conflicto	Fecha	Actores	Descripción	Resultado	Acumulación de Poder del Ganador	Declaración o reacción del Perdedor	Comentarios
1. Conflicto de partidos, interpelaciones a ministros por la minoría.	16 de agosto de 1916	Leguiistas versus ejecutivo	Interpelaciones a diversos ministros que no logran su cometido: la renuncia de los mismos.	Ganó ejecutivo	Estabilidad ministerial		Se empieza a articular una oposición a Pardo, muy minoritariamente aún pero beligerante
2. Conflicto de partidos Violencia política local. Asesinato de candidato civilista Bazán	20 de febrero de 1917	Leguiistas versus ejecutivo (a nivel local)	En disputas locales y de riñas familiares, muere candidato civilista en Cajamarca			No se atribuye trampa por no ser realizada por actores relevantes sino por rencillas personales y locales	"insipiente, impureza o impotencia del poder Estado en las lejanas comarcas del país" (Basadre; 1968: 385, v. XII).
3. Conflicto de partidos. Violencia política. Asesinato de Rafael Grau	4 de marzo de 1917	Leguiistas versus ejecutivo	En el proceso de las elecciones parlamentarias, el candidato Grau es asesinado por su rival Montesinos, a su vez candidato oficialista; éste es apresado; sin embargo familia Grau acusa del crimen a Presidente Pardo	Ganó oposición	Genera desprestigio del gobierno	Pardo se defiende con pruebas de que mandó a proteger a Grau y de que éste fue advertido del peligro. "trampa presunta del eje"	Rafael Grau era hijo de héroe de Angamos y connotado dirigente de la oposición leguiista. El crimen fue por rivalidades locales más no por orden de Pardo. El leguismo aprovecharía "a fondo" este incidente.

4. Conflicto de partidos. Violencia política. Asesinato de candidato civilista Augusto Ugarte.	Marzo de 1917	Leguiistas versus civilistas	Continuó violencia política electoral, ahora es asesinado un candidato civilista en Chumbivilcas				No se determinó al responsable pero se acusó a leguiistas.
5. Conflicto de partidos. Renuncia del Ministro de Gobierno, García Bedoya	7 de Marzo de 1917	Leguiistas versus civilistas	El conflicto de violencia electoral empieza a afectar al propio partido civil, en el cual se acentúan las tendencias: Pardistas, Leguiistas, pradistas. Bedoya (constitucional) renuncia	Ganaron Leguiistas	Desprestigio del gobierno, alejamiento del partido constitucional.		
6. Conflicto de partidos. Declaraciones de Javier Prado contra el gobierno.	8 de marzo de 1917	Tendencia pradista al interior del Partido Civil	El recién nombrado Presidente la Junta Directiva del P. Civil, Prado propuso una política de conciliación nacional, renuncia del gabinete Riva Agüero y uno nuevo neutral presidido por vocal supremo,	Ganaron Leguiistas	Desprestigio del gobierno		Prado había sido premier en el gobierno de Leguía, y no se incorporó a la oposición a Leguía en la ruptura del Partido. Luego fue aliado de Leguía.
7. Conflicto de partidos. Renovación de tercio parlamentario.	Marzo de 1917	Leguiistas versus civilistas - liberales					
8. Conflicto de partidos. Violencia política. Desórdenes en Cuzco	17 de marzo de 1917	Leguiistas versus civilistas	Repercusiones de los sucesos del asesinato de Grau, se produjo violentas protestas contra el prefecto del Cuzco y se incendió la casa de Montesinos			Se acusó de estos hechos a políticos cuzqueños vencidos. Durante el gobierno de Leguía	Leguiistas quieren explotar la situación de Grau, y pretenden provocar desprestigio de gobierno de Pardo.

9. Conflicto de Partidos. Caso de La Brea y Pariñas.	24 de abril de 1917	Leguiistas, tendencias del Partido Civil	Largo y complicado debate en torno a las concesiones a la Cía. London Pacific, a resultas del cual el gobierno aparece como defensor de intereses extranjeros. La revista Variedades resalta como patriotas a los senadores que se opusieron al ejecutivo, entre los cuales hay civilistas.	Ganaron leguiistas	Se incrementa desprestigio del gobierno		Se acentúan las diferencias al interior del partido civil, asimismo el partido constitucional deja de ser un apoyo activo del gobierno.
10. Conflicto de Partidos. Renuncia del gabinete Riva Agüero.	Julio de 1917	Ejecutivo, Partidos Civil, Constitucional y Liberal.	Además de razones nacionales, influyó en la renuncia la primera guerra mundial, ya que Riva Agüero era neutral y Pardo prefirió alinearse con aliados. El Partido Constitucional presionó para obtener tres ministerios, y la no obtención de los mismos fue un pretexto más para la ruptura con Pardo.	Ganaron leguiistas	Lograron cambiar la política internacional y la ruptura del bloque gobiernista con el retiro del Partido Constitucional.		Se constituye gabinete Tudela, con integrantes civilistas y liberales.
11. Conflicto de Partidos. Resultados electorales para dos diputaciones en Lima	Julio de 1917	Partidos Civil, Liberal y Leguiista	Entrampamientos en el escrutamiento de los votos en Lima, origina la anulación de los resultados electorales en Lima y que ésta se quede sin sus dos representantes			Oposición acusó a Gobierno de impedir que Prado asuma como diputado, presionando a Junta Escrutadora. Limpia mesa de 2do nivel.	La acusación es dudosa en tanto que los civilistas se quedaron sin la representación del otro diputado, que les correspondía puesto que su candidato iba en 1er lugar
12. Conflicto de poderes. Debate sobre facultades presupuestales del legislativo.	Enero de 1918	Ministro Baldomero Maldonado y diputado Borda	Maldonado negó facultades presupuestales a la Cámara de Diputados, y que sólo le correspondía al Ejecutivo. El ministro renunció sin que se llegue a poner el voto dicha	Ganó Cámara de Diputados	Atribuciones presupuestales		

Renuncia de Ministro de Hacienda			controversia. Sin este voto, predominó en la Cámara el criterio a favor de la Cámara.				
13. Conflicto de Partidos. Elección de nueva junta directiva civilista	Marzo de 1918	Tendencias al interior del Partido Civil (Pardistas, pradistas)	Javier Prado perdió la jefatura de la junta directiva del partido civil frente a Antero Aspíllaga, que si bien antes era de la corriente leguista al interior del civilismo, ahora se presentaba como candidato sucesor de Pardo.	Ganaron Pardistas civilistas	Predominio en el partido civil		Hasta ese momento, a pesar de todas las dificultades, Pardo controlaba las mayorías en las cámaras y en el partido.
14. Conflicto de Partidos. Tema eje: Ferrocarriles, Centralismo versus descentralismo	Enero a setiembre de 1918	Partidos Civil versus Liberal a través de debates en el Congreso, y Ejecutivo	Desacuerdos al interior del bloque gobiernista respecto del presupuesto para Ferrocarriles, lo cual llevó al borde de una crisis ministerial que fue resuelta por acuerdos de las juntas directivas. Finalmente se aprobó este presupuesto de ferrocarriles.				
15. Conflicto cívico militar. Incidente Mariátegui y renuncia de ministro de Guerra.	18 de mayo a junio de 1918	Periodista Mariátegui, oficiales del ejército, Presidente Pardo,	Coronel Ballesteros critica al gobierno por debilitar al Ejército. Periodista Mariátegui escribe un artículo señalando que el ejército no debe deliberar en política (usaba frases despectivas) frente a lo cual un grupo de oficiales lo agrede físicamente. Ministro de Guerra renuncia	Ganaron Militares vinculados con el leguismo	Desprestigio del gobierno	Tramitación de ferrocarril	El ejército entra en escena de manera deliberante, y con vínculos con los constitucionales.
16. Conflicto de Partidos. Sublevación militar en Ancón. Jefes militares caceristas.	22 de agosto de 1918	Jefes militares, ejecutivo, algunos líderes del Partido Constitucional	Comandante Armando Patiño, instigado por políticos del partido constitucional, se subleva en Ancón, pero son rápidamente debelados.	Gano Gobierno		Tramitación de ferrocarril	La maquinaria golpista se echa a andar: militares, leguistas y constitucionales.

17. Conflicto de partidos. Suspensión de garantías. Diputados civilistas, Movimiento Estudiantil, policía, violencia política	23 de agosto al 2 de setiembre de 1918	Diputado Pérez versus Manzanilla, Movimiento estudiantil versus policía y ejecutivo. Ministro de Gobierno	A raíz del incidente de Ancón, la cámara de diputados aprueba (con la oposición del connotado civilista José Matías Manzanilla) la suspensión de garantías, ante lo cual los estudiantes protestan violentamente y asimismo son reprimidos por la policía. En desacuerdo con los acontecimientos renuncia el ministro de gobierno, el liberal Samuel Sayán.	Gana oposición	Desprestigio del gobierno al menos de parte de los estudiantes.		La escalada de violencia iniciada en Ancón continua y contribuye notablemente ya no sólo a la deslegitimización del gobierno, sino del conjunto del régimen
18. Conflicto de partidos. Fracaso de la convención de partidos convocada por el Presidente Pardo	Diciembre de 1918	Partidos Políticos, Ejecutivo	A semejanza de la elección de Pardo en 1915, el Presidente convoca a los partidos para que eligiesen un candidato que se opongá a Leguía. No aceptan Cáceres y Piérola, con lo cual fracasa dicha convocatoria.	Ganan leguistas	No logran constituir una sólida candidatura oficialista contra el voceado Leguía		Las fisuras internas en el sistema de partidos se hace patente en este fracaso. El consenso ya no era tal.
19. Conflicto social con repercusiones político nacionales. La jornada de las 8 horas	13 y 14 de enero de 1919	Ejecutivo, Movimiento obrero y estudiantil, oposición leguista	Luego de tres días de huelga general, se logra un acuerdo entre los trabajadores y el ejecutivo por el cual se establece la jornada de 8 horas, intervinieron como mediadores la Federación de Estudiantes.	Gana Movimiento Social (obreros y estudiantes).	Intervención exitosa de estos movimientos en la agenda política		Luego de la presencia política que tuvieron estos sectores durante el periodo de Billinghurst, vuelven a tener un protagonismo político. - Leguistas aprovechan de estas circunstancias para defender demandas obreras y captar su simpatía.

20. Conflicto de partidos. Ruptura de la alianza civil liberal. Renuncia de los ministros liberales en el ejecutivo	22 de marzo de 1919	Partidos Liberal y Civil	En desacuerdo con el apoyo de la candidatura de Aspíllaga por el Partido Civil, el liberal rompe con el ejecutivo alegando no haber recibido garantías para sus candidatos en provincias.	Ganan Leguistas	Logran debilitar más al gobierno y a la candidatura oficialista		Esta ruptura contribuye a la debilidad de los partidos civil y liberal respecto de sus perspectivas electorales.
21. Conflicto de partidos. Asesinato del líder liberal Augusto Durand.	19 de abril de 1919.	Partidos liberal, civil y leguista.	La distancia entre liberales y civilistas se acentúa con este crimen, ya que los liberales consideraron que se le había dado las suficientes garantías. Se atribuye vínculos leguistas al crimen de Durand	Ganaron Leguistas.	Desprestigio del gobierno, eliminación de un gran contendor de Leguía	Tramita presunta de Durand	El crimen de Durand se suma a hechos de violencia política que marcan el ambiente "tenso" y debilita la legitimidad del régimen.
22. Conflicto de partidos. Elecciones presidenciales.	20 y 21 de mayo de 1919	Candidatos Leguía, Aspíllaga por el P. Civil, Isaías de Piérola por el P. Demócrata, José Carlos Bernal por el Partido Obrero.	A pesar de que las elecciones fueron tranquilas, los resultados se demoraron, (los resultados de Lima daban como ganador a Leguía), pero muchos de los resultados de provincia pasaron a ser revisados por la Corte Suprema, lo cual demoró su entrega. Los candidatos se acusan mutuamente de fraudes			Tramita presunta de Leguía	Compás de espera incrementa la tensión política
23. Conflicto social con repercusiones político nacionales. Comités Pro Abaratamiento de las Subsistencias	26 de mayo de 1919	Ejecutivo, Movimiento obrero y estudiantil, oposición leguista	Incentivados por el éxito de la jornada por las 8 horas, los líderes anarquistas obreros promueven huelga para disminuir precios. La huelga inicialmente exitosa se torna violenta y sale el ejército a reprimir el ejército. El movimiento es derrotado.	Gana Ejecutivo	Restablece el orden social	Los obreros y estudiantes se distancian más del gobierno, y se inclinan por los opositores al mismo.	Este éxito del ejecutivo -en la represión y restablecimiento del orden, es efímero ya que la legitimidad del régimen ya estaba seriamente cuestionada

24. Conflicto de partidos. Clausura del diario El Tiempo de filiación leguista	27 de Mayo de 1919	Ejecutivo, leguistas, Poder Judicial.	El gobierno clausuró el diario El Tiempo, acusándolo de subvertir el orden por haber dado su apoyo a los obreros.			Leguía protesta y da pie para que aumenten las suspicacias en torno a los resultados electorales. Trampa real al 1er nivel	
25. Conflicto de partidos. Golpe de Estado de Leguía contra Presidente Pardo	4 de julio de 1919	Ejecutivo, Ejército, Leguistas.	En la madrugada del 4 de julio, militares complotados con Leguía toman por asalto Palacio de Gobierno y toman preso al presidente, al día siguiente grupos de leguistas toman asaltan los medios de prensa y atacan casas de líderes del gobierno caído.	Gana Leguía	El poder.	Trampa real al 2do nivel	Con esta jugada final, se cierra el ciclo democrático que se inició en 1895.

Síntesis

CONFLICTOS: 25

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 32

Número de meses de duración del gobierno: 46

VALOR DE TRAMPAS COMETIDAS: 14

	1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel
Trampas Presuntas	(1) 1 = 1	(2) 1 = 2	(3) 3 = 9
Trampas Reales	(2) 4 = 8	(4)	(6) 2 = 12

Total: $1 + 2 + 9 + 8 + 12 = 32$

Anexo 10

Síntesis de Conflicto y Trampas de Gobierno entre 1895 a 1919

Gobiernos de la "República Aristocrática" (1895 – 1919)	Número efectivo de Meses	No. de Conflictos	Valor de Trampas	Indice ponderado de Conflictividad	Indice Ponderado de incumpliendo con las reglas
Nicolás Piérola (1895 – 1899)	48	23	14	48	29
López de Romaña (1899 – 1903)	48	47	34	98	71
Manuel Candamo(+), Serapio Calderón (1903 – 1904)	12	11	3	92	25
José Pardo (1904 – 1908)	48	10	10	21	21
Augusto Leguía (1908 – 1912)	48	44	48	92	100
Guillermo Billinghurst (1912 - 1914)	16	16	29	100	181
Oscar Benavides (1914 – 1915)	18	11	34	61	189
José Pardo (1915 – 1919)	46	25	32	54	74

Anexo 11

Cuadro Comparativo de las Trampas Presuntas y Reales en los gobiernos entre 1895 a 1919

Gobiernos de la “República Aristocrática” (1895 – 1919)	No. de Trampas Presuntas	No. de Trampas Reales
Nicolás Piérola (1895 – 1899)	2	3
López de Romaña (1899 – 1903)	15	4
Manuel Candamo(†), Serapio Calderón (1903 – 1904)	3	3
José Pardo (1904 – 1908)	0	2
Augusto Leguía (1908 – 1912)	0	11
Guillermo Billinghurst (1912 - 1914)	1	13
Oscar Benavides (1914 – 1915)	0	7
José Pardo (1915 – 1919)	5	6

Anexo 12

Cuadro Comparativo de la Gravedad de las Trampas durante los gobiernos entre 1895 a 1919

Gobiernos de la “República Aristocrática” (1895 – 1919)	Número de Trampas según su Gravedad		
	1er Nivel	2do Nivel	3 Nivel
Nicolás Piérola (1895 – 1899)	3	1	1
López de Romaña (1899 – 1903)	9	10	0
Manuel Candamo(†), Serapio Calderón (1903 – 1904)	2	3	1
José Pardo (1904 – 1908)	0	1	1
Augusto Leguía (1908 – 1912)	3	3	5
Guillermo Billinghurst (1912 - 1914)	4	1	3
Oscar Benavides (1914 – 1915)	2	0	5
José Pardo (1915 – 1919)	5	1	5